

**Modernización y claridad
del lenguaje jurídico:
informe de recomendaciones
y estudios de campo (2011)**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y RELACIONES CON LAS CORTES

U=23
PRESIDENCIA ESPAÑOLA
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Citación recomendada: Modernización y claridad del lenguaje jurídico:
informe de recomendaciones y estudios de campo (2011).
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, 2023.

© de los textos: los autores.

© de la presente edición: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones de los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de sus autores como manifestación de su derecho de libertad de expresión.

**Modernización y claridad
del lenguaje jurídico:
informe de recomendaciones
y estudios de campo (2011)**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y RELACIONES CON LAS CORTES

Madrid, 2023

Edita: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Secretaría General Técnica.

Publicación incluida en el Programa editorial del Ministerio de Justicia de 2023 y editada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de acuerdo con la reestructuración ministerial establecida por Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre.

NIPO (pdf): 051-23-032-8

Centro de Publicaciones:

<https://www.mjusticia.gob.es/es/areas-actuacion/documentacion-publicaciones/publicaciones>

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<https://cpage.mpr.gob.es>

ÍNDICE

- PRÓLOGO
- INFORME DE LA COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO
- ESTUDIO DE CAMPO: LENGUAJE ESCRITO
- ESTUDIO DE CAMPO: LENGUAJE ORAL
- ESTUDIO DE CAMPO: PLANTILLAS PROCESALES
- ESTUDIO DE CAMPO: LENGUAJE DE LAS NORMAS
- ESTUDIO DE CAMPO: POLÍTICAS PÚBLICAS COMPARADAS
- ESTUDIO DE CAMPO: LENGUAJE JURÍDICO EN LOS MEDIOS

PRÓLOGO

COMISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO

1. Todas las disciplinas científicas y técnicas forjan un lenguaje propio donde abundan términos que, persiguiendo exactitud y rigor, no son definidos desde fuera (por los hablantes), sino desde dentro (por sus especialistas). Entre estos tecnolectos, el lenguaje jurídico ocupa un lugar singular. No solo se asienta sobre una depurada terminología, en gran parte heredada del derecho romano, sino que, a diferencia del resto de los lenguajes técnicos, su peculiaridad se extiende a todos los ámbitos de la lengua: utiliza una sintaxis singular en su estilo y complejidad, los enunciados se enlazan en microdiscursos de redacción característica (el *párrafo jurídico*) y sus textos conocen una riquísima tipología¹. Este afán de precisión, el uso de términos autodefinidos y de expresiones arcaicas y latinizantes, así como una sintaxis llena de incisos explicativos, referencias legales, filosas argumentaciones, remisiones sin cuento... los hacen incomprensibles para sus destinatarios. Toda una paradoja y un fracaso comunicativo: lo que está concebido para ser exacto y claro se ha convertido en un arcano que los directamente afectados no pueden descifrar.

Sin embargo, el precepto de claridad en el lenguaje jurídico hunde sus raíces en la doctrina de todos los tiempos. El derecho romano lo proclamaba en conocidos aforismos (*Simplicitas legibus amica; Legibus magis simplicitas quam difficultas placet...*). El Rey Sabio mostró una paladina defensa en favor de la claridad de las leyes². Montesquieu, el gran maestro del derecho moderno, apoyó la claridad en *El espíritu de las leyes*³.

2. Algunas disciplinas, sin alejarse del lenguaje de jerga entre sus profesionales, supieron buscar caminos de difusión hacia el resto de los mortales. Fueron apareciendo colecciones de libros, revistas, enciclopedias... para explicar los secretos del universo, los dinosaurios, la historia, el arte, el clima y, sobre todo, la salud. La Iglesia católica se había adelantado cuando en el Vaticano II recomendó sustituir el latín en los oficios religiosos por las lenguas vernáculas.

En el ámbito jurídico-administrativo, se gesta desde los tempranos años ochenta del siglo pasado un conocidísimo movimiento internacional en favor del *lenguaje claro* que cristaliza en campañas, asociaciones y publicaciones

¹ Constituciones, tratados, leyes, decretos, reales decretos, reglamentos, sentencias, autos... actas, anuncios, circulares, citaciones, convocatorias, disposiciones, estatutos, formularios, notificaciones, oficios, instancias, contratos, dictámenes, disposiciones, normativas, órdenes, regulaciones, resoluciones, saludas, solicitudes, currículos...

² «Cumplidas deuen ser la leyes, e muy cuidadas, e catadas, de guisa que sean con razón, e sobre cosas que puedan ser, segund natura, e las palabras dellas que sean buenas e llanas e paladinas, de manera que todo hombre las pueda entender e retener» (Alfonso X, *Partida Primera*, Título I, Ley VIII).

³ «El estilo de las leyes debe ser simple; la expresión directa se comprende siempre mejor que la expresión densa» (Montesquieu, *L'esprit des lois*, XXIX: «*De la manière de composer les lois*». Trad. pers.)

periódicas... Se inicia en países sajones (USA, Reino Unido, Australia y Canadá) y se extiende a muchos países europeos e hispanoamericanos⁴.

En España este movimiento generó pronto manifestaciones explícitas e inequívocas. El 16 de octubre de 2002, el Congreso de los Diputados aprobó la «Carta de derechos del ciudadano ante la Justicia», donde se formulaba, el derecho a la claridad⁵.

Tres años más tarde, el Consejo de Ministros⁶ aprobó un «Plan de transparencia judicial» en el que se proponía como objetivo primero:

Obtener una justicia comprensible tanto en las vistas o comparecencias como en las comunicaciones escritas y las propias resoluciones judiciales.

Muchas comunidades autónomas emprendieron una campaña de simplificación administrativa. Crearon portales destinados a facilitar los trámites burocráticos y el acercamiento de los ciudadanos a la realización de gestiones (páginas web, ventanilla única, oficinas de atención a la ciudadanía, guías y manuales de orientación, directrices técnicas...). Asimismo se constituyeron agencias de calidad y se establecieron índices de percepción, de satisfacción, del impacto normativo...

En septiembre de 2009 el Consejo de Ministros aprobó un «Plan estratégico para la modernización del sistema de la Justicia 2009-2012» entre cuyos objetivos destacaban:

- a) Modernizar del lenguaje jurídico.
- b) Conseguir una simplificación administrativa.

Dentro de este Plan, el 30 de diciembre de 2009 se creó la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico (CMLJ), compuesta por vocales procedentes de diferentes profesiones relacionadas con el ámbito jurídico y lingüístico. Se le asignó el encargo de «presentar al Consejo de Ministros un informe de recomendaciones sobre el lenguaje empleado por los profesionales del Derecho, con la finalidad de hacerlo más claro y comprensible para los ciudadanos»⁷. Desde una eficiente Secretaría de Estado se encargaron estudios particulares sobre áreas concretas⁸ con el fin de que la Comisión pudiera disponer de una base empírica y teórica sobre diferentes dimensiones del problema.

⁴ La expresión lenguaje claro conoce en el ámbito hispánico otras denominaciones equivalentes, que incluso alternan en el uso. Son lenguaje claro, lenguaje llano y lenguaje sencillo. En Argentina, Chile y España predomina *lenguaje claro*. En Colombia y Perú también se emplean *lenguaje llano* y *lenguaje sencillo*. En México se emplea *lenguaje ciudadano*.

⁵ «El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, y eviten el uso de elementos intimidatorios innecesarios.

– El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que resulte comprensible para quienes no sean especialistas en derecho.

– El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico...».

⁶ Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005.

⁷ Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, pág. 1.

⁸ Informe sobre políticas lingüísticas comparadas (Equipo de Cristina Carretero, Universidad Pontificia de Comillas). Informe sobre el discurso jurídico escrito (Equipo de Estrella Montolio, Universidad de Barcelona). Estudio de las manifestaciones orales del lenguaje jurídico (Equipo de Antonio Briz, Universidad de Valencia). Informe sobre plantillas (Equipo de Julio Borrego, Universidad de Salamanca). Informe sobre leyes y otras disposiciones legales (Salvador Gutiérrez, Universidad de León). Informe sobre prensa y lenguaje jurídico (Equipo de periodistas de la Comisión).

3. Este *Informe* fue presentado en el 2011. Se inicia con una exposición desnuda del desconcierto de la ciudadanía ante el carácter críptico del lenguaje jurídico y de las disposiciones administrativas⁹. Y, hecho de gran importancia, formula de manera inequívoca un nuevo derecho, el **derecho a comprender**:

La ciudadanía tiene derecho a comprender, sin la mediación de un «traductor», las comunicaciones verbales o escritas de los profesionales del derecho (*Informe*, p. 3).

Y lo justifica:

Un mal uso del lenguaje por parte de estos genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos sociales (*Ibid.*).

Este derecho individual, de honda raigambre democrática, se corresponde con un deber del Estado y exige un enorme esfuerzo de las instituciones, así como de los agentes de la Justicia y de la Administración.

La claridad e inteligibilidad en el lenguaje jurídico se presenta como un objetivo necesario y posible, pero dificultoso. Reclama intervenciones múltiples y continuadas para vencer una inercia de siglos. El *Informe* centra la estrategia de actuación en varios sectores. En correspondencia con esta segmentación, el *Informe* presenta algunas propuestas:

- a) Recomendaciones a los profesionales, que tienen la «responsabilidad de hacerse comprender, de expresarse con claridad» buscando el equilibrio entre precisión técnica y claridad «que define la excelencia en los buenos juristas». A tal efecto, se realiza un somero panorama de las peculiaridades discursivas, gramaticales y léxicas de donde emana la oscuridad del lenguaje jurídico.
- b) Recomendaciones a las instituciones implicadas¹⁰, pues tienen la obligación de garantizar el *derecho a comprender*, factor nuclear en un Estado moderno.

El *Informe* resalta rutas posibles y necesarias para arribar a la comprensión necesaria entre el lenguaje jurídico-administrativo y los ciudadanos:

- 1) Formación comunicativa de los profesionales del derecho. Una de las principales dificultades con las que se encuentra la implantación de la claridad en el lenguaje jurídico tiene lugar en los años de formación. Desde el inicio, el alumno de Derecho se enfrenta a textos y prácticas que día a día ahorman unos hábitos lingüísticos, estilísticos y retóricos donde son frecuentes tecnicismos, latinismos, arcaísmos, formulis-

⁹ «Las quejas formuladas ante el Servicio de atención al ciudadano del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) indican que el lenguaje jurídico es críptico y oscuro, y que resulta incomprensible para el ciudadano, especialmente en aquellos procedimientos en los que no es preceptiva la asistencia letrada» (*Informe*, p. 2).

«Asimismo, los barómetros de opinión del CGPJ muestran, a su vez, que un 82% de los ciudadanos considera que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender» (*Informe*, p. 2).

¹⁰ Las principales instituciones a las que se dirigen estas recomendaciones en primer término son el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado (...), los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales (a través de los correspondientes consejos generales), las universidades y la Administración educativa en general. En un segundo término, se dirigen a otros organismos, tales como las instituciones penitenciarias, las fuerzas y cuerpos de seguridad o los ayuntamientos.

mos, párrafos largos llenos de incisos y referencias laterales. Por ello se considera importante introducir en los planes de estudio materias teóricas y prácticas que favorezcan su capacidad de hacerse entender por todos. De igual modo, se recomienda que en las convocatorias de acceso a la carrera judicial y fiscal, así como a los cuerpos de Administración de la Justicia y de la Administración General del Estado se incluyan ejercicios que evalúen competencias de expresión clara. Esta formación debe ocupar un lugar relevante en la Escuela Judicial, en el Centro de Estudios Jurídicos, Escuelas de práctica jurídica, educación legal continua...

- 2) Acercamiento del lenguaje jurídico a la ciudadanía. El lenguaje jurídico y los procesos administrativos constituyen parte de la vida del ciudadano moderno. Su formación debe incluir una base mínima de procedimientos y términos que permitan alcanzar unos mínimos de comprensión y de expresión de sus derechos y deberes. La enseñanza ha de formar una ciudadanía democrática a través de conocimientos que promuevan «el desarrollo de personas libres e íntegras, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos»¹¹. Con el fin de facilitar esta aproximación, las instituciones deberían incluir estos conocimientos en asignaturas de la enseñanza, divulgar y actualizar periódicamente materiales de autoayuda, accesibles a través de Internet, que informen y faciliten a las personas moverse por los recovecos administrativos.
- 3) Actuaciones prácticas. El Informe incorpora nuevas vías destinadas a facilitar la navegación y las prácticas por el universo legal y administrativo. Se propone que tanto la Administración como las empresas faciliten la claridad lingüística y de procedimiento en las plantillas, formularios, modelos de contratos, procesos de gestión, así como en todo tipo de documentos dirigidos a consumidores y usuarios. Se acude a los recursos que ofrecen las tecnologías de la información para facilitar la claridad y univocidad en el lenguaje de las normas, así como en todo tipo de trámites.
- 4) Medios de comunicación. Los procesos jurídicos y administrativos trascienden en muchas ocasiones la frontera de interés de las personas implicadas. Son hechos sociales sobre los que la prensa debe transmitir una información inteligible a ciudadanos que poseen una base jurídica de bajo perfil. Los medios adaptan su lenguaje al nivel de comprensión de sus lectores; ejercen un papel esencial, no solo al transmitir información, sino también en la forma de explicar a la ciudadanía procesos, términos, riesgos, consecuencias... De igual modo, los gabinetes de prensa de las empresas e instituciones representan un papel relevante en la claridad de los comunicados. Es necesario que los medios de comunicación dispongan de profesionales con buena formación jurídica y capacidad explicativa, preparados para adaptar la información sin menoscabar la exactitud, pues de su buen oficio depende que las disposiciones jurídicas tengan mayor difusión y se logre el cumplimiento esperado.

¹¹ Informe, p. 19.

4. Después del *Informe*. La publicación de este documento ha sido considerada por los especialistas como el espaldarazo institucional al movimiento del lenguaje claro, que hasta entonces se había manifestado apenas en balbuceos en nuestro país. La articulación del *derecho a comprender* como pivote del estado democrático constituyó un hito singular.

Por circunstancias no favorables de los tiempos que siguieron a su publicación (crisis económica, insensibilidad política...), el *Informe* no alcanzó la implantación administrativa esperable. Como consecuencia, muchas de las actuaciones previstas no llegaron a concretarse.

Sin embargo, las buenas ideas se dispersan como las esporas y el viento las disemina por toda la campiña. Las propuestas renovadoras del lenguaje claro fueron objeto de numerosos cursos organizados por el Tribunal Supremo, la Fiscalía del Estado, la Escuela Jurídica, colegios profesionales, universidades, etc.

La nueva preocupación por la comprensión legislativa y administrativa entró en el ideario de comunidades autónomas y de ayuntamientos, que publicaron numerosas y meritorias guías de lenguaje claro, de fácil acceso a través de internet.

La Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial publicaron obras de gran utilidad y relevancia en la materia: *Libro de estilo de la Justicia* (2017), *Diccionario del español jurídico* (2016) y *Diccionario panhispánico del español jurídico* (2023), dirigidos por el actual director de la RAE, D. Santiago Muñoz Machado.

La preocupación por la necesidad de implantar un lenguaje claro ha calado asimismo en instituciones privadas y en autores, que han organizado encuentros, mesas en congresos y números temáticos en publicaciones periódicas.

El lenguaje claro ha arribado a las nuevas tecnologías, que posibilitan la creación de bases de datos terminológicas y tesauros jurídicos tanto en el ámbito internacional como hispano. El número de corpus crece de día en día. Se crean herramientas automáticas de ayuda a la ciudadanía en la siempre compleja tarea de redactar textos administrativos. La aplicación de programas de procesamiento del lenguaje natural y de la inteligencia artificial ofrece ya resultados positivos en la conversión de textos a un lenguaje más claro.

5. Lenguaje claro en otros ámbitos. El lenguaje críptico de algunas disciplinas tradicionales levantó una frontera infranqueable entre el conocimiento y los afectados. En medicina, quienes presumían conocer las causas y los remedios de las enfermedades constituyeron una clase poderosa. A lo largo de la historia, algunos literatos supieron dar forma al sentimiento de queja popular. Molière dedicó cinco de sus comedias contra la superchería de los médicos.

La opacidad en un ámbito tan personal como la salud lesiona los derechos de los enfermos. Así lo reconoce la ley 26529 de Salud Pública, que especifica que los pacientes tienen derecho a recibir información «clara, suficiente y adecuada» a su capacidad de comprensión sobre su «estado de salud, los estadios y tratamientos que fueren menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas».

Como en el derecho, el lenguaje de la medicina se desarrolla en dos ámbitos, el científico y el aplicado. En cuanto ciencia, la medicina ha creado una terminología específica para comunicarse entre profesionales. Es en su relación con los pacientes donde se produce una brecha comunicativa. Esta se basa en una situación de desequilibrio jerárquico y cultural entre el médico y el enfermo, en la situación de vulnerabilidad del paciente, en su incapacidad de comprender... Se ha comprobado que el uso del lenguaje claro comporta notables beneficios sanitarios y, a la larga, también económicos.

En el ámbito político y todas las esferas que giran en su entorno (económico, administrativo, diplomático...) ha surgido un tipo de lenguaje retórico de características singulares. Se ha creado un discurso dotado de coherencia externa, pero vacío, carente de referencialidad, de interpretación concreta. Se utilizan expresiones genéricas, indeterminadas, de límites vagos e imprecisos. Abundan los nombres abstractos de difícil concreción y los derivados de verbos que permiten una descripción despersonalizada de los hechos. Se evitan los términos cargados de connotaciones negativas, de tabús políticos por referirse directamente a realidades o personas vitandas. Se envuelven en referencias perifrásticas y en eufemismos que reducen el efecto rechazo (*fracaso se sustituye por experiencia, oportunidad...*). Operan una deconstrucción de la realidad que ni los verdaderos testigos llegan a reconocer. Se acude al neologismo técnico, a metáforas, imágenes y comparaciones vagas, tautologías, estereotipos, fórmulas fijadas, omisiones, elipsis, preferencia de los rodeos sobre las referencias directas, a estereotipos... Es el *lenguaje de madera*¹². Frente a esta jerga, el lenguaje claro propone sustituir estos discursos diseñados para ocultar, evitar, fortalecer a los convencidos y engañar por textos de contenido transparente, referencial y reconocible.

Son numerosos los ámbitos en los que la aplicación de los postulados del lenguaje claro proporcionarían resultados positivos: medios de comunicación, informática, economía... En general, todo ámbito que, habiendo sido colonizado por la tecnificación, toca espacios que afectan a todos los mortales.

6. Lenguaje claro y comunicación accesible. La noción de *accesibilidad* tiene origen ético: considera a todos los seres humanos iguales en derechos y repudia la discriminación. Es un principio reconocido como derecho por la Organización de las Naciones Unidas. Surgió originariamente pensado para las personas con discapacidad, pero se ha extendido a los colectivos afectados por la invisibilidad social y la discriminación: mujeres, inmigrantes, sectores étnicos no favorecidos, ancianos, personas con otras opciones religiosas, sexuales, ideológicas...

La *accesibilidad comunicativa* es una de las vertientes de la accesibilidad universal. Se ha convertido en un objetivo irrenunciable en algunos ámbitos: en la comprensión (*accesibilidad cognitiva*), en la educación (*accesibilidad educativa*), en las TIC (*accesibilidad digital*)... En el presente, todos los servicios han adoptado el lenguaje electrónico y son cada día más

¹² Ha recibido otras muchas denominaciones desde finales del siglo *xx*: *lenguaje de encina*, *lenguaje de cemento* (Alemania), *lenguaje de plomo* (China), *doble lenguaje* (Reino Unido), etc

complejos, más crípticos..., menos claros y menos accesibles. La *brecha* está creciendo hasta convertirse en una sima. Todo, desde la reserva de una entrevista médica hasta la renovación de la tarjeta sanitaria, la obtención de un billete de tren o una tarjeta de metro nos enfrenta a máquinas inflexible cuyos pasos nos cuesta descifrar.

Lenguaje claro y comunicación accesible surgen en diferentes espacios, pero se apoyan en un mismo derecho (el *derecho a comprender*). Desde el punto de vista lógico, la noción de *accesibilidad* es más general que la de *lenguaje claro*. El movimiento reivindicador de transparencia e inteligibilidad de los textos legales y administrativos (también de los científicos, políticos...) no es otra cosa que una reclamación de accesibilidad.

Hemos de establecer puentes para salvar todos los barrancos. Hoy, reclamar lenguaje claro implica exigir accesibilidad comunicativa.

Salvador Gutiérrez Ordóñez
Real Academia Española

INFORME

COMISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO

El Consejo de Ministros constituyó una Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2009. Presidida por el Secretario de Estado de Justicia y con el Director de la Real Academia de la Lengua Española como vicepresidente, la Comisión ha estado integrada por ocho vocales provenientes de diversas disciplinas, profesiones e instituciones, elegidos por razón de su dilatada experiencia y sus conocimientos en los ámbitos jurídico y lingüístico:

- Sr. don Víctor García de la Concha
- Sra. doña Gabriela Bravo Sanestanislaó
- Sr. don Carlos Carnicer Díez
- Sra. doña Gabriela Cañas Pita de la Vega
- Sr. don Alex Grijelmo García
- Sr. don Jesús María García Calderón
- Sra. doña Mercedes Bengoechea Bartolomé
- Sra. doña María Peral Parrado
- Sr. don Salvador Gutiérrez Ordóñez

La Comisión recibió el encargo de presentar al Consejo de Ministros un informe de recomendaciones sobre el lenguaje empleado por los profesionales del Derecho, con la finalidad de hacerlo más claro y comprensible para los ciudadanos. El plazo para realizar esta tarea era de doce meses a contar desde la primera reunión, que tuvo lugar el 18 de febrero de 2010. Las recomendaciones que aquí se presentan son el resultado de los trabajos desarrollados y dan cumplimiento al mandato establecido por el Gobierno de España.

El derecho a comprender

La modernización de la justicia va más allá del uso intensivo de las nuevas tecnologías y de la mejora del modelo de gestión de los recursos públicos. Una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender.

Las diversas encuestas sobre el estado de la Justicia que, desde el inicio de la democracia, se han realizado en España ponen de manifiesto que la ciudadanía confía en el rigor y calidad de los profesionales del derecho pero que, al mismo tiempo, no les comprende o, en el mejor de los casos, les comprende con dificultad.

Las quejas formuladas ante el Servicio de atención al ciudadano del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) indican que el lenguaje jurídico es críptico y oscuro, y que resulta incomprensible para el ciudadano, especialmente en aquellos procedimientos en los que no es preceptiva la asistencia letrada.

Asimismo, los barómetros de opinión del CGPJ muestran, a su vez, que un 82% de los ciudadanos considera que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender.

Por su parte, esta Comisión ha completado estos estudios con un análisis de la percepción de los estudiantes de las facultades de Derecho, las escuelas de práctica jurídica, el

Centro de Estudios jurídicos (en adelante CEJ) y la Escuela Judicial. Los resultados confirman la percepción ciudadana antes señalada. Los futuros juristas estiman que un elevado porcentaje de los profesionales del derecho se expresa de forma inadecuada (44% lenguaje oral; 56% lenguaje escrito). Al tiempo, reconocen que el lenguaje jurídico es difícil de comprender, en buena medida por sus connotaciones técnicas pero también por el escaso conocimiento que de él tienen los ciudadanos.

A menudo, las personas que acuden ante un tribunal no entienden bien la razón por la que han sido llamadas y, muchas veces, salen sin comprender el significado del acto en el que han participado o las consecuencias del mismo. Sin embargo, no hay algo tan complejo en el ámbito jurídico como para que el ciudadano de a pie no pueda comprenderlo si se le explica con claridad.

Los científicos explican en términos sencillos fenómenos tan complejos como la física cuántica o la regeneración celular. Lo mismo puede hacerse con el derecho. Bastaría con explicar con palabras llanas, antes del inicio del acto procesal, la razón que trae al ciudadano ante el tribunal, el significado de cuanto ha de acontecer en su presencia y, una vez finalizado, sus consecuencias.

Todo buen profesional del derecho es y debe ser capaz de explicar con sencillez y claridad el significado de un determinado acto o resolución.

La Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, hace de la claridad del derecho una política pública y reconoce a la ciudadanía el *derecho a comprender*:

El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.

El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho.

El ciudadano tiene derecho a que en las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

La ciudadanía tiene derecho a comprender, sin la mediación de un “traductor”, las comunicaciones verbales o escritas de los profesionales del derecho. Un mal uso del lenguaje por parte de estos genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos sociales. Por ello, el Plan de Transparencia Judicial, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, incluye entre sus objetivos *obtener una justicia comprensible* tanto en las vistas o comparencias como en las comunicaciones escritas y en las propias resoluciones judiciales. El trabajo de la presente Comisión enlaza directamente con este objetivo.

Con el fin de emplear un método riguroso, la Comisión encomendó un conjunto de estudios de campo a varios equipos de investigación dirigidos por filólogos de reconocido prestigio, bajo la supervisión de la Real Academia de la Lengua Española. Estos estudios son

uno de los más completos análisis empíricos sobre el lenguaje jurídico elaborados en España hasta la fecha y, si bien no reflejan plenamente las posiciones de la Comisión, han contribuido de forma significativa a sus debates.

Los estudios constatan la existencia de un conjunto de prácticas asentadas que dificultan la comprensión, así como algunas reiteradas incorrecciones sintácticas y gramaticales en la expresión oral y escrita de los profesionales del derecho. Al tiempo, queda patente que este problema no se circunscribe únicamente a la Administración de Justicia sino que está presente en los propios textos legislativos que emplean estos profesionales para realizar su labor.

La mejora en la claridad del lenguaje jurídico requiere el compromiso tanto de los profesionales del derecho como de las propias instituciones implicadas. Por ello, las presentes recomendaciones se dirigen, por un lado, a los profesionales y, por otro, a dichas instituciones. De esta forma, se sientan las bases para un plan de trabajo conjunto.

- Recomendaciones a los profesionales*: los estudios realizados han constatado algunas deficiencias de nuestros profesionales del derecho a la hora de expresarse, tanto por escrito como oralmente. Sobre la base de los errores gramaticales y de sintaxis más comunes, se propone un conjunto de recomendaciones básicas.
- Recomendaciones a las instituciones*: el derecho a comprender por parte de los ciudadanos requiere mayores esfuerzos institucionales. Corresponde a las instituciones impulsar medidas que permitan acercar el lenguaje jurídico al ciudadano y poner al alcance de nuestros profesionales del derecho medios suficientes para la búsqueda de la excelencia en su expresión lingüística.
- Recomendación asociada*: la ciudadanía percibe el estado de la Justicia a través de los medios de comunicación. Por esta razón, el presente informe incorpora una última recomendación a este respecto.

Las recomendaciones consensuadas por los miembros de la Comisión son las siguientes:

Recomendaciones a los profesionales

El Estado de Derecho exige asegurar que se comprenden los actos y las normas jurídicas. La claridad en la expresión oral y escrita de los profesionales del derecho incrementa la seguridad jurídica, permite que las personas conozcan sus derechos y obligaciones, sepan cómo y ante quién hacerlos valer e incrementa la confianza y participación en las instituciones.

La ciudadanía se relaciona continuamente con jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, demás funcionarios de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, notarios, registradores o graduados sociales. Por ello, estos profesionales tienen la responsabilidad de hacerse comprender, de expresarse con claridad. Ese equilibrio complejo entre precisión técnica y claridad es el que define la excelencia en los buenos juristas.

El profesional del derecho debe esforzarse por ser claro y hacerse comprender, de la misma forma que el profesional de la sanidad, por ejemplo, adapta su lenguaje para que el paciente y su entorno le comprendan. Sin embargo, los estudios realizados en esta Comisión confirman que, en ocasiones, la necesaria especialidad del lenguaje jurídico se confunde con un lenguaje opaco, arcaico y encorsetado en formulismos que dificultan la comprensión.

Las siguientes recomendaciones sobre comprensión y corrección lingüística ofrecen una guía de aspectos que cualquier profesional puede aplicar con facilidad en su quehacer diario para mejorar la redacción de escritos o sus exposiciones orales:

Discurso

El discurso jurídico se concreta en una enorme variedad de textos, ya sean documentos escritos o manifestaciones orales. Todo texto ha de ser coherente y ordenado en sus contenidos y ha de acudir a los mecanismos expresivos necesarios para que tanto la congruencia que existe entre cada una de sus partes como el progreso ordenado y jerárquico de sus temas queden patentes. Aparte de los marcos formales que caracterizan a cada tipo de texto jurídico (leyes, sentencias, requerimientos, etc.), el profesional del derecho ha de respetar los rasgos propios de los diferentes tipos de textos. Existe una larga tradición de estudios sobre la argumentación que analiza los mecanismos argumentativos para construir un razonamiento. Sin embargo, elementos del discurso como la descripción y la narración, que también forman parte esencial del lenguaje jurídico, no reciben la misma atención por parte de los profesionales del derecho.

Al redactar documentos jurídicos, ha de ponerse especial cuidado en que su forma externa refleje en la mayor medida posible su proceso de formación, de manera que no sólo se exterioricen los razonamientos lógicos y jurídicos que llevan a conformarlo, sino que además, la exposición de dichos razonamientos se ajuste al orden exigido por la argumentación. Ello implica, en sentido positivo, que el texto progrese en forma concatenada desde la consignación de los argumentos fácticos y jurídicos ofrecidos por las partes, mediante la incorporación de las normas y su interpretación, hasta alcanzar la conclusión lógica.

19

La descripción

Una descripción relata cómo es algo, ya sea en su aspecto externo y material, ya sea en su dimensión interna o anímica. Las descripciones tienen gran importancia en algunos tipos de discurso jurídico. Por ello su redacción no debe descuidarse y, para ello, deben tenerse en cuenta algunos aspectos:

- Han de ser ordenadas, precisas, exactas y claras.
- Deben seguir un orden, ya sea espacial (de arriba hacia abajo, de fuera hacia adentro), de importancia (de lo principal a lo accesorio), de tamaño (de lo mayor a lo menor).
- Han de utilizar el léxico apropiado. Los sustantivos adecuados fijarán bien el objeto o el concepto. Los adjetivos matizarán las cualidades y las propiedades.
- Deben ser concisas, lo que permite captar con mayor claridad los aspectos importantes y distintivos del objeto descrito.

La narración

Una narración implica relatar un suceso o acontecimiento en el que han intervenido unos actores y que se ha desarrollado en un momento y lugar determinados.

La narración ocupa una importancia trascendental en algunos tipos de textos dictados por los profesionales del derecho. El relato ha de ser ajustado a lo acontecido, completo en la enumeración de personas y circunstancias, ordenado, claro y conciso. La narración de

hechos debe ser una explicación clara de qué ha sucedido, quién hizo qué, cómo, dónde y cuándo, sin incluir, en ningún caso, valoraciones subjetivas. Por último, debe recordarse que la narración de los hechos y la valoración jurídica han de figurar siempre de forma separada.

La argumentación

La argumentación, el tipo de discurso más característico de los profesionales del derecho, aporta razones que explican un comportamiento o un supuesto. Empleando este tipo de discurso, el profesional del derecho expone por qué se consideran aplicables determinadas normas o actos a unos hechos así como sostiene una interpretación con objeto de generar una consecuencia jurídica. El objeto esencial de cualquier argumentación es, por tanto, convencer. Por ello, toda argumentación, ya sea verbal o escrita, debe tomar en consideración que su destinatario no es solo el profesional del derecho, sino el propio ciudadano en el que en último término recaerán los efectos jurídicos de la decisión final adoptada. Para mejorar la claridad y comprensión de la argumentación jurídica se realizan dos breves recomendaciones:

- El argumento debe ser explícito, claro y ha de utilizar un lenguaje inteligible.
- La correcta comprensión de la argumentación escrita y oral requiere diferenciar los argumentos de las conclusiones de forma expresa.

Párrafo

Los párrafos se caracterizan, en su contenido, por su unidad temática y, en su forma, por estar separados por un punto y aparte. Delimitan y segmentan la información contenida en un texto en unidades pequeñas dotadas de coherencia. La buena ordenación y la correcta organización de los párrafos contribuyen de manera esencial a conseguir textos bien contruidos y facilitan tanto la lectura como la comprensión del conjunto.

Sin embargo, uno de los defectos comunes en los profesionales del derecho es el incorrecto empleo de esta unidad del texto. Con el fin de evitar los defectos más frecuentes, se proponen las siguientes recomendaciones:

- La extensión de los párrafos no debe sobrepasar límites razonables. En este sentido, no es conveniente redactar párrafos excesivamente largos, ya que, de hacerlo, el lector o el oyente no podrán retener la información, ni mantener la atención.
- El párrafo ha de contener una sola unidad temática, pues aquellos que incluyen en su interior referencia a hechos distintos son difícilmente comprensibles.
- La sucesión de párrafos debe seguir un hilo discursivo lógico.
- Han de evitarse los párrafos unioracionales, formados por concatenaciones de frases coordinadas y subordinadas, llenas de incisos poco relevantes, de dudosa necesidad y que dificultan de modo extremo la comprensión al lector.
- La voluntad de evitar repeticiones en párrafos largos propicia el uso de pronombres (*él, este, el cual, el mismo...*) y otras expresiones (*su, cuyo, aquí, entonces...*) que, por poder referirse a varias realidades aludidas en el párrafo, suelen introducir ambigüedades. Han de evitarse dentro de lo posible. Es además recomendable eludir las fórmulas de pronombres relativos caducas o poco usuales en el lenguaje oral (especialmente, algunos usos de *el cual*,

- lo cual y cuyo*, fácilmente sustituibles por expresiones más comunes formadas con el relativo *que*).
- Los marcadores que ordenan el discurso (*en primer lugar, por último...*), así como los conectores (*además, sin embargo, no obstante, en consecuencia, por tanto, así pues...*) deben emplearse con el objeto de expresar de forma más clara la relación que media entre las distintas partes de un párrafo o entre párrafos sucesivos.
 - En los párrafos que incluyan enumeraciones relativamente largas, estas deben destacarse tipográficamente en líneas distintas, ordenadas en lista, con el fin de facilitar la comprensión.
 - La forma de presentar estas enumeraciones debe ser homogénea y, por tanto, ha de usar siempre el mismo tipo de fórmula de inicio.

Oración

La oración o enunciado es la unidad de comunicación que posee sentido completo y que aparece enmarcada por puntos (en la escritura) o por pausas (en el habla). Este carácter de unidad comunicativa le confiere una importancia transcendental, no sólo en la estructura del texto, sino también en su claridad.

Los textos jurídicos utilizan con excesiva frecuencia oraciones muy largas y complejas que se prolongan de forma innecesaria mediante el empleo de incisos y perífrasis, de expresiones redundantes, de locuciones que nada aportan o de secuencias que significan lo mismo. Como resultado, se producen enunciados excesivamente largos y difícilmente comprensibles.

Los profesionales del derecho deben hacer un especial esfuerzo por emplear frases breves y de sintaxis más sencilla. Del mismo modo, han de ordenar, dentro de lo posible, los enunciados conforme a su orden lógico (sujeto, verbo y complementos...).

Los incisos que afecten a toda la oración y aporten significados de tiempo, espacio, causa, condición y concesión han de colocarse normalmente al principio. Los que introduzcan una explicación o justificación de lo dicho se colocan normalmente al final del enunciado.

Para conseguir una escritura jurídica clara, es necesaria una correcta puntuación de las distintas partes de la oración.

A continuación, se expone una selección de errores que están relacionados con la oración y que son comunes entre los profesionales del derecho. Se recomienda evitarlos, pues unos constituyen errores gramaticales y otros contribuyen a oscurecer el sentido.

Concatenación excesiva de frases subordinadas

Esta práctica, muy extendida entre los juristas, genera dificultades de comprensión, ambigüedades y posibles dobles interpretaciones. Para evitarla hay que dividir la oración.

Ejemplo:

Se sostiene por la parte actora que el sindicato USCA ha sido objeto de discriminación, pero para que pueda apreciarse la existencia de esta situación, lo primero que se precisa es que se fije un término comparativo, estableciendo

respecto a qué o a quien se discrimina, lo que omite la actora ya que se limita a referirse a que el comportamiento de la demandada constituye una exclusión y un rechazo de esta entidad sindical, con el “propósito de entorpecer y desprestigiar la actividad sindical de USCA “, y ello resulta sumamente difícil teniendo en cuenta que más del 95% de los controladores aéreos de AENA están afiliados a este sindicato. (redacción incorrecta)

Puntuación

El uso correcto de los signos de puntuación es indispensable para hacer posible la comprensión de un texto jurídico. La función principal de estos signos es establecer límites sintácticos, marcar pautas para la lectura, facilitar la comprensión y, especialmente, evitar interpretaciones erróneas. Sin embargo, algunos juristas no prestan suficiente atención a este aspecto. A continuación, se indica una selección de errores representativos que se recomienda evitar:

Comas. A continuación se detallan algunas reglas esenciales en el uso de la coma, que constituyen un mínimo para la corrección de los textos jurídicos:

- Entre sujeto y predicado no hay coma.

Ejemplo:

El Juzgado de Primera Instancia N° 49 de los de Barcelona, conoció el juicio verbal número, seguido a instancia de... (redacción incorrecta)

- Tampoco hay coma entre el verbo y sus complementos más allegados (directo, indirecto, de régimen, atributo y predicativo).

Ejemplo:

El párrafo segundo del artículo 172 venía referido a coacciones que tenían por objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, aunque resulta obvio que, toda coacción tiene por objeto un derecho fundamental, la libertad...

(redacción incorrecta)

- Los complementos circunstanciales que inciden directamente sobre el verbo no se separan con coma.

Ejemplo:

Tal objetivo ha sido cumplido, a través del establecimiento de normas básicas.

(redacción incorrecta)

Tal objetivo ha sido cumplido por medio del establecimiento de normas básicas

(redacción correcta)

- Todos los incisos deben ir separados con coma:

Ejemplo:

Además este Título Primero regula la planificación en materia de vivienda.

(redacción incorrecta)

Además, este Título Primero regula la planificación en materia de vivienda.

(redacción correcta)

- Debe evitarse el uso de la coma en adverbios y grupos adverbiales que sirvan para dar énfasis a una expresión (*incluso ellas, sobre todo por la noche, especialmente útil, particularmente novedoso...*) pues en estos casos no son incisos.

Ejemplo:

Esto lo defenderé, incluso, ante el Tribunal Supremo. (redacción incorrecta)

Punto y coma. Es un signo de puntuación que delimita en el interior de la oración bloques más amplios que los separados por las comas. Se emplean, sobre todo, en enumeraciones complejas. Su uso está en relación con la complejidad del texto y del número de comas en un enunciado.

Estructura pasiva

Aunque esta construcción verbal es correcta, es poco frecuente en la lengua española contemporánea. El uso de la pasiva aleja el lenguaje del ciudadano. Las oraciones que emplean la voz activa se perciben como más directas y menos rebuscadas. Se recomienda utilizar la pasiva solo cuando sea absolutamente necesario. La pasiva refleja (o pasiva con se) es más frecuente en el lenguaje común; sin embargo, se recomienda evitar en esta construcción el uso del complemento agente, muy frecuente en los textos jurídicos.

Ejemplo:

Se aprobó por el Congreso... (redacción que se ha de evitar)

El Congreso aprobó (redacción recomendada)

23

Construcción de gerundios

Los textos jurídicos no solo incurren en un uso excesivo de gerundios, sino que en muchos casos éste da lugar a construcciones agramaticales. Se recomienda tener un especial cuidado en el uso de esta forma verbal.

Debe evitarse:

- El gerundio especificativo. Ha de sustituirse normalmente por una oración relativa.

Ejemplos:

Una ley condenando la violencia de género (redacción que se ha de evitar)

Una ley que condene la violencia de género (redacción recomendada)

- El gerundio de posterioridad. Señala una acción posterior a la del verbo principal. Puede sustituirse fácilmente por una oración coordinada.

Ejemplo:

Lo denunció un policía teniendo que comparecer el juez (redacción que se ha de evitar)

Lo denunció un policía y tuvo que comparecer ante el juez (redacción recomendada)

Preposiciones

Los textos jurídicos acuden con excesiva frecuencia al uso de la preposición “a” con el sentido de “para” o “a fin de”. Es un galicismo que ya es natural en algunas construcciones (*avión a reacción, pollo al ajillo*), pero que, como norma general, se aconseja evitar.

Ejemplo:

Los servicios a prestar por las sociedades concesionarias (redacción que se ha de evitar)

Los servicios que deben prestar las sociedades concesionarias (redacción recomendada)

En algunas enumeraciones aparece la preposición solo en el primer elemento, hecho que puede afectar a la claridad del texto:

Ejemplo:

No sólo es un imperativo moral, sino también una inversión en la prosperidad compartida, la seguridad colectiva y el futuro común. (redacción que se ha de evitar)

No sólo es un imperativo moral, sino también una inversión en la prosperidad compartida, en la seguridad colectiva y en el futuro común. (redacción recomendada)

Formas arcaicas de subjuntivo

El lenguaje jurídico acude en exceso al futuro de subjuntivo (*hubiere, tuviere, viniere*), forma que ha desaparecido del uso estándar de nuestra lengua. Aunque su empleo no viola las leyes gramaticales, su aparición confiere al texto un carácter formulario y arcaico que lo aleja del destinatario. Muchas personas, además, desconocen su significado. Es preferible sustituirlo por otras formas compatibles, especialmente el pretérito imperfecto de subjuntivo.

Ejemplo:

Si tuviere razones futuras para proseguir la causa (redacción que se ha de evitar)

Si en el futuro tuviera razones para proseguir la causa (redacción recomendada)

Uso incongruente de los tiempos verbales

En ocasiones, los juristas emplean de forma incorrecta los tiempos verbales. En este sentido, por ejemplo, debe evitarse narrar hechos acontecidos en el pasado combinando, de forma arbitraria, formas verbales de presente y formas verbales de pasado.

Mayúsculas y minúsculas

Los textos jurídicos prodigan de forma excesiva el uso de las mayúsculas para designar el uso genérico de instituciones, organizaciones, cargos, tratamientos y otras realidades que poseen valor de nombres comunes, especialmente cuando se usan en plural.

Ejemplo:

Asimismo, esta Ley supone un alineamiento con las Directivas, Comunicaciones, Decisiones y Recomendaciones de las instituciones europeas (redacción que se ha de evitar)

Asimismo, esta Ley supone un alineamiento con las directivas, comunicaciones, decisiones y recomendaciones de las instituciones europeas (redacción recomendada)

Terminología

El empleo de un lenguaje técnico o especializado es común a todas las profesiones, incluidos los profesionales del derecho. El lenguaje que emplean estos, sin embargo, suele ser considerado por la ciudadanía particularmente difícil de comprender, oscuro e incluso críptico. El empleo de formas lingüísticas arcaicas, ancladas en otras épocas, o el uso de locuciones latinas sin adjuntar traducción, refuerza sin duda esta asentada percepción social.

Para mejorar la claridad, los profesionales del derecho han de explicar o “traducir” estos particularismos lingüísticos que continúan replicándose en formularios, plantillas, resoluciones judiciales, contratos y otros documentos jurídicos y sustituirlos, en el caso de que sea posible, por términos del lenguaje común.

Esta comisión no comparte la apreciación de quienes consideran que estas formas lingüísticas son herramientas insustituibles de trabajo y signo de distinción de la profesión. Como el propio Plan de Transparencia Judicial indica, es posible una *justicia comprensible* que respete las exigencias propias de una correcta técnica jurídica.

La forma en que se expresan los profesionales del derecho ha de regirse por valores propios de la modernidad, como la transparencia y la claridad. En suma, el registro léxico empleado por aquellos debe adaptarse siempre al destinatario con el que se relacionan y, en aquellos casos en que estos no sean juristas, evitar las expresiones oscuras y explicar el significado de los términos técnicos. Las propuestas para mejorar la claridad de los términos y expresiones empleadas se plantean desde un triple enfoque:

- Arcaísmos
- Locuciones latinas
- Terminología técnica.

Para el caso de los arcaísmos que no sean tecnicismos, se recomienda sustituirlos por palabras del lenguaje común o, en su caso, explicarlos a continuación del término o expresión.

Ejemplo:

De todo lo anterior, (...) hemos de concluir (...) que ha de darse como acreditado el relato de los hechos (..), relato respecto del cual, tanto acusado como perjudicada han dado una mendaz versión ...

Mendaz: falsa

Para el caso de las locuciones latinas, por otro lado, se recomienda la sustitución por su significado en castellano o, en su defecto, incorporar su traducción entre paréntesis.

Ejemplo:

Iuris tantum (que admite prueba en contrario).

Por último, se recomienda explicar la terminología técnica cuando sea posible, dado que en la actualidad no se dispone de una tabla de sustituciones consensuada por las autoridades e instituciones competentes.

Elaborar una tabla de sustituciones, y revisarla de forma periódica, es una tarea pendiente que excede a la labor de esta Comisión. Mientras no se disponga de una herramienta de estas características, se recomienda a los profesionales una especial sensibilidad hacia las dificultades de comprensión de la ciudadanía. Siempre es posible adaptar el léxico a la modernidad, sustituyendo términos y expresiones oscuras por otras de significado equivalente y mayor claridad.

Citas

Los textos jurídicos, en ocasiones, introducen las citas de forma incorrecta. Así, suele ser habitual el descuido en su apertura o cierre, de manera que resulta complejo delimitar dónde empiezan o acaban. En este sentido, las citas textuales deben estar integradas en el texto y siempre entre comillas dobles, ya se adopten las comillas inglesas (“”), ya las comillas latinas o españolas (« »). Al tiempo, si se contienen palabras entrecomilladas, deben emplearse las comillas simples (').

Por otro lado, es recomendable distinguir entre citas breves y citas largas. Las citas breves, que incluyen una sola frase, pueden incorporarse en el párrafo con comillas y sin cursiva. Las citas largas deben presentarse en un párrafo separado, sangrado en el margen izquierdo y sin comillas; asimismo, es especialmente importante omitir las partes no relevantes y sustituir su contenido por puntos suspensivos entre paréntesis (...) o corchetes [...] en las citas largas.

Por último, uno de los problemas más comunes de la expresión oral y escrita de los profesionales del derecho es el empleo concatenado de citas, mediante las que se reproduce un discurso ajeno. Estas citas en cascada deben evitarse, en la medida de lo posible, dado que dificultan seriamente la comprensión.

Referencias

Los textos jurídicos incluyen abundantes referencias de legislación y jurisprudencia. Estas referencias no están estandarizadas y, en muchas ocasiones, los datos que aportan no permiten localizar el documento. Es recomendable homogeneizar la inclusión de referencias con algunas pautas tipográficas comunes.

Existen numerosas reglas para la normalización de referencias bibliográficas, que pueden sólo parcialmente aplicarse a los textos normativos y judiciales (p.e: ISO 690 (1987), UNE 50104(1994)). Estos estándares pueden tomarse como modelo para elaborar reglas específicas en el ámbito jurídico. En este sentido, las mejores prácticas de normalización se han producido en los países anglosajones, debido a la relevancia del precedente judicial en su sistema jurídico (p.e.: *Bluebook* estadounidense).

En cuanto a las referencias de legislación, conviene tener en cuenta que son necesarios varios elementos para identificar el documento. Así, se recomienda que la primera cita en el texto sea completa y, por tanto, que contenga los siguientes elementos identificativos: rango normativo, número, denominación oficial si la tiene, fecha y, entre paréntesis, publicación oficial con referencia de número y fecha. En aquellos textos legales cuyas modificaciones sean frecuentes, es aconsejable hacer constar la referencia del último cambio. Para citas posteriores, será suficiente la utilización de la abreviatura.

En relación con las referencias de resoluciones judiciales, se deben incluir los siguientes elementos identificativos: siglas de la resolución y órgano judicial, sala y sección según el

caso y fecha. Adicionalmente, se puede señalar entre paréntesis el repertorio de jurisprudencia que se consultó, con su referencia, y el nombre y apellidos del magistrado ponente. De esta forma, tales datos pueden omitirse en citas posteriores en el texto. Asimismo, se recomienda emplear la cursiva para identificar el órgano judicial o, en sentencias extranjeras, las partes o la denominación que se haya dado al asunto.

Ejemplos:

STS, Civil, 20-12-2010 (CENDOJ, N° ROJ 6804, José Ramón Ferrándiz Gabriel)

SAP Madrid. Civil. Sec. 18ª, 29-7-2010 (AC 1357, Pedro Pozuelo Pérez)

Para las citas del Tribunal Constitucional o de tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se recomienda seguir el formato de esos órganos.

Ejemplos:

STC. Sala Segunda, n° 143/2010, de 21 de diciembre. (BOE núm. 16, de 19 de enero de 2011).

Campbell v. Ireland, n°. 45678/98, ECHR 1999-II.

De la Cierva y Osorio de Moscoso and Others v. Spain, n° 41127/98, ECHR 1999-VII.

Matthews v. the United Kingdom, n° 24833/94, ECHR 1999-I.

Recomendaciones a las instituciones

Mejorar la claridad del lenguaje jurídico fortalece el Estado de Derecho. En este sentido, las instituciones son esenciales para consolidar las mejores prácticas entre los profesionales del derecho. Para ello, se requiere un conjunto de políticas públicas, y también la colaboración y coordinación entre instituciones.

Así, las principales instituciones a las que se dirigen estas recomendaciones en primer término son el Ministerio de Justicia y las CCAA, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado (en adelante FGE), los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales (a través de los correspondientes consejos generales), las universidades y la Administración educativa en general.

En un segundo término, estas recomendaciones se dirigen a otras instituciones, tales como las instituciones penitenciarias, las fuerzas y cuerpos de seguridad o los ayuntamientos, dadas las funciones que desempeñan y la clara conexión entre sus funciones y la claridad del lenguaje.

Todas las instituciones implicadas tienen la responsabilidad compartida de tomar medidas para garantizar el derecho a comprender. En definitiva, promover la claridad del lenguaje jurídico exige un alto grado de compromiso y colaboración por parte de muy diversas instituciones, al tiempo que un cambio cultural en algunas de ellas. En este sentido, debe aprovecharse esta oportunidad para que las políticas impulsadas constituyan, en sí mismas, un modelo de buenas prácticas en materia de claridad.

Formación lingüística del profesional del derecho

El principal escollo al que se enfrenta la claridad del lenguaje jurídico es que la formación de los juristas genera desde su inicio determinados hábitos y prácticas que con los años son difíciles de eliminar. Los centros de formación transmiten una determinada forma de expresarse que consolida un modelo lingüístico arcaico.

Por ello, una parte importante del esfuerzo institucional debe recaer en la formación de los futuros profesionales del derecho, y ha de acompañarles desde las primeras etapas de sus estudios y a lo largo de toda su carrera por medio de una educación legal/lingüística continua. Al tiempo, debemos responder a las necesidades de los que ya son profesionales en ejercicio, cuya expresión oral y escrita requiere igualmente una formación continua específica.

Formación universitaria

La formación lingüística de los juristas está prácticamente ausente de los actuales programas universitarios. Algunas facultades de derecho incluyen estos conocimientos en sus planes de estudio, generalmente como materias optativas, o bien como una parte del programa de determinadas asignaturas troncales u obligatorias.

El nuevo modelo universitario que impulsa el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), además de la tradicional adquisición de conocimientos, abre los planes de estudio a la adquisición de habilidades y competencias por parte de los estudiantes. En el caso de los futuros juristas, el uso correcto del lenguaje jurídico forma parte de las habilidades y competencias que deben ser adquiridas con carácter primordial.

El actual marco es además más flexible y permite amplios márgenes para incorporar en los planes de estudios créditos de formación específicos relacionados con las habilidades lingüísticas.

Al mismo tiempo, los planes de estudios actuales responden a una concepción dinámica, hecho que permite que ciertas asignaturas sean compartidas entre varias titulaciones. En lo que a nuestros objetivos respecta, esto ofrece la oportunidad de generar espacios especializados compartidos entre las facultades de derecho y filología, sin descartar a las facultades de periodismo u otras.

Por tanto, se considera apropiado incorporar en los planes de estudios de los futuros juristas materias sobre el buen uso del lenguaje jurídico que enseñen a construir discursos escritos y orales claros, así como a adaptar el uso del lenguaje al destinatario.

Por esta razón, se recomienda a las facultades de derecho que aprueben y den visibilidad a este tipo de asignaturas en sus planes de estudios.

Formación de acceso

Una vez obtenido el título universitario, la mayor parte de las profesiones directamente relacionadas con la Administración de Justicia están sometidas a diferentes requisitos de acceso.

En esta etapa, la capacidad de redactar textos jurídicos claros y comprensibles, así como la de expresarse con claridad debería ser una habilidad evaluable.

Fase de oposición

La oposición es la forma de acceso a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de secretarios judiciales, médicos forenses, así como para el resto de los funcionarios de la Administración de Justicia, los notarios y los registradores. Por ello, es conveniente que la claridad en la exposición del opositor sea un requisito específicamente incluido en las convocatorias. Algunas convocatorias de la Administración General del Estado incorporan ya en el proceso de oposición requisitos evaluables de este tipo. Así para acceder al cuerpo de administradores civiles del Estado:

Primer ejercicio (ensayo escrito sobre un tema de actualidad): El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública ante el Tribunal, que lo calificará valorando los conocimientos, *la claridad y el orden de ideas, y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.*

Tercer ejercicio (examen oral): Finalizada la intervención el Tribunal podrá dialogar con el opositor durante un período máximo de quince minutos sobre aspectos de los temas que ha desarrollado. En este ejercicio se valorará la amplitud y comprensión de los conocimientos, *la claridad de exposición y la capacidad de expresión oral.*

Cuarto ejercicio (ejercicio práctico): *El Tribunal valorará, junto al rigor analítico y la claridad expositiva, los conocimientos generales y específicos pertinentemente incorporados al análisis o informe y la capacidad de relacionar los mismos (...)*

Estas experiencias son un ejemplo de buenas prácticas que deben servir de modelo al resto de oposiciones.

En este sentido, las convocatorias para el acceso a las carreras judicial y fiscal incorporan tímidamente algunos de estos requisitos, aunque se definen con menor precisión. Así, tales convocatorias introducen variantes como la siguiente:

El Tribunal evaluador tendrá en cuenta el conocimiento demostrado por la persona aspirante sobre el Derecho positivo, la doctrina y la jurisprudencia, *su capacidad de exposición y análisis de los conceptos y problemáticas clave del tema abordado, así como su habilidad para relacionarlos con otros puntos del temario.*

Existen, por tanto, algunas prácticas ya instauradas para evaluar habilidades de comunicación oral y escrita en la Administración de Justicia. Sin embargo, las convocatorias para el acceso a otros cuerpos de la Administración de Justicia, así como para notarios y registradores, carecen de referencia alguna a aquellas. Por ello, deberían incluirse en los criterios de evaluación.

Escuela Judicial (Formación de jueces)

La Escuela Judicial tiene encomendada la formación inicial y continua de los jueces y magistrados. Los objetivos de la formación inicial son completar los conocimientos necesarios y desarrollar la capacidad de análisis de la realidad, la valoración de pruebas y la resolución. En este sentido, el Libro Blanco de la Justicia, aprobado por el Pleno del CGPJ en 1997, establecía entre los objetivos concretos del primer año docente:

- Aprender a motivar suficientemente las resoluciones con un lenguaje claro, sencillo y comprensible.

- Valorar las adecuadas relaciones del Juez con todos sus interlocutores.

Ahora bien, el plan de formación inicial y el plan de formación continua de la Escuela Judicial carecen de contenidos específicos relativos al buen uso del lenguaje.

Por tanto, se recomienda que la Escuela Judicial exija un nivel mínimo de expresión oral y escrita para acceder a una plaza en la carrera así como cursos de formación continua sobre esta materia.

Centro de Estudios Jurídicos

El CEJ se encarga de la formación inicial y continua de los fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses, abogados del Estado y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.

Los programas de formación inicial y continua de todos estos cuerpos carecen de contenidos específicos relacionados con la claridad de la expresión escrita y oral y el adecuado uso del lenguaje jurídico. En el caso de la formación continua, los funcionarios de estos cuerpos tienen la posibilidad de acceder a actividades organizadas por el Instituto Nacional de Administración Pública, si bien estas actividades hoy por hoy guardan escasa relación con la materia objeto de estas recomendaciones.

La capacitación para expresarse con claridad debe adaptarse a cada una de las profesiones cuya formación brinda el CEJ. Esta formación debe prestarse tanto en las fases iniciales como en los programas de formación continua.

Por tanto, se recomienda que el CEJ exija un nivel mínimo de expresión oral y escrita para acceder a las plazas de los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, así como que se impartan cursos de formación continua sobre esta materia.

Escuelas de práctica jurídica

Las escuelas de práctica jurídica contribuyen significativamente a la formación de los futuros abogados y procuradores. La estrecha relación que mantienen estos profesionales con las personas a quienes asesoran, defienden y representan, aconseja la implantación generalizada en estas escuelas de contenidos específicos para mejorar la claridad de la expresión oral y escrita de estos profesionales.

Sería conveniente que el sistema de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales incorpore previsiones expresas relativas a las enseñanzas mínimas que deben recibirse previamente al ejercicio profesional, con sus correspondientes criterios de evaluación. En este sentido, es recomendable introducir contenidos obligatorios que vinculen el acceso a la profesión a la claridad en la expresión escrita y oral.

Educación legal continua

La práctica de cualquier profesión requiere de una actualización permanente. Por ello, la formación inicial y la formación de acceso de los profesionales del derecho deben ser complementadas con formación continua.

En este sentido, podemos seguir el ejemplo de las buenas prácticas de otros países en relación con la denominada educación legal continua (ELC). Como es sabido, este

tipo de formación llega incluso a ser obligatoria en algunos países para mantener la licencia de actividad en profesiones como las de abogado y procurador. Esta suele diseñarse en torno a la asistencia periódica a cursos con un número determinado de horas lectivas.

Como muestra el primer plan de aprendizaje permanente, que coordina el Ministerio de Educación, la formación continua es una prioridad para nuestra sociedad. Al tiempo, las propias prácticas de las facultades de derecho, las escuelas de práctica jurídica, la escuela judicial y el CEJ demuestran que este tipo de formación está consolidándose cada vez más en nuestro país.

En consecuencia, las instituciones implicadas en las actividades de formación continua deberían ofertar de forma obligatoria cursos dirigidos a mejorar el uso del lenguaje jurídico.

Materiales de consulta para profesionales

El Ministerio de Justicia, el CGPJ, la FGE, el Consejo General de la Abogacía Española, así como el resto de colegios profesionales deben poner a disposición de las profesiones jurídicas sobre las que ejerzan competencias materiales de consulta sobre claridad del lenguaje adaptados al ejercicio de dichas profesiones. Estos materiales deberían ser accesibles asimismo en Internet.

Del mismo modo, es importante avanzar en la creación de servicios de consulta, virtual o telefónica, atendidos por expertos, en los que los profesionales del derecho puedan resolver de forma directa sus dudas sobre el uso del lenguaje.

32

Reconocimiento público de buenas prácticas

Los sistemas de incentivos son una de las técnicas más efectivas para promover o inhibir determinadas conductas profesionales. La Comisión propone, en este sentido, optar por un sistema de incentivos positivos basado en el reconocimiento público de las buenas prácticas. Este reconocimiento debería tener un carácter interinstitucional y darse al máximo nivel de representación posible. En este sentido, se propone otorgar, con una periodicidad predeterminada, una distinción honorífica a partir de candidaturas seleccionadas de oficio o de las propuestas recibidas. Para ello, deberían otorgarse dos tipos de reconocimiento en acto público, en el marco de un foro anual de intercambio de experiencias y buenas prácticas:

- (1) Reconocimiento de determinadas trayectorias profesionales que destaquen por la claridad en el empleo del lenguaje jurídico.
- (2) Reconocimiento de iniciativas o actuaciones que hayan contribuido a mejorar la claridad del lenguaje jurídico.

Estos reconocimientos llevarían aparejada la concesión de la cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort así como la una distinción que otorgaría la Real Academia de la Lengua Española. Las dos distinciones honoríficas anuales deberían ser otorgadas por una Comisión que examinaría las candidaturas y elegiría a los galardonados. Esta Comisión estaría presidida por el Director de la Real Academia de la Lengua Española y en su composición estarían representadas las instituciones implicadas.

Acercamiento del lenguaje jurídico a la ciudadanía

Todo proceso de comunicación implica la existencia de dos partes, emisor y receptor, que han de comprenderse entre sí. Por ello, las políticas públicas de mejora del lenguaje jurídico deben prestar especial atención a la parte más débil de esta relación, que en este caso son los ciudadanos.

En este sentido, las instituciones tienen la obligación de dotar a los ciudadanos de instrumentos suficientes para la comprensión de sus derechos y de las herramientas de que disponen para defenderlos.

Educación para la ciudadanía

La educación para la ciudadanía y los derechos humanos es una materia obligatoria en uno de los tres primeros cursos de la educación secundaria obligatoria. La educación para la ciudadanía deriva de la recomendación 12 (2002) del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, y tiene por objeto promover “una ciudadanía democrática”. De acuerdo con el Real Decreto que regula las enseñanzas mínimas en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, esta nueva asignatura busca favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos.

Para mejorar la capacidad de comprensión de nuestros derechos y de los instrumentos de que disponemos para defenderlos es necesario empezar desde la escuela. Sin duda, es difícil cambiar los hábitos lingüísticos a partir de cierta edad. Por ello, se recomienda que los materiales de educación para la ciudadanía incorporen nociones básicas sobre derechos individuales y Administración de Justicia.

Materiales de autoayuda legal para ciudadanos

Los poderes públicos deben facilitar a los ciudadanos información legal práctica en un lenguaje comprensible y con un formato accesible.

En este sentido, se recomienda a todas las instituciones que ofrezcan materiales de autoayuda legal, de actualización periódica, que expliquen con un lenguaje claro los derechos, deberes, procedimientos y recursos jurídicos disponibles en el ámbito de sus competencias. Este material debería ser accesible en Internet.

La Nueva Oficina Judicial, en particular, es un elemento clave para acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía dado que los servicios comunes generales pueden incluir servicios de atención al ciudadano y a los profesionales. Esta Comisión recomienda al Ministerio de Justicia y a las CCAA con competencias transferidas que creen estos servicios y los doten de forma adecuada.

Estandarización de documentos jurídicos

Los estudios realizados en el marco de esta Comisión han detectado que las plantillas y formularios que habitualmente utilizan los programas informáticos de gestión procesal, especialmente las citaciones y notificaciones, no siempre son claros. La progresiva modernización tecnológica de la justicia ofrece una oportunidad para incidir en la claridad del lenguaje. En este sentido, se deben mejorar las plantillas y formularios que emplean los distintos programas de gestión procesal.

Por otro lado, actos de comunicación como las citaciones y notificaciones deberían incluir en el reverso una explicación clara de las incidencias procesales y actuaciones a las que hacen referencia.

Asimismo, los productos que las empresas editoriales ofrecen a los profesionales del sector en la actualidad, como por ejemplo los formularios y modelos de contratos, incurrir a menudo en defectos similares que deberían corregirse.

Por último, las empresas deben mejorar la claridad y comprensión de los contratos y documentos dirigidos a los consumidores y usuarios (por ejemplo, la contratación en masa generada por los servicios de telefonía móvil, las pólizas de seguro, las hipotecas, etc.), cuyo contenido a menudo es ininteligible y puede conducir a situaciones de inseguridad jurídica.

Tecnologías al servicio de la claridad del lenguaje

Las tecnologías de la información pueden prestar soporte para el análisis de la claridad de los textos, facilitando una redacción más comprensible, sin suponer por ello una ralentización en los tiempos de escritura.

En este sentido, son de especial utilidad los analizadores gramaticales y estadísticos de textos (longitud de las frases, número de oraciones, longitud media de las palabras, etc.), así como los programas de escritura semiautomática empleados por los profesionales de la interpretación y traducción. Estos últimos, por ejemplo, almacenan repositorios de frases o párrafos predeterminados que, una vez validados, se proponen a los redactores de los textos.

En definitiva, se recomienda a las instituciones del sector promover el uso de este tipo de programas entre los profesionales del derecho e invertir en el desarrollo de nuevas aplicaciones.

34

Institucionalización

Los estudios encargados para elaborar el presente informe muestran la escasa colaboración que existe en la actualidad entre los profesionales del derecho y del lenguaje. En consecuencia, es necesario tender puentes entre unos y otros y para ello es fundamental colegiar esfuerzos.

Una solución adecuada es crear una Comisión, a través de un convenio marco de coordinación, cuya presidencia corresponda a la Real Academia de la Lengua Española, al ser esta la institución garante de la calidad y claridad de nuestra lengua. Esta velaría por el fomento del buen uso del lenguaje jurídico, impulsando las presentes recomendaciones y dando visibilidad a esta nueva política pública.

Al tiempo, esta comisión cumpliría una función esencial en el desarrollo de aquellos proyectos que, por su especial complejidad y necesaria actualización periódica, requieren de una colaboración reforzada entre las instituciones: proponer la revisión de términos y acepciones jurídicas del diccionario de la RAE, elaborar y actualizar tablas de sustitución de terminología jurídica, etc.

Esta comisión podría asimismo profundizar en la investigación de ámbitos no tratados en el presente informe como, por ejemplo, el impacto que tiene en el ciudadano el lenguaje de los símbolos de la Justicia o los significados asociados a sus imágenes (ritos, indumentaria, etc.); factores que en ocasiones distorsionan la percepción social de la Justicia y condicionan la interpretación de los hechos judiciales.

Recomendación asociada

Lenguaje jurídico en los medios de comunicación

El derecho a comprender se extiende más allá de las personas directamente implicadas en el litigio concreto para incluir también al público en general, legítimamente interesado en conocer y entender lo que sucede en el ámbito jurídico a través de los medios de comunicación.

La actividad judicial, aunque resuelve conflictos individuales, interesa al conjunto de la sociedad en la medida en que pone de manifiesto qué comportamientos se consideran lícitos o ilícitos, cómo se sancionan las conductas ilegales o cómo se protegen los derechos y libertades. Si bien uno de cada cuatro ciudadanos tendrá contacto directo con los tribunales alguna vez en su vida, la sociedad se informa y forma su opinión sobre la Justicia a través de los medios de comunicación.

Una utilización errónea, oscura o imprecisa del lenguaje jurídico por parte de los profesionales de la comunicación genera en el público ideas equivocadas o, cuando menos, confusas acerca del funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado.

Los profesionales de los medios de comunicación tienen que adaptar el lenguaje jurídico a su lenguaje propio, el periodístico. Los objetivos de uno y otro lenguaje son distintos. En

consecuencia, entendemos que los periodistas tienen una mayor exigencia de claridad y una menor exigencia de rigor técnico. En definitiva, los profesionales de la comunicación deben asumir un papel activo en la “traducción” y explicación del lenguaje empleado por los profesionales del derecho.

Ahora bien, tienen una especial responsabilidad a la hora de transmitir información sobre la realidad judicial noticiable en aquellos casos en que pueden verse afectados derechos fundamentales. Este hecho es particularmente grave en los procesos penales dado que en ellos puede verse afectada la propia presunción de inocencia. Por ello, tanto las explicaciones de las distintas situaciones procesales de las personas encausadas, como del procedimiento y sus fases, deben ser claras y precisas.

En consecuencia, los profesionales de la comunicación deben aplicar una especial cautela en el uso de aquellos términos jurídicos que puedan desvirtuar la realidad procesal o implicar una mayor carga incriminatoria de la real.

Asimismo, se recomienda a las instituciones que promuevan la formación especializada de los periodistas en el buen uso del lenguaje jurídico, a fin de que puedan cumplir su labor de intermediación entre el sector de la Justicia y la ciudadanía.

Por último, la Comisión destaca la importante función que llevan a cabo los gabinetes de prensa de los órganos judiciales al realizar labores de intermediación con los profesionales de la comunicación. Por ello, recomienda fortalecer estos gabinetes así como que asuman funciones de asesoramiento a dichos profesionales respecto del significado de expresiones o términos jurídicos (y su posible sustitución).

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

INFORME SOBRE LENGUAJE ORAL

Dirigido por Antonio Briz Gómez, (Universidad de Valencia)

Salvador Pons Bordería, Antonio Hidalgo Navarro, Julia Sanmartín Sáez, Virginia González García, María Estellés Arguedas, Adrián Cabedo Nebot, María del Pilar Folch Asins, Marta Pilar Montañez Mesas, Paola Quintanilla Vázquez, Elena López-Navarro Vidal, Melania Sánchez Masiá, María Ruiz Santabalbina y Cristina Villalba Ibáñez

INFORME SOBRE LENGUAJE ESCRITO

Dirigido por Estrella Montolio Durán, (Universidad de Barcelona)

Mª Ángeles García Asensio, Pedro Gras Manzano, Anna López Samaniego, Fernando Polanco Martínez, Raquel Taranilla García e Irene Yúfera Gómez

INFORME SOBRE PLANTILLAS PROCESALES

Dirigido por Julio Borrego Nieto, (Universidad de Salamanca)

Juan Felipe García Santos, José Antonio Bartol Hernández y Álvaro Recio Diego

INFORME SOBRE LENGUAJE DE LAS NORMAS

Dirigido por Salvador Gutiérrez Ordóñez

INFORME SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS COMPARADAS

Dirigido por Cristina Carretero González, (Universidad Pontificia de Comillas)

Mª de los Reyes Corripio Gil-Delgado, Alicia Duñaiturria Laguarda, Federico de Montalvo Jääskeläinen, Blanca Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso y Pilar Úcar Ventura

INFORME SOBRE LENGUAJE JURÍDICO EN LOS MEDIOS

Dirigido por María Peral Parrado

Mercedes Bengoechea Bartolomé, Gabriela Bravo Sanestanislaio, Carlos Berbell; José Luis Calvo, María Victoria Ortega, Isabel Valdecabres y Yolanda Vidales

EXPERTOS CONSULTADOS

Amaya Arnaiz Serrano, Joaquín Bayo Delgado, Iván Heredia Cervantes, Antonio Madrid Pérez, Luis María Cazorla Prieto, José Antonio González Salgado, Esther Nieto Moreno de Diezmas, Joaquín Silguero Estagnan y Darío Villanueva Prieto

PROFESIONALES COLABORADORES

Administración de Justicia

María Jesús Alarcón Barcos, Elena Alonso Magaz, Isabel Calvo Carrasco, Luis Martín Contreras, Luis Carlos Díez, Fermín Javier Echarri Casí, Eduardo Esteban Rincón, Manuela Fernández Prado, Laura Fojón Chamorro, Javier Gómez Bermúdez, Dolores Grau García-Blanco, Lorenzo Santiago Luna Alonso, Luis Martín González, María Teresa Martín Nájera, Javier Martínez Lázaro, Juan Enrique Mínguez Zafra, Ángeles Leticia Morales Moreno, José Palazuelos Morlanes, Gregorio Pérez Fernández-Mayoralas, Esther Pérez Pérez, Nicolás Poveda Peña, Alfonso Rivera Forcén, Santiago Rivera Jiménez, Sinforiano Rodríguez Herrero, Vicente Manuel Rouco Rodríguez, Ramón Sáez Valcárcel, Mª Tránsito Salazar Bordel, Yolanda San Pastor, Tomás Sanz Hoyos, José María Tapia Chinchón, José Juan Tomás y Francisco J. Vieira Morante

CGPJ

Raquel Blázquez, Alejandro de la Cuadra Álvarez, Pascual Ortuño Muñoz, Carlos Uribe Ubago y María Jesús Villa Sánchez

Consejo General de la Abogacía Española

Marta María Ballesteros Muñoz y Antonio Ruiz Jiménez

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN

Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal

COMITÉ TÉCNICO DE LA COMISIÓN

Gabinete del Secretario de Estado de Justicia

ESTUDIO DE CAMPO:
LENGUAJE ESCRITO

COMISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO

Dirigido por Estrella Montolí Durán, (Universidad de Barcelona).

M^a Ángeles García Asensio, Pedro Gras Manzano, Anna López Samaniego, Fernando Polanco Martínez, Raquel Taranilla García e Irene Yúfera Gómez.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	8
1. Perspectiva teórica.....	8
2. Composición del equipo	9
3. Cuestiones metodológicas	10
3.1. El corpus.....	10
3.2. Fases del análisis.....	11
4. Contenido del informe	12
2. DELIMITACIÓN DE UNIDADES TEXTUALES.....	13
1. Introducción. La construcción textual: el párrafo.....	13
1.1. Principales problemas relacionados con la construcción parafrástica	14
1.1.1. Párrafos unioracionales	14
1.1.2. Párrafos excesivamente largos.....	17
1.1.3. Párrafos muy segmentados	21
1.1.4. Cambio de párrafo temáticamente injustificado	22
2. Anacolutos provocados por la superestructura	23
2.1. Cláusulas de participio y gerundio truncadas	23
2.2. Cláusulas completivas subordinadas sin oración principal.....	24
3. Problemas con los mecanismos de transición entre párrafos	25
3. LA ELABORACIÓN DE LAS SECUENCIAS TEXTUALES (I): LA DESCRIPCIÓN Y LA NARRACIÓN	28
1. Introducción. La elaboración de las secuencias textuales en los textos jurídicos ...	28
2. La descripción en los documentos jurídicos	28
3. Principales problemas en la elaboración de las secuencias narrativas de los géneros jurídicos.....	30
3.1. El papel de la narración en los documentos jurídicos.....	30
3.2. Las características lingüísticas de una narrativa eficaz	30
3.3. Los problemas más frecuentes en las narrativas del corpus de sentencias ...	31
3.3.1. La delimitación defectuosa de los diferentes eventos narrados en la secuencia	32
3.3.2. Narraciones en las que “faltan” acciones	37
3.3.3. Cuando narración y descripción se mezclan indiscriminadamente	38
3.3.4. Cuando la enumeración insertada enreda el hilo narrativo	39
3.3.5. La imbricación confusa de narración y argumentación.....	40
3.3.6. ¿Quién realiza la acción narrada? Problemas para atribuir el agente ...	41
4. LA ELABORACIÓN DE LAS SECUENCIAS TEXTUALES (II): LA ARGUMENTACIÓN	43
1. La argumentación en los textos jurídicos	43
1.1. Las características lingüísticas de una argumentación eficaz	44
2. Dificultades de comprensión relacionadas con el orden de las premisas y la conclusión	44
2.1. Dificultad en la identificación de las premisas o la conclusión	44
2.2. Incisos que interrumpen el proceso de argumentación	45
2.3. Los saltos argumentativos	46
2.4. La falta de señalización del encadenamiento de argumentaciones	47
2.5. La conclusión a la que todo se subordina	49
3. El mal uso de las marcas lingüísticas que introducen las premisas y la conclusión	50
3.1. Marcas que introducen las premisas.....	50
3.1.1. Expresión predictiva + enumeración.....	51
3.1.2. Uso de un conector	52
3.2. Marcas que introducen la conclusión	53
3.3. Usos inadecuados de los marcadores.....	54

3.3.1. La duplicación innecesaria de marcadores.....	54
3.3.2. El caso de “en todo caso”	54
5. LA ELABORACIÓN DE OPERACIONES TEXTUALES RECURRENTE. LA ENUMERACIÓN	56
1. Introducción. La enumeración en los documentos jurídicos.....	56
2. Principales problemas de las enumeraciones en los documentos jurídicos.....	57
3. La expresión predictiva.....	57
3.1. Ausencia de expresión predictiva	58
3.2. Imprecisión de la expresión predictiva	60
3.3. Falta de correspondencia con los elementos enumerados	60
3.3.1. Falta de correspondencia temática	61
3.3.2. Falta de correspondencia numérica.....	61
4. Los elementos enumerados.....	61
4.1. Heterogeneidad de los elementos enumerados.....	62
4.2. Dificultad para interpretarlos.....	64
4.3. Dificultad para separarlos.....	67
4.4. Enumeraciones truncadas	69
5. El sistema de numeración.....	70
5.1. Inconsistencias de la marcación	70
5.2. Orden	73
6. Mezcla de enumeraciones de distinta jerarquía.....	73
6. EL MANTENIMIENTO DEL REFERENTE: LAS EXPRESIONES ANAFÓRICAS.....	76
1. Introducción. Las expresiones anafóricas en los textos jurídicos	76
2. Problemas de referencia y problemas de recuperación del agente	77
3. La dificultad para identificar el antecedente de las expresiones anafóricas en los géneros jurídicos (problemas de referencia).....	78
3.1. Problemas derivados del empleo inadecuado de pronombres	79
3.1.1. Los pronombres personales (él/le/lo/la) y demostrativos (este/ese/aquel).....	79
3.1.2. Los pronombres posesivos (su)	81
3.1.3. El falso anafórico el mismo/la misma/los mismos/las mismas.....	82
3.1.4. Los pronombres neutros (ello, lo, esto/eso/aquello)	85
3.1.5. Los pronombres relativos (que, cual, cuyo, etc.)	86
3.2. Problemas derivados del empleo inadecuado de sintagmas nominales anafóricas	89
3.2.1. La selección de nombres cuyo significado no se relaciona fácilmente con el del antecedente	90
3.2.2. La selección del determinante.....	90
4. La dificultad para acceder al agente de una acción (problemas de recuperación del agente).....	92
4.1. El sujeto elíptico de verbos en forma personal.....	93
4.1.1. Mención del sujeto excesivamente distante.....	93
4.1.2. Problemas de concordancia con sujetos plurales, colectivos o complejos.....	94
4.1.3. Sujeto implícito	96
4.1.4. Cambio de sujeto no marcado.....	97
4.2. El sujeto tácito de los verbos en forma no personal	97
4.2.1. El sujeto tácito del gerundio	98
4.2.2. El sujeto tácito del participio	98
4.2.3. El sujeto tácito del infinitivo.....	99
7. LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN	100
1. Introducción. Puntuación, legibilidad y comprensión textual	100
2. La coma.....	101

2.1. Principales problemas relacionados con el uso de la coma.....	101
2.1.1. Coma entre sujeto y verbo o verbo y complementos fuertes.....	102
2.1.2. Ausencia de coma para señalar elisión de verbo.....	102
2.1.3. Ausencia de coma para delimitar incisos y marcadores discursivos parentéticos.....	103
2.1.4. Ausencia de coma para marcar cambios de orden.....	104
2.1.5. Usos raros o inadecuados de la coma.....	105
3. El punto y coma.....	107
3.1. Principales problemas relacionados con el uso del punto y coma.....	108
3.1.1. Punto y coma para separar oraciones.....	108
3.2. Usos raros o inadecuados del punto y coma.....	110
3.2.1. Punto y coma para introducir una enumeración.....	110
8. LA SUBORDINACIÓN.....	111
1. Introducción. La subordinación en los documentos jurídicos.....	111
2. Principales problemas de las oraciones subordinadas en los documentos jurídicos cos.....	112
3. La subordinación como procedimiento de construcción paragrafíca.....	113
3.1. Dificultad de identificación de la oración principal.....	113
3.2. Omisión de la oración principal.....	114
4. Mecanismos de subordinación no estándar o antinormativos.....	115
4.1. Uso de nexos subordinantes no estándar.....	115
4.1.1. Conjunciones y locuciones conjuntivas no estándar.....	116
4.1.2. Usos especiales de conjunciones y locuciones conjuntivas estándar... ..	117
4.2. Subordinación mediante formas no personales.....	117
4.2.1. El caso del gerundio.....	118
9. OTROS ASPECTOS SINTÁCTICOS.....	123
1. Problemas de disposición de los elementos de la oración.....	123
1.1. Alteraciones del orden natural de la frase en los textos jurídicos.....	123
1.2. Incisos parentéticos que dificultan la comprensión.....	126
1.2.1. Número de incisos.....	126
1.2.2. Extensión de los incisos.....	127
1.3. La posición del adjetivo.....	128
1.3.1. Anteposiciones inadecuadas.....	129
1.3.2. Posposiciones incorrectas.....	129
2. La voz pasiva en los textos jurídicos.....	129
2.1. La pasiva mixta.....	130
2.2. Uso poco natural de la pasiva perifrástica.....	132
3. Problemas sintácticos relacionados con elisiones.....	133
3.1. Elisión de la conjunción completiva “que”.....	133
3.2. Elisión de determinantes y preposiciones.....	133
3.3. Otras elisiones.....	135
10. PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL LÉXICO.....	136
1. Introducción. Características del léxico jurídico.....	136
2. Principales problemas relacionados con el dominio léxico de los géneros jurídicos cos.....	137
2.1. Particularidades léxicas.....	137
2.1.1. Formulismos.....	137
2.1.2. Tratamientos protocolarios. Aspectos de cortesía.....	139
2.1.3. Latinismos.....	141
2.1.4. Arcaísmos.....	142
2.1.5. Giros poco habituales.....	144
2.1.6. Terminología (unidades léxicas especializadas) con significado distinto en el dominio del léxico común.....	147

2.1.7. Omisión de términos jurídicos consabidos	149
2.1.8. Abreviaciones	150
2.1.9. Neologismos estilísticos o innecesarios	151
2.1.10. Impropiiedades léxicas	153
2.2. Particularidades estilísticas.....	154
2.2.1. Repetición léxica	154
2.2.2. Dobletes o parejas léxicas	155
2.2.3. Formas perifrásticas.....	155
2.2.4. Abuso de locuciones complejas.....	156
11. CUESTIONES DE NORMATIVA.....	157
1. Introducción. La trascendencia de la norma académica en el lenguaje judicial	157
2. Principales problemas relacionados con los usos desviados de la norma académica	158
2.1. Particularidades ortográficas	158
2.1.1. Acentuación.....	158
2.1.2. La ortografía de los grupos consonánticos cultos	164
2.1.3. La ortografía de las palabras homónimas homófonas	164
2.1.4. La ortografía de las siglas y de las abreviaturas.....	165
2.1.5. Las letras mayúsculas	166
2.1.6. La ortografía de los extranjerismos.....	168
2.1.7. La ortografía de los números y de la fecha.....	169
2.2. Particularidades gramaticales	172
2.2.1. Los verbos.....	172
2.2.2. Los adverbios nominales seguidos de posesivos	173
2.2.3. Las preposiciones	174
2.2.4. La concordancia	174
2.3. Particularidades de la reproducción del discurso ajeno.....	175
2.3.1. Los estilos citativos: cita directa, cita indirecta, cita mixta	175
2.3.2. La ortotipografía de la cita: la delimitación de las palabras ajenas	176
12. ANEXO. OTROS DOCUMENTOS DISTINTOS DE LA SENTENCIA	178
1. Introducción.....	178
2. Delimitación de unidades textuales	179
2.1. Introducción. La construcción textual: el párrafo.....	179
2.1.1. Principales problemas relacionados con la construcción parafrástica..	179
2.2. Anacolutos provocados por la superestructura	180
2.2.1. Cláusulas de participio y gerundio truncadas	181
2.3. Problemas con los mecanismos de transición entre párrafos	181
3. La elaboración de las secuencias textuales (I): la descripción y la narración	182
3.1. Principales problemas en la elaboración de las secuencias narrativas de los géneros jurídicos	182
3.1.1. Los problemas más frecuentes en las narrativas del corpus de otros géneros jurídicos.....	182
4. La elaboración de las secuencias textuales (II): la argumentación	183
4.1. El mal uso de las marcas lingüísticas que introducen las premisas y la conclusión	183
4.1.1. Marcas que introducen las premisas	183
4.2. Marcas que introducen la conclusión	183
5. La elaboración de operaciones textuales recurrentes. La enumeración	184
5.1. Introducción. La enumeración en los documentos del corpus de otros operadores jurídicos	184
5.2. Principales problemas de las enumeraciones en los documentos de este corpus	184
6. El mantenimiento del referente: las expresiones anafóricas.....	184
6.1. Problemas derivados del uso inadecuado de pronombres.....	184

6.2. Problemas derivados del empleo inadecuado de sintagmas nominales anafóricos	186
6.3. La dificultad para acceder al agente de una acción (problemas de recuperación del agente)	186
7. Los signos de puntuación	187
7.1. La coma	187
7.1.1. Principales problemas relacionados con el uso de la coma	187
7.2. El punto y coma	189
8. La subordinación	189
8.1. La subordinación como procedimiento de construcción paragrafíca	189
8.1.1. Dificultad de identificación de la oración principal	189
8.1.2. Omisión de la oración principal	190
8.1.3. Omisión de la oración subordinada	190
8.2. Mecanismos de subordinación no estándar o antinormativos	190
8.2.1. Uso de nexos subordinantes no estándar	190
8.2.2. Subordinación mediante formas no personales	191
9. Otros aspectos sintácticos	193
9.1. Problemas de disposición de los elementos de la oración	193
9.1.1. Alteraciones del orden natural de la frase en los textos jurídicos	193
9.1.2. Incisos parentéticos que dificultan la comprensión	193
9.1.3. La posición del adjetivo	194
9.1.4. Anacoluto	194
9.2. La voz pasiva en los textos jurídicos	195
9.2.1. La pasiva mixta	195
9.2.2. Uso poco natural de la pasiva perifrástica	196
9.3. Problemas sintácticos relacionados con elisiones	196
9.3.1. Elisión de la conjunción completiva “que”	196
9.3.2. Elisión de determinantes y preposiciones	196
9.3.3. Otras elisiones	197
10. Problemas relacionados con el léxico	197
10.1. Principales problemas relacionados con el dominio léxico de los géneros jurídicos	197
10.1.1. Particularidades léxicas	197
10.1.2. Particularidades estilísticas	202
11. Cuestiones de normativa	203
11.1. Principales problemas relacionados con los usos desviados de la norma académica	203
11.1.1. Particularidades ortográficas	203
11.1.2. Particularidades gramaticales	207
11.1.3. Particularidades de la reproducción del discurso ajeno	209
13. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CITADAS EN EL INFORME	210

INTRODUCCIÓN AL INFORME

1. PERSPECTIVA TEÓRICA

La base teórica que fundamenta la redacción de este informe de diagnóstico es de carácter interdisciplinar y se alimenta de marcos teóricos complementarios¹. En primer lugar, este trabajo ha partido de las descripciones que, sobre el lenguaje jurídico, existen tanto en español como en otras tradiciones lingüísticas, especialmente la anglosajona. La tradición de los estudios sobre el discurso jurídico en español ha tomado la oración como unidad de análisis y, en consecuencia, ha focalizado su atención en la ortografía, aspectos gramaticales (en particular, problemas relacionados con la subordinación) y el léxico (fundamentalmente, unidades terminológicas y usos arcaicos de algunos términos que pueden dificultar la comprensión del documento).

Ahora bien, a lo largo de las últimas décadas, los estudios sobre el discurso, es decir, que toman el discurso como unidad, están conociendo un desarrollo internacional importantísimo y han aportado herramientas y estrategias heurísticas que no pueden orillarse en la descripción de las características de los géneros textuales profesionales, como lo son los jurídicos. Por esta razón, este informe adopta una perspectiva discursiva, en el sentido de que el análisis de las formas lingüísticas concretas –como el gerundio– se lleva a cabo desde la óptica de su función en el discurso. Consideramos, con el grueso de los investigadores internacionales especialistas en este campo, que el enfoque discursivo es necesario para explicar los géneros jurídicos de manera consistente –esto es, para dar cuenta de su auténtico significado–, puesto que se trata de textos contextualmente dependientes; son textos relacionales entre la administración de justicia y los ciudadanos, o entre juristas.

Igualmente, en este informe hemos considerado también la perspectiva del Análisis del Discurso Profesional, óptica analítica todavía muy incipiente en la Lingüística hispánica, pero con desarrollos y aplicaciones muy estimulantes y útiles en los estudios anglosajones actuales.

¹ Para todo este apartado, véanse las referencias bibliográficas que aparecen compiladas en el apartado final.

Finalmente, en la base teórica de este informe desempeñan también un papel importante los numerosos trabajos desarrollados bajo la línea del *Plain English Language y Clarity*, tanto las numerosas aplicaciones realizadas en el ámbito anglosajón, como las que actualmente se están iniciando en prácticamente todo el ámbito hispanohablante. En este sentido, el principio de *legibilidad* (es decir, de formulación lingüística que facilite el acceso razonablemente cómodo por parte del lector a la comprensión del texto) late en todas las apreciaciones que aparecen en este informe.

En esta línea, por último, hemos incluido también la perspectiva disciplinar de la Optimización del discurso, disciplina que propone que la lingüística debe no sólo describir las características de determinados documentos, sino también proponer patrones de mejora que los hagan más claros, más breves y más amables con el lector. La óptica de la optimización del discurso es la adoptada en las numerosas *versiones alternativas* que hemos propuestos de muchos de los ejemplos “patológicos”, presentadas con el objetivo de que los usuarios de este informe puedan comprobar que una variación en la formulación lingüística cambia drásticamente la posibilidad de comprender el sentido del párrafo o fragmento. Asimismo, esta misma perspectiva es la adoptada en la presentación de *buenas prácticas*, cuyo propósito es mostrar que algunos de los problemas comunicativos del ámbito jurídico ya han sido resueltos por algunos miembros de la comunidad discursiva que elabora los documentos jurídicos.

A pesar de que la base teórica de este informe es amplia, rigurosa e interdisciplinar, en la redacción de estas páginas hemos evitado en todo lo posible la utilización de terminología especializada que pudiera dificultar la lectura. Por ello, cuando ha sido preciso el uso de un término técnico, hemos optado por la versión más ampliamente difundida de éste. En general, se ha privilegiado una redacción de tipo divulgativo.

2. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO

El equipo de investigación que ha elaborado este informe está compuesto por siete investigadores, coordinados por la Dra. Estrella Montolío Durán, que pertenecen a la Sección de Lengua Española del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Barcelona. Todos ellos son lingüistas y, además, una de las investigadoras es, también, jurista. Todos son especialistas en gramática y discurso y tienen una profunda formación en gramática normativa, ya que ésta es una asignatura transversal, obligatoria en programas académicos correspondientes a grados de facultades distintas, y se trata de una materia que todos los miembros han impartido en algún curso académico.

Por otro lado, los investigadores tienen amplia experiencia en formación en técnicas de escritura experta para no lingüistas, por varias razones. En primer lugar, porque algunos de ellos imparten clases de comunicación escrita en facultades diferentes de Filología; en concreto, Derecho (Universidad de Barcelona), Formación de Profesores (UB), Comunicación Audiovisual (UB), Ingeniería Informática (Universitat Oberta de Catalunya UOC) y Escuela Superior de Ingeniería (Univertat Politècnica de Catalunya UPC). Además, la coordinadora del equipo y algunos de sus miembros han impartido e imparten cursos de escritura para profesionales, tanto en instituciones de la Administración (Ayuntamiento de Zaragoza, Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, Diputación de Barcelona, Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Junta de Extremadura, etc.), como en grandes empresas (Antares Consulting, Deutsche Bank, ENDESA, “la Caixa”, entre otros).

Igualmente, todos ellos tienen experiencia en la elaboración de materiales de formación en escritura, tanto en el ámbito del español como lengua materna (véase, por ejemplo, Montolío (coord.) 2000), como también del español como lengua extranjera (Gras, López Samaniego, Polanco, Yúfera et al. 2008). Asimismo, han publicado numerosos trabajos en publicaciones de ámbito nacional e internacional sobre aspectos relacionados con la elaboración de

textos académicos y profesionales, en especial, la coordinadora². Finalmente, tres de los investigadores han elaborado numerosos trabajos, publicados en órganos especializados de carácter internacional, específicamente sobre discurso jurídico (Taranilla 2006, 2007, 2009, en prensa; Montolío 2000, 2002, 2010b; Montolío y López Samaniego 2006, 2008; López Samaniego 2005, 2006a, 2006b, 2010, en prensa). En esta línea, destaca la ayuda que la coordinadora recibió de la Escuela de Administración Pública de Cataluña en el año 2000 para realizar una investigación sobre discurso jurídico. Igualmente, ha impartido numerosas conferencias y cursos de doctorado en universidades españolas y extranjeras sobre diferentes aspectos relacionados con la comunicación escrita en los ámbitos profesionales.

Por último, este equipo está realizando un proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre la recomendación experta en los documentos profesionales³, con la profesora Montolío como investigadora principal.

3. CUESTIONES METODOLÓGICAS

3.1. El corpus

El corpus de análisis, constituido por un amplio espectro de diferentes tipos de textos jurídicos, en el que la sentencia era el género más representado, fue elaborado y remitido a los investigadores por los responsables del Ministerio de Justicia. El corpus está compuesto por los tipos de documentos que constan en el documento *Términos de referencia*, enviado por el Ministerio a todos los equipos técnicos. De los documentos que componen este amplio corpus, hemos privilegiado el estudio de los siguientes géneros jurídicos:

- Sentencias
- Autos
- Informes y oficios
- Decretos de admisión de demanda
- Citaciones
- Actas, notas y certificaciones de registradores
- Actas, notas y certificaciones de notarios

Se ha seleccionado la sentencia como base del presente informe por una solicitud expresa del Ministerio de Justicia, y que se ve corroborada por argumentos de distinto tipo. En primer lugar, desde el punto de vista social, la sentencia es el documento más relevante del proceso judicial, dado que reviste una trascendencia innegable tanto para el ciudadano (sobre cuya vida y patrimonio resuelve) como para la propia jurisprudencia. En segundo lugar, desde la perspectiva textual, la sentencia es, sin duda, el género jurídico más ambicioso, complejo e interesante, ya que en su seno incluye gran variedad de tipos de discurso y numerosos fragmentos pertenecientes a otros géneros jurídicos (autos, demandas, leyes, etc.).

Por último, desde el punto de vista lingüístico, la sentencia es el más largo y complejo de los géneros del ámbito jurídico, por lo que las patologías de escritura aparecen en ella de modo más representativo. En efecto, en las sentencias emergen de manera recurrente todas las inexactitudes de expresión identificadas como características de los textos de este ámbito; pero, además, se dan en ella fenómenos textuales que le son privativos. Así, por ejemplo, a pesar de que otros textos jurídicos utilizan de modo característico fragmentos descriptivos, narrativos o argumentativos, solo en la sentencia cohabitan simultáneamente y se imbrican entre sí esos tres tipos de secuencias textuales.

² Véanse las publicaciones de Montolío seleccionadas en el repertorio bibliográfico final.

³ "Análisis lingüístico y pragmático de la recomendación experta en documentos de ámbitos profesionales" (Referencia: FFI2008-00823), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, así como por los fondos FEDER.

Por su parte, a diferencia de la sentencia, otros documentos jurídicos, como citas y informes dirigidos a los ciudadanos, ilustran fenómenos comunicativos que no aparecen en aquella, por ejemplo:

- Formas apelativas dirigidas al lector -el ciudadano-, como pronombres personales átonos (“*le* hago saber”, “*le* informa lo siguiente”, “en primer lugar, señalar/*le*”) o formas de posesivo (“en contestación a *su* escrito, he de significar”).
- Estrategias de cortesía lingüística, dirigidas con frecuencia a justificar la lentitud de la justicia, que es una de las quejas que aparece con más frecuencia en los textos analizados. En ocasiones, tales estrategias están también dirigidas a justificar la toma de determinadas decisiones.

Con todo, como se indicó más arriba, la mayor parte de las patologías que presentan los textos jurídicos aparecen también en la sentencia. Si bien este informe se centra en el género textual de la sentencia, puede considerarse representativo de, en general, los problemas comunicativos del lenguaje jurídico escrito español.

3.2. Fases del análisis

El análisis ha constado de las siguientes **cinco** fases:

(A) **Análisis exploratorio.** En primer lugar, realizamos un vaciado de los fenómenos patológicos del lenguaje jurídico identificados en la bibliografía hispánica e internacional. A continuación, todos los miembros del equipo analizaron las mismas sentencias de control (5 sentencias), a fin de comprobar si los problemas identificados por la bibliografía se correspondían con los observados por los investigadores. Del cotejo de este análisis, concluimos que existían ciertos problemas lingüísticos, no abordados por los trabajos especializados, que, sin embargo, resultan críticos para la inteligibilidad del texto; al tiempo que advertimos que otros fenómenos habían sido sobredimensionados por la bibliografía especializada (fundamentalmente, los relacionados con la normativa académica).

(B) **Elaboración de las herramientas de análisis.** A partir de la puesta en común del análisis de las sentencias de control, se elaboró una plantilla de análisis⁴ que incluía los fenómenos detectados en la fase anterior, y los organizaba y agrupaba en función del nivel lingüístico en el que se producen (problemas sintácticos, problemas textuales, etc.), así como de la dificultad que acarrea para la comprensión.

A esta plantilla, se añadió el diseño de una ficha de análisis de ejemplos⁵, con el propósito de sistematizar la ubicación y la descripción de cada uno de los casos analizados por cada uno de los investigadores.

(C) **Validación de las herramientas de análisis.** Una vez elaborada la ficha de análisis, sometimos a prueba la validez de las categorías manejadas, así como la utilidad de la ficha de análisis, mediante la lectura y el examen de dieciséis sentencias de control.

(D) **Análisis de sentencias.** En primer lugar, cada investigador analizó 10 nuevas sentencias (un total de 70 que hay que sumar a las 21 precedentes) empleando las herramientas de análisis. Para la selección de estas 70 sentencias se ha intentado combinar criterios de representación geográfica, de órganos judiciales y de órganos jurisdiccionales. A continuación, se repartieron los fenómenos por investigadores, de modo que cada investigador se encargó de sistematizar los aspectos más relevantes de cada patología asignada, empleando para ello tanto sus propios ejemplos como los ejemplos recabados por el resto de los investigadores.

⁴ Véase anexo (1).

⁵ Véase anexo (2).

(E) **Redacción del informe y revisión.** La redacción del informe se lleva a cabo tras la puesta en común y revisión de los distintos fenómenos analizados.

4. CONTENIDO DEL INFORME

De acuerdo con el diagnóstico solicitado, el informe muestra cuáles son los principales problemas en la redacción de los documentos jurídicos españoles y, en concreto, en las sentencias. Sin embargo, no se limita a presentar las principales patologías lingüísticas y textuales de estos géneros jurídicos, ya que el informe contiene también en cada uno de los diez capítulos que lo conforman:

-**Versiones alternativas** de muchos de los fragmentos utilizados como ejemplo de algún tipo de patología. Tales versiones alternativas se reconocen por contener la marca *bis* tras la numeración correspondiente. El objetivo de incluir estas versiones es mostrar al lector que, cuando se conocen y ejercitan los recursos expresivos, es posible simplificar la expresión, hacerla más perspicua (menos ambigua), y más cómoda para la comprensión, sin por ello perder el rigor expositivo o la densidad de los datos expuestos.

-**Ejemplos de buenas prácticas**, que recogen casos de usos adecuados de un determinado mecanismo de escritura que han puesto en marcha algunos jueces y que merecería la pena que la comunidad de redactores juristas, en general, conociera.

-**Algunas recomendaciones**, sugeridas para conseguir la mejora de la calidad de la comunicación escrita en el ámbito jurídico español. En este sentido, cabe precisar, sin embargo, que, según corresponde a un documento de diagnóstico, el contenido descriptivo del informe prima, con mucho, sobre el prescriptivo o directivo.

El informe está compuesto por **once** capítulos; cada uno de ellos aborda la descripción exhaustiva de uno de los mecanismos que caracterizan el discurso jurídico y que más dificultad conllevan para la inteligibilidad de los documentos. La presentación de los diferentes capítulos (y los correspondientes fenómenos lingüísticos abordados) se organiza en torno a dos grandes ejes: la primera parte del informe -capítulos de 1 a 5- aborda el tratamiento de fenómenos de carácter textual. La segunda parte trata las patologías correspondientes al nivel oracional (capítulos de 6 a 10). Finalmente, en el capítulo 11, aparecen sintetizadas recomendaciones de dos tipos, generales y en relación al contenido de cada capítulo, dirigidas a los redactores de documentos jurídicos. En la última parte, se incluyen también unas breves recomendaciones sugeridas al Ministerio de Justicia.

LAS UNIDADES TEXTUALES. EL PÁRRAFO

1. INTRODUCCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN TEXTUAL: EL PÁRRAFO

El párrafo constituye una de las unidades básicas de estructuración textual e informativa, después de la oración. Con el párrafo se segmenta y delimita la información contenida en un texto en parcelas más pequeñas, más manejables, que facilitan tanto la legibilidad como la comprensión. Con la segmentación de un texto en párrafos, se facilita, de entrada, su legibilidad. Un texto mal segmentado es un texto que se lee con dificultad. Por otra parte, una mala distribución de la información conduce generalmente a una comprensión defectuosa del texto. De ahí, pues, la necesidad de distribuir la información en párrafos.

Ahora bien, el párrafo no es solo un trozo de texto, un bloque que agrupa un conjunto de oraciones separado de otros bloques por un punto y aparte y por espacios en blanco. Su función principal no debería ser solo la de dar la impresión de que el texto es una estructura ordenada que se divide en partes más pequeñas para facilitar la lectura. El párrafo tiene que ser, también, una unidad de información que guarde coherencia con el resto del texto, es decir, que no trate de algún aspecto ajeno al tema general del que se está tratando. Y, sobre todo, debe constituir una unidad de sentido en sí mismo, esto es, tiene que desarrollar un mismo tópico, una misma idea.

En el caso concreto de las sentencias analizadas, la mayor parte de las patologías relacionadas con la construcción parafrástica tiene que ver con una delimitación o segmentación defectuosa de la información que, a menudo, dificulta enormemente tanto la legibilidad como la comprensión de lo que se intenta transmitir. Como han señalado diversos especialistas⁶, el discurso judicial se caracteriza por un uso intrincado, complejo e inadecuado de la sintaxis. Este uso se traduce, por lo general, en una complicación y prolongación excesiva de los períodos sintácticos, cuyo resultado suele ser un discurso ininteligible y, a menudo, antinormativo. Los problemas de segmentación parafrástica que se producen con mayor frecuencia en las sentencias están estrechamente relacionados con el abuso o el uso incorrecto de estructuras

⁶ Véanse, entre otros, Rodríguez Aguilera (1974), Prieto de Pedro (1991), De Miguel (2000), Alcaraz y Hughes (2002), Bayo Delgado (2002), Campos (2007), Cazorla Prieto (2007), y Montolio y López Samaniego (2008).

complejas. Estos problemas responden, por lo general, a los siguientes tipos de patología parafrástica:

- La elaboración de párrafos en los que se va acumulando la información mediante la concatenación de oraciones complejas e incisos que alargan la extensión del párrafo, muchas veces de manera innecesaria. La acumulación de información provoca la aparición de otras patologías discursivas, ralentiza enormemente la lectura y dificulta o impide una interpretación adecuada de la información transmitida. Por lo general, como se verá en 1.1.2, estos párrafos desarrollan más de una idea y podrían segmentarse en más de una unidad informativa.
- La elaboración de párrafos complejos informativamente mediante una sola oración, con subordinación e incisos que obligan, generalmente, a una relectura.
- La aparición de párrafos muy segmentados, constituidos normalmente por una oración corta (1 ó 2 líneas), que quedan desgajados del resto del texto.
- El cambio de párrafo que no se justifica desde el punto de vista temático.

Asimismo, también se han detectado algunos casos en los que la dificultad interpretativa no viene dada directamente por la construcción del párrafo, sino por la ausencia de mecanismos para relacionar los párrafos entre sí o por el uso inadecuado de estas marcas de conexión interparafrástica.

En los siguientes subapartados se tratarán con detalle las principales patologías relacionadas con la construcción del párrafo. En cada apartado se describirá el fenómeno y se ejemplificará con casos concretos extraídos de las sentencias analizadas. En algunos casos, se aportará, junto con el ejemplo que muestra la patología, una versión alternativa en la que se ofrece una solución al problema que se esté comentando; y, cuando sea posible, ejemplos de buena práctica discursiva extraídos del corpus de sentencias que hemos manejado.

1.1. Principales problemas relacionados con la construcción parafrástica

14

1.1.1. Párrafos unioracionales

Como hemos apuntado arriba, un párrafo es un bloque de información que constituye una unidad de sentido coherente con el resto del texto. En este sentido, el párrafo debe desarrollar una idea y las oraciones que conforman el párrafo tienen que estar relacionadas temáticamente. Sin embargo, en muchos casos el problema en la construcción del párrafo no viene provocado por que la información que lo conforma no sea coherente o no constituya una unidad de sentido, es decir, no se deriva de una mala segmentación de la información en relación con el resto del texto. El problema reside, más bien, en la ausencia de segmentación interna del párrafo, uno de cuyos ejemplos más llamativos es el de los llamados *párrafos unioracionales*, esto es, párrafos contruidos con una sola oración. Estos párrafos suelen condensar mucha información en una sola oración con múltiples subordinas que provocan, entre otros problemas derivados del alargamiento sintáctico, rupturas del período oracional que entorpecen la legibilidad y la interpretación (De Miguel 2000).

En el siguiente ejemplo (1) se muestra un párrafo unioracional que, a simple vista, no resulta excesivamente largo. Pese a ello, el párrafo está contruido a partir de una sola oración compleja compuesta por varias cláusulas subordinadas, cuya extensión (7 líneas) obliga a una segunda lectura. La acumulación sintáctica provoca, además, otro tipo de problemas que dificultan la interpretación. Entre estos destacan el orden de los elementos de la cláusula de relativo (que hemos subrayado en el ejemplo) y la pérdida del referente del pronombre relativo **que** y del participio **incurso**, ambos en negrita en el ejemplo⁷. En el caso del relativo, hay cier-

⁷ También aparecen otros problemas de tipo sintáctico relacionados con los nexos subordinantes *sin que* y *lo que*, que no trataremos en este apartado. Para mayor detalle sobre el uso (in)adecuado de estos elementos nexivos, véase el apartado dedicado a la sintaxis oracional (§7.4.1.1.).

ta dificultad para recuperar el referente: entre este (“la conducta del denunciado”) y el relativo median tres líneas y un inciso que contiene también un elemento que podría funcionar como posible referente (“motivación”); el resultado es la dificultad para recuperar el referente de forma inmediata y la necesidad de releer para asegurar la correcta asignación referencial. En el caso del participio, se produce una ambigüedad referencial: el referente puede ser tanto el denunciado al que se alude al principio del párrafo, como el sintagma “elemento subjetivo” precedente a “incurso”.

(1)

Y resulta de todo punto indudable que la conducta del denunciado, independientemente de su motivación, estaba guiada por una conciencia clara de su actuación y voluntad decidida en la consecución de su finalidad de maltratar cruelmente al animal domestico sin posibilidad de defensa, que dota junto a la incontrovertida ejecución objetiva del tipo, de un elemento subjetivo que lo completa, lo que no es jurídicamente permisible, sin que en absoluto puede considerarse **incurso** en causa de exención de responsabilidad criminal a la vista del informe forense del mismo día del acto de juicio oral.

[SJI 3/2009, Granada, Fundamentos, segundo]

Como tratamos de mostrar en la versión alternativa del ejemplo anterior (1bis), los problemas de legibilidad y de interpretación que acabamos de comentar podrían solucionarse con dos operaciones muy sencillas. Por una parte, para facilitar la lectura, sería conveniente fraccionar la información del párrafo anterior en dos unidades de información independientes, esto es, en dos oraciones más simples separadas por un punto y seguido, así como reordenar los elementos de la cláusula de relativo. De este modo, se facilitaría la lectura del párrafo y la retención de la información. Por otra parte, para evitar los problemas de asignación referencial, bastaría con explicitar el referente del relativo y del participio:

(1bis)

Y resulta de todo punto indudable que la conducta del denunciado, independientemente de su motivación, estaba guiada por una conciencia clara de su actuación y voluntad decidida en la consecución de su finalidad de maltratar cruelmente al animal domestico sin posibilidad de defensa. **Esta conciencia clara** de la actuación del denunciado, junto a la incontrovertida ejecución objetiva del tipo, dota a su actuación de un elemento subjetivo que la completa, lo que no es jurídicamente permisible, sin que en absoluto pueda considerarse **al denunciado** incurso en causa de exención de responsabilidad criminal a la vista del informe forense del mismo día del acto de juicio oral.

En el ejemplo (1), pese a los problemas aludidos, el párrafo no es completamente ilegible y puede interpretarse sin demasiada dificultad después de una relectura que permita recuperar los referentes de los elementos ambiguos que hemos comentado. Con todo, siempre es mejor distribuir la información en pequeños trozos (cada oración debería condensar una idea), mediante oraciones sin incisos que perturben la comprensión y provoquen rupturas del período oracional⁸.

Ahora bien, en algunos casos, como el que mostramos a continuación (2), el párrafo-oración puede tener una extensión que haga prácticamente imposible la legibilidad y, en consecuencia, la interpretación:

(2)

No obstante lo anterior, las circunstancias fácticas que subyacen en el presente recurso, que han de considerarse incólumes en casación, junto al principio de equivalencia de resultados (también denominada del fallo justificado o resultado útil, citado, por todas, en *Sentencia de 5 de marzo de 2009*) impiden estimar, como ya se ha dicho, el presente motivo, en la medida en que, aun siendo verdad que la Audiencia se apartó de la doctrina fijada por esta Sala, el acogimiento del mismo y la subsiguiente decisión de la controversia con arreglo al criterio sentado por la doctrina afirmada no se traduce en una modificación del fallo de segunda instancia, habida cuenta que según se desprende de la documentación obrante (en concreto, del Informe Médico Forense emitido en juicio de faltas 321/97 -documento 2 de la contestación a la demanda del Consorcio- y del informe emitido por la Mutua patronal FREMAP -documento 3-) es incuestionable que el alta tuvo lugar en el mes de diciembre de 1997 (pues señalada en el informe de FREMAP, tomado en consideración por el Médico Forense, la fecha de 21 de diciembre, y aún cuando los 189 días de baja, a razón de 87 días impeditivos no hospitalarios y 102 que precisaron hospitalización,

⁸ Sobre la extensión de la oración no hay una norma establecida, pero los tratados estilísticos recomiendan que no exceda de las tres líneas, aproximadamente.

contados a partir del día del siniestro, situarían el alta 9 días antes, la propia parte recurrente admite como cierto el día 23 del citado mes), y por tanto dentro del mismo año en que se produjo el siniestro que da origen del daño indemnizable (6 de junio de 1997), de manera que la actualización vigente a fecha del alta era la misma que ya se tomó en consideración en ambas instancias, y que estuvo vigente para todo el año 1997 (en concreto, la publicada por Resolución de la Dirección General de Seguros de fecha 13 de marzo de 1997, BOE de 25 de marzo, que contemplaba la indemnización de 7.224 pesetas por día de hospitalización y 3.096 pesetas por día de baja no hospitalario), con la consecuencia de que deban entenderse correctamente cuantificadas las cantidades por los diferentes conceptos indemnizatorios concretados en la sentencia de 1ª Instancia (incólumes también en casación), luego confirmada por la recurrida.

[STS 2385/2009, Madrid, Fundamentos, segundo]

El párrafo-oración del ejemplo anterior es una secuencia argumentativa en la que el magistrado trata de demostrar la improcedencia de la petición de la parte acusatoria. La oración tiene una extensión de 24 líneas en las que se van sucediendo informaciones de distinto nivel interpretativo, generalmente mediante incisos de hasta cuatro líneas que se incrustan en la argumentación. Estos incisos tan largos favorecen la dispersión y obligan a volver atrás en la lectura para recuperar el hilo de la argumentación. El resultado es un párrafo muy costoso de leer y prácticamente ininteligible.

El siguiente ejemplo (3) muestra un caso similar al anterior. Se trata de un párrafo unioracional compuesto por oraciones complejas yuxtapuestas que se extiende a lo largo de 21 líneas. Pese a que este párrafo presenta una puntuación más marcada que el anterior, ya que las oraciones se separan por punto y coma, el resultado es el mismo: un párrafo ilegible.

(3)

El semáforo o señal de salida S2/4 es perfectamente visible desde el Gabinete de Circulación de la estación de Chinchilla, como se ha podido comprobar "de visu" por el tribunal, tanto en las fotografías que se han ido exhibiendo en las sesiones del juicio oral por el Ministerio Fiscal, como en la percepción directa del tribunal recibida en el día de la inspección ocular practicada -a presencia de las partes-, en la mañana del día 25 de abril de 2006; una mínima actuación diligente del factor evidencia que, antes de cruzar las vías, tiene que mirar a la señal S2/4, pues lo tiene en el lado de enfrente al Gabinete, por delante del inicio del andén de la vía 4, y la cabeza del talgo no impide su visión en absoluto, pues en el caso de autos, es un hecho admitido que el talgo al detenerse no había rebasado el inicio de dicho andén; además, momentos antes de salir hacia la cabeza del talgo, cuando se paró el mismo, tuvo que comprobar visualmente el semáforo, para percibir que estaba en rojo, pues de otro modo el talgo no hubiera parado (para parar el talgo era suficiente con la señal S2/4 en rojo (*artículo 217 RGCTrenes [Reglamento General de Circulación para tráfico ferroviario]*: parada), y la señal previa -de avanzada-, en intermitente (*artículo 214 RGCTrenes: anuncio de parada inmediata*), de modo que, en principio, no se precisa del banderín extendido para parar al talgo (en similar sentido, declaraciones del testigo Gaspar -factor de circulación de Navajuelos, el día de autos-, que a preguntas del Letrado Sr. Santos, vino a contestar que para parar el tren no es necesario el banderín, pues al estar la señal de salida en rojo (el semáforo), con eso es suficiente -vid acta de juicio oral del 20 de abril de 2006-); en cambio, el acusado, a preguntas del fiscal (sesión de 4 de abril de 2006), declaró que al talgo 226 le presentó el banderín desenrollado -para que parará-, cuando hemos visto que tal actuación no es imprescindible cuando el semáforo está en rojo, como también afirmó el acusado que estaba cuando paró el talgo 226. Mas abajo trataremos sobre la utilidad de esa versión del acusado [en concreto en el apartado 12º]).

[SJP 19/2006, Albacete, Fundamentos, primero]

Como veremos en el apartado siguiente, cuando tratemos los párrafos excesivamente largos -de los que el ejemplo que estamos comentando es una variante-, el problema principal de (3) es la acumulación de información en un solo párrafo. Como hemos comentado antes, esta acumulación no provoca solo una dispersión de la información, sino que genera otro tipo de problemas discursivos que dificultan y, en ocasiones, impiden la comprensión (por ejemplo, errores de coherencia por pérdida de referentes y anacolutos, entre otros). Pese a que todo lo que se dice en un párrafo como el del ejemplo (3) puede girar en torno a un mismo tópico discursivo, probablemente haya más de una idea que podría presentarse en unidades textuales independientes, en párrafos separados. Como muestra la versión alternativa de (3bis)⁹, además de una mejor distribución y señalización de la información (que hemos marcado en negrita en la versión alternativa), sería conveniente separar cada oración por punto y seguido,

⁹ El párrafo que comentamos contiene otras patologías que no vamos a tratar aquí, entre ellas, problemas para recuperar el agente del verbo "comprobar" y un uso incorrecto de "el mismo" como elemento anafórico.

en lugar de punto y coma, a fin de facilitar la localización de las unidades sintácticas internas: el punto y seguido obliga a empezar la oración siguiente con mayúscula, lo cual constituye, sin duda, una señal gráfica que facilita la legibilidad.

(3bis)

1º) El semáforo o señal de salida S2/4 es perfectamente visible desde el Gabinete de Circulación de la estación de Chinchilla, como se ha podido comprobar “de visu” por el tribunal, tanto en las fotografías que se han ido exhibiendo en las sesiones del juicio oral por el Ministerio Fiscal, como en la percepción directa del tribunal recibida en el día de la inspección ocular practicada **en** presencia de las partes en la mañana del día 25 de abril de 2006. Una mínima actuación diligente del factor evidencia que, antes de cruzar las vías, tiene que mirar a la señal S2/4, pues lo tiene en el lado de enfrente al Gabinete por delante del inicio del andén de la vía 4.

En el caso de autos, es un hecho admitido que el talgo no había rebasado el inicio de dicho andén al detenerse, **de manera que** la cabeza del tren no impedía en absoluto **la visión de la señal**. Además, momentos antes de salir hacia la cabeza del talgo, cuando se paró el mismo, tuvo que comprobar visualmente el semáforo para percibir que estaba en rojo, pues de otro modo el talgo no hubiera parado (para parar el talgo era suficiente con la señal S2/4 en rojo, **según establece el artículo 217 RGCTrenes del Reglamento General de Circulación para tráfico ferroviario sobre la maniobra de parada**). **Asimismo, tuvo que comprobar también** la señal previa de avanzada, en intermitente (**según establece el artículo 214 RGCTrenes** sobre el anuncio de parada inmediata), **que indicaba que**, en principio, **no era preciso** el banderín extendido para parar al talgo.

En el mismo sentido de lo que se acaba de exponer apuntan las declaraciones del testigo Gaspar -factor de circulación de Navajuelos, el día de autos-, **quien** a preguntas del Letrado Sr. Santos, vino a contestar que para parar el tren no es necesario el banderín, pues al estar la señal de salida en rojo (el semáforo), con eso es suficiente -vid acta de juicio oral del 20 de abril de 2006). En cambio, el acusado, a preguntas del fiscal (sesión de 4 de abril de 2006), declaró que al talgo 226 le presentó el banderín desenrollado -para que parará-, cuando hemos visto que tal actuación no es imprescindible cuando el semáforo está en rojo, como también afirmó el acusado que estaba cuando paró el talgo 226. Mas abajo trataremos sobre la utilidad de esa versión del acusado [en concreto en el apartado 12º].

También pueden encontrarse ejemplos del problema discursivo que estamos comentando en las siguientes sentencias: *WLES 06/11/2010, Madrid, Antecedentes, 3º*; *WLES 06/11/2010, Madrid, Antecedentes, 4º*; *SJPI 5/2010, Fundamentos, 1º*.

1.1.2. Párrafos excesivamente largos

Una de las características más notables del discurso jurídico escrito es, precisamente, la tendencia a acumular mucha información en un solo párrafo, de modo que este acaba por alcanzar una extensión considerable en comparación con los textos de carácter general (Alcaraz y Hughes 2002, Samaniego 2005). Esta extensión desmesurada de los párrafos suele justificarse por la extremada complejidad conceptual de los hechos que se tratan en los textos jurídicos.

El ejemplo siguiente (4) muestra perfectamente lo que acabamos de comentar. En (4) se desarrolla una secuencia argumentativa en la que se exponen los criterios que el magistrado considera que son oportunos tomar en cuenta para la valoración del caso que está tratando. El proceso argumentativo se complica con la inserción de secuencias expositivo-descriptivas en las que el magistrado alude a reglamentos y artículos que apoyan su argumentación. Estas secuencias se intercalan en el proceso argumentativo y hacen prácticamente imposible seguir el hilo de la argumentación. El resultado, en definitiva, es un párrafo muy largo e intrincado, compuesto por cinco oraciones en las que se acumulan informaciones de distinto nivel interpretativo que dificultan enormemente la interpretación de la conclusión a la que trata de conducir el juez. En el ejemplo, cada oración está delimitada por paréntesis cuadrados:

(4)

[El recargo de prestaciones de la Seguridad Social impuesto en el *artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por RDLeg 1/1994, de 20 de junio*, cuando deriva de omisión de medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo causantes del accidente, exige, según reiterada jurisprudencia, la existencia de nexo causal adecuado entre el siniestro del que trae causa el resultado lesivo para la vida o integridad física de los trabajadores y la conducta pasiva del empleador, consistente

en omitir aquellas medidas de seguridad impuestas por normas reglamentarias respecto a máquinas, instrumentos o lugares de trabajo, excluyéndose la responsabilidad empresarial cuando la producción del evento acontece de manera fortuita, de forma imprevista o imprevisible, sin constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención, o por imprudencia (que ha de ser temeraria) del propio trabajador accidentado] **primera oración**. [Dado su carácter punitivo y sancionador ha de aplicarse con criterio restrictivo y en particularizado examen del conjunto de circunstancias concurrentes en cada caso concreto] **segunda oración**. [La omisión puede afectar a las medidas generales o particulares de seguridad exigibles en la actividad laboral, por ser las adecuadas, atendidas las circunstancias concurrentes y la diligencia exigible a un prudente empleador con criterios ordinarios de normalidad para prevenir o evitar una situación de riesgo en la vida o salud de los trabajadores, criterio éste que no es otra cosa que reflejo y operatividad, en el ámbito de las relaciones de Seguridad Social, del derecho básico en el contenido de la relación laboral, recogido en los *artículos 4.2 y 19 del Estatuto de los Trabajadores*, y que con carácter general y como positivación del principio de derecho “alterum non laedere”, elevado a rango *constitucional por el artículo 15* del texto fundamental y que en términos de gran amplitud, tanto para el ámbito de las relaciones contractuales como extracontractuales, consagra el *Código Civil en sus artículos 1104 y 1902*, debiendo entenderse que el nivel de vigilancia que impone a los empleadores desde diferentes perspectivas el *capítulo III de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (antes lo hacía el artículo 7 de la Ordenanza de 9-3-1971)*, ha de valorarse con criterios de razonabilidad, según máximas de diligencia ordinaria, exigibles a un empresario normal cooperador a los fines de la convivencia industrial, que son criterios coincidentes con los recogidos en el *artículo 16 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo de 22 de junio de 1981* y ratificado por España en 26 de julio de 1985, en cuanto impone a los empleadores, en la medida que sea razonable y factible, garantizar que los lugares de trabajo, operaciones y procesos, sean seguros y no entrañen riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores] **tercera oración**. [El llamado “deber de seguridad” o “deuda de Seguridad” de la empresa con sus trabajadores se configura claramente en nuestro ordenamiento jurídico] **cuarta oración**. [El *artículo 4.2, d) del Estatuto de los Trabajadores* establece que “en la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho... a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene”, derecho que ratifica el *artículo 19.1 de la misma Ley* diciendo: “El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene”] **quinta oración**.

En el ejemplo anterior, el párrafo trata sobre un mismo tópico discursivo: cómo valorar si el empleador ha respetado o no las medidas de seguridad e higiene exigidas por la ley. Sin embargo, pese a que la argumentación gira en torno al mismo tópico, en realidad hay tres subtópicos, tres ideas que podrían desarrollarse en párrafos separados, tal como mostramos en el ejemplo (4bis), en el que proponemos una versión alternativa al ejemplo anterior. De este modo, distribuyendo la información en unidades más pequeñas, se facilita tanto la labor discursiva del que escribe como la tarea interpretativa de quien lee. Por un lado, el escritor puede estructurar la argumentación de forma escalonada y más eficaz a su propósito comunicativo, al tiempo que evita la acumulación de frases complejas y de incisos que suelen provocar anacolutos y problemas de referencialidad que distorsionan la interpretación (además de posibles errores en la puntuación¹⁰). Por otra parte, se facilita al lector el trabajo de lectura y comprensión.

(4bis)

[PRIMER PÁRRAFO. TÓPICO DISCURSIVO: EL RECARGO DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA OMISIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO]

[Según el *artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por RDLeg 1/1994 de 20 de junio)*, si el accidente deriva de la omisión de medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo, el recargo de prestaciones de la Seguridad Social exige, según reiterada jurisprudencia, la existencia de nexo causal adecuado entre el siniestro **que causa** el resultado lesivo para la vida o integridad física de los trabajadores y la conducta pasiva del empleador. Esta conducta consiste en omitir aquellas medidas de seguridad impuestas por normas reglamentarias respecto a máquinas, instrumentos o lugares de trabajo, excluyéndose la responsabilidad empresarial cuando la producción del evento acontece de manera fortuita, de forma imprevista o imprevisible, sin constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención, o por imprudencia temeraria del propio trabajador accidentado] **primera oración**. [Dado el carácter punitivo y sancionador **del recargo de prestaciones, este** ha de aplicarse con criterio restrictivo y en particularizado examen del conjunto de circunstancias concurrentes en cada caso concreto] **segunda oración**.

[SEGUNDO PÁRRAFO. TÓPICO: LA OMISIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y CRITERIOS PARA SU VALORACIÓN]

[La omisión **de medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo** puede afectar a las medidas generales

¹⁰ Sobre los problemas relacionados con la puntuación, véase el capítulo 7.

o particulares de seguridad exigibles en la actividad laboral, por ser las adecuadas, atendidas las circunstancias concurrentes y la diligencia exigible a un prudente empleador con criterios ordinarios de normalidad para prevenir o evitar una situación de riesgo en la vida o salud de los trabajadores. **Este** criterio **ordinario** no es otra cosa que reflejo y operatividad, en el ámbito de las relaciones de Seguridad Social, del derecho básico en el contenido de la relación laboral recogido en los *artículos 4.2 y 19 del Estatuto de los Trabajadores*. Este derecho básico, con carácter general y como positivación del principio de derecho "alterum non laedere", ha sido elevado a rango constitucional por el *artículo 15* del texto fundamental; asimismo, en términos de gran amplitud, tanto para el ámbito de las relaciones contractuales como extracontractuales, ha sido consagrado por el *Código Civil en sus artículos 1104 y 1902*.

[TERCER PÁRRAFO. TÓPICO: LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD EN LA VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL EMPLEADOR]

Según este criterio ordinario de normalidad, debe entenderse que el nivel de vigilancia que impone a los empleadores desde diferentes perspectivas el *capítulo III de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (antes lo hacía el artículo 7 de la Ordenanza de 9-3-1971)*, ha de valorarse con criterios de razonabilidad, según **las** máximas de diligencia ordinaria exigibles a un empresario normal **que contribuye** a los fines de la convivencia industrial. Estos criterios de razonabilidad son criterios coincidentes con los recogidos en el *artículo 16 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo de 22 de junio de 1981*, ratificado por España en 26 de julio de 1985, en cuanto que imponen a los empleadores, en la medida en que sea razonable y factible, garantizar que los lugares de trabajo, **las** operaciones y **los** procesos sean seguros y no entrañen riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores] **tercera oración**. [El llamado "deber de seguridad" o "deuda de Seguridad" de la empresa con sus trabajadores se configura claramente en nuestro ordenamiento jurídico] **cuarta oración**. [El *artículo 4.2, d) del Estatuto de los Trabajadores* establece que "en la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho... a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene", derecho que ratifica el *artículo 19.1 de la misma Ley* diciendo: "El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene"] **quinta oración**.

También hemos advertido como una práctica relativamente habitual en las sentencias analizadas la redacción en un solo párrafo de un fundamento o antecedente de hecho en el que abundan las secuencias de tipo narrativo-descriptivo. Tal como puede verse en el ejemplo (5), este tipo de secuencias se caracteriza por la sucesión de datos que alargan la extensión del párrafo hasta hacerlo poco manejable desde el punto de vista cognitivo.

(5)

TERCERO.- El *artículo 106* de la Constitución establece la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública cuando a consecuencia de su funcionamiento normal o anormal se causen perjuicios a los ciudadanos, artículo que es desarrollado en virtud de la habilitación otorgada por el *artículo 149.1.18* de la propia Constitución, por los *artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992*. De la regulación positiva de la responsabilidad patrimonial de la Administración así como de la jurisprudencia de aplicación a la responsabilidad en el ámbito sanitario nos encontramos con que siguiendo lo que el TS viene sosteniendo (así St. Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, S de 6 Feb. 2007) "cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, la jurisprudencia viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la "Lex Artis" como modo de determinar cual es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. Así, la *sentencia de 14 de octubre de 2002, por referencia a la de 22 de diciembre de 2001*, señala que "en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las secuelas padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente resuelta la incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en el citado *artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, redactado por Ley 4/1999, de 13 de enero*, que no vino sino a consagrar legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado en este precepto." En congruencia con dicha línea jurisprudencial debe tenerse en cuenta que la obligación que se asume en el ámbito sanitario no es una obligación de resultado sino una obligación de medios, de modo que no cabe exigir un resultado determinado sino el suministro de los cuidados y atenciones que requiera de acuerdo a la situación de la ciencia médica en cada momento, adecuando la actuación médica a las reglas de la *lex artis ad hoc*, entendida ésta como criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina que toma en cuenta las particulares circunstancias del caso concreto para poder calificar el acto conforme o no con la técnica normal requerida. Pues bien, en el caso que nos ocupa lo relevante será determinar si puede constatarse del expte. admto. la existencia de infracción de dicha *lex artis* en la atención médica y para ello lógicamente debe acudirse a los informes médico periciales que consten en el procedimiento pues es claro que se hacen precisos conocimientos

técnicos y prácticos en la materia. Pues bien, sobre dicho particular nos encontramos con que en ninguno de los informes obrantes se nos indica que la técnica utilizada fuera incorrecta o que se hubiera seguido una actuación no acomodada a la *lex artis ad hoc* pues en el informe técnico de evaluación elaborado por el médico inspector nada se apunta sobre dicho particular como tampoco en el informe elaborado por los facultativos del servicio de anestesiología (si bien en este caso podría albergarse lógicas reticencias en relación a su contenido al ser el propio servicio en el que supuestamente se causase el daño reclamado) y tampoco se encuentra base para entender se haya producido infracción de *lex artis* en el informe del especialista en anestesiología y reanimación elaborado por la Dra. Alsina pues aun cuando si recoge que pudiera efectivamente haberse afectado el nervio radial también recoge expresamente que la actitud del anestesiólogo fue la correcta, que colocó la vía venosa para la realización del procedimiento y que se habían seguido los protocolos de punción venosa siendo la posible neuropraxia del nervio radial tras acceso intravenosos descrito en la literatura en forma de casos aislados y estimando dicho perito que se trataría de una lesión inevitable. No existe base por tanto para entender que haya existido infracción de la *lex artis* por el médico anestesista sin que ello lo desvirtúe el informe médico aportado por el actor pues al margen de corresponder a facultativo no especialista en anestesiología se ha centrado su informe en valorar el estado lesionado del demandante y no en analizar la corrección o no de la actuación médica seguida. Añadir por último que tampoco se estima conduzca al acogimiento de la pretensión actora la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado que resulta de aplicación a aquellos casos en que se origina un resultado especialmente grave y desproporcionado en relación con los riesgos que comporta la intervención de los padecimientos que se trata de atender pues, al margen de que pudiera valorarse que el resultado producido alcanzara o no esa “especial gravedad” lo cierto es que esa doctrina únicamente produce la existencia de una presunción de defectuosa prestación de servicio y no la existencia de una automática responsabilidad, presunción esta que en este caso que quedaría desvirtuada por lo recogido en los informes periciales antes citados en los que se estima que no se ha producido infracción de *lex artis* y que por ende no puede entenderse haya existido defectuosa prestación de servicio.

[SJCA 2231/2007, Fundamentos, tercero]

Pese a que párrafos como el anterior suelen tener una unidad temática o informativa, desarrollan por lo general más de una idea. En estos casos, para evitar la pesantez discursiva y la acumulación de información en un solo bloque, es recomendable que cada idea constituya una unidad temática independiente y se desarrolle, por tanto, en un párrafo distinto. En este sentido, en el ejemplo (5) pueden establecerse, como mínimo, cuatro cambios de párrafo temáticamente justificados. Como muestra la versión alternativa de (5bis), con esta segmentación de la información en unidades más pequeñas se gana en claridad expositiva, se facilita la lectura y se asegura la comprensión¹¹.

(5bis)

TERCERO.- El artículo 106 de la Constitución establece la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública cuando a consecuencia de su funcionamiento normal o anormal se causen perjuicios a los ciudadanos, artículo que es desarrollado en virtud de la habilitación otorgada por el artículo 149.1.18 de la propia Constitución, por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992. De la regulación positiva de la responsabilidad patrimonial de la Administración así como de la jurisprudencia de aplicación a la responsabilidad en el ámbito sanitario nos encontramos con que siguiendo lo que el TS viene sosteniendo (así St. Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, S de 6 Feb. 2007) “cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, la jurisprudencia viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva mas allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la “Lex Artis” como modo de determinar cual es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. Así, la sentencia de 14 de octubre de 2002, por referencia a la de 22 de diciembre de 2001, señala que “en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las secuelas padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente resuelta la incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en el citado artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, redactado por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no vino sino a consagrar legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado en este precepto.”

En congruencia con dicha línea jurisprudencial debe tenerse en cuenta que la obligación que se asume en el ámbito sanitario no es una obligación de resultado sino una obligación de medios, de modo que no cabe

¹¹ Esta versión alternativa solo trata de mostrar cómo la segmentación en párrafos facilita la lectura y la comprensión. Por ello, no planteamos una revisión exhaustiva del párrafo del ejemplo (5), en el que aparecen otros problemas derivados del uso de una sintaxis acumulativa. Nos hemos limitado a separar la información, respetando al máximo la redacción original.

exigir un resultado determinado sino el suministro de los cuidados y atenciones que requiera de acuerdo a la situación de la ciencia médica en cada momento, adecuando la actuación médica a las reglas de la *lex artis ad hoc*, entendida ésta como criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina que toma en cuenta las particulares circunstancias del caso concreto para poder calificar el acto conforme o no con la técnica normal requerida.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, lo relevante será determinar si puede constatarse del expediente administrativo. La existencia de infracción de dicha *lex artis* en la atención médica y para ello lógicamente debe acudirse a los informes médico periciales que consten en el procedimiento pues es claro que se hacen precisos conocimientos técnicos y prácticos en la materia. Pues bien, sobre dicho particular nos encontramos con que en ninguno de los informes obrantes se nos indica que la técnica utilizada fuera incorrecta o que se hubiera seguido una actuación no acomodada a la *lex artis ad hoc* pues en el informe técnico de evaluación elaborado por el médico inspector nada se apunta sobre dicho particular como tampoco en el informe elaborado por los facultativos del servicio de anestesiología (si bien en este caso podría albergarse lógicas reticencias en relación a su contenido al ser el propio servicio en el que supuestamente se causase el daño reclamado) y tampoco se encuentra base para entender se haya producido infracción de *lex artis* en el informe del especialista en anestesiología y reanimación elaborado por la Dra. Alsina pues aun cuando si recoge que pudiera efectivamente haberse afectado el nervio radial también recoge expresamente que la actitud del anestesiólogo fue la correcta, que colocó la vía venosa para la realización del procedimiento y que se habían seguido los protocolos de punción venosa siendo la posible neuropraxia del nervio radial tras acceso intravenoso descrito en la literatura en forma de casos aislados y estimando dicho perito que se trataría de una lesión inevitable.

No existe base por tanto para entender que haya existido infracción de la *lex artis* por el médico anestesista sin que ello lo desvirtúe el informe médico aportado por el actor pues al margen de corresponder a facultativo no especialista en anestesiología se ha centrado su informe en valorar el estado lesionado del demandante y no en analizar la corrección o no de la actuación médica seguida. Añadir por último que tampoco se estima conduzca al acogimiento de la pretensión actora la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado que resulta de aplicación a aquellos casos en que se origina un resultado especialmente grave y desproporcionado en relación con los riesgos que comporta la intervención de los padecimientos que se trata de atender pues, al margen de que pudiera valorarse que el resultado producido alcanzara o no esa "especial gravedad" lo cierto es que esa doctrina únicamente produce la existencia de una presunción de defectuosa prestación de servicio y no la existencia de una automática responsabilidad, presunción esta que en este caso que quedaría desvirtuada por lo recogido en los informes periciales antes citados en los que se estima que no se ha producido infracción de *lex artis* y que por ende no puede entenderse haya existido defectuosa prestación de servicio.

También pueden encontrarse ejemplos del problema discursivo que estamos comentando en las siguientes sentencias: *SJS 4/2007, Murcia, Fundamentos, 3º*; *SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, 1º*; *SJCA 2231/2007, Fundamentos de derecho, 3º*.

1.1.3. Párrafos muy segmentados

Como hemos visto en el apartado anterior, uno de los problemas más comunes en la construcción textual de las sentencias es la acumulación de mucha información en un mismo párrafo, patología que se deriva en una distribución defectuosa de la información.

Otra de las patologías discursivas que hemos encontrado en las sentencias analizadas en relación con una distribución textual defectuosa tiene que ver con una segmentación fragmentada de la información. El resultado, como evidencia el ejemplo (6), es un párrafo muy breve, generalmente compuesto por una oración simple, que queda completamente desgajado del resto del texto.

(6)
QUINTO.- Sentado lo que antecede, diremos que en cuanto a los principios generales por los que se rige la responsabilidad civil derivada del delito debemos recordar: 1) la sentencia debe contener una determinación del daño, en la medida de lo posible, como si de una acción civil se tratara, ejercida con independencia de la penal, por cuanto la acción civil "ex delicto" no pierde su naturaleza civil por el hecho de ser ejercitada en un proceso penal, 2) la estimación de la concreta cuantía objeto de la condena ha de ser razonada en los supuestos en que la motivación sea posible, y no lo es, o alcanza dificultades a veces insuperables, explicar la indemnización por daño moral, difícilmente sujeta a normas; 3) comprende también los intereses legales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque la ley ordena que si hay condena a una cantidad líquida, ésta devengará, desde que se dicta en primera instancia y hasta la ejecución el interés que el artículo 576 fija, si la sentencia es mantenida por el Tribunal superior... 4) la fijación del "quantum" es potestad del Tribunal de instancia... 5) La cuantía sólo es revisable cuando la cifra

fijada por el Juez o Tribunal rebase, exceda o supere la reclamada o solicitada por las partes acusadoras y la sentencia sólo lo será cuando no fije, o lo haga defectuosamente, las bases correspondientes; 6) la indemnización comprende los perjuicios materiales (que han de estar probados), y los morales que no son susceptibles de prueba, cuando su existencia se infiere inequívocamente de los hechos (S.T.S. 1261/2006 de 20 de diciembre R.J. 2007/265, entre otras muchas).

Se tendrá en cuenta la anterior doctrina para resolver el supuesto enjuiciado. A consecuencia de la conducta del acusado, se han generado múltiples perjuicios, que a lo largo del procedimiento han sido indemnizados por Banesto. Todos aquellos que han visto satisfechas sus pretensiones han renunciado a cualquier reclamación que pudiera corresponderles. De ahí que únicamente nos refiramos a los casos que no lo han sido por razones varias.

[SAP J 835/2009, Jaén, Fundamentos, quinto]

En estos casos, es preferible unir el párrafo-frase aislado al párrafo anterior o posterior mediante algún mecanismo de conexión (subrayado en el ejemplo) que permita relacionar ambas informaciones, como trata de mostrar la versión alternativa de (6bis):

(6bis)

QUINTO.- Sentado lo que antecede, diremos que en cuanto a los principios generales por los que se rige la responsabilidad civil derivada del delito debemos recordar: 1) la sentencia debe contener una determinación del daño, en la medida de lo posible, como si de una acción civil se tratara, ejercida con independencia de la penal, por cuanto la acción civil "ex delicto" no pierde su naturaleza civil por el hecho de ser ejercitada en un proceso penal, 2) la estimación de la concreta (...); 6) la indemnización comprende los perjuicios materiales (que han de estar probados), y los morales que no son susceptibles de prueba, cuando su existencia se infiere inequívocamente de los hechos (S.T.S. 1261/2006 de 20 de diciembre R.J. 2007/265, entre otras muchas). **Para los supuestos/casos anteriores, se tendrá en cuenta la anterior doctrina para resolver el supuesto enjuiciado.**

A consecuencia de la conducta del acusado, se han generado múltiples perjuicios, que a lo largo del procedimiento han sido indemnizados por Banesto. Todos aquellos que han visto satisfechas sus pretensiones han renunciado a cualquier reclamación que pudiera corresponderles. De ahí que únicamente nos refiramos a los casos que no lo han sido por razones varias.

1.1.4. Cambio de párrafo temáticamente injustificado

Relacionado con el apartado anterior, hemos encontrado casos en los que se produce un cambio de párrafo que no se justifica desde el punto de vista temático. Se trata, por lo general, de párrafos relativamente breves que quedan semiaislados y que no introducen un aspecto, un argumento o una información nuevos que hagan avanzar el discurso, sino que desarrollan la misma idea que en el párrafo anterior, generalmente como una reformulación o ampliación de algún aspecto. En estos casos, dado que los párrafos no son muy extensos y se comenta un mismo tópico discursivo, es preferible no atomizar la información.

En el ejemplo (7), el segundo párrafo desarrolla un argumento relacionado con dos aspectos que han sido mencionados en el párrafo anterior: los perjuicios ocasionados a la parte demandante por el concepto de "lucro cesante". Si bien el segundo párrafo podría entenderse como una idea independiente, en la medida en que trata en particular sobre los perjuicios mencionados anteriormente, tanto la extensión breve del primer párrafo, articulado en una sola oración, como la identidad temática entre ambos párrafos favorecen, en estos casos, la unificación de ambas informaciones en un solo párrafo.

(7)

Habiéndose, pues, acreditado por la parte concretos perjuicios sufridos en concepto de lucro cesante, es injusto pretender que el mismo se encuentra sobradamente indemnizado mediante la indemnización prevista para las secuelas, pues ésta no contempla los perjuicios colaterales derivados de la imposibilidad de volver a trabajar para cualquier profesión para la que el demandante estuviera cualificado.

Los perjuicios ocasionados al actor son muy superiores al factor de corrección previsto por el Baremo, pues éste venía percibiendo un salario mensual de 299.000 ptas. y el mismo ha quedado reducido en la actualidad, a consecuencia del siniestro a una pensión vitalicia por invalidez permanente total de 608,31 #.

[WLES 06/11/2010, Madrid, Antecedentes, quinto]

En el siguiente ejemplo (8), ocurre lo mismo. El tercer párrafo es una reformulación de lo que se intenta decir en el segundo, reformulación con la que se intenta reforzar la tesis sostenida en el segundo párrafo: la interpretación de la sentencia de apelación supone una ruptura de los principios aludidos en el primer párrafo. Dado que el párrafo reformulador viene a ser un refuerzo argumentativo del anterior, es preferible que ambos movimientos argumentativos estén articulados en un solo párrafo. De lo contrario, como es el caso de (8), el último párrafo queda desgajado del proceso argumentativo previo y no se advierte su relevancia hasta que finaliza su lectura.

(8)

Cita las SSTs de 13 de abril de 1987, 28 de abril de 1992 (sobre el principio de indemnidad como designio de los artículos 1106 y 1902 CC) 8 de junio de 1993, 15 de julio de 1998, 30 de noviembre de 1993 (sobre la aplicación de un prudente criterio restrictivo a la estimación de lucro cesante).

La interpretación de la sentencia de apelación supone una ruptura de tales principios establecidos por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, por cuanto se impide una prueba concreta del lucro cesante existente en cada caso de forma individualizada y conforme a hechos de realización posible o, como dice una autorizada doctrina, aplicando criterios de probabilidad, de acuerdo con lo que se puede llamar el curso normal de los acontecimientos (STS 16 junio 1993).

Es decir, que frente a la propuesta por la parte recurrente para determinar el lucro cesante padecido por el actor de conformidad con una serie de aprecios o cálculos teóricos, basados en una cierta probabilidad objetiva inscrita en el curso normal de los acontecimientos, según el informe actuarial presentado, definido por la sentencia de instancia como «estricto informe actuarial», la Audiencia Provincial de Oviedo ha sostenido la aplicación generalizada, uniforme y, por tanto, escasamente objetiva, del Baremo anexo a la LRCSCVM.

[WLES 06/11/2010, Madrid, Antecedentes, 5ª]

2. ANACOLUTOS PROVOCADOS POR LA SUPERESTRUCTURA

Otro de los problemas de estructura textual que hemos detectado en las sentencias revisadas tiene que ver con las ambigüedades sintácticas y rupturas de la estructura oracional o **anacolutos**. Este tipo de problema es frecuente, sobre todo, en el nivel oracional o parafrástico, debido, como hemos comentado a propósito del párrafo, a la tendencia a dilatar las oraciones mediante subordinación e incisos incrustados. Cuanto mayor es la complejidad sintáctica de la oración, mayor es el riesgo de perder el hilo y de incurrir en errores de concordancia o en rupturas de la oración que provocan ambigüedades en la interpretación (Alcaraz y Hughes 2002).

Sin embargo, a veces, se producen rupturas del período oracional que no responden a un alargamiento excesivo de las oraciones o del párrafo, sino que vienen provocadas por la superestructura de la sentencia, es decir, por la estructura formal que adopta este tipo de textos. En estos casos, el problema se debe a que ciertos apartados de la sentencia, principalmente el encabezamiento y el fallo, se inician con una oración subordinada de participio o gerundio o con una oración completiva que no tienen una oración principal a la que subordinarse.

A continuación, se detallan los distintos tipos de anacoluto encontrados en las sentencias analizadas.

2.1. Cláusulas de participio y/o gerundio truncadas

El siguiente ejemplo muestra un caso de anacoluto muy frecuente en el encabezamiento de las sentencias. El anacoluto viene provocado por una cláusula subordinada de participio y otra de gerundio (en negrita) que no tienen oración principal. La estructura resultante es una oración subordinada compleja que queda truncada, sin oración principal, con un orden interno de constituyentes que resulta poco natural y que suele obligar a una segunda lectura para su comprensión:

(9)

Vista y oída, en juicio oral y público, por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la causa dimanante del Sumario 5/2005, Rollo de Sala 8/2005, procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 1, por un delito de integración en organización terrorista y seis delitos de amenazas terroristas. (...)

Siendo Ponente el Magistrado D....., quién por medio de la presente expresa el parecer del Tribunal.

[SAN 5247/2006, Madrid, Encabezamiento]

Este tipo de anacoluto puede evitarse con facilidad formulando la oración en voz activa, de manera que se mantenga el orden natural del español (SVO), como muestra la paráfrasis del ejemplo anterior (9bis) y el ejemplo de buena práctica (10):

(9bis)

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha visto y oído, en juicio oral y público, la causa dimanante del Sumario 5/2005 (...).

El Magistrado D..... es el ponente, quien por medio de la presente expresa el parecer del Tribunal.

(10)

En la Villa de Madrid, a seis de Mayo de dos mil nueve

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen, ha visto el recurso de casación número 470/2004 contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11ª, de fecha 1 de octubre de 2003, dimanante de autos de juicio verbal del automóvil 5/01 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Barcelona, sobre reclamación cantidad en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de circulación, recurso que fue interpuesto por la parte actora y apelante, Don Florentino, representado ante esta Sala por el Procurador de los Tribunales Don Francisco José Abajo Abril, siendo parte recurrida el CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS, que ha comparecido representado por el Abogado del Estado, así como Don Leopoldo, y Doña Zulima, quienes no han comparecido.

[STS 2385/2009, Madrid, Encabezamiento]

2.2. Cláusulas completivas subordinadas sin oración principal

24

Otro tipo frecuente de anacoluto en el nivel superestructural se debe a la ausencia de un verbo principal del que hacer depender algunas cláusulas completivas subordinadas introducidas por la conjunción “que”. Este tipo de anacoluto suele ser frecuente en el Fallo de la sentencia, como muestra el ejemplo siguiente:

(11)

Fallo

1) **Que** debemos absolver y absolvemos al procesado Arturo del delito de integración en organización terrorista del que venía siendo acusado por la “Asociación de Víctimas del Terrorismo” en el ejercicio de la acción popular, declarándose de oficio la parte proporcional de las costas procesales causadas.

2) **Que** debemos condenar y condenamos al procesado Arturo como autor penalmente responsable, de un delito de amenazas terroristas, ya definido y por los que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal y la acusación popular en este procedimiento, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de reincidencia, a la pena de: 12 años y 7 meses de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de veinte años, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales causadas incluidas las de la acusación popular.

[SAN 5247/2006, Madrid, Fallo]

En el ejemplo anterior, podría considerarse que hay concordancia entre cada una de las oraciones introducidas por “que” y un verbo principal (y, por tanto, no hablaríamos de anacoluto), si entendemos que el título del apartado de la sentencia denominado “Fallo” funciona al mismo tiempo como verbo principal de lo que se enuncia a continuación. Sin embargo, en principio, el lector medio no especialista interpreta los títulos como partes estructurales de la sentencia, es decir, como guías de lo que se tratará en el apartado en cuestión. En el caso del “fallo”, éste se interpreta por defecto como el apartado final en el que el magistrado expone la conclusión de la sentencia, por lo general, si el procesado es culpable o inocente.

En consonancia con lo anterior, la redacción del Fallo del siguiente ejemplo (12) constituye un ejemplo de buena práctica discursiva por parte del magistrado, quien estructura la información siguiendo un orden verbal no marcado (SVO). Este orden permite una comprensión más rápida de la información y se ajusta mejor, probablemente, al orden informativo que se espera en este apartado: quién condena, a quién, por qué, a cuánto tiempo:

(12)

Fallo

CONDENO a Gines como autor criminalmente responsable de una falta de maltrato cruel a animal domestico, a la pena de multa de SESENTA DIAS días, a razón de una cuota diaria de DOCE EUROS, con arresto sustitutorio DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD en caso de impago de una día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y al abono de las costas procesales de obligatorio devengo.

Procede acordar igualmente la entrega del animal a la asociación Amigos de los animales, de forma definitiva para la protección del animal.

[SJI 3/2009, Granada]

Este tipo de subordinadas completivas truncadas aparece también en apartados cuyo título no contiene ningún verbo susceptible de ser el verbo principal. En estos casos, como evidencia (13), es mucho más palpable la función claramente expletiva de la conjunción “que”, que puede eliminarse sin que se resienta la estructura oracional:

(13)

Antecedentes

PRIMERO.- **Que** con fecha veinte de julio de dos mil seis tuvo entrada en este Juzgado de lo Social demanda interpuesta por el actor en la que después de alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, termina suplicando se dicte en su día sentencia por la que se de lugar a sus pretensiones.

SEGUNDO.- **Que** admitida la demanda a trámite y señalado día y hora para la celebración del acto del Juicio, en su caso, éste tuvo lugar el día y hora señalados; abierto el acto y dada cuenta, por la parte actora se ratificó en su demanda, contestando la demandada según consta, practicándose las pruebas propuestas y admitidas por S. Sª, reiterando en trámite de conclusiones sus respectivas peticiones, quedando el juicio visto para sentencia.

TERCERO.- **Que** en la tramitación de los presentes autos se han seguido las reglas de procedimiento.

[SJS 4/2007, Murcia, Antecedentes]

También pueden encontrarse ejemplos del problema discursivo que estamos comentando en las siguientes sentencias:

- a) Ejemplos de anacoluto debido a “visto/a”: *WLES 06/11/2010, Madrid, Encabezamiento; SAP J 835/2009, Jaén, Encabezamiento.*
- b) Ejemplos de anacoluto provocado por oraciones completivas sin verbo principal: *SAP J 835/2009, Jaén, Fallo; SJCA 2231/2007, Fundamentos, 4º.*
- c) Ejemplos de buena práctica para evitar el anacoluto que provoca “visto/a”: *SJI 3/2009; STSJ And 23_7_2002, Encabezamiento.*
- d) Ejemplo de buena práctica en el Fallo: *STS 2385/2009, Madrid, Fallo.*

3. PROBLEMAS CON LOS MECANISMOS DE TRANSICIÓN ENTRE PÁRRAFOS

Otro de los problemas que se hemos detectado en las sentencias analizadas está relacionado con los mecanismos de transición interparafrástica, esto es, con las marcas lingüísticas que se utilizan para relacionar los párrafos entre sí de manera que no se rompa el hilo discursivo y se pierda la coherencia del texto.

El siguiente ejemplo (14) es una buena muestra de los que acabamos de decir. El problema viene motivado, principalmente, por la inadecuación de registro de la locución conjuntiva *pero es que* (marcado en negrita y subrayado) y por la ausencia de alguna expresión que relacione

el párrafo que se inicia con el anterior. Con todo, coaparecen también otro tipo de problemas estructurales que dificultan la comprensión de estos párrafos y que repercuten, en última instancia, en el problema concreto que estamos comentando.

(14)

Así la *STC 228/2002*, recogiendo la doctrina expuesta, en relación con el alcance del principio acusatorio, expone que “la adecuada correlación entre acusación y fallo, como garantía del principio acusatorio, implica que el Juzgador esté sometido constitucionalmente en su pronunciamiento por un doble condicionamiento, táctico y jurídico. El condicionamiento táctico queda constituido por los hechos que han sido objeto de acusación; de modo que ningún hecho o acontecimiento que no haya sido delimitado por la acusación como objeto para el ejercicio de la pretensión punitiva podrá ser utilizado para ser subsumido como elemento constitutivo de la responsabilidad penal”, es decir, no se podrán incluir en los hechos probados elementos tácticos que sustancialmente varíen la acusación. Añade el Tribunal Constitucional que “lógicamente, este condicionamiento táctico no implica que el Juzgador no tenga autonomía suficiente para redactar los hechos conforme a su libre apreciación de la prueba, incluyendo aspectos circunstanciales que no muten la esencia de lo que fue objeto de controversia en el debate procesal”, con cita expresa de las *SSTC 14/1999 o 302/2000*. A la vista de lo anterior, que constituye el núcleo esencial de la vinculación que supone el principio acusatorio, este Tribunal sentenciador no ha ampliado los hechos objeto del delito establecidos por las acusaciones, ni ha modificado el papel desempeñado por el acusado en el curso de aquéllos, ni ha variado el título de imputación como autor del delito de amenazas terroristas, es decir, persiste el sustrato táctico subsumible bajo aquella infracción. El condicionamiento jurídico del principio acusatorio estriba en la calificación de los hechos realizada por la acusación. Atendidas las facultades del Juzgador penal, también señala el Tribunal Constitucional, “por las cuestiones de orden público implicadas en el ejercicio del “ius puniendi”, el Juez podrá condenar por un delito distinto al solicitado por la acusación siempre que sea homogéneo con él y no implique una pena de superior gravedad”, también con cita de las *SSTC 87 y 118/01*, precisando finalmente que “lo decisivo a efectos de la lesión del artículo 24.2 CE. es la efectiva constancia de que hubo elementos esenciales de la calificación final que de hecho no fueron ni pudieron ser plena y frontalmente debatidos”.

Pero es que en el caso que nos ocupa, no se ha condenado por delito distinto de aquél que ya venía expresamente reflejado en el escrito de calificación provisional tanto de la acusación pública como de la popular, siendo así que tras la modificación del Ministerio Fiscal este mantuvo la acusación por un delito de amenazas terroristas, eliminando el delito de integración en organización terrorista y planteando una calificación alternativa con otras figuras delictivas como la del artículo 574 en relación con el 172.2 del Código en concurso con el artículo 578 del mismo Texto Legal a las que mas adelante nos referiremos, teniendo la representación del procesado la posibilidad real y efectiva de contradecir lo pertinente y de defenderse con plenas garantías en el Plenario (*STS de 10 de febrero de 2003*).

[SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, segundo]

La locución **pero es que**, propia del registro coloquial y de contextos dialógicos, introduce un acto de habla replicativo-justificativo. En el caso de una sentencia judicial, el uso de conectores de este tipo disuena enormemente, dado que las sentencias se sitúan claramente en el extremo opuesto del continuo oral-escrito y constituyen ejemplos paradigmáticos de máxima escrituridad. Es decir, son géneros discursivos asociados al registro estándar-culto.

Por otro lado, pese a que el carácter polifónico de la sentencia, en la que se alude a otros actores distintos del magistrado que redacta la sentencia, justificaría el uso de un marcador replicativo para introducir un contraargumento con el que se rechaza un punto de vista expuesto anteriormente, en este caso concreto la réplica no se dirige directamente a lo expresado por los participantes en el litigio, sino a lo que establece el Tribunal Constitucional en otra sentencia distinta. Esta alusión se realiza mediante cita textual al final del primer párrafo. Dada la extensión del primer párrafo, y dado que la réplica podría dirigirse a todo él, se hace necesario el uso de alguna expresión introductoria que enlace el segundo párrafo con la cita referida, de modo que pueda interpretarse sin dificultad que el contraargumento que se inicia lo es del contenido de la cita y no de todo el párrafo en que esta se inserta.

Una posible solución, pues, sería utilizar un conector contrargumentativo propio del registro estándar-culto como “ahora bien” o “sin embargo”, más una estructura introductoria que enlace el párrafo con la cita inmediatamente anterior, tal como exponemos a continuación: “Sin embargo, pese a lo que establece el tribunal constitucional en la cita anterior, en el caso que...”.

Otra posibilidad, quizás más acertada, consistiría en reestructurar la información del primer párrafo en tres bloques informativos, repartidos en sendos párrafos, y unir el segundo párrafo actual con el tercero de los nuevos párrafos, en el que se alude al dictamen del Tribunal Superior.

(14bis)

Así la *STC 228/2002*, recogiendo la doctrina expuesta, en relación con el alcance del principio acusatorio, expone que (...).

A la vista de lo anterior, que constituye el núcleo esencial de la vinculación que supone el principio acusatorio, (...).

Atendidas las facultades del Juzgador penal, también señala el Tribunal Constitucional, "por las cuestiones de orden público implicadas en el ejercicio del "ius puniendi", el Juez podrá condenar por un delito distinto al solicitado por la acusación siempre que sea homogéneo con él y no implique una pena de superior gravedad", también con cita de las *SSTC 87 y 118/01*, precisando finalmente que "lo decisivo a efectos de la lesión del artículo 24.2 CE. es la efectiva constancia de que hubo elementos esenciales de la calificación final que de hecho no fueron ni pudieron ser plena y frontalmente debatidos". **Sin embargo, pese a lo que establece el Tribunal Constitucional en la cita anterior**, en el caso que nos ocupa, no se ha condenado por delito distinto de aquél que ya venía expresamente reflejado en el escrito de calificación provisional tanto de la acusación pública como de la popular, siendo así que tras la modificación del Ministerio Fiscal este mantuvo la acusación por un delito de amenazas terroristas, eliminando el delito de integración en organización terrorista y planteando una calificación alternativa con otras figuras delictivas como la del artículo 574 en relación con el 172.2 del Código en concurso con el artículo 578 del mismo Texto Legal a las que mas adelante nos referiremos, teniendo la representación del procesado la posibilidad real y efectiva de contradecir lo pertinente y de defenderse con plenas garantías en el Plenario (*STS de 10 de febrero de 2003*).

El ejemplo siguiente (15) es otro caso en el que puede observarse una marcación inadecuada en la transición entre párrafos, marcada en negrita en el ejemplo.

(15)

A la fecha de suscripción del contrato litigioso estaba en vigor el *Reglamento (CEE) 4087/88*, cuyo art. 9 estipulaba su aplicación hasta el 31 de diciembre de 1999. El art. 12 del *Reglamento (CE) 2790/99* prorrogó la vigencia de las exenciones establecidas en el *Reglamento 4087/88*, así como las establecidas en los reglamentos de la Comisión (CEE) n.ºs. 1983/83 y 1984/83, relativos a los acuerdos de distribución exclusiva y de compra exclusiva, respectivamente, hasta el 31 de diciembre de 2000 y, además, suspendió la aplicación del art. 81.1 TCE hasta el 31 de diciembre 2001, para los acuerdos que estuvieran en vigor el 31 de mayo de 2000 y cumplieran las condiciones de exención de los anteriores Reglamentos.

De lo que debe concluirse que la validez de una obligación de no competencia impuesta por un contrato de franquicia o de suministro en exclusiva suscrito en 1999 y finalizado el 4 de mayo de 2004, debe examinarse, hasta el 31 de diciembre de 2001, de conformidad con los Reglamentos anteriores; (...).

[SAP B 14345/2009, Barcelona, Fundamentos, cuarto]

El segundo párrafo se introduce con la locución prepositiva **de lo que**, de carácter consecutivo, adecuada para enlazar una cláusula a una oración principal de la que se separa generalmente con una coma. Su uso como nexos consecutivo en inicio de párrafo es claramente antinormativo y debe sustituirse por una estructura introductoria más acorde a su papel de enlace interparafrástico, como muestra la versión alternativa abreviada de (15bis):

(15bis)

A la fecha de suscripción del contrato litigioso estaba en vigor el *Reglamento (CEE) 4087/88*, cuyo art. 9 estipulaba su aplicación hasta el 31 de diciembre de 1999. El art. 12 del *Reglamento (CE) 2790/99* prorrogó la vigencia de las exenciones establecidas en el *Reglamento 4087/88*, así como las establecidas en los reglamentos de la Comisión (CEE) n.ºs. 1983/83 y 1984/83, (...).

De lo anterior/De lo expuesto en el párrafo anterior debe concluirse que la validez de una obligación de no competencia impuesta por un contrato de franquicia o de suministro (...).

También pueden encontrarse ejemplos del problema discursivo que estamos comentando en la siguiente sentencia: *WLES 06/11/2010, Madrid, Antecedentes, 5º*.

LA ELABORACIÓN DE LAS SECUENCIAS TEXTUALES (I): LA DESCRIPCIÓN Y LA NARRACIÓN

1. INTRODUCCIÓN. LA ELABORACIÓN DE LAS SECUENCIAS TEXTUALES EN LOS TEXTOS JURÍDICOS

La larga tradición de estudios argumentativos sobre el discurso jurídico demuestra que la argumentación constituye una parte esencial de los documentos judiciales, muy en particular, de la sentencia. La sentencia, en efecto, es probablemente, el género profesional más estrechamente identificado con el uso de las estrategias argumentativas. En este sentido, tanto la rica tradición de estudios sobre argumentación jurídica, como la tradición de la Retórica, que analiza los mecanismos argumentativos utilizados para construir la sensatez y prudencia del razonamiento elaborado, han mostrado la estrecha relación existente entre el discurso jurídico y la secuencia textual de la argumentación. La base argumentativa de la sentencia judicial es bien conocida por quienes la elaboran, esto es, los jueces.

Sin embargo, no existe ni entre los profesionales ni tampoco entre los especialistas en discurso jurídico una conciencia paralela de que otras secuencias textuales constituyen también una parte esencial del género de las sentencias. En efecto, tanto la descripción como, especialmente, la narración, forman parte esencial de la elaboración de este género jurídico. El hecho de que los autores de las sentencias –los jueces– no siempre tengan conciencia de la recurrencia con la que elaboran narraciones y descripciones, ni, menos aun, de la importancia esencial que unas y otras revisten para apuntalar la solidez de la argumentación sostenida, explica que aparezcan frecuentes patologías textuales relacionadas con la elaboración poco experta de descripciones y narraciones.

2. LA DESCRIPCIÓN EN LOS DOCUMENTOS JURÍDICOS

Con mucha frecuencia, la persona que elabora la sentencia ha de dar cuenta de las características de los objetos o contingencias que forman parte del proceso –por ejemplo, mercancías robadas, material peligroso decomisado, inmuebles que han de subastarse o heridas causadas por un accidente–. Igualmente, con frecuencia han de caracterizarse las personas

afectadas por la acción jurídica. Ello explica que los fragmentos descriptivos formen parte de manera recurrente del texto de una sentencia.

La acción de describir se considera un tipo de discurso esencialmente sencillo, sobre todo, cuando se contrasta con otros tipos de discurso –también denominados secuencias textuales– más complejos, como la argumentación o la instrucción. Con todo, ello no significa que el autor de una descripción no deba cumplir una serie de reglas de expresión lingüística si quiere ser eficaz (Álvarez 1994), esto es, si se propone que su lector reconstruya mentalmente sin dificultades el objeto o persona que el texto detalla. Las reglas para la elaboración de una buena descripción son pocas, pero deben respetarse. La principal de ellas alude a la necesidad de que la descripción siga un orden o criterio determinado, es decir, que no sea caótica.

Cuando el autor, por desconocimiento de las convenciones lingüísticas consustanciales a la elaboración de descripciones, no respeta la necesidad de mantener escrupulosamente un criterio en la descripción y se deja llevar por el orden de su propia conciencia (generalmente desordenada en todo hablante) se producen inconsistencias en las representaciones descritas.

En este sentido, véase el siguiente fragmento descriptivo, en el que hemos destacado mediante negrita diferentes sintagmas cuya comprensión resulta confusa, tal como se analizará tras el ejemplo:

(1)

En esta diligencia se hace constar que en la bajera sótano del domicilio se encontró un sistema hidropónico con varias plantas de marihuana, unas setenta en total, que se encontraban regadas con agua dentro de unos maceteros. Había un sistema de control de agua (de la dureza del agua, etc.). Y **al otro lado** había un sistema hidropónico con plantas más pequeñas con riego, luz y ventilación que tenía noventa agujeros y unas treinta plantas ya nacidas de unos veinte o treinta centímetros de altura. **En el centro** había una maceta conteniendo una planta de marihuana ya hecha de donde se extraían los esquejes para plantar. Se hace constar que existían varios tubos de extracción de aire y de refrigeración del local y que en el cuarto de al lado había dos semilleras de color blanco, de corcho, una de ellas con ciento cuarenta y cuatro agujeros para meter semillas y la otra con unos doscientos agujeros y en una estantería había tres focos de luz para calentar los semilleros y que nacieran las plantas. Asimismo **en una terraza** había seis plantas de 1,65 metros de altura y **en el tercer piso** varias plantas cortadas y colgadas para secar. **Junto al sofá** había un rollo de bolsas de plástico para congelar alimentos y una báscula color gris con letras EK5055 máximo 5 Kilos.

[SJS 2-2010. Pamplona: Hechos probados, sexto]

El primer sintagma señalado es al *otro lado*; adviértase que el lector no puede saber -porque en el texto no se ha dicho- al otro lado de *qué* se encuentra el sistema hidropónico aludido. En cuanto al complemento *en el centro*, no sabemos si el autor se refiere al centro del sótano o del sistema hidropónico. Por su parte, el complemento *en una terraza*, impele a que el lector interprete que el autor del texto ha cambiado el objeto de la descripción -el lugar que se describe- y que la terraza aludida pertenece ahora al inmueble y no en concreto al sótano, interpretación que se ve favorecida por la extrañeza de que un sótano cuente con terraza. Esta idea de que el autor, sin previo aviso, está describiendo un lugar diferente al sótano se refuerza con la aparición del segmento *en el tercer piso*. En la línea siguiente aparece el sintagma *junto al sofá*. ¿Dónde cabe ubicar el sofá mencionado? ¿En el sótano?, ¿en el tercer piso?

Más adelante, en el apartado 3.2.2., se analizarán las patologías discursivas derivadas de la mixtura confusa de descripción y narración.

3. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA ELABORACIÓN DE LAS SECUENCIAS NARRATIVAS DE LOS GÉNEROS JURÍDICOS

3.1. El papel de la narración en los documentos jurídicos

En primer lugar, cabe precisar dos aspectos: el primero atiende a que abordamos aquí el estudio de las narrativas o relatos que se utilizan en un determinado ámbito profesional, en concreto, el jurídico. Es decir, no nos ocupamos ahora de narrativas ficcionales de carácter literario o lúdico. El tipo de narrativa que se elabora en los contextos profesionales como, por ejemplo, las producidas en el ámbito policial, no tiene tanto que ver con despertar el interés del lector, tener capacidad de evocación o construir imágenes poéticas, sino con elaborar un relato claro que permita al interlocutor hacerse una representación mental, cómoda y verosímil, de los hechos relatados. El segundo de los aspectos que cabe precisar en este párrafo introductorio es que el discurso jurídico es, probablemente, uno —si no el principal— de los discursos profesionales que más utiliza las secuencias narrativas en la elaboración de sus géneros textuales más representativos, como es el caso de la sentencia.

Los esquemas narrativos desempeñan un papel muy importante en la elaboración de los discursos jurídicos¹² tanto por su alta frecuencia de aparición como, especialmente, por la importancia significativa que revisten en su función de base “empírica” o “factual” del proceso argumentativo y de la decisión final del juez; esto es, los fragmentos narrativos están en la base del razonamiento jurídico.

En particular, a lo largo de la fase de los “hechos probados”, el juez ha de traer a colación diferentes tipos de narrativas. De un lado, los sucesos relatados por los múltiples locutores que desempeñan un papel jurídico: los acusados, las víctimas, los testigos y los especialistas (peritos) requeridos. En otras ocasiones, los relatos convocados por el juez en la sentencia tienen un origen escrito; ése es el caso, por ejemplo, de las narraciones procedentes de los informes, atestados o de otras sentencias que el juez utiliza en la construcción de su deliberación. De la suma de todas esas narraciones¹³, el redactor de la sentencia ha de construir su propio relato, relato que se presentará como el veraz, el “real” y el legitimado, sobre el que se asienta el razonamiento y, por tanto, la resolución final. De ahí que resulte tan importante que las diferentes narraciones incluidas en la sentencia se elaboren con claridad, **formulando con nitidez quién hizo qué, cuándo lo hizo y dónde y cómo lo llevó a cabo.**

Con todo, a pesar de la importancia que, como se ve, reviste este tipo de discurso, las sentencias del corpus muestran frecuentes deficiencias en la formulación de la narración de los múltiples hechos que son invocados en el desarrollo del razonamiento jurídico.

3.2. Las características lingüísticas de una narrativa eficaz¹⁴

Suele considerarse que la secuencia textual de la narración es cognitiva y lingüísticamente menos compleja que otras secuencias textuales más elaboradas como la exposición, la argumentación o la instrucción. Sin embargo, esta relativa simplicidad cognitiva no implica que la elaboración de una narración eficaz —en el sentido de clara y no ambigua— no conlleve una determinadas reglas de elaboración. Así, en general, una narrativa clara y eficaz suele presentar una breve serie de características que se enumeran a continuación. En apartados

¹² Son numerosas las investigaciones que han analizado la relación entre narración y géneros jurídicos en la tradición anglosajona (en este sentido, véanse, entre otros, los trabajos de Bennet y Feldman 1981, Cotterill 2003, Gibbons 2003, Heffer 2005 o Kurzon 1985). En la tradición hispanohablante, sin embargo, la ausencia de trabajos en esta línea es casi absoluta, con algunas excepciones de trabajos que abordan la narración en algunos géneros policiales (por ejemplo, Taranilla 2007).

¹³ El apartado §2.3. de este informe analiza, precisamente, la importancia que reviste en la sentencia la inserción de discursos ajenos, así como los procedimientos utilizados para señalar la introducción de otras voces o textos.

¹⁴ Sobre la secuencia textual de la narración, véanse, entre otros, los estudios de Adam y Lorda (1999), Bruner (2002), Labov y Waletzky (1967) o Riessman (1993).

siguientes, analizaremos la presencia o ausencia de tales requisitos lingüístico en las sentencias estudiadas a fin de describir con nitidez en qué aspectos reside la inadecuación de las narrativas de los documentos jurídicos analizados.

Para elaborar una narrativa eficaz que forme parte de un género profesional resulta aconsejable:

- Respetar el orden cronológico de los acontecimientos; de este modo, el orden en el que aparece la información en el texto intenta reflejar el orden de los eventos en la realidad, de forma que lo que sucede antes aparece al principio del relato.
- A fin de garantizar la clara parcelación y comprensión de la secuencia de eventos, las narraciones eficientes utilizan los signos de puntuación, especialmente el punto y seguido, para ayudar al lector a entender cuándo el relato cambia de personaje o de punto temporal.
- Es habitual y prototípico que en las narraciones los verbos aparezcan en pasado. Si bien en cierto tipo de relatos (particularmente, en los orales coloquiales) con frecuencia los emisores emplean formas verbales de presente con el fin de acercar la acción al interlocutor (por ejemplo, “ayer el tipo *se acerca* y *va me dice*” -se trata del denominado presente histórico-), lo cierto es que resulta poco recomendable utilizar los tiempos de presente en la narración de eventos del pasado, sobre todo si se combinan unas y otras formas, de pasado y de presente, de manera indiscriminada. En definitiva, los relatos bien contruidos usan de manera coherente las formas verbales de presente y las de pasado.
- Dado que en los relatos jurídicos (por ejemplo, en el atestado policial) resulta muy pertinente matizar en qué momento preciso ocurrió un hecho concreto en relación a otros sucesos del pasado, es necesario, por tanto, utilizar de forma consistente los diferentes tiempos de pasado (pretérito perfecto, indefinido, pluscuamperfecto, anterior, condicional, etc.) cuya función es, precisamente, matizar el momento del pasado en el que algo ocurrió, respecto del ahora o presente y también respecto de otros momentos del pretérito.
- Por esta misma razón, esto es, por la necesidad de que los destinatarios de un relato, en general, y de los relatos jurídicos, con mayor razón, puedan reconstruir sin dudas ni ambigüedades el orden de la secuencia de acciones narrada, es importante que el autor utilice complementos y expresiones temporales que expliciten de modo perspicuo el momento en que acaece cada hecho narrado. Así, expresiones como, por ejemplo, *al día siguiente*, *3/nueve/x horas/días/semanas después* o *una vez abierta la puerta del domicilio* resultan imprescindibles para especificar el orden de eventos en la secuencia de acontecimientos.
- La narración prototípica, que es la que aparece en los discursos jurídicos, suele tener un o varios “personajes” que son quienes llevan a cabo las acciones relatadas o, en ocasiones, reciben sus efectos. De ello se deduce la necesidad de que la formulación lingüística garantice que el lector podrá interpretar sin peligro de confusión quién es el personaje que realiza una acción concreta (es decir, quién es el agente de la acción).

3.3. Los problemas más frecuentes en las narrativas del corpus de sentencias

Frente a estos requisitos lingüísticos consustanciales a la elaboración de una narración clara, en el amplio corpus de sentencias analizadas hemos identificado diferentes tipos de patologías. Las razones que explican estas incorrecciones parecen ser esencialmente dos:

- (i) la ausencia de reflexión de los juristas sobre la importancia estructural de las narraciones en la elaboración de los documentos jurídicos y de la sentencia, en particular; y

- (ii) el dominio insuficiente de los mecanismos lingüísticos asociados a la elaboración de narrativas.

A continuación, mostraremos los principales problemas que hemos detectado en el análisis de las narraciones insertas en las sentencias estudiadas. En primer lugar se describirá el problema y, a continuación, se aportarán ejemplos comentados que ilustran la inadecuación descrita. En algunos casos, ofreceremos también una versión alternativa a la formulada por el juez a fin de mostrar cómo el dominio solvente de los recursos expresivos modifica radicalmente la posibilidad de que el lector interprete cómodamente la secuencia narrada. Cuando ello parezca especialmente significativo, para concluir el apartado, incluiremos algún ejemplo de buenas prácticas a fin de mostrar que a menudo la solución expresiva más adecuada ya ha sido prevista y utilizada con éxito por algún profesional de este ámbito.

3.3.1. *La delimitación defectuosa de los diferentes eventos narrados en la secuencia*

Uno de los problemas más frecuentes y que mayor ininteligibilidad provoca en las narraciones de las sentencias analizadas es la delimitación defectuosa de los diferentes eventos relatados en la secuencia. Así, por ejemplo, el siguiente fragmento muestra un encadenamiento algo confuso de las acciones relatadas:

(2)

El acusado Gerardo tenía una íntima amistad con los otros dos acusados, a quienes había presentado a finales del año 2005, en el local que aquél regentaba y en él coincidieron varias veces. Más allá de presentar en su día a los otros acusados y hacer los recados que éstos le pedían, intermediando entre ellos de la manera descrita anteriormente, no consta acreditado que el acusado Gerardo realizara alguna acción sin la cual el acusado aforado no hubiera podido solicitar dinero al acusado Juan Alberto para la compra de la vivienda a cambio de la resolución judicial que ordenó el cese de la emisión del programa de televisión. Tampoco consta acreditado que realizara una acción sin la cual el acusado Juan Alberto no hubiera podido entregar el dinero al acusado aforado a cambio de la suspensión cautelar de la emisión del programa televisivo.

[TSJA, S10/2008: Hechos probados, tercero]

(3)

Tras dos horas y media de estancia de las cuatro personas en el chalet, salieron del mismo, en primer lugar Inocencio y Romeo, que utilizaron en un primer momento el vehículo SEAT Toledo propiedad del primero, saliendo del garaje del inmueble, y una vez fuera y cerca de su vehículo, se apeó Romeo yendo a recoger el citado automóvil Volkswagen Passat. Conrado y Juan Francisco, salieron posteriormente andando del chalet al acceder al vehículo del primero BMW matrícula ZU-...-ZW que utilizaba el primero.

[Tribunal Supremo Sentencia núm. 1353/2009 de 30/12/2009. (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Madrid: Antecedentes, primero].

En este caso, la imprecisión de la secuencia se explica por una defectuosa articulación sintáctica de los eventos; en concreto, faltan puntos y sobran gerundios. De hecho, tal estructuración inadecuada de los sucesos puede deberse a alguno de los motivos que se describen a continuación, si bien, con frecuencia, más de uno se encuentran imbricados entre sí.

a) Uso incorrecto de los signos de puntuación

La delimitación defectuosa o confusa de los eventos que constituyen la narración a menudo se debe al uso incorrecto de los signos de puntuación, tal como ocurría en el ejemplo inmediatamente anterior. Más específicamente, con frecuencia se explica por la infrautilización de puntos y seguidos que marquen con claridad el cierre de la unidad sintáctica correspondiente a un evento y el inicio de otra:

(4)

1ª) El semáforo o señal de salida S2/4 es perfectamente visible desde el Gabinete de Circulación de la estación de Chinchilla, como se ha podido comprobar “de visu” por el tribunal, tanto en las fotografías que se han ido exhibiendo en las sesiones del juicio oral por el Ministerio Fiscal, como en la percepción directa del tribunal recibida en el día de la inspección ocular practicada -a presencia de las partes-, en la mañana

del día 25 de abril de 2006; una mínima actuación diligente del factor evidencia que, antes de cruzar las vías, tiene que mirar a la señal S2/4, pues lo tiene en el lado de enfrente al Gabinete, por delante del inicio del andén de la vía 4, y la cabeza del talgo no impide su visión en absoluto, pues en el caso de autos, es un hecho admitido que el talgo al detenerse no había rebasado el inicio de dicho andén; además, momentos antes de salir hacia la cabeza del talgo, cuando se paró el mismo, tuvo que comprobar visualmente el semáforo, para percibir que estaba en rojo, pues de otro modo el talgo no hubiera parado (para parar el talgo era suficiente con la señal S2/4 en rojo (*artículo 217 RGCTrenes [Reglamento General de Circulación para tráfico ferroviario]*: parada), y la señal previa -de avanzada-, en intermitente (*artículo 214 RGCTrenes*: anuncio de parada inmediata), de modo que, en principio, no se precisa del banderín extendido para parar al talgo (en similar sentido, declaraciones del testigo Gaspar -factor de circulación de Navajuelos, el día de autos-, que a preguntas del Letrado Sr. Santos, vino a contestar que para parar el tren no es necesario el banderín, pues al estar la señal de salida en rojo (el semáforo), con eso es suficiente -vid acta de juicio oral del 20 de abril de 2006-); en cambio, el acusado, a preguntas del fiscal (sesión de 4 de abril de 2006), declaró que al talgo 226 le presentó el banderín desenrollado -para que parará-, cuando hemos visto que tal actuación no es imprescindible cuando el semáforo está en rojo, como también afirmó el acusado que estaba cuando paró el talgo 226. Mas abajo trataremos sobre la utilidad de esa versión del acusado [en concreto en el apartado 12º)].

[SJP 19/2006. Fundamentos de derecho: primero]

Ocurre a menudo en los documentos analizados que, tal como puede advertirse en este ejemplo de (4), el autor del texto expresa la cadena de acontecimientos a través de un solo párrafo que, por demás, está formado por **una** sola frase. La inexistencia de parcelación sintáctica de los eventos -lo que hubiera solventado el uso del punto y seguido- dificulta al lector la tarea, tanto de identificar y aislar cada suceso respecto de su correspondiente comentario por parte del juez, como la de concatenar los eventos en un orden determinado.

Esta confusión en la formulación de eventos y comentarios jurídicos resulta particularmente frecuente en los Fundamentos de Derecho, ya que, como muestra el ejemplo siguiente de (5), en los Fundamentos, la narración de los hechos se combina con la introducción de la valoración del juez. De hecho, en la fase de los Fundamentos, sería deseable no sólo que los distintos eventos relatados pudieran interpretarse con comodidad, sino también que el lector percibiera claramente dónde acaba la narración del evento y dónde empieza el comentario o evaluación del juez.

A fin de mostrar con mayor claridad esta afirmación, expondremos a continuación un ejemplo en el que señalamos con dos tipografías distintas los dos tipos de discurso que cohabitan en un mismo párrafo (y a menudo, como en este caso, en una sola y larguísima oración): con redonda indicamos los fragmentos narrativos; con subrayado, en cambio, se marcan los miembros textuales que introducen la valoración del juez. Percíbase que ambos tipos de discurso se presentan solapados confusamente, sin marcas que los separen o delimiten:

(5)

11º) El factor de circulación de Chinchilla, después de salir el talgo 226, llama por 18 vez al PM Valencia a las 21 horas, 41 minutos y 10 segundos, según el horario del propio PM Valencia (folio 490, donde se recoge transcripción de la grabación efectuada por el PM, con expresión de la hora, minutos y segundos); pero como se ha podido constatar, dicho horario tenía un desfase -en concreto de retraso -de 1 minuto y 15 segundos, en relación con el horario de Iberdrola, que se toma como más fiable pues está controlado con la hora oficial y los ordenadores realizan los registros y la rectifican cada quince minutos sincronizándola con la emisora alemana DCF 77 (folio 703 y 667); dicho desfase, entre el horario del PM Valencia y el de Iberdrola, fue constatado por el Capitán Donato, de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete, que ha declarado sobre el mismo, así como por los propios empleados del PM Valencia, que también han declarado en el juicio oral, sin que se haya evidenciado que dicho horario haya podido ser manipulado por ninguno de ellos [vid también apartado 2.5.c) de este mismo fundamento de derecho]; y, según el horario de Iberdrola el accidente ocurrió a las 21 horas, 42 minutos y 09 segundos, dado que el mismo se produjo justo debajo del cruce de la línea eléctrica por la vía, y debido al propio accidente, se originó un arco voltaico que cortó la corriente eléctrica, como ya hemos explicado (vid página 15 del Registro Cronológico del Telemando de la subestación de Albacete, a los folios 337 y 559 y explicaciones sobre el mismo); teniendo presente que este horario también tiene un desfase en relación con el de Iberdrola, en este caso de 1 minuto y 07 segundos de mas (folio 338 de autos), según explicó el Capitán Donato en acto del juicio oral (sesión de 20 de abril de 2006, a preguntas del Letrado Sr. Pérez Charco); habiendo quedado evidenciado que esa fuente horaria es distinta a la de Iberdrola, pero que, en todo caso, ese desajuste horario tampoco tiene incidencia sobre lo que venimos razonando, pues lo importante es que, conforme ha quedado acreditado, en ese día tan solo existió un microcorte de corriente en la estación eléctrica de Villar de Chinchilla [sobre ello trataremos en mayor detalle en el apartado 2.5.d) de este mismo

fundamento de derecho]; en todo caso, dado el método utilizado para la determinación de los momentos temporales claves (folios 703 y 704 ya analizados) -es decir, sumando o restando los tiempos relativos de avance de los trenes y de reacción del factor (según su versión), sacados de fuentes objetivas, como la reconstrucción judicial en fase de instrucción de los hechos, en incluso en el plenario en la inspección ocular, o los intervalos de tiempo existentes en la transcripción de las conversaciones mantenidas con el PM Valencia-, y partiendo de que tan sólo existió ese microcorte eléctrico con trascendencia en el Villar de Chinchilla -pues el otro microcorte a que se refiere el folio 338, ocurrido a las 07h, 20m, 03s, solo afectó a la transmisión de datos de la referida estación al Centro de telemando (inciso primero del segundo párrafo del folio 338)-, ese desfase horario del Telemando de Albacete, carece de relevancia a los efectos del razonamiento efectuado en el apartado que precede [el 10º)], y, por tanto, también carece de relevancia a los efectos de cuanto se viene explicando.

[SJP 19/2006. Fundamentos de derecho, décimoprimerº]

De hecho, el problema básico que se advierte en fragmentos como éste (o, por lo menos, uno de los más importantes), es la acusada tendencia de los escritores jurídicos a introducir de continuo incisos en el interior del discurso base, lo que acaba dando lugar a oraciones larguísimas, muy densas y, por lo general, incorrectas, oraciones en las que una gran cantidad de discurso secundario o parentético se imbrica, sin separación nítida, con el discurso primario. Dedicamos el apartado 1 del capítulo IX de este informe al problema de legibilidad que constituye esta *sintaxis del inciso*.

Un ejemplo de buenas prácticas para evitar este conglomerado de acciones mal delimitadas lo encontramos en diversas sentencias, en las que el autor intenta secuenciar la narración en pequeños apartados que corresponden a un evento o una breve secuencia de eventos relacionados.

La sentencia de la que procede el ejemplo que sigue es muy larga (107 páginas) y muy compleja, por lo que resulta loable que la narración de los Antecedentes se articule a través de una **enumeración** bien estructurada, organizada en tres niveles, que sigue la disposición que se muestra a continuación en cada uno de los 27 apartados de primer nivel de los que se compone:

- (6)
Primero. (...)
Segundo.
 1.
 A)
 B)
 C)
 D) (hasta (K))
 2.
 A)
 (...)
 3.
Tercero. (Y así sucesivamente hasta el apartado vigésimoséptimo)

[SJP 19/2006. Fundamentos de derecho]

Piénsese que, en esta sentencia, como ocurre en muchas otras, la exposición de los Antecedentes se extiende a lo largo de 15 páginas, por lo que el lector sin duda agradece el intento de organizar la información expuesta.

b) Uso inadecuado de los tiempos verbales

En otros casos, la delimitación confusa de los eventos relatados se produce por un **uso inadecuado de los tiempos verbales**. Tal inconsistencia en el uso de las formas verbales puede ser fundamentalmente de tres tipos:

- Combinación arbitraria de formas verbales de presente y formas verbales de pasado para narrar los sucesos acontecidos en el pasado.

- Uso incongruente de los tiempos de pasado (por ejemplo, utilización de pretéritos perfectos donde, de acuerdo con la variedad estándar de español, cabría esperar formas del pretérito indefinido).
- Uso antinormativo de formas de gerundio que, debido a su defectividad temporal, impiden “anclar” en un momento preciso la acción descrita por el verbo.

A continuación analizaremos cada uno de estos tres supuestos en las sentencias del corpus.

i. Combinación arbitraria de formas verbales de presente y formas verbales de pasado

El párrafo siguiente (7) ejemplifica el caso común en el que el autor de la sentencia combina de manera indiscriminada formas verbales del pasado y del presente para relatar sucesos pretéritos. Hemos marcado con negrita los verbos, tanto de indicativo como de subjuntivo, implicados en la narración. Tal combinación heteróclita de pasados y presentes con frecuencia confunde la comprensión, puesto que obliga al lector a comprobar si los morfemas verbales de presente se refieren al relato del *pasado* o bien, por el contrario, a acciones relacionadas con el *ahora*, simultáneo, sea al proceso de escritura, sea al de lectura por parte del receptor.

Además de la combinación arbitraria de formas de pasado y de presente comentada, adviértase también en el mismo ejemplo la presencia de la forma verbal arcaica del futuro de subjuntivo *compareciere*¹⁵, así como el uso de un gerundio antinormativo, *contestando*¹⁶:

(7)
SEGUNDO.- Que teniendo por presentada y admitida a trámite la anterior demanda de Juicio Ordinario, se **dió** traslado de la misma a la parte demandada, emplazándola para que en el término legal **compareciere** en autos asistido de Abogado y Procurador, y al Ministerio Fiscal y **contestaran** a la demanda. Que dentro de plazo **se persona y contesta** la parte demandada solicitando que se **desestime** la demanda formulada de adverso y **se condene** a la actora a pagar las costas de este procedimiento. **Contestando** el Ministerio Fiscal en los términos de tenerle por personado y parte informando en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales en el acto del juicio que prevé el artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Civil una vez practicada la prueba declarada pertinente.

[SJPI 5/2010.Madrid: Antecedentes, segundo]

El ejemplo que sigue ilustra el mismo fenómeno de combinación confusa de formas verbales de pasado, de presente y no personales en la narración de un suceso. Como se verá, la mezcla de tiempos de pasado y presente, en combinación con las formas de gerundio, comporta cierta dificultad a la hora de reconstruir los hechos probados y determinar cuándo suceden. La comprensión del relato se ve dificultada también por graves problemas de puntuación, ausencia de determinantes y conjunciones necesarias, falta de especificidad temporal de algunas acciones, problemas de referencia y enumeraciones heterogéneas. A fin de facilitar la identificación del problema de falta de especificación temporal, hemos marcado mediante negrita todas las formas verbales y hemos insertado en color azul la pregunta *¿cuándo?* en los segmentos en los que la ausencia de anclaje temporal se hace particularmente evidente:

(8)
SEGUNDO.- Los hechos de los que trae causa el expediente derivan de que el demandante **ingresa** en el Hospital central de Asturias en fecha 30.4.2004 a fin de ser intervenido en oído izquierdo por desconexión de cadena osicular por movilización de prótesis que le había sido colocada con anterioridad. Para dicha operación **se precisaba** anestesia y, tras la punción el paciente **refirió** dolor a la médico anestesista **continuando** sin embargo esta con normalidad utilizándose como medicamento hipnótico propofol. Tras ser dado de alta al día siguiente (1 de mayo) consta **acude** a servicio de otorrinolaringología el 7.5.2004 y tras comentar en dicho servicio que sentía hormigueo y dolor en brazo derecho **se le remite** a urgencias **diagnosticándosele** de tendinitis **pautándole** férula y antiinflamatorios, al no mejorar **acude** de nuevo a urgencias **¿cuándo?** donde ya **se le diagnostica** de neuropatía radial indicándole analgésicos y

¹⁵ Sobre el uso del futuro de subjuntivo, así como de otros arcaísmos, véase el apartado §9.2.1.4. de este informe.

¹⁶ Un análisis pormenorizado de las patologías interpretativas que acarrea el uso recurrente y antinormativo de las formas de gerundio puede verse en el apartado §7.4.2.1. de este informe.

complejos de vitamina B remitiéndole a neurología. En consulta de neurología **se diagnostica** de neuropatía radial iatrogénica [**¿cuándo?**] y en la exploración **se detecta** neurinoma radial, hipoestesia en región radial mano derecha, fuerza normal, dolor inducido por presión sobre neurinoma y con los movimientos de pronosupinación **pautándole** antiinflamatorios y gabapentina durante un mes. Consta **ha estado** en situación de baja desde 3 de mayo a 24 de junio [**¿del año en curso?**].

[SJCA 2231/2007, Fundamentos de derecho, segundo]

El ejemplo anterior pone de manifiesto unas de las características que debe cumplir una narración factual eficaz: el uso de expresiones de especificación temporal, tal como ocurre en el siguiente ejemplo de buenas prácticas, en el que se ha destacado mediante letra negrita las expresiones lingüísticas que precisan el momento exacto en el que los eventos ocurrieron:

(9)

Tras dos horas y media de estancia de las cuatro personas en el chalet, salieron del mismo **en primer lugar** Inocencia y Romeo (...). Conrado y Juan Francisco salieron **posteriormente**.

[STS núm. 1353/2009, Antecedentes, primero]

ii. Uso incongruente de los tiempos de pasado

En otras ocasiones, la/el profesional que elabora la sentencia utiliza de forma no estándar las formas verbales del pasado. Por ejemplo, tras leer los hechos probados siguientes, en los que hemos destacado mediante subrayado las formas verbales que generan la extrañeza interpretativa, al lector se le plantean una serie de dudas que planteamos tras el fragmento:

(10)

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante D. Artemio viene prestando servicios por cuenta de la empresa demandada Schmidt-Clemens Spain, S.A. (Centracero) desde el 30 de agosto de 2004, ostentando la categoría profesional de operador de hornos en segunda fusión, máquinas, nivel 6.1 y percibiendo un salario bruto mensual, con inclusión de parte proporcional de pagas extraordinarias, de 2.041,73 euros.

El 30 de agosto de 2004 ambas partes suscribieron un contrato de trabajo temporal a tiempo completo, que se convirtió en un contrato de trabajo de duración indefinida el 5 de enero de 2005.

La empresa se dedica a la fabricación de aceros especiales centrifugados, actividad incluida en el sector de la industria siderometalúrgica, y el centro de trabajo se encuentra ubicado en Murieta.

SEGUNDO.- El día 2 de octubre de 2009 la empresa entregó al trabajador carta de despido, con efectos de esa misma fecha, por la comisión de una falta muy grave de trasgresión de la buena fe contractual regulada en el art. 54.2 d) ET y de una falta muy grave prevista en el art. 56 d) del Convenio colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Navarra. La carta obra a los folios 15 y siguientes de las actuaciones, cuyo contenido se da por reproducido.

SÉPTIMO.- Obra en autos la descripción del puesto de trabajo del demandante (fabricación de tubos M-2,3,4,5).

OCTAVO.- El demandante ha comenzado a prestar servicios para la empresa Bosch Siemens, S.A. el 4 de enero de 2010.

[SJS 2-2010, Pamplona, Hechos probados]

En efecto, en el primer hecho probado se afirma que el empleado aludido trabaja (“viene prestando sus servicios”) para Schmidt-Clemens Spain, S.A. En el segundo, se nos informa, sin embargo, de que fue despedido (“El día 2 de octubre de 2009 la empresa entregó al trabajador carta de despido”) y, en el octavo, de que más tarde empezó a trabajar para Bosch Siemens, S.A. (“El demandante ha comenzado a prestar servicios para la empresa Bosch Siemens, S.A. el 4 de enero de 2010”). Por tanto, ¿a cuál de los dos puestos profesionales se alude en el séptimo hecho probado?

iii. Delimitación defectuosa por uso antinormativo de formas de gerundio

En diferentes apartados que componen este informe¹⁷ se analizan y muestran los importantísimos problemas que acarrea para la inteligibilidad de las sentencias españolas el uso abusivo e indiscriminado del gerundio. En concreto, en este epígrafe nos interesa poner de manifiesto que el empleo inadecuado de las formas de gerundio en fragmentos narrativos dificulta, cuando no impide, que el lector pueda ubicar con exactitud el momento temporal preciso de los acontecimientos relatados.

En este sentido, obsérvese que el ejemplo siguiente ofrece una notable dificultad a la hora de establecer con claridad en qué momento exacto ocurren los eventos relatados. Ello es debido a que el gerundio, por carecer de morfemas de persona y tiempo, impide el anclaje temporal (es decir, no indica con precisión ni pasado, ni presente, ni futuro). Hemos destacado mediante subrayado estas formas verbales no personales que generan perplejidad temporal:

(11)

Antecedentes

Primero.-1. Una vez tuvo entrada en este Juzgado el presente asunto, procedente de la oficina de reparto del Decanato -con fecha 19 de septiembre de 2005-, y tras el correspondiente estudio del mismo, *con fecha 26 de septiembre de 2005, se dictó auto, por este Juzgado de lo Penal nº 1 de Albacete, decidiendo* sobre las pruebas propuestas y *señalando* días para la celebración del juicio oral; el comienzo de la celebración del dicho Juicio Oral se fijó para el 3 de abril de 2006, y, su desarrollo, inicialmente, durante dieciocho sesiones (18), dispuestas a lo largo del mes de abril y parte de mayo de 2006 -con los correspondientes descansos y huecos para señalar y celebrar juicios rápidos-, *quedando* ya fijadas en dicho auto todas las sesiones de dicho juicio oral -incluso algunas sesiones eventuales, previstas para incidencias que pudieran surgir-, y, *siendo* ya citados para las mismas todas las partes intervinientes, para evitar suspensiones motivadas en coincidencias de señalamientos a los Letrados (Conf. art. 188.1.6 LECiv 2000, de aplicación al proceso penal).

[SJP 19/2006. Albacete: Antecedentes]

Asimismo, el fragmento muestra otra inadecuación no infrecuente en este tipo de textos: la delimitación confusa de los eventos debida a un manejo poco claro de las fechas en relación con los hechos acontecidos. A continuación, proponemos una versión alternativa del mismo fragmento con el propósito de mostrar que, con muy pocos cambios, es posible ofrecer una lectura más cómoda:

(11bis)

El *19 de septiembre de 2005* entró en este Juzgado de lo Penal nº 1 de Albacete el presente asunto, procedente de la oficina de reparto del Decanato. El *26 de septiembre de 2005*, tras el correspondiente estudio, este Juzgado dictó un auto en el que decidía sobre las pruebas propuestas y señalaba días para la celebración del juicio oral; en concreto, se fijó el comienzo de su celebración para el 3 de abril de 2006. En cuanto al desarrollo del juicio, se fijó inicialmente durante dieciocho sesiones (18), dispuestas a lo largo del mes de abril y parte de mayo de 2006, con los correspondientes descansos y huecos para señalar y celebrar juicios rápidos. En el mismo auto se establecieron también todas las sesiones de dicho juicio oral -incluso algunas sesiones eventuales, previstas para incidencias que pudieran surgir-, e, igualmente, se citaron todas las partes intervinientes, a fin de evitar suspensiones motivadas en coincidencias de señalamientos a los Letrados (Conf. art. 188.1.6 LECiv 2000, de aplicación al proceso penal).

3.3.2. Narraciones en las que “faltan acciones”

En ocasiones, el autor de la sentencia, que conoce bien el relato que ha de narrar porque ha tenido que familiarizarse con él a lo largo del proceso judicial, olvida desautomatizar la síntesis de la narración cuando tiene que consignarla por escrito para que otros receptores diferentes a él puedan conocerla. En efecto, al igual que ocurre en otros tipos de secuencias textuales como la instrucción, es importante que el profesional que elabora una narración no olvide poner en foco cada uno de los eventos que forman parte de la secuencia del relato y que, por tanto, no omita ninguna acción relevante de la secuencia. A veces, sin embargo, eso es precisamente lo que ocurre en algunos documentos jurídicos, en los que el juez o jueza

¹⁷ Véase especialmente el apartado §7.4.2.1.

omite en su narración algunas acciones, lo que dificulta en grado variable la reconstrucción mental que ha de elaborar el receptor, tal como muestra el siguiente ejemplo:

(12)

Inocencio fue detenido en la calle Mar Moliner de la población de Yebes por agentes de la policía [0] en el interior de su vehículo.

[STS núm. 1353/2009, Antecedentes, primero]

Como se ve, en esta secuencia se ha omitido una frase, que reintegramos en letra cursiva:

(12bis)

Inocencio fue detenido en la calle Mar Moliner de la población de Yebes por agentes de la policía [*cuando estaba*] en el interior de su vehículo.

El mismo problema de omisión de acciones de la secuencia se observa también en el fragmento siguiente, si bien en este caso se aprecian, imbricados con la patología analizada, múltiples otras:

(13)

De lo actuado en el acto de juicio oral aparece acreditado que Gines, tenía en su posesión y bajo su cuidado un animal domestico –perro, del que se desconoce la raza–.

El día 8 de noviembre de 2009 sobre las 17.00 horas se encontraba Gines, y sin motivo alguno, cepillando bruscamente y golpeando en cuello y golpeando a patadas al animal domestico, sobre el que alegó poder hacer con él lo que quisiera. Dicha actitud y agresión fue observada por testigos que le recriminaron dicha actitud, asi como la policia compareciente.

[SJI 3/2009, Hechos probados]

3.3.3. Cuando narración y descripción se mezclan indiscriminadamente

Al inicio de este apartado señalábamos que la descripción constituye una secuencia textual consustancial a la redacción de muchos géneros jurídicos y, más concretamente, a la elaboración de la sentencia. En efecto, describir las características de objetos o de personas implicados en el proceso judicial forma parte de la confección de la sentencia. Es por ello que resulta particularmente importante que los redactores de sentencias sean conscientes de en qué momento están narrando una sucesión de eventos y en qué momento, en cambio, están describiendo elementos que forman parte de esos eventos. Formulado en otros términos: los jueces han de incorporar entre sus conocimientos de técnicas de escritura profesional experta la capacidad de discriminar qué oraciones de su texto tienen como objetivo la narración y cuáles la descripción.

Cuando los redactores de sentencias no tienen tal conciencia de la necesidad de segmentar y delimitar de manera adecuada narración y descripción –tal como, de hecho, ocurre con frecuencia- encontramos con profusión fragmentos como el que sigue. A fin de facilitar la observación de la mezcla entre unidades narrativas y descriptivas, hemos destacado mediante subrayado los segmentos descriptivos. Adviértase también que, a la imbricación de relato y descripción, se suma el miembro final, de tipo diferente, deductivo-argumentativo, cuyo inicio hemos destacado mediante letra cursiva. Finalmente, hacemos hincapié, una vez más en la longitud del párrafo y de cada una de las dos extensas oraciones que lo componen:

(14)

9º De otra parte, resulta que, según informa la Guardia Civil que levantó el atestado y posteriores ampliaciones (y, cuyos miembros más destacados, GGCC con TIPs NUM020 , NUM021 y NUM022 , han comparecido en la sesión de juicio celebrada el 20 de abril de 2006), del informe emitido por la compañía eléctrica Iberdrola (folio 667 de autos), la línea de alta tensión, que precisamente pasa por encima del punto donde se produjo el accidente, tuvo una caída de tensión en un breve espacio de tiempo, que sin duda se debió al choque producido entre los trenes, siendo la hora de caída de la tensión la de 21 horas, 42 minutos y 09 segundos -según el horario de Iberdrola (folio 667)-, y, dicha señal horaria es fiable, pues está controlada con la hora oficial y los ordenadores realizan los registros y la rectifican cada quince minutos sincronizándola con la emisora alemana DCF 77 (folio 703 y 667), de ahí que hayamos fijado como hora exacta de la colisión dicho momento. Pues bien, partiendo de referido momento, y restando al mismo el tiempo de 1 minuto y 28 segundos, que es el menor tiempo -duración temporal aceptada

también por la defensa del acusado en su informe de la vista oral del día 11 de mayo de 2006-, que se empleó en la prueba número cuatro de la reconstrucción judicial realizada en fase de instrucción el día 26 de junio de 2003 (folios 571 y 675) en salir el TALGO con aceleración máxima desde Chinchilla hasta el lugar del accidente (folio 703, 704 y concordantes), nos da que el TALGO salió de Chinchilla a las 21 horas, 40 minutos y 41 segundos; y en cuanto a la activación del circuito de sonería lado Navajuelos, su momento se obtiene restando al momento de colisión cero minutos y 57 segundos, tiempo empleado en recorrer los 789 metros existentes entre el circuito de sonería y el punto de colisión (folio 703), resultando que el mercante pisó el circuito de proximidad lado Navajuelos a las 21 horas, 41 minutos y 12 segundos.

[SJP 19/2006. Albacete. Fundamentos]

3.3.4. Cuando la enumeración insertada enreda el hilo narrativo

Del mismo modo que en el apartado anterior se ha analizado la combinación no siempre exitosa de segmentos narrativos y segmentos descriptivos en una misma y por lo general interminable oración, en este epígrafe pondremos de manifiesto que, de manera reiterada, los profesionales que elaboran sentencias han de componer párrafos que contienen listas o enumeraciones insertas en el interior del relato¹⁸. A menudo, esta necesaria combinación se convierte en una mezcla imprecisa en la que los elementos de la enumeración se insertan sin previo aviso en el hilo del relato, enredando el discurrir de la secuencia narrativa, tal como puede comprobarse en el ejemplo siguiente.

A fin de que se visualice fácilmente la mezcla de ambas secuencias textuales (narración y enumeración) en una misma oración, hemos distinguido tipográficamente el segmento narrativo del descriptivo; este último aparece en azul y negrita:

(15)

En las primeras horas del día 24 de diciembre de 2003, en torno a las 7 horas, Juan Pedro y Jose Ramón llegan, nuevamente por separado, al aparcamiento del barrio de Larratxo, se cambian de ropa, se colocan sendas pelucas para no ser reconocidos y salen portando, **el primero, una de las maletas conteniendo 28 kilogramos de dinamita marca "Titadyne", un detonador y una pistola marca HS de calibre 9 mm parabellum con el número de fabricación borrado y un cargador con quince cartuchos más uno en la recámara y, el segundo, Jose Ramón, otra maleta con 25 kg de dinamita "Titadyne", un detonador y una pistola marca HS, también de 9 mm parabellum, con número de fabricación NUM006, un cargador con quince cartuchos más uno en la recámara y un reproductor de cassette tipo "walkman" de la marca Aiwa, modelo Ta186, conectado a un temporizador marca Casio y a unos altavoces amplificados alimentados por pilas cuya carga estaba agotada.**

[SAN 25/2005 de 29 abril, Antecedentes de Hecho, quinto]

Como se ve, el fragmento inserta subrepticamente en el seno de la narración y mezclándola con ella en una misma oración una doble enumeración un tanto desordenada, lo que convierte finalmente el párrafo en una megaoración considerablemente equívoca. En estos casos, es recomendable que la persona que elabora la sentencia delimite con mayor claridad cuál es el segmento estrictamente narrativo y dónde, en cambio, se inicia la enumeración. Asimismo, si la enumeración es doble, como en este caso, es conveniente que se indique así al lector, tal como proponemos en la versión alternativa del fragmento anterior en la que, entre otros leves cambios, se han introducido varios puntos y seguido:

(15bis)

En las primeras horas del día 24 de diciembre de 2003, en torno a las 7 horas, Juan Pedro y Jose Ramón llegan, nuevamente por separado, al aparcamiento del barrio de Larratxo, se cambian de ropa, se colocan sendas pelucas para no ser reconocidos y **salen portando sendas maletas que contenían material delictivo. La maleta que llevaba el primero contenía:** 28 kilogramos de dinamita marca "Titadyne", un detonador y una pistola marca HS de calibre 9 mm parabellum con el número de fabricación borrado y un cargador con quince cartuchos más uno en la recámara. **La maleta que transportaba el segundo, José Ramón, contenía:** 25 kg de dinamita "Titadyne"; un detonador; una pistola marca HS, también de 9 mm parabellum, con número de fabricación NUM006; un cargador con quince cartuchos más uno en la recámara; y un reproductor de cassette tipo "walkman" de la marca Aiwa, modelo Ta186, conectado a un temporizador marca Casio y a unos altavoces amplificados alimentados por pilas cuya carga estaba agotada.

¹⁸ De hecho, como se verá en el capítulo 4 de este informe, la enumeración constituye una de las operaciones textuales más recurrentes y estructurales de muchos géneros jurídicos, en particular, de la sentencia.

3.3.5. La imbricación confusa de narración y argumentación

La argumentación¹⁹ es, sin duda, la secuencia textual que mejor caracteriza el género jurídico de la sentencia, género que constituye como tal un ejercicio de razonamiento. La elaboración de una argumentación clara, robusta y consistente con los principios jurídicos constituye, por tanto, un objetivo primordial de todo juez. Esta argumentación no precede a los acontecimientos que constituyen el núcleo del proceso jurídico, sino que se derivan de ella. De ahí que con frecuencia –casi podría decirse que de modo necesario–, la argumentación de la sentencia esté estrechamente vinculada a lo narrado. Ahora bien, la vinculación entre hechos probados y razonamiento elaborado por el juez no debe traducirse lingüísticamente en un conglomerado confuso de fragmentos de uno y otro tipo mezclados sin ningún tipo de delimitación sintáctica, tal como puede comprobarse en el siguiente ejemplo, en el que identificamos con subrayado los fragmentos narrativos insertos en la argumentación:

(16)

La sentencia objeto de apelación estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo en su día interpuesto por don Carlos Miguel , que actúa en su propio nombre y en el de sus hijos Aurelio –hoy mayor de edad- y Rosa , contra la desestimación presunta por silencio administrativo, ampliado a Decreto de 5 de julio de 2007 , de la reclamación patrimonial formulada ante la Diputación Provincial de Zamora en fecha 11 de diciembre de 2006, declarando referida resolución conforme a Derecho, desestimando la condena solidaria solicitada frente a la Administración demandada y condenando a la Sociedad de Cazadores "El Castro" a que indemnice al actor, junto con sus hijos menores de edad, en la cantidad de 210.062,79 €, siendo 121.499,83 € la que corresponde al actor y 44.281,48 € a cada uno de sus hijos menores, más los intereses legales devengados desde la fecha de notificación de la sentencia, así como la responsabilidad directa y solidaria de la entidad Mutuasport, Mutua de Seguros Deportivos, hasta los límites pactados en la póliza, todo ello por entender, en esencia, que la normativa actual sobre responsabilidad por atropello de especies cinegéticas instaurada por la Disposición Adicional Novena de la Ley 17/2005, de 19 de julio (RCL 2005, 1527), no introduce novedades sustanciales respecto de la anterior, debiendo entenderse que única y exclusivamente puede reprocharse la responsabilidad del accidente al conductor del vehículo cuando sea consecuencia del incumplimiento de las normas de circulación, incumplimiento que en este caso ni se ha alegado ni siquiera intentado, descartando el atestado que el conductor de la motocicleta -conocedor de la vía- circulase a velocidad excesiva o de forma negligente, pues más bien lo hacía con precaución y a una velocidad posiblemente inferior a la permitida; que aunque está acreditado que en el lugar del accidente no había señal vertical advirtiendo del peligro de animales sueltos en la calzada, y que son habituales en esa vía los siniestros provocados por la irrupción de animales, tal omisión no resulta suficiente para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Administración titular de la carretera pues no concurre relación de causalidad entre el accidente y la falta de señalización ya que la única causa adecuada y eficiente del siniestro fue la irrupción repentina del jabalí en la calzada procedente de un coto de caza limítrofe, sin que el conductor pudiera realizar maniobra evasiva o de frenada, siendo inevitable el accidente, que se habría producido igualmente aún cuando hubiera existido señal de peligro; que no derivándose el accidente de una acción de cazar, sin embargo, no se ha tratado de acreditar por el titular del aprovechamiento cinegético la adopción de una sola medida (vallado, barreras de olores, pasos subterráneos) para evitar que los animales deambulen libremente o atraviesen por las vías públicas limítrofes a los terrenos cinegéticos, siendo insuficiente que haya cumplido el plan de conservación del coto exigido por la Administración, máxime conociendo la existencia de una superpoblación de jabalíes en la zona, de la que se aprovechan los cazadores del coto; que no se han discutido las cantidades reclamadas en concepto de indemnización; y que procede la condena de la aseguradora del coto de caza en virtud de la póliza y hasta su límite por víctima y siniestro, sin que ello no obstante haya lugar a la condena al abono de los intereses previstos en el artículo 20 de la LCS (RCL 1980, 2295) por estimarse concurre causa justificada de la falta de pago o consignación al resultar discutida la responsabilidad del accidente,

[STSJ Castilla y León 1310/2009, Valladolid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Fundamentos jurídicos: primero]

En primer lugar, cabe destacar que este fragmento constituye un excelente ejemplo de megapárrafo (o "párrafo-tocho"²⁰). Nótese que el autor introduce todas las premisas, que son larguísimas y complejas, con subordinadas completivas en una sola oración. A fin de que el lector advierta con mayor comodidad la presencia de premisas, hemos marcado las conjunciones en amarillo.

¹⁹ El análisis de las estrategias argumentativas se lleva a cabo en el capítulo 3 de este informe.

²⁰ Sobre las patologías derivadas de la elaboración de párrafos, puede verse el capítulo 1 de este informe.

En segundo lugar, adviértase que, al menos, en las dos primeras premisas del razonamiento se incorporan segmentos narrativos. Este procedimiento es muy habitual ya que, de hecho, se recomienda que los jueces argumenten en materia de hechos de este modo, es decir, de forma secuenciada, y no empezando con toda la narración para proceder luego a explicar lo que de ella se deriva. Ahora bien, si el objetivo es evitar en el futuro la elaboración recurrente de fragmentos indigestos como el anterior, entonces es importante que los jueces conozcan los mecanismos lingüísticos adecuados para argumentar de forma secuenciada e inteligible. Es evidente que, como muestra paradigmáticamente el ejemplo analizado, es importante que las narrativas estén bien construidas, porque constituyen la base de la argumentación que dará lugar al fallo. Salta a la vista que el problema fundamental es la "frase-única"; hacer frases más cortas es un primer paso para avanzar en la claridad de estos fragmentos.

3.3.6. ¿Quién realiza la acción narrada? Problemas para atribuir el agente

Como se indicó en el epígrafe 2.1., una de las características de una narrativa eficaz que forma parte de un género textual de ámbito profesional reside en que el lector pueda interpretar sin dificultad **quién** realiza la acción narrada. Ciertamente, saber quién lleva a cabo los hechos constituye una información de rango básico de cualquier narración, especialmente en la jurídica, en la que el propósito es, finalmente, atribuir culpabilidad o inocencia a alguien.

Para que el lector pueda establecer fácilmente quién es el agente de una acción, son de gran ayuda recursos lingüísticos como los nombres propios (*Juan, María y Clara...*), los nombres comunes clasificadores (*el agente, la víctima, los terroristas*), los pronombres personales (*él, ellas, etc.*), así como también los morfemas de persona del verbo, que indican al receptor del relato, fundamentalmente, si el sujeto es singular o plural (de este modo, *corrió* señala que el sujeto es singular, mientras que *se detuvieron*, por ejemplo, indica que el agente es plural).

En relación con este último recurso lingüístico, los morfemas de persona de la flexión verbal, dado que, como se ha señalado en diversas ocasiones, el uso indiscriminado del gerundio caracteriza la escritura jurídica, no sorprende que en muchas de las narraciones que forman parte de las sentencias resulte dificultoso establecer quién es el agente de la acción, debido, precisamente, a la falta de especificidad de persona que acarrea la forma no personal del gerundio (puesto que no indica la persona gramatical *-yo, tú o él*, o las correspondientes formas de plural-).

Esta falta de precisión sobre la persona gramatical que conlleva el uso arbitrario del gerundio se agrava en casos como el que ilustra el ejemplo siguiente, en el que existe más de un candidato a poder interpretarse como el agente de la acción expresada por esta forma no personal. Indicamos mediante subíndices la ambigüedad en la posible atribución del agente (es decir, de los posibles sujetos de los verbos destacados):

(17)

Estando los cuatro procesados, en el interior del chalet citado se observó por la vigilancia **policial**₂, que en la zona de garaje se oían golpes característicos de la rotura y desguazamiento de objetos y caída de herramientas, así como las voces de los procesados, por lo que **accediendo**_(1, 6 27) a través del acceso público a la citada zona común de acceso a los garajes de esta parte de la Urbanización, **podieron**_(1, 6 27) comprobar que tales ruidos provenían del interior del garaje correspondiente al chalet ocupado por los cuatro procesados.

[Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 1353/2009]

El ejemplo de (17) muestra de forma paradigmática que las formas de gerundio crean una ambigüedad poco deseable respecto de quién realiza las acciones expresadas. ¿Quiénes *accedieron* y *podieron comprobar*? ¿Los cuatro procesados -que es la versión gramaticalmente más plausible-? ¿O los policías?, que es la interpretación inferencial que realizamos de esta oración gracias a nuestro conocimiento del mundo -no, desde luego, gracias a las marcas gramaticales usadas-.

El párrafo narrativo que sigue pertenece a la fase de los Fundamentos de Hecho. En él aparecen dos formas de gerundio (que hemos marcado en negrita) de las que se hace realmente complicado recuperar el sujeto a través de la información brindada por el texto.

(18)

PRIMERO.- Contra la sentencia de primera instancia que declara a Dña. Beatriz totalmente incapaz para gobernarse por sí misma y administrar sus bienes, **acordando** se proceda a la constitución de la tutela, nombrándose a tal fin al Instituto Tutelar de Bizkaia, se ha interpuesto recurso de apelación por Dña. Beatriz **denunciando** una errónea valoración de prueba porque la minusvalía que padece la misma no le impide desenvolverse en sus ocupaciones habituales y rutinarias dentro de la actividad que desarrolla en el caserío, e interesando se nombre a su hermana Dña. Mari Luz como tutora en vez del Instituto Tutelar de Bizkaia.

[SAP BI 560/2008, Bilbao. Fundamentos de Derecho: primero]

En este fragmento, ¿quién *acuerda* la constitución de la tutela? En cuanto a quien *denuncia* , tras una nueva lectura (o varias), parece deducirse -mediante lo que los especialistas denominan una *interpretación caritativa* - que es Doña Beatriz, presentada solapadamente como sujeto de la acción descrita por el gerundio a través de una secuencia, por demás, manifiestamente antinormativa.

Recuperar quién realiza la acción expresada por estos gerundios que jalonan las narraciones jurídicas deviene todavía más complicado (y confuso) cuando la narrativa constituye un caso de discurso referido²¹, es decir, cuando el juez o jueza narra lo que otra persona relató, como ocurre en el ejemplo que sigue:

(19)

En relación con el funcionamiento del cuadro de mandos de la Estación de Chinchilla, en la fecha de autos, hemos de afirmar que tras la prueba practicada en el acto del juicio oral, resulta que ha quedado acreditado que el funcionamiento del mismo era totalmente correcto, según declaró el factor_(¿?) de Circulación Matías, que relevó al acusado_(¿?) a las 22 25 horas, **afirmando** que el día del relevo no estaba averiado (a preguntas del Letrado Sr. Santos, sesión de juicio oral del 24 de abril de 2006), **insistiendo** que no recordaba averías en el citado Cuadro de Mandos (misma sesión de juicio oral, a preguntas de la Letrada Sra. Olivares); también el testigo Juan Manuel, factor de circulación de Chinchilla, declaró que no recuerda averías en el cuadro de mandos (a preguntas del Sr. Fiscal, sesión de juicio oral del 21 de abril de 2006); en similar sentido, Luis Pablo, también factor de circulación de Chinchilla, que dijo que el cuadro de mandos de Chinchilla funcionaba bien (a preguntas del Sr. Fiscal, sesión de juicio oral del 24 de abril de 2006); y, finalmente, el perito Don. Juan Alberto, también afirmó que el cuadro de mandos de la Estación de Chinchilla no tenía avería ni incidencia alguna (a preguntas del Sr. Fiscal, sesión de juicio oral del 27 de abril de 2006, por la mañana).

[SJP 19/2006. Albacete: Fundamentos, p. 40]

¿Quién *afirma* , según el texto? ¿ *El acusado* , que es el sintagma nominal con marca semántica de [+humano] que está más cerca de la forma verbal? ¿ *El factor* , que es quien relata indirectamente por boca del juez? ¿ *O* , quizá, tal vez, el propio juez? Releyendo el texto se interpreta que quien probablemente afirma es el factor, ya que es quien está declarando, lo que no obsta para que la construcción de gerundio resulte ambigua, además de antinormativa.

²¹ Sobre la importancia de los procedimientos de discurso referido y, en general, de polifonía asociados a la elaboración de los géneros jurídicos, así como para la descripción de las patologías derivadas de un uso poco experto de tales mecanismos, véase el apartado §10.2.3.

LA ELABORACIÓN DE LAS SECUENCIAS TEXTUALES (II): LA ARGUMENTACIÓN

1. LA ARGUMENTACIÓN EN LOS TEXTOS JURÍDICOS

La argumentación es un componente esencial en el quehacer de todo jurista, que continuamente en sus escritos ha de introducir razones para justificar sus propuestas, sus decisiones, su versión sobre ciertos hechos, etc. Así, por ejemplo, entre las actuaciones habituales de un abogado, se encuentra la de argumentar en la sala de juicio en favor de una solución jurídica determinada, con el propósito final de persuadir al tribunal o, en su caso, a un jurado popular. Del mismo modo, la argumentación desempeña un papel esencial en el trabajo de los jueces, que tienen, por mandato legal, la obligación de motivar las sentencias que emiten; ese deber de argumentar constituye una garantía democrática que pretende evitar la arbitrariedad en las decisiones jurídicas²².

Por todo ello, resulta fundamental que los juristas sean conscientes de los elementos implicados en la confección de un texto argumentativo. Por una parte, puede abordarse el análisis del texto argumentativo en relación a su contenido; el propósito de este enfoque sería analizar, por ejemplo, las formas de razonamiento, los tipos de materiales jurídicos empleados en una argumentación e, incluso, las falacias en las que pueden incurrir las argumentaciones del Derecho. Esta primera faceta de la argumentación sería, como es obvio, la que se estudia desde los estudios jurídicos. Por otra parte, el texto argumentativo posee una evidente dimensión lingüística, dado que, en última instancia, argumentar es sustentar una idea con palabras²³. Por ese motivo, el dominio de los mecanismos lingüísticos y discursivos propios de la confección de argumentaciones resulta una habilidad esencial para el adecuado desarrollo de las tareas propias de los juristas.

²² Véanse, sobre este punto, las investigaciones de algunos juristas, como Atienza (2006), Ezquiaga (1987) e Igartua (2003), entre otros.

²³ Algunas investigaciones desde la lingüística sobre la argumentación en las sentencias judiciales son Bourcier y Bruxelles (1995), Feteris (2002), López Samaniego (2006), Mazzi (2005, 2006, 2007), Salmi-Tolonen (2005).

En los apartados siguientes nos ocuparemos de esa segunda faceta de la argumentación jurídica, es decir, la que tiene que ver con las cuestiones lingüísticas y discursivas de los textos que escriben los juristas.

1.1. Las características lingüísticas de una argumentación eficaz

Es por todos sabido que argumentar consiste en ofrecer razones que apoyen una determinada tesis. En pocas palabras, una argumentación puede definirse como una *conclusión* sustentada sobre una o varias *premisas*. En nuestra vida corriente, proponemos con frecuencia y en situaciones muy diversas razones que respaldan nuestras opiniones o nuestros objetivos: argumentamos para convencer a nuestra familia sobre cuál debe ser el destino de las próximas vacaciones y argumentamos también ante nuestro jefe, con el fin de conseguir un aumento de sueldo. En tales situaciones, podemos hacer uso de argumentos muy diversos, que pueden llegar incluso a lo más emocional; a nuestro alcance están, en fin, recursos y estrategias múltiples.

Sin embargo, en contextos como el judicial, **una argumentación tiene que cumplir unos requisitos determinados, para hacer de ella algo racional y, además, eficaz y comprensible**. Así, cuando el jurista se propone escribir una argumentación, tiene que tener en cuenta, por lo menos, dos reglas fundamentales:

-El orden de la argumentación ha de ser claro y natural. Por ello, es conveniente que el texto siga uno de estos dos esquemas: (a) al inicio deben ponerse todas las premisas y, al final, la conclusión; o, al revés, (b) la conclusión debe ir al principio y, tras ella, las premisas que la apoyan.

-Es necesario que el texto proporcione indicaciones al lector sobre cuáles son las premisas y cuál es la conclusión a la que conducen.

Los apartados siguientes versan sobre los principales errores lingüísticos y discursivos en los que incurren los textos judiciales y, en concreto, la sentencia judicial. El apartado 3.2. se ocupará de las incorrecciones relacionadas con la regla relativa al orden natural de la argumentación. Por su parte, en el apartado 3.3. se analizan los problemas más frecuentes en la marcación de las premisas y la conclusión. Hay que decir, para acabar, que esos errores no son, de ningún modo, una cuestión menor, sino que provocan en el acto comunicativo en el que está inserta la sentencia un par de problemas trascendentales. En primer lugar, hacen que la motivación de la sentencia sea incomprensible para el ciudadano; en segundo lugar, dificultan notablemente la interposición de recursos, que plantean, muy a menudo, cuestiones relativas a la argumentación de una sentencia.

2. Dificultades de comprensión relacionadas con el orden de las premisas y la conclusión

2.1. Dificultad en la identificación de las premisas o la conclusión

Dado que argumentar es proponer razones en defensa de una conclusión o tesis, es imprescindible que el lector de un texto argumentativo sea capaz de identificar clara e inequívocamente cuáles son las premisas y cuáles las conclusiones. Así, por ejemplo, el texto de (1), aunque tiene problemas de puntuación notables, posee dos virtudes destacadas en la señalación de las premisas. En primer lugar, el juzgador ha incluido una expresión metadiscursiva de tipo predictivo (“por cuatro evidentes razones:”) que indica que a continuación se incluyen los motivos que sustentan la decisión y, además, que esos motivos son cuatro. En segundo lugar,

cada una de las razones se introduce con una marca de enumeración (“primera”, “segunda”, “tercera” y “cuarta”)²⁴.

(1)

También se ha descartado, tras la practica de la prueba en el acto del juicio oral, que alguna persona ajena a la Estación hubiera entrado en el Gabinete de Circulación de la misma y hubiera accionado los mandos de cambio del semáforo o que se hubiera accionado él sólo, **por cuatro evidentes razones: primera**, porque -según se ha constatado tras presenciar la practica de la prueba- no se vio por el lugar de los hechos en los momentos previos y coetáneos a la intervención del factor en relación con el TALGO 226, a ninguna persona ajena -como ha declarado incluso el propio factor-, **segunda**, pues accionar dicho semáforo no es operación sencilla para un profano, dado que han de activarse dos botones al tiempo, de forma simultánea o sucesivamente con ambas manos, y alejados entre sí, lo cual entraña una elevada dificultad para un profano, **tercera**, dichos botones se activan en stick -es decir, pulsándoles hacia dentro, de modo que a pesar de desaparecer las causas que motivaron su cierre, no vuelven a abrirse hasta que no se efectúa un nuevo mando sobre ellos-, y, por tanto, su activación ha de obedecer a un acto físico que entrañe cierta fuerza, siendo imposible que se activen solos, pues para ello es preciso vencer la resistencia de una especie de muelle que tienen dichos botones y que les mantienen en su posición, y **cuarta**, tras el siniestro se verificó el correcto funcionamiento del cuadro de mandos de la Estación de Chinchilla entonces existente -en la actualidad se ha sustituido por un ordenador, debido al avance de las nuevas tecnologías-, y se pudo comprobar que funcionaba perfectamente el sistema en stick a que nos hemos referido (vid informe del perito Don. Juan Alberto).

[SJP 19/2006, Albacete, fundamentos 2.3.2.2^o]

Conviene hacer énfasis en la importancia de incluir expresiones que, como en el ejemplo anterior, introduzcan y presenten las razones que sostienen una conclusión. Este recurso es, probablemente, el más eficaz a la hora de transmitir cómo se configura un argumento, en particular, en textos que, como la sentencia, contienen secuencias argumentativas muy complejas y extensas. En ese sentido, resulta también una buena práctica la que se lleva a cabo en la sentencia que se incluye a continuación, en la que se explicita que seguidamente se tratarán las premisas (en el fragmento señalado en negritas), y para cada una de las cuales el juzgador dedica un apartado propio, marcado en cifras (2.1., 2.2., etc.)

(2)

2. Con carácter previo a entrar a analizar la concurrencia de tales requisitos, y por exigencias de lo dispuesto en el artículo 120.3 de la Constitución, **es preciso explicitar las razones de haber declarado probados tales hechos**, dando así debido cumplimiento a las exigencias de motivación fáctica de la sentencia.

2.1. La esencia de este proceso penal, desde la perspectiva de la valoración de la prueba, se centra en...

[SJP 19/2006, Albacete, fundamentos 2.3.2.2^o]

2.2. Incisos que interrumpen el proceso de argumentación

Como se viene diciendo, es muy aconsejable que los elementos de la argumentación puedan ser identificados claramente. Sin embargo, uno de los errores más comunes en la argumentación judicial consiste en introducir largos incisos (esto es, explicaciones de tipo secundario) en el seno de las premisas o de la conclusión, de modo que la lectura se vuelve muy dificultosa. El fragmento siguiente es una buena muestra de cómo un inciso, destacado en rojo, puede partir en dos la tesis de la argumentación (“procede reconocer ponderadamente la cantidad de 70.000 euros”), que aparece en negrita, haciendo que la comprensión se vuelva muy costosa:

(3)

Por lo que respecta a la incapacidad derivada del siniestro, la misma ha sido calificada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en el grado de permanente total para la profesión habitual y, no habiendo podido demostrar la aseguradora demandada, a pesar de su reiterado seguimiento personal materializado en dos informes de SYS, Norte, detectives privados, de los cuales, uno de ellos, no se ha considerado oportuno unir a los autos, que el actor continúe en el ejercicio de la que era su profesión en el momento del siniestro, **procede reconocer ponderadamente, en función de la edad del inválido, de su formación y de la muy remota posibilidad de que logre un contrato de trabajo por cuenta ajena de nivel similar al que**

²⁴ Sobre el mecanismo de la enumeración, véase el capítulo 4. En concreto, sobre los marcadores de enumeración de premisas, véase el apartado 3.3.

podiera disfrutar mientras desempeñaba con normalidad su profesión, de acuerdo con la previsión de la tabla IV del Baremo, la cantidad de 70.000 euros.

[STS 12/05, Antecedentes de hecho, tercero, e)]

Al margen de otros problemas de puntuación (que se abordan específicamente en el capítulo 6) y de marcación argumentativa (de los que nos ocuparemos más adelante), el ejemplo anterior podría mejorar sustancialmente si el inciso se situase al final y no en el interior de la conclusión:

(3bis)

Procede reconocer ponderadamente la cantidad de 70 000 euros, de acuerdo con la previsión de la tabla IV del Baremo, en función de la edad del inválido, de su formación y de la muy remota posibilidad de que logre un contrato de trabajo por cuenta ajena de nivel similar al que pudiera disfrutar mientras desempeñaba con normalidad su profesión.

Del mismo modo ocurre en el fragmento siguiente, en el que los numerosos incisos, que aparecen subrayados, dificultan de forma notable que el lector sea capaz de seguir el hilo del discurso, que adquiere un estilo de “argumentación intermitente”:

(4)

Así quien de modo consciente, aunque no pertenezca a la organización terrorista contribuye a la consecución de sus objetivos, y no de modo ocasional o esporádico, sino continuo a través de diversos artículos periodísticos publicados en periódicos del entorno de la izquierda abertzale, aportando elementos favorecedores de aquella actividad, está realizando una actividad delictiva encuadrable en lo que cabría entender como un acto de colaboración con organización terrorista, especialmente si por sus conocimientos, entorno en el que se desarrolla su actividad, y ámbito social en el que se desenvuelve, es consciente de los datos que brinda, el tratamiento de la información, no contribuye sólo a la información pública o censura social necesaria en toda sociedad democrática, por agrio que sea el contenido de la información obtenida lo sea frente a estructuras socio-políticas, sino que se introduce en la dinámica de favorecer la estrategia terrorista.

[SAN 5247-2006, Fundamentos, primero, a)].

Frente a esa versión, podría recomendarse una redacción alternativa, en la que la cantidad de incisos insertos en el seno de la argumentación disminuyese, en pro de la legibilidad. En la propuesta de mejora de (4bis), algunos incisos han cambiado de lugar, conformando una oración independiente, que se ha destacado en rojo; otros, han sido eliminados porque resultaban redundantes; y, por su parte, el último inciso, destacado en azul, se colocado al final de la frase en la que estaba, y no en el medio. El resultado es un texto más sencillo de leer:

(4bis)

Así, quien de modo consciente contribuye a la consecución de los objetivos de la organización terrorista a través de diversos artículos periodísticos publicados en el entorno de la izquierda abertzale está realizando una actividad delictiva encuadrable en lo que cabría entender como un acto de colaboración con organización terrorista. No es necesario que esa persona pertenezca a la organización terrorista, pero sí se requiere que su contribución no sea ocasional o esporádica, sino continua, aportando elementos favorecedores de la actividad terrorista.

Esa actividad se considerará un acto de colaboración con organización terrorista, especialmente, si la persona es consciente de que los datos que brinda se introducen en la dinámica de favorecer la estrategia terrorista, y no sólo contribuyen a la información pública o la censura social necesaria en toda sociedad democrática.

2.3. Los saltos argumentativos

En algunos casos, la dificultad para comprender cómo se articula una argumentación radica en que se producen saltos argumentativos difíciles de seguir al menos para el lector no jurista. A menudo esos saltos se producen en situaciones en las que una premisa conduce a una conclusión primera de la que se extrae, a continuación, una segunda conclusión; es frecuente que los juristas, habituados a un argumento que se repite y que es conocido por la comunidad de expertos en Derecho, omitan pasos intermedios de argumentaciones de este tipo. Así, en una argumentación que se configura según el esquema argumentativo <[premisa —> conclusión 1] —> conclusión 2>, se produce un salto cuando no se explicita la conclusión 1, esperando que el lector del texto la sobreentienda. Ese es el error fundamental del texto

que sigue, en el que se produce un salto (localizado en el fragmento en negrita) que resulta imposible de salvar, al menos, para el lector no jurista:

(5)

El Tribunal en el ámbito del art. 741 de LECrim ha contado para reputar desvirtuada la presunción de inocencia a que se refiere el art. 24.2 CE y llegar al relato de hechos probados que antecede con las siguientes pruebas:

Declaraciones policiales de Juan Pedro (f. 296 y 297 y siguientes) que no fueron ratificadas antes el Juez instructor, donde sólo dijo que habían sido obtenidos mediante "malos tratos físicos y psicológicos" (f. 427).

En la vista oral se acogió a su derecho a no declarar.

Sin embargo, el tribunal las valora en relación con otras pruebas objetivas, dándoles credibilidad en cuanto que admite su pertenencia a ETA. desde enero de 2003 (f. 297) y reconoce los hechos imputados, tanto referidos a la maleta con 28 Kg de explosivo desactivada en el tren Intercity Irún-Madrid (f.298, 299 y 305), cuanto en lo relativo a los artilugios explosivos colocados en las vías ferreas de las líneas Zaragoza-Logroño y Zaragoza-Lérida (f. 304).

[SAN 25/2005]

Para que la argumentación del fragmento anterior fuese más clara y comprensible, sería recomendable incluir todos los pasos argumentales que ha seguido el juzgador. En el texto previo podría, por ejemplo, introducirse un segmento informativo como el que aparece subrayado en la propuesta alternativa:

(5bis)

En la vista oral [Juan Pedro] se acogió a su derecho a no declarar, lo cual podría provocar que este Tribunal no considerase sus declaraciones policiales. Sin embargo, el tribunal las valora en relación con otras pruebas objetivas y da credibilidad al hecho de que [en sede policial] admitió su pertenencia a ETA.

2.4. La falta de señalización del encadenamiento de argumentaciones

Una argumentación es, como se ha dicho, el enlace entre premisas y conclusión. No obstante, en el proceso de razonar y motivar una decisión jurídica no es nada habitual que una única argumentación sea suficiente para obtener el fallo. En realidad, los fragmentos argumentativos judiciales son encadenamientos de argumentaciones sencillas, en las que las conclusiones de unas funcionan como premisas de otras, que, de igual manera, contribuyen al sostenimiento de una conclusión principal.

Así, el fragmento de (6) contiene una ilustración de un encadenamiento de dos argumentaciones, que se pueden representar del modo siguiente:

Premisa 1: la realidad de la persona de la presunta incapaz (Dña. Beatriz)

Premisa 2: el informe pericial

Premisa 3: la audiencia de sus familiares

Conclusión A: retraso mental que le permite desenvolverse de forma autónoma para hábitos y rutinas, pero, para cuestiones no cotidianas, necesita de la ayuda de terceras persona.

↙ Premisa 1: retraso mental que le impide desenvolverse en cuestiones no cotidianas

Conclusión B: Dña. Beatriz precisa curatela

(6)

Aplicando la doctrina anterior al caso de autos, a la vista de la realidad fáctica de la persona de la presunta incapaz y de la prueba practicada, esto es, el informe pericial de fecha 23 de mayo de 2.007 así como el reconocimiento judicial de la apelante Dña. Beatriz por este Tribunal y de la audiencia de sus familiares, **[CONCLUSIÓN A:] se aprecia en Dña. Beatriz -aparte de una importante carencia de integración social por el desenvolviendo reducido de su vida al ámbito del caserío y la dificultad para comprender y expresarse en castellano- un retraso mental leve-moderado que le permite desenvolverse de forma autónoma para hábitos y rutinas, siendo que todo aquello que exceda de lo cotidiano, precisa la ayuda de terceras personas, tanto en lo que se refiere al gobierno de su persona como a la administración de sus bienes, [CONCLUSIÓN B:] por lo que precisa se complemente, integre y asista en el aspecto personal y patrimonial mediante la institución intermedia de la curatela** (art. 287 CC,SsTS. 24 de mayo y 31 de diciembre de 1991).

[SAP 560/2008 Bilbao, Fundamento 2º]

Ese encadenamiento argumentativo, a pesar de su complejidad, se formula en una única oración. Esa disposición sintáctica no es, de ningún modo, algo extraño en las sentencias judiciales, sino que, más bien al contrario, son muy abundantes los encadenamientos argumentativos intrincados que se condensan en una sola unidad oracional. Esto dificulta notablemente la comprensión del proceso argumental, de modo que es aconsejable seguir dos reglas de elaboración textual de argumentos:

- a) Evitar que los argumentos ocupen una sola frase (hay que secuenciar los argumentos en diversas oraciones).
- b) Hay que señalar la relación entre los componentes del argumento, de modo que sea palmario cómo se articula una secuencia argumentativa (sobre las marcas argumentativas, se hablará con detalle en el apartado 3.3.).

No atender a tales reglas produce casos de argumentaciones incomprensibles, como la que se incluye en (7). En ella, hay dos conclusiones: una conclusión principal, que aparece al principio, seguida de una conclusión intermedia. Tras las conclusiones, se introducen las premisas:

(7)

El Tribunal en el ámbito del art. 741 de LECrim ha contado para reputar desvirtuada la presunción de inocencia a que se refiere el art. 24.2 CE y llegar al relato de hechos probados que antecede con las siguientes pruebas:

a) Declaraciones policiales de Juan Pedro (f. 296 y 297 y siguientes) que no fueron ratificadas antes el Juez instructor, donde sólo dijo que habían sido obtenido mediante “malos tratos físicos y psicológicos” (f. 427).

En la vista oral se acogió a su derecho a no declarar.

Sin embargo, el tribunal las valora en relación con otras pruebas objetivas, dándoles credibilidad en cuanto que admite su pertenencia a ETA. desde enero de 2003 (f. 297) y reconoce los hechos imputados [CONCLUSIÓN PRINCIPAL], tanto referidos a la maleta con 28 Kg de explosivo desactivada en el tren Intercity Irún-Madrid (f.298, 299 y 305), cuanto en lo relativo a los artilugios explosivos colocados en las vías férreas de las líneas Zaragoza-Logroño y Zaragoza-Lérida (f. 304), sin que su denuncia de malos tratos se apoye en dato objetivo alguno ni se acredite mínimamente su existencia [CONCLUSIÓN SECUNDARIA].

Por el contrario, consta al folio 296 que no declaró a las 13 30 horas del día 25 de diciembre de 2003 (más de un día después de su detención) porque manifestó que no estaba en condiciones, posponiéndose dicha declaración hasta el día 27 de diciembre a las 19 horas (f. 297), al tiempo que desde el mismo momento de su detención fue diariamente reconocido por el médico-forense que emitió los correspondientes informes, unidos a las actuaciones en los folios 125, 146, 147, 420 y 421. En ellos se hace constar que presenta pequeñas señales compatibles con un forcejeo durante su detención y conducción, pues son, según el primer parte del forense, de una data de 24/36 horas y consisten en un arañazo superficial en el pecho, hematomas muy superficiales en la cara interna del brazo derecho, “algunos digitados” –(sic) entendemos que con marca de dedos- y otros similares en la cara interna del brazo izquierdo, que son atribuibles a la sujeción por ambos brazos consecutiva a su detención [PREMISA 1].

La ausencia de lesiones objetivables se confirma por el informe elaborado siguiendo el “protocolo de reconocimiento médico-forense a detenido incomunicado” del Instituto Vasco de Medicina Legal (f. 673 y sigs) que coincide con el de los médicos-forenses de la Audiencia Nacional y con el parte médico del servicio de urgencias inmediato a su detención, que obra al folio 309, en el que sólo se aprecian marca de grilletes en ambas manos [PREMISA 2].

[SAN 25/2005]

Sin embargo, en el texto anterior, se hace complicado saber al servicio de cuál de las dos conclusiones están las premisas marcadas en negrita. En su lugar, resultaría una argumentación mucho más sencilla de comprender si se formulase del modo siguiente:

(7bis)

El Tribunal en el ámbito del art. 741 de LECrim ha contado para reputar desvirtuada la presunción de inocencia a que se refiere el art. 24.2 CE y llegar al relato de hechos probados que antecede con las siguientes pruebas:

a) Declaraciones policiales de Juan Pedro (f. 296 y 297 y siguientes), que no fueron ratificadas antes el Juez instructor, donde sólo dijo que habían sido obtenido mediante “malos tratos físicos y psicológicos” (f. 427).

En la vista oral se acogió a su derecho a no declarar.

[CONCLUSIÓN SECUNDARIA] Este tribunal considera que la denuncia de malos tratos ni se apoya en datos objetivos ni acredita mínimamente la existencia del maltrato. **[EXPRESIÓN PREDICTIVA] basándose en los motivos que se exponen a continuación.**

[PREMISA 1 (al servicio de la conclusión secundaria)] Según consta en el folio 296, Juan Pedro no declaró a las 13'30 horas del día 25 de diciembre de 2003 (más de un día después de su detención) porque, según él mismo manifestó, que no estaba en condiciones. Por ello, se pospuso la declaración hasta el día 27 de diciembre a las 19 horas (f. 297).

Hay que decir que, desde el momento de su detención, Juan Pedro fue diariamente reconocido por el médico-forense, que emitió los correspondientes informes (que están unidos a las actuaciones en los folios 125, 146, 147, 420 y 421). En ellos, consta que el detenido presentaba pequeñas señales compatibles con un forcejeo durante su detención y conducción a las dependencias policiales. En ese sentido, según el primer parte del forense, esas señales son de una data de 24/36 horas y consisten en un arañazo superficial en el pecho, hematomas muy superficiales en la cara interna del brazo derecho, "algunos digitados" –(sic) entendemos que con marca de dedos- y otros similares en la cara interna del brazo izquierdo, que son atribuibles a la sujeción por ambos brazos propia de la detención.

[PREMISA 2 (al servicio de la conclusión secundaria)] Asimismo, el informe elaborado siguiendo el "protocolo de reconocimiento médico-forense a detenido incomunicado" del Instituto Vasco de Medicina Legal (f. 673ss) confirma la ausencia de lesiones objetivables. Este informe coincide con el de los médicos-forenses de la Audiencia Nacional y con el parte médico del servicio de urgencias (f. 309), que fue elaborado inmediatamente después de la detención y en el que sólo se aprecia marca de grilletes en ambas manos.

[CONCLUSIÓN PRINCIPAL] Por todo ello, este tribunal valora las declaraciones policiales, en relación con otras pruebas objetivas, y da credibilidad al hecho de que Juan Pedro admitió pertenecer a ETA desde enero de 2003 (f. 297) y reconoció los hechos imputados, tanto los referidos a la maleta con 28 Kg de explosivo que fue desactivada en el tren Intercity Irún-Madrid (f.298, 299 y 305), como los referidos a los artilugios explosivos colocados en las vías férreas de las líneas Zaragoza-Logroño y Zaragoza-Lérida (f. 304).

2.5. La conclusión a la que todo se subordina

Dada la mencionada importancia de la conclusión en el texto argumentativo, en ocasiones se incurre en el error contrario a no marcar la conclusión: se sobredimensiona el papel textual de la conclusión, convirtiéndola en la única frase principal de la que penden todos los argumentos, que se subordinan, no solo conceptual, sino sintácticamente a ella. El ejemplo siguiente ilustra perfectamente este error, que genera oraciones demasiado largas, en las que es muy complicado deslindar un argumento del otro:

(8)

La razón de ser de la excusa absolutoria de los delitos contra la propiedad que no impliquen violencia o intimidación entre los parientes incluidos en el precepto de referencia, equivalente al artículo 564 del anterior Código Penal, **se encuentra en una razón de política criminal que exige no criminalizar actos efectuados en el seno de grupos familiares unidos por fuertes lazos de sangre, en los términos descritos en el artículo 268 porque ello, sobre provocar una usurpación del sistema por ser dentro del grupo familiar poco recomendable que perjudicaría la posible reconciliación familiar, estaría en contra de la filosofía que debe inspirar la actuación penal de mínima intervención y última ratio, siendo preferible desviar el tema a la jurisdicción civil que supone una intervención menos traumática y más proporcionada a la exclusiva afectación de intereses económicos como los únicos cuestionados, de ahí que se excluyan los apoderamientos violentos o intimidatorios en los que quedan afectados valores superiores a los meramente económicos como son la vida, integridad física o psíquica, la libertad y seguridad.**

[SAP 835/2009, Jaén]

Al principio del ejemplo se da cuenta de la tesis que pretende razonar la sentencia ("la excusa absolutoria de los delitos contra la propiedad que no impliquen violencia o intimidación entre los parientes incluidos en el precepto de referencia tiene razón de ser"). A partir de ella, y subordinada sintácticamente a ella, se introducen todas las premisas, que aparecen destacadas en letra negra.

Del mismo modo ocurre en el fragmento de (9). En él, a una tesis principal ("el acuerdo al que se ha dedicado el precedente fundamento de derecho, considera este Juzgador que es válido, tiene naturaleza contractual, y produce los efectos jurídicos entonces expresados e intencionadamente buscados por las partes"), que es, como se ve, bastante compleja, se subordinan (i) una oración concesiva que integra a su vez una consecutiva ("aunque no se

haya llegado nunca a aportarlo junto con demanda de divorcio o de modificación de medidas instada de mutuo acuerdo, y, por ende, tampoco haya obtenido la consiguiente aprobación judicial, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Código Civil”); y (ii) una oración causal, que contiene la premisa que sustenta la conclusión (“pues es indudable que están presentes en él los elementos integrantes del contrato según prevé el artículo 1261 del Código Civil, esto es, consentimiento, objeto y causa, y, por las circunstancias concurrentes, puede surtir efectos con total autonomía e independencia de la aprobación o no del convenio en que está incardinado”), y en cuyo interior también tiene elementos subordinados:

(9)

El acuerdo al que se ha dedicado el precedente fundamento de derecho, considera este Juzgador que es válido, tiene naturaleza contractual, y produce los efectos jurídicos entonces expresados e intencionadamente buscados por las partes, aunque no se haya llegado nunca a aportarlo junto con demanda de divorcio o de modificación de medidas instada de mutuo acuerdo, y, por ende, tampoco haya obtenido la consiguiente aprobación judicial, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Código Civil, pues es indudable que están presentes en él los elementos integrantes del contrato según prevé el artículo 1261 del Código Civil, esto es, consentimiento, objeto y causa, y, por las circunstancias concurrentes, puede surtir efectos con total autonomía e independencia de la aprobación o no del convenio en que está incardinado.

[SJPI 7/2000, Gijón, fundamentos 4]

Obviamente, parecería preferible confeccionar un texto en el que el argumento se secuenciase en **oraciones más breves** (y fáciles de comprender), y en el que las **relaciones argumentativas se llevasen a cabo mediante marcadores argumentativos**, como los que se propondrán a continuación.

3. EL MAL USO DE LAS MARCAS LINGÜÍSTICAS QUE INTRODUCEN LAS PREMISAS Y LA CONCLUSIÓN

Estrechamente relacionados con la necesidad de indicar cuáles son los elementos de una argumentación, los marcadores argumentativos son piezas lingüísticas que permiten que el lector identifique claramente cómo se organizan los materiales argumentativos en el texto. En este apartado, se dará cuenta de diferentes tipos de marcas argumentativas al servicio de la elaboración de argumentos legibles.

50

3.1. Marcas que introducen las premisas

Sería erróneo decir que las sentencias judiciales no emplean marcadores argumentativos. Más bien al contrario, son textos que están repletos de este tipo de piezas, pero que sin embargo no son capaces de facilitarle al lector la comprensión de cómo están configurados los razonamientos del juzgador. Véase como muestra el siguiente fragmento, en el que se han incluido algunas marcas argumentativas, que aparecen destacadas en negrita. En una sola frase, el escritor ha introducido numerosas causas (introducidas por *al + infinitivo*, *puesto que ya que*), consecuencias (introducidas por *por lo que*, *por tanto*, *en consecuencia*), así como fragmentos concesivos (aquellos que se introducen por *aunque* o *si bien*), aditivos (*además*, *también*) o condicionales (*siempre que*)²⁵:

(10)

CUARTO - Habiendo sido resuelto el recurso de apelación contra el auto resolutorio de la excepción de sumisión a arbitraje opuesta por Rheinhy, debe considerarse cumplida la previsión contenida en el último párrafo del art. 538 LEC, debiendo estar a lo en él resuelto, **por lo que resta por analizar la también opuesta excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda que al amparo de lo dispuesto en el art. 533.6 LEC opone la demandada ESSA, al afirmar que existe una indebida acumulación de acciones, puesto que** las ejercitadas no se basan en el mismo título ni en la misma razón de pedir y se dirigen contra diferentes demandados, afirmaciones que no pueden dar lugar a la estimación de la excepción, **ya que** atendiendo al suplico de la demanda lo que existe es una acumulación eventual, **al** ejercitar la actora dos acciones estableciendo un orden de prioridad sin que considere posible su estimación conjunta (no es

²⁵ Para un estudio completo sobre el uso de los marcadores en textos escritos, véase Montolío (2001).

acumulación alternativa) **y por tanto** existe entre ellas compatibilidad sustantiva (**ya que** por ejercitarse la segunda de ellas con carácter subsidiario, **aunque** existe incompatibilidad, no se vulnera la previsión del art. 154 LEC que se refiere a la acumulación simple), **también** concurre compatibilidad procesal (adecuación del procedimiento y competencia judicial) **y además si bien** no existe identidad de título o de causa de pedir, **ya que** en la acción principal se interesa indemnización por daños y perjuicios derivada de la indebida ejecución de una hipoteca extinguida y en la subsidiaria, reclama condena basándose en el derecho de subrogación o de repetición que tiene el hipotecante no deudor frente a los fiadores de la obligación, no puede desconocerse que la conexión objetiva impropia debe considerarse admisible en nuestro derecho cuando existe entre los elementos objetivos una relación de afinidad derivada de la coincidencia al menos parcial de cuestiones fácticas o jurídicas comunes, **habiendo** sido admitido por el Tribunal Supremo por razones de economía procesal y de conveniente examen en un mismo litigio, propugnando una interpretación flexible de la concurrencia de los requisitos para la acumulación de acciones, **siempre que** no alcance las prohibiciones de los art 154 y 157 LEC (STS 21-11-98 por todas) y en el presente supuesto las acciones de la actora se basan en la aplicación al “fiador real” de la normativa aplicable a los fiadores por la analogía existente entre ambas figuras, **y además** los hechos que vinculan a las partes derivan de una única operación compleja, **por lo que** debe considerarse procedente, según la interpretación jurisprudencial antes señalada, su examen en el mismo procedimiento, **al** no alcanzarle las prohibiciones de los art. 154 y 157 LEC **y en consecuencia** la excepción no puede prosperar.

[SJPI 7/2000, Madrid, fundamentos 17]

A pesar de que el redactor del texto anterior ha procurado introducir el tema, ha respetado el orden <premisas + conclusión> y ha marcado la conclusión, lo cierto es que el fragmento adolece de las dos grandes patologías del discurso argumentativo en el Derecho: la frase es demasiado larga y el uso de los marcadores no es siempre el adecuado (así, por ejemplo, el uso de la construcción <al + infinitivo>, como ocurre en “al ejercitar la actora dos acciones”, conduce a equívoco, ya que no se puede saber si introduce una oración de tiempo o de causa). En este apartado nos ocuparemos, precisamente, del uso de los marcadores argumentativos en la sentencia judicial. Para empezar, se puede decir, a grandes rasgos, que hay dos modos de introducir eficazmente las razones que sustentan una conclusión: una expresión predictiva seguida de una enumeración (apartado 3.3.1.1.) y el uso de un conector (3.3.1.2.).

3.1.1. Expresión predictiva + enumeración

51

Una expresión predictiva es, como se ha explicado en el apartado 3.2., una expresión que presenta las secuencias discursivas siguientes, indicando al lector cómo se organiza la información que sigue en el conjunto de un texto. Así, pueden introducirse los motivos que apoyan una tesis con una expresión del tipo “las razones que sustentan la conclusión son las siguientes”, como en el fragmento que sigue:

(11)

También se ha descartado, tras la practica de la prueba en el acto del juicio oral, que alguna persona ajena a la Estación hubiera entrado en el Gabinete de Circulación de la misma y hubiera accionado los mandos de cambio del semáforo o que se hubiera accionado él sólo, **por cuatro evidentes razones: primera**, porque -según se ha constatado tras presenciar la practica de la prueba- no se vio por el lugar de los hechos en los momentos previos y coetáneos a la intervención del factor en relación con el TALGO 226, a ninguna persona ajena -como ha declarado incluso el propio factor-, **segunda**, pues accionar dicho semáforo no es operación sencilla para un profano, dado que han de activarse dos botones al tiempo, de forma simultánea o sucesivamente con ambas manos, y alejados entre sí, lo cual entraña una elevada dificultad para un profano, **tercera**, dichos botones se activan en stick -es decir, pulsándoles hacia dentro, de modo que a pesar de desaparecer las causas que motivaron su cierre, no vuelven a abrirse hasta que no se efectúa un nuevo mando sobre ellos-, y, por tanto, su activación ha de obedecer a un acto físico que entraña cierta fuerza, siendo imposible que se activen solos, pues para ello es preciso vencer la resistencia de una especie de muelle que tienen dichos botones y que les mantienen en su posición, **y cuarta**, tras el siniestro se verificó el correcto funcionamiento del cuadro de mandos de la Estación de Chinchilla entonces existente -en la actualidad se ha sustituido por un ordenador, debido al avance de las nuevas tecnologías-, y se pudo comprobar que funcionaba perfectamente el sistema en stick a que nos hemos referido (vid informe del perito Don. Juan Alberto).

[SJP 19/2006, Albacete, fundamentos 2.3.2.2ª]

Además de la expresión predictiva, como se ve, sería adecuado que cada una de las premisas fuese introducida por una marca de enumeración, que ordenase las premisas a lo largo del discurso. Asimismo, es conveniente remarcar que, cuando las premisas sean complejas y

extensas, lo más adecuado es dedicar un párrafo a cada una de ellas. Algunas de las marcas de enumeración habituales en español son las siguientes²⁶:

- Primero / Segundo / Tercero / Cuarto / ...
- En primer lugar / En segundo lugar / ... / En último lugar
- 1 / 2 / 3 / 4 / ...

Otra muestra de este procedimiento puede verse en el ejemplo siguiente:

(12)

Así las cosas, y sin perjuicio de considerar que estamos ante accidentes de esta naturaleza no sólo cuando exista atropello del vehículo al animal sino también cuando se producen vuelcos, salidas de la vía y otros análogos que reflejen el intento por parte del conductor de evitar la colisión, esta Sala parte de **dos principios que han de inspirar la determinación de la responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas**:

I) El primero es que no nos encontramos ante un sistema de responsabilidad objetiva (por la mera producción del daño causado por la sola presencia de una especie cinegética en la calzada), ni de responsabilidad cuasi-objetiva (salvo culpa exclusiva del conductor o fuerza mayor), ni siquiera objetiva atenuada (con presunción de culpa del titular del aprovechamiento cinegético, propietario del terreno, o titular de la vía pública), pues tanto la existencia del coto como la conducción de un vehículo de motor son susceptibles de generar una situación de riesgo, sino que nos encontramos ante un genuino sistema de responsabilidad por culpa [...].

II) La segunda consideración es la relativa a la carga de la prueba. En congruencia con lo hasta ahora expuesto esta Sala entiende que ni se puede en beneficio del conductor establecer un principio de presunción de culpa sobre el resto de los posibles implicados, ni cabe establecer unas reglas de distribución de la carga probatoria distintas a las fijadas con carácter general en el artículo 217 LEC [...]

[STSC 1310/2009]

3.1.2. Uso de un conector

Las premisas de un argumento pueden estar introducidas mediante un conector de tipo causal, del tipo de *como*, *porque*, *ya que*, *visto que*, *puesto que*, *dado que*, *debido a que*, *pues*, etc, o mediante estructuras como *<al + infinitivo>*. Además, el español jurídico dispone de algunos conectores causales específicos, como *a tenor de*, *en tanto en cuanto* o los que se han destacado en los ejemplos de (13) y (14):

(13)

En el primero de ellos, bajo el epígrafe "Vulneración del Derecho de Libertad Sindical de USCA y la discriminación que sufre este sindicato en AENA", se dice que la conducta de la demandada ha vulnerado el derecho de la libertad sindical de USCA en la dimensión colectiva del Derecho, **en cuanto** constituye una exclusión y un rechazo de esta entidad Sindical, al estarle impidiendo el ejercicio de sus derechos de audiencia y representatividad en los casos de instrucción de expedientes contradictorios sindicales por la comisión de presuntas faltas de carácter grave o muy grave y también del derecho de audiencia previa a la imposición de sanciones de la misma naturaleza a los controladores afiliados al Sindicato, en los distintas dependencias - aeropuertos- del territorio nacional.

[SAN 3911/2009]

(14)

Para la hipótesis de que por esa Sala se casase la sentencia, a nuestro entender no cabría la fijación de lucro cesante, **por cuanto que** la prueba practicada acredita que la indemnización solicitada por tal concepto es artificiosa.

[STS 2385/2009, Antecedentes de hecho, séptimo]

A pesar de que los conectores específicos del lenguaje jurídico español no son condenables, lo cierto es que el desconocimiento de tales piezas por el ciudadano medio hace recomendable, al menos, evitar estas piezas en partes fundamentales de la sentencia, como en el fallo.

Por otra parte, tal diversidad de conectores proporciona un abanico suficiente de opciones entre las que el escritor puede escoger. Por ello, resultan inadecuados los casos en los que se emplean otro tipo de fórmulas para introducir las premisas, tal como ocurre en el fragmento

²⁶ Puede encontrarse una explicación más extensa sobre los mecanismos de enumeración en el capítulo 4 de este informe.

de (15), en el que en varios momentos el juzgador ha empleado, para introducir premisas, la preposición *de*. Esta preposición, que tiene muy diversos valores, no constituye, sin embargo, una marca clara para la introducción de una premisa:

(15)

En el presente supuesto, **de la valoración conjunta de los medios de prueba que han sido aportados por las direcciones letradas de ambas partes litigantes [premisa1] y de la ponderación de las actuaciones que constan en autos [premisa2], se constata que la relación actual de los progenitores no permite el establecimiento de la guarda y custodia compartida [conclusión].**

(...)

No consta, **de las declaraciones de los padres prestadas en el acto del juicio que su relación sea fluida [conclusión]**, existiendo rencillas constantes que se reflejan en la mediación de terceros para el trato entre los mismos, y en las discrepancias en cuanto a la obligación de uno u otro del pago de mayor o menor cantidad de dinero en concepto de pensión de alimentos para la hija.

[SJPI 15/2008, Fundamento, segundo]

En efecto, resultaría mucho más sencilla y accesible una redacción como la que sigue:

(15bis)

En el presente supuesto, **basándonos en la valoración conjunta de los medios de prueba que han sido aportados por las direcciones letradas de ambas partes litigantes y en la ponderación de las actuaciones que constan en autos, se constata que la relación actual de los progenitores no permite el establecimiento de la guarda y custodia compartida.** (...)

No consta, **a juzgar por las declaraciones de los padres prestadas en el acto del juicio, que su relación sea fluida**, existiendo rencillas constantes que se reflejan en la mediación de terceros para el trato entre los mismos, y en las discrepancias en cuanto a la obligación de uno u otro del pago de mayor o menor cantidad de dinero en concepto de pensión de alimentos para la hija.

3.2. Marcas que introducen la conclusión

Como ocurría con los marcadores de causa, son numerosos los marcadores que sirven para introducir la conclusión de un argumento. A saber: *así que, de manera que, de modo que, por lo que, de ahí (que), por ello/eso, por ese motivo, por (lo) tanto, en consecuencia, por consiguiente, en conclusión, por ende, (así) pues*. El fragmento siguiente constituye una buena práctica del empleo de este tipo de piezas lingüísticas:

(16)

a) La primera alegación ha de ser desestimada por las siguientes razones.

Ha resultado acreditado en juicio oral -por el testimonio de los policías y funcionarios de la Agencia Tributaria que participaban en la investigación- que si bien las conversaciones de interés para esta causa acaecieron entre el día 15 al 20 de marzo de 2006, estas conversaciones cobran importancia y relevancia en la investigación con posterioridad, cuando se interrelacionan con declaraciones de otros imputados y con las pruebas documentales que se obtuvieron el 29 de marzo de 2006, con ocasión de diligencias de entrada y registro y detenciones llevadas a cabo en Diligencias Previas 4796/05.

Consta explicado en el Informe Policial nº NUM016 que tras la declaración judicial el día 28-05-07 de otro imputado en Diligencia Previas 4796/05 -el cual reconocía haber entregado 150.000 euros a Juan Alberto en el mes de marzo de 2006 a cambio de tres licencias de primera ocupación de viviendas- se abrió una línea de investigación policial para determinar el posible destino dado a esos fondos.

Para ello se realizó una exhaustiva labor de análisis de la ingente cantidad de documentos físicos e informáticos que se habían ocupado en las diligencias de entrada y registro y detenciones acordadas en aquellas Diligencias Previas, así como de las intervenciones telefónicas realizadas. Fruto de esta labor de investigación y con ocasión de la ocupación al contable de Juan Alberto de las denominadas Hojas de Contabilidad, con dos anotaciones de entregas fechadas el día 17 de marzo de 2006 (de 63.000 euros y 10.800 euros), uno de los especialistas tributarios que trabajó en la investigación realizó el hallazgo de la correspondencia e identidad entre dichas cantidades y las que obraban en los documentos words que contenían el contrato de compra de vivienda, en el que figuraba como comprador el acusado aforado, con una cláusula otorgando carta de pago por la cantidad de 10.800 euros en concepto de intereses por precio aplazado, así como un recibo de cantidad por importe de 63.000 euros.

[...]

El Informe Policial nº NUM016 dando cuenta de todas estas diligencias de investigación es de fecha 6 de junio de 2007, y en esos primeros días de junio se presentó en el Juzgado. Así ha resultado acreditado por informe recibido del Comisario Jefe Provincial de Málaga y por el testimonio de los policías que participaron en su elaboración.

Y si bien la defensa cuestiona esta data, lo cierto es que dicho informe policial, en cualquier caso, sólo pudo ser confeccionado después del día 28-05-07, que la declaración sumarial de un imputado en Diligencia

Previas 4796/05, ofreció esta línea de investigación y comprobación de los delitos aquí enjuiciado

En conclusión, no es acogible la alegación de retraso injustificado en la confección del Informe Policial nº NUM016. La actividad investigadora del Grupo Policial que participó en la confección y elaboración del Informe NUM016 se ha revelado como demostrativa de un buen hacer profesional, en atención al ingente y diverso material ocupado, la complejidad de los hechos y la dificultad intrínseca que tienen las investigaciones de los delitos de cohecho, prevaricación y demás delitos contra la Administraciones Públicas.

[STSJA 10/2008, Granada]

En (16), tras anticipar que van a explicarse las razones que obligan a desestimar una alegación, se abordan las premisas, dedicando a cada una de ellas un párrafo independiente. Finalmente, e introducida con la marca *en conclusión*, se da paso a la conclusión del argumento.

Por otra parte, igual que en las marcas de causa, también existen marcas consecutivas propias del español jurídico, como la del fragmento (17). En la línea de lo que se ha afirmado en el apartado anterior, conviene evitar este tipo de formulaciones de los apartados de la sentencia que son más importantes para el lector no experto, como el fallo.

(17)

La intención original del legislador pudo ser la de referirse específicamente a los elementos calificados expresamente como correctores en el Anexo, primero, 7. Sin embargo, la literalidad del texto va mucho más allá, **de tal suerte que** una interpretación sistemática obliga a abandonar la *mens legislatoris*.

[STS, Fundamentos de derecho, tercero, G]

3.3. Usos inadecuados de los marcadores

3.3.1. La duplicación innecesaria de marcadores

Entre los fenómenos lingüísticos relacionados con los marcadores, destaca la duplicación innecesaria de marcadores, que se produce con bastante frecuencia. Se trata de casos como el siguiente, en el que se emplean dos piezas (*sin embargo* y *por el contrario*) cuando una sola sería suficiente para expresar lo que quiere decir el redactor:

(18)

Romeo cuando conducía su vehículo fue interceptado por la fuerza policial y requerido para que detuviera el mismo, por dos agentes de la Policía que se identificaron, **sin embargo por el contrario** aceleró.

[STS 1353/2009]

3.3.2. El caso de “en todo caso”

Mención aparte merece el marcador “en todo caso”. En el español común, este marcador tiene un valor que ha recibido el nombre de *reformulador de distanciamiento* (Portolés 1998: 142), y se emplea (i) para expresar que la información previa al marcador resulta poco pertinente y, por tanto, debe ser descartada; y, al mismo tiempo, (ii) señalar que es la información que sigue a “en todo caso” la que merece ser considerada. En ese uso puede ser reemplazado por otros marcadores como “en cualquier caso”, “de todos modos” o “como mucho”.

El fragmento siguiente contiene el marcador “en todo caso” en función de reformulador de distanciamiento. Con él, el juzgador se distancia de la discusión anterior (esto es, que las comunicaciones [telefónicas, por walkie, etc.] entre los trenes funcionasen de forma normal) e introduce la información verdaderamente oportuna (“en todo caso/de todos modos, cualquier discusión sobre este tema [que las comunicaciones fuesen de forma adecuada] carece de sentido”):

(19)

En cuanto al funcionamiento de las comunicaciones con los trenes, en concreto de la modalidad “A” (trentierra) y de la modalidad “C” (a través de walkie), las pruebas realizadas por el perito Don. Juan Alberto y su equipo, evidencian un regular funcionamiento de referidos medios de comunicación [...], pero, **en**

todo caso, dada la resultancia fáctica de autos, y toda vez que ha quedado acreditado que el factor de circulación, una vez se fue el TALGO 226, llamó por primera vez al PM Valencia cuando ya había ocurrido el accidente -en concreto, 16 segundos después [vid subapartado 11a) del apartado 2.3.2]-, cualquier discusión sobre este tema carece de sentido y por tanto es innecesaria, por la evidente razón de que tales llamadas fueron totalmente inútiles, pues la colisión ya se había producido.

[SJP 19/2006, Albacete]

Frente a ese uso corriente de “en todo caso”, presente en el lenguaje jurídico, pero también en la lengua común, existe un empleo de “en todo caso” específico en el discurso del Derecho (Reig 2001), que funciona como sinónimo de “siempre”, “en todos los casos”. El ejemplo siguiente constituye una muestra de este segundo uso del marcador, que demuestra que en una misma sentencia pueden convivir los dos modos de utilizar el sintagma “en todo caso”:

(20)

En conclusión (Sentencia de 14 octubre 1994 [RJ 1994900]), el Tribunal sólo puede apartarse de las conclusiones de los peritos cuando haya motivos objetivos que lo permitan o justifiquen, debiendo **en todo caso (=siempre)** argumentarse las razones que le han llevado a disentir del informe de los técnicos para de esta forma alejar la sospecha o el peligro de arbitrariedad.

[SJP 19/2006, Albacete]

Esta ambivalencia puede llevar a equívocos: así, por ejemplo, en (20), una lectura posible, aunque errónea, llevaría a interpretar “en todo caso” como “*como mucho*”: “debiendo como mucho argumentarse las razones...”. En vista de esta dualidad de significado, sería, como sugiere Reig (2001: 21), intentar evitar el uso de “en todo caso” como sinónimo de “siempre”.

LA ELABORACIÓN DE OPERACIONES TEXTUALES RECURRENTE. LA ENUMERACIÓN

1. INTRODUCCIÓN. LA ENUMERACIÓN EN LOS DOCUMENTOS JURÍDICOS

La enumeración es una operación textual que tiene como objetivo estructurar la información para favorecer su correcta aprehensión por parte del lector. Los textos propios de los ámbitos profesionales recogen a menudo información de gran complejidad que necesariamente ha de ser desgranada, parcelada en sus distintos componentes para que el lector pueda aprehenderla; de ahí la presencia frecuente de listas y series en estos textos. Sin embargo, la frecuencia de uso de esta operación textual no hace de ella un mecanismo sencillo de utilizar pues, pese a su aparente simplicidad, para que una enumeración alcance los propósitos de eficacia e inteligibilidad, ha de reunir una serie de requisitos, tanto desde el punto de vista de su estructura (orden, marcación de los elementos, etc.) como desde el punto de vista de la conceptualización y el contenido de esta operación discursiva²⁷.

La presencia de enumeraciones en los textos jurídicos que esta comisión ha consultado es, tal y como cabía esperar, muy significativa. En el caso de la redacción de sentencias judiciales, la cantidad de ocasiones en que los jueces recurren a la operación textual que nos ocupa se explica fundamentalmente por dos motivos: en primer lugar, por la complejidad informativa y estructural de estos textos y, en segundo lugar, por la importancia que revisten en ellos la claridad y la precisión que los hagan fácilmente inteligibles por las partes implicadas. Estas características de los textos judiciales nos permiten afirmar que, para desarrollar adecuadamente su labor, los juristas han de contar con el dominio de los mecanismos lingüísticos y discursivos característicos de la redacción de enumeraciones ordenadas y consistentes en que los datos aparezcan bien definidos y estructurados.

Las características fundamentales que una enumeración debe reunir para garantizar la fácil y correcta interpretación de la información que contiene por parte del lector son las tres siguientes:

²⁷ Más información sobre la operación textual de la enumeración puede encontrarse en Montolío (2006c).

- Debe estar basada en una conceptualización clara y precisa de la información que ha de contener: cuál es el tema o la idea que organiza el listado, en qué componentes y subcomponentes se estructura la información, cuántos son esos componentes y qué relación o relaciones existen entre ellos.
- Debe estar introducida por un marco de enumeración, por una expresión predictiva que anuncia con precisión el tema de la enumeración y el número de ítems que ésta va a incluir y que resulta coherente con el número y la naturaleza de los elementos finalmente listados.
- Debe presentar una correcta marcación lingüística y/o gráfica de cada uno de sus componentes, así como de las relaciones de jerarquía que guardan entre ellos.

El apartado siguiente versará sobre los principales problemas a los que, en relación con la enumeración, han de enfrentarse las personas encargadas de la redacción de documentos jurídicos y, más concretamente, de sentencias judiciales.

2. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS ENUMERACIONES EN LOS DOCUMENTOS JURÍDICOS

No hay discusión acerca de las virtudes de la enumeración como mecanismo que mejora la legibilidad de ciertos documentos escritos o como recurso que todo escritor tiene a su alcance para guiar a sus lectores en la adecuada interpretación de determinadas partes de un texto escrito complejo.

Debido precisamente a la complejidad informativa que deben recoger las sentencias judiciales, el empleo de secuencias enumerativas en estos documentos se considera unánimemente recomendable²⁸. Sin embargo, los objetivos que se pretende alcanzar al clasificar, separar y numerar los datos que constituyen una determinada unidad informativa solo quedarán garantizados por un uso meditado y consistente del mecanismo que nos ocupa.

En los apartados siguientes se analizan las inadecuaciones más comunes en la elaboración de enumeraciones que aparecen en las sentencias que constituyen nuestro corpus. En cada apartado describiremos una patología y aportaremos ejemplos comentados. En algunos casos propondremos una versión alternativa de los ejemplos o incluiremos ejemplos de buenas prácticas, también documentados en el corpus.

3. LA EXPRESIÓN PREDICTIVA

La presencia de una expresión predictiva que sirva de marco conceptual a la enumeración resulta facilitadora respecto de la tarea cognitiva que le corresponde al lector, a saber, la de dar sentido a la lista, es decir, convertir en información lo que se le presenta como una serie de datos, pues con la información léxica elegida para la expresión predictiva, el escritor le anuncia previamente cuál es el ámbito conceptual que comparten esos datos, cuál es el tema de la enumeración y, por tanto, en qué sentido tales datos conforman una información coherente.

De la importancia de ofrecer al lector un marco de enumeración preciso son conscientes, en algunas ocasiones, las personas encargadas de la redacción de sentencias judiciales, a juzgar por ejemplos como el siguiente que hemos encontrado en nuestro corpus:

(1)

Siguiendo la línea discursiva de la mencionada sentencia del Tribunal Supremo, este Tribunal ha de poner de manifiesto que, en la declaración inculpativa del coacusado Juan Alberto, no se aprecian motivaciones espurias, tales como la venganza, el resentimiento, la animadversión u obediencia. No obstante puede que efectivamente concurren **dos vicios o factores de incredulidad subjetiva**:

²⁸ Véase al respecto López Samaniego (2006: 63).

- a) el móvil de exculpación de terceros; en concreto, la finalidad de excluir la participación del tercer acusado Gerardo en los delitos de cohecho, cuando aquél afirma que recibió la solicitud del dinero e hizo la entrega de este al Magistrado, directamente y sin participación de terceros;
- b) el móvil de obtener ventajas procesales, como un tratamiento favorable en la calificación del delito y en la pena, lo cual efectivamente sucedió cuando el Ministerio Fiscal modificó el escrito de acusación inicial, tras el juicio oral, y le acusó como autor de un delito del art. 423.2 del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) -en lugar del inicialmente acusado, como cooperador necesario del delito previsto en el art. 419 CP- solicitando una pena inferior a la inicialmente recogida en el escrito de acusación.

[STSJ And. 10/2008. Granada: Fundamentos de derecho. B. Sobre el fondo]

En el ejemplo, la expresión predictiva no anuncia solamente cuál es la idea que organiza el listado, sino que, además, anuncia cuántos componentes va a incluir la enumeración. Con esta información en mente, el lector se dispone a encontrar, en las líneas siguientes del texto, dos “vicios o factores de incredibilidad subjetiva”, tal como, efectivamente va a suceder. El escritor ha sabido, por lo tanto, guiar al lector a lo largo del fragmento del modo más adecuado para asegurar que este logre una interpretación rápida, cómoda y precisa de la información que en él se transmite.

Sin embargo, lamentablemente, no abundan en las sentencias que hemos leído las enumeraciones introducidas por una expresión predictiva que constituya el marco más preciso posible para la interpretación de la secuencia enumerativa.

3.1. Ausencia de expresión predictiva

La ausencia de una expresión predictiva que introduzca la enumeración coloca al lector ante unos datos cuya relación habrá de establecer él solo después de concluir la lectura de la serie.

(2)

Entre los artículos que lo integran, destacaremos los que se refieren al derecho que tienen los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales (art. 14); a los principios de acción preventiva que deben de aplicar los empresarios y que consisten en evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, y dar las debidas instrucciones a los trabajadores, previendo incluso las distracciones o imprudencias no temerarias que pudieran cometer (art. 15); a la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores por el empresario, tanto inicial (atendiendo a la naturaleza de la actividad, al elegirse los equipos de trabajo y sustancias a utilizar, el acondicionamiento de los lugares de trabajo, etc.) como cuando cambien las condiciones de trabajo, con controles periódicos y obligación de modificación de las actividades de prevención cuando se aprecie su inadecuación (art. 16); a la adopción por el empresario de las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse, garantizando que la utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización y que los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello, proporcionándoles los equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velando por su uso efectivo cuando sean necesarios (art. 17); a la adopción por el empresario de las medidas adecuadas para que los trabajadores estén informados en relación a los riesgos genéricos y específicos existentes, a las medidas y actividades de protección y prevención aplicables, y a las que deben de adoptarse en situaciones de emergencia, facilitando la consulta y participación de aquéllos (art. 18); y a la formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, que debe garantizarse a los trabajadores tanto al momento de su contratación como con posterioridad si se produjeran cambios (art. 19).

[SJS 37/2007. Murcia: Fundamentos, segundo]

En el ejemplo citado, hay una enumeración compleja de elementos que dependen de un único verbo principal que solo aparece una vez al principio de la enumeración y que no es fácil de identificar, pues en la frase introductoria coinciden dos verbos, “destacar” y “referirse a”, y solo al llegar al segundo ítem de la enumeración el lector puede descartar el primero de ellos.

Sin duda, la enumeración del ejemplo sería más inteligible si se introdujera con una expresión predictiva y se marcara cada elemento de la enumeración con un número o una letra.

Por otra parte, en el caso de aquellas enumeraciones que carecen de una expresión predictiva, a la dificultad de reconocer cuál es el referente conceptual que convierte los datos en información con sentido, puede añadirse la de percibir que se está leyendo una enumeración, como ocurría en el ejemplo anterior y vuelve a ocurrir en el siguiente:

(3)

8.- Con fecha 10/11/99 el Equipo de Valoración de Incapacidades emite el siguiente cuadro clínico del trabajador accidentado: En contingencia de accidente de trabajo sufre politraumatismo torácico, abdominal y craneoencefálico, quedando actuales secuelas de cardiopatía isquémica en fase dilatada con disfunción severa de VI y una FE 33% postraumática. Impotencia funcional de MSI con una limitación de la movilidad del 40%. Estado depresivo severo. Limitado por tales dolencias para toda actividad que no sea la atención a sus necesidades personales. La Dirección Provincial del I.N.S.S. dicta resolución el 23/11/99 declarando al trabajador afecto de una incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio derivada de accidente de trabajo con fecha de efectos 15/6/99 y base reguladora de 963#51 euros (160.315 pesetas).

[STSJ de Islas Canarias, Las Palmas (Sala de lo Social, Sección 1ª)1484/2009]

El lector no puede saber si el cuadro clínico descrito consiste meramente en el politraumatismo y las secuelas que aparecen en la primera frase que encuentra tras los dos puntos, pero inmediatamente después se encuentra con dos ítems más que no sabrá de entrada cómo considerar, si como dolencias que sufre el trabajador accidentado o como secuelas del accidente. Por otro lado, esos dos ítems aparecen como sintagmas nominales entre puntos, por lo que constituyen elementos agramaticales, al igual que el que el lector encontrará después de ellos.

La ausencia de una expresión predictiva que sirva de marco a la enumeración no solo dificulta la aprehensión coherente de la información por parte del lector, sino que, en ocasiones, responde a una mala conceptualización del mecanismo de la enumeración por parte del escritor, como en el ejemplo que aportamos a continuación:

(4)

Solicitadas entradas y registros en los domicilios de los procesados, se halló: En el chalet que el procesado Conrado había alquilado en la C/ XXXX de Yebes (Guadalajara), chalet nºXXXX, urbanización XXXX, se llevó a cabo dicha diligencia a las 02,25 horas del día 10 de julio de 2001, incautándose los agentes de la autoridad de los ciento doce paquetes que contenían la cantidad de cocaína que arrojo un peso neto...., así como los embalajes con el nombre de "Romulo"...

[STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 1353/2009]

En el ejemplo citado, la presencia del verbo "hallar" seguido de los dos puntos hace pensar al lector que se encuentra ante el inicio de una lista que carece de una expresión predictiva, de un marco conceptual. Sin embargo, el escritor coloca, después de los dos puntos, una larga referencia a uno de los lugares donde se realizó la acción de "hallar" que lo lleva a especificar que esa acción fue el resultado de otra acción: "registrar", así como a indicar la hora y la fecha del registro, de modo que, cuando realmente va a enumerar los elementos hallados, el verbo "hallar" queda tan lejos que el escritor de la sentencia se cree en la necesidad de volver a aludir a la acción, "incautarse de", y esta vez con mención explícita al agente que la llevó a cabo, es decir, "los agentes de la autoridad". Es lógico pensar que el escritor no introdujo una expresión predictiva como complemento directo del verbo "hallar" porque todavía no había dado toda la información necesaria para proceder a enumerar los objetos hallados, por lo que antes había de aludir a elementos informativos pertenecientes a otros ámbitos, como el lugar o el tiempo, de modo que la lista iba a resultar inconsistente con la expresión predictiva. Dicho de otro modo: la persona encargada de la redacción del texto anunció la operación de la enumeración antes de tiempo.

Dada la importancia y la complejidad que encierran las secuencias enumerativas en las sentencias judiciales, consideramos recomendable que las personas responsables de la redac-

ción de estos documentos anuncien las enumeraciones mediante una expresión predictiva que oriente al lector en la interpretación de los datos que se le van a suministrar.

3.2. Imprecisión de la expresión predictiva

En algunos casos documentados en nuestro corpus, pese a que la enumeración viene introducida por una expresión predictiva, esta resulta demasiado imprecisa, no solo para crear una expectativa clara en el lector, sino asimismo para ser de utilidad al escritor en su tarea de desgarnar en elementos precisos y coherentes la información que quiere enumerar:

(5)

Elevadas las actuaciones a esta Sala, por Auto de fecha 28 de mayo de 2008, se acuerda **lo siguiente**:

1º. Se admiten y declaran pertinentes todas las pruebas propuestas por las partes -con excepción de las que han sido declaradas Impertinentes o innecesarias en los razonamientos jurídicos de esta resolución.

2º. Se acuerda mantener la situación de libertad provisional de los tres acusados con fijación de obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes y además cuantas veces fueran llamados ante este Tribunal. Procédase a la apertura de las correspondientes piezas de situación personal, con testimonio de este particular.

3º. Se señala para el inicio de las sesiones del Juicio oral el día VEINTIUNO de JULIO de dos mil ocho, a las nueve horas y treinta minutos, en la Sala de Plenos de este Tribunal, citándose para dicho acto, día y hora a todas las partes y, personalmente, a los acusados; así como para los días que también se dirán, a los testigos y peritos, librándose para las citaciones de todos ellos los correspondientes exhortas.

4º. Se designa Ponente para sentencia a la Ilma. Sra. Magistrada Dª. INMACULADA MONTALBÁN HUERTAS, haciéndoselo saber a las partes.

[STSJ And. 10/2008 Granada (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª).Antecedentes]

Tras el verbo “se acuerda”, los elementos de la lista deberían ser nombres o infinitivos, expresiones que realizaran la misma función gramatical que “lo siguiente”. Sin embargo, nos encontramos con estructuras verbales que funcionan como el propio verbo “se acuerda” que debería regirlas. Por otro lado, para ser consistente con el resto de los ítems de la lista, el segundo elemento de la enumeración recogida en el ejemplo citado debería iniciarse con un “Se mantiene”. En cualquier caso, ya la elección del tiempo presente del verbo que introduce la expresión predictiva resulta demasiado imprecisa. Compárese el ejemplo con la versión que ofrecemos a continuación:

(5bis)

Elevadas las actuaciones a esta Sala, por Auto de fecha 28 de mayo de 2008, se realizaron los trámites que se enumeran a continuación:

1º. Se admitieron y declararon pertinentes todas las pruebas propuestas por las partes -con excepción de las que habían sido declaradas impertinentes o innecesarias en los razonamientos jurídicos de esta resolución-.

2º. Se acordó mantener la situación de libertad provisional de los tres acusados con fijación de obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes y además cuantas veces fueran llamados ante este Tribunal. Procédase a la apertura de las correspondientes piezas de situación personal, con testimonio de este particular.

3º. Se señaló para el inicio de las sesiones del Juicio oral el día VEINTIUNO de JULIO de dos mil ocho, a las nueve horas y treinta minutos, en la Sala de Plenos de este Tribunal, citándose para dicho acto, día y hora a todas las partes y, personalmente, a los acusados; así como para los días que también se dirán, a los testigos y peritos, librándose para las citaciones de todos ellos los correspondientes exhortas.

4º. Se designó Ponente para sentencia a la Ilma. Sra. Magistrada Dª. INMACULADA MONTALBÁN HUERTAS, haciéndoselo saber a las partes.

3.3. Falta de correspondencia con los elementos enumerados

En determinadas ocasiones, la enumeración consta de una expresión predictiva que constituye un marco conceptual suficientemente preciso; sin embargo, las expectativas generadas en el lector por ese marco no se ven cumplidas tras la lectura de la serie, ya sea porque los ítems que la componen —o alguno de ellos— no puede incluirse conceptualmente en el marco anunciado o bien porque el número de ítems no se corresponde con el que se adelantaba en la expresión predictiva. En ambos casos, el lector se ve obligado a cuestionar la validez de las expectativas que se le habían creado.

3.3.1 Falta de correspondencia temática

En el ejemplo que incluimos a continuación, al lector se le anuncia mediante una expresión predictiva que se dispone a leer una lista de nombres de agentes de la policía. Sin embargo, la enumeración incluye ítems informativamente más complejos:

(6)

Sobre las 12:30 horas, tras ser localizado el vehículo y acudir los miembros de desactivación TEDAX del Cuerpo de la Policía Nacional, el artefacto explotó causando la muerte del policía D. Luis Carlos y causando lesiones a **los siguientes policías:**

A D. Millán, lesiones de las que tardó en curar 693 días, todos los cuales estuvo incapacitado laboralmente, quedándole como secuelas diversas cicatrices discrónicas posquemadura en un setenta por cien de la superficie cutánea de la espalda; en un veinte por cien de la superficie cutánea del tórax; múltiples cicatrices en brazo y mano izquierda; cicatriz con injerto con pérdida de tejido subcutáneo y muscular en la cara anterior del codo y antebrazo izquierdo; atrofia muscular; pérdida del ochenta por cien de la capacidad de flexión del dedo índice de la mano izquierda con parestesia de tal dedo; disminución del quince por cien en los movimientos de extensión de los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto de la mano izquierda; cicatriz discrónica por toma de injerto en mulso derecho; cicatriz en tercio inferior de pierna derecha y múltiples cicatrices de pequeño tamaño en ambas extremidades inferiores.

A D. Donato y a D. Juan Pedro, lesiones de las que tardaron en curar siete días durante los cuales estuvieron incapacitados para sus ocupaciones habituales.

A D. Tomás, D. Jesús Manuel y D. Bernardo, lesiones de las que tardaron en curar cinco días durante los que estuvieron incapacitados para sus ocupaciones laborales. Y

A D. Jesús Carlos, lesiones de las que tardó en curar un día, también de incapacidad para su hacer diario.

[SAN 55/2006 de 8 de diciembre, Hechos probados, tercero]

De hecho, la lista anterior contiene dos tipos diferentes de elementos: por un lado, los nombres de los policías lesionados, tal como indicaba la expresión predictiva, y, por otro, las lesiones sufridas por ellos a causa de la explosión del artefacto mencionado en el párrafo que precede a la enumeración y las secuelas de esas lesiones. La legibilidad del fragmento mejoraría si la expresión predictiva anunciara los dos tipos de datos que se van a ofrecer y si cada uno de los elementos de la lista fuera un nombre propio precedido de una letra o un número y seguido de una oración de relativo con la información acerca de las lesiones.

61

3.3.2 Falta de correspondencia numérica

No son abundantes los casos de falta de correspondencia entre la cantidad de elementos de la serie anunciada mediante la expresión predictiva y el número de ítems que efectivamente contienen las series que aparecen en las sentencias que forman el corpus que hemos analizado. De hecho, no aparecen a menudo, en las enumeraciones encontradas, expresiones predictivas que anuncien la cantidad precisa de elementos que va a constituir la serie. Sin embargo, consideramos recomendable, por los motivos expuestos en apartados anteriores, considerar en el momento de la planificación de la enumeración la posibilidad de especificar esa cantidad, pues este rasgo contribuye a la precisión deseable para el marco de la enumeración.

4. LOS ELEMENTOS ENUMERADOS

En los apartados siguientes trataremos de aquellos problemas relacionados con los elementos que conforman la serie enumerativa. En lo que a ellos se refiere, las patologías más habituales tienen que ver, por un lado, con el hecho de que se trate de elementos que, por su naturaleza semántica o por el modo en que son presentados, no alcanzan a constituir un conjunto coherente y homogéneo de datos y, por otra parte, con los problemas que la serie puede plantearle al lector en su tarea de interpretar o delimitar cada uno de los puntos que la conforman como un elemento discreto, separado, distinto.

4.1. Heterogeneidad de los elementos enumerados

Con una cierta frecuencia, en los casos en los que las enumeraciones incluyen ítems heterogéneos, la inconsistencia se debe a un desplazamiento metonímico: los ítems que no son de la misma categoría que los demás se vinculan con ellos por una relación de todo y parte o de continente y contenido, es decir, por una relación metonímica. Así lo vemos en los dos ejemplos que aportamos a continuación.

(7)

En el registro de los lugares de residencia de Jose Ramón, sitios en la calle DIRECCION002, núm. NUM004, piso NUM009, letra B de Hernani, calle DIRECCION003 números NUM010 -NUM011, piso NUM009 de Pamplona y plaza DIRECCION004 número NUM012, piso NUM009, puerta derecha de Andoain, se intervinieron, entre otros, los siguientes efectos:

-**Un papel** donde aparece manuscrito el número-WHM, que se corresponde con el de las placas de matrícula de un vehículo oficial perteneciente a la Dirección General de la Guardia Civil.

-**Una carpeta** verde conteniendo papeles manuscritos con información, recortes de prensa y fotografías sobre potenciales víctimas de actos terroristas.

-**Un disquete y discos compactos** conteniendo archivos con instrucciones sobre manejo de armas y explosivos, aviso de una explosión para el día 24 de diciembre en la vía del tren Zaragoza-Logroño, clasificado con el nombre de archivo "Azapoza", otro archivo con el nombre "Bisca" sobre la explosión que se iba a producir el 31 de diciembre en la vía del tren Lérida-Zaragoza, un tercer archivo con el nombre "Dos" sobre la colocación de las bombas en el Intercity Irún-Madrid y otro, denominado "Tren 01" avisando de que el artefacto colocado en ese tren iba a estallar en cuarenta y cinco minutos.

-**Números de teléfono de policía, asistencia en carretera, medios de comunicación y otros.**

[SAN, (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 25/2005, Antecedentes, noveno]

Pese a la imprecisión del concepto "efectos" que aparece en la expresión predictiva que introduce la enumeración del ejemplo anterior, resulta difícil incluir en él el último elemento que aparece en la lista y que alude, probablemente, a números de teléfono que se encontraron anotados en algún papel o guardados en algún archivo informático, es decir, en alguno de los soportes que constituyen el resto de los "efectos" enumerados en la serie.

En el fragmento siguiente, la enumeración tiene un marco predictivo que le indica al lector que va a encontrarse con una serie de "razones" para desestimar una alegación. Efectivamente, en los primeros ítems encontramos hechos que quedan probados a partir de testimonios, conversaciones, informes y documentos. Sin embargo, a partir del tercer elemento, la lista pasa a enumerar directamente esos documentos o conversaciones, omitiendo los hechos que por ellos quedan acreditados y que pueden constituir "razones" para desestimar la alegación a la que se hacía referencia al anunciar la enumeración.

(8)

a) La primera alegación ha de ser desestimada **por las siguientes razones.**

Ha resultado acreditado en juicio oral -por el testimonio de los policías y funcionarios de la Agencia Tributaria que participaban en la investigación- que si bien las conversaciones de interés para esta causa acaecieron entre el día 15 al 20 de marzo de 2006, estas conversaciones cobran importancia y relevancia en la investigación con posterioridad, cuando se interrelacionan con declaraciones de otros imputados y con las pruebas documentales que se obtuvieron el 29 de marzo de 2006, con ocasión de diligencias de entrada y registro y detenciones llevadas a cabo en Diligencias Previas 4796/05.

Consta explicado en el Informe Policial nº NUM016 que tras la declaración judicial el día 28-05-07 de otro imputado en Diligencia Previas 4796/05 -el cual reconocía haber entregado 150.000 euros a Juan Alberto en el mes de marzo de 2006 a cambio de tres licencias de primera ocupación de viviendas- se abrió una línea de investigación policial para determinar el posible destino dado a esos fondos. Para ello se realizó una exhaustiva labor de análisis de la ingente cantidad de documentos físicos e informáticos que se habían ocupado en las diligencias de entrada y registro y detenciones acordadas en aquellas Diligencias Previas, así como de las intervenciones telefónicas realizadas. Fruto de esta labor de investigación y con ocasión de la ocupación al contable de Juan Alberto de las denominadas Hojas de Contabilidad, con dos anotaciones de entregas fechadas el día 17 de marzo de 2006 (de 63.000 euros y 10.800 euros), uno de los especialistas tributarios que trabajó en la investigación realizó el hallazgo de la correspondencia e identidad entre dichas cantidades y las que obraban en los documentos Word que contenían el contrato de compra de vivienda, en el que figuraba como comprador el acusado aforado, con una cláusula otorgando carta de pago por la cantidad de 10.800 euros en concepto de intereses por precio aplazado, así como un recibo de cantidad por importe de 63.000 euros.

Documentos ocupados el 29 de marzo de 2007, con ocasión de las diligencias judiciales de entrada y registro, contenidos en el Pendrive ocupado en la oficina de Maras, y en el ordenador del despacho de la

secretaría en la oficina de Gerencia de Obras y Servicios, SL, sita en la delegación de Urbanismo, ambos lugares bajo control de Juan Alberto.

Documentos que finalmente cuadraron con las conversaciones en las que se negoció la venta de la vivienda y se hablaba de la presentación de una querrela en el Juzgado.

Conversaciones también necesitadas de pesquisas policiales para identificar claramente, con todas las garantías, a las personas que pudieran ser directamente responsables de los delitos que se estaban investigando.

El Informe Policial nº NUM016 dando cuenta de todas estas diligencias de investigación es de fecha 6 de junio de 2007, y en esos primeros días de junio se presentó en el Juzgado. Así ha resultado acreditado por informe recibido del Comisario Jefe Provincial de Málaga y por el testimonio de los policías que participaron en su elaboración. Y si bien la defensa cuestiona esta data, lo cierto es que dicho informe policial, en cualquier caso, sólo pudo ser confeccionado después del día 28-05-07, que la declaración sumarial de un imputado en Diligencia Previa 4796/05, ofreció esta línea de investigación y comprobación de los delitos aquí enjuiciado

En conclusión, no es acogible la alegación de retraso injustificado en la confección del Informe Policial nº NUM016. La actividad investigadora del Grupo Policial que participó en la confección y elaboración del Informe NUM016 se ha revelado como demostrativa de un buen hacer profesional, en atención al ingente y diverso material ocupado, la complejidad de los hechos y la dificultad intrínseca que tienen las investigaciones de los delitos de cohecho, prevaricación y demás delitos contra la Administraciones Públicas.

[TSJ And., Granada (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª). 10/2008 Fundamentos, segundo]

Al revisar los ejemplos de series heterogéneas que hemos encontrado en el corpus, nos encontramos una vez más frente a enumeraciones que responden a una deficiente conceptualización por parte de la persona encargada de redactar la sentencia, como ocurre con la siguiente, en la que el último elemento no es, en realidad, un ítem más de la lista sino una condición que afecta a los dos anteriores:

(9)

PRIMERO- Por la mentada representación de la parte actora se presentó demanda ajustada a las prescripciones legales en la que tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que consideró de aplicación al caso y que se dan por reproducidos en evitación de innecesarias reiteraciones, terminó suplicando al Juzgado que en su día y previos los trámites de rigor, fuese dictada sentencia por la que: 1.- Se condene al Banco Central Hispanoamericano, SA, y a Rheinhyp Reinische Hypothekenbank AG, al pago de (os daños y perjuicios causados a la actora, como consecuencia de la ejecución hipotecaria tramitada a sus instancias ante el juzgado de primera Instancia N° 31 de los de Madrid, autos N° 405/96, durante cuyo transcurso concurrió causa de extinción de la garantía hipotecaria» por liberación de los avalistas del deudor principal, cifrándose los daños en la suma de 4536 millones de pesetas, por ser éste el valor del edificio subastado, más los intereses legales desde la interposición de la demanda; 2.- Con carácter subsidiario de la anterior petición, se condene a los avalistas Estacionamientos Subterráneos, SA. Huarte, SA. y Banco Central Hispanoamericano, SA. al pago a la actora de la cantidad de 2.355 millones de pesetas, por ser ésta la cantidad pagada por la demandante en su condición de hipotecante ajeno a la deuda, más los intereses legales desde la interposición de la demanda; **3.- Todo lo anterior con expresa imposición de las costas del juicio.**

[SJPI 673/2000 Madrid: Antecedentes, primero]

La heterogeneidad de los elementos enumerados responde, en la mayoría de los casos, al empleo de unos criterios poco claros para agrupar los datos que constituyen la lista.

El breve fragmento que incluimos a continuación contiene una secuencia enumerativa que se divide en dos partes:

(10)

En la Diligencias Ampliatorias nº 1 se indica que han quedado intervenidas setenta y dos plantas de marihuana, veinte plantas pequeñas, seis plantas que se encontraban en la terraza, dos plantas grandes de marihuana (madres) y dos plantas de marihuana secas y restos de marihuana secas, así como diversas evidencias relacionadas con el secado de las plantas, sistema de riego, sistema de iluminación, sistema de ventilación, balanza, cámara de vídeo, cinta de grabación y semilleros.

[SJS 28/2010, Pamplona: Hechos probados, sexto]

La primera parte de la enumeración reúne algunos ítems que, si bien podrían reunirse en su mayoría bajo el concepto "planta", resultan heterogéneos por los distintos criterios que se utilizan para clasificarlos, a saber:

- El número y la especie: **setenta y dos** plantas de **marihuana**
- El número y el tamaño: **veinte** plantas **pequeñas**
- El número y la localización: **seis** plantas **que se encontraban en la terraza**
- El número y la especie: **dos** plantas **grandes de marihuana**
- El número, la especie y el estado: **dos** plantas **de marihuana secas**

Ello dificulta comprender, por ejemplo, si las veinte plantas pequeñas son o no de marihuana o están incluidas o no en las setenta y dos plantas de marihuana que constituyen el primer elemento de la serie. Por si fuera poco, esta parte de la enumeración concluye con un último ítem que el lector no puede incluir en el conjunto “planta”, pues se trata de “restos de marihuana”.

La segunda parte de la enumeración va introducida por una expresión predictiva poco precisa por dos motivos: en primer lugar, la indeterminación del “diversas” y, en segundo lugar, por la dificultad para decidir dónde se cierra la expresión predictiva y empieza la serie: en efecto, los cuatro primeros elementos parecen depender de “relacionadas con”, mientras que los cuatro últimos no pueden interpretarse del mismo modo, sino que son los objetos intervenidos en sí mismos y deberían expresarse mediante sustantivos precedidos de un determinante.

La heterogeneidad de los ítems contenidos en una enumeración puede ser exclusivamente conceptual, pero lo más frecuente es que se vea reflejada también en el nivel sintáctico, como en el ejemplo siguiente, en el que la expresión predictiva “los siguientes elementos” nos lleva a esperar ítems expresados por estructuras que puedan realizar una función sintáctica nominal, requisito que no cumplen los ítems 2º y 3º a causa de una utilización antinormativa de “cuyo”:

(11)

Para la configuración del delito de coacciones son necesarios **los siguientes elementos**: 1º) **Una conducta violenta** de contenido material “vis” física, o intimidativa “vis” compulsiva, ejercida contra el sujeto o sujetos pasivos del delito, bien de modo directo o indirecto a través de cosas, e incluso de terceras personas; 2º) **cuyo “modus operandi”** va encaminado como resultado a impedir hacer lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que no se quiera, sea justo o injusto; 3º) **cuya conducta** ha de tener la intensidad de violencia necesaria para ser delito, pues de carecer de tal intensidad podría constituir falta del artículo 620 del Código Penal (STS 1181/97, de 3 de octubre); 4º) **que exista** el ánimo tendencial consistente en un deseo de restringir la libertad ajena como se deriva de los verbos “impedir” y “compeler”; y 5º) **una ilicitud** del acto, examinado desde la normativa de la convivencia social y la jurídica que preside o debe regular la actividad del agente (STS 868/2001, de 18 de mayo) el cual no ha de estar legítimamente autorizado para emplear violencia o intimidación (STS 131/2000, de 2 de febrero).

[SAN 60/2006, Fundamentos, tercero]

64

4.2. Dificultad para interpretar los elementos enumerados

Las series enumerativas que hemos encontrado en el corpus de sentencias analizado son, por lo general, complejas, pues el escritor ha de incluir en ellas una gran diversidad de datos, de modo que, para que los elementos enumerados resultaran fácilmente interpretables por parte del lector, sería aconsejable que estas series estuvieran claramente estructuradas y marcadas con la máxima explicitud. No es así en casos como el siguiente, en los que no hay expresión predictiva ni los ítems, pese a su número y complejidad, aparecen separados de un modo cómodamente legible:

(12)

En trámite de conclusiones definitivas, el Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de atentado con resultado de muerte realizado por integrante de organización terrorista contra miembro de las Fuerzas Armadas de los arts. 231.2º y 233, párrafo 3, del Código Penal de 1973 (RCL 1973, 2255) (art. 572.1-1º y 572.2 del actual Código Penal [RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777]), dos delitos de asesinato (uno del art. 406.1 y otro del art. 406.3 del CP 1973 (art. 139.1 del vigente Código Penal) y siete delitos de asesinato en grado de frustración de los arts. 406.3 y art. 3, párrafo segundo, del CP 1973 (arts. 139.1, 15.1 y 16.1 del actual Código Penal) considerando autora a la acusada, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando la imposición por el primer delito la pena de veintinueve años de reclusión mayor; por los dos delitos de asesinato, la

misma pena por cada uno de ellos; y por los siete delitos de asesinato en grado de frustración la pena de veintidós años de reclusión menor, así como accesorias, costas y que por vía de responsabilidad civil indemnice a los herederos legales de D. Vicente, D. Bruno y D. Luis Carlos en la cantidad de 240.000 € con los incrementos legales; a D. Millán en 180.000 € con los incrementos legales; a D. Donato y D. Juan Pedro en 210,35 € con los incrementos legales; a D. Tomás, D. Jesús Manuel y D. Bernardo en la cantidad de 150,25 € y sus incrementos legales y a D. Jesús Carlos en 30 € y sus incrementos legales.

[SAN 55/2006, Antecedentes de hecho, cuarto]

Diversas series enumerativas se acumulan en un único párrafo a pesar de que cada una de ellas reúne elementos complejos a su vez. Una primera serie contiene los tres tipos de delitos que, según el Ministerio Fiscal, constituyen lo hechos. Cada uno de estos tres elementos enumerados contiene la siguiente información: a) número de delitos, b) tipología de los delitos, c) leyes que establecen cada tipo de delito.

Empieza a continuación una segunda enumeración de tres ítems en la que se recogen las penas solicitadas por cada uno de esos tres tipos de delitos y, finalmente, el párrafo se cierra con otra enumeración de cinco elementos, cada uno de los cuales está compuesto de dos conjuntos de datos: las distintas cantidades que se solicita que la acusada pague como indemnización y las personas que han de recibir esas cantidades.

Una distribución más legible de la información en párrafos diferenciados y una marcación visible de cada una de las series y de cada uno de los ítems contenidos en ella garantizarían una interpretación más directa y adecuada de los elementos enumerados por parte del lector.

En el ejemplo siguiente, la dificultad para interpretar los elementos enumerados responde a otras causas. En este caso, el marco de la enumeración aparece anunciado por la expresión “las siguientes pruebas”. Sin embargo, al lector le resulta costoso reunir mentalmente todos los ítems de la lista bajo la etiqueta “pruebas”.

(13)

Prueba practicada que valora el Tribunal. El Tribunal en el ámbito del art. 741 de LECrim ha contado para reputar desvirtuada la presunción de inocencia a que se refiere el art. 24.2 CE, y llegar al relato de hechos probados que antecede **con las siguientes pruebas**:

(a) **Declaraciones** policiales de (...)

(b) **Declaraciones** policiales de (...)

(c) **Testifical** de (...)

(d) **Testifical** de (...)

(e) **Prueba testifical** de (...)

(f) **Peritos** del Cuerpo Nacional de Policía con números NUM024 (por error se hace constar NUM028), NUM025, NUM026 y NUM027, técnicos en desactivación de explosivos que forman dos grupos con base, respectivamente, en León y Logroño que se desplazaron hasta la estación de Burgos donde, tras llegar el tren Intercity Irún-Madrid y desalojar al pasaje y la estación, procedieron a la neutralización del artilugio explosivo. Efectuaron la comparecencia unida al folio 361 (ratificada en el plenario) y reconocieron las fotografías unidas a los folios 362 y sigs., que se corresponden con el artilugio hallado en el tren.

Explicaron que en el interior de una maleta, modelo Trunkco de la marca Sansonite, localizan unos 28 kg de dinamita Titadyne, cuatro metros de cordón detonante, dos detonadores eléctricos del número 12 y un temporizador modelo TC conectado y dispuesto para activar el dispositivo explosivo a las 15 55 horas del día 24 de diciembre de 2003, estando todo el dispositivo en perfecto estado de funcionamiento y listo para explosionar, maleta que se hallaba en el segundo de los vagones, en la zona del portamaletas. Y, a preguntas del Ministerio Fiscal, como técnicos en la materia, afirmaron que la explosión podía haberse producido no sólo por la finalización de la temporización sino, al ser unos sistemas muy sensibles, al recibir un golpe fortuito como el producido al colocar otra maleta encima, con el propio movimiento del tren (“traqueteo”, según dijeron) e incluso con el aparato eléctrico de una tormenta (aclararon que ese día la había) pues se trata de un circuito eléctrico modificado.

En cuanto a la potencia del explosivo dijeron que era muy grande y que podía haber producido un resultado “terrible” porque, además, hubiera generado una gran cantidad de metralla, dependiendo el mayor o menor resultado de si hubiera estado estacionado en un andén exterior o interior (además del pasaje).

También afirmaron que de haber explosionado en marcha podía haber provocado el descarrilamiento del tren.

(g) **Pericial** de (...)

(h) **Perito**, técnico en desactivación de explosivos, miembro del Cuerpo Nacional de Policía núm. NUM031 que elaboró (junto con el núm. NUM032, enfermo) y ratificó el informe unido a los folios 635 a 638 sobre el contenido de la maleta que es ocupada en la detención de José Ramón.

Tras confirmar que su contenido era una cantidad superior a los 25 kg de dinamita, afirmó que estaba listo para ser usado con sólo conectar el detonador y ponerlo en “on”, operación que se realiza en unos segundos (2,4 segundos, dijo).

Relató como hicieron una prueba y funcionó activándose a las “cuatro menos cinco” (15 55 horas).

(i) **Peritos** Iofoscópicos del Cuerpo Nacional de Policía con núms. NUM033 y NUM034, que ratificaron su informe a los folios 1.111 y 1.112 y confirmaron que en un plano de transporte público de San Sebastián que estaba dentro del vehículo Opel frontera QJ-OY había tres huellas, siendo una de ellas, sin duda, de Juan Pedro.

[SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 25/2005, Fundamentos, primero]

Los dos primeros elementos de la enumeración están expresados por sustantivos; los dos siguientes, al igual que (g), por un adjetivo nominalizado que debería seguir al sustantivo “prueba”; el siguiente, (e), por el sintagma completo “prueba” más adjetivo, pero, al empezar a leer los ítems (f), (h) e (i), nos encontramos con un sustantivo que alude a persona, concretamente, a peritos que aparecen como personajes de una secuencia narrativa que constituirá el contenido de cada uno de los ítems mencionados. Resulta difícil llegar a entender que estos tres elementos de la enumeración también constituyen pruebas.

Creemos que la versión que proponemos a continuación simplifica la aprehensión de la información:

(13bis)

Prueba practicada que valora el Tribunal. El Tribunal en el ámbito del art. 741 de LECrim ha contado para reputar desvirtuada la presunción de inocencia a que se refiere el art. 24.2 CE. y llegar al relato de hechos probados que antecede con las siguientes pruebas:

a. Declaraciones policiales:

a.1. Declaraciones policiales de (...)

a.2. Declaraciones policiales de (...)

b. Pruebas testificales:

b.1. Prueba testifical de (...)

b.2. Testifical de (...)

b.3. Prueba testifical de (...)

c. Pruebas periciales:

c.1. Los peritos del Cuerpo Nacional de Policía con números NUM024 (por error se hace constar NUM028), NUM025, NUM026 y NUM027, técnicos en desactivación de explosivos que forman dos grupos con base, respectivamente, en León y Logroño que se desplazaron hasta la estación de Burgos donde, tras llegar el tren Intercity Irún-Madrid y desalojar al pasaje y la estación, procedieron a la neutralización del artilugio explosivo. Efectuaron la comparecencia unida al folio 361 (ratificada en el plenario) y reconocieron las fotografías unidas a los folios 362 y sigs., que se corresponden con el artilugio hallado en el tren.

Explicaron que en el interior de una maleta, modelo Trunkco de la marca Sansonite, localizan unos 28 kg de dinamita Titadyne, cuatro metros de cordón detonante, dos detonadores eléctricos del número 12 y un temporizador modelo TC conectado y dispuesto para activar el dispositivo explosivo a las 15 55 horas del día 24 de diciembre de 2003, estando todo el dispositivo en perfecto estado de funcionamiento y listo para explosionar, maleta que se hallaba en el segundo de los vagones, en la zona del portamaletas. Y, a preguntas del Ministerio Fiscal, como técnicos en la materia, afirmaron que la explosión podía haberse producido no sólo por la finalización de la temporización sino, al ser unos sistemas muy sensibles, al recibir un golpe fortuito como el producido al colocar otra maleta encima, con el propio movimiento del tren (“traqueteo”, según dijeron) e incluso con el aparato eléctrico de una tormenta (aclararon que ese día la había) pues se trata de un circuito eléctrico modificado.

En cuanto a la potencia del explosivo dijeron que era muy grande y que podía haber producido un resultado “terrible” porque, además, hubiera generado una gran cantidad de metralla, dependiendo el mayor o menor resultado de si hubiera estado estacionado en un andén exterior o interior (además del pasaje).

También afirmaron que de haber explosionado en marcha podía haber provocado el descarrilamiento del tren.

c.2. Pericial de (...)

c.3. Un perito, técnico en desactivación de explosivos, miembro del Cuerpo Nacional de Policía núm. NUM031 que elaboró (junto con el núm. NUM032, enfermo) y ratificó el informe unido a los folios 635 a 638 sobre el contenido de la maleta que es ocupada en la detención de José Ramón.

Tras confirmar que su contenido era una cantidad superior a los 25 kg de dinamita, afirmó que estaba listo para ser usado con sólo conectar el detonador y ponerlo en “on”, operación que se realiza en unos segundos (2,4 segundos, dijo).

Relató como hicieron una prueba y funcionó activándose a las “cuatro menos cinco” (15 55 horas).

c.4. Los peritos Iofoscópicos del Cuerpo Nacional de Policía con núms. NUM033 y NUM034, que ratificaron su informe a los folios 1.111 y 1.112 y confirmaron que en un plano de transporte público de San Sebastián que estaba dentro del vehículo Opel frontera QJ-OY había tres huellas, siendo una de ellas, sin duda, de Juan Pedro.

4.3. Dificultad para separar los elementos enumerados

En algunos casos, se pone de manifiesto la dificultad de la persona encargada de la redacción de la sentencia para separar los elementos de la enumeración. Así ocurre en el ejemplo siguiente, donde no solo nos encontramos con problemas de legibilidad, pues el que, por aparecer en un único párrafo, parece el primer ítem de la lista contiene, en realidad, dos elementos, sino que además se produce un anacoluto, de modo que el fragmento resulta agramatical:

(14)

Penalidad y responsabilidad civil

Extensión de las penas.

Por el delito de delito de atentado con resultado de muerte realizado por integrante de organización terrorista contra miembro de las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo previsto en el art. 233 CP 1973 y las reglas previstas en los arts. 61 y 62 del mismo texto punitivo, la pena de VEINTISIETE AÑOS DE PRISIÓN (grado mínimo de la reclusión mayor en su grado máximo), lo que se considera adecuada a las circunstancias concurrentes y gravedad de los hechos. Por cada uno de los dos delitos de asesinato (uno del art. 406.1 y otro del art. 406.3 del CP 1973 -art. 139.1 del vigente Código Penal, la pena de VEINTISIETE AÑOS DE PRISIÓN (grado mínimo de la reclusión mayor en su grado máximo), lo que se considera adecuada a las circunstancias concurrentes y gravedad de los hechos. Y

Por cada uno de los cinco delitos de asesinato en grado de frustración de los arts. 406.3 y art. 3, párrafo segundo, del CP 1973 (arts. 139.1, 15.1 y 16.1 del actual Código Penal), VEINTIDÓS AÑOS DE PRISIÓN MAYOR conforme a la petición del Ministerio Fiscal.

[SAN 55/2006, Fundamentos de derecho, primero]

Esta posible versión de la enumeración elude la agramaticalidad de la anterior y, al mismo tiempo, resulta más legible:

(14bis)

Extensión de las penas:

1. Por el delito de delito de atentado con resultado de muerte realizado por integrante de organización terrorista contra miembro de las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo previsto en el art. 233 CP 1973 y las reglas previstas en los arts. 61 y 62 del mismo texto punitivo, la pena de VEINTISIETE AÑOS DE PRISIÓN (grado mínimo de la reclusión mayor en su grado máximo), lo que se considera adecuada a las circunstancias concurrentes y gravedad de los hechos.

2. Por cada uno de los dos delitos de asesinato (uno del art. 406.1 y otro del art. 406.3 del CP 1973 -art. 139.1 del vigente Código Penal, la pena de VEINTISIETE AÑOS DE PRISIÓN (grado mínimo de la reclusión mayor en su grado máximo), lo que se considera adecuada a las circunstancias concurrentes y gravedad de los hechos.

3. Por cada uno de los cinco delitos de asesinato en grado de frustración de los arts. 406.3 y art. 3, párrafo segundo, del CP 1973 (arts. 139.1, 15.1 y 16.1 del actual Código Penal), VEINTIDÓS AÑOS DE PRISIÓN MAYOR conforme a la petición del Ministerio Fiscal.

Como recomendación general, para evitarle dificultades al lector en su tarea de identificar cada elemento enumerado como un dato discreto, separado de los demás, cabe recordar a los escritores de textos como los que nos ocupan la conveniencia de marcar cada ítem de una enumeración con un número o una letra y, en el caso de que los ítems sean complejos, de dedicarle un párrafo distinto a cada uno de ellos.

(15)

El procesado Arturo , mayor de edad, ingresado en el Centro Penitenciario de Algeciras en el que ha venido cumpliendo condena por numerosas acciones como miembro activo de la organización terrorista ETA, ejecutoriamente condenado entre otras, en sentencia de 7 de octubre de 1987, firme el 21 de enero de 1988a la pena de diez años de prisión mayor y multa de trescientas cincuenta mil pesetas por pertenencia a banda armada o grupo terrorista, diez años de prisión mayor por tenencia de explosivos, un año de prisión menor por falsificación continuada de documentos de identidad, un año de prisión menor y multa de trescientas mil pesetas por falsificación de placas de matrícula y tres meses de arresto mayor y privación del permiso de conducir o derecho a obtenerlo por un plazo de dos años, por cada una de las cuatro utilizaciones ilegítimas de vehículo de motor ajeno; en sentencia de fecha 10 de octubre de 1988, firme el 16 de enero de 1989a la pena de 11 años de prisión mayor por un delito de terrorismo; en sentencia de 24 de abril de 1989, firme el 21 de junio de 1989a la pena de veintinueve años de reclusión mayor por un delito de asesinato terrorista, a la pena de veintinueve años de reclusión mayor por un delito de atentado, y a la pena de veintidós años de reclusión mayor por un delito de atentado, ambos de carácter terrorista; en sentencia de fecha 17 de junio de 1989, firme el 14 de septiembre de 1989, a la pena de once años de reclusión mayor por un delito de atentado terrorista y a la pena de veinticinco años

de reclusión mayor por un delito de asesinato; en sentencia de 7 de noviembre de 1989, firme el 22 de enero de 1990, a la pena de 30 años de reclusión mayor por un delito de atentado terrorista y a dos penas de veintinueve y veinticuatro años de reclusión mayor respectivamente por dos delitos de asesinato; y en sentencia de 8 de mayo de 2000, firme el 26 de junio de 2000a la pena de once años de reclusión por un delito de detención ilegal, a la pena de treinta años de reclusión mayor por un delito de asesinato, a la pena de veintinueve años de reclusión mayor por un delito de asesinato, y a la pena de veinticuatro años de reclusión mayor por un delito de asesinato, publicó en el diario "Gara" de 1 de diciembre de 2004 una carta remitida por aquel, bajo el título "El Escudo", con el siguiente contenido:

[SAN 60/2006, Hechos probados]

Hay una secuencia enumerativa larguísima, a modo de relativa explicativa, incrustada entre el SN sujeto y el predicado que dificulta enormemente la comprensión de la oración-párrafo. La secuencia enumerativa se incrusta ente el SN sujeto y el predicado y deja a este último a muchas líneas del sujeto, lo que fuerza a volver al inicio para saber quién realiza la acción verbal principal. Además, la secuencia enumerativa presenta problemas en la distribución de la información por varios motivos: a) no se introduce adecuadamente la enumeración (ausencia de expresión predictiva); b) no se marca adecuadamente cada miembro de la enumeración, lo que dificulta su localización; c) se elide, en todos los casos, el verbo principal "condenar" ante el complemento preposicional "a la pena de".

Dado que las condenas que está cumpliendo el procesado son o pueden ser relevantes para el proceso en curso, tal vez sería conveniente explicitar las penas con anterioridad a la declaración de los hechos probados que se juzgan. De este modo, se separarían los hechos ya juzgados del hecho que se pretende juzgar y la lectura sería más fluida e inteligible.

Una posible paráfrasis podría ser esta:

(15bis)

El procesado Arturo, mayor de edad, ingresado en el Centro Penitenciario de Algeciras, cumple actualmente varias condenas ejecutorias por numerosas acciones como miembro activo de la organización terrorista ETA, con las siguientes penas:

- a) Pena de diez años de prisión mayor y multa de trescientas cincuenta mil pesetas por pertenencia a banda armada o grupo terrorista; a la pena de diez años de prisión mayor por tenencia de explosivos; a la pena de un año de prisión menor por falsificación continuada de documentos de identidad; a la pena de un año de prisión menor y multa de trescientas mil pesetas por falsificación de placas de matrícula; y a la pena de tres meses de arresto mayor y privación del permiso de conducir o derecho a obtenerlo por un plazo de dos años, por cada una de las cuatro utilizaciones ilegítimas de vehículo de motor ajeno (en sentencia de 7 de octubre de 1987, firme el 21 de enero de 1988)
- b) Pena de once años de prisión mayor por un delito de terrorismo (en sentencia de fecha 10 de octubre de 1988, firme el 16 de enero de 1989).
- c) Pena de veintinueve años de reclusión mayor por un delito de asesinato terrorista; a la pena de veintinueve años de reclusión mayor por un delito de atentado; y a la pena de veintidós años de reclusión mayor por un delito de atentado, ambos de carácter terrorista (en sentencia de 24 de abril de 1989, firme el 21 de junio de 1989).
- d) Pena de once años de reclusión mayor por un delito de atentado terrorista y a la pena de veinticinco años de reclusión mayor por un delito de asesinato (en sentencia de fecha 17 de junio de 1989, firme el 14 de septiembre de 1989).
- e) Pena de 30 años de reclusión mayor por un delito de atentado terrorista y a dos penas de veintinueve y veinticuatro años de reclusión mayor respectivamente por dos delitos de asesinato (en sentencia de 7 de noviembre de 1989, firme el 22 de enero de 1990).
- f) Pena de once años de reclusión por un delito de detención ilegal; a la pena de treinta años de reclusión mayor por un delito de asesinato; a la pena de veintinueve años de reclusión mayor por un delito de asesinato; y a la pena de veinticuatro años de reclusión mayor por un delito de asesinato (en sentencia de 8 de mayo de 2000, firme el 26 de junio de 2000).

El hecho probado que ahora se juzga es la publicación en el diario "Gara" de 1 de diciembre de 2004 de / El procesado publicó en el diario "Gara" de 1 de diciembre de 2004 una carta remitida por él mismo bajo el título "El Escudo", cuyo contenido es el siguiente / con el siguiente contenido:

Sin embargo, no es necesario que la enumeración presente el grado de complejidad de la del ejemplo anterior para que su formulación dé lugar a dificultades para identificar el inicio y el final de cada uno de los miembros que la constituyen, tal como muestra el ejemplo que reproducimos a continuación:

(16)

Como consecuencia de su patología lumbar, el demandante tenía contraindicada médicamente la realización de actividades que sobrecargarán su columna lumbar, como la bipedestación mantenida, deambulación prolongada, carga, arrastre o manejo de pesos medios-importantes de forma mantenida o repetida, movimientos repetitivos o posturas forzadas de flexo-extensión, lateralizaciones y/o giros de columna dorso lumbar, ejercer fuerza de empuje o tracción, etc.

[SJS 28/2010, Pamplona: Hechos probados, cuarto]

En este caso, sería suficiente con homogeneizar la estructura de los sintagmas nominales que componen la serie y utilizar de forma más adecuada los signos de puntuación.

Tampoco el siguiente ejemplo recoge una serie tan compleja como las que hemos encontrado en algunos de los ejemplos anteriores:

(17)

Se señaló día para la celebración del acto de Juicio, fijándose las fechas del día 2 de marzo y siguientes de 2 010, quedando emplazadas las partes y proveídas las pruebas en los términos contenidos en el acta y la oportuna grabación.

[SJPI 40/2010, Antecedentes de Hecho, segundo]

No obstante, resulta difícil para el lector decidir si la oportuna grabación se coordina con el acta o con las pruebas proveídas, es decir, cuál de las dos versiones que se proponen a continuación corresponde a la información que la persona que redactó la sentencia deseaba transmitir:

(17bis)

1. Se señaló día para la celebración del acto de Juicio, fijándose las fechas del día 2 de marzo y siguientes de 2.010, quedando emplazadas las partes y proveídas las pruebas en los términos contenidos en el acta y en la oportuna grabación.

2. Se señaló día para la celebración del acto de Juicio, fijándose las fechas del día 2 de marzo y siguientes de 2 010, quedando emplazadas las partes y proveídas tanto las pruebas, en los términos contenidos en el acta, como la oportuna grabación.

69

4.4. Enumeraciones truncadas

Si la enumeración no es completa, no contiene todos los miembros que pueden formar parte de ella, el escritor ha de comunicárselo al lector, ya sea al introducir la serie, mediante expresiones como “entre otros” u otra equivalente, o bien al final de la enumeración, mediante puntos suspensivos, “etc.”, “entre otros” algún otro elemento. De otro modo, la serie aparece truncada.

En el ejemplo que citamos a continuación, la enumeración no consta de un marco claro, por lo que el lector se ve obligado a suponer que los elementos que la componen son consideraciones que tienen que ver con una información expresada anteriormente, sin tener siquiera la certeza de cuál puede ser esa información:

(18)

En el caso que nos ocupa, la parte demandante solicita la cantidad de 240.000 euros, en atención a la audiencia de la cadena Telecinco que durante el primer trimestre de 2008 fue del 19,1% y el “share” del programa durante la emisión del reportaje de un 25,1%. A este respecto, **en primer lugar**, dicho programa ya no se emite; **en segundo lugar**, si bien de todo el programa de unos 81 minutos de duración, el reportaje sobre el causante de la parte demandante sólo dura treinta segundos, se ha tenido en cuenta la repercusión y gran difusión del medio y del programa donde se emitió, de la gravedad de dicha lesión y de que se trata de un hecho reincidente que la propia parte demandada reconoció como intromisión al honor y profesionalidad de la persona y trabajo de D. Pedro Miguel ; por lo que se considera como ponderada la cantidad de 100.000 euros.

[SJPI 5/2010, Fundamentos, quinto]

El primer ítem de la enumeración del ejemplo aparece introducido por “en primer lugar”; después, tras punto y coma, se introduce el segundo con el correlativo “en segundo lugar”, de modo que, al llegar al siguiente punto y coma, el lector espera encontrarse con el tercer

miembro de la serie. Esta expectativa se ve frustrada, pues la enumeración contiene solo dos elementos, dato que el lector hubiera previsto si el escritor hubiera incluido la conjunción “y” delante del último ítem de la serie.

5. EL SISTEMA DE NUMERACIÓN

A la hora de elegir un sistema de enumeración, el escritor cuenta con los números, las letras o los ordenadores del discurso enumerativos. En cuanto a las enumeraciones mediante los números y las letras, lo que en nuestros procesadores de texto se denomina esquemas numerados, son especialmente adecuadas para listas complejas, en las que lo mejor es dedicar un párrafo diferenciado para cada uno de los ítems a fin de ofrecer al lector la más explícita legibilidad, puesto que su atención habrá de estar dedicada a la información que constituye cada elemento enumerado.

En nuestro corpus hemos encontrado algunas sentencias en las que aparece una muy buena ordenación y marcación de cada una de las partes del documento: I ANTECEDENTES, II FUNDAMENTOS DE DERECHO, etc.; y, en el interior de cada una de ellas, una numeración muy rigurosa de los elementos que la constituyen, cada uno en un párrafo separado: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, etc. Dos ejemplos de esta sistematicidad son: [Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 1353/2009] y [Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 10/2008 de 7 agosto JUR\2008\259803].

Por su parte, los ordenadores del discurso enumerativos son muy efectivos como mecanismo para distribuir la información en enumeraciones que constituyen un único párrafo. Los dos fragmentos que citamos a continuación constituyen ejemplos de buenos prácticas:

(19)

Sobre las 3,10 horas del día 10 de julio de 2007 se practicó la diligencia de entrada y registro en el domicilio del procesado Romeo, sito en el chalet NUM003, c/DIRECCION000 Nº NUM0004 de la localidad de la de Boadilla del Monte (Madrid), y en el curso de tal operación se intervinieron, entre otros efectos, seis tarjetas, marca VODAFONE, MOVISTAR y LEBARA MOBILE, insertas en sus respectivos terminales, y ocho soportes telefónicos, marca VODAFONE y MOVISTAR, todo ello utilizado igualmente para el contacto con los demás miembros del grupo delictivo, así como la cantidad de 7.400 euros. **Por lo que respecto al ... (...) De otro lado, ... (...) por último**

[STS 1353/2009 (Sala de lo Penal, Sección 1ª)]

(20)

4. DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS (...) Como autor de un delito continuado de falsead documental ya definido a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN y multa de ocho meses a razón de 6 Euros día. **Asimismo** y como autor de un delito ya definido de atentado a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN. **Finalmente** como autor de dos faltas...

5.1. Inconsistencias de la marcación

Es importante, a fin de guiar adecuadamente al lector en su interpretación de la enumeración, utilizar un sistema de marcación coherente; no mezclar en una misma enumeración sistemas de marcación distintos. Enumeraciones como la que reproducimos a continuación, sin expresión predictiva y con una marcación inconsistente de los elementos enumerados, no son cómodamente interpretables.

(21)

Vista en juicio oral y público por la Sala de lo Civil y Penal, actuando como Sala de lo Penal, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, integrada por la Ilma. Sra. Presidenta y los Ilmos. Sres. Magistrados al margen relacionados, la precedente causa seguida por **delitos de prevaricación judicial; delito de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público; un delito de cohecho activo y un delito de cohecho pasivo**, contra los siguientes acusados:

[TSJ And. 10/2008 (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª). Granada: Encabezamiento]

¿Cuántos son los delitos de prevaricación? ¿Por qué la persona que ha redactado esta sentencia no ha antepuesto “un” al delito de asesoramiento accidental como hace con el de cohecho? La enumeración no ofrece una respuesta a estos interrogantes que seguramente el lector de esta serie se va a plantear.

El fragmento que citamos a continuación podría ser un ejemplo de buena práctica, en tanto que introduce la enumeración con una expresión predictiva y separa cada elemento de la enumeración en párrafo independiente:

(22)

En el caso que nos ocupa, el procesado en ningún momento ha negado la autoría de los artículos publicados, sí ha negado sin embargo su intencionalidad amenazante o de facilitar posibles objetivos a la organización terrorista ETA, que es inferida por el Tribunal en aplicación del principio de libre valoración de la prueba recogido en el artículo 741 de la LECrim., de los siguientes elementos:

En primer lugar, resultan enormemente reveladoras las declaraciones de los testigos que depusieron el plenario. Así el Funcionario de Prisiones con carnet nº 98.669 manifestó que (...).

En la misma línea, la declaración del Funcionario nº 64.613 (...).

El Funcionario de Prisiones con carnet nº 30.716 corrobora que (...).

Por último, el Funcionario de Prisiones con carnet nº NUM001 (...).

[SAN 60/2006, Fundamentos, cuarto]

Sin embargo, la introducción de cada elemento no es correlativa ni coherente, dado que se inicia la enumeración con el marcador “en primer lugar” pero no se continúa con ordenadores consecutivos (“en segundo lugar”, “en tercer lugar”).

En el siguiente ejemplo, el lector se encuentra con un elemento introducido por “en segundo lugar” sin que haya aparecido el correspondiente “en primer lugar”.

(23)

Ahondando más en la cuestión, es lo cierto que el principio de legalidad en la ejecución de las penas impide poder otorgar a la propia víctima la posibilidad de privar de efectos a la pena accesoria impuesta en una previa sentencia en aplicación de los artículos 48 y 57 del Código Penal, pues ello en definitiva vendría a conculcar de modo frontal el artículo 3 del Código Penal, al dejarse en manos de la víctima la posibilidad de dejar sin efecto una pena judicialmente impuesta, por no hablar desde otro plano más material de las distorsiones que ello podría provocar de cara a la ejecución de tal pena accesoria al hacerse depender del consentimiento de la víctima. Que bien podría otorgarlo por motivos ajenos a una mínima eticidad para con el condenado, o bajo el padecimiento de una presión psicológica o psíquica promovida por éste o terceras personas con el mismo relacionadas. El principio de legalidad en la ejecución de las penas y la más mínima defensa del principio de seguridad jurídica implican con notoriedad la ausencia de cualquier tipo de incidencia del consentimiento de la víctima a la hora de entender negada atipicidad de la conducta prevista en el artículo 468/2 C.P. Igual solución ha de afirmarse, en cuanto al hecho de la transgresión no de tal pena accesoria, sino de las medidas cautelares adoptadas en sede de los artículos 544/Bis y 544/ Ter de la Ley Rituaria Criminal, pues el presupuesto del que parte la tipología del artículo 468/2 del Código Penal no admite distinción alguna entre que lo quebrantado sea la pena accesoria o la medida cautelar personal antes expresada, no pudiéndose transgredir el principio de legalidad tipificada por el simple hecho de otorgar a la finalidad refleja o mediata de protección a la víctima que poseen tales medidas cautelares, una función que no le es propia cual es la de soslayar la función del ius puniendi estatal de tipificar las conductas, previa la correspondiente valoración de su gravedad e incidencia social”. Asimismo indiferente resulta para la aplicación de la anterior doctrina el hecho que el consentimiento haya sido prestado recíprocamente por cada uno de los sujetos activos previamente condenados a la pena accesoria tan comentada. El recurso ha de claudicar.

En segundo lugar y en lo que respecta al recurso de apelación articulado por el Ministerio Fiscal, cierto es el criterio estable de esta Sala en la consideración como delito continuado de comportamientos como los aquí enjuiciados (Sentencia de 20 de Octubre de 2.008), y no como delito permanente, pues no nos encontramos ante una única acción típica que sigue desplegando sus efectos contraventores del bien jurídico protegido a lo largo del tiempo, si no más precisamente de un comportamiento constituido por multitud de actos consecutivos contraventores del mandato judicial en que la pena accesoria comentada consiste, pues caso de no entenderlo así vendría a ser de peor condición el acusado de violentar por ejemplo con el consentimiento de la víctima en tres ocasiones en un periodo de un mes tales penas, que como aquí ocurre la persona que quebranta dichas penas durante un periodo de tiempo prolongado mediante la reanudación de la convivencia. El recurso ha de ser estimado y por aplicación del artículo 74 del Código Penal procede imponer a ambos condenados en la instancia la pena de 9 meses de prisión, confirmandose el resto de la combatida sentencia.

[SAP CR 701/2009]

De nuevo vamos a encontrar, en el ejemplo siguiente, un elemento introducido por “en segundo lugar” en ausencia del marcado con “en primer lugar”. En este caso, la persona que redactó la sentencia utilizó para marcar esta enumeración tres sistemas distintos: el de los numerales ordinales (1º), el de las letras (b)) y el de los ordenadores del discurso enumerativos (*en segundo lugar*):

(24)

Este Tribunal considera que la omisión del oficio previo de comunicación a la Autoridad de la que dependía la Delegación de Urbanismos del Ayuntamiento de Marbella, es una mera irregularidad procedimental en modo alguno invalidante de la diligencia y de su resultado. Sólo merecería la calificación de irregularidad formal de norma no esencial del procedimiento, que no afecta al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio, que en modo alguno ha provocado indefensión y ello por las siguientes razones.

1º. La Delegación de Urbanismo de un Ayuntamiento, en la cual el acusado Juan Alberto ejercía parte de su actividad profesional, no es un lugar privado ni constituía el domicilio de este. Es un lugar en el que se encuentran unas dependencias municipales abiertas al público; es decir, a toda persona que quiera acceder a las mismas para el asesoramiento y la gestión de asuntos relacionados con problemas urbanísticos.

En consecuencia, no se puede calificar como “espacio de privacidad necesario para el libre desarrollo de la personalidad”, que es el garantizado por el derecho fundamental del art. 18.2 de la Constitución (STS de 11 de octubre de 1993 entre otras); ni se puede alegar inviolabilidad como si se tratase de un domicilio privado cuya entrada exige autorización judicial con todos los requisitos legales y jurisprudenciales correspondientes.

Como señala la STS de 14 de abril de 1994 (Resolución 797/1994) el criterio para precisar hasta dónde puede extenderse el concepto de domicilio en relación con los locales en los que una persona ejercita su actividad profesional o negocial ha de fijarse en la nota de apertura o no al público, pues si bien es cierto “que algunos locales de negocios o despachos profesionales, en los que la actividad del titular se desarrolla sin admitir libremente el acceso a terceros, pueden formar parte de su ámbito de privacidad e intimidad, extendiéndose a ellos el concepto de domicilio (Así, S 11 octubre 1993).

Pero no cabe confundir, como ha hecho la Sala de instancia, el ámbito negocial privado con aquel que se abre al público para obtener un lucro de los asistentes al mismo”.

En el mismo sentido la STS de 6 de julio de 1995 (Resolución 860/1995) declara no necesaria la existencia de autorización judicial para proceder al registro de “oficina y despacho abiertos al público, es decir, a toda persona que quisiera acceder al mismo para el asesoramiento y la gestión de asuntos relacionados con problemas laborales, fiscales o de otro tipo, que nada tenían que ver con el ejercicio por el acusado ni por ninguno de sus empleados o clientes de las actividades propias de su intimidad que es lo que constituye el fundamento de la protección que para el domicilio reconocen la CE y la LECrim (STC 22/1984 y, entre otras, la de esta Sala 32/1995, de 19 de enero)”.

b) En segundo lugar, no parece que el “oficio” al que se refiere el art. 564 sea “*conductio sine qua non*” que pudiera determinar la nulidad de una entrada y registro en edificio o lugar público. En una interpretación teleológica de la norma debe considerarse que esa comunicación forma parte de la ejecución de la diligencia de entrada y registro; y en este caso dicha comunicación se observó con la notificación del Auto de Entrada y Registro a una de las personas allí presentes, Sr. Miguel.

En otro caso, si dicha comunicación se considerara un requisito esencial y previo a la entrada y registro, la finalidad propia de esta diligencia de investigación sumarial quedaría frustrada; pues se permitiría la ocultación de las pruebas con el anuncio previo de su práctica, más aún en la época actual que la información, por lo general, se contiene en soportes informáticos y pueden ser borrados o eliminados en pocos segundos o minutos.

En conclusión, en el presente caso, no existió vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 de CE) en la aprehensión del material probatorio que tuvo lugar en las dependencias de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, con ocasión de la entrada y registro autorizada judicialmente en Diligencias Previas núm. 4796/05 del Juzgado de Instrucción número NUM015 de DIRECCION002.

[TSJ And 10/2008 (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª). Granada: Fundamentos, segundo]

Incluimos a continuación un último ejemplo para ilustrar las inconsistencias en la marcación de los ítems enumerados. En este caso, se trata de una enumeración que depende de otra de superior jerarquía. De hecho, en ella se desarrollan los elementos de la enumeración anterior. Sin embargo, no resulta fácil para el lector establecer esa relación, pues el sistema de marcación no remite al de la lista anterior.

(25)

SEGUNDO

Los hechos declarados probados son constitutivos de:

(a) Dos delitos de pertenencia a banda armada de los arts. 515.2 y 516.2 CP) .

(b) Ciento ochenta y cuatro (184) delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa del art. 572.1.1º CP en relación con el 16 y 62 del mismo cuerpo legal.

(c) Un delito de daños continuados con finalidad terrorista de los arts. 266.1 en relación con el art. 346.2,

74 y 574 CP.

(d) Dos delitos de tenencia ilícita de armas y municiones del art. 563 en relación con el 574 CP.

2.1. Pertenencia a banda armada.

La vinculación estable y jerárquica de los procesados con la banda terrorista ETA. Queda plenamente acreditada, según se ha analizado antes, por sus propias declaraciones donde reconocen su integración, por la recepción de armas, explosivos y otros objetos de la banda que les son ocupados y por las órdenes para cometer actos delictivos que reciben de esta (tres de los cuales ejecutan y son juzgados en esta misma causa). También queda probada por la cuantiosa documentación que les es intervenida y que les relaciona con aquella, como los boletines internos de la banda, la información facilitada por ETA. O recabada por ellos sobre posibles víctimas, instrucciones sobre el manejo y la confección de artilugios explosivos, o diversos discos compactos, cassetes y documentos con la atribución de la autoría de los delitos que habían cometido o iban a cometer (FJ1 a, b, k, y ll, fundamentalmente).

2.2. Homicidio terrorista en grado de tentativa.

La defensa de los procesados alegó en su informe que los hechos no podían integrar los delitos de asesinato de que acusa el Ministerio Fiscal porque los procesados no tenían intención de causar la muerte.

En su opinión sólo tenían intención de causar grandes daños que, en su caso, constituiría un delito de estragos en grado de tentativa. Basa su afirmación en que los acusados tenían previsto que, cuarenta y cinco minutos antes de la explosión, se conectara una grabación contenida en un cassette avisando de esta, además de avisar telefónicamente de la existencia de los artilugios explosivos. Como la llegada del tren Intercity Irún-Madrid a la estación de Madrid-Chamartín estaba prevista para las 15 12 horas y la explosión programada para las 15 55 horas, el aviso se hubiera producido a las 15 10 horas; es decir, con tiempo de desalojar el tren una vez hubiera parado en Madrid, según la defensa.

Además, indirectamente, sostuvo que, puesto que no se había producido resultado lesivo alguno, no podía integrarse el tipo subjetivo del delito de asesinato imputado y sí una tentativa de estragos derivada de haber puesto en peligro durante dos o tres horas (hasta la desactivación del explosivo en Burgos) la vida de 184 personas.

[SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 25/2005: Fundamentos, segundo]

5.2. Orden

Los números y las letras constituyen series ordenadas. La explicitud del orden que se establece mediante su empleo como sistema de marcación de los elementos de una serie no exime a la persona responsable de la redacción de una sentencia de la necesidad de revisar el texto una vez redactado. Creemos que, mediante ese mecanismo de control, podrían evitarse casos como el que mostramos a continuación.

(26)

Acordó con Luis Francisco y Jesús María, la confección de un contrato privado de compraventa en el que se harían constar los siguientes datos de interés:

a) La cantidad de 360.000,00 Euros, como precio de la venta, cantidad que sería pagada de la siguiente forma: 180.000,00 Euros, en el plazo máximo de dos meses desde la firma del contrato privado de compraventa y simultáneamente al otorgamiento de la escritura pública.

Para el abono de esta parte del precio el acusado Lorenzo solicitó, el día 15 de marzo, un préstamo hipotecario por dicha cantidad a su amigo Miguel Ángel, empleado de la Caja San Fernando, sucursal Camino de Ronda, sita en la ciudad de Granada.

b) Tres pagarés de 60.000,00 euros cada uno, con vencimiento a uno, dos y tres años, como precio de la venta, a entregar el día del otorgamiento de la escritura pública.

b) La cantidad de 10.800,00 Euros, en concepto de intereses devengados al 3% por el aplazamiento del pago de 180.000,00 Euros, que se abona por la parte compradora en el momento de la firma del contrato privado, sirviendo el mismo contrato como "eficaz carta de pago de dicho importe", según la cláusula Quinta del mismo.

[TSJ And., (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) 10/2008. Granada: Hechos probados, primero]

Además de la perplejidad que la "repetición" del elemento b) puede producir en el lector, hay que tener en cuenta los problemas que este tipo de imprecisiones pueden provocar si la persona que redacta la sentencia tiene necesidad de referirse, en un punto posterior del documento, a este elemento.

6. MEZCLA DE ENUMERACIONES DE DISTINTA JERARQUÍA

Particularmente difícil resulta marcar enumeraciones que van engarzadas en enumeraciones más amplias, aunque en el corpus de sentencias que hemos analizado se encuentran algunos ejemplos de buenas prácticas, como el siguiente:

(27)

TERCERO.- Es preciso, además, formular las siguientes precisiones generales:

- 1.- El recargo en cuestión no es de tipo objetivo, no es una responsabilidad objetiva que sea menester imputar a (...).
- 2.- Por su aspecto sancionador el recargo se interpreta de modo restrictivo (...).
- 3.- Aunque exista infracción, no hay recargo si la infracción no es la causa directa del accidente, (...).
- 4.- La infracción ha de ser de norma concreta, no genérica. (...).
- 5.- La imprudencia profesional del trabajador, que no elimina el concepto de accidente de trabajo, si impide el recargo (T. Supremo: 20-3-85).
- 6.- Naturalmente, no cabe esta responsabilidad si el evento emerge por simple caso fortuito (TSJ Madrid: 4-1-91; Sevilla: 9-10-91, etc.).
- 7.- El recargo es independiente de otro sistema de indemnización. (...). Este precepto claramente distingue tres tipos de responsabilidades que declara compatibles:
 - a) Las responsabilidades administrativas derivadas del procedimiento sancionador, reguladas por esa misma ley.
 - b) Las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.
 - c) Las indemnizaciones por recargo de prestaciones económicas, reguladas por el art. 123 de la Ley de Seguridad Social(STS 2-10-00, 9-10-01).

[SJS Murcia 37/2007, Fundamentos, tercero]

En otros casos, en cambio, el escritor no consigue marcar adecuadamente las enumeraciones que dependen de otras enumeraciones.

(28)

Según expediente y actuaciones procesales resulta: 1) Que en oficio informativo de la Jefatura de la Policía Local obrante en el expediente, se hace constar que el día 6 de enero de 2000, se celebró la Cabalgata de los Reyes Magos en el sector núm. 2 de la población de Dos Hermanas, cuyo horario de salida fue a las 12 horas y la de terminación a las 13 horas, recorriendo todas las calles de la barriada; y entre las incidencias habidas, figura la referente a que un vehículo estacionado frente a la oficina municipal «fue abollado en su aleta delantera derecha y un picotazo en la luna delantera desconociéndose su autor». 2) Que en escrito del actor fechado el 20 de enero de 2000 (fecha que aparece también en el sello de registro general del Ayuntamiento), se remite para ser aportada «a la responsabilidad civil del seguro contratado por el Excmo Ayuntamiento», la documentación perteneciente al referido siniestro consistente en **el informe del agente de la Policía Local; propuesta Motri, SA, concesionario oficial de Peugeot de reparación del vehículo de su propiedad marca peugeot matrícula SE-....-DM, por importe de 68.406 ptas.; y en la Súplica solicita que se tuvieran por hechas las manifestaciones contenidas en su instancia y se acceda a lo interesado previos los trámites que procedan. Y 3) Que en otro escrito del recurrente fechado en el Registro General del Ayuntamiento demandado el 5-7-2000, formula, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, reclamación extrajudicial de pago de las 28.406 pesetas antes dichas.**

[STSJ And 23/7/2002. Fundamento de Derecho, segundo]

El ejemplo anterior muestra una enumeración inserta en otra de mayor jerarquía. Por otro lado, los elementos enumerados en la descripción incrustada son dispares. A juzgar por la puntuación, parece que el informe del agente, la propuesta Motri y la solicitud en la súplica estén al mismo nivel, pero en realidad las dos primeras sí constituyen “documentación perteneciente al referido siniestro”, mientras que la tercera es una oración que presenta una estructura sintáctica diferente.

Tal vez resulte más clara la versión que a continuación proponemos:

(28bis)

2) Que en escrito del actor fechado el 20 de enero de 2000 (fecha que aparece también en el sello de registro general del Ayuntamiento), se remite para ser aportada «a la responsabilidad civil del seguro contratado por el Excmo Ayuntamiento», la documentación perteneciente al referido siniestro consistente en el informe del agente de la Policía Local y la propuesta de Motri, SA, concesionario oficial de Peugeot, ¿para la? reparación del vehículo de su propiedad marca peugeot matrícula SE-....-DM, por importe de 68.406 ptas. Asimismo, el actor solicitó en la Súplica que se tuvieran por hechas las manifestaciones contenidas en su instancia y que se accediera a lo interesado previos los trámites que procedieran.

Para finalizar, incluimos un ejemplo que, en nuestra opinión, responde a la voluntad de marcar con claridad un fragmento en que se mezclan enumeraciones de distinta jerarquía sin lograrlo del modo más coherente, tal vez a causa de un mal uso del sistema de numeración y viñetas de un procesador de textos.

(29)

El juicio oral se reanudó en la mañana del día siguiente 22 de julio, a la hora fijada y concluyó el día 23, interviniendo en todas sus sesiones el Teniente Fiscal Superior de Andalucía. Durante los días 22 y 23 de julio se practicaron las siguientes pruebas, con el resultado que consta en el acta del juicio oral:

1º.- Interrogatorio de los acusados, por el siguiente orden: Juan Alberto; Gerardo, y Lorenzo.

2º.- Interrogatorios de testigos propuestos por el Ministerio Fiscal:

- 1). Inspector Jefe con número profesional NUM006.
- 2). Inspector Jefe con número profesional NUM007.
- 3). Funcionario de la Agencia Tributaria (AEAT) con número NUM008.
- 4). Funcionario de la Agencia Tributaria (AEAT) con número NUM009.
- 5) Marí Luz.
- 6). Concepción.
- 7). Sergio.
- 8). Luis Francisco.
- 9). Jesús María.
- 10). Cristóbal.
- 11). Ildefonso.
- 12). Ramón.
- 13). Patricia.
- 14). Ana María.
- 15). Carlos Miguel.
- 16). Miguel Ángel.

3º. Interrogatorio de testigos propuestos por el Procurador D. Juan Antonio Montenegro Rublo, en nombre y representación de D. Lorenzo:

- 17). Diego.
 - 18). Jesús. Magistrado del Juzgado de Instrucción nº NUM010 de DIRECCION002.
 - 19). José Pedro. Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante.
 - 20). Marina. Fiscal sustituta adscrita al Juzgado de Instrucción nº 3 de Marbella en la fecha de los hechos. Actualmente con destino como Secretaria sustituta en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Málaga.
 - 21) Antonieta. Funcionaria del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Marbella.
 - 22). Julieta. Funcionaria de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga.
 - 23) Ernesto.
 - 24). María Milagros. La defensa renunció a los testimonios de Marcelino. Funcionario del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Marbella, y Alicia. Funcionaria del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Marbella.
 - 4º Interrogatorio de testigos propuestos por el Procurador D. José Gabriel García Lirola, en nombre y representación de D. Juan Alberto:
 - 25). Inspector Funcionario de policía número NUM011.
 - 26). Funcionario de Policía con número Profesional NUM012.
 - 27). Funcionario de Policía con número Profesional con número Profesional NUM013.
- 5º.- Audición en el acto del Juicio Oral de las conversaciones telefónicas intervenidas, que aparecen transcritas en la causa y que fueron puestas a disposición de este Tribunal Superior de Justicia por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. Para practicar esta prueba recábese de la Delegación de Justicia en Granada los medios técnicos y personal especializado necesario.
- La defensa del acusado Juan Alberto renunció a la práctica de la Pericial del Jefe de la Sección de Acústica Forense, D. José Pablo.
- 6º. Pericial caligráfica de Dª. Catalina.
 - 7º. Documental mediante lectura de los folios de las actuaciones señalados por las partes en sus respectivos escritos.

[STSJ And. (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) 10/2008 de 7 agosto. Granada: Antecedentes, cuarto]

EL MANTENIMIENTO DEL REFERENTE: LAS EXPRESIONES ANAFÓRICAS

1. INTRODUCCIÓN. LAS EXPRESIONES ANAFÓRICAS EN LOS TEXTOS JURÍDICOS

La función principal que desempeñan las expresiones o sintagmas nominales en los textos consiste en hacer referencia a distintos tipos de entidades: personas (*Antonio, el acusado*), cosas (*el arma del crimen*), lugares (*Barcelona, la residencia de Rosa*), ideas (*el argumento aducido por la defensa de que no existía dolo*), eventos (*el homicidio de Carlos M., la negligencia médica de la que se acusa a Juan P.*), etc. Algunas de estas expresiones, que denominamos, dada su función, **expresiones referenciales**, se refieren a entidades del mundo que el interlocutor puede interpretar directamente, como es el caso de las que se acaban de citar entre paréntesis a modo de ejemplo.

Sin embargo, existen otras expresiones referenciales, como *le, que, esta suma o el citado vehículo*, que deben interpretarse necesariamente a partir de alguna otra expresión que se haya mencionado en el texto. Estas expresiones cuya interpretación depende de otro elemento del texto son las **expresiones anafóricas** y el elemento del texto que permite interpretarlas y que, por lo general, ha aparecido previamente es su **antecedente**. Así pues, las expresiones anafóricas son expresiones nominales que no pueden interpretarse de forma independiente, ya que se refieren a un elemento que ya ha aparecido en el texto.

Teniendo en cuenta la cantidad de información que suele manejarse en los documentos jurídicos, es natural que en ellos aparezca un gran número de entidades de distinto tipo (participantes, argumentos, lugares, eventos, etc.), que a menudo aparecen varias veces y se retoman, por tanto, mediante expresiones anafóricas²⁹. En el siguiente ejemplo se muestra la cantidad (y complejidad) de referencias anafóricas que pueden hallarse en un fragmento

²⁹ Especialistas como de Miguel (2000) y Samaniego (2005) han hecho referencia a la recurrencia de aparición de las expresiones anafóricas en los documentos jurídicos redactados en español. Por su parte, en el ámbito anglosajón, existen diversos trabajos en los que estas expresiones se consideran entre las principales causas de ambigüedad en este tipo de documentos. Véanse al respecto, Solan (1993) y Kurzon (1997).

no especialmente extenso. Hemos destacado las expresiones anafóricas en negrita y sus antecedentes correspondientes mediante el subrayado; la identidad de entidades a las que se refieren ambos elementos se indica mediante superíndices numéricos:

(1)
Así, por lo que se refiere a Antonio¹, [Ø]¹ contaba con una libreta de imposición a plazo sin numerar², en la que² tenía depositada la cantidad de 17.144,48 euros (2.853.601 pesetas) en acciones y Deuda del tesoro³, que³ no llegó a contabilizarlo³ el banco. En dicha libreta² el acusado realizó 7 apuntes de reintegro por dicho importe³, sin autorización ni consentimiento del titular. Así se desprende de la auditoría⁴ llevada a cabo por el banco Santander Central Hispano, así como de la [Ø]⁴ efectuada por el auditor-censor jurado de cuentas, D. Pedro Antonio. De esa cantidad³ debería responder el acusado directamente y Banesto como responsable civil subsidiario. Ahora bien, como el perjudicado⁵ no compareció en la vista oral y el Ministerio Fiscal no solicitó su⁶ indemnización, no es posible la condena por regir el principio dispositivo.
[SAP J 835/2009. Jaén: Fundamentos de derecho, quinto]

En este ejemplo aparecen diversos tipos de mecanismos anafóricos que se comentarán en los apartados siguientes: (i) elisiones de nombres como “Antonio” o “auditoría”, que marcamos mediante el símbolo ‘conjunto vacío’ (Ø); (ii) pronombres relativos (“la que”, “que”); (iii) pronombres personales (“lo”) y posesivos (“su”); y (iv) sintagmas nominales de tipo anafórico (“dicha libreta”, “dicho importe”, “esa cantidad”), que solo pueden comprenderse a partir de otro elemento mencionado en el texto (el que se ha indicado en cada caso mediante superíndices).

Como se desprende de lo que venimos diciendo, para poder comprender a cuál de los elementos mencionados se refieren las expresiones anafóricas, resulta imprescindible identificar su antecedente. Así, por ejemplo, para interpretar a qué se refiere la expresión “dicha libreta”, debemos localizar en el texto anterior alguna mención a una libreta; del mismo modo, para interpretar la construcción de relativo “la que”, acudimos al elemento que se ha mencionado más cerca a la izquierda y que concuerda en género y número con el artículo (“la libreta”).

No obstante, la comprensión de estas expresiones anafóricas no siempre es tan fácil como parece: ¿con qué elemento del texto previo concuerda el pronombre átono “lo” en el predicado “llegó a contabilizarlo”? ¿Con el nombre “Antonio”? Parece evidente que no. La lógica, el sentido común o lo que en la teoría lingüística se denomina el *conocimiento del mundo* nos lleva a pensar que lo que llegó a contabilizar el banco es la cantidad de euros que se menciona inmediatamente antes (cantidad que es, por cierto, femenina, por lo que la forma adecuada del pronombre debería ser *la*). Dificultades de comprensión como la que acaba de comentarse -y otras más graves- son las que se tratan en los siguientes apartados.

2. PROBLEMAS DE REFERENCIA Y PROBLEMAS DE RECUPERACIÓN DEL AGENTE

Como se apuntaba en el apartado anterior, las expresiones anafóricas, que se interpretan a partir de otros elementos del texto, dan lugar a múltiples problemas de comprensión en la mayor parte de los documentos, tanto en los redactados por escritores inexpertos como, a menudo, en los elaborados por escritores expertos. En concreto, las expresiones anafóricas han sido identificadas por los especialistas como una de las principales causas de ambigüedad en los textos jurídicos (Kurzon 1997). A fin de revisar las principales patologías en el manejo de estas expresiones que hemos detectado en los documentos jurídicos analizados, clasificamos estos problemas en dos grandes grupos:

- Problemas de referencia
- Problemas de recuperación del agente

El primer grupo comprende aquellos casos en los que resulta difícil o imposible interpretar a qué entidad se refiere una expresión anafórica, es decir, casos de expresiones anafóricas

que, o bien no se entienden, o bien resultan ambiguas³⁰. En el segundo grupo se clasifican los numerosos casos en los que es difícil o imposible entender quién realiza la acción expresada por un verbo. Los problemas de referencia se detectan con frecuencia en el empleo de pronombres y de sintagmas nominales anafóricos (*este sospechoso*), mientras que los problemas de recuperación del agente se presentan en los sujetos elípticos de verbos en forma personal (conjugados), o bien a la hora de interpretar cuál es el agente o la entidad que realiza la acción expresada en un verbo en forma no personal (infinitivo, participio, gerundio)³¹.

Los dos tipos de problemas que acabamos de definir se ejemplifican en el fragmento (2):

(2)

Y resulta de todo punto indudable que la conducta del denunciado, independientemente de su motivación, estaba guiada por una conciencia clara de su actuación y voluntad decidida en la consecución de su finalidad de maltratar cruelmente al animal domestico sin posibilidad de defensa, **que [¿el animal doméstico sin posibilidad de defensa?]** dota junto a la incontrovertida ejecución objetiva del tipo, de un elemento subjetivo que lo completa, lo que no es jurídicamente permisible, sin que en absoluto puede considerarse [¿¿??] **incurso** en causa de exención de responsabilidad criminal a la vista del informe forense del mismo día del acto de juicio oral.

[SJI 3/2009. Granada: Fundamentos de derecho, segundo]

El primer obstáculo para la comprensión de este fragmento es al pronombre relativo “que”, destacado en negrita: ¿qué es lo que “dota de un elemento subjetivo que lo completa”? Evidentemente, no parece que pueda referirse al elemento que acaba de mencionarse, “el animal doméstico sin posibilidad de defensa”, sino que más bien parece referirse a toda la información que se acaba de proporcionar. Nuestro conocimiento del mundo nos lleva a interpretar que el juez que redactó la sentencia citada pretendía referirse a que la conciencia del denunciado de su actuación y su voluntad de maltratar al animal dotaba al caso de un elemento subjetivo. No obstante, la identificación de este antecedente resulta sumamente costosa, entre otros factores, porque, de ser esa la interpretación correcta, el pronombre de relativo seleccionado debería haber sido un neutro (“lo que” o, mejor aún, “factor que” o “circunstancia que”).

Lo más grave de este tipo de problemas de referencia no es que muchos de ellos estén causados por estructuras sintácticamente incorrectas, como la que se acaba de mencionar, sino que suelen provocar que no se comprenda de qué se está hablando. Esto es, precisamente, lo que sucede en el segundo elemento problemático destacado: ¿qué (o quién) es lo que no puede considerarse incurso en causa de exención de responsabilidad criminal? En este segundo caso, ni el texto circundante ni nuestro conocimiento del mundo parecen poder proporcionarnos una interpretación fiable.

3. LA DIFICULTAD PARA IDENTIFICAR EL ANTECEDENTE DE LAS EXPRESIONES ANAFÓRICAS EN LOS GÉNEROS JURÍDICOS (PROBLEMAS DE REFERENCIA)

En este apartado clasificamos y describimos los problemas de referencia que hemos identificado como más recurrentes. Se trata, en general, de casos en los que resulta difícil o imposible identificar a qué entidad se refiere una expresión anafórica (recordamos: pronombres de distinto tipo o sintagmas nominales que se interpretan a partir de otro elemento textual). Esta dificultad o imposibilidad para comprender una expresión anafórica suele estar causada por alguno de los siguientes factores:

³⁰ Estos casos reciben en la bibliografía la denominación de *pérdidas de referente* (Montolio y López Samaniego 2008: 54).

³¹ Para otros problemas relacionados con el uso de estas formas no personales en los textos jurídicos analizados, véase el apartado 7.4.2 de este mismo informe.

- Problemas de concordancia:** la expresión anafórica no concuerda con el elemento textual que, de acuerdo con la interpretación más lógica o plausible, parece ser su antecedente -como ocurría entre “lo” y “la cantidad” en el ejemplo (1)-.
- Antecedente demasiado distante:** el antecedente se encuentra tan alejado que resulta muy difícil recuperarlo sin tener que retroceder considerablemente en la lectura del texto.
- Antecedente inexistente:** no se ha mencionado en el texto ninguna entidad que pueda considerarse antecedente de la expresión anafórica.
- Ambigüedad en la identificación del antecedente:** hay más de un antecedente posible y, por tanto, la interpretación es ambigua.

Estos factores, por supuesto, pueden combinarse y, de hecho, lo hacen a menudo: en los casos en los que el antecedente está demasiado distante, por ejemplo, suelen darse también problemas de concordancia; estos problemas de concordancia, a su vez, ocasionan no pocas veces interpretaciones ambiguas, etc. Asimismo, conviene advertir de la distinta gravedad que representan estos problemas para la comprensión del texto.

Si bien es cierto que los problemas de concordancia entre una expresión anafórica y su antecedente constituyen errores de normativa morfosintáctica, algunos de ellos no dificultan demasiado la comprensión, ya que el lector puede identificar por el sentido a qué entidad se refiere la persona que redacta el texto. En cambio, otros casos, como los de antecedente inexistente o ambiguo, pueden impedir que el lector comprenda quién hizo qué, qué parte ha propuesto un argumento o cuál es el argumento que se va a tener en cuenta para la decisión final de una sentencia. La importancia de un correcto manejo de las expresiones anafóricas resulta, pues, capital para garantizar principios jurídicos básicos como el que reza que las sentencias deben ser “claras, precisas y congruentes” (art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero).

En este apartado se desglosan los problemas de comprensión a los que dan lugar con mayor frecuencia las expresiones anafóricas que se emplean en los documentos jurídicos. Asimismo, mencionamos algunos empleos antinormativos, inadecuados o artificiosos de estas expresiones que, si bien no impiden la comprensión, pueden también mejorarse para redundar en una mayor transparencia y en la mejora de la calidad de estos documentos.

3.1. Problemas derivados del empleo inadecuado de pronombres

Los pronombres personales (*él, le*), posesivos (*su*), demostrativos (*este*) y relativos (*que, cuyo*) aportan muy poca información que facilite la identificación de sus antecedentes. Por lo general, se trata únicamente de información de tipo morfológico, como el género (masculino, femenino o neutro) y el número (singular o plural). Por ello, estas expresiones suelen dar lugar a múltiples (y diversas) dificultades para la comprensión del texto.

3.1.1. Los pronombres personales (*él/le/lo/la*) y demostrativos (*este/ese/aquel*)

Tanto los pronombres personales como los demostrativos presentan marcas de género y número que proporcionan al lector información morfológica sobre el antecedente. Su empleo adecuado suele estar regido por dos condiciones: (i) deben concordar en género y número con el antecedente, y (ii) su antecedente debe ser el primero posible (esto es, concordante en género y número) a la izquierda del pronombre. Los empleos problemáticos que se describen a continuación violan alguna de estas dos condiciones.

a) Pronombres que no concuerdan con su antecedente

Los problemas de concordancia entre los pronombres personales o demostrativos y sus antecedentes son muy frecuentes en todas las sentencias examinadas y suelen combinarse

con otro tipo de problemas, como la identificación ambigua del antecedente. Por ello, los problemas de concordancia aparecen en muchos de los ejemplos que manejamos en otros epígrafes de este apartado. Sin embargo, conviene destacar un pronombre personal que suele dar lugar, en la lengua común, a múltiples errores de concordancia con su antecedente: el pronombre personal de complemento indirecto *le/les*. En (3) mostramos, destacando en negrita el pronombre y subrayando su antecedente, un error de este tipo:

(3)

Los hoy actores adquieren estos productos animados por la rentabilidad que los mismos **le** procuraban y que es superior (entre el 6 y 7,5%) a la que daba el resto de los productos del mercado financiero (alrededor de un 4 y 5% o incluso menor).

[SJPI 4/2010. Madrid: Fundamentos de derecho, tercero]

Los problemas de concordancia ejemplificados son antinormativos, pero no suelen dificultar en exceso la comprensión del texto. No obstante, conviene evitarlos especialmente cuando las formas *le/les* se combinan con otros pronombres, como los de complemento directo. En casos como el de (3), donde el pronombre *le* aparece junto al anafórico “los mismos”, la identificación del antecedente sí resulta algo costosa, especialmente teniendo en cuenta que existen dos antecedentes masculinos y en plural muy cerca de las dos expresiones pronominales “los mismos” y “le”.

b) Ambigüedad en la identificación del antecedente

Más graves que los anteriores son los problemas de ambigüedad en la identificación del antecedente, que se dan cuando a la izquierda del pronombre aparece más de un antecedente posible, que concuerda en género y número. Esto es lo que sucede en (4):

(4)

Para dicha operación se precisaba anestesia y, tras la punción el paciente refirió dolor a la médico anestesista continuando sin embargo **esta [¿la anestesia o la anestésista?]** con normalidad utilizándose como medicamento hipnótico propofol.

[SJCA 2231/2007. Oviedo: Fundamentos de derecho, segundo]

El antecedente más cercano que concuerda con el demostrativo *esta* es “la médico anestésista”. Sin embargo, el predicado en el que se inserta el pronombre (“continuando utilizándose como medicamento hipnótico propofol”) obliga al lector a reinterpretar el antecedente del pronombre, que resulta ser *la anestesia*. La reinterpretación no habría sido necesaria y la ambigüedad sintáctica se habría evitado si se hubiera proporcionado al lector información suficiente para interpretar correctamente el antecedente desde el principio, utilizando, por ejemplo, un sintagma nominal anafórico como *esta sustancia*. Un fenómeno similar ocurre en el ejemplo de (5) con el pronombre de complemento directo *lo*, que puede relacionarse con dos posibles antecedentes: el recurso y el acto administrativo.

(5)

Que estimando el recurso, interpuesto por la representación procesal de don Manuel M. C., contra el acto administrativo que se dice en el primer Fundamento de Derecho de esta sentencia, **lo [¿el recurso o el acto administrativo?]** anulamos por no ajustado al ordenamiento jurídico, y en su lugar condenamos al Ayuntamiento demandado a abonar al actor la cantidad de 68.406 pesetas, por los daños sufridos en su vehículo, más los intereses legales correspondientes.

[STSJAnd 23/7/2002. Sevilla: Fallo]

Tras una segunda lectura, entendemos, por lógica o conocimiento del mundo, que el juez ponente que redactó esta sentencia se refería al “acto administrativo”. No obstante, dado que se trata de una parte dispositiva, convendría que el elemento que se anula (“*lo anulamos*”) quedara más claro.

Especial cuidado se debería poner también en el empleo del pronombre demostrativo de tercera persona *aquel*. Es cierto que el significado de *aquel* le permite alternar con el pronombre *este* cuando se desea deshacer la ambigüedad entre dos posibles antecedentes

mencionados. En estos casos, el pronombre *aquel* se emplea para hacer referencia al antecedente más distante, contrastándolo con el más cercano (al que suele aludirse mediante el pronombre *este*).

Sin embargo, en las sentencias examinadas hemos localizado diversos ejemplos de empleos anafóricos del demostrativo *aquel* en los que no se da tal contraste, sino que más bien parece indicarse que el antecedente se encuentra alejado. Estos usos dan lugar a interpretaciones ambiguas, pues resulta casi imposible decidir a qué distancia puede encontrarse el antecedente:

(6)

Siguiendo la sentencia de la Sección XIII de la Audiencia Provincial de Madrid, de 20 de diciembre de 2000, la valoración conferida por la Constitución Española a las libertades tuteladas en el citado artículo 20 que trasciende a la que es común y propia a todos los derechos fundamentales, en cuanto su ejercicio¹⁷ está ligado al valor objetivo¹⁸ que es la comunicación libre, inseparable de la condición pluralista y democrática del Estado¹⁹ en que nuestra comunidad se organiza, que es una institución unida de manera inescindible al pluralismo político¹⁷ como valor esencial de **aquel**¹, que lleva a considerar que en la confrontación de la libertad de información², como derecho “activo”, con el derecho a la intimidad y al honor, como derechos “reaccionales”, **aquella**² goce, en general, de una posición preeminente y preferente-sentencias del Tribunal Constitucional 6/1981, de 16 de marzo, 104/86, de 17 de julio, 165/87, de 27 de octubre, 20/1992, de 14 de febrero, 136/94, de 9 de mayo y 132/95 de 11 de septiembre, entre otras muchas-. [SJPI 5/2010. Madrid: Fundamentos de derecho, segundo]

En el ejemplo anterior se observa un uso eficaz del demostrativo de distancia, el de *aquella*, que sirve para remitir a “la libertad de información”, antecedente más alejado del pronombre que “la intimidad”; pero observamos también un uso no tan eficaz: el del demostrativo *aquel*, que bien podría referirse a cualquiera de los múltiples elementos masculinos singulares que han aparecido en la misma frase y que hemos señalado mediante el subíndice 1. En este sentido, cabe mencionar que hemos detectado también en las sentencias examinadas buenas prácticas que, en lugar de usar un pronombre (*aquel*), optan por un sintagma nominal que repite el nombre núcleo del antecedente (*aquel derecho*). Decisiones como esta facilitan mucho la comprensión de la expresión anafórica:

(7)

Con claridad expositiva, nos dice la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2008, citando doctrina jurisprudencial anterior, que la garantía que **el derecho a la presunción de inocencia** representa viene a exigir; a) que concurre una mínima actividad probatoria, de manera que se constate la condena se base en pruebas de cargo, suficientes y decisivas; b) que su desarrollo, obtención y práctica, se efectúe con las garantías necesarias, y que sea practicada normalmente en el acto del juicio oral, salvo las excepciones constitucionalmente admisibles; c) que, por lo que se refiere al objeto de la prueba así aportada, se abarque todos los elementos esenciales del tipo delictivo, tanto los objetivos como los subjetivos; d) que de la misma puedan desprenderse de forma razonable los hechos y la participación en ellos del acusado y e) que idoneidad incriminatoria de la prueba asumida debe ser no sólo apreciada por el Juez, sino también plasmada en la Sentencia, de forma que la carencia o insuficiencia de motivación en cuanto a la valoración de la prueba y la fijación de los hechos probados entrañará la lesión de **aquel derecho**.

[SJP 10/2009. Getafe: Fundamentos de derecho, primero]

3.1.2. Los pronombres posesivos (*su*)

Los pronombres posesivos más frecuentes en los documentos jurídicos y cuyo empleo suele acarrear problemas son los de tercera persona. A diferencia de lo que ocurría con los pronombres personales y demostrativos, el posesivo de tercera persona *su* puede tener un antecedente masculino, femenino, singular o plural, de modo que la forma del posesivo no proporciona ninguna información útil al lector para que pueda discernir cuál de los elementos mencionados funciona como antecedente. Por este motivo, el empleo del posesivo *su* resulta especialmente delicado, ya que a menudo da lugar a interpretaciones ambiguas, como ocurre en el siguiente ejemplo:

(8)

Indica que el porcentaje de rentabilidad generada a la entidad bancaria por la colocación de los productos Lehman alcanza el 11,8% de su actividad [¿de la entidad bancaria o de Lehman?], lo que hace que en realidad BANKINTER sea más una entidad comisionista mercantil para la venta de esos productos por cuenta de LEHMAN BROTHER, con intereses contrapuestos a los de los hoy actores que, en puridad eran los verdaderos clientes de la entidad demandada.

[SJPI 4/2010. Madrid: Fundamentos de Derecho, primero]

Si bien en muchas ocasiones, como en el ejemplo anterior, la relectura atenta permite establecer con cierta seguridad cuál de los dos antecedentes posibles encaja mejor con el sentido del texto (en este ejemplo, en concreto, parece ser la entidad bancaria Bankinter), en algunas ocasiones la ambigüedad resulta imposible de resolver, incluso después de varias lecturas:

(9)

La apreciación de la compatibilidad o incompatibilidad de los trabajos o actividades que realiza el trabajador en situación de baja, a efectos del despido acordado por la empresa, no se circunscribe a la valoración médica de su incidencia [¿del despido o de los trabajos y actividades que realiza el trabajador?] en aquellas actividades sobre el proceso de curación de la dolencia diagnosticada, sino que constituye una cuestión jurídica cuyo ámbito es el de la trasgresión de la buena fe contractual en la que se incurre cuando sea cual fuese la patología que originó la incapacidad temporal, la propia conducta del trabajador muestra su aptitud laboral de hecho, es decir, que la realización del quehacer del trabajador fuera de la empresa indica por sí misma que los padecimientos que sufre le permiten actuar de forma tal que podría desempeñar su tarea laboral ordinaria.

[SJS 2-2010. Pamplona/Iruña: Fundamentos de Derecho, tercero]

En el ejemplo anterior, los problemas de redacción impiden que el texto circundante proporcione pistas que permitan interpretar que es lo que incide “en aquellas actividades”. De hecho, bien podría incluso tratarse de un antecedente que no aparece en la frase, como la enfermedad del trabajador causante de la baja. Si tal lectura fuese la cierta, estaríamos ante un antecedente implícito que el lector debe adivinar mediante un proceso deductivo del tipo ‘si el trabajador está de baja se supone que es porque sufre alguna dolencia que incide en sus actividades profesionales’. A pesar de que pueda alcanzarse algún tipo de interpretación a partir del conocimiento del mundo, el hecho de que la comprensión de la sentencia deba basarse en suposiciones no parece muy acorde con los principios de transparencia judicial.

82

3.1.3. El falso anafórico el mismo/la misma/los mismos/las mismas

Una expresión anafórica que funciona de un modo equivalente al de los pronombres demostrativos y los posesivos es la expresión *el mismo/la misma/los mismos/las mismas*. Pese a que esta expresión se emplea con cierta frecuencia en textos administrativos, burocráticos y periodísticos, lo cierto es que su significado propio no es el anafórico, sino el comparativo de igualdad, valor que ejemplificamos en (10):

(10)

Parte de considerar que BANKINTER SA comercializó productos legales, aptos y válidos para ser vendidos en el mercado financiero, siendo que **los mismos productos** son emitidos por muchas entidades y están en el tráfico diario sin que entrañen ninguna dificultad de entendimiento y comprensión para los inversores.

[SJPI 4/2010. Madrid: Fundamentos de Derecho, primero]

El *Diccionario panhispánico de dudas*, elaborado por la Real Academia de la Lengua Española y por la Asociación de Academias de la Lengua Española, indica que el uso anafórico en el que *el mismo* equivale a un pronombre y pierde su valor comparativo original no es propio de esta expresión y es “innecesario y desaconsejable” (2005: s.v. *mismo*). En el mismo sentido se expresa la *Nueva gramática de la lengua española*, que recomienda “no abusar de esta construcción y sustituirla, cuando sea posible, por otros elementos anafóricos como un pronombre personal, un posesivo o un demostrativo” (2009: 1207, 16.6o). En los ejemplos (11) a (13), extraídos de una misma sentencia, mostramos el empleo anafórico de esta expresión y proponemos ejemplos de sustitución en la línea de los que recomiendan las obras académicas mencionadas:

(11)

No existía ningún otro indicador fiable suficiente como para poder obviar las entidades de Rating y, al especificar la ficha técnica el rating del emisor, el cliente ya quedaba enterado que el riesgo de insolvencia era casi impensable en la fecha de las contrataciones, por lo que considera que, de haber habido esa omisión de explicación del riesgo de emisor, **la misma** [—> **esta**] era inocua para la contratación, pues no se ha demostrado -afirma- que de haberse conocido ese riesgo como inexistente (ya que esa situación no era imaginable en atención al alto rating adjudicado a LEHMAN o Bancos Islandeses) se hubiera dejado de contratar por los hoy actores.

[SJPI 4/2010. Madrid: Fundamentos de derecho, primero]

(12)

Afirmó que todas las gestiones las hacía con la Sra Cecilia, pues no conoce al esposo **de la misma** [—> **a su esposo**], aunque sabe que a veces firmaba alguna documentación.

[SJPI 4/2010. Madrid: Fundamentos de derecho, primero]

(13)

Notifíquese esta resolución a las partes personadas con apercibimiento de los recursos que contra **la misma** [—> **ella / esta**] proceden conforme al art. 248.4 LOPJ.

[SJPI 4/2010. Madrid: Fallo]

Además de complicar innecesariamente la estructura sintáctica de la frase, como se ha podido comprobar en los ejemplos anteriores, el uso del falso anafórico *el mismo* en documentos jurídicos va ligado a menudo a problemas de ambigüedad en la identificación del antecedente debidos a la existencia de más de un antecedente posible (Montolío y López Samaniego 2008: 55-56):

(14)

Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de D. Carlos presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura preparando recurso de casación contra **la misma**.

[STS 26/9/2007: Antecedentes de hecho, segundo]

A pesar de su brevedad, la redacción del fragmento de (14) obliga a retroceder en la lectura para interpretar la expresión *la misma*. En el momento en que aparece la expresión anafórica, se han mencionado tres posibles antecedentes que concuerdan con la expresión *la misma*: “la anterior sentencia”, “la representación procesal de D. Carlos” y “la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJE”. Volviendo a leer el fragmento, parece que el antecedente que más se ajusta al sentido del texto es “la anterior sentencia”. De este modo, el antecedente más plausible es el que ha aparecido primero y el que se encuentra más alejado de la expresión anafórica (tres líneas atrás). En otros casos la ambigüedad de antecedentes posibles es tal que resulta casi imposible determinar cuál es la lectura adecuada:

(15)

Sostenía la parte recurrente que la resolución impugnada no era conforme a Derecho, por cuanto que, a su juicio, concurrían todos los requisitos para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la administración pública, al existir tanto un daño causado como un nexo causal entre el servicio prestado y el daño causado, así como el carácter antijurídico **del mismo**, al no existir un deber jurídico de soportar el resultado dañoso por parte de la actora.

[SJCA 2231/2007. Oviedo: Fundamentos de derecho, segundo]

La interpretación del elemento al que se refiere el falso anafórico *el mismo* resulta ambigua. ¿Qué es lo que tiene carácter antijurídico? ¿Es el daño causado o el nexo causal entre el servicio prestado y el daño causado? ¿O quizás es el servicio prestado? En este caso, resulta francamente difícil determinar qué información era la que pretendía transmitir el ponente que redactó la sentencia.

Tal como ocurría en el caso de los pronombres demostrativos (cfr. 5.3.1.1.1), el falso anafórico *el mismo* presenta también a menudo problemas de concordancia con su antecedente, como el que destacamos a continuación:

(16)

14º. Maximiliano, representante de la S.C. Andaluza Textil Carlos III, entregó el 20-7-99 y el 30-1-00, los pagos correspondientes del IVA, 16.828'34 euros (2.800.000 ptas) no ingresando el acusado dicha cantidad en la Hacienda Pública para apropiarse del mismo. No reclamándose al haber sido indemnizado.

[SAP J 835/2009. Jaén: Antecedentes de hecho, primero]

El sentido de la frase en este caso apunta a que el antecedente más plausible es la cantidad mencionada. Aunque es posible que la ponente que redactó la sentencia tuviera en mente que había hecho una referencia a 'dinero' (masculino singular), lo cierto es que el sustantivo *dinero* no se menciona en el texto, por lo que la expresión anafórica debería concordar en femenino con su antecedente textual "dicha cantidad".

El empleo anafórico de *el mismo* presenta también en ocasiones un antecedente excesivamente distante, hecho que, de nuevo, dificulta o impide la comprensión, como mostramos en los ejemplos (17) y (18), en los que hemos subrayado el que, tras varias lecturas, nos ha parecido ser el antecedente:

(17)

Ambos progenitores deben realizar el esfuerzo de contribuir al bienestar de la hija menor de edad, y por ende, debe atenderse las capacidades económicas que los mismos poseen. Coincide este juzgador con el razonamiento que manifestó en el acto del juicio en vía de informe el Ministerio Fiscal, en lo que respecta al monto dinerario que debe constituir la pensión de alimentos en favor de la hija.

Este monto en la actualidad se estaba materializando en unos 120 euros mensuales, habiendo acordado de mutuo consenso las partes litigantes en el momento de firmar el Convenio Regulador de la Separación que permitió el dictado de la Sentencia de fecha 28 de Mayo de 2008 que **la misma** se establecía en 240 euros al mes.

[SJPI 15/2008. Girona: Fundamentos de derecho, cuarto]

(18)

De lo expuesto cabe deducir que la jurisdicción correspondiente para conocer de las pretensiones dirigidas a enjuiciar la responsabilidad de la Administración, bien cuando ésta sea la única demandada o bien cuando lo sea junto con particulares, es la jurisdicción Contencioso-Administrativa, y que la intención del legislador es suprimir lo que de la gráfica expresión, se ha denominado peregrinaje jurisdiccional, lo que permite concluir que también ha de conocer **la misma** la responsabilidad de compañías aseguradoras no solamente en el supuesto de que estas lo sean de la Administración demandada, ya que no hay razón alguna que excluya la posibilidad de declarar la responsabilidad de dichas entidades cuando la misma surja de su condición de aseguradora de entidades privadas siempre que, conforme al artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia para conocer de los autos corresponda a esta jurisdicción.

[STS 26/9/2007: Fundamentos de Derecho, segundo]

El antecedente se encuentra en ambos casos demasiado lejos: en el párrafo anterior y tras varios incisos en el caso de (17) y cuatro líneas antes (con sus cuatro cláusulas correspondientes), en el caso de (18). En los dos ejemplos, parece poco probable que el destinatario conserve en su memoria los antecedentes (*la pensión de alimentos* y *la Administración*, respectivamente) en el momento de interpretar la expresión pronominal. La comprensión del fragmento resulta aún más difícil por la sintaxis compleja y la acumulación de incisos y cláusulas subordinadas. Ejemplos como estos se presentan con una frecuencia notable en las sentencias examinadas.

Por último, hemos localizado también empleos de este falso anafórico en los que se observa el mismo problema que presentan algunos empleos de otros pronombres: la inexistencia de antecedente explícito, como en el siguiente fragmento, que corresponde al inicio de una sentencia:

(19)

PRIMERO.- Incoada la presente causa por el Juzgado de Instrucción número tres de los de Las Palmas de Gran Canaria, fueron remitidas **las mismas** [¿¿??] a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas para la celebración del correspondiente juicio por el Procedimiento de Ley del Tribunal del Jurado.

[STSJ ICAN 2721/2002. Las Palmas de Gran Canaria: Antecedentes de hecho, primero]

3.1.4. Los pronombres neutros (*ello, lo, esto/eso/aquello*)

Como es bien sabido, las formas neutras de los pronombres personales (*ello/lo*) y demostrativos (*esto/eso/aquello*) presentan, frente a sus formas equivalentes en masculino y femenino, un alcance mucho más amplio, es decir, se emplean para sustituir desde oraciones o proposiciones completas a párrafos enteros. Así, el antecedente de estos pronombres neutros es más extenso y, por tanto, potencialmente más ambiguo que el del resto de las expresiones pronominales tratadas hasta este punto.

a) La dificultad para delimitar el antecedente

Dada la amplia capacidad de los pronombres neutros para recuperar información previa, la recuperación del antecedente de un pronombre de este tipo resulta especialmente equívoca o ambigua cuando aparece a continuación de una serie de enumeraciones más o menos confusas, como la que aparece en el fragmento de (20), en el que se mencionan diversos efectos hallados en el interior del BMW:

(20)

En el interior del vehículo BMW 525-I, matrícula ZU-....-ZW por él utilizado, se hallaron entre otros efectos; una papelina conteniendo 0.50 grms. (peso neto) de cocaína; el pasaporte de su hermano Romulo (...); y dos transferencias y facturas (expedidas a nombre de " Romulo ") correspondientes- a la empresa -venezolana- "GLOBAL-Mudanzas-Internacionales Global C.A.", que, fue la contratada por el procesado Conrado para realizar el transporte desde Venezuela hasta España, siendo también aprehendidas las facturas (asimismo expedidas a nombre de " Romulo ") correspondientes a los servicios prestados en nuestro país por las empresas españolas antes citadas y encargadas del transporte del contenedor desde Valencia hasta Yebeles, interviniendo asimismo los funcionarios policiales en poder de aquel procesado la cantidad de 180 euros destinada a sufragar la ilícita actividad y un teléfono móvil marca NOKIA (además de un soporte de tarjeta SIM marca VODAFONE, en este caso en el interior del vehículo BMW y otra tarjeta inserta en otro teléfono móvil incautado dentro del chalet de Yebeles) **todo ello** empleado para contactar con los demás integrantes de la organización delictiva.

[TS 1353/2009: Antecedentes de hecho, primero]

85

Dado que no queda claro si antes del pronombre neutro hay una sola enumeración o diversas incrustadas unas en otras³², resulta particularmente complejo discernir si lo "empleado para contactar con los demás integrantes" fueron el dinero y los móviles (que son los elementos enumerados en la última cláusula), o bien si, como parece apuntar la aparición del modificador *todo*, el pronombre *ello* se refiere a todos los efectos mencionados hasta el momento (es decir, si recupera el contenido de todo el párrafo).

Otra causa frecuente de problemas de comprensión derivados de la amplia capacidad referencial que tienen los pronombres neutros es la dificultad de delimitar el antecedente de los pronombres neutros que aparecen insertos en estructuras del tipo <preposición + *lo* + *que/cual*>. Estas estructuras aparecen recurrentemente en los documentos jurídicos revisados, probablemente debido a su valor conectivo, ya que conectan un segmento informativo anterior (que recupera el pronombre *lo*) con el segmento que introducen. A pesar de su gran utilidad como procedimiento de conexión, estas construcciones acarrearán no pocas veces problemas de comprensión, causados por la dificultad de discernir con precisión qué parte de la información anterior recupera el pronombre neutro. Así, por ejemplo, en el siguiente fragmento, resulta complejo decidir a cuál de los siguientes tres antecedentes se refiere el pronombre *lo*: (i) a 'el hecho de que el jugador de instancia motivara la insuficiencia patrimonial de las Empresas del Sr. Luis Manuel en la falta de bienes realizables y las cargas que tenían'; a (ii) 'la insuficiencia patrimonial de las empresas del Sr. Luis Manuel'; o bien a (iii) "la falta de bienes realizables y las cargas que tenían":

(21)

El juzgador de instancia, de forma acertada, motiva la insuficiencia patrimonial de las Empresas del Sr. Luis Manuel en la falta de bienes realizables y las cargas que tenían, **por lo cual**, posteriormente

³² Los problemas de interpretación derivados de este tipo de enumeraciones se tratan en el apartado 4.6 de este informe.

realizó la persecución de sus bienes privativos mediante el ejercicio de la acción del art. 340.3 de la Compilación...

[TSJC 37/2009: Fundamentos de derecho, 1º]

La decisión entre los tres posibles antecedentes del pronombre lo resulta difícil, además, porque el segmento informativo que sigue a la expresión conectiva no facilita la desambiguación del pronombre, ya que tampoco queda claro quién “realizó la persecución de sus bienes privativos mediante el ejercicio de la acción del art. 340.3 de la Compilación”. Este empleo inadecuado de las expresiones conectivas con pronombres neutros del tipo de *por lo que*, *de lo que se deduce*, *con lo cual*, etc. resulta especialmente grave, dado que, por su función de conectores argumentativos, estas estructuras suelen aparecer en la fundamentación jurídica del fallo. El empleo inadecuado de estas construcciones de relativo puede provocar la incompreensión de las razones que han determinado el fallo de la sentencia.

Una buena práctica que hemos observado en las sentencias analizadas, destinada a evitar las dificultades de comprensión que comportan con frecuencia estos pronombres neutros es la que se ejemplifica en el fragmento de (22), en el que el juez emisor de la sentencia hace el esfuerzo de sustituir el pronombre neutro por una expresión nominal que “etiqueta” o clasifica el elemento del discurso previo que se desea retomar. Obsérvese el diferente efecto que tiene sobre la claridad del discurso la selección de una u otra expresión anafórica:

(22)

Finalmente, una breve pincelada al hilo de esta cuestión: se apuntaba por los hoy actores que el asesoramiento o la comercialización o la propuesta de venta o el ofrecimiento... había sido motivada por un afán de lucro desmedido de la entidad BANKINTER, que percibiría así unas comisiones por venta del producto directamente de Lehman que eran superiores a las que percibía de vender productos de emisor diferente y, **esa agresiva política de ventas [ello]**, le llevó a minimizar los riesgos en perjuicio de los clientes, haciéndoles disponer de su patrimonio y colocarlo en situación de riesgo.

[SJCA 2231/2007. Oviedo: Fundamentos de derecho, tercero]

Para finalizar este epígrafe cabe mencionar un caso peculiar de empleo del pronombre átono neutro *lo*, que se encuentra al final de prácticamente todas las sentencias examinadas, en concreto, en la siguiente fórmula, con la que concluye el fallo:

(23)

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, **lo** pronunciamos, mandamos y firmamos.

Cabe indicar que, pese a tratarse de una fórmula, el pronombre destacado no tiene ningún antecedente identificable. Parece referirse a todo lo que se ha dicho con anterioridad, pero esta lectura no queda clara. En una de las sentencias de nuestro corpus de estudio hemos localizado una versión alternativa de esta fórmula, en la que aparece el pronombre *la*, que podría entenderse que se refiere a la sentencia, aunque tampoco queda claro:

(24)

Así, por ésta mi sentencia, **la** pronuncio, mando y firmo.

[SJP 10/2009. Getafe: Fallo]

En cualquier caso, parece de poca utilidad emplear una fórmula con una redacción tan arcaica (por la combinación de demostrativo y posesivo *esta mi*) y con un pronombre tan ambiguo, en cuya interpretación parece que ni siquiera los propios profesionales se ponen de acuerdo.

3.1.5. Los pronombres relativos (*que, cual, cuyo, etc.*)

Las oraciones de relativo son estructuras sintácticas muy frecuentes en el discurso judicial, por una parte, por la cantidad de sustantivos, especialmente deverbales y abstractos, que maneja este tipo de discurso y, por otra parte, porque las oraciones de relativo contribuyen a la precisión semántica y a la concisión sintáctica, que son dos rasgos estilísticos fundamentales en los textos jurídicos. Las oraciones de relativo introducen información secundaria,

explicativa o circunstancial acerca de un nombre que aparece en la frase principal, de modo que, además, muestran las relaciones de jerarquía que mantienen las distintas cláusulas del texto.

A la hora de presentar los problemas de comprensión o de normativa que genera el empleo de los adjetivos o pronombres relativos que introducen estas oraciones subordinadas (como *que*, *el cual*, *cuyo*, etc.), conviene tener en cuenta las características peculiares de cada uno de ellos.

a) Empleo inadecuado del pronombre *cuyo*

El pronombre *cuyo* es, sin duda, el pronombre relativo que genera más dificultades de empleo a los hablantes. Ello se debe al tipo de estructuras sintácticas complejas en las que aparece este pronombre. Su empleo equivale al de un posesivo, aunque, como ocurre en el caso del posesivo, su significado va más allá de la mera expresión de posesión o pertenencia. Como regla general para explicar cuándo es adecuado su uso, podría decirse que *cuyo* puede emplearse siempre que un complemento del nombre precedido por la preposición de pueda sustituirse por un posesivo *su*: *la desestimación de la causa* —> *su desestimación* —> *la causa cuya desestimación*.

El uso del relativo *cuyo* en las sentencias judiciales es más frecuente que en la lengua natural y a menudo incorrecto (Bayo Delgado 2002b: 61). En las sentencias analizadas, hemos podido detectar diversos usos inadecuados de este pronombre relativo, fundamentalmente usos arcaicos o poco naturales, en los que el valor de *cuyo* se aproxima más al de un demostrativo o al de un pronombre relativo como *que* o *el cual* que al de un posesivo:

(25)

Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 25 de septiembre de 2007, **en cuyo acto** tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

[STS 26/9/2007: Antecedentes de hecho, quinto]

La construcción sintáctica de la cláusula en la que se enmarca el pronombre relativo en este ejemplo es incorrecta, ya que “el acto” es el sujeto del verbo *tener lugar*, por lo que no puede aparecer precedido por preposición. Además, el pronombre relativo *cuyo* se emplea como si fuera un demostrativo, tal como se muestra en la redacción alternativa del ejemplo que proponemos a continuación:

(25bis)

Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 25 de septiembre de 2007. **Este acto** tuvo lugar habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Parece evidente que esta redacción alternativa (25bis) resulta más clara y más natural que la anterior que, además de “rebuscada”, se considera incorrecta en el español actual. Este empleo poco natural de *cuyo*, en el que sería preferible la sustitución por un demostrativo, se da frecuentemente también en la expresión *en cuyo caso* (que puede sustituirse también por *en tal caso*).

b) Dificultades para recuperar el antecedente

El pronombre relativo que provoca con mayor frecuencia problemas de ambigüedad en las sentencias examinadas es, sin duda, el relativo por excelencia *que*. A diferencia de los relativos precedidos de artículo *el que* o *el cual*, *que* no presenta marcas de género ni de número que contribuyan a limitar la lista de posibles antecedentes. De ahí que, a menudo, el antecedente del relativo *que* resulte ambiguo:

(26)

Concretando que el programa “Aquí Hay Tomate” era un “programa del corazón” marcado por la acidez y sarcasmo, de carácter desenfadado y humorístico y que el último programa, el de uno de febrero de 2008, hizo un recopilatorio de los mejores momentos del programa emitido durante cinco años, entre ellos hizo relación de distintos reportajes que fueron “censurados” por la propia cadena de televisión y en un extracto que no dura más de un minuto se hizo referencia a un reportaje sobre el Sr. Pedro Miguel sobre la serie que el dirigió “El hombre y la tierra”; [¿referencia al reportaje?, ¿reportaje?, ¿serie?] que fue extremadamente breve y absolutamente inocua, pues se limitó a titular como “El misterio de Pedro Miguel” y a hacer referencia a algunos temas censurados sobre los métodos cuestionados que utilizaba para rodar sus documentales.

[SJPI 5/2010. Madrid: Fundamentos de derecho, primero]

¿A cuál de los elementos mencionados hasta el momento se refiere el pronombre de relativo *que*? A juzgar por el participio *inocua* que aparece en la oración de relativo parece que este relativo se refiera a la serie “El hombre y la tierra”, que es, además, el antecedente más cercano. No obstante, si se sigue leyendo, parece que lo breve e inocuo fue el reportaje realizado por el programa del corazón, de modo que el antecedente que parece señalar la concordancia entre el participio *inocua* y su agente no es el mismo al que apunta el sentido general del texto. El fragmento presenta, además, numerosos problemas de identificación de los sujetos de algunos verbos en forma personal (como *se limitó a titular o utilizaba*)³³.

De hecho, es bastante frecuente que el verbo de la oración de relativo no ayude a determinar cómo debe entenderse el pronombre de relativo, sino más bien al contrario. También en el caso de las oraciones de relativo, como ocurría con otras expresiones anafóricas vistas hasta aquí, es frecuente que el verbo que sigue al relativo *que* no concuerde en género y número con la entidad a la que está sustituyendo dicho pronombre. Este fenómeno se ejemplifica en (27), donde hemos subrayado el antecedente del relativo para mostrar el error de concordancia:

(27)

Dejando al margen los antecedentes judiciales que la pareja ha atravesado, y **que dio lugar [—> dieron lugar]** a la condena del marido en sentencia penal, lo cierto es que en la actualidad no existe madurez suficiente entre los padres para adoptar un régimen de guarda y custodia compartida, pudiendo ser perjudicial para la menor, el constreñirle a deambular permanentemente por espacios de tiempo prolongado, atendiendo tanto a la edad de la hija, que nació en el año 2003 como por el hecho de poder modificar el régimen que se acuerde si en el futuro se produce la modificación de las circunstancias concurrentes.

[SJPI 15/2008. Girona: Fundamentos de derecho, segundo]

A fin de evitar muchos de los problemas de ambigüedad que se han expuesto en este epígrafe, resulta especialmente aconsejable la opción que adoptan profesionales como el juez responsable del siguiente fragmento, que decide especificar ante el pronombre relativo cuál de los elementos mencionados actúa como antecedente (el que hemos subrayado):

(28)

Añadir por último que tampoco se estima conduzca al acogimiento de la pretensión actora la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado que resulta de aplicación a aquellos casos en que se origina un resultado especialmente grave y desproporcionado en relación con los riesgos que comporta la intervención de los padecimientos que se trata de atender pues, al margen de que pudiera valorarse que el resultado producido alcanzara o no esa “especial gravedad” lo cierto es que esa doctrina únicamente produce la existencia de una presunción de defectuosa prestación de servicio y no la existencia de una automática responsabilidad, **presunción esta que** en este caso que quedaría desvirtuada por lo recogido en los informes periciales antes citados en los que se estima que no se ha producido infracción de *lex artis* y que por ende no puede entenderse haya existido defectuosa prestación de servicio.

[SJCA 2231/2007. Oviedo: Fundamentos de derecho, tercero]

c) Las construcciones <preposición + artículo + que/cual>: concordancia

Por otra parte, el hecho de que los relativos que van precedidos de artículo (*el que, la cual*) cuenten con marcas de género y número tampoco implica necesariamente que resulte más

³³ Este último problema se desarrollará con mayor detalle en el apartado 5.4.1.

fácil identificar su antecedente. De hecho, hemos detectado diversos ejemplos, como el de (29), en los que resulta francamente difícil identificar el antecedente de esta construcción de relativo y en los que la búsqueda de una entidad concordante no facilita la comprensión:

(29)

El abogado que asistió a Inmaculada elevó a definitivas sus conclusiones provisionales y calificó los hechos como constitutivos de un delito de maltrato en el ámbito familiar previsto y penado en el artículo 153.1 y 3 del Código Penal del que es responsable en concepto de autor el acusado José Ángel, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y respecto **de la que** [¿?] solicitó la imposición de las siguientes penas: prisión de 09 meses, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 03 años, prohibición de aproximarse a Inmaculada...

[SJP 9/2009. Barcelona: Antecedentes de hecho, segundo]

La expresión de relativo *de la que* ¿se refiere a Inmaculada o a la responsabilidad criminal, únicas entidades mencionadas con las que concuerda en género y número? No parece que así sea, a juzgar por el final del fragmento, ya que no puede solicitarse para Inmaculada la pena de no aproximarse a Inmaculada. ¿Se refiere, pues, *de la que* a “la responsabilidad criminal” o más bien a “José Ángel”, entidad humana a la que, por tanto, sí puede prohibirse que se aproxime a Inmaculada? Como puede observarse la interpretación resulta francamente confusa. Un problema de concordancia similar, aunque más fácil de resolver, se da en el fragmento de (30):

(30)

Por lo tanto la relación entre ambos preceptos permite acoger la posibilidad de penar por separado el maltrato a animales domésticos en cualquier caso, y por otro a cualquier animal en espectáculo público no autorizado. Es decir la existencia de dos tipos penales, **en la que** se recoge la dualidad de supuestos, anteriormente descrita, y que también resulta la más adecuada desde la interpretación gramatical del artículo de referencia, y ello por haberse introducido en el texto una conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación o alternativa entre dos supuestos.

[SJI 3/2009. Granada: Fundamentos de derecho, primero]

La construcción de relativo *en la que* es inadecuada también en este caso, ya que la concordancia de género apunta a que se refiere a “la existencia de dos tipos penales”, cuando el antecedente parece ser, por lógica, los “dos tipos penales”. Si es así, la construcción relativa debería ser *en los que*.

3.2. Problemas derivados del empleo inadecuado de sintagmas nominales anafóricas

Se entiende por sintagmas nominales anafóricos aquellas expresiones de naturaleza nominal que contienen, como mínimo, un determinante definido (p.e. *el, este* o *su*) y un nombre que repite o incluye en su significado a otro nombre que se ha mencionado previamente (*un requerimiento – este requerimiento; la vista – este acto*). Tanto el nombre núcleo de estos sintagmas como, cuando aparecen, los modificadores que pueden acompañarlo contribuyen notablemente a la identificación del antecedente, de modo que estas expresiones anafóricas suelen causar muchos menos problemas de ambigüedad que las que vienen tratándose hasta aquí (López Samaniego 2010).

Sin embargo, su empleo en las sentencias examinadas tampoco está exento de problemas que, por lo general, se derivan de la selección de un nombre inadecuado o bien de usos arcaicos o poco naturales en la elección del determinante que introduce el sintagma. En cualquier caso, estos problemas no suelen dificultar tanto la interpretación como los empleos inadecuados de pronombres que se acaban de ver.

3.2.1. La selección de nombres cuyo significado no se relaciona fácilmente con el del antecedente

Con relativa frecuencia, los nombres que aparecen en los sintagmas nominales anafóricos son términos propios del discurso jurídico, de modo que la relación semántica entre estos términos y el antecedente del sintagma no resulta transparente para el lector medio:

(31)

PRIMERO.- La empresa demandante impugna en autos las resoluciones administrativas dictadas por el INSS, en las que declara la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad en el accidente laboral sufrido el 24/11/2001 por el trabajador codemandado, acordando el recargo del 30 por 100 de las prestaciones de Seguridad Social derivadas del mismo.

El INSS se opone a **la anterior pretensión** y alega con carácter previo la caducidad de la instancia. (...).
[SJS 4/2007. Murcia: Fundamentos de derecho, primero]

¿Dónde se ha mencionado, en el texto previo, una pretensión? Conviene tener en cuenta que, para que el lector pueda interpretar a qué se refieren expresiones como la destacada en negrita, es necesario que sepa que la impugnación de las resoluciones dictadas por el INSS es una pretensión de la empresa demandante, información que no está explícita en el párrafo que precede al sintagma nominal anafórico. La referencia a este contenido como una pretensión representa, pues, un salto lógico, que se habría resuelto fácilmente añadiendo un modificador restrictivo del tipo de “la anterior pretensión impugnatoria”.

Algo similar ocurre en el ejemplo de (32), en el que aparecen como “dichas” unas órdenes que resulta complejo identificar en el texto previo:

(32)

Afirma que una vez fueron inidóneamente colocados los productos, BANKINTER dejó de facilitarles información que hubiera podido ir alertándolos de las peligrosas circunstancias o turbulencias que estaban afectando al mercado y a los dichos títulos, no apercibiéndoles del grave riesgo de insolvencia de las entidades emisoras que estaban poniendo en peligro la inversión realizada. Afirma que la entidad bancaria no solo actuó indebidamente en el ámbito de la negociación previa a la adquisición de los productos, sino también en el proceso de ejecución de **las dichas órdenes** y en el ulterior proceso de custodia y administración de los mismos.

[SJPI 4/2010. Madrid: Fundamentos de derecho, primero]

¿A qué órdenes se refiere? ¿Se trata, quizás, de órdenes de “adquisición de productos”? Se observa aquí de nuevo un salto en la relación entre la expresión anafórica y el elemento del discurso al que se refiere: la relación entre el antecedente y la expresión anafórica no queda suficientemente clara como para permitir la interpretación clara y unívoca.

3.2.2. La selección del determinante

a) Expresiones anafóricas redundantes

Diversos estudios del lenguaje jurídico español han advertido del “abuso de expresiones anafóricas” que se realiza en este tipo de documentos (de Miguel 2000; Bayo Delgado 2002b: 61; Alcaraz & Hughes 2002: 117; Samaniego 2005). Pese a que estos estudios no suelen precisar en qué términos se concreta tal abuso, hemos detectado en las sentencias examinadas la presencia de múltiples expresiones anafóricas que resultan excesivamente complejas, redundantes o innecesarias. Nos referimos, por ejemplo, a los casos en los que los diversos sintagmas nominales introducidos por un artículo definido y un modificador de origen participial (*dicho, mencionado, citado, referido, etc.*) aparecen en combinación con prefijos de anterioridad (*pre-, ante-*):

(33)

Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de D. Carlos contra Sentencia de 9 de abril de 2003 (PROV 2003, 142978) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que, entre otros pronunciamientos, condenó a D. Sebastián a abonar a D. Carlos

la cantidad de 79.153,15 €, más el interés legal desde la fecha de la reclamación al codemandado el día 28 de marzo de 2000, cuya sentencia casamos y anulamos, exclusivamente, en cuanto se refiere a la inexistencia de condena de Mapfre Agropecuaria Mutua de Seguros a la que se condena solidariamente con D. Sebastián al abono de **la cantidad antes indicada con los precitados intereses.**

[STS 26/9/2007: Fallo]

Sintagmas nominales con valor anafórico como el destacado en el ejemplo resultan, de por sí, más difíciles de procesar que expresiones alternativas equivalentes como el empleo del demostrativo (*estos intereses*), ya que su estructura sintáctica es más compleja y menos natural. Pero, además, el significado del prefijo *pre-* ante el adjetivo de origen participial *citados* resulta redundante, dado que la idea de que el elemento denotado por el nombre *intereses* ya se ha mencionado previamente ya la expresa el valor aspectual perfectivo del participio, forma verbal que presenta siempre la acción expresada como terminada. Una redundancia expresiva similar se da en la expresión “la cantidad antes indicada”, que aparece en el mismo ejemplo (33).

Otro fenómeno relacionado con la redundancia o el abuso de expresiones anafóricas es el que se ejemplifica en (34), en el que, como resulta habitual en muchos documentos jurídicos, el juez debe referirse en diversas ocasiones a un elemento determinado. La recurrencia de las expresiones anafóricas acaba cansando al propio emisor, al juzgar por la expresión que hemos subrayado:

(34)

El Juzgado Central de Instrucción no 2, instruyó Sumario no 45/07 contra Conrado, Romeo, Juan Francisco e Inocencio, por delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y tenencia de armas, y, una vez concluso, lo remitió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que con fecha 20 de febrero de 2009 (PROV 2010, 22794), en el rollo no 69/07 dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:

“El día 9 de julio de 2.007, funcionarios de la Udyco que realizaban labores de vigilancia sobre **el chalet núm. NUM000 de la CALLE000 NUM001 de la URBANIZACIÓN000 en la localidad de Yeves** (Guadalajara), como consecuencia de que era ocupado por el procesado Conrado, persona que se consideraba miembro de organización delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes y que residía en **el mismo**.- Sobre las 9.30 horas del dicho día, observaron como una furgoneta matrícula 0965-BVR propiedad de la empresa de transportes Interdean S.A. de Coslada (Madrid) llegaba a **dicho chalet** y procedía a descargar en **el mismo** bultos de mobiliario conteniendo sillas, mesas, etc, que eran recibidos por el propio Conrado e introducidos en el garaje de **dicho chalet**.- Sobre las 12.30 horas, del citado día, 11 de junio de 2010 llego a las proximidades **del chalet** el vehículo SEAT Toledo HXB conducido por su titular Inocencio, (...).- Posteriormente Conrado abandono el Hospital, dirigiéndose nuevamente a la localidad de Yeves, URBANIZACIÓN000, introduciéndose en **el repetido chalet** en el que residía.- La Policía tuvo conocimiento de que el contenedor con el mobiliario que había sido entregado e introducido en **el repetido chalet**, procedía de Venezuela, y había sido detectada su entrada en España por Aduanas en el Puerto de Valencia el día 23.6.08, (...).- Sobre las 18.30 horas del día 9 de Julio de 2.007 llegaron **al chalet indicado** los procesados Inocencio en primer lugar y posteriormente llegaron juntos Romeo y Juan Francisco, en el vehículo Volkswagen Pasat matrícula GFZ que conducía el primero, quedándose en el interior del vehículo Pasat la esposa de Romeo.- **El repetido chalet**, se ubica en una Urbanización denominada URBANIZACIÓN000 de la localidad de Yeves (Guadalajara), que esta formada por un conjunto residencial con múltiples chalets, dúplex y edificios de viviendas y servicios. constando con calles de paso de vehículos y zonas de viandantes y zonas ajardinadas. La zona en la que se ubica **el chalet tantas veces citado**, tiene en su parte posterior una zona de garaje, que se compone de un acceso común y público para personas y vehículos, a través de la cual los vehículos acceden a los garajes individuales propios de los chalets, los que se encuentran cerrados e individualizados por obra de material y cierre metálico.”

[TS 1353/2009: Antecedentes de hecho, primero]

Convendría recordar, quizás, que el mero empleo del artículo definido (“el chalet”) ya indica que se está mencionando una entidad conocida y que el demostrativo de proximidad *este* es el determinante anafórico que se emplea con mayor frecuencia en español estándar. Por el contrario, expresiones como “el repetido chalet” cargan el texto, por lo que es recomendable emplearlas con moderación.

b) Expresiones anafóricas arcaicas o poco naturales

Además de las expresiones anafóricas excesivamente complejas, como las que se han descrito en el epígrafe anterior, se observan también en las sentencias del corpus analizado

expresiones arcaicas que, si bien se empleaban en el español antiguo, resultan artificiosas en el español actual. Un ejemplo es el uso de *dicho* como adjetivo de origen participial, en combinación con un artículo definido, que según la *Nueva gramática de la lengua española* publicada por la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (2009: 1389-1290, 17.3j-17.3l) constituye un uso arcaico. Este adjetivo se emplea en el español actual como determinante de pleno uso, sin necesidad de combinarse con un artículo: *dicha entidad*. En (35) ofrecemos un ejemplo de este uso arcaico del participio *dicho* documentado en el corpus de sentencias:

(35)

Se sustenta también en los dictámenes e informes periciales separados que, emitidos para productos LEHMAN y Bancos Islandeses emite D Héctor con DNI NUM083, quien además de ratificarlos a presencia judicial, facilitó las siguientes explicaciones de forma extractada: afirmó que conocía el manual de prácticas de inversión de la entidad BANKINTER y consideró que **la dicha entidad** tenía que haber extremado su precaución para informar debidamente a los clientes.

[SJPI 4/2010. Madrid: Fundamentos de Derecho, primero]

En la misma línea, algunos participios de verbos de lengua que se emplean con artículo para indicar que la entidad de la que se habla no es nueva, sino que ya ha aparecido en el texto previo resultan también particularmente artificiosos o arcaicos. Es el caso del uso de *mentada* en (36), que bien podría haberse sustituido por *mencionada* o incluso haberse eliminado, ya que cualquiera que haya leído una sola sentencia sabe que la representación judicial de los participantes se menciona en el encabezamiento del documento:

(36)

PRIMERO- Por la **mentada** representación de la parte actora se presentó demanda ajustada a las prescripciones legales en la que tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que consideró de aplicación al caso y que se dan por reproducidos en evitación de innecesarias reiteraciones, terminó suplicando al Juzgado que en su día y previos los trámites de rigor, fuese dictada sentencia por la que:...

[SJPI 7/2000. Madrid: Antecedentes de hecho, primero]

4. LA DIFICULTAD PARA ACCEDER AL AGENTE DE UNA ACCIÓN (PROBLEMAS DE RECUPERACIÓN DEL AGENTE)

En lenguas como el español, en las que la aparición explícita del sujeto de las formas verbales no es obligatoria, uno de los elementos del discurso que con mayor frecuencia se interpretan a partir del texto circundante es el sujeto, que suele elidirse cuando ya se ha mencionado en la oración anterior. En Lingüística, este sujeto elíptico, que se recupera de modo anafórico, esto es, a partir del texto previo, suele representarse mediante el símbolo correspondiente al conjunto vacío (\emptyset). Así, cuando una frase tiene el mismo sujeto que la anterior o las anteriores, es habitual que este se elida, puesto que puede recuperarse fácilmente a partir de la oración precedente. Sin embargo, al igual que sucedía con el resto de las expresiones anafóricas, este mecanismo de economía puede dar lugar a problemas de comprensión, es decir, a casos en los que el sujeto no puede interpretarse o recuperarse fácilmente.

Como es bien sabido, el sujeto suele coincidir con el agente o persona que realiza la acción expresada en el verbo. Por ello, cuando no puede interpretarse de forma clara y unívoca cuál es el sujeto de una frase hablamos de pérdida del agente, ambigüedad del agente o dificultad para recuperarlo. Tales fenómenos son problemáticos porque dificultan notablemente la comprensión del mensaje; en concreto, impiden al lector comprender quién realiza la acción que se expresa en el verbo.

En los documentos judiciales analizados hemos podido detectar diversos problemas que dificultan o imposibilitan la identificación del agente o la persona que realiza las acciones expresadas. Esta dificultad de identificación del agente afecta tanto a verbos en forma personal como a verbos en forma no personal (infinitivo, gerundio y participio).

4.1. El sujeto elíptico de verbos en forma personal

En los documentos judiciales examinados, los problemas de identificación del sujeto de verbos en forma personal, esto es, de verbos que contienen marcas de aspecto, modo, tiempo, persona (*recib-íó, cont-aba, prescrib-irá*), se producen en los siguientes casos:

- cuando el sujeto de un verbo ha aparecido previamente en el texto, pero se encuentra a **demasiada distancia** como para que el lector pueda recordarlo o recuperarlo;
- cuando se dan **errores de concordancia** entre la persona del verbo y la primera aparición del sujeto, especialmente cuando este último es colectivo o constituye una entidad compleja;
- cuando **el sujeto no se ha mencionado** previamente, sino que está implícito; y
- cuando hay un **cambio de sujeto no advertido**, en el que no se menciona el nuevo sujeto.

Además de ser incorrectos desde el punto de vista sintáctico, todos estos casos causan tres tipos de problemas de comprensión: que el sujeto se interprete con problemas, que haya más de un sujeto posible (sujeto ambiguo), o bien que el sujeto no pueda interpretarse.

4.1.1. Mención del sujeto excesivamente distante

Como ya se ha indicado, el sujeto de un verbo puede elidirse cuando es el mismo de la oración o de las oraciones anteriores. No obstante, en el discurso jurídico es frecuente que las oraciones se prolonguen a lo largo de muchas líneas o, incluso párrafos³⁴. Por ello, a menudo el sujeto no puede recuperarse porque ha quedado muchas líneas (y oraciones, e incisos) atrás. Estos sujetos “remotos” resultan especialmente problemáticos cuando superan la frontera del párrafo, es decir, cuando un párrafo se inicia con un sujeto elíptico que se ha mencionado en el párrafo anterior, como se muestra en el ejemplo de (37):

(37)

El delito de amenazas, nos dice el Alto Tribunal es un delito de carácter circunstancial que hace que la valoración jurídica de la acción desarrollada deba analizarse desde las expresiones proferidas, las acciones ejercitadas, el contexto en el que se vierten, las condiciones del sujeto pasivo y activo y cuantas circunstancias contribuyan a la valoración contextual del hecho (SSTS 1820/1999 de 21 de diciembre, y de 1 de junio de 2001). Es preciso por tanto, valorar la ocasión en la que se profiere, la persona que amenaza y sus actos anteriores, simultáneos y posteriores, pues de dicha valoración depende que se califique fundamentamente de serio el anuncio del mal constitutivo de delito que hace el sujeto amenazante (SSTS 701/2003 de 16 de mayo y 259/2006, de 6 de marzo, ya citada).

[0] Descansa efectivamente, en la comunicación de un mal futuro, injusto, determinado y con apariencia de seriedad y firmeza, con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, sin la intención de dañar materialmente al sujeto mismo (STS 201/2005 de 14 de febrero) y sin la exigencia de que se haya producido la perturbación anímica perseguida por su autor (SSTS 832/1998, de 17 de junio y 889/2003, de 13 de marzo).

[SAN 5247/2006. Madrid: Fundamentos de derecho, primero]

El sujeto del verbo destacado al inicio del segundo párrafo es “el delito de amenazas”, que se describía en el párrafo anterior. Sin embargo, para recuperarlo el lector deberá, con toda probabilidad volver atrás en la lectura, ya que la distancia a la que se encuentra el sujeto explícito excede con mucho las limitaciones que tiene la memoria de trabajo que los lectores empleamos durante el proceso de lectura.

Los problemas para interpretar el sujeto de un verbo son especialmente frecuentes en las sentencias estudiadas en aquellas situaciones, recurrentes en este tipo de documentos, en las que se citan diferentes declaraciones o afirmaciones que contienen otros documentos o que han referido otros participantes en el proceso judicial. Las citas se prolongan a veces durante varios párrafos, o incluso páginas, y los sujetos (que designan, recordemos, o bien

³⁴ La descripción de las oraciones-párrafo y de los problemas de comprensión que ocasionan se ofrece en el apartado 1.2.1.

el tipo de documento, o bien la persona o las personas que lo emiten) solo se mencionan al inicio. En las sentencias examinadas hemos localizado muchos ejemplos de párrafos o apartados que empiezan con un sujeto elíptico cuyo antecedente resulta muy difícil de recuperar, como sucede en el siguiente caso, en el que hemos subrayado la primera mención del sujeto para facilitar la comprensión y mostrar la distancia entre dicha mención y el sujeto elíptico:

(38)

TERCERO.- 1. El Letrado de la acusación particular constituida por Luis Ángel y por María Virtudes, en su escrito de acusación, calificó los hechos como constitutivos de diecinueve (19) homicidios por imprudencia profesional grave, del artículo 142 del Código Penal, con infracción de reglamentos, en concurso ideal del artículo 77 del mismo texto legal, con delitos de lesiones imprudentes, del artículo 152 del Código Penal, de los que consideró responsable en concepto de autor, al acusado Valentín, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando se impusiera al acusado la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de seis años; y al pago de las costas procesales incluidas las de referida acusación particular; en vía de responsabilidad civil responderá el acusado en las cantidades siguientes: a) veintidós mil quinientos sesenta y nueve euros con cuarenta y ocho céntimos (22.569,48 euros) para el padre Luis Ángel ; y b) veintidós mil quinientos sesenta y nueve euros con cuarenta y ocho céntimos (22.569,48 euros) para la madre María Virtudes ; del pago de las cantidades expresadas, son responsables civilmente el acusado, RENFE y la aseguradora Mapfre Industrial S.A.

2. En trámite de conclusiones definitivas, el día 9 de mayo de 2006, [Ø] presentó escrito, modificando la penalidad, para interesar la pena de dos años de prisión y ciento ochenta y un días de prisión, (...).

[SJP 19/2006. Albacete: Antecedentes de hecho, tercero]

Como ya se ha dicho, proponemos este ejemplo por no alargar excesivamente nuestro informe, pero se han localizado casos en los que el sujeto de un verbo aparece varias páginas atrás³⁵.

4.1.2. Problemas de concordancia con sujetos plurales, colectivos o complejos

La interpretación del sujeto en citas extensas de un documento o de una declaración, como la ejemplificada en el ejemplo (38) del epígrafe anterior, se complica todavía más cuando se combina con problemas de concordancia entre el verbo y el sujeto elíptico. En el siguiente ejemplo se está citando la demanda que ha dado lugar al juicio y puede observarse cómo un mismo sujeto, "los hoy actores", se recupera alternativamente como un sujeto elíptico plural o singular:

(39)

PRIMERO

Afirman los hoy actores que, como consecuencia de una actuación agresiva de colocación de instrumentos financieros, BANKINTER prestó un servicio de asesoramiento personalizado a cada uno de ellos para recomendarles la adquisición de dos tipos de instrumentos financieros, uno emitido por el grupo LEHMAN BROTHER y otro, emitido por Bancos Islandeses (Landsbanki y Kaupthing). (...) **[¿la demanda presentada por los actores?] Afirma que** dicho asesoramiento personalizado se hizo con la intención que los hoy actores procedieran a la adquisición de instrumentos financieros que resultaban objetivamente inadecuados a su perfil de inversores minoristas conservadores, movilizandando así otros capitales que tenían invertidos en otros tipos de productos que no generaban tanta rentabilidad a la entidad financiera con los que se les estaban recomendando, pero que para los hoy actores eran mas seguros. **Afirman que**, hasta lograr la colocación de dichos instrumentos, se emplearon tácticas bancarias agresivas, generalmente mediante llamadas telefónicas compeliendo a la adquisición de productos, sin facilitarles mas información que aquella que les motivaría la adquisición de los mismos, sin asegurarse del perfil o prioridades de cada inversor, ocultando otros datos de dichos instrumentos, (...). Siempre se dio a entender que los productos que se comercializaban eran de la propia entidad BANKINTER, (pues incluso se empleaba papel con el logo y color corporativo de dicha entidad), no dándoseles información que eran en realidad títulos de terceros emisores en los que BANKINTER actuaba como simple intermediario. **Afirma que** tal política de colocación masiva de estos productos era consecuencia, mas de un interés puramente económico de la entidad hoy demandada, (...), que a un verdadero interés de lealtad y diligencia para con sus clientes inversores, a los que dejó de prestar ningún tipo de servicio de asesoramiento continuado durante el tracto sucesivo del devenir de la operación. **Indica que** el porcentaje de rentabilidad generada a la entidad bancaria por la colocación de los productos Lehman alcanza el 11,8% de su actividad, (...). **Afirma que** una vez fueron

³⁵ Véase, a modo de ejemplo, el fundamento de derecho primero de la sentencia SJPI 4/2010, que se cita en los ejemplos (39) y (40) del apartado 5.4.1.2.

inidóneamente colocados los productos, BANKINTER dejó de facilitarles información que hubiera podido ir alertándolos de las peligrosas circunstancias o turbulencias que estaban afectando al mercado y a los dichos títulos, no aperciéndoles del grave riesgo de insolvencia de las entidades emisoras que estaban poniendo en peligro la inversión realizada. **Afirma que** la entidad bancaria no solo actuó indebidamente en el ámbito de la negociación previa a la adquisición de los productos, sino también en el proceso de ejecución de las dichas órdenes y en el ulterior proceso de custodia y administración de los mismos (...). [SJPI 4/2010. Madrid: Fundamentos de Derecho, primero]

Este largo párrafo -del que solo citamos un fragmento, pero que se prolonga, de hecho, a lo largo de varias páginas- presenta dos problemas fundamentales: en primer lugar, el sujeto solo se menciona en una ocasión, al inicio; en segundo lugar, los verbos que expresan las acciones concuerdan alternativamente en plural (con “los hoy actores”) y en singular (se supone que con ‘la demanda’, aunque esta no se menciona explícitamente en el fragmento). Pero, además, el problema se agrava cuando, en el mismo párrafo, aparece un verbo con un sujeto elíptico que no es el mismo que el de las frases anteriores y posteriores:

(40)

Entienden que todas esas conductas, que en si mismas son malas prácticas bancarias, han sido directamente causantes de la pérdida total de la inversión que han sufrido sus clientes, no solo por haberles obligado a movilizar fondos que tenían invertidos en otros valores seguros, poniéndolos ahora en riesgo, sino porque han obtenido de forma indebida el consentimiento para obligarles a invertir en valores no seguros, sin haberse cerciorado que obtenían un consentimiento correctamente formado a partir de la correcta y completa información que procuraban. **[CAMBIO DE SUJETO INADVERTIDO: los responsables de la entidad bancaria]** Actuaron de forma que, presentándose como verdaderos asesores personales (documentación, cartas, correos, publicidad de la propia página Web, identificaciones personales como asesores de aquellos comerciales que les atendían...), en realidad eran simples comercializadores de productos ajenos muy rentables, con la idea de procurarse comisiones para repartir bien individualmente o bien colectivamente como Sucursal. **[¿la demanda de los actores?]** **Afirma que** ese conflicto de interés les llevó a adoptar una postura de falso asesoramiento, induciendo a seguridades inexistentes en los productos que ofertaban, procurando un consentimiento no formado en los hoy actores y haciéndoles disponer -en su propio perjuicio- de un patrimonio que no corría riesgo antes de esa colocación de instrumentos hoy controvertidos.

[SJPI 4/2010. Madrid: Fundamentos de Derecho, primero]³⁶

95

En otros casos, los problemas de concordancia se deben a la presencia de un nombre colectivo, que designa a un conjunto de entidades pero que morfológicamente se considera singular (*gente, familia, vecindario*, etc.). En el ejemplo de (41), mucho más breve que el anterior, el sujeto *Jurado*, que morfológicamente es singular y debería concordar en singular con el verbo, concuerda a veces en singular (tal como indica la normativa morfosintáctica), otras veces en plural (atendiendo al sentido colectivo del nombre):

(41)

En el veredicto emitido por el Jurado, conforme exige el 120.3 de la CE. y la Legislación Procesal, **se razona** en base a que **[Ø] obtiene** su convicción sobre lo declarado probado; de una forma clara **[Ø] exteriorizan** las motivaciones que le inducen a dar por acreditados determinados hechos.

[STSJ ICAN 2721/2002. Las Palmas de Gran Canaria: Fundamentos de derecho, primero]

Resulta difícil interpretar en la primera (y segunda) lectura cuál es el sujeto de los verbos en negrita. En el primer caso se elige un sujeto impersonal (*se razona*) que, en realidad, oculta al agente *el Jurado*. De forma poco consistente, a continuación aparece un verbo en forma personal (*obtiene*) que parece tener el mismo sujeto. En la siguiente cláusula, el sujeto parece (lógicamente) seguir siendo el mismo, pero ahora el verbo está en plural (*exteriorizan*).

Es cierto que en algunos casos de empleo de sujetos colectivos (*el Jurado, la policía, el alumnado*) la Academia admite la concordancia en plural, pero únicamente cuando “se pasa de una oración a otra, pues en ese caso al segundo verbo le corresponde, en realidad, un sujeto plural tácito” (RAE y AALE 2005: s.v. CONCORDANCIA). Así pues, referirse en una misma oración a un sujeto colectivo en singular y en plural alternativamente, no solo es confuso para el lector, sino también antinormativo. La comprensión resulta aún más difícil cuando, en la

³⁶ Los problemas derivados de cambios de sujeto inadvertidos se tratarán también más adelante, en el apartado 5.4.1.4.

continuación de la misma oración, aparece un pronombre átono (*le*) que se refiere al mismo Jurado, ahora en singular.

En la siguiente versión alternativa (41bis) mostramos cómo cuando la concordancia entre la forma verbal y el sujeto agente es consistente, no es necesario explicitar el sujeto más que una vez:

(41bis)

En su veredicto, el Jurado **razona**, conforme exige el 120.3 de la CE. y la Legislación Procesal, en base a qué (elementos) **obtiene** su convicción sobre lo declarado probado y **exterioriza** de una forma clara las motivaciones que le inducen a dar por acreditados determinados hechos.

Un último caso de sujeto que suele presentar problemas de concordancia y, por ello, también de comprensión, es el de los sujetos complejos, en los que aparecen varios elementos unidos por algún tipo de conjunción, como el sujeto subrayado en (42):

(42)

Las expresadas epístolas, y en concreto el primer de los artículos periodísticos titulado “El Escudo” fue **concebido** con la finalidad de mantener el ideario de la banda terrorista ETA en prisión y (...).

[SAN 5247/2006. Madrid: Hechos probados]

A pesar de que el inciso “el primer [sic] de los artículos...” está en singular, el sujeto de la oración son “las expresadas epístolas”, de modo que la concordancia con el verbo debería ser en plural.

4.1.3. Sujeto implícito

En algunas de las sentencias examinadas hemos detectado casos especialmente problemáticos en los que nos ha resultado imposible hallar el sujeto de los verbos en forma personal. El fragmento de (43) se ofrece como ejemplo de estos casos:

(43)

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda de la actora y condena a la empresa codemandada al pago de determinadas cantidades, en concepto de indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo.

Contra la misma se alzan las partes recurrentes formulando sendos recursos con base en motivos de revisión fáctica y censura jurídica.

Por razones de método procede examinar en primer lugar el recurso de la condenada porque su éxito haría innecesario el examen del otro recurso.

La empresa recurrente alega con amparo en el artículo 191.a) de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563) infracción de norma de procedimiento al entender que la jurisdicción social es incompetente para conocer de la litis, cuya competencia corresponde a la jurisdicción civil.

A estas alturas resulta sorprendente que se plantee esta excepción cuando hay la solución a la misma es pacífica, pues el orden social se declara competente, y el orden civil también lo ha aceptado.

Así cabe citar entre otras las Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Cuarta) de 17.7.2007 (RJ 2007, 8300) (513/2006) y 17.7.2007 (RJ 2007, 8303) (4.367/2005); la de 22.9.2008 y la de 3.2.2009 (RJ 2009, 1185); a los que hay que añadir la de 15.12.2008 (RJ 2009, 673) de la Sala Primera que reconoce que la competencia es del orden social y no del civil.

Con base en las mismas procede sin más la desestimación del motivo.

SEGUNDO

En segundo lugar y con amparo en el artículo 191.b) de la Ley de Procedimiento Laboral **pretende** la adicción del hecho probado octavo del siguiente párrafo: “...El trabajador durante su Incapacidad Permanente Absoluta, desde el 23.11.99 al 28.3.04, percibió una pensión de 52.029,68 # por dicha incapacidad...”.

[STJICan 1484/2009. Islas Canarias/Las Palmas: Fundamentos de derecho, primero y segundo]

¿Quién “pretende la adicción [sic.] del hecho probado octavo”? ¿Se trata quizás de la condenada o de la empresa recurrente? La identificación del sujeto resulta, cuanto menos, ambigua, si no imposible.

4.1.4. Cambio de sujeto no marcado

Un último problema de recuperación del agente que hemos detectado son los casos en los que se elide un sujeto que no es el mismo que el del verbo o la oración anterior. Se trata, fundamentalmente, de casos en los que dos verbos aparecen coordinados o yuxtapuestos, pero presentan sujetos diferentes, como ocurre en el ejemplo de (44):

(44)

Ante esta amenaza, Aurora acudió a Comisaría de Policía a denunciar los hechos, pero cuando volvió a su casa, sobre las 16 horas, Inocencio estaba esperándola fuera, y comenzó a gritar a Aurora que la mataría, que le retorcería el cuello y quemaría la casa si no le daba dinero. Ella trató de negarse, pero como **el acusado** estaba cada vez más agresivo y [**¿el acusado o ella?**] temía por su vida, le dio la cantidad de 5.000 Ptas.

[STSJ ICAN 2721/2002. Las Palmas de Gran Canaria: Hechos probados, primero]

En el ejemplo anterior, el que estaba cada vez más agresivo es, como se indica, el acusado; sin embargo, quien “temía por su vida” es, esperablemente, la víctima, Aurora. La redacción del fragmento hace pensar que ambas acciones las realiza el acusado porque el juez que redacta la sentencia no advierte al lector de que el sujeto del segundo verbo es diferente. Recordamos al respecto que el sujeto de un verbo solo puede elidirse cuando es el mismo de la oración anterior.

4.2. El sujeto tácito de verbos en forma no personal

Las formas no personales reciben este nombre porque se trata de formas verbales invariables, que no tienen, por tanto, marcas de flexión. Eso significa que estas formas verbales no tienen marcas de persona que faciliten la interpretación del sujeto, es decir, que permitan interpretar quién realiza la acción expresada por el verbo. A pesar de ello, en algunas ocasiones, el infinitivo o el gerundio pueden llevar un sujeto expreso, como ocurre en la frase *No vendrá (él) estando tú en casa*, donde tú es el sujeto que realiza la acción expresada por el gerundio. No obstante, los casos en los que el sujeto de las formas no personales aparece explícito son excepcionales. Lo más frecuente es que el sujeto de estas formas quede implícito o sea un sujeto *tácito* (RAE y AALE, 2009: 26.7-8 y 27.3).

En estos casos mayoritarios en los que las formas no personales tienen un sujeto tácito, no explícito, este se interpreta necesariamente a partir de un elemento que ya ha aparecido en el texto, es decir, se recupera de forma anafórica. La interpretación más frecuente y, por tanto, la interpretación por defecto del sujeto de estos verbos suele ser la identificación del sujeto tácito de un infinitivo, gerundio o participio con el sujeto de la oración principal (Santiago, 2000: 91). Así, por ejemplo, en la siguiente oración, se entiende que el sujeto tácito del gerundio “aprobando” (que recuperamos entre corchetes) es la misma persona que es sujeto de los verbos principales “declaro” y “abono”, el juez de la sentencia de instancia:

(45)

Declaro la insolvencia provisional del acusado, [**yo**] **aprobando**, a tal efecto, por sus propios fundamentos, el auto dictado por el Instructor, y para el cumplimiento de la pena de privación de libertad que le impongo, le abono todo el tiempo que ha estado en prisión preventiva por esta causa.

[STSJ ICAN 2721/2002. Las Palmas de Gran Canaria: Antecedentes de hecho, segundo]

No obstante, la recuperación del sujeto tácito de una forma no personal no es tan sencilla. La dificultad suele proceder, en el caso de los documentos analizados, de la frecuente acumulación de oraciones subordinadas que se da en los textos jurídicos. Si tanto en la oración principal como en las subordinadas se mencionan diversas entidades, el lector puede tener serias dificultades para decidir cuál de ellas es el sujeto tácito de una determinada forma no

personal. En otras ocasiones, también frecuentes, el sujeto tácito de la forma no personal no se menciona explícitamente en la oración, de modo que resulta muy difícil recuperarlo a partir del texto anterior. El resultado de todos estos problemas suele ser la dificultad (o incluso la imposibilidad) de comprender quién realiza la acción expresada por el verbo.

4.2.1. El sujeto tácito del gerundio

En los documentos jurídicos examinados es frecuente que se yuxtapongan o coordinen una serie de verbos y gerundios de verbos de comunicación (*añadir, precisar, interesar, decir*, etc.), que se emplean para citar el contenido de algún documento implicado en el proceso, como ocurría en el fragmento de (45). Cuando los fragmentos de este tipo son extensos o sintácticamente complejos, no es extraño que el agente de alguno de los gerundios (forma que, recordemos, no tiene marca de persona que ayude al lector a identificar a la persona que realiza la acción) se haya mencionado excesivamente lejos, o bien que su interpretación sea ambigua:

(46)
TERCERO.- También se acoge el segundo motivo de impugnación, en cuanto se revoca el pronunciamiento contenido en la sentencia de instancia, que nombra tutor de la persona cuya incapacidad se declara en la sentencia al Instituto Tutelar de Bizkaia, **interesando [¿quién?]** el nombramiento del cargo tutelar a su hermana Dña. Marí Luz, quien de hecho viene ejercitando tal función.

[SAP BI 560/2008. Bilbao: Fundamentos de derecho, tercero]

El sujeto tácito del gerundio destacado es, ciertamente, difícil de recuperar: ¿quién interesa “el nombramiento del cargo tutelar”? ¿el tribunal que está juzgando la incapacidad o la solicitante? Solo después de leer el fragmento un par de veces, se entiende que el agente es “la solicitante”. Otro ejemplo de gerundio con agente dudoso o difícil de interpretar es el siguiente:

(47)
Para analizar la concurrencia de esta causa de justificación hay que retrotraerse al momento inmediatamente anterior al forcejeo. El matrimonio subió a la habitación de la planta de arriba y allí continuó la discusión que había comenzado abajo. Hablaron sobre cuándo iba a abandonar el esposo el domicilio conyugal y se planteó el tema del divorcio. Hasta este momento no consta ningún acto de violencia ni física ni verbal, **limitándose a mantener [¿quién?]**, con mayor o menor vehemencia, opiniones no coincidentes. No ha quedado probado que la esposa iniciara una agresión física contra el marido.

[SJP 9/2009. Barcelona: Fundamentos de derecho, séptimo]

En este caso, el sentido común y la relectura reflexiva apuntan a que quienes se limitan a “mantener opiniones no coincidentes” son los dos cónyuges. No obstante, la identificación del sujeto del gerundio resulta especialmente difícil, sobre todo porque la oración principal en la que aparece la cláusula de gerundio es impersonal (“no consta que”), de modo que tampoco facilita la identificación del sujeto tácito del gerundio “limitando”. Casos como este podrían resolverse especificando el sujeto del gerundio (*limitándose los cónyuges a mantener...*) o bien iniciando una nueva frase con un verbo en forma personal que proporcione marcas que contribuyan a identificar el sujeto (*sino que se han limitado a mantener...*).

4.2.2. El sujeto tácito del participio

La ambigüedad o la dificultad para identificar el sujeto tácito de un verbo expresado en forma no personal se manifiesta también, en numerosas ocasiones, en el empleo de participios. En el siguiente fragmento, que presenta múltiples problemas de redacción (acumulación de gerundios y de procedimientos de subordinación, excesiva longitud de la oración, etc.), resulta considerablemente difícil, al menos en una primera -e incluso segunda- lectura, identificar qué es lo que se describe en la literatura:

(48)

Pues bien, sobre dicho particular nos encontramos con que en ninguno de los informes obrantes se nos indica que la técnica utilizada fuera incorrecta o que se hubiera seguido una actuación no acomodada a la *lex artis ad hoc* pues en el informe técnico de evaluación elaborado por el médico inspector nada se apunta sobre dicho particular como tampoco en el informe elaborado por los facultativos del servicio de anestesiología (si bien en este caso podría albergarse lógicas reticencias en relación a su contenido al ser el propio servicio en el que supuestamente se causase el daño reclamado) y tampoco se encuentra base para entender se haya producido infracción de *lex artis* en el informe del especialista en anestesiología y reanimación elaborado por la Dra. Alsina pues aun cuando si recoge que pudiera efectivamente haberse afectado el nervio radial también recoge expresamente que la actitud del anestesiólogo fue la correcta, que colocó la vía venosa para la realización del procedimiento y que se habían seguido los protocolos de punción venosa siendo la posible neuropraxia del nervio radial tras acceso intravenoso **[¿Ø?] descrito** en la literatura en forma de casos aislados y estimando dicho perito que se trataría de una lesión inevitable.

[SJCA 2231/2007: Fundamentos de derecho, tercero]

Tras varias relecturas y de acuerdo con el sentido del fragmento, la diversidad de sujetos tácitos posibles del participio (todos los procedimientos y fenómenos médicos que se mencionan con anterioridad) parece resolverse a favor de “la posible neuropraxia del nervio radial”. Sin embargo, esta entidad (femenina) no concuerda con las marcas de género del participio (“descrito”). En el caso de (49) se produce, de hecho, la misma complicación que aparece en numerosas ocurrencias del participio: dado que esta forma, en su uso adjetival, tiene marcas de género y número, los problemas de identificación del sujeto tácito se agravan a menudo por errores de concordancia del participio con su sujeto tácito. Esta combinación de problemas se da en muchas de las sentencias examinadas (p.e. SJPI 15/2008, SAP J 835/2009, SJP 10/2009, entre otras), en las que a menudo, el participio concuerda con el último elemento mencionado, independientemente de cuál sea el antecedente real, como ocurría en (48).

4.2.3. El sujeto tácito del infinitivo

El infinitivo es la forma no personal que suele presentar menos problemas de uso en las resoluciones analizadas, aunque en algunas construcciones recurrentes con esta forma (como, por ejemplo, la construcción temporal <al + infinitivo>) se pierde, también, el sujeto tácito que realiza la acción expresada por el verbo, como ocurre en el siguiente ejemplo:

(49)

Explicaron que en el interior de una maleta, modelo Trunkco de la marca Sansonite, localizan unos 28 kg de dinamita Titadyne, cuatro metros de cordón detonante, dos detonadores eléctricos del número 12 y un temporizador modelo TC conectado y dispuesto para activar el dispositivo explosivo a las 15 55 horas del día 24 de diciembre de 2003, estando todo el dispositivo en perfecto estado de funcionamiento y listo para explosionar, maleta que se hallaba en el segundo de los vagones, en la zona del portamaletas. Y, a preguntas del Ministerio Fiscal, como técnicos en la materia, afirmaron que la explosión podía haberse producido no sólo por la finalización de la temporización sino, **al ser [¿cuáles?] unos sistemas muy sensibles**, al recibir un golpe fortuito como el producido al colocar otra maleta encima, con el propio movimiento del tren (“traqueteo”, según dijeron) e incluso con el aparato eléctrico de una tormenta (aclararon que ese día la había) pues se trata de un circuito eléctrico modificado.

[SAN 25/2005: Fundamentos de derecho, primero]

Como se ha destacado en el ejemplo mediante subrayado, estos problemas de identificación del sujeto tácito de las cláusulas con infinitivo suelen darse en los casos, recurrentes en las sentencias examinadas, en los que se acumulan en una misma frase construcciones de infinitivo del mismo tipo que designan acciones realizadas por distintas personas. En estos casos a veces resulta imposible discernir qué persona (o qué entidad) ha realizado cada acción.

LA PUNTUACIÓN

1. INTRODUCCIÓN. PUNTUACIÓN, LEGIBILIDAD Y COMPRENSIÓN TEXTUAL

La puntuación de un texto es, sin duda, uno de los aspectos de la escritura que peor se maneja y, curiosamente, que menos en cuenta se tiene. En el ámbito de la escritura profesional experta, como es el caso de los escritos jurídicos, este mal uso no es una excepción, tal como han señalado muchos especialistas³⁷. La frecuencia de este uso descuidado o incorrecto de la puntuación al que acabamos de aludir puede deberse a un desconocimiento de la función de estos signos por parte del escritor o, como se sugiere en algunos trabajos sobre el lenguaje jurídico, a una falta de interés por este fenómeno. No obstante, puntuar bien un texto es imprescindible para que este se pueda leer; o, dicho de otro modo, un texto mal puntuado es un texto que no se comprende adecuadamente.

Pese a una creencia muy extendida, la función principal de la puntuación en un texto escrito no es señalar los lugares donde deben -o suelen- hacerse pausas para respirar (aunque pueda haber coincidencia entre la localización de estos signos y las pausas que realiza el lector). No obstante, esta es una de las razones que suelen esgrimirse para justificar, por ejemplo, el uso de una coma entre el sujeto y el verbo o entre el verbo y sus complementos fuertes. La función principal de la puntuación, sobre todo de los signos de primer régimen (coma, punto y coma, dos puntos y punto y seguido), es la de establecer límites estructurales, marcar pautas para la lectura adecuada de un texto y facilitar, en consecuencia, su correcta interpretación.

Puede pensarse que un uso inadecuado o incorrecto de la puntuación constituye un problema menor, ya que la puntuación suele vincularse con cuestiones ornamentales del texto, esto es, con cuestiones de orden estilístico. De hecho, sobre la puntuación en el lenguaje jurídico se ha escrito, por ejemplo, que existe una cierta despreocupación por esta porque lo que se prima es el contenido que se expresa y no la forma de expresarlo; o que los textos legales no se escriben para ser leídos en voz alta, de modo que la puntuación escasa o, incluso, incorrecta no supone un problema grave (Samaniego 2005: 300).

³⁷ Sobre el uso inadecuado de la puntuación en los textos jurídicos y los problemas que conlleva este mal uso, véanse, entre otros, Bayo Delgado (2002: 64); Alcaraz y Hughes (2002: 113) o Cazorla Prieto (2007: 122).

Sin embargo, tal como hemos apuntado antes, la función principal de la puntuación no es pautar la lectura marcando los lugares donde deben realizarse pausas para respirar, sino, más bien, delimitar unidades estructurales del discurso y, principalmente, facilitar su interpretación. Un texto mal puntuado es un texto que se lee con dificultad o que deviene imposible de leer y, en consecuencia, de entender. En este sentido, en las sentencias que hemos analizado, igual que en cualquier texto bien escrito, la puntuación es **esencial** para su adecuada interpretación. Por otra parte, y pese a su aparente carácter externo (en comparación con otros aspectos del texto como la sintaxis), la puntuación en un texto de las características de los judiciales debe acomodarse tanto a las expectativas formales que se tienen sobre este tipo de textos (son textos que representan ejemplos prototípicos de máxima escriturad y que pertenecen al registro culto), como a las necesidades sociales y comunicativas que los motivan (son textos en los que se transmite una información de gran trascendencia para el ciudadano, de modo que esta debería expresarse con un grado elevado de claridad y transparencia, para lo cual resulta imprescindible una puntuación adecuada del texto).

Las sentencias, como textos jurídicos prototípicos, se caracterizan por el uso de un lenguaje complejo, no solo en el nivel léxico-semántico, sino especialmente en el sintáctico-discursivo. Esta complejidad se deriva en parte de la complejidad intrínseca a los hechos que la conforman; pero también se debe, como ya se ha señalado anteriormente³⁸, a un uso inadecuado del lenguaje escrito y de sus convenciones. Entre las convenciones asociadas al uso correcto de la lengua en textos propios de un registro lingüístico alto se encuentra, además de una redacción comprensible y no afectada, un adecuado conocimiento de los signos de puntuación básicos o de primer régimen: la coma, el punto y coma, los dos puntos y el punto y seguido.

Los problemas de puntuación que hemos detectado en las sentencias analizadas repercuten en la comprensión de estos textos en grado variable. No puede decirse que todos los errores encontrados afecten por igual a la interpretación; pero, sin duda, afectan de igual modo a la buena o mala imagen que el lector medio pueda hacerse del autor de estos textos.

2. LA COMA

La coma es un signo de puntuación básico o de primer régimen que se utiliza, principalmente, para realizar las siguientes funciones: coordinar los distintos elementos de una enumeración, marcar la elisión del verbo o de alguno de sus complementos, indicar cambios de orden de algunos elementos y señalar los incisos que se introducen en una secuencia (RAE 2003, Figueras 2003).

2.1. Principales problemas relacionados con el uso de la coma

Los problemas de puntuación relacionados con la coma que hemos detectado en las sentencias repercuten en grado variable en la comprensión de estos textos. En algunos casos, se trata de errores normativos que no dificultan la comprensión: (i) coma entre sujeto y verbo o verbo y complementos fuertes (6.2.1.1.); ausencia de coma para indicar elisión verbal (6.2.1.2.); o ausencia de coma para delimitar marcadores discursivos, elementos parentéticos o incisos explicativos cortos (6.2.1.3.). En otros casos, la ausencia de coma delimitadora o un uso inadecuado de este signo (6.2.1.5.) sí que puede entorpecer la lectura y dificultar la interpretación del texto, bien porque obliga a realizar una relectura para entender lo que se dice, bien porque el signo de puntuación utilizado se asocia con una operación discursiva distinta de la que aparece efectivamente (por ejemplo, introducir una cita textual con una coma o una enumeración con un punto y coma).

³⁸ Véase, por ejemplo, el capítulo 1 sobre la construcción del párrafo.

2.1.1. Coma entre sujeto y verbo y entre verbo y complementos fuertes

El sujeto y el predicado de una oración, así como el verbo y sus complementos fuertes³⁹, forman una estructura sintáctica que no puede separarse si no es mediante incisos parentéticos. Por ello, no debe colocarse coma entre estos elementos sintácticos. Sin embargo, tal como muestran los siguientes ejemplos, en las sentencias analizadas es frecuente el uso incorrecto de la coma entre el sujeto de una oración y su predicado (1) o entre el verbo y alguno de sus complementos fuertes (2) (en los ejemplos, la coma se marca en color rojo y el sujeto y el predicado o el verbo y el complemento se subrayan):

(1)

a. El Juzgado de Primera Instancia Nº 49 de los de Barcelona, conoció el juicio verbal número 5/2001, seguido a instancia de (...).

[STS 2385/2009, Madrid, Antecedentes, 1ª]

b. En relación con la “infracción a las normas reguladoras del lucro cesante”, el recurrente vindica una interpretación subjetiva e interesada del sistema indemnizatorio establecido en el anexo de la LRCSVM, postulando que los perjuicios por el reclamados en concepto de «lucro cesante», «no estaban incluidos en el baremo» y que por tanto hubieron de abonarse fuera de las previsiones del baremo.

[WLES 25/03/2010, Madrid, Antecedentes, 8ª]

c. Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación del recurrente, formalizó su recurso, alegando los motivos siguientes: **PRIMERO**.

[STS 1724/2010, Madrid, Antecedentes, 4ª]

(2)

a. Elevadas las actuaciones a esta Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Ministerio Fiscal solicitó la revocación del Auto de conclusión e interés del Tribunal, que se ordenase al Instructor el procesamiento de Arturo, por los delitos de integración en banda armada y amenazas terroristas], interesando además la práctica de determinadas diligencias de investigación.

[SAN 5247/2006, Madrid, Antecedentes, 2ª]

b. El párrafo segundo del artículo 172 venía referido a coacciones que tenían por objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, aunque resulta obvio que, toda coacción tiene por objeto un derecho fundamental, la libertad, (...).

[SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, 3ª]

c. (...). Otro tanto cabe decir, sobre la subsunción de los hechos en las correspondientes figuras penales, (...).

[SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, 4ª]

102

2.1.2. Ausencia de coma para señalar elisión de verbo

Cuando en una oración se elide el verbo, ya sea porque se ha mencionado previamente, ya sea porque se sobreentiende, esta elisión debe marcarse con una coma (es decir, debe aparecer una coma en el lugar en el que tendría que estar el verbo). En las sentencias revisadas, es frecuente la ausencia de esta coma para señalar elisión verbal:

(3)

Las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano se le conceden por mitad a ambos padres, sin hacer mayores especificaciones, dejando a los mismos la posibilidad de llegar a acuerdos en esta materia en función de sus circunstancias, en caso de discrepancia entre **los padres los años pares elige la madre y los impares el padre**.

[SJPI 15/2008, Fundamentos, 3ª]

En el ejemplo anterior, se elide el verbo “elegir” en la segunda oración coordinada (marcada en negrita en el ejemplo). Como mostramos en la versión alternativa (3bis), esta elisión debería marcarse con una coma (en rojo en el ejemplo), y los dos elementos coordinados deberían separarse con un punto y coma:

³⁹ Los complementos fuertes de un verbo son aquellos que vienen exigidos léxicamente por el verbo y no pueden eliminarse sin que la oración se resienta sintácticamente o falte información “imprescindible”. Entre estos complementos se cuentan el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento de régimen preposicional (los complementos introducidos por una preposición que forma parte del verbo: pensar en, olvidarse de, optar por, etc.) y algunos complementos adverbiales (por ejemplo, complementos introducidos por preposición exigidos por verbos de movimiento como *ir a*, *venir de*, *pasar por*, etc.).

(3bis)

Las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano se le conceden por mitad a ambos padres, sin hacer mayores especificaciones, dejando a los mismos la posibilidad de llegar a acuerdos en esta materia en función de sus circunstancias. En caso de discrepancia entre los padres, los años pares elige la madre; y los impares, el padre.

[SJPI 15/2008, Fundamentos, 3ª]

Ejemplos como el siguiente, en los que se combinan datos numéricos y palabras, evidencian mucho más la necesidad de usar adecuadamente la puntuación para facilitar la legibilidad del texto:

(4)

En el procedimiento sumario hipotecario del *art. 131 LH, la finca hipotecada fue adjudicada a un tercero el 30-5-97* por 2.855.000.000 ptas y por los bancos posteriormente se practico liquidación del préstamo que ascendía a 4.094.529.291 ptas de las que 3.153.875.156 ptas correspondían a principal, 377.582.270 ptas a daños y perjuicios, 536.666.667 ptas a intereses de demora, 12.000.000 ptas por costas y 14.405.198 ptas por administración judicial de la finca, procediendo ESSA, Rheinhyp y BCH mediante escritura de fecha 11-7-97 a formalizar la íntegra aplicación del depósito constituido y sus intereses (21.489.811 ptas.) al pago de las obligaciones asumidas, devolviendo Rheinhyp los avales de Huarte, SA. y ESSA (doc. 32 aportado por ESSA).

[SJPI 7/2000, Madrid, Fundamentos, 3ª]

En (4), tenemos un párrafo expositivo en el que se inserta una secuencia enumerativa que desglosa las partes correspondientes a un préstamo. Esta secuencia enumerativa ganaría en legibilidad si se utilizaran comas para marcar las elisiones verbales y puntos y coma para separar los elementos complejos de la enumeración (señalamos estos signos en rojo)⁴⁰:

(4bis)

En el procedimiento sumario hipotecario del *art. 131 LH, la finca hipotecada fue adjudicada a un tercero el 30-5-97* por 2.855.000.000 ptas y por los bancos posteriormente se practico liquidación del préstamo que ascendía a 4.094.529.291 ptas, de las que 3.153.875.156 ptas correspondían a principal; 377.582.270 ptas, a daños y perjuicios; 536.666.667 ptas, a intereses de demora; 12.000.000 ptas, a costas; y 14.405.198 ptas, a la administración judicial de la finca, procediendo ESSA, Rheinhyp y BCH mediante escritura de fecha 11-7-97 a formalizar la íntegra aplicación del depósito constituido y sus intereses (21.489.811 ptas.) al pago de las obligaciones asumidas, devolviendo Rheinhyp los avales de Huarte, SA. y ESSA (doc. 32 aportado por ESSA).

103

2.1.3. Ausencia de coma para delimitar incisos y marcadores discursivos parentéticos

Otra de las funciones básicas de la coma es la delimitación de *incisos*, esto es, de elementos de carácter explicativo o aclaratorio que se insertan en medio de la oración (RAE 2003; Figueras 2003). Al tratarse de elementos explicativos de carácter parentético, deben ir entre comas. Pese a ello, tal como muestran los siguientes ejemplos, la ausencia de una de ambas comas con esta función delimitadora es uno de los errores más frecuentes en las sentencias analizadas. Entre los incisos mal puntuados más frecuentes se encuentran los siguientes (la coma ausente se repone en rojo en los ejemplos):

-Aposiciones explicativas:

(5)

a. Tal mención expresa al entonces Juez Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, lltmo. Sr. D. Javier Gómez Bermúdez, supone de por si un señalamiento con entidad jurídico penal relevante, (...).

[SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, 1ª]

40 Sin duda, el párrafo ganaría en claridad expositiva si, además de la puntuación, la información se distribuyera en oraciones más cortas:

En el procedimiento sumario hipotecario del *art. 131 LH, la finca hipotecada fue adjudicada a un tercero el 30-5-97* por 2.855.000.000 ptas. y, posteriormente, los bancos practicaron liquidación del préstamo que ascendía a 4.094.529.291 ptas. De esta cantidad, 3.153.875.156 ptas. correspondían a principal; 377.582.270 ptas., a daños y perjuicios; 536.666.667 ptas., a intereses de demora; 12.000.000 ptas., a costas; y 14.405.198 ptas., a la administración judicial de la finca. ESSA, Rheinhyp y BCH procedieron, mediante escritura de fecha 11-7-97, a formalizar la íntegra aplicación del depósito constituido y sus intereses (21.489.811 ptas.) al pago de las obligaciones asumidas, devolviendo Rheinhyp los avales de Huarte, SA. y ESSA (doc. 32 aportado por ESSA).

b. Por aplicación del artículo 66.3ª del Código Penal, al concurrir una agravante, la de reincidencia, procede aplicar la pena en su mitad superior de la que fije la ley para el delito, es decir de 12 años y 6 meses y 1 día a 15 años.

[SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, 7ª]

-Complementos que aportan información adicional, explicando o concretando lo que se ha dicho:

(6)

a. La argumentación que las recurrentes oponen, como son el otorgamiento de tres hipotecas de máximo resulta insuficiente

[TSJC 37/2009, Barcelona, Fundamentos, 1ª]

b. Se ha producido infracción por inaplicación de la pacífica jurisprudencia del Tribunal Supremo, reconocida, entre otras muchas, en las SSTS de 2 de abril de 1997 y de 6 de octubre de 1982, (...).

[TSJC 37/2009, Barcelona, Fundamentos, 1ª]

c. El perito actuarial propuesto por la hoy recurrente reconoció en el juicio que no había tenido en cuenta datos reales que, de haberse contemplado en su informe, harían variar de forma importante su resultado.

[TSJC 37/2009, Barcelona, Fundamentos, 1ª]

d. (...), la persona señalada es asimismo un destacado miembro de la carrera judicial que en el ejercicio de su función jurisdiccional tenía encomendada la labor de revisar las redenciones de condena y demás actividades relativas al régimen penitenciario de los internos de la banda terrorista ETA, incluido el procesado, por lo que la aparición de su nombre y apellidos no es baladí (...).

[SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, 1ª]

-Alusiones polifónicas a otros autores u obras o remisiones a otros apartados dentro del mismo texto:

(7)

El delito de amenazas, nos dice el Alto Tribunal, es un delito de carácter circunstancial que (...)

[SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, 1ª]

Entre los elementos que deben ir delimitados por coma, se cuentan también los marcadores del discurso de tipo parentético (elementos como *en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra parte, por consiguiente, sin embargo, no obstante, además, incluso*, etc.). Los marcadores parentéticos van seguidos de coma cuando aparecen al principio de una oración:

(8)

a. Igualmente, es irrelevante a efectos de la tipificación de la amenaza, que quién amenaza tenga efectivamente la voluntad o no de llevar a cabo el mal conminado; (...); por ello, aparece como especialmente significativo que (...).

[SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, 1ª]

b. Así, su autor, miembro destacado de la banda terrorista ETA, en el artículo denominado " El Escudo"(...).

[SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, 1ª]

Y van delimitados por comas cuando se insertan en el interior de una oración:

(9)

a. El bien jurídico protegido, es, sin duda, la libertad, considerada en su faceta más subjetiva y psicológica, (...).

[SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, 1ª]

b. Es preciso, por tanto, valorar la ocasión en la que se profiere, (...).

[SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, 1ª]

2.1.4. Ausencia de coma para marcar cambios de orden

El orden no marcado de la oración en español es [sujeto + verbo + complementos/oración subordinada adverbial]. Cuando se altera este orden, generalmente por anteposición de algún elemento postverbal, este cambio de orden se señala con una coma.

En las sentencias analizadas, es frecuente que no señalen adecuadamente los cambios de orden de los componentes oracionales que hemos mencionado. Así, los complementos

verbales (10a-b) o las oraciones subordinadas adverbiales que se colocan encabezando la oración (10c-d) tienen que ir delimitadas por una coma; cuando estos elementos aparecen en medio de la oración, deben ir delimitados por comas (11). En los ejemplos siguientes, se subraya el elemento que ha cambiado su posición no marcado y se repone en rojo la coma ausente:

(10)

a. En la cuantificación del daño, se aplica el mismo principio de reparación íntegra del daño causado.

[TSJC 37/2009, Barcelona, Fundamentos, 1^º]

b. El baremo de la Ley 30/95 ya calcula dentro de sus tablas el perjuicio económico sufrido por el lesionado en concepto de lucro cesante, como expresamente reconoce el art. 1.2. Sobre la constitucionalidad de tal doctrina, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sentencia de 3 de marzo de 2003, por lo que considera conforme a Derecho la sentencia de la Audiencia que ahora se recurre.

[TSJC 37/2009, Barcelona, Fundamentos, 1^º]

c. Para la votación y fallo del recurso por el Pleno de la Sala, se fijó el día 15 de julio de 2009, (...).

[TSJC 37/2009, Barcelona, Fundamentos, 1^º]

d. Que no obstante la protección constitucional del prestigio profesional como una de las manifestaciones del derecho al honor, cualquier crítica a la pericia profesional no puede ser considerada automáticamente como un atentado a la honorabilidad personal, (...).

[SJPI 5/2010, Fundamentos, 2^º]

(11)

a. Se entiende que, en este caso, el importe de la indemnización vendrá determinado por los perjuicios efectivamente probados, si son superiores.

[TSJC 37/2009, Barcelona, Fundamentos, 1^º]

b. La acusación pública, al modificar sus conclusiones provisionales, calificó los hechos como un delito de amenazas (...).

[SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, 3^º]

2.1.5. Usos raros o inadecuados de la coma

a) Uso de coma para marcar límite oracional

La coma, como hemos visto hasta ahora, se utiliza para delimitar unidades menores que la oración. Por ello, el uso de este signo para delimitar oraciones en lugar del punto y coma (;) o punto y seguido (.) no es adecuado, precisamente porque con la coma se indica que la estructura marcada con este signo no se ha completado. En el siguiente ejemplo, la coma separa dos oraciones independientes sintácticamente:

(12)

Las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano se le conceden por mitad a ambos padres, sin hacer mayores especificaciones, dejando a los mismos la posibilidad de llegar a acuerdos en esta materia en función de sus circunstancias, **en caso de discrepancia entre los padres los años pares elige la madre y los impares el padre.**

[SJPI 15/2008, Fundamentos, 3^º]

Puesto que entre ambas oraciones existe una fuerte relación informativa, estas podrían haberse separado mediante un punto y coma; o, dada la longitud de las dos oraciones, incluso mejor con un punto y seguido, tal como muestra el ejemplo alternativo que proponemos a continuación (12bis). En cualquier caso, la coma constituye en casos como este un signo insuficiente y claramente inadecuado:

(12bis)

Las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano se le conceden por mitad a ambos padres, sin hacer mayores especificaciones, dejando a los mismos la posibilidad de llegar a acuerdos en esta materia en función de sus circunstancias. **En caso de discrepancia** entre los padres, los años pares elige la madre; y los impares, el padre.

Todo lo contrario ocurre, en cambio, en el siguiente ejemplo, en el que se utiliza un punto y seguido para separar un elemento de carácter explicativo que refuerza el argumento inmediatamente previo. En este caso, la puntuación correcta es la coma:

(13)

PRIMERO. Principiando por el recurso de apelación articulado por la representación procesal de Andrés, al que se adhirió Vicenta y vertebrado aquel en denuncia de infracción por indebida aplicación del *artículo 468/2 del Código Penal*, ha de volverse a reiterar por esta Sala el criterio sostenido por la misma en *sentencias tales como las de fecha 29 de Marzo y 10 de Abril de 2.007 y 21 de Octubre de 2.008*: “En el delito de quebrantamiento de condena el bien jurídico protegido por el *art. 468 del vigente Código Penal* es la efectividad y el obligado acatamiento de las resoluciones judiciales o lo que es lo mismo el principio de autoridad. Bien jurídico que, desde luego, no puede quedar empañado o enervado por el consentimiento de la mujer (*Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2.007*, por citar la más reciente), de tal suerte que el asentimiento o consentimiento de la ofendida para reanudar la convivencia ni elimina la antijuricidad del hecho ni priva de eficacia a la condena.

[SAP CR 701/2009]

b) Uso de coma para separar elementos complejos en una enumeración

Cuando los elementos de una enumeración están constituidos por oraciones complejas que, a su vez, presentan puntuación interna, **es necesario** utilizar un signo de puntuación más fuerte que la coma para delimitar adecuadamente dónde acaba un elemento de la enumeración y dónde empieza el siguiente. El uso de comas en estos casos, como muestra el ejemplo (14), complica enormemente la lectura y, en consecuencia, la comprensión, ya que el texto se presenta como un bloque uniforme y confuso, en el que la información se sucede en un mismo nivel de interpretación y en el que es imposible identificar de inmediato los distintos elementos de la enumeración:

(14)

Tras la practica de la prueba en el acto del juicio oral, se ha descartado que un fallo eléctrico pueda poner el semáforo en verde; (...); *también se ha descartado, tras la practica de la prueba en el acto del juicio oral, que alguna persona ajena a la Estación hubiera entrado en el Gabinete de Circulación de la misma y hubiera accionado los mandos de cambio del semáforo o que se hubiera accionado él sólo, por cuatro evidentes razones: primera*, porque -según se ha constatado tras presenciar la practica de la prueba- no se vio por el lugar de los hechos en los momentos previos y coetáneos a la intervención del factor en relación con el TALGO 226, a ninguna persona ajena -como ha declarado incluso el propio factor-, **segunda**, pues accionar dicho semáforo no es operación sencilla para un profano, dado que han de activarse dos botones al tiempo, de forma simultánea o sucesivamente con ambas manos, y alejados entre sí, lo cual entraña una elevada dificultad para un profano, **tercera**, dichos botones se activan en stick -es decir, pulsándoles hacia dentro, de modo que a pesar de desaparecer las causas que motivaron su cierre, no vuelven a abrirse hasta que no se efectúa un nuevo mando sobre ellos-, y, por tanto, su activación ha de obedecer a un acto físico que entrañe cierta fuerza, siendo imposible que se activen solos, pues para ello es preciso vencer la resistencia de una especie de muelle que tienen dichos botones y que les mantienen en su posición, y **cuarta**, tras el siniestro se verificó el correcto funcionamiento del cuadro de mandos de la Estación de Chinchilla entonces existente -en la actualidad se ha sustituido por un ordenador, debido al avance de las nuevas tecnologías-, y se pudo comprobar que funcionaba perfectamente el sistema en stick a que nos hemos referido (vid informe del perito Don. Juan Alberto); en el mismo sentido, el testigo Sr. Cornelio, factor de Circulación que relevó al Sr. Valentín, en el mismo día de autos, declaró sobre el funcionamiento del cuadro de mando, que la activación de la señal de salida S2/4, que se realiza con dos botones, el día del relevo -es decir, inmediatamente después del accidente-, no estaba averiada (a preguntas del Letrado Sr. Santos, sesión de 24 de abril de 2004).

[SJP 19/2006, Albacete, Fundamentos, 1ª]

En enumeraciones complejas como la del ejemplo anterior, la enumeración habría ganado en legibilidad presentando cada una de las “razones” anunciadas en forma de lista, haciendo que cada una de las razones ocupara un párrafo numerado independiente. En cuanto a la puntuación de cada elemento de la enumeración, dado que estos son complejos y tienen puntuación interna, sería recomendable comenzar cada uno de ellos con mayúscula y separarlos mediante un punto y aparte. De esta manera, se conseguiría (i) una visualización inmediata de cada elemento enumerado y (ii) la descongestión del párrafo:

(14bis)

Tras la practica de la prueba en el acto del juicio oral, se ha descartado que un fallo eléctrico pueda poner el semáforo en verde; (...); *también se ha descartado, tras la practica de la prueba en el acto del juicio oral, que alguna persona ajena a la Estación hubiera entrado en el Gabinete de Circulación de la misma y hubiera accionado los mandos de cambio del semáforo o que se hubiera accionado él sólo, por cuatro evidentes razones:*

1) Según se ha constatado tras presenciar la práctica de la prueba, no se vio a ninguna persona ajena por el lugar de los hechos en los momentos previos y coetáneos a la intervención del factor en relación con el TALGO 226, como ha declarado incluso el propio factor.

2) Accionar dicho semáforo no es una operación sencilla para un profano, dado que han de activarse dos botones al tiempo, de forma simultánea o sucesivamente con ambas manos, y alejados entre sí, lo cual entraña una elevada dificultad para un profano.

3) Dichos botones se activan en stick, es decir, pulsándolos hacia dentro, de modo que a pesar de desaparecer las causas que motivaron su cierre, no vuelven a abrirse hasta que no se efectúa un nuevo mando sobre ellos; por tanto, su activación ha de obedecer a un acto físico que entraña cierta fuerza, siendo imposible que se activen solos, pues para ello es preciso vencer la resistencia de una especie de muelle que tienen dichos botones y que **los** mantienen en su posición.

4) Tras el siniestro, se verificó el correcto funcionamiento del entonces existente cuadro de mandos de la Estación de Chinchilla -en la actualidad se ha sustituido por un ordenador, debido al avance de las nuevas tecnologías-, y se pudo comprobar que funcionaba perfectamente el sistema en stick a que nos hemos referido (vid informe del perito Don. Juan Alberto). En el mismo sentido declaró el testigo Sr. Cornelio, factor de Circulación que relevó al Sr. Valentín en el mismo día de autos, a preguntas del Letrado Sr. Santos sobre el funcionamiento del cuadro de mando (sesión de 24 de abril de 2004); según este testigo, la activación de la señal de salida S2/4, que se realiza con dos botones, no estaba averiada el día del relevo, es decir, inmediatamente después del accidente.

c) Coma para introducir citas textuales

Según la Academia, las citas textuales se introducen mediante los dos puntos (:). Por ello, cuando se reproducen las palabras de otro tras un verbo de dicción, estas no pueden separarse del verbo que las introduce con una coma, signo que resulta completamente inadecuado para este fin (la coma indica dependencia sintáctica del segmento siguiente respecto de otro segmento previo).

(15)

El actor impugna en el escrito de preparación de recurso “la valoración de la incapacidad y perjuicios económicos causados en concepto de lucro cesante”, solicitando por este concepto la cantidad de 148 516 #, partida ésta que no cabe incluir conforme a lo dispuesto en el artículo 1.2 LRCSCVM que dice, “los daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales, se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de la presente ley”.

[WLES 25/03/2010, Madrid, Antecedentes, 4ª]

3. EL PUNTO Y COMA

El punto y coma es, sin duda, uno de los signos básicos de puntuación que peor se utiliza en general, pese a que su uso es, en principio, mucho más sencillo que el de la coma. Parte de la dificultad del uso de este signo estriba, principalmente, en que no suele estar muy claro el alcance de su función delimitadora; o, dicho de otro modo, el mal uso de este signo se deriva de que no se sabe muy bien para qué sirve.

El punto y coma, igual que la coma, los dos puntos y el punto, sirve también para marcar el límite entre unidades sintácticas. El punto y coma delimita generalmente unidades sintácticas independientes, yuxtapuestas, que mantienen entre sí una relación fuerte desde el punto de vista informativo. Sin embargo, este signo no especifica el tipo de relación semántica que se establece entre los segmentos que une, a diferencia de la coma y los dos puntos, que establecen un tipo de relación más clara⁴¹. En este sentido, el punto y coma es similar al punto y seguido, lo que explica la mayor tendencia al uso de este signo en lugar del primero.

De acuerdo con la Academia, el punto y coma se puede emplear en estos casos:

⁴¹ Como hemos visto respecto de la coma, este signo establece una relación de subordinación entre el elemento que introduce o cierra y otro elemento que está en un nivel sintáctico más alto. Los dos puntos, por su parte, establecen una relación de subordinación informativa del segmento que introducen, que se interpretará como una explicación o una aclaración, una consecuencia, una causa o un resumen del segmento anterior (esto es, de la información previa a los dos puntos). Para mayor detalle sobre el uso y significado de estos signos, véase Figueras (2003).

- a) Para delimitar unidades sintácticas independientes y yuxtapuestas, especialmente cuando estas son complejas y tienen comas en su interior.
- b) Para separar una oración subordinada adverbial impropia (esto es, una oración adversativa, causal, consecutiva, condicional, consecutiva o final) de su oración principal, especialmente cuando estas oraciones subordinadas son largas.
- c) Para delimitar los elementos complejos de una enumeración, especialmente si estos presentan puntuación interna.

Salvo en el caso de las enumeraciones complejas, en las que el uso del punto y coma se hace imprescindible para delimitar cada uno de los elementos que la componen, en los supuestos a) y b) es mucho más frecuente el uso del punto y seguido y la coma, respectivamente.

Las sentencias analizadas destacan por un frecuente uso incorrecto o raro del punto y coma. En la mayoría de los casos, la incorrección radica en la ausencia de este signo para separar elementos complejos con puntuación interna, contextos en los que el uso de una coma es claramente antinormativo y el uso de un punto es inadecuado. También hemos encontrado casos en los que se utiliza incorrectamente el punto y coma en lugar de los dos puntos para introducir citas literales, enumeraciones o secuencias explicativas.

3.1. Principales problemas relacionados con el uso del punto y coma

3.1.1. Punto y coma para separar oraciones

Por lo general, en las sentencias analizadas, el punto y coma se asocia con la necesidad de marcar un límite entre partes de una oración o de un párrafo que guardan una estrecha relación entre sí y que, al mismo tiempo, presentan un cierto grado de independencia. De hecho, el punto y coma se emplea muchas veces para vincular distintas partes complejas o extensas de una secuencia narrativa o argumentativa dentro de un mismo párrafo. En este sentido, el uso de este signo responde a la necesidad discursiva del redactor de la sentencia de marcar que las unidades separadas por el punto y coma constituyen una sola unidad de sentido y están unidas entre sí por el mismo hilo discursivo.

Este es, desde luego, uno de los usos normativos prototípicos de este signo, como hemos señalado arriba. Sin embargo, suele abusarse del punto y coma como recurso de ilación sintáctica para seguir añadiendo información dentro de un mismo párrafo⁴². El resultado suele ser, como muestra el siguiente ejemplo, una sarta de oraciones complejas yuxtapuestas que alargan innecesariamente el párrafo y dificultan enormemente la lectura y la comprensión:

(16)

19) El semáforo o señal de salida S2/4 es perfectamente visible desde el Gabinete de Circulación de la estación de Chinchilla, como se ha podido comprobar “de visu” por el tribunal, tanto en las fotografías que se han ido exhibiendo en las sesiones del juicio oral por el Ministerio Fiscal, como en la percepción directa del tribunal recibida en el día de la inspección ocular practicada -a presencia de las partes-, en la mañana del día 25 de abril de 2006; una mínima actuación diligente del factor evidencia que, antes de cruzar las vías, tiene que mirar a la señal S2/4, pues lo tiene en el lado de enfrente al Gabinete, por delante del inicio del andén de la vía 4, y la cabeza del TALGO no impide su visión en absoluto, pues en el caso de autos, es un hecho admitido que el TALGO al detenerse no había rebasado el inicio de dicho andén; además, momentos antes de salir hacia la cabeza del TALGO, cuando se paró el mismo, tuvo que comprobar visualmente el semáforo, para percibir que estaba en rojo, pues de otro modo el TALGO no hubiera parado (para parar el TALGO era suficiente con la señal S2/4 en rojo (*artículo 217 RGCTrenes [Reglamento General de Circulación para tráfico ferroviario]*: parada), y la señal previa -de avanzada-, en intermitente (*artículo 214 RGCTrenes*: anuncio de parada inmediata), de modo que, en principio, no se precisa del banderín extendido para parar al TALGO (en similar sentido, declaraciones del testigo Gaspar -factor de circulación de Navajuelos, el día de autos-, que a preguntas del Letrado Sr. Santos, vino a contestar que para parar el tren no es necesario el banderín, pues al estar la señal de salida en rojo (el semáforo), con eso es suficiente -vid acta de juicio oral del 20 de abril de 2006-); en cambio, el acusado, a preguntas del fiscal (sesión de 4 de abril de 2006), declaró que al TALGO 226 le presentó el banderín desenrollado -para

⁴² Véase, a este respecto, el apartado 1.1.1 del capítulo dedicado a las patologías en la construcción del párrafo.

que parará-, cuando hemos visto que tal actuación no es imprescindible cuando el semáforo está en rojo, como también afirmó el acusado que estaba cuando paró el TALGO 226. Mas abajo trataremos sobre la utilidad de esa versión del acusado [en concreto en el apartado 12º)].

[SJP 19/2006, Albacete, Fundamentos, 1º]

a) Punto y coma para separar elementos complejos de una enumeración

Tal como hemos señalado arriba, el punto y coma es un signo adecuado para separar elementos complejos con puntuación interna de una enumeración. En estos casos, en los que los elementos de la enumeración suelen presentar comas para separar incisos o cláusulas subordinadas, el uso de una coma para separar cada miembro de la enumeración es claramente inadecuado, ya que esta coma delimitadora se confunde con las otras comas internas del segmento enumerativo. Así, en un ejemplo como (14), que repetimos en (17), el uso de un punto y coma (en rojo en el ejemplo) entre las distintas oraciones complejas que conforman la secuencia enumerativa facilitaría mucho tanto la legibilidad de este período como su comprensión.

(17)

Tras la practica de la prueba en el acto del juicio oral, se ha descartado que un fallo eléctrico pueda poner el semáforo en verde; (...); *también se ha descartado, tras la practica de la prueba en el acto del juicio oral, que alguna persona ajena a la Estación hubiera entrado en el Gabinete de Circulación de la misma y hubiera accionado los mandos de cambio del semáforo o que se hubiera accionado él sólo, por cuatro evidentes razones: primera*, porque -según se ha constatado tras presenciar la practica de la prueba- no se vio por el lugar de los hechos en los momentos previos y coetáneos a la intervención del factor en relación con el TALGO 226, a ninguna persona ajena -como ha declarado incluso el propio factor-; *segunda*, pues accionar dicho semáforo no es operación sencilla para un profano, dado que han de activarse dos botones al tiempo, de forma simultánea o sucesivamente con ambas manos, y alejados entre sí, lo cual entraña una elevada dificultad para un profano; *tercera*, dichos botones se activan en stick -es decir, pulsándoles hacia dentro, de modo que a pesar de desaparecer las causas que motivaron su cierre, no vuelven a abrirse hasta que no se efectúa un nuevo mando sobre ellos-, y, por tanto, su activación ha de obedecer a un acto físico que entraña cierta fuerza, siendo imposible que se activen solos, pues para ello es preciso vencer la resistencia de una especie de muelle que tienen dichos botones y que les mantienen en su posición; y *cuarta*, tras el siniestro se verificó el correcto funcionamiento del cuadro de mandos de la Estación de Chinchilla entonces existente (...).

[SJP 19/2006, Albacete, Fundamentos, 1º]

En el ejemplo anterior, dado que los miembros de la enumeración están vinculados mutuamente por una relación de inclusión respecto del todo que supone la enumeración y mantienen entre sí una relación de solidaridad informativa, el uso de un punto y seguido puede ser, tal vez, un signo demasiado fuerte, salvo que la enumeración se estructure de forma vertical mediante elementos independientes (ver ejemplo 14bis arriba).

El ejemplo siguiente (18) muestra un caso de buena práctica en la puntuación de elementos complejos de una enumeración (aunque presenta otro tipo de problemas sintácticos, como anacoluto en la presentación de los puntos 2º y 3º):

(18)

Para la configuración del delito de coacciones son necesarios los siguientes elementos: 1º) Una conducta violenta de contenido material "vis" física, o intimidativa "vis" compulsiva, ejercida contra el sujeto o sujetos pasivos del delito, bien de modo directo o indirecto a través de cosas, e incluso de terceras personas; 2º) cuyo "modus operandi" va encaminado como resultado a impedir hacer lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que no se quiera, sea justo o injusto; 3º) cuya conducta ha de tener la intensidad de violencia necesaria para ser delito, pues de carecer de tal intensidad podría constituir falta del artículo 620 del Código Penal (STS 1181/97, de 3 de octubre); 4º) que exista el ánimo tendencial consistente en un deseo de restringir la libertad ajena como se deriva de los verbos "impedir" y "compeler"; y 5º) una ilicitud del acto, examinado desde la normativa de la convivencia social y la jurídica que preside o debe regular la actividad del agente (STS 868/2001, de 18 de mayo) el cual no ha de estar legitimamente autorizado para emplear violencia o intimidación (STS 131/2000, de 2 de febrero).

[SAN 5247/2006, Madrid, Fundamentos, 3º]

Con todo, igual que en el ejemplo anterior (16), una distribución vertical de los elementos enumerados permitiría una lectura más fluida y, por extensión, una interpretación más inmediata.

3.2. Usos raros o inadecuados del punto y coma

3.2.1. Punto y coma para introducir una enumeración

Como hemos apuntado antes, la función del punto y coma es marcar un límite clausal u oracional, al mismo tiempo que se indica que entre los elementos separados existe una estrecha vinculación sintáctica y/o semántica (por ejemplo, entre una oración principal y una subordinada adverbial). Sin embargo, como muestran los ejemplos siguientes, en las sentencias analizadas no es infrecuente el uso de punto y coma (en rojo en los ejemplos) para introducir una enumeración, en lugar de los dos puntos:

(19)

Con claridad expositiva, nos dice la *sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2008*, citando doctrina jurisprudencial anterior, que la garantía que el derecho a la presunción de inocencia representa viene a exigir; a) que concurra una mínima actividad probatoria, de manera que se constate la condena se base en pruebas de cargo, suficientes y decisivas; b) que su desarrollo, obtención y práctica, se efectúe con las garantías necesarias, y que sea practicada normalmente en el acto del juicio oral, salvo las excepciones constitucionalmente admisibles; c) (...).

[SJP 10/2009]

(20)

(...). Quiere decir, con toda claridad, dos cosas; que lo que vincula al orden social es el tema fáctico solamente y su calificación como infracción, no la consecuencia jurídica de la responsabilidad, que es de competencia del orden social y puede no presentarse (por eso la norma dice "en su caso", es decir, no siempre); y que el recargo por falta de medidas de seguridad es algo ajeno a esta ley.(...).

[SJS 4/2007, Murcia, Fundamentos, 3º]

LA SUBORDINACIÓN

1. INTRODUCCIÓN. LA SUBORDINACIÓN EN LOS TEXTOS JURÍDICOS

La oración -o enunciado⁴³- es la unidad comunicativa mínima en la construcción de textos escritos: las oraciones expresan los argumentos -premisas y conclusiones de una argumentación- o sucesos⁴⁴ -unidades constitutivas de una narración o relato- que componen el tema desarrollado en el párrafo.

Dado el carácter básico de la oración como unidad textual, la correcta construcción y delimitación de las oraciones que componen un párrafo constituye una de las habilidades técnicas que un profesional debe dominar para redactar textos eficaces. Antes de pasar a describir los principales problemas en la construcción de oraciones complejas en los textos jurídicos, es necesario introducir sucintamente los conceptos de oración y oración subordinada.

El esquema oracional básico es la oración simple, formada por un verbo conjugado, que expresa un evento situado en el tiempo, y una serie de sintagmas (nominales, preposicionales, adverbiales, adjetivos) que expresan los participantes y las circunstancias que intervienen en el evento descrito. Así, el suceso reproducido en (1) es un ejemplo de oración simple: está compuesta por un verbo conjugado que expresa un evento (*comparecieron*), los participantes de dicho evento (*los Procuradores y Letrados de la parte demandante y del codemandado Sr. Juan María*) y las circunstancias que enmarcan dicho evento, en este caso el tiempo (*el día señalado*).

(1)

El día señalado, **comparecieron** los Procuradores y Letrados de la parte demandante y del codemandado Sr. Juan María.

[SJPI 53/2006. Gijón: Antecedentes, tercero]

43 Por cuestiones de claridad expositiva, empleamos el término *oración* como sinónimo de *enunciado*.

44 Las oraciones no expresan únicamente *argumentos* o *sucesos*; nos limitamos a estas dos posibilidades debido a que la argumentación y la narración son las dos secuencias textuales que se emplean con mayor frecuencia en la sentencia jurídica (véanse los capítulos 3 y 2, respectivamente).

Ahora bien, la expresión de determinados argumentos y sucesos puede requerir poner en relación dos o más eventos, de modo que uno de los eventos actúa como evento principal cuyo significado queda precisado por eventos secundarios. Es lo que sucede en la última oración del fragmento (2), procedente de una sentencia que resuelve un recurso de apelación de una incapacitación. El argumento con el que concluye el párrafo está formado por dos eventos: (i) el evento principal, que constituye el argumento propiamente ('Dña. Marí Luz ha ejercido de tutora de forma eficaz en el ámbito personal y patrimonial') y (ii) un evento secundario, que refuerza el evento principal ('pues no consta que se hayan producido problemas de conducta o económicos').

(2)

Como ya se ha reconocido con el nombramiento de Dña. Marí Luz, en los procedimientos de incapacitación de los otros dos hermanos, D. Joseba Antonio y Dña. Edurne, que también viven en el Caserío familiar, y a la vista de la prueba practicada en el acto de la vista, se concluye que la hermana Dña. Marí Luz, además de estar dispuesta a ejercer la función de tutora, es quien de hecho la ha venido ejerciendo, ocupándose de su hermana Dña. Beatriz, tanto en su aspecto personal como en el patrimonial, pues es quien se encarga de controlar los ingresos y los gastos de la familia. **[En ambos ámbitos lo ha hecho de forma eficaz EVENTO PRINCIPAL], [pues no consta [que] se hayan producido, (sic) ni episodios de descontrol ni excesos en la administración de sus bienes EVENTO SECUNDARIO].**

[SAP BI 243/2008. Bilbao: Fundamentos, tercero]

En el ejemplo anterior, el segmento "En ambos ámbitos lo ha hecho de forma eficaz" constituye una oración principal y el segmento "pues no consta [que] se hayan producido ni episodios de descontrol ni excesos en la administración de sus bienes" es una oración subordinada causal. La función de las oraciones subordinadas es la de introducir informaciones de segundo plano con respecto al argumento o suceso expresado en la oración principal⁴⁵.

Como ha sido señalado repetidamente (Alcaraz y Hughes 2002: 105-108; Campos 2007: 157), el discurso jurídico español se caracteriza por una elevada frecuencia de uso de la subordinación, en comparación con la lengua oral espontánea o con otros tipos de discursos escritos, como el periodístico. Esta elevada frecuencia de la subordinación responde a dos motivaciones interrelacionadas. Por una parte, los jueces deben ser precisos en cuanto al alcance de sus afirmaciones y el detalle de los sucesos reflejados en el texto de la sentencia. Asimismo, los sucesos y argumentos que componen el texto de la sentencia deben incorporar múltiples fuentes (la legislación, la jurisprudencia, la doctrina, los escritos de las partes, las declaraciones de las vistas orales, etc.). Estos dos rasgos favorecen un estilo oracional complejo, con frecuentes incisos y aclaraciones.

Por otra parte, el abundante empleo de la subordinación obedece también a cuestiones de tradición discursiva. Como se sabe, el discurso jurídico es heredero de una rica y antigua tradición textual: los textos jurídicos se cuentan entre los más antiguos de la historia del español y son, asimismo, los que menores cambios han experimentado con el paso del tiempo. Entre los rasgos que caracterizan este discurso sobresale la preferencia por la subordinación como forma de expresión, frente a otros modelos textuales basados en periodos más breves y mayor división paragrafática. La elección de un modelo de redacción de sentencia no es totalmente libre; por el contrario, con frecuencia los jueces reproducen los patrones textuales que han recibido de jueces en activo, que hicieron lo propio en los inicios de su andadura profesional.

2. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS ORACIONES SUBORDINADAS EN LOS DOCUMENTOS JURÍDICOS

Como se ha señalado, la subordinación es una herramienta que permite al juez precisar, ampliar o matizar la expresión de argumentos y sucesos en la sentencia. Ahora bien, ciertos

⁴⁵ Se trata de una caracterización genérica, referida especialmente a las oraciones subordinadas relativas especificativas y adverbiales (propias e impropias), que son las que mayores problemas plantean en los textos jurídicos. Quedan fuera de esta caracterización las oraciones subordinadas sustantivas, que, por lo general, se emplean adecuadamente en los textos jurídicos.

empleos de la subordinación pueden conducir a la situación contraria: un uso inadecuado de la subordinación puede dificultar la comprensión de la sentencia. Es lo que sucede en el ejemplo (3). Para justificar la afirmación inicial (“sobre dicho particular nos encontramos con que en ninguno de los informes obrantes se nos indica que la técnica utilizada fuera incorrecta o que se hubiera seguido una actuación no acomodada a la *lex artis ad hoc*”), el juez recurre a una oración subordinada causal (encabezada por *pues*), que, a su vez, alberga once oraciones subordinadas. En contra de lo que podría esperarse, el empleo de oraciones subordinadas para precisar la significación de los enunciados tiene el efecto contrario al perseguido: el fragmento analizado resulta muy costoso de leer.

(3)

Pues bien, sobre dicho particular nos encontramos con que en ninguno de los informes obrantes se nos indica que la técnica utilizada fuera incorrecta o que se hubiera seguido una actuación no acomodada a la *lex artis ad hoc* [**pues** en el informe técnico de evaluación elaborado por el médico inspector nada se apunta sobre dicho particular como tampoco en el informe elaborado por los facultativos del servicio de anestesiología [(**si bien** en este caso podría albergarse lógicas reticencias en relación a su contenido [**al ser** el propio servicio en el que supuestamente se causase el daño reclamado **SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL**]) **SUBORDINADA ADVERBIAL CONCESIVA**] y tampoco se encuentra base [**para** entender [(que se haya producido infracción de *lex artis* en el informe del especialista en anestesiología y reanimación [**elaborado** por la Dra. Alsina **SUBORDINADA DE PARTICIPIO/ COMPLEMENTO DE NOMBRE**] **SUBORDINADA SUSTANTIVA COMPLETIVA**] **SUBORDINADA ADVERBIAL FINAL**] [**pues** [**aun cuando** si (sic) recoge que pudiera efectivamente haberse afectado el nervio radial **SUBORDINADA ADVERBIAL CONCESIVA**] también recoge expresamente [**que** la actitud del anestesiólogo fue la correcta **SUBORDINADA SUSTANTIVA / COMPLETIVA**], [**que** colocó la vía venosa para la realización del procedimiento **SUBORDINADA SUSTANTIVA / COMPLETIVA**] y [**que** se habían seguido los protocolos de punción venosa **SUBORDINADA SUSTANTIVA / COMPLETIVA**] [**siendo** la posible neuropraxia del nervio radial tras acceso intravenosos descrito en la literatura en forma de casos aislados **SUBORDINADA DE GERUNDIO / ¿COMPLETIVA?**] y [**estimando** dicho perito que se trataría de una lesión inevitable **SUBORDINADA DE GERUNDIO / ¿COMPLETIVA?**] **SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL**] **SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL**].

[SJCA 2231/2007, Fundamentos de derecho, tercero]

El abuso de la subordinación es, junto con el manejo inadecuado de las expresiones anafóricas, uno de los principales problemas lingüísticos de la sentencia jurídica. Los usos inadecuados de la subordinación se explican por dos motivos: (i) el empleo de la subordinación como recurso de construcción paragrafíca y (ii) el empleo de mecanismos de subordinación no estándar o antinormativos.

3. LA SUBORDINACIÓN COMO PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PARAGRÁFICA

El empleo de la subordinación –y, en menor medida, la coordinación– como mecanismos de construcción de párrafos da lugar a dos tipos de problemas discursivos. El primero es la redacción de párrafos formados por una sola oración, en los que la información principal y la secundaria no se delimitan con claridad. El segundo problema, de menor importancia para la comprensión, es la segmentación inadecuada de oraciones con marcas de subordinación, que se presentan desgajadas –separadas mediante puntuación fuerte– de una frase principal. A continuación, abordamos estos problemas.

3.1. Dificultad en la identificación de la información principal

El empleo de la subordinación en los textos jurídicos está estrechamente relacionado con el escaso dominio de la unidad párrafo. Los jueces recurren habitualmente a la subordinación como mecanismo de empaquetamiento de información. En las sentencias, con mucha frecuencia, las informaciones que desarrollan un mismo bloque informativo están unidas mediante subordinación, cuando generalmente resultaría más apropiado distribuir las mismas informaciones en oraciones independientes dentro de un párrafo. Es lo que sucede en la siguiente argumentación, que el juez ha redactado como una única oración, compuesta

por oraciones subordinadas y coordinadas, que tienen la entidad informativa para funcionar como oraciones independientes:

(4)

Se sostiene por la parte actora que el sindicato USCA ha sido objeto de discriminación, pero para que pueda apreciarse la existencia de esta situación, lo primero que se precisa es que se fije un término comparativo, estableciendo respecto a qué o a quien se discrimina, lo que omite la actora ya que se limita a referirse a que el comportamiento de la demandada constituye una exclusión y un rechazo de esta entidad sindical, con el "propósito de entorpecer y desprestigiar la actividad sindical de USCA", y ello resulta sumamente difícil teniendo en cuenta que más del 95% de los controladores aéreos de AENA están afiliados a este sindicato.

[SAN 95/2009, Fundamentos, tercero]

A continuación ofrecemos una propuesta de revisión del fragmento (4bis). En lugar de emplear mecanismos de subordinación (*lo que*, gerundios) y coordinación oracionales (*y*, *pero*), resulta más claro y eficaz separar los argumentos que constituyen la argumentación en enunciados independientes unidos mediante conectores que expliciten las relaciones lógicas existentes entre los argumentos (*no obstante*, *para ello*, *sin embargo*).

(4bis)

Se sostiene por la parte actora que el sindicato USCA ha sido objeto de discriminación. **No obstante**, para que pueda apreciarse la existencia de esta situación, lo primero que se precisa es que se fije un término comparativo. **Para ello**, hay que establecer respecto a qué o a quién se discrimina. **Sin embargo**, la actora omite un término de comparación, ya que se limita a referirse a que el comportamiento de la demandada constituye una exclusión y un rechazo de esta entidad sindical, con el "propósito de entorpecer y desprestigiar la actividad sindical de USCA". **Ello** resulta sumamente difícil [de aceptar] teniendo en cuenta que más del 95% de los controladores aéreos de AENA están afiliados a este sindicato.

Una posible forma de evitar problemas como el anterior es evitar, en la medida de lo posible encadenar más de dos oraciones subordinadas que expresen relaciones lógicas, como la causa (*porque*, *puesto que*, *dado que*, etc.), la consecuencia (*de modo que*, *así que*, etc.), la condición (*si*, *a no ser que*, *en caso de que*, etc.), la concesión (*aunque*, *a pesar de que*, *si bien*, etc.) y la finalidad (*para que*, *a fin de que*, etc.). La acumulación de subordinadas de este tipo dificulta el seguimiento del hilo argumentativo. En estos casos, resulta recomendable dividir la información en distintas oraciones independientes dentro del mismo párrafo.

114

3.2. Omisión de la oración principal

El segundo problema de emplear las marcas de subordinación como mecanismo de unión de oraciones dentro de un párrafo es el empleo de oraciones subordinadas sin una oración principal. En efecto, en los textos jurídicos es frecuente encontrar oraciones con marcas de subordinación (formas no personales del verbo o nexos subordinantes) delimitadas por puntos, sin que estén acompañadas de una oración principal. Es lo que sucede en los siguientes ejemplos.

El ejemplo (5) contiene una oración de gerundio tras un punto y seguido: no se trata tan solo de un error gramatical: el empleo del gerundio dificulta la comprensión de quién es el sujeto de la acción (¿quién añade?), puesto que esta forma verbal carece de marcas de persona⁴⁶.

(5)

Por el Procurador mencionado en la representación ostentada, se formuló demanda de divorcio contencioso, en la que se hizo constar que las partes contrajeron matrimonio civil el día 21 de Junio de 2001 inscrito en el Registro Civil, según consta en la Certificación aportada, como documento n°1 de la demanda. **Añadiendo que de dicho matrimonio ha nacido y vive una hija menor de edad en la actualidad llamada Diana, conforme al documento n°2 de la demanda, consistente en el certificado literal de nacimiento, habiendo nacido en fecha 1 de Julio de 2003.**

[SJPI 15/2008. Girona: Antecedentes de hecho, primero]

⁴⁶ Acerca de las dificultades para la recuperación del agente, véase apartado §5.4.

El ejemplo (6), por su parte, contiene una oración encabezada por la conjunción que sin un verbo principal. De nuevo, el problema gramatical tiene consecuencias en la comprensión del significado: la ausencia del verbo principal impide saber con precisión si la información se atribuye a la concursada o al propio juez⁴⁷.

(6)

La concursada señala que se trata de créditos contingentes al estar sometidos a condición suspensiva porque depende de si a su vencimiento es atendido por la obligada cambiaria, de manera que hasta que no se produzca su impago no existirá acción alguna frente al avalista cambiario. **Que** además es un crédito litigioso porque ese crédito ha sido comunicado en el concurso del principal, siendo clasificado como subordinado.

[SJM 14/2009. Madrid: Fundamentos, primero]

Para evitar los problemas de comprensión señalados en los ejemplos (5) y (6), es necesario que las oraciones subordinadas vayan acompañadas de una oración principal que contenga un verbo conjugado, que ofrezca la información necesaria de persona y tiempo. Es lo que se propone en los ejemplos (5bis) y (6bis):

(5bis)

La demanda añade que de dicho matrimonio ha nacido y vive una hija menor de edad en la actualidad llamada Diana, **nacida** el 1 de julio de 2003 (conforme al documento nº2 de la demanda, consistente en el certificado literal de nacimiento).

(6bis)

La concursada señala que se trata de créditos contingentes al estar sometidos a condición suspensiva porque depende de si a su vencimiento es atendido por la obligada cambiaria, de manera que hasta que no se produzca su impago no existirá acción alguna frente al avalista cambiario. **La concursada señala que**, además, se trata de un crédito litigioso porque ese crédito ha sido comunicado en el concurso del principal, siendo clasificado como subordinado.

El problema de las oraciones subordinadas sin una oración principal puede resumirse del siguiente modo: las oraciones con formas no personales (infinitivo, gerundio y participio) o encabezadas por nexos subordinantes (pronombres relativos, conjunciones y locuciones conjuntivas) no pueden aparecer solas tras un punto. En esos casos, lo más recomendable es iniciar una nueva oración (tras punto y seguido) con un verbo conjugado y, si es necesario, un conector no subordinante (*por lo tanto*, *no obstante*, *asimismo*, etc.), si considera que el contenido de la oración es información principal, como se ha mostrado en los ejemplos anteriores (5bis y 6bis).

4. MECANISMOS DE SUBORDINACIÓN NO ESTÁNDAR O ANTINORMATIVOS

El segundo gran problema de la subordinación en los textos jurídicos tiene que ver con el empleo de mecanismos de subordinación –ya se trate de nexos subordinantes o formas no personales- extraños o incluso incorrectos según la norma culta del español. El empleo de mecanismos de subordinación que no forman parte de la lengua estándar dificulta la comprensión por parte de lectores no familiarizados con el discurso jurídico y ocasiona, en ocasiones, que los textos resultantes sean ambiguos o costosos de interpretar. A grandes rasgos, es posible identificar dos tipos de mecanismos de subordinación extraños: (i) nexos subordinantes no estándar y (ii) subordinadas con formas no personales (infinitivos, gerundios y participios)

4.1. Usos de nexos subordinantes no estándar

Los jueces recurren en sus sentencias, con mucha frecuencia, a partículas subordinantes extrañas en la lengua estándar o al empleo de partículas subordinantes que sí existen en la lengua estándar, pero que adquieren en los textos jurídicos valores especiales. Ambos pro-

⁴⁷ Acerca de los procedimientos de cita, véase apartado §10.2.3.

cedimientos plantean dificultades de comprensión para un lector culto no familiarizado con la lectura de textos jurídicos.

4.1.1. Conjunciones y locuciones conjuntivas no estándar

El discurso jurídico ha creado algunas locuciones conjuntivas que expresan diferentes relaciones lógicas (causa, condición, consecuencia, finalidad, etc.). Estas creaciones, dado que no forman parte de la norma culta, pueden ocasionar dificultades de comprensión a un lector culto no familiarizado con los textos jurídicos. A continuación, se recogen algunas de estas locuciones y se proponen alternativas previstas en la norma común.

a) **Siendo que**: esta locución es propia del lenguaje jurídico, en el que parece tener un valor causal. Se recomienda sustituirla por otros conectores causales más extendidos en español estándar (*porque, ya que, puesto que, dado que*, entre otros).

(7)

Llegados los días fijados para la celebración del acto de Juicio, comparecieron las partes debidamente asistidas y representadas, se declaró el acto bien constituido y, **siendo que** no se planteó ninguna cuestión previa de las previstas en la Ley, se comenzó practicando, en primer lugar, la prueba propuesta y admitida a instancias de la parte actora.

[SJPI 40/2010. Madrid: Antecedentes de Hecho, segundo]

(7bis)

Llegados los días fijados para la celebración del acto de Juicio, comparecieron las partes debidamente asistidas y representadas, se declaró el acto bien constituido y, **dado que** no se planteó ninguna cuestión previa de las previstas en la Ley, se comenzó practicando, en primer lugar, la prueba propuesta y admitida a instancias de la parte actora.

b) **Sin que**: el valor de esta locución, propia del lenguaje jurídico y administrativo, parece ser el de cancelar un supuesto que el lector podría deducir de una afirmación anterior. Dado que su valor no es transparente para un lector culto medio, se recomienda evitar el uso de esta locución y, en su lugar, introducir el supuesto en una oración independiente.

(8)

El avalista responderá frente al tenedor de igual modo que el avalado, **sin que** el tercero tenga que acreditar previamente la insolvencia del avalado y **sin que** haya cumplido frente al avalista las formalidades necesarias para conservar la acción cambiaria, pudiendo el tenedor dirigirse contra aquél con preferencia a cualquier otro obligado.

[SJM 49/2010. Madrid: Fundamentos, primero]

(8bis)

El avalista responderá frente al tenedor de igual modo que el avalado. El tenedor no tiene que acreditar previamente la insolvencia del avalado y no tiene que haber cumplido frente al avalista las formalidades necesarias para conservar la acción cambiaria. Asimismo, el tenedor puede dirigirse contra el avalista con preferencia a cualquier otro obligado.

c) **Para el caso en que**: esta locución es propia del lenguaje jurídico, en el que parece tener un valor condicional. Se recomienda sustituirla por otros conectores condicionales más extendidos en español estándar (*si, en el caso de que*, entre otros).

(9)

Dicha opción deberá ser ejercitada en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia; **para el caso en que la demandada no ejercite ningún tipo de opción de forma expresa**, se entenderá que procede la readmisión; y cualquiera que sea el sentido de la referida opción, debo condenar y condeno a la demandada a que, además, abone a la parte actora el importe de los salarios de tramitación entre el 22 de diciembre de 2009 y el 3 de enero de 2010, ambos inclusive, a razón de 68,06 euros diarios brutos, y le mantenga en situación de alta en la Seguridad Social durante el periodo correspondiente a tales salarios.

[SJS 2/2010. Pamplona/Iruña: Fallo, primero]

(9bis)

Si la demandada no ejercita ningún tipo de opción de forma expresa, se entenderá que procede la readmisión.

4.1.2. Usos especiales de conjunciones y locuciones conjuntivas estándar

Un problema complementario del anterior es el empleo de formas que sí existen en la lengua común (pronombres y adverbios relativos, y preposiciones) con valores que no les son propios. Estos usos, además de ser incorrectos desde un punto de vista normativo, pueden entorpecer la lectura de los textos. A continuación, se recogen algunos casos.

a) **Pronombres y adverbios relativos** (*que, cual; donde y cuando*): las sentencias analizadas contienen numerosos casos de elecciones inadecuadas de relativos. El problema más extendido suele ser usar el elemento más frecuente (*que*) en lugar del relativo exigido por el tipo de antecedente (tiempo, lugar, persona). Es lo que sucede en el siguiente fragmento, en el que el juez opta en dos ocasiones por el relativo *que* en lugar del relativo temporal *cuando*.

(10)

Por este motivo se considera beneficioso para la menor que se mantenga básicamente el mismo régimen del año 2004, en las condiciones siguientes, sin necesidad de introducir mayores especificaciones, consistente en que el padre podrá visitar y tener en su compañía a la menor los fines de semana alternos desde la salida del colegio el Viernes hasta el Domingo a las 19:00 horas **en el que** la devolverá al domicilio materno.

Asimismo, podrá visitar y tener en su compañía a la menor un día por semana desde la salida del Colegio hasta la mañana del día siguiente **que** la dejará en el citado centro, pudiendo pernoctar la menor con el padre.

[SJPI 108/2008. Girona: Fundamentos, tercero]

(10bis)

Por este motivo se considera beneficioso para la menor que se mantenga básicamente el mismo régimen del año 2004, en las condiciones siguientes, sin necesidad de introducir mayores especificaciones, consistente en que el padre podrá visitar y tener en su compañía a la menor los fines de semana alternos desde la salida del colegio el Viernes hasta el Domingo a las 19:00 horas, **cuando/momento en el que** la devolverá al domicilio materno.

Asimismo, podrá visitar y tener en su compañía a la menor un día por semana desde la salida del Colegio hasta la mañana del día siguiente **cuando** la dejará en el citado centro, pudiendo pernoctar la menor con el padre.

117

b) **Preposiciones**: los textos jurídicos emplean con frecuencia las preposiciones (especialmente, *con, sin y, en menor medida, para*) como mecanismos de subordinación. El problema reside en que estas preposiciones no suelen tener en la lengua estándar el valor que se les atribuye en el discurso jurídico. Así, por ejemplo, en el siguiente fragmento, se emplean las preposiciones *con* -que denota compañía o contenido- y *para* -que tiene un significado de finalidad- con significados subordinantes ambiguos. En estos casos, es mejor recurrir a recursos de conexión oracional que precisen el significado conectivo, como se muestra en (11bis).

(11)

8. El tercero de los motivos vuelve a la invocación de denuncias de infracción de derechos constitucionales, **con** indebida omisión de la cita del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (EG 18882, 16), que es su adecuado cauce, **para** alegar solamente el 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2735), en relación al 849. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

[STS 1353/2009]

(11bis)

8. El tercero de los motivos vuelve a la invocación de denuncias de infracción de derechos constitucionales, **en la que se omite** la cita del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (EG 18882, 16) **-que** es su adecuado cauce-, **y se alega** solamente el 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2735), en relación al 849. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

4.2. Subordinación mediante formas no personales

Como se ha señalado oportunamente en otros apartados de este informe (véase secuencias textuales y expresiones anafóricas), el empleo de formas no personales del verbo (infinitivo, participio y gerundio) ocasiona diversos problemas para la correcta comprensión de los

textos jurídicos. Las formas no personales del verbo carecen de información relativa a la persona (yo, tú, él/ella), al número (singular, plural) y al tiempo, de modo que para su correcta interpretación requieren de la presencia de un verbo en forma personal que contenga estas informaciones (persona, número y tiempo). No obstante, los jueces recurren a estas formas en contextos en los que no está claro cuál es el verbo principal –o ni siquiera puede localizarse uno.

El abuso de formas no personales tiene como consecuencia una sobrecarga de la tarea de comprensión del lector, que tiene que suplir la información de tiempo y persona que las formas no personales no suministran. Es lo que sucede en el siguiente fragmento, procedente de los Antecedentes de Hecho de una sentencia. En este párrafo, el juez recurre casi exclusivamente a las formas no personales: emplea cinco formas no personales (*practicada*, *haberse solicitado*, *estimarlo*, *señalado*, *habiéndose observado*) frente a solo dos formas personales (*se declaró* y *tuvo*). El resultado es que el orden cronológico de los acontecimientos descritos es ambiguo. Esta dificultad desaparecería si el escritor hubiera optado por el empleo de formas personales, como se propone en la versión revisada (12bis).

(12)

No **practicada** prueba en este procedimiento, ni **haberse solicitado** por las partes la celebración de vista o presentación de conclusiones, y no **estimarlo** necesario la Sala, se declaró concluso el procedimiento, y **señalado** día para la votación y fallo, tuvo lugar en el designado; **habiéndose observado** las prescripciones legales.

[STSJAnd RJCA\2002\1087. Antecedentes de Hecho, tercero]

(12bis) El procedimiento se declaró concluso por los siguientes motivos: porque no se había practicado ninguna prueba, porque las partes no habían solicitado la celebración de la vista ni la presentación de conclusiones, y porque la Sala no lo estimó necesario. Por ello, se señaló un día para la votación y el fallo, que tuvieron lugar el día designado, habiéndose observado las prescripciones legales.

4.2.1. El caso del gerundio

Con diferencia, el gerundio es la forma no personal más frecuente en el discurso jurídico y la que más dificultades de interpretación ocasiona (Bayo Delgado 2002: 56; Alcaraz & Hughes 2002: 105-106; Cazorra Prieto 2007: 109-111). Antes de proceder a describir los usos incorrectos de esta forma, es necesario exponer brevemente el funcionamiento correcto de esta forma.

a) El gerundio en español: usos normativos

El gerundio es una forma no personal, que carece de información de persona, número y tiempo, cuya interpretación de sujeto, tiempo y relación semántica (causal, modal, condicional, etc.) depende de la relación que se establece entre el gerundio y el predicado con el que este se relaciona (RAE-AALE, 2009: §27.1.b). Santiago (2000: 90) sintetiza en tres reglas el funcionamiento correcto del gerundio en español:

- Regla 1: el sujeto del gerundio tiene que coincidir con el sujeto de la oración principal
- Regla 2: la acción del gerundio tiene que realizarse al mismo tiempo o antes que la acción del verbo principal
- Regla 3: la acción que expresa el gerundio se tiene que interpretar como una circunstancia (tiempo, modo, causa o condición) de la acción del verbo principal

Comprobemos el funcionamiento de estas reglas a partir de un ejemplo. En el siguiente fragmento, procedente de los Hechos Probados, el juez ha empleado correctamente dos oraciones subordinadas de gerundio (*actuando...* y *aprovechando...*): (i) el sujeto de los gerundios coincide con el sujeto de la oración principal (el acusado Modesto), (ii) la acción del

verbo sucede al mismo tiempo de la acción principal (Modesto realizó apuntes ficticios en las libretas de los clientes mientras era director y aprovechando su condición de director, amigo o pariente de los damnificados) y (iii) la acción del gerundio es una circunstancia -en este caso, una causa- que explica la acción principal (realizó apuntes en las libretas porque era el director de la oficina y porque tenía ciertas relaciones con los clientes damnificados).

(13)

El acusado Modesto **SUJETO** [...] **actuando** como director de la misma [oficina bancaria] y en concreto desde el año 1.998 a 2.001 **ORACIÓN DE GERUNDIO** [**aprovechando** dicha condición, amistad con los clientes e incluso parentesco **ORACIÓN DE GERUNDIO**], **procedió VERBO PRINCIPAL**, movido por ilícito ánimo de lucro, a realizar apuntes ficticios en las libretas de ahorros [...].

[SAP 835/2009. Jaén: Hechos Probados, primero]

No obstante, en general, el uso del gerundio no se ajusta a estas reglas y provoca, en consecuencia, problemas de comprensión. Es lo que sucede en el siguiente fragmento, procedente de los Hechos Probados de una sentencia que resuelve un caso de terrorismo.

(14)

La acusada Sandra, en compañía de los miembros del llamado Comando Madrid de la organización terrorista ETA Juan Antonio, Jose Miguel e Almudena, ya condenados por estos hechos, y de Carlos José, fallecido en 1985, decidieron atentar contra el Coronel del Ejército D. Vicente, con los datos que habían obtenido sobre sus horarios y movimientos desde su domicilio sito en la C/ General Oraá de Madrid a su lugar de trabajo, **desplazándose** en el vehículo del Ejército de Tierra marca Simca 1200, matrícula IZ-, que era conducido por D. Bruno.

Para tal fin, el día 12 de junio de 1985, la acusada Sandra y sus compañeros de comando ya citados, Juan Antonio y Jose Miguel, llegaron a la citada calle con el vehículo marca Renault 12, matrícula TD-W, cuyo propietario era D. Arturo, que lo había denunciado como sustraído, y al que le habían cambiado las placas de matrícula por las de W-WJ, **esperando** la salida de su domicilio del Sr. Vicente, Jose Miguel al volante del vehículo y Juan Antonio y la ahora acusada Sandra en la calle armados con sendas pistolas.

Al salir D. Vicente, sobre las 9 50 horas, y mientras se introducía en el vehículo, Juan Antonio y la ahora acusada Sandra se acercaron al mismo **disparándoles** así como también al conductor, D. Arturo, quienes, sin ninguna capacidad de reacción, fueron alcanzados: el Coronel Vicente por dos impactos de bala en la cabeza y el Sr. Bruno por seis, uno en el hemotórax, tres en región abdominal, otro en el muslo y el último en la columna vertebral. Los disparos les causaron tan graves heridas que determinaron la muerte inmediata de ambos.

[SAN 55/2006. Sala segunda: Hechos probados, segundo]

El primer gerundio (*desplazándose*) no se interpreta en relación con el verbo principal ("La acusada en compañía de los miembros del llamado Comando Madrid [...] decidieron atentar"), como una circunstancia de esta acción ('decidieron atentar mientras/porque se desplazaban el vehículo...'), sino como una descripción del trayecto que realizaba la víctima, D. Vicente.

En cuanto al segundo gerundio (*esperando*), este no se interpreta como una circunstancia del verbo principal más cercano ('habían cambiado las placas de la matrícula mientras esperaban la salida de D. Vicente'). Por el contrario, resulta más plausible que la acción de esperar sea una acción posterior a la llegada de los terroristas al domicilio de D. Vicente. No obstante, el valor de posterioridad no es propio del significado del gerundio.

Por último, el tercer gerundio resulta ambiguo. Desde un punto de vista normativo, la interpretación correcta es que la acción de disparar (*disparándoles*) es simultánea a la acción de acercarse (*se acercaron*); esto es, se interpreta que se acercaron mientras disparaban. Ahora bien, es relevante saber si ese era el sentido buscado por el juez o si, por el contrario, quería decir que los disparos se produjeron después del acercamiento ('primero, se acercaron; luego, dispararon').

Es posible identificar cuatro usos incorrectos del gerundio en los textos jurídicos: (i) gerundio de posterioridad, (ii) gerundio de consecuencia, (iii) gerundio ilativo y (iv) gerundio de complemento de nombre. A continuación, se describe cada uno de estos usos y se proponen formulaciones alternativas ajustadas a la norma del español.

b) Uso incorrecto 1: El gerundio con valor de posterioridad

El primer uso incorrecto del gerundio es el gerundio de posterioridad. Este uso no es exclusivo de los textos jurídicos, también se encuentra con cierta frecuencia en los textos periodísticos. Con todo, este uso incumple la regla 2 y debe, por tanto, evitarse. La formulación alternativa consiste en expresar la información posterior con una nueva oración con un verbo conjugado, tal como se propone en la versión revisada del siguiente ejemplo:

(15)

El trabajador causó nueva baja médica por contingencia común el 30 de marzo de 2009, **permaneciendo** en esta situación hasta el 27 de mayo de 2009, **causando** seguidamente nueva baja médica el 28 de mayo de 2009, de la que ha recibido el alta el 21 de diciembre de 2009 por mejoría que le permite realizar su trabajo habitual.

[SJS 2/2010. Pamplona/Iruña: Hechos probados, tercero]

(15bis)

El trabajador causó nueva baja médica por contingencia común el 30 de marzo de 2009 **y permaneció** en esta situación hasta el 27 de mayo de 2009. **Seguidamente, causó** una nueva baja médica el 28 de mayo de 2009, de la que ha recibido el alta el 21 de diciembre de 2009 por mejoría que le permite realizar su trabajo habitual.

c) Uso incorrecto 2: El gerundio con valor de causa-consecuencia

El segundo uso incorrecto del gerundio es el gerundio de causa-consecuencia. Este uso es característico de los textos jurídicos. Mediante este uso del gerundio, el escritor introduce una oración que constituye una consecuencia de la oración principal, como sucede en el siguiente ejemplo (16):

(16)

Singularmente en el caso del delito de cohecho, es poco frecuente la existencia de prueba directa **siendo** necesario en la mayoría de los casos acudir a la prueba indiciaria.

[STSJ 10/2008. Granada: Fundamentos, segundo]

Al igual que el caso anterior, este uso incumple la regla 2 y debe, por tanto, evitarse. La formulación alternativa consiste en expresar la información posterior con una nueva oración con un verbo conjugado y un conector que explicita la relación consecutiva (*en consecuencia, por ello, por lo tanto, etc.*), tal como se propone en la versión revisada del siguiente ejemplo (16bis):

(16bis)

Singularmente en el caso del delito de cohecho, es poco frecuente la existencia de prueba directa; **por ello, es** necesario en la mayoría de los casos acudir a la prueba indiciaria.

d) Uso incorrecto 3: El gerundio con valor ilativo

Un tercer uso incorrecto del gerundio es que el podemos denominar *ilativo*, puesto que el gerundio no expresa una circunstancia que enmarca la acción del verbo principal, sino que se emplea para encadenar eventos autónomos. Este uso del gerundio es especialmente desaconsejable, porque puede dar lugar a enunciados ambiguos e, incluso, cómicos, como sucede en el ejemplo (17):

(17)

Allí, otro miembro de ETA. les entregó dos maletas conteniendo 25 y 28 kilogramos de explosivo cada una y preparadas para ser usadas con sólo conectar el temporizador, dos pistolas croatas marca HS, una con la numeración borrada y la otra con número NUM006, munición, un reproductor de cassette pequeño (tipo "walkman") con dos altavoces conectados al reproductor y encendidos, dos teléfonos móviles y una peluca, **transmitiéndole** la orden de colocar ambas maletas en el tren Intercity que va desde Irún hasta la estación de Chamartín en Madrid, para que explosionaran el día 24 de diciembre de 2003 a su llegada a la capital de España.

[SAN 25/2005. Sala de lo Penal: Hechos probados, cuarto]

La oración de gerundio (“transmitiéndole la orden de colocar ambas maletas...”) está situada a continuación de la peluca, de modo que el lector puede entender que es la peluca la que transmite una serie de órdenes, y no “otro miembro de ETA”, que parece ser la interpretación más razonable.

De nuevo, en estos casos, la redacción correcta del fragmento pasa por la sustitución del gerundio por una nueva oración con un verbo en forma personal, como se propone en la versión revisada del fragmento (17bis):

(17bis)

Allí, otro miembro de ETA les entregó los siguientes objetos: (1) dos maletas que contenían 25 y 28 kilogramos de explosivo cada una y preparadas para ser usadas con sólo conectar el temporizador; (2) dos pistolas croatas marca HS, una con la numeración borrada y la otra con número NUM006; (3) munición; (4) un reproductor de cassette pequeño (tipo “walkman”) con dos altavoces conectados al reproductor y encendidos; (5) dos teléfonos móviles y (6) una peluca. **Asimismo, les transmitió** la orden de colocar ambas maletas en el tren Intercity que va desde Irún hasta la estación de Chamartín en Madrid, para que explosionaran el día 24 de diciembre de 2003 a su llegada a la capital de España.

[SAN 25/2005. Sala de lo Penal: Hechos probados, cuarto]

e) Uso incorrecto 4: El gerundio con valor relativo (o gerundio BOE)

El último uso incorrecto del gerundio es quizá la forma más característica del lenguaje jurídico-administrativo; tanto es así que incluso cuenta con una denominación específica: *el gerundio BOE*. Este uso consiste en precisar las características de nombre mediante una oración de gerundio. Este nombre puede hacer referencia a un objeto físico -como sucede en (18)- una obra o representación -como sucede en (19)- o un documento jurídico -como sucede en (20)-.

(18)

En el registro de los lugares de residencia de José Ramón [...] se intervinieron, entre otros, los siguientes efectos:

- Un papel donde aparece manuscrito el número-WHM, que se corresponde con el de las placas de matrícula de un vehículo oficial perteneciente a la Dirección General de la Guardia Civil.
- Una carpeta verde [conteniendo papeles manuscritos con información, recortes de prensa y fotografías sobre potenciales víctimas de actos terroristas].
- Un disquete y discos compactos [conteniendo archivos con instrucciones sobre manejo de armas y explosivos].

[SAN 25/2005. Sala de lo Penal: Hechos probados, noveno]

(19)

El día 14 de marzo, cuando se encontraba en servicio de guardia judicial el acusado aforado, la Procuradora de los Tribunales D^a. Irene Molinero Romero, en nombre y representación de Juan Alberto, presentó escrito de denuncia dirigido “Al Juzgado de Instrucción de Guardia” -fechado el mismo día 14 de marzo y firmado por su representado Juan Alberto- contra D. Cristóbal, titular y propietario de la emisora de Televisión “Telemar”, por proyectar desde el día 10 del mismo mes, y de manera ininterrumpida hasta el momento del redactarse la denuncia, un programa de televisión **conteniendo** datos personales y familiares del denunciante, obtenidos de asuntos judiciales.

[SAP 243/2008. Bilbao: Hechos probados, segundo]

(20)

La Sala dictó Auto de 7 de julio de 2005 [revocando el Auto de conclusión dictado por el Juzgado Central de Instrucción n° 1 de la Audiencia Nacional], [ordenando al Instructor dictar el procesamiento en los términos indicados], [practicando las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal, así como todas aquellas derivadas de las anteriores].

[SAN 60/2006. Sala de lo Penal: Antecedentes, segundo]

En todos los casos, se trata de estructuras incorrectas, no permitidas por la norma culta del español, dado que el gerundio no expresa una circunstancia de un verbo (regla 3). La formulación correcta de estos fragmentos debe hacer uso de una oración de relativo con un verbo en forma personal, como muestras las versiones revisadas de los ejemplos anteriores:

(18bis)

En el registro de los lugares de residencia de José Ramón [...] se intervinieron, entre otros, los siguientes efectos:

-Un papel donde aparece manuscrito el número-WHM, que se corresponde con el de las placas de matrícula de un vehículo oficial perteneciente a la Dirección General de la Guardia Civil.

-Una carpeta verde **[que contenía]** papeles manuscritos con información, recortes de prensa y fotografías sobre potenciales víctimas de actos terroristas].

-Un disquete y discos compactos **[que contenían]** archivos con instrucciones sobre manejo de armas y explosivos].

(19bis)

El día 14 de marzo, cuando se encontraba en servicio de guardia judicial el acusado aforado, la Procuradora de los Tribunales D^a. Irene Molinero Romero, en nombre y representación de Juan Alberto, presentó escrito de denuncia dirigido "Al Juzgado de Instrucción de Guardia" -fechado el mismo día 14 de marzo y firmado por su representado Juan Alberto- contra D. Cristóbal, titular y propietario de la emisora de Televisión "Telemar", por proyectar desde el día 10 del mismo mes, y de manera ininterrumpida hasta el momento del redactarse la denuncia, un programa de televisión **que contenía** datos personales y familiares del denunciante, obtenidos de asuntos judiciales.

(20bis)

La Sala dictó Auto de 7 de julio de 2005 **[que revocaba]** el Auto de conclusión dictado por el Juzgado Central de Instrucción n° 1 de la Audiencia Nacional], **[ordenaba]** al Instructor dictar el procesamiento en los términos indicados], **[y practicaba]** las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal, así como todas aquellas derivadas de las anteriores].

OTROS ASPECTOS SINTÁCTICOS

1. PROBLEMAS DE DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ORACIÓN

En los epígrafes que se desarrollan a continuación, nos ocuparemos de fenómenos que tienen que ver con alteraciones e interrupciones del orden de los elementos de la oración. Incluiremos ejemplos de fragmentos de documentos del corpus analizado en que el orden natural de la frase se ve alterado; otros de oraciones interrumpidas por incisos y, finalmente, casos en que la posición del adjetivo con respecto al nombre resulta forzada o incorrecta.

1.1. Alteraciones del orden natural de la frase en los textos jurídicos

El español forma parte de las lenguas que se atienen a un orden en la disposición de los elementos que constituyen las frases. En términos generales, se puede afirmar que, atendiendo a los constituyentes mayores de la frase, la estructura oracional no marcada en nuestra lengua es SUJETO-VERBO-OBJETO. Con todo, dado que el español cuenta con un rico sistema de marcas flexivas verbales, pronombres átonos y preposiciones que proporcionan información acerca de la función de los elementos, los usuarios de nuestra lengua gozan de una cierta libertad a la hora de ordenar los elementos de la frase (Fernández Soriano 1993). La disposición de los constituyentes de la oración en un orden distinto del no marcado en casos en que ese orden no es exigido por la gramática puede ser considerada como un rasgo propio de textos cultos o formales. Sin embargo, en numerosas ocasiones, la alteración innecesaria del orden natural de la frase puede acarrear como consecuencia una mayor dificultad a la hora de comprender el texto.

Los textos que forman parte del corpus que hemos analizado para elaborar este informe muestran casos en que la alteración del orden de los elementos de la frase resulta forzada y dificulta la comprensión de documentos ya de por sí muy complejos tanto desde el punto de vista informativo como desde el punto de vista de su estructura.

Algunos problemas de orden que hemos apreciado en las sentencias consultadas se hallan en puntos del documento en los que se tiende a utilizar fórmulas fijas:

(1)

Leída y publicada fue la anterior sentencia por la magistrada que la dictó estanco celebrando Audiencia Pública en el mismo día de la fecha. Doy fe.

[SJP 428/2009 Barcelona: Fallo]

En casos como el del ejemplo citado, la inversión del orden natural de la frase se añade al uso de la pasiva perifrástica. Sin embargo, la información más relevante para el ciudadano contenida en el Fallo ya se ha desarrollado, y el lector percibe que el fragmento no es sino una fórmula de cierre de la sentencia.

Otro ejemplo de inversiones forzadas que no comprometen la posibilidad de entender la frase, por afectar a expresiones bien frecuentes de la lengua es (2):

(2)

Ahondando más en la cuestión, **es lo cierto que** el principio de legalidad en la ejecución de las penas impide poder...

[SAP CR 112/2009: Fundamentos, primero]

En los ejemplos que reproducimos a continuación, extraídos de la sentencia SAN 3911/2009, las inversiones de los elementos mayores de la oración principal no se justifican y socavan la claridad expresiva de los fragmentos en que se producen, si bien no llegan a constituir un obstáculo serio para su comprensibilidad:

(3)

Tras el desistimiento efectuado por la parte actora, en el acto del juicio, de las pretensiones que se contenían en los apartados b), c) y d) del Suplico de su escrito de demanda, **solo ha de centrarse el objeto de este litigio** en determinar si se ha producido vulneración del derecho a la libertad sindical del sindicato accionante.

(4)

Carece de viabilidad, en consecuencia, la demanda, y debe ser desestimada declarando que no ha existido la vulneración denunciada, como previene el art. 180 de la LPL.

El ejemplo (5) correspondería al mismo tipo que los dos anteriores, pero, en este caso, la inversión lleva a omitir una marca de negación que, como se puede comprobar al leer la versión alternativa que proponemos, contribuye a la naturalidad del fragmento, que resulta más próximo a la lengua común de los ciudadanos:

(5)

Ninguna indefensión material, pues, han padecido las defensas con tales decisiones judiciales.

[TSJ And Granada 10/2008, Fundamentos, segundo]

(5bis)

Las defensas no han padecido, pues, ninguna indefensión material con tales decisiones judiciales.

También hemos encontrado casos en los que la alteración del orden consiste en el desplazamiento innecesario de un complemento, por lo que la estructura resulta forzada, pero no llega a verse seriamente comprometida la inteligibilidad de la frase, si bien su correcta comprensión queda a merced de la lógica y el conocimiento del mundo del lector, como se advertirá si se compara el ejemplo siguiente con la versión que proponemos a continuación:

(6)

Cualquier persona sabe que la explosión de dos artefactos colocados en el mismo o en diferentes vagones de un tren en marcha **con más de 54 kilogramos de dinamita**, haría descarrilar al tren, proyectaría gran cantidad de trozos metálicos dentro y fuera del mismo y, con absoluta seguridad, produciría la muerte de un gran número de personas.

[SAN 25/2005 Fundamentos de derecho, segundo]

(6 bis)

Cualquier persona sabe que la explosión de dos artefactos con más de 54 kilogramos de dinamita colocados en el mismo o en diferentes vagones de un tren en marcha, haría descarrilar al tren, proyectaría gran cantidad de trozos metálicos dentro y fuera del mismo y, con absoluta seguridad, produciría la muerte de un gran número de personas.

Por otro lado, hemos encontrado en nuestro corpus numerosos ejemplos en los que, a diferencia de lo que ocurría en los que hemos citado hasta aquí, la alteración del orden natural de los elementos de la frase supone una dificultad innecesaria para la inteligibilidad de fragmentos muy relevantes dentro del texto. En estos casos, nos parece recomendable respetar el orden más natural de la frase en español:

(7)

De un delito de pertenencia a banda armada, ciento ochenta y cuatro delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, un delito continuado de daños con finalidad terrorista y un delito de tenencia ilícita de armas cualificado por la pertenencia a una banda terrorista es responsable en concepto de autor directo del art. 28 CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) cada uno de los procesados Juan Pedro y José Ramón, al realizar los hechos directamente, por sí y de propia mano, según lo expuesto en los fundamentos anteriores.

[SAN 60/2006, Fundamentos de derecho, tercero]

La versión ordenada y bien puntuada, si bien sigue siendo una oración demasiado larga y con una gran cantidad de datos, resulta mucho más fácil de entender:

(7bis)

Cada uno de los procesados, Juan Pedro y José Ramón, al haber realizado los hechos directamente, por sí y de propia mano, según lo expuesto en los fundamentos anteriores, es responsable en concepto de autor directo del art. 28 CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) de un delito de pertenencia a banda armada, ciento ochenta y cuatro delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, un delito continuado de daños con finalidad terrorista y un delito de tenencia ilícita de armas cualificado por la pertenencia a una banda terrorista.

En el ejemplo (8), la inversión del orden normal, con la disposición de varios elementos circunstanciales entre los constituyentes principales, dificulta la identificación de la oración principal:

(8)

En consecuencia, poner a disposición de la banda armada determinadas aportaciones, conociendo que los medios y métodos empleados por la organización consisten en hacer uso de la violencia, es decir del terror y de la muerte, cuando en un Estado Social y Democrático de Derecho, como el nuestro, existen cauces pacíficos y democráticos para la prosecución de cualquier finalidad política, no puede en ningún caso estar amparado por el derecho a la libertad de expresión.

[SAN 60/2006, Fundamentos, primero]

Ofrecemos la versión alternativa, con los elementos constituyentes en el orden más natural:

(8bis)

En consecuencia, no puede en ningún caso estar amparado por el derecho a la libertad de expresión poner a disposición de la banda armada determinadas aportaciones, conociendo que los medios y métodos empleados por la organización consisten en hacer uso de la violencia, es decir del terror y de la muerte, máxime cuando en un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro existen cauces pacíficos y democráticos para la prosecución de cualquier finalidad política.

En muchos fragmentos de los textos del corpus que hemos analizado, el fenómeno que nos ocupa, a saber, la alteración del orden natural de la oración en español, no es el único que atenta contra la claridad que ha de exigirse a los documentos judiciales, sino que concurren otros, como la extensión excesiva de las oraciones o la utilización de mecanismos inadecuados de subordinación, tal como se puede comprobar en el ejemplo (9).

(9)

La sentencia valora la incapacidad permanente en 70 000 #. La parte apelante, Zurich S.A., entiende que se ha aplicado incorrectamente la tabla IV del baremo, habiendo concedido la cantidad de 70 000 #, que corresponde a una incapacidad absoluta, considerando que, de acuerdo con la prueba de detectives aportada a autos, de la que resulta que el actor se vale perfectamente para su nueva actividad, atendiendo durante toda la jornada laboral el bar restaurante La Dorada, la incapacidad ha de calificarse de parcial y, en consecuencia, entiende que debe ser valorada en sus correctos parámetros, estando ya pagada tal incapacidad por la misma.

[STS 12/05, Antecedentes de hecho, 4º, quinto]

Sin duda, la legibilidad del fragmento se beneficia de los cambios que dan lugar a la versión alternativa que proponemos:

(9bis)

La sentencia valora la incapacidad permanente en 70 000 #. La parte apelante, Zurich S.A., entiende que se ha aplicado incorrectamente la tabla IV del baremo, ya que la cantidad de 70 000 # corresponde a una incapacidad absoluta. La parte apelante, Zurich S.A., considera que la incapacidad del demandante ha de calificarse de parcial, de acuerdo con la prueba de detectives aportada a autos. Según esta prueba, el actor se vale perfectamente para su nueva actividad, dado que atiende durante toda la jornada laboral el bar restaurante La Dorada. En consecuencia, la parte apelante entiende que (i) la incapacidad debe ser valorada en sus correctos parámetros, esto es, como incapacidad parcial, y que (ii) la cantidad correspondiente a dicha incapacidad ya le ha sido pagada al demandante.

1.2. Incisos parentéticos que dificultan la comprensión

Los profesionales responsables de la redacción de los textos jurídicos suelen manejar una cantidad ingente de información. Por un lado, han de referirse a eventos de la realidad, a las personas que participan en ellos, a los lugares en que ocurren, a objetos afectados por esos eventos, a las causas y las consecuencias que tienen. Por otro lado, han de considerar pruebas, han de citar testimonios y han de incluir fragmentos de otros textos jurídicos en su argumentación. Organizar tal cantidad de datos en un texto escrito es una tarea ardua.

No es de extrañar que, en los documentos que forman parte del corpus que hemos examinado, hayamos dado con muchos fragmentos en que las oraciones se ven interrumpidas por incisos parentéticos. Se trata de expresiones gramaticalmente autónomas que se intercalan en las oraciones y que contienen información relacionada con la que se está tratando en esas oraciones. Los que aquí nos ocupan aparecen escritos entre paréntesis o entre guiones.

Para lograr una utilización adecuada de los incisos parentéticos en los textos jurídicos, nos parece fundamental que las personas encargadas de la elaboración de este género de documentos tengan en cuenta dos criterios: (i) el número de incisos que se colocan en mitad de una oración y (ii) la extensión del inciso o los incisos que cortan la continuidad de una oración.

1.2.1. Número de incisos

Cada vez que la persona responsable de la escritura de un texto jurídico introduce un inciso parentético, la oración que estaba escribiendo se ve interrumpida. Si las interrupciones son demasiado numerosas, el lector del texto puede perder el hilo de la oración en la cual van insertos los incisos. En la parte correspondiente a los Fundamentos de Derecho de las sentencias y los autos, son muy frecuentes los casos en que los numerosísimos incisos que contienen la referencia a la jurisprudencia citada impiden realizar una lectura cómoda y comprensiva del fragmento, como ocurre en el ejemplo que reproducimos a continuación:

(10)

A lo anterior hemos de añadir que la conducta de la víctima pasa a un primer plano, en tanto que su posible negligencia puede tener incidencia en el desenlace lesivo, por lo que se considera jurisprudencialmente adecuado (SSTS 20 febrero 1992//723) y 7 diciembre 1987//9282) acudir a la llamada "compensación de culpas", con razonable reducción (en caso extremo, anulación) del importe indemnizatorio e incluso (en casos extremos de negligencia del accidentado) su supresión. Pero para llegar a tal resultado, la doctrina jurisprudencial (bajo el principio de la equidad: STS 21 de marzo 2000//2023) ha atendido a la experiencia y formación profesional del interesado (SSTS 18 diciembre 1997//9105, 11 julio 1997 y 30 junio 1997//5409), a la previsibilidad del riesgo de daño (STS 31 julio 1997//5529), a la observancia de las instrucciones recibidas (SSTS 12 julio 1999//4772, 31 diciembre 1997//9413 y 10 julio 1993//6005), a los mecanismos de seguridad puestos a disposición de la víctima (SSTS 20 octubre 1988//7594 y 28 octubre 1985//5086) y la conexión de las funciones propias del trabajador y de los cometidos realizados al acaecer el accidente (SSTS 1 febrero 1999//745 y 29 septiembre 1989//6388).

[SJS 37/2007, Fundamentos, segundo]

En otros fragmentos, los incisos contienen otros tipos de información, como en (11):

(11)

En cualquier caso, en respuesta a la pretensión impugnativa de la acusación particular, debemos analizar únicamente si, como se solicita, tan somera descripción fáctica puede incardinarse en el delito del *artículo 153 C.P.* (en alguna de las dos redacciones que pudieran estimarse aplicables), en la falta del *artículo 617.1 C.P.*, o en ninguna de las anteriores conductas típicas, en tanto que tales expresiones despectivas parecen producirse a caballo entre las dos redacciones dadas a estos *preceptos sustantivos por L.O. 14/99* y *L.O. 11/03*, vigentes de forma sucesiva al tiempo de comisión de estos hechos. El *artículo 153 CP*, en la dicción dada por *LO 14/1999*, requería habitualidad en la causación de violencia física/psíquica, pero sin especificar que el resultado lesivo fuere determinante de delito o de falta (**de hecho, el último inciso postulaba un concurso real al añadir “sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica”**). En cuanto a la redacción dada al *artículo 153 CP por LO 11/2003*, se castiga la causación por cualquier medio o procedimiento de un menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, es decir, en ambos casos constitutivos de falta: ello hace innecesario el tratamiento médico, pues de existir en realidad estaríamos ante un delito del *artículo 147* con la *agravante mixta del artículo 23 CP* (al no estar todavía vigente la nueva redacción del artículo 148.4º *CP*). Debemos destacar que, al definir la falta de lesiones, el artículo 617.1 *CP* se ha limitado a castigar **-en todas sus sucesivas redacciones-** al que causare a otro una” lesión no definida como delito en este Código”, redacción genérica de la que cabe extraer la tesis de que incluye tanto lesiones físicas como las psíquicas, siempre que no requieran, además de una primera asistencia, tratamiento médico/quirúrgico (**contrarios en su del artículo. 147.1 CP**).

[STS 1396/2009, Fundamentos, segundo]

En ambos ejemplos, el efecto es el mismo: oraciones demasiado largas y con demasiadas interrupciones como para ser comprendidas cómodamente por el lector.

1.2.2. Extensión de los incisos

El otro problema que afecta a las oraciones en las que se insertan los incisos parentéticos tiene que ver con la extensión de las expresiones incluidas entre paréntesis o guiones: si son demasiado extensas, impiden que se pueda realizar una lectura cómoda de la oración que ha quedado interrumpida. En el ejemplo que reproducimos a continuación, un larguísimo inciso separa al predicado del sujeto de la frase:

(12)

Como dicen entre otras las Sentencias de 25 marzo y 29 febrero 1996, todos esos datos **-como la fecha de la firmeza de las sentencias, penas impuestas, fecha de cumplimiento de las penas que en su caso tendría en cuenta la redención de penas por el trabajo en el ámbito del Código anterior, fecha de acaecimiento de los hechos, abonos de prisión preventiva, y remisión condicional o periodo de suspensión también en su caso-** han de constar en el “factum” por cuanto la aplicación “contra reo” de cualquier precepto sólo será correcta, legítima y constitucional cuando a la vez se preste el más exquisito acatamiento a los derechos fundamentales del artículo 24 de la Constitución Española.

[SAN 5247-2006, Fundamentos, sexto]

En el ejemplo (13) también aparece un inciso excesivamente extenso:

(13)

En cuanto a las denunciadas irregularidades de los Autos autorizantes **-por ausencia de identificación de una clave de acceso a los policías, ausencia de explicación sobre cómo se accedió al teléfono intervenido y ausencia de identificación de los funcionarios policiales que tenían acceso a dicha intervención-** ha de decirse que no existe norma alguna que exija tales menciones en el Auto autorizante de las intervenciones.

[TSJ And Granada 10/2008, Fundamentos, segundo]

En casos como los que ilustran los dos ejemplos anteriores, sería recomendable distribuir la información en varias oraciones, en lugar de intentar introducir información gramaticalmente independiente, enmarcada por los paréntesis o por los guiones, en algún punto de una sola oración.

1.3. La posición del adjetivo

En español, como en las otras lenguas románicas, el hablante goza de una cierta libertad para colocar el adjetivo respecto del nombre en el sintagma nominal. La literatura se ha servido tradicionalmente de esa libertad como instrumento de creación, de ahí que ciertas secuencias de nombre y adjetivo que se apartan en cuanto al orden de las más habituales sean consideradas como giros expresivos propios de textos escritos cultos o formales. Puesto que en español, la colocación del adjetivo después del nombre es la más habitual, las personas que redactan textos cultos suelen buscar esos efectos expresivos mediante la anteposición del elemento modificador. Pero la posición del adjetivo en español no es libre del todo ni caprichosa en absoluto, y en los textos judiciales analizados encontramos con cierta frecuencia anteposiciones o posposiciones del adjetivo con respecto al nombre que resultan artificiales, abarrocadas o incluso ajenas a los principios que rigen la posición del adjetivo en el grupo nominal en español. Este fenómeno, que generalmente no supone una gran dificultad para la comprensión del texto jurídico por parte del ciudadano medio, sí puede producir un extrañamiento y un desplazamiento de la atención del lector del contenido del documento a la forma en que tal contenido se expresa y, en cualquier caso, no favorece la claridad ni la precisión con que debe ser interpretado este género de textos.

El ejemplo que citamos a continuación constituye un caso en que la posición del adjetivo resulta no solo extraña, sino también inadecuada:

(14)

Aceptar tal Derecho penal de “autor” supone conferir un poder punitivo al Estado ilimitado favoreciendo con ello la concepción totalitaria del mismo.

[SAN 60/2006, Fundamentos, primero]

Una lectura rápida del fragmento podría llevarnos a pensar que el adjetivo “ilimitado” modifica al nombre “Estado” y no a “poder punitivo”, tal como se entendería inmediatamente tras la lectura de la versión que proponemos:

(15 bis)

Aceptar tal Derecho penal de “autor” supone conferir un poder punitivo ilimitado al Estado, favoreciendo con ello la concepción totalitaria del mismo.

Tal vez, en este caso, la dificultad está en el hecho de que el nombre “poder” ya aparece acompañado de un adjetivo, “punitivo”. Este elemento modificador pertenece a una clase de adjetivos que no denotan propiedades del nombre, como los calificativos, sino que se refieren a un conjunto de propiedades que el nombre modificado tiene por una relación con algo externo a él. Estos adjetivos, llamados “relacionales” porque relacionan al sustantivo con un determinado ámbito, van siempre pospuestos al nombre. Detrás de ellos pueden aparecer otros adjetivos, como en el ejemplo que hemos comentado.

La misma dificultad, es decir, el hecho de que un nombre aparece modificado por dos adjetivos, la encontramos en el ejemplo (16), pero, en este caso, la persona responsable de redactar la sentencia, antepone innecesariamente el adjetivo calificativo al nombre seguido de adjetivo relacional:

(16)

En consecuencia, constituye un **ineludible** requisito formal de las sentencias que fundamenten la condena en la declaración de un coimputado incluir un análisis más o menos somero de la concurrencia o no de dichas causas de incredibilidad subjetiva.

[TSJ And. Granada. 10/2008, fundamentos, B, segundo]

La versión más natural y recomendable de este fragmento, en que la alteración del orden sería la siguiente:

(16bis)

En consecuencia, constituye un requisito formal **ineludible** de las sentencias que fundamenten la condena en la declaración de un coimputado incluir un análisis más o menos somero de la concurrencia o no de dichas causas de incredibilidad subjetiva.

1.3.1. Anteposiciones inadecuadas

La forma más frecuente que toma el fenómeno que nos ocupa en las sentencias analizadas es la anteposición innecesaria del adjetivo que expresa una cualidad o rasgo del nombre al que modifica, es decir, el adjetivo calificativo. Éste puede colocarse en español antes o después del nombre, pero, si la atribución tiene carácter objetivo o propósito especificador, suele posponerse al sustantivo. De ahí que resulten forzados y difíciles de justificar los ejemplos "ilícita actividad", "indebida omisión", "inactual cita", "específico presupuesto" (STS, 1353/2009) o "concretos daños producidos", "contrastados criterios"; "simultánea vía" (STSJ IC, 1484/2009).

Con estas anteposiciones forzadas se pretende recurrir a unos giros expresivos cultos acordes con el grado de formalidad propio de los textos jurídicos, pero lo que se consigue es un lenguaje innecesariamente alejado de la lengua empleada por la mayoría de sus receptores que en nada contribuye a que estos documentos sean clara y cómodamente legibles por los ciudadanos. El fenómeno se encuentra incluso en el Fallo de algunas sentencias, como podemos ver en el ejemplo siguiente, en el que el enunciado que contiene la anteposición introduce el Fallo y cumple una función de relevancia estructural:

(16)

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, (...).

[SAN 3911/2009, Fallo]

1.3.2. Posposiciones incorrectas

Además de los adjetivos que expresan propiedades y de los que expresan relaciones, existe otro grupo de adjetivos que siempre van antepuestos al nombre. Se trata de los llamados adjetivos adverbiales.

El ejemplo (18) muestra la posposición de uno de estos adjetivos, que han de ir siempre antepuestos al nombre:

(17)

La sentencia recurrida (PROV 2003, 142978) contiene el fallo del siguiente tenor literal: "Que estimando parcialmente el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Bueso Sánchez, en nombre y representación de Carlos, declaramos haber lugar a los siguientes pronunciamientos: 1) Confirmamos la desestimación **presunta**, por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada ante la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, de la Junta de Extremadura

[TS 26/9/2007, Antecedentes de Hecho, primero]

El adjetivo *presunta* forma parte del grupo de los adjetivos adverbiales marcadores de la intensidad (*verdadero, falso, completo, claro*, etc.), ya que se usa para poner en duda el grado en que el nombre al que acompañan (*la desestimación*) se ajusta a la entidad a la que se refiere, es decir, la desestimación no es segura o no es una desestimación del todo (es sustantivamente una desestimación).

2. LA VOZ PASIVA EN LOS TEXTOS JURÍDICOS

Las lenguas permiten a sus usuarios conceptualizar verbalmente un evento de la realidad desde distintas perspectivas. Un evento prototípico podría describirse como la interacción entre un elemento agente y un elemento paciente en un marco determinado. Los eventos suelen expresarse lingüísticamente desde una perspectiva que parte del elemento agente

(Langacker 1991:285); de ahí que, en lenguas como el español, las oraciones activas sean las más frecuentes, pues dan relevancia al agente. Sin embargo, el español posibilita otras perspectivas, que se expresan en otras construcciones. La voz pasiva responde a una conceptualización del evento que da más relieve al elemento paciente (pasiva perifrástica) o al evento mismo (pasiva refleja).

Tanto en los textos periodísticos como en los textos jurídicos, la referencia a eventos de la realidad es necesaria y constante, y, en documentos como las sentencias judiciales, con frecuencia ha de incluirse un relato muy explícito y detallado de esos acontecimientos, pues constituyen información fundamental para la argumentación de quien redacta el texto. El profesional que escribe textos jurídicos puede sentir la conveniencia de optar por una perspectiva que ponga en primer plano el elemento que ha sufrido las consecuencias de un evento o el propio evento; por esta razón, las oraciones pasivas aparecen en las sentencias con frecuencia, aunque no siempre responden a la necesidad de abandonar la perspectiva agentiva, sino más bien a la intención de redactar el documento en un estilo pretendidamente formal.

En los epígrafes que incluimos a continuación pasamos a detallar algunos problemas que presentan las oraciones pasivas en los textos jurídicos que hemos analizado.

2.1. La pasiva mixta

La abundancia de construcciones en voz pasiva es, como hemos mencionado, otro de los rasgos que se consideran característicos del español jurídico (Alcaraz y Hugues 2002, Samaniego 2004). La pasiva que más a menudo hemos encontrado en las sentencias analizadas es la pasiva con “se” o pasiva refleja. Si bien esta estructura tiende a dejar oculta la identidad del agente, con lo que resultaría ser una más de las construcciones que aparecen en las sentencias que no ayudan al lector a aprehender de un modo claro e inmediato quién hace qué en los textos judiciales, también es bastante frecuente que aparezca acompañada de un elemento nominal introducido mediante la preposición “por” en el que se expresa precisamente el sujeto nocional, como si las mismas personas encargadas de redactar las sentencias se dieran cuenta de que ese elemento informativo, quién hace, ha de estar muy claramente expresado en estos documentos. La pasiva refleja con el sujeto nocional expresado, que se conoce como “pasiva mixta”, aparece en español en escritos jurídicos y periodísticos, pero no existe un acuerdo entre los gramáticos acerca de su aceptabilidad: la *Nueva Gramática de la lengua española* nos dice que “las pasivas reflejas muestran mayor resistencia (que las de participio) a aceptar complementos agentes. (...) Sin embargo, se aceptan a menudo en el código restrictivo del lenguaje jurídico” (2009: 3090, 41.11).

En cualquier caso, a causa de la escasísima frecuencia con que el ciudadano medio encuentra en los textos escritos en español la pasiva refleja con sujeto nocional expresado mediante sintagma preposicional con “por”, cabe pensar que este sintagma puede ser interpretado de entrada como otro tipo de complemento más habitualmente introducido por esta preposición en el ámbito de una estructura pasiva con “se”, como, por ejemplo, el complemento de causa en el ejemplo siguiente:

(18)

Se impugna por la actora el listado de acreedores elaborado por la Administración Concursal de la concursada FEMARAL SL **al haberle reconocido** como contingentes los créditos que ostentaba contra la concursada que era avalista cambiaria.

[SJM 8/2010, juzgado de lo mercantil, Madrid, Fundamentos, primero]

Creemos que la comprensión de la versión que ofrecemos resulta más sencilla e inmediata:

(18 bis)

La actora impugna el listado de acreedores elaborado por la Administración Concursal de la concursada FEMARAL SL **porque han sido reconocidos** como contingentes los créditos que ostentaba contra la concursada, que era avalista cambiaria.

Asimismo, la expectativa del lector al empezar a leer el “por” que encuentra después de “se dirigió” en el ejemplo que transcribimos a continuación podría ser de complemento de lugar:

(19)

... la solicitud de entrada y registro en la vivienda de uno de los acusados ... se dirigió por la policía al Juzgado Central nº 5,

[Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª). 1353/2009]

En los dos ejemplos que incluimos a continuación, la construcción pasiva aparece con el agente introducido por locuciones más complejas, lo cual complica, si cabe, todavía más la clara y sencilla aprehensión de la información por parte del lector:

(20)

Por parte de la admón. demandada se niega la existencia de responsabilidad patrimonial entendiéndose que el tratamiento seguido se ha acomodado a la *lex artis* e impugnando la cuantificación de la indemnización reclamada.

[SJCA 2231/2007, Fundamentos de derecho, segundo]

(21)

La patología que ha causado la baja al trabajador es una lumbociatalgia derecha secundaria a discopatía leve L5-S1 con mínima hernia discal foraminal bilateral, de mayor entidad en lado derecho. El demandante ha seguido tratamiento farmacológico, rehabilitador, infiltraciones (junio 2007, junio 2008, noviembre 2008) y bloqueo epidural (mayo 2008), con resultado poco favorable y persistencia sintomática, hasta que el 28 de mayo de 2009 **se llevó a cabo intervención quirúrgica a cargo del servicio de traumatología** de Clínica Ubarmin consistente en laminectomía y discectomía siendo de alta hospitalaria el 3 de junio de 2009. Tras ello inició proceso postoperatorio con buena evolución clínica con persistencia de dolor lumbar residual de intensidad media y desaparición completa del dolor ciático.

[SJS 28/2010 Juzgado de lo Social, Pamplona: Hechos probados, cuarto]

En otros casos, la dificultad que entraña la pasiva mixta se suma al hecho de que el agente de la estructura no es único, y tampoco el sujeto, como en el caso que reproducimos a continuación:

(22)

TERCERO. Admitido a trámite el recurso referido, de su escrito de interposición el Juzgado confirió traslado a las demás partes por el término de 5 días, durante los que **se presentaron los correspondientes escritos de impugnación por el Ministerio Fiscal y de adhesión al recurso de Andrés por Vicenta** (...)

[SAP CR 701/2009, Antecedentes]

Una versión más fácil de interpretar podría ser la siguiente:

(22bis)

TERCERO. Admitido a trámite el recurso referido de su escrito de interposición, el Juzgado confirió traslado a las demás partes por el término de 5 días, durante los cuales el Ministerio Fiscal presentó un escrito de impugnación al recurso de Andrés y Vicenta, uno de adhesión (...)

En el ejemplo siguiente, la pasiva mixta presenta un sujeto que a su vez aparece pasivizado:

(23)

Principiando por el recurso de apelación articulado por la representación procesal de Andrés, al que se adhirió Vicenta y vertebrado aquel en denuncia de infracción por indebida aplicación del artículo 468/2 del Código Penal, **ha de volverse a reiterar por esta Sala el criterio sostenido por la misma** en sentencias tales como las de fecha 29 de Marzo y 10 de Abril de 2.007 y 21 de Octubre de 2.008.

[SAP CR 701/2009, fundamentos, primero]

La alternativa que proponemos es, sin duda, más próxima a la lengua habitual del ciudadano común:

(23bis)

Esta Sala ha de volver a reiterar el criterio que ya sostuvo en sentencias tales como...

En definitiva, dado que la estructura que nos ocupa complica innecesariamente la interpretación del texto, tal y como demuestran los ejemplos que hemos aportado y las versiones alternativas de ellos que hemos propuesto, consideramos recomendable la sustitución de la pasiva mixta por otras estructuras que resultan más naturales: la pasiva perifrástica o, preferentemente, la voz activa, ya que, puesto que es de suponer que la persona que ha redactado la sentencia considera relevante la expresión del sujeto nocional de la estructura, no puede recomendarse la mera supresión del sujeto nocional introducido por la preposición “por”, es decir, la sustitución por la pasiva con “se” normativa. En la mayoría de los casos, por otra parte, la sustitución consiste simplemente en eliminar la preposición “por” que introduce el agente y el “se” de voz pasiva que aparece antes del verbo, como se puede ver en el ejemplo siguiente y la versión que de él proponemos a continuación:

(24)

TERCERO. Celebrado el juicio oral el día 26 de noviembre de 2009, comparecidas las partes, **por el Ministerio Fiscal se solicita** la condena de Gines como autor de una falta del *art. 632.2 del código penal*, a la pena de multa de 30 días, a razón de 4 Euros día.

[SJI 3/2009, Antecedentes, tercero].

(24bis)

TERCERO. Celebrado el juicio oral el día 26 de noviembre de 2009, comparecidas las partes, **el Ministerio Fiscal solicita** la condena de Gines como autor de una falta del *art. 632.2 del código penal*, a la pena de multa de 30 días, a razón de 4 Euros al día.

2.2. Uso poco natural de la pasiva perifrástica

Con el uso de la pasiva perifrástica, la persona encargada de redactar una sentencia presenta el evento al que se refiere desde una perspectiva que coloca en primer plano no al agente, sino al elemento paciente de ese evento, es decir, que adopta una perspectiva distinta de la más habitual en español. Por otro lado, las oraciones pasivas perifrásticas se usan con escasa frecuencia en el español estándar, de modo que alejan el texto del lenguaje al que los hablantes medios están más expuestos. Por estos motivos, dada la importancia que reviste el hecho de que una sentencia judicial pueda comprenderse de una manera clara y precisa, creemos que la presencia de la pasiva perifrástica en las sentencias judiciales debe limitarse a aquellos casos en que la construcción que nos ocupa no dificulta la interpretación de los elementos participantes en el evento que se está refiriendo ni se suma a la complejidad de otras estructuras que se apartan de las construcciones más simples de la lengua.

En el ejemplo (26), la complejidad de la pasiva perifrástica se suma a la de la perífrasis verbal con el verbo “poder”:

(25)

Afirmó que no entendía que se esperaba que el Banco informara, pues no tenía información privilegiada, la que existía era la que constaba en periódicos y noticias mundiales, que **podría haber sido entendida por** los hoy actores.

[SJPI 40/2010, Fundamentos de Derecho, primero]

En el caso que reproducimos a continuación, a pesar de su brevedad, la información está constituida por un gran número de elementos: quién detectó, qué, dónde, cuándo; quién entró, dónde, cuándo.

(26)

... había sido detectada su entrada en España por Aduanas en el Puerto de Valencia el día 23.06.08.

[STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª). 1353/2009, Antecedentes]

Dada la complejidad del evento al que se hace referencia, la estructura ordenada desde la perspectiva más prototípica resulta más fácilmente comprensible, como muestra la versión que proponemos:

(26bis)

Los empleados de Aduanas habían detectado su entrada en el Puerto de Valencia el día 23 de junio de 2008.

Por otra parte, el complemento introducido por la preposición “por” resulta difícil de interpretar, pues podría ser complemento agente o complemento de lugar.

En el ejemplo (28), lo que añade dificultad a la oración pasiva es que, entre el verbo y el agente, aparecen demasiados elementos:

(27)

... toda forma de participación que implique una colaboración en actividades de tráfico de drogas, es una forma de autoría al haber sido equiparada con ésta las formas imperfectas de participación por la propia ley.

[STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª). 1353/2009]

En el caso que incluimos a continuación, la pasiva perifrástica se añade a una alteración añadida del orden natural de la frase:

(28)

Leídas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excm. Sr. D. Luciano Varela Castro.

[STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 1353/2009]

La versión siguiente resulta, sin duda, más fácilmente comprensible:

(28bis)

El Magistrado Ponente Excm. Sr. D. Luciano Varela Castro ha leído y publicado las sentencias anteriores.

3. PROBLEMAS SINTÁCTICOS RELACIONADOS CON ELISIONES

133

El último fenómeno del que vamos a ocuparnos en este capítulo es el de las elisiones. La omisión de determinados elementos de la frase se ha venido considerando una característica del español jurídico. Sin embargo, la presencia de algunas de las elisiones que suelen describirse como típicas de los documentos jurídicos en español no tiene una presencia significativa en nuestro corpus de textos, en los que, en cambio, sí están profusamente representados otros casos, como veremos en los ejemplos que incluimos en los epígrafes siguientes.

3.1. Elisión de la conjunción completiva “que”

La elisión de la conjunción completiva “que” se considera un rasgo característico del lenguaje jurídico, así como de otros géneros escritos formales del español (Samaniego 2004); no obstante, su presencia en nuestro corpus no nos parece significativa.

3.2. Elisiones de determinantes y preposiciones

Hemos hallado, en cambio, numerosos ejemplos de elisión antinormativa de determinantes y preposiciones. A menudo, estas omisiones se producen antes de la referencia a una fecha concreta y a un documento o una disposición legal o judicial, como en los ejemplos (29) y (30):

(29)

Con fecha 23 de enero de 2004 se cursó \emptyset Orden Europea de Detención y Entrega de la acusada a las Autoridades francesas, que accedieron por \emptyset Decreto de Extradición de fecha \emptyset 9 de agosto de 2004. \emptyset 11 de noviembre de 1997 se acordó solicitar la extradición de la acusada aprobó a las Autoridades francesas.

Con fecha \emptyset 28 de febrero de 2006 se declaró concluso el sumario y con fecha \emptyset 7 de marzo de 2006 se elevó la presente causa a esta Sección, incoándose con el número 23/1987.

[SAN, 55/2006, Antecedentes de hecho, segundo]

(30)

En el presente caso, tras dictarse por el INSS en fecha 0 19/05/2005 0 resolución a la reclamación previa, la empresa formuló 0 demanda que fue turnada al juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia, el que en fecha 0 20/09/2005 dictó 0 auto por el que tuvo por desistida a la parte demandante. Contra esta resolución judicial interpuso la empresa 0 recurso de reposición, que fue desestimado por 0 auto de 0 11/11/2005, y, posteriormente, 0 recurso de queja, que tuvo idéntica suerte desestimatoria mediante 0 auto dictado por la Sala de lo Social de 0 06/02/2006.

[SJS 37/2007. Murcia: Fundamentos, primero]

También resulta frecuente la omisión del determinante ante nombres que hacen referencia a cargos, como en (31):

(31)

Segundo.- Por providencia de fecha 2-6-09 se registró tal demanda, designándose asimismo 0 Magistrado Ponente.

[SAN 3911/2009, Antecedentes]

Asimismo, la elisión del determinante se produce de modo casi sistemático ante partes del cuerpo, daños físicos o dolencias:

(32)

Como consecuencia de lo anterior, la Sra. Inmaculada sufrió 0 erosión de 2 x 2 centímetros en 0 región fronto-temporal derecha sobre 0 pequeño fondo inflamatorio, 0 pequeño foco inflamatorio en 0 región parietal izquierda, 0 hematoma de 5 x 3 centímetros oblicuo en 0 tercio medio de 0 cara posterior de 0 antebrazo derecho, erosiones en 0 cara y 0 cuello, y 0 marca de reloj y pequeñas erosiones puntiformes en 0 zona adyacente.

[SJP 428/2009. Barcelona: Hechos probados, segundo]

El hecho de que se trate de elisiones antinormativas bastaría para recomendar a las personas encargadas de la redacción de documentos judiciales que se esforzaran por evitarlas, a pesar de que no dificultan excesivamente la comprensión del texto. Sin embargo, hay otro motivo que nos impulsa a insistir en esta recomendación: hemos hallado en el corpus ejemplos de elisiones de determinantes y preposiciones que sí dificultan la comprensión del texto y que parecen deberse a distracciones causadas, tal vez, por una cierta relajación en cuanto al uso de estas categorías gramaticales. Este fenómeno se puede comprobar en los ejemplos que aportamos a continuación:

(33)

Por el delito de tenencia ilícita 0 armas y municiones la pena de ocho años de prisión.

[SAN 25/2005, Antecedentes de hecho, tercero]

(34)

Después de esto, Juan Pedro se desplazó nuevamente hasta su lugar de residencia, Hernani, guardando en un armario de su dormitorio la pistola HS y la mochila con la ropa que se había quitado en el garaje de Larratxo, saliendo a continuación a la calle donde fue detenido sobre las 11:30 horas como consecuencia de 0 operación que para localizarle se había puesto en marcha.

[SAN 25/2005, Hechos probados, sexto]

(35)

A simple vista, no parece que pueda hablarse de riña mutuamente aceptada cuando uno de los contendientes, durante todo el forcejeo, se encuentra inmovilizado de manos y el otro no presenta ninguna lesión de bofetadas, 0 patadas o de rodillazos.

[SJP 428/2009. Barcelona: Fundamentos, séptimo]

(36)

SÉPTIMO. Como ya se ha fundamentado con anterioridad, el Sr. José Ángel fue arañado por su mujer tras forcejear ambos en el umbral de la puerta, lo que en principio podría llevar a pensar en la existencia de una riña mutuamente aceptada y 0 excluir la legítima defensa.

[SJP 428/2009 Fundamentos]

3.3. Otras elisiones

Tal y como se ha repetido con insistencia en este informe, la sentencia judicial es un texto de extraordinaria complejidad; de ahí que su redacción exija una actitud atenta y escrupulosa.

Alguna vez, en las sentencias que constituyen nuestro corpus, el profesional encargado de la redacción, tal vez por abreviar un periodo del texto que estima demasiado largo, elide información sintáctica sin la cual el fragmento resulta difícilmente comprensible, como en (37):

(37)

En este caso concreto, centra su planteamiento el sindicato actor en la existencia de una actitud agresiva contra el colectivo de los Controladores Aéreos, que en su inmensa mayoría están afiliados a USCA, y también antisindical contra USCA y sus representantes, por parte de AENA, tal y como literalmente dice en su demanda, refiriéndose también a un enfrentamiento y a un ambiente "atípico" y "beligerante", como manifestó la asistencia letrada del sindicato en el acto del juicio.

[SAN 3911/2009]

Si recuperamos la información que se ha omitido, el fragmento se comprende con mayor facilidad:

(37bis)

En este caso concreto, centra su planteamiento el sindicato actor en la existencia de una actitud agresiva contra el colectivo de los Controladores Aéreos, que en su inmensa mayoría están afiliados a USCA, y también **centra su planteamiento en una actitud** antisindical contra USCA y sus representantes, por parte de AENA, tal y como literalmente dice en su demanda, refiriéndose también a un enfrentamiento y a un ambiente "atípico" y "beligerante", como manifestó la asistencia letrada del sindicato en el acto del juicio.

Consideramos recomendable no elidir información salvo que la persona que lo haga utilice después mecanismos de revisión que garanticen la inteligibilidad del texto.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL LÉXICO

1. INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL LÉXICO JURÍDICO

Uno de los rasgos caracterizadores del español jurídico es, sin duda, su especificidad respecto del léxico. Así, se conviene siempre en destacar que en torno al Derecho se ha ido formando un lenguaje técnico especializado que se refleja en los productos textuales de los distintos ámbitos del español jurídico; entre ellos, en el ámbito judicial.

Este lenguaje técnico especializado, con sus usos particulares y su especificidad semántica, con acepciones que lo apartan del uso común, es una de las causas que más directamente condicionan la dificultad de comprensión de los textos jurídicos por parte del ciudadano medio (Gutiérrez 2010, Hernando de Larramendi 2001; Alcaraz y Hughes 2002). Se trata, pues, de uno de los rasgos que determinan el desajuste que se produce entre el lenguaje empleado en los documentos jurídicos y el dominio léxico de la mayoría de los receptores de estos documentos (González Salgado 2009).

La razón del uso de este lenguaje técnico especializado es doble: por un lado, se pretende conseguir la máxima precisión conceptual (González Salgado 2009), lo que veremos que va asociado a otros usos léxicos y, paradójicamente, también conlleva en ocasiones ambigüedad y complejidad; por otro lado, se pretende recurrir a un léxico y a unos giros expresivos cultos acordes con el grado de formalidad exigido a los documentos legales (Tomás Río 2005). Esto último conduce también a menudo hacia un estilo artificial, a veces arcaico, y a un barroquismo expresivo, incompatibles con los rasgos de claridad, precisión y concisión de igual modo exigidos a los textos jurídicos y, en concreto, a los textos judiciales.

Así, a la opacidad de los términos jurídicos para el ciudadano medio se añade, pues, una tendencia hacia la redundancia expresiva (reiteraciones y sinónimos consecutivos), el archisilabismo (palabras largas) y el archiverbalismo (perífrasis verbales), el recurso a locuciones nominales, adverbiales y preposicionales innecesarias, como veremos más adelante en este apartado. Hay que añadir aquí algunas impropiedades léxicas. Todo ello enmaraña y añade complejidad a un discurso que se pretende accesible para el ciudadano.

Somos conscientes de que el lenguaje jurídico difícilmente podrá renunciar a su especificidad léxica, porque algunos elementos del nivel léxico ciertamente refuerzan la exactitud y la concisión que deben imperar en el contenido de un documento judicial (González Salgado: 3). Con todo, estimamos que sí puede hacerse un esfuerzo por evitar el uso de unidades léxicas o de expresiones que resultan difíciles de comprender (latinismos, por ejemplo), o que se sienten ya anacrónicas, cuando con una selección léxica distinta se consigue la misma claridad y precisión. También puede hacerse un esfuerzo por evitar rodeos y el alargamiento innecesario de los textos con expresiones redundantes o vacías de contenido.

Detallamos a continuación estos usos lingüísticos no recomendables que documentamos en los textos que constituyen nuestro corpus de sentencias. Hemos organizado la exposición y el comentario de estos usos en dos apartados, bajo el epígrafe *Principales problemas relacionados con el dominio léxico de los géneros jurídicos*: (a) *Particularidades léxicas*, y (b) *Particularidades estilísticas*. Siguiendo el esquema habitual en este informe, en cada uno de estos dos apartados describiremos cada patología y aportaremos ejemplos comentados representativos del fenómeno que se describe. En algunos casos ofreceremos alguna versión alternativa o ejemplos de buenas prácticas, también documentados en nuestro corpus.

2. PRINCIPALES PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL DOMINIO LÉXICO DE LOS GÉNEROS JURÍDICOS

2.1. Particularidades léxicas

2.1.1. Formulismos

Una de las particularidades que más llama la atención al ciudadano medio que recibe un documento judicial como una sentencia es el frecuente recurso a fórmulas estereotipadas sentidas en la actualidad como anacrónicas. Ciertamente, lejos de conseguir claridad y concisión, el apego a estas fórmulas estereotipadas ancla el lenguaje jurídico en un conservadurismo que aleja el texto de las sentencias de los usos lingüísticos a los que el ciudadano medio está hoy habituado.

Se trata de fórmulas fijas que alargan innecesariamente, con rodeos y expresiones vacías, sobre todo los inicios o los finales de las partes que abren o cierran los discursos jurídicos que manejamos. Estas fórmulas se documentan, pues, especialmente, en el *Encabezamiento*, que inaugura el texto de las sentencias, y en el *Fallo*, que cierra el texto. Por perturbar la agilidad en la comprensión de segmentos textuales tan altamente relevantes para quien recibe un documento jurídico, como el Encabezamiento o, sobre todo, el Fallo, y por sentirse ya como anacrónicas, el recurso a estas fórmulas es hoy desaconsejable.

He aquí algunos ejemplos de formulismos (señalados en negrita) documentados en el Encabezamiento de las sentencias:

(1)

En el recurso de casación por infracción de ley y de precepto constitucional, **que ante Nos pende**, interpuesto por la representación de Celestino, contra Auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional sobre liquidación de condena; los Excmos. Sres. Componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo **que al margen se expresan** se han constituido para la Votación y el Fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz, **siendo parte** el Ministerio Fiscal, **estando representado** el recurrente por la Procuradora Doña María Luisa Estrugo Lozano.

[STS 174/2010. Madrid: Encabezamiento]

(2)

Es parte el Ministerio Fiscal y ponente el Ilmo. Sr. Don Javier Gómez Bermúdez, que **por medio de la presente**, expresa el parecer del Tribunal.

[Audiencia Nacional 25/2005. Madrid: Encabezamiento]

(3)
Vistos, en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario número 15/2007 (...)
[SAP B 14345/2009. Barcelona: Encabezamiento]

Solo en ocasiones se observa en el Encabezamiento un intento por simplificar este formulismo, o por romper con él:

(4)
La lltma. Sra. Dña. MILAGROS DEL SAZ CASTRO, MAGISTRADO JUEZ del Juzgado de Primera Instancia número DIECISIETE de los de esta capital, **ha visto** los presentes autos de Mayor Cuantía 708/97, promovidos por Josefa Valcárcel 42 SA, **representada** por el procurador Sr. Juan, contra Estacionamientos Subterráneos S A, **representada** por el Procurador Sr. Sastre Moyano (...)
[SJPI 7/2000. Madrid: Encabezamiento]

El uso de fórmulas estereotipadas se retoma en el párrafo que precede al Fallo. Se emplea aquí la siguiente fórmula, con variantes:

(5)
VISTOS los preceptos legales citados y **demás de general y pertinente aplicación**
[SAN 3911/2009. Madrid: Fallo]

(6)
Vistos, además de los citados los artículos **de general y pertinente aplicación**
[SJPI 7/2000. Madrid: Encabezamiento]

En cualquier caso, el rodeo innecesario por acumulación de formas estereotipadas se hace especialmente significativo en la redacción del Fallo. Se explica aquí posiblemente por un pretendido afán de máxima precisión y de énfasis expresivo (Samaniego 2004: 89), dada la relevancia del Fallo para quien redacta y para quien recibe la sentencia:

(7)
Que debemos desestimar y desestimamos la demanda interpuesta por la Unión Sindical de Controladores Aéreos contra la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (...)
[SAN 3911/2009. Madrid: Fallo]

(8)
Que debemos condenar y condenamos a Romeo, como autor de un delito de falsedad documental a la pena de un año y medio de prisión (...)
Asimismo **debemos absolver y absolvemos** a Conrado del delito de falsedad (...).
[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Fallo]

Aun así, no podemos más que subrayar, de acuerdo con Tomás Ríos (2005: 10), que la acumulación de fórmulas solo proporciona desaceleración en el ritmo discursivo y, por tanto, un retraso en el aporte de información.

De hecho, hay jueces que ya prescinden -a nuestro juicio, acertadamente- de estos rodeos:

(9)
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGON, S.L., contra la *sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona con fecha 11 de diciembre de 2007*, en autos de los que dimana el presente Rollo, que **CONFIRMAMOS**, con imposición de las costas de esta segunda instancia a la parte apelante.
[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fallo]

El Fallo acoge, asimismo, una fórmula fija que incluye una expresión referencial; en concreto, el pronombre neutro *lo* (señalado en cursiva) de referente ambiguo o de difícil interpretación. Claro está, esta ambigüedad es contraria a la claridad deseada. Esta es la fórmula recurrente:

(10)
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, ***lo* pronunciamos, mandamos y firmamos.**
[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fallo]

Otros formulismos arcaicos del Fallo, con muestras de enfatización arcaica del demostrativo (Samaniego 2004: 293) *-esta nuestra sentencia-*, quedan ejemplificados en la siguiente secuencia:

(11)

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así **por esta nuestra sentencia**, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- **Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha**, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, **celebrando audiencia pública. Doy fe.**

[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fallo]

Todos estos formulismos presentan variantes, como ilustramos a continuación tomando como punto de referencia el ejemplo anterior:

(12)

PUBLICACIÓN: **Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia** por el Ilmo. Sr. Magistrado **que la dicta en el día de la fecha, estando constituido en Audiencia pública, de todo lo cual yo el secretario doy fe**

[SJP 10/2009. Getafe: Fallo]

(13)

PUBLICACIÓN.- **En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución** por el Istmo. Sr. Magistrado **que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.**

[SJS 4-2007: Fallo]

Insistimos en que los formulismos, además de entorpecer la comprensión del texto jurídico, confieren un tono arcaizante y conservador a las sentencias alejado de los usos del español general actual.

2.1.2. *Tratamientos protocolarios. Aspectos de cortesía*

La presencia de fórmulas estereotipadas en el texto de las sentencias no es el único rasgo conservador de estos discursos. El uso de ciertos títulos y tratamientos interpersonales confiere también un tono arcaizante a los textos judiciales y dificulta, asimismo, el acceso al lenguaje jurídico para el público en general. A nuestro juicio, esta práctica se explica por la necesidad de manifestar un alto grado de solemnidad y de cortesía reglada como rasgo -hasta ahora- caracterizador del lenguaje jurídico.

Efectivamente, en todas las sentencias que constituyen nuestro corpus son recurrentes tratamientos jerárquicos como los que a continuación ejemplificamos. Se documentan especialmente en el Encabezamiento y en la *Publicación* del Fallo, donde suele mencionarse a los juristas que participan del acto judicial:

(14)

El **Ilmo. Sr. D. Abel Téllez Aguilera**, Magistrado titular de este Juzgado, ha visto en juicio oral y público celebrado el día 12 del mes en curso el Procedimiento Abreviado nº 355/2008 procedente del Juzgado de Instrucción nº 2 de Aranjuez seguido por delito de maltrato familiar contra el acusado **D. Eulalio**, nacido el 28-6-1964, hijo de Antonio y M^a Luisa, con DNI NUM000, actualmente ingresado en el Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera), que ha sido representado por el Procurador **Sr. D. Félix González Pomares** y defendido por el Letrado **D. Fernando Pamos de la Hoz**, actuando como parte acusadora el Ministerio Fiscal y como acusación popular la Abogacía del Estado, dictando, **en nombre de Su Majestad el Rey**, la presente sentencia.

[JP 10/2009. Getafe: Encabezamiento]

(15)

En el recurso de casación por infracción de ley y de precepto constitucional, que ante Nos pende, interpuesto por la representación de Celestino, contra Auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena; los **Excmos. Sres.** componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la Votación y Fallo bajo la Presidencia y Ponencia del **Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz**, siendo parte el Ministerio Fiscal, estando representado el recurrente por la Procuradora **Doña María Luisa Estrugo Lozano**.

[STS 1724/010. Madrid: Encabezamiento]

(16)
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el *Ilmo. Sr. Magistrado* que la ha dictado cuando (...)

[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fallo]

(17)
PUBLICACIÓN.- Leídas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente *Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro*, mientras (...)

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Fallo]

Estimamos que estas formas de tratamiento son propias de un funcionamiento de las relaciones sociales más jerárquico que el que describen nuestras formas de relación actuales. Además, convenimos, también, con Tomás Ríos (2005), en que estos títulos y tratamientos confieren un tono autoritativo-subordinativo al texto de las sentencias, que lleva una vez más al distanciamiento entre quienes administran la Justicia y el ciudadano medio.

Ocorre, por otro lado, que en alguna sentencia no es sistemático el recurso a estas formas de cortesía en el tratamiento:

(18)
Vista en juicio oral y público por la Sección Tercera de esta Audiencia, el Procedimiento Abreviado número 45 del año 2.006, Rollo número 14 de 2.008 seguido por el Juzgado de Instrucción número uno de La Carolina por el delito de Falsedad en documento mercantil y apropiación indebida contra el acusado Modesto , hijo de Pedro, de Isabel, de 58 años de edad, natural de La Carolina (Jaén) y vecino de la misma localidad, sin antecedentes penales, declarado parcialmente solvente, en prisión provisional por esta causa desde el 22 de enero de 2.002 al 20 de diciembre de 2.002, representado por **la Sra. Procuradora D^a. M^a Teresa Cátedra Fernández** y defendido por el **Sr. Letrado D. Pablo Luna Quesada**, siendo parte el Ministerio Fiscal representado **D. Fernando López García** de la Serrana, y como Acusación Particular BANESTO S.A., representado por **la Procuradora D^a M^a del Valle Herrera Torrero** y defendido por **el Letrado D. José Antonio Jiménez Gutiérrez** y Ponente **la Magistrada D^a. LOURDES MOLINA ROMERO**.

[SAP J 835/2009. Jaén: Encabezamiento]

Solo en algunas sentencias el tratamiento cortés es ya más cercano al que describen los usos cortesés actuales:

(19)
La *Ilma. Sra. Dña. MILAGROS DEL SAZ CASTRO, MAGISTRADO JUEZ* del Juzgado de Primera Instancia número DIECISIETE de los de esta capital, ha visto los presentes autos de Mayor Cuantía 708/97, promovidos por Josefa Valcárcel 42 SA, representada por **el procurador Sr. Juanas Blanco**, contra Estacionamientos Subterráneos S A, representada por el Procurador **Sr. Sastre Moyano**, Banco Central Hispanoamericano, SA., representada por el **Procurador Sr. García Guillen**, Rheinhyp Reinische Hypothekbank AG, representada por la Procuradora Sra. Arranz De Diego y Huarte SA, representada (sic) por el **Procurador Sr. Morales Price**.

[SJPI 7/2000. Madrid: Encabezamiento]

También se llega a prescindir de las fórmulas de tratamiento, lo que facilita aún más la lectura. Con todo, se restan recursos a las manifestaciones de cortesía:

(20)
Vistos, en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario número 15/2007 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona a instancia de PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGÓN, S.L. representada por **el procurador José Luís Aguado Baños** contra PAVIMENTOS IMPRESOS CPJ, S.L., representada por **el procurador Federico Barba Sopena**. Estos autos penden ante la Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2007.

[SAP B 14345/2009. Barcelona: Encabezamiento]

Por otro lado, cabe, asimismo, señalar que el tratamiento honorífico que reciben los agentes judiciales no se aplica al resto de los ciudadanos mencionados en el texto de las sentencias: los ciudadanos que no representan a la Justicia (acusados, testigos, etc.) son solo a veces introducidos en el discurso mediante una fórmula de tratamiento. Se corre, pues, el riesgo de que esta práctica, por comparación, llegue a ser interpretada como una falta de respeto hacia los ciudadanos:

(21)

El Ilmo. Sr. D. Abel Téllez Aguilera, Magistrado titular de este Juzgado, ha visto en juicio oral y público celebrado el día 12 del mes en curso el Procedimiento Abreviado nº 355/2008 procedente del Juzgado de Instrucción nº 2 de Aranjuez seguido por delito de maltrato familiar contra **el acusado D. Eulalio**, (...) [SJP 10/2009. Getafe: Encabezamiento]

(22)

Vista en juicio oral y público por la Sección Tercera de esta Audiencia, el Procedimiento Abreviado número 45 del año 2.006, Rollo número 14 de 2.008 seguido por el Juzgado de Instrucción número uno de La Carolina por el delito de Falsedad en documento mercantil y apropiación indebida contra **el acusado Modesto**, hijo de Pedro y de Isabel, (...) [SAP J 835/2009. Jaén: Encabezamiento]

En cualquier caso, solo en secuencias narrativas la ausencia de estas fórmulas de tratamiento puede ser interpretada como un recurso eficaz para conseguir una narración menos farragosa:

(23)

El día 23 de diciembre de 2003, siguiendo el plan previsto, los procesados recogen el material que habían depositado en el garaje de **Eugenio**. Para ello se desplazan hasta allí en dos vehículos diferentes; **José Ramón** en un Opel, modelo Frontera, matrícula QJ-OY, propiedad de **Pedro**, usado por su hija **María Ángeles** (...) [Audiencia Nacional 25/2005. Madrid: Hechos Probados, quinto]

Hay que añadir en este apartado que las abreviaciones con las que suelen introducirse en el texto los títulos y fórmulas de tratamiento poco frecuentes en el trato actual tampoco contribuyen a facilitar la lectura de los textos: *Excmo.*, *Ilmo.* Trataremos sobre otras abreviaciones más adelante (vid. § 2.1.7).

2.1.3. Latinismos

El conservadurismo que aleja al ciudadano del discurso jurídico alcanza a otros usos léxicos: la influencia del Derecho Romano en el campo jurídico actual todavía se refleja en los numerosos latinismos que se incluyen en los textos jurídicos que manejamos.

Se trata sobre todo de palabras o de locuciones latinas que expresan principios generales del Derecho y que resultan de gran precisión jurídica, transparentes en su significado para letrados, jueces o magistrados. Su precisión conceptual evita, de hecho, falsas interpretaciones del texto jurídico por parte de estos profesionales del Derecho (Henríquez Salido 2005: 607). Sin embargo, estos latinismos, que no han cambiado su forma original, suelen resultar desconocidos y crípticos para el ciudadano lego.

Hemos extraído del texto de las sentencias de nuestro corpus algunos ejemplos representativos de palabras o de locuciones latinas (señaladas en negrita) que estimamos difíciles de comprender para un desconocedor del Derecho:

(24)

El semáforo o señal de salida S2/4 es perfectamente visible desde el Gabinete de Circulación de la estación de Chinchilla, como se ha podido comprobar **“de visu”** por el tribunal (...), (...) [SJP 19/2006. Albacete: Fundamentos]

(25)

(...) la valoración como indicio de la ausencia de una explicación alternativa por parte del acusado, de la acreditación de la falsedad de sus manifestaciones o de su manifiesta inverosimilitud, no implica invertir la carga de la prueba ni vulnera el principio **“nemo tenetur”**, siempre que exista (...) [SJP 19/2006. Albacete: Fundamentos]

(26)

Entrando ya en la motivación jurídica de la sentencia, hemos de comenzar afirmando que, en lo relativo a la tipificación penal de las conductas imprudentes, es preciso recordar que, en el Código Penal de 1995, se ha pasado del sistema abierto que contenía el Código Penal de 1973 (**crimen culpae**) a un sistema de **numerus clausus (crimina culposa)**, de modo que como recensa el Tribunal Supremo (...) [SJP 19/2006. Albacete: Fundamentos]

(27)

(...) el principio de seguridad jurídica, fundamentado en la regla “**pacta sunt servanda**”, que se quebraría de aceptarse la posibilidad de revocar lo pactado;

[SAP J 835/2009. Jaén: Fundamentos, primero]

(28)

(...) (b) la conducta desleal denunciada fue constante y continuada desde el día 1 de junio de 2004 hasta la actualidad. De lo que, a juicio de la actora, el **dies a quo** para el cómputo del plazo de prescripción se actualiza diariamente por ser con esta frecuencia con la que suceden los actos violatorios.

[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fundamentos, primero]

(29)

1º y 3º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim se invoca vulneración de derecho a la Presunción de Inocencia y a la tutela judicial efectiva, al no describirse en el **factum** “hechos susceptibles de subsumirse en una conducta delictiva de tráfico de estupefacientes”

[Tribunal Supremo 1353/2009, Antecedentes, cuarto]

(30)

No procede declarar la deslealtad por explotación de secretos empresariales **ex art. 13 LCD**, por no resultar probado, ni haber aportado la actora datos para ello (...)

[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fundamentos, tercero]

(31)

Este Tribunal entiende que dicha conversación es una acción ejecutada en el **iter criminis** del delito de cohecho y en el **iter criminis** del delito de prevaricación judicial (...)

[Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 10/008. Granada, Fundamentos, segundo]

Observamos, eso sí, cómo algún juez, tal vez más sensibilizado con las dificultades de comprensión que estos latinismos pueden causar, desarrolla estrategias que facilitan la comprensión del significado de estos préstamos: parafrasea el significado de las expresiones latinas antes de introducirlas en el texto.

Así se observa en esta secuencia textual respecto del latinismo *eventos damni*, de manera que la expresión latina se incluye entre paréntesis tras haber sido desarrollado previamente su significado. Buscando la precisión, el juez consigue de este modo generar dos niveles de lectura, uno destinado al ciudadano, y el otro destinado al profesional del Derecho:

(32)

Por lo expuesto, justificado que los créditos existían anteriormente a las donaciones (...) y que con las donaciones se ocasiona a los acreedores un perjuicio (**eventos damni**) surge el fraude (**in re ipsa**) al ver disminuido su patrimonio (...)

[STC 37/2009. Barcelona, Fundamentos]

Con todo, el ejemplo muestra también cómo el desarrollo de este tipo de estrategias no es sistemático. En este caso, el juez también podría haber parafraseado la segunda expresión latina: *in re ipsa*; esto es, ‘por sí solo, sin necesidad de prueba’, pero no lo hace. Deja, pues, este obstáculo en su discurso para el lector profano.

Añadiremos, aparte, que no siempre se conoce con precisión la forma de la locución latina. El ejemplo con el que cerramos este apartado documenta “*condictio sine qua non*”, frente a la forma latina correcta “*conditio sine qua non*”:

(33)

En segundo lugar, no parece que el “oficio” al que se refiere el art. 564 sea “*condictio sine qua non*” que pudiera determinar la nulidad de una entrada y registro en edificio o lugar público (...)

[STSJ 10/2008. Granada: Fundamentos, cuarto]

2.1.4. Arcaísmos

Más cuestiones sobre el conservadurismo del discurso jurídico: al tono conservador que confieren al texto de las sentencias formulismos, ciertos tratamientos corteséses y préstamos

del latín se añade la selección de ciertas otras piezas léxicas hoy también anacrónicas, para la redacción de las partes de este género judicial.

Aportamos aquí algunas muestras (señaladas en negrita) de este léxico anacrónico, no técnico, y alejado, pues, de los usos lingüísticos del español general contemporáneo, que también entorpecen la lectura de los textos. Son muestras de giros arcaicos, que además confieren a las sentencias un tono altisonante que difícilmente acepta el ciudadano actual:

(34)

De todo lo anterior, (...) hemos de concluir (...) que ha de darse como acreditado el relato de los hechos consignados en nuestro factum, relato respecto del cual, tanto acusado como perjudicada han dado una **mendaz** versión (...)

[SJP 10/2009. Getafe: Fallo]

(35)

Resuelto a hacer la compra, en días posteriores al 7 de febrero, el acusado **aforado** encargó a su amigo el también acusado Gerardo (...) que le buscara un abogado para redactar los documentos necesarios para la compra de la vivienda. Así lo hizo este último quien transmitió el encargo al también acusado Juan Alberto (...) quien aceptó la **encomienda**, con conocimiento del acusado aforado (...)

[Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 10/2008. Granada: Hechos probados]

(36)

La parte **dispositiva** de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: Con desestimación íntegra de la demanda interpuesta por el procurador Sr. Aguado Baños, en nombre y representación de PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGÓN S.L., no **ha lugar a** imponer la cesación de la actividad (...)

[SAP B 14345/2009. Barcelona: Antecedentes, primero]

(37)

D. Víctor (...) ha mantenido con total integridad y sin aditamentos progresivos, el núcleo de su versión inculpativa, lo que demuestra una objetividad ajena a los avatares intersubjetivos con el acusado **habidos** con posterioridad a los hechos.

[SJP 10/2009. Getafe: Fundamentos, primero]

Algunos de estos arcaísmos satisfacen una función conectiva entre enunciados o partes de enunciados:

(38)

Contra lo dicho por el recurrente, la sentencia de instancia no solamente descarta la atenuación **por morde** la naturaleza del delito y la persistencia en el tiempo del comportamiento delictivo.

[Tribunal Supremo 1353/2009, Fundamentos, sexto]

(39)

(...) Pero **como quiera que** los perjudicados por la operación ni el Ministerio Fiscal han solicitado la devolución de estas cantidades, no se hará mención de las mismas.

[SAP J 835/2009. Jaén: Fundamentos, quinto]

También hay arcaísmos usados específicamente para establecer referencias anafóricas. Los determinantes anáforas *dicho* o *tal*, por ejemplo, sobreutilizados en los textos de las sentencias en ese afán de precisión por marcar los textos con referencias exactas a lo dicho anteriormente, son herencia del lenguaje legal de la Edad Media (González Salgado 2009: 9). Por contraste, el español común utiliza con poca frecuencia *dicho* y *tal*:

(40)

PRIMERO.- Por el Procurador mencionado en la representación ostentada, se formuló demanda de divorcio contencioso, en la que se hizo constar que las partes contrajeron matrimonio civil el día 21 de Junio de 2001 (...) Añadiendo que **dicho** matrimonio ha nacido y vive una hija menor de edad (...)

[SJPI 15/2008. Gerona: Antecedentes, primero]

(41)

Igual solución ha de afirmarse, en cuanto al hecho de la trasgresión no de **tal** pena accesoria, sino de las medidas cautelares adoptadas en sede de los *artículos 544/Bis y 544/Ter de la Ley Rituaria Criminal*.

[SAP CR 7017 009: Ciudad Real, Fundamentos, segundo]

(42)
PRIMERO- Por la **mentada** representación de la parte actora se presentó demanda (...)
[SJPI 7/2000. Madrid: Antecedentes, primero]

Documentamos, también, otros giros sentidos arcaicos al servicio de la intertextualidad, en las referencias a otros textos legales:

(43)
Al amparo de los arts. 849 de la LECrim. Y 5.4 de la LOPJ se invoca vulneración del art. 18.3 de la CE, en relación con el derecho al secreto de las comunicaciones, así como del art. 24 de la CE.
[Tribunal Supremo 1353/2009, Antecedentes, cuarto]

Es posible que el recurso a estos arcaísmos responda a la intención de dotar al discurso de una apariencia culta. Lo que se consigue, sin embargo, es, una vez más, dificultar la comprensión del significado del texto legal.

2.1.5. Giros poco habituales

Tampoco se consigue eficacia en el afán de dotar a los textos jurídicos del grado de formalidad, precisión y de apariencia culta deseado cuando se sobrepasan los límites de lo adecuado y los términos o giros formales a los que se recurre, sin ser propiamente jurídicos, y sin ser propiamente arcaicos, son tan poco habituales que ni siquiera son propios de textos contemporáneos de nivel culto.

Dudamos, pues, de que en un texto culto se usen hoy términos o giros como los que ofrecen algunas sentencias:

(44)
(...) Existe, pues, prueba directa, de tres secuencias (alzar el brazo derecho del acusado teniendo en frente suya a la perjudicada, lanzarlo hacia abajo en **ademán de acometimiento**, y quedar inmediatamente después de ello ésta en el suelo) que bajo las reglas de la más esencial de las lógicas hace comprender a cualquiera como **aconteció el acto agresivo**.
(...)
D. Victor (...) ha mantenido con total integridad y sin **aditamentos** progresivos, el núcleo de su versión incriminatoria, lo que demuestra una objetividad ajena a **los avatares intersubjetivos** con el acusado habidos con posterioridad a los hechos.
3º.- Finalmente (...) contamos con la testifical indirecta del agente de la Policía Local de Majadahonda nº 162 quien con **total robustez asertiva** vino a señalar que (...)
[SJP 10/2009. Getafe: Fundamentos, primero]

(45)
Bastará, eso sí, que tal justificación de la duda se consiga, o, lo que es lo mismo, que existan buenas razones que **obsten** aquella certeza objetiva sobre la culpabilidad, para que la garantía constitucional deje sin legitimidad una decisión de condena (...)

Puede, pues, decirse, finalmente, que cuando existe una duda objetiva debe actuarse el efecto garantista de la presunción constitucional, con la subsiguiente absolución del acusado. Sin que aquella duda sea parangonable a la duda subjetiva del juzgador, que puede asaltarle pese al **colmado** probatorio que justificaría la condena.
[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Fundamentos, séptimo]

(46)
La parte dispositiva de la resolución apelada es del **tenor literal** siguiente: Con desestimación íntegra de la demanda interpuesta por el procurador Sr. Aguado Baños, en nombre y representación de PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGÓN S.L., no ha lugar a imponer la cesación de la actividad (...)
[SAP B 14345/2009. Barcelona: Antecedentes, primero]

Estos pretendidos giros cultos confieren al texto un barroquismo difícil de aceptar en textos que, insistimos, deben caracterizarse por su claridad expositiva.

Por otro lado, a nuestro juicio no resulta tampoco eficaz el uso de giros cultos que quedan fuera del dominio del léxico de la mayoría de los receptores de los documentos.

Dudamos, pues, igualmente, de que un ciudadano medio pueda alcanzar a conocer términos o giros como los que se ofrecen en los siguientes ejemplos:

(47)

Dado que el relato **fáctico**, pese a su **unidad teleológica**, se desarrolla en dos secuencias (dentro y fuera del hotel), procederemos a su análisis por separado (...)

[SJP 10/2009. Getafe: Fundamentos, primero]

(48)

(...) al dejarse en manos de la víctima la posibilidad de dejar sin efecto una pena judicialmente impuesta, por no hablar desde otro plano más material de las distorsiones que ello podría provocar de cara a la ejecución de tal pena accesoria al hacerse depender del consentimiento de la víctima, que bien podría otorgarlo por motivos ajenos a una mínima **eticidad** para con el condenado, o bajo el padecimiento de una presión psicológica o psíquica promovida por éste (...)

[SAP CR 701/2009: Ciudad Real, Fundamentos]

(49)

Que en la tramitación del presente procedimiento, se han observado las prescripciones legales, a excepción del tiempo para dictar sentencia debido al cúmulo de actuaciones y asuntos que **penden** de este Juzgado.

[SJPI 5/2010: Madrid, Antecedentes, cuarto]

(50)

(...) pues ambas aparecen finalmente ejecutadas para el logro del resultado típico y el extraneus asume el plus de disvalor de la conducta del funcionario sujeto activo propio, al ser consciente de que induce y coopera a que aquel quebrante los deberes **insitos** a su función.

[Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 10/2008: Granada, Fundamentos]

Tampoco el ciudadano medio probablemente conoce algunas de las acepciones cultas con que ciertas piezas del léxico común son usadas en los textos jurídicos: en la lengua común estas piezas léxicas se usan con otras acepciones. Así ocurre en (51), en que *significar* es usado en su acepción 'hacer saber, declarar o manifestar algo':

(51)

Así, respecto a la calificación de ilícito desleal de la conducta imputada al demandado debemos **significar**, en primer lugar, que para ello es menester incardinar la conducta en uno de los tipos de deslealtad estipulados en los arts. (...) Igual solución ha de afirmarse, en cuanto al hecho de la trasgresión no de tal pena

[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fundamentos, tercero]

Mención aparte merece el hecho de que, en este ejemplo, en el contexto de *significar* convivan expresiones arcaicas: *es menester* y voces cultas también desconocidas para el ciudadano medio: *incardinar*. La convivencia de arcaísmos y de voces cultas o de voces con acepciones poco habituales en la lengua común no formal no es ajena a los textos que manejamos y no conlleva más que complejidad interpretativa y distanciamiento del ciudadano lego del texto jurídico.

En (52) dudamos, asimismo, de que el receptor medio de una sentencia conozca fácilmente la acepción de *restar* como 'quedar (permanecer)' (DRAE 2001: s.v. *restar*):

(52)

CUARTO – Habiendo sido resuelto el recurso de apelación contra el auto resolutorio de la excepción de sumisión a arbitraje opuesta por Rheinhy, debe considerarse cumplida la previsión contenida en el último párrafo del art. 538 LEC, debiendo estar a lo en él resuelto, por lo que **resta** por analizar la también opuesta excepción de defecto legal (...)

[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, cuarto]

En (53) el uso del verbo *contraerse* con la acepción 'reducirse a menor tamaño' es casi metafórico:

(53)
(...) Consecuentemente, el ámbito sobre el que se ejerce el control revisor de este derecho fundamental **se contrae a** comprobar que ante el tribunal de la instancia se practicó la precisa actividad probatoria;
(...)

[SJP 10/2009. Getafe: Fundamentos, primero]

Ocurre también en (54) que el giro *en sede de* debe comprenderse probablemente mediante una imagen metafórica formada a partir de la acepción de *sede* como ‘lugar donde tiene su domicilio una entidad económica, literaria, deportiva, etc.’-(DRAE 2001: s.v. *sede*):

(54)
Igual solución ha de afirmarse, en cuanto al hecho de la trasgresión no de tal pena accesoria, sino de las medidas cautelares adoptadas **en sede de** los *artículos 544/Bis y 544/Ter de la Ley Rituaria Criminal*.

[SAP CR 7017 009: Ciudad Real, Fundamentos, segundo]

La metáfora obliga al receptor de la sentencia a realizar un sobreesfuerzo para comprender la secuencia textual.

Poco afortunado, es pues, el estilo artificial, forzado y barroco que se confiere de este modo a los textos jurídicos. Tampoco es afortunado el grado de opacidad en la comprensión de los textos que de este modo también se consigue.

Añadimos a este apartado una última secuencia textual extraída de las sentencias que manejamos, con la que queremos, por último, subrayar la frecuencia de uso de estos giros (pretendidamente) cultos, de significado poco transparente, y poco habituales en la lengua común, que pueden acumularse, además, en pocas líneas:

(55)
De otro lado, si se considera a la llamada “excusa absolutoria” como excusa “personal” que libera de pena, consecuencia y no componente del tipo delictivo, como si **se conceptúa** a la “**punibilidad**” como elemento esencial e integrante de la infracción, ejercitada la acción penal, conjuntamente con la civil, como en el supuesto realizó el Ministerio Fiscal, según lo prevenido en el *artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal*, no hay obstáculo alguno para que el Tribunal del orden penal, junto con el pronunciamiento absolutorio del acusado del delito imputado, **por juego de** la excusa, determine la pertinente responsabilidad civil y fije la correspondiente indemnización, si existen datos suficientes para su concreción, pues resultaría ilógico y contrario a la economía procesal, remitir a los interesados a un **ulterior** juicio civil (*S.T.S.198/2007 de 5 de marzo R.j 2007/1541*). Téngase en cuenta **la dicción literal** del *artículo 268 del Código Penal*; “están exentos de la responsabilidad (...)”

[SAP J 835/2009. Jaén: Fundamentos, cuarto]

Con todo, no podemos dejar de constatar la voluntad de algún juez por facilitar al lector de la sentencia la comprensión de algunos giros poco habituales en la lengua común, pero frecuentes en un registro formal y en discursos de nivel culto, que, por su especificidad semántica, justifican su uso en las sentencias. La glosa del significado de estos giros difícilmente transparentes para un ciudadano medio es acertada:

(56)
(...) el dolo criminal implica el conocimiento de la significación antijurídica del hecho y, a la vez, la voluntad para realizarlo. Exige **capacidad cognoscitiva y volitiva**.

El dolo directo existe cuando, **de manera consciente y querida (capacidad cognoscitiva), la voluntad del sujeto se dirige directamente al resultado propuesto (capacidad volitiva)**, incluidas las consecuencias necesarias del acto que se asume (...)

[Audiencia Nacional, 25/2005, Fundamentos, segundo]

Juzgamos, pues, esta estrategia como una buena práctica: la introducción de un giro culto confiere al texto ese grado de formalidad y de precisión exigidos al redactor de un documento jurídico; la glosa facilita la comprensión del contenido de la sentencia a un lector medio.

2.1.6. Terminología (unidades léxicas especializadas) con significado distinto en el dominio del léxico común

El ejemplo anterior, ejemplo (56), pone también de manifiesto la necesidad igualmente justificada de recurrir en ocasiones, en la redacción de los textos judiciales, a una terminología jurídica monosémica que se sabe incomprensible para el ciudadano desconocedor del campo del derecho, pero que es de máxima precisión conceptual para los juristas.

Latinismos aparte (vid. § 9.2.1.3.), con frecuencia esta terminología está conformada por unidades léxicas de la lengua común que han adquirido un nuevo significado especializado, normalmente por extensión de su significado original mediante analogía (Samaniego 2004: 285; Tomás Ríos 001: 12-13).

Es el caso del término *dolo*, adaptado del latín *dolus* ‘engaño’, que se usa en la lengua general culta con el significado de ‘engaño, fraude, simulación’, pero que también presenta una especificidad semántica en el campo jurídico.

Así, siguiendo con ejemplos de buenas prácticas, el juez que redacta el texto del ejemplo (57) ofrece al ciudadano que recibe su sentencia la definición del término usado en tanto que unidad léxica especializada:

(57)
(...) **el dolo criminal implica el conocimiento de la significación antijurídica del hecho y, a la vez, la voluntad para realizarlo.**

[Audiencia Nacional 25/2005, Madrid, Fundamentos, segundo]

No difiere, de hecho, mucho esta definición de la que se ofrece en el DRAE (2001: s. v. dolo): ‘Der. Voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud’.

El mismo juez, más adelante, vuelve a esforzarse por hacer transparente al ciudadano la terminología jurídica, aportando progresivamente más precisión a la definición de los términos y buscando, mediante reformulación, la expresión más cercana a la lengua común:

(58)
(...) **la tentativa (...) es un supuesto en el que el delito doloso no se realizó completamente en el tipo objetivo;** falta alguno de los elementos objetivos del tipo, bien porque la acción no se completó (tentativa inacabada por falta de un elemento distinto del resultado o porque completa no se produjo el resultado por causa ajena a la voluntad del agente (tentativa acabada, sólo falta el resultado). En la tentativa el sujeto activo o agente realiza todos o parte de los “actos de ejecución” (art. 16 CP) idóneos para que se consume o realice el tipo objetivo.
Dicho en lenguaje común: el delito intentado completo es igual que el delito consumado pero omitiendo el resultado. O, más llanamente, el delito intentado completo es un delito consumado al que le falta el resultado.

Por lo tanto, la tentativa exige la decisión de cometer el delito.

[Audiencia Nacional 25/2005, Fundamentos, segundo]

Otros jueces muestran también este esfuerzo respecto de los términos técnicos jurídicos:

(59)
(...) y siempre rige el principio de accesoriedad, de tal forma que **la obligación asumida es propia y distinta de la garantizada (obligación fideiusoria)** (...)

[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, décimo]

(60)
La Sala interpreta la STC 57/2008 en el sentido que no es posible aplicar “una retribución automática en la propia ejecutoria de la que deriva el procedimiento penal en el que se desarrolló la prisión provisional, sino que hay que estar a la existencia de una efectiva y real **afectación (perjuicio)** de la situación del penado.

[STS 1724/2010. Madrid: Fundamentos, primero]

Sin embargo, esta práctica que, bien resuelta, resulta eficaz, no es habitual en la redacción de las sentencias:

(61)

Notificado el Auto a las partes, se preparó recurso de **casación** por infracción de ley y de precepto constitucional, por la representación de Celestino, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su **sustanciación** y resolución (...)

[STS 1724/2010. Madrid: Antecedentes, tercero]

El resultado es que la falta de conocimiento del significado especializado de ciertas unidades léxicas puede llevar a malentendidos y, por tanto, al fracaso en la comprensión del texto jurídico por parte de un ciudadano lego en la materia. Más aún porque, insistimos, buena parte del léxico jurídico especializado presenta otros significados en la lengua general.

Ofrezco a continuación secuencias textuales en las que la unidad léxica señalada en negrita, existente en el español general con otros significados, se usa en la sentencia con un significado jurídico que probablemente desconoce el ciudadano lego en la materia. En ningún momento se ofrecen claves en el texto para comprender este significado:

(62)

La Defensa manifestó su disconformidad con los hechos, delitos imputados y penas solicitadas por las acusaciones, instando la libre absolución de su **patrocinado**, renunciando a la alternativa que mantenía en su escrito provisional.

[SJP 1072009. Getafe: Antecedentes, segundo]

(63)

Para ello **invoca** la sentencia citada 57/2008 que establece la necesidad (...)

[STS 1724/2010. Madrid: Fundamentos, segundo]

(64)

Conclusión: no existe la más mínima conexión entre la intervención telefónica y su hipotética antijuridicidad y las pruebas que dieron lugar a tener por **enervada** la presunción de inocencia del recurrente.

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Fundamentos, primero]

(65)

D. Víctor, desde el mismo día de los hechos (folio 18 de las **actuaciones**), durante toda la **instrucción** (folio 56) y hasta el día de su **deposición** plenaria, ha mantenido con total integridad (...), el núcleo de su versión inculpativa (...)

[SJP 1072009. Getafe: Fundamentos, primero]

(66)

QUINTO: Desestimado el recurso de apelación, procede imponer **las costas de esta alzada** a la parte apelante (...)

[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fundamentos]

(67)

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al **rollo**, lo pronunciamos (...)

[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fallo]

(68)

Además la consideración de que los delitos de que se trata se cometieran en **concurso medial**, hace aplicable lo preceptuado en el **artículo 77** del mismo texto legal.

[SAP J 835/2009. Jaén: Fundamentos, tercero]

(69)

Que debemos condenar y condenamos al acusado Modesto como autor responsable de los delitos continuados de falsedad documental en documento mercantil, en **concurso ideal** con la apropiación indebida continuada (...)

[SAP J 835/2009. Jaén: Fallo]

(70)

(...) y, por tanto, al no haberse hecho constar en la demanda, haber sido demandada Huarte SA. Con la vulneración del principio de dualidad de partes que el proceso civil exige y en aplicación de la **doctrina del levantamiento del velo**, estiman deben (...)

[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, quinto]

(71)

Al amparo del art. 849.1 de la LECrim. por indebida aplicación del art. 564.1.1º del CP, aduciéndose falta de motivación respecto a la **exasperación** de la pena impuesta.

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Antecedentes, cuarto]

(72)

Debemos declarar haber lugar al recurso de casación por infracción de ley y de precepto constitucional dirigido por Celestino frente al *Auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional* (...) **casando** y anulando el mismo (...)

[STS 1724/2010. Madrid: Fallo]

Cabe añadir aquí cómo algún tecnicismo debería, además, suprimirse del texto de las sentencias porque incluso puede dañar las relaciones entre tribunales y ciudadanos. Recogemos, en este sentido, la reflexión que se ofrece en Bayo (2000) respecto del término *súplica* o *suplicar*: “Su acepción de petición al tribunal está recogida en el DRAE (2001); pero en lengua común su significado primero es ‘rogar o pedir con sumisión una cosa’. Los ciudadanos no son súbitos de los tribunales, y les tiene que ser suficiente con *solicitar* o *pedir*”:

(73)

Tercero.-Tras el desistimiento efectuado por la parte actora, en el acto del juicio, de la pretensiones que se contenían en los apartados b), c) y d) del **Suplico** de su escrito de demanda (...)

[SAN 39911/2009.Madrid. Fundamentos, tercero]

2.1.7. Omisión de términos jurídicos consabidos

Posiblemente una asunción poco afortunada de la máxima de concisión expositiva que se exige a un texto jurídico para conseguir claridad y rapidez lectora explica la frecuente omisión de términos jurídicos consabidos en el texto de las sentencias.

Sin embargo, no juzgamos adecuada esta práctica que podría, pues, explicarse según el principio pragmático de economía lingüística. Al contrario, sostenemos que el lenguaje jurídico debe explicitar incluso todos los pretendidos supuestos para evitar ambigüedad y garantizar la precisión.

Además, no siempre puede garantizarse que el término jurídico consabido entre la comunidad de juristas sea también consabido por el ciudadano medio. En este caso, el ciudadano sin competencia interpretativa en términos pertenecientes al tecnolecto jurídico deberá realizar un esfuerzo para reponer lo que en el texto ha sido elidido. La rapidez lectora pasa, entonces, a convertirse en lentitud interpretativa.

Aportamos a continuación algunos ejemplos de términos elididos –sustantivos– que restituimos entre corchetes:

(74)

El abogado que asistió a Inmaculada ratificó su escrito de defensa y solicitó, alternativamente, que se apreciara la concurrencia de **la** [circunstancia] **eximente** completa de legítima defensa.

[SJP 9/2009. Barcelona: Antecedentes, tercero]

(75)

Fallamos que debemos condenar y condenamos A) Al procesado Inocencio, conforme con lo que antecede: -La pena de DOCE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON SESENTA CENTIMOS (13.372.690,60#) como autor responsable de delito ya definido contra la salud pública, mediante el tráfico de estupefacientes que causa grave daño a la salud, con **las** [circunstancias] **agravantes** específicas de notoria importancia (...)

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Antecedentes, segundo]

(76)

El séptimo y último de los dos motivos alegados por este recurrente denuncia implicación de **las** [circunstancias] **atenuantes** previstas en el artículo 21.1º, y 6, en relación con el artículo 20.2, todos del Código Penal.

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Antecedentes, sexto]

(77)

Que debemos condenar y condenamos a Inocencio por el delito de tenencia ilícita de armas a la pena de un año y seis meses de prisión (...), confirmando en lo demás **la** [pena] **recurrida** (...)

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Fallo]

(78)

Que debemos condenar y condenamos a Romeo, como autor de un delito de falsedad documental, a la pena de un año y medio de prisión con **la** [pena] **acesoria** de suspensión del derecho de sufragio pasivo (...)

[Tribunal Supremo 1353/2009, Fallo]

(79)

Esta [prueba] **pericial** confirma que este vehículo, prestado a José Ramón, (...)

[Audiencia Nacional 25/2005. Madrid: Fundamentos, primero]

(80)

SEGUNDO: La conducta denunciada por **la** [parte] **actora** consiste en la (...)

[SAP B 14345/009. Barcelona: Fundamentos, segundo]

La supresión de piezas léxicas alcanza incluso en ocasiones a voces de uso no exclusivamente propio del ámbito judicial, lo que sigue atentando contra la necesaria explicitud que debe caracterizar un texto jurídico (Samaniego 2004: 302):

(81)

A finales de enero o principios de febrero del año 2006, el acusado aforado Lorenzo (...) decidió comprar la vivienda unifamiliar número NUM001 de la URBANIZACIÓN000, próxima a su domicilio y sita en el término municipal de Marbella, que resultó ser propiedad de **la mercantil** "SANITARIA, SL".

[TSJ de Andalucía 10/2008. Granada: Hechos probados]

2.1.8. Abreviaciones

También el principio de economía lingüística puede explicar la continua presencia de abreviaciones en los textos que manejamos. Ya hemos señalado cómo es frecuente abreviar las fórmulas de tratamiento interpersonal (vid. § 2.1.); pero el recurso a estas abreviaciones es especialmente significativo cuando en la redacción del texto de las sentencias se remite a otros textos jurídicos en una manifestación de intertextualidad. Una vez más, la abreviación (señalada en negrita) conlleva una notable dificultad de interpretación para el ciudadano lego en materia de leyes, sobre todo en la descodificación de las siglas resultantes:

(82)

Al amparo de los **arts.** 849 de la **LECrim.** Y 5.4 de la **LOPJ** se invoca vulneración del **art.** 18.3 de la **CE**, en relación con el derecho al secreto de las comunicaciones, así como del **art.** 24 de la **CE**.

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Antecedentes, cuarto]

(83)

La cláusula general del **art. 5 LCD** contempla un supuesto de ilicitud con sustantividad propia (**SSTS** 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007), que entraña una norma completa (**STS** 29 de diciembre de 2.006), por lo que no cabe alegación si los actos se contemplan en otra norma (**SSTS** 7 de junio de 200 (sic), 23 de junio y 28 de septiembre de 2005) (...)

[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fundamentos, tercero]

(84)

CUARTO – Habiendo sido resuelto el recurso da (sic) apelación contra el auto resolutorio de la excepción de sumisión a arbitraje opuesta por Rheinhy, debe considerarse cumplida la previsión contenida en el último párrafo del **art. 538 LEC**, debiendo estar resuelto (...)

[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, cuarto]

En las sentencias es, asimismo, frecuente, combinar la abreviación y la no abreviación en estas manifestaciones de intertextualidad. La falta de sistematicidad puede también molestar al lector:

(85)

En principio, nada impide la aplicación a la apropiación indebida al ser un delito patrimonial (...). Distinto tratamiento jurídico se impone al delito de falsedad en documento mercantil por el que se formuló acusación y que (...) estaría excluido de la exención definida en el **artículo 268 del Código Penal**. Ahora bien, no debe existir inconveniente alguno (...). Tesis que ha de acogerse íntegramente, máxime cuando los objetivos defraudatorios perseguidos eran susceptibles de esa consideración conjunta en preceptos "semejantes", de acuerdo con el **artículo 69 bis (hoy 74,1 del Código Penal)**. (SS.TS 361/2007 de 4 de abril R.J 2007/4721 y 1763/2002 de 25 de octubre R.J 2002/9611).

[SAP J 835/2009. Jaén: Fundamentos, cuarto]

En esta última práctica es significativo cómo en alguna sentencia se observa un esfuerzo por facilitar la tarea interpretativa al ciudadano. Así, en la primera mención a una ley se evita citar esta ley mediante abreviación, si bien no se especifica cómo se abreviará más adelante en el texto; en la segunda mención se introduce la sigla en el texto:

(86)

CUARTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación del recurrente, formalizó su recurso, alegando los motivos siguientes: PRIMERO.- al amparo del **artículo 849, párrafo 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal** por la indebida aplicación del artículo 58 de Código Penal. SEGUNDO.- Al amparo del **artículo 5.4. de la Ley Orgánica del Poder Judicial** por vulneración de precepto constitucional en concreto el **artículo 24 párrafo 1º de la Constitución Española**, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. TERCERO.- Al amparo del **artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial** por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el **artículo 17.1 C.E.**

(...)

Fundamentos

(...) SEGUNDO.- El recurrente formaliza tres motivos de casación que pueden ser reconocidos a un análisis conjunto, pues de lo que se trata es de denunciar la falta de aplicación de la doctrina del **Tribunal Constitucional** emanada de la **STC 54/2008**. En el primero, se denuncia directamente **ex artículo 849.1 LECrim**. la debida aplicación del **artículo 58 CP** y en los dos restantes se refiere a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del **artículo 24 CE en relación con el derecho a la libertad proclamado en el 17.1** del mismo Texto.

[STS 174/2010. Madrid: Antecedentes, cuarto; Fundamentos, segundo]

En cualquier caso, insistimos en que las abreviaturas tienden a ser difícilmente interpretadas por un ciudadano no introducido en el Derecho.

151

2.1.9. Neologismos estilísticos o innecesarios

Otra de las particularidades del lenguaje jurídico que sometemos a tela de juicio es la tendencia a crear nuevas unidades léxicas: normalmente, sustantivos, sea por desconocimiento de un determinado vocablo, sea por una voluntad de estilo que lleva a distanciar el texto jurídico de la lengua común para conferirle una apariencia culta, o sea por la necesidad de conseguir acuñar nuevos términos de significado preciso que designen nuevas realidades jurídicas.

Favorece este proceso de creación de nuevos términos la eficacia, en textos jurídicos, de transformar hasta una oración completa en un sustantivo, por economía lingüística. Por ello, buena parte de los nuevos términos son sustantivos, normalmente generados por procesos de derivación mediante sufijo o prefijo: la nominalización permite incluir gran cantidad de información léxica en un grupo nominal, lo que logra textos más compactos; y permite, asimismo, omitir el agente, lo que lleva a una prosa más despersonalizada (Samaniego 2004: 295).

A nuestro juicio son cuestionables tanto los neologismos creados por desconocimiento de un determinado vocablo, como los neologismos estilísticos, porque no aportan más precisión semántica al texto jurídico. Además, son idiolécticos y, por tanto, bastante efímeros o con pocas posibilidades de incorporarse al vocabulario común o especializado. Su interpretación requiere, asimismo, que el receptor posea ciertos conocimientos sobre el referente expresado, lo que no queda siempre garantizado (Guerrero 2007: 19-40).

Para conseguir estos neologismos suelen, además, transgredirse las reglas de composición o de derivación. También se crean archisílabos (palabras largas), que van a generar un extrañamiento no deseado por parte del lector de la sentencia.

Ofrecemos a continuación ejemplos de neologismos estilísticos o innecesarios:

(87)

Ejercita la actora con carácter subsidiario acción de reembolso contra ESSA, Huarte, SA y BCH, interesando la condena a abonarle la suma de 2.855 millones de pesetas coincidente con el precio del remate y que equipara a **la pagada** de la deuda existente (...)

[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, décimo]

(88)

(...) la conducta aparece finalmente ejecutada de forma necesaria con la participación ineludible de los dos y la conducta del sujeto no cualificado pierde sustantividad a favor de la principal y preferente del cualificado, pues ambas aparecen finalmente ejecutadas para el logro del resultado típico y el extraneus asume el plus de **disvalor** de la conducta del funcionario sujeto activo propio, al ser consciente de que induce y coopera a que aquel quebrante los deberes insitos a su función.

[Tribunal Superior de Justicia 10/2008, Fundamentos]

(89)

Que el debate procesal deba desarrollarse en condiciones de igualdad, de modo que todos **los intervinientes** tengan plena capacidad de alegación y pruebas (...), y que por ello tanto acusador como acusado ostenten esa misma garantía (...)

[SJP 10/2009. Getafe. Fundamentos, primero]

(90)

Partiendo pues de la citada horquilla **penológica** (repetimos, seis a nueve meses de prisión), y no existiendo en el presente caso circunstancias atenuantes ni agravantes (...)

[SJP 10/2009 355/2008. Getafe: Fundamentos, quinto]

(91)

Estando los cuatro procesados en el interior del chalet citado se observó por la vigilancia policial que en la zona de garaje se oían golpes característicos de rotura y **desguazamiento** de objetos y caída de herramientas, así como las voces de los procesados, por lo que accediendo a través del acceso público a la citada zona común de acceso a los garajes (...)

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Antecedentes, primero]

(92)

Y ello porque, para establecer la satisfacción del canon de **razonabilidad** de la imputación, además se requiere que las objeciones oponibles se muestren ya carentes de motivos racionales que las justifiquen (...)

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Fundamentos, séptimo]

Algunas de las voces hoy ya recogidas en diccionarios de términos jurídicos, que fueron creadas por procedimientos de lexicogenesia, todavía siguen provocando extrañamiento en el ciudadano medio.

En (93), el archisílabo *causación*, ajeno a la lengua común, podría haber sido reemplazado por *causa*:

(93)

(...) pero esto no significa que **la causación** de perjuicios que se invoca (...) pueda apreciarse (...)

[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, noveno]

En definitiva, con otras decisiones en la selección léxica podría haberse evitado la grandilocuencia innecesaria que estas voces confieren al texto jurídico. La sencillez no entra en conflicto con la precisión que se exige a los documentos legales (González Salgado 2009: 3).

2.1.10. Impropiiedades léxicas

Todavía queda por destacar cómo en ocasiones en las sentencias algunas palabras adquieren significados insospechados; esto es, significados impropios, tal vez porque se confunde el significado de una voz con la apariencia formal de otra (González Salgado 2009: 10).

Acaso el verbo *compadecerse* adquiere, impropriamente, en la siguiente sentencia alguna acepción del verbo comprender: 'entender, alcanzar, penetrar' o 'encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de otro' (DRAE 2001: s. v. comprender)

(94)

Una mujer fuerte y experta en artes marciales que abofetea a su marido, le da patadas, rodillazos, y le agarra de los testículos, necesariamente tiene que dejar alguna marca. Durante el forcejeo, pese a sus conocimientos de kárate, no pudo soltarse, y cuando lo consiguió sólo causó unos leves arañados, lesión que, por otra parte, no parece propia de una karateka experimentada. Tampoco se **compadece** bien el hecho de ser una karateka aventajada con encerrarse en una habitación presa del pánico, atrancar la puerta con una mesilla y no atreverse a salir ni siquiera cuando la policía está llamando a la puerta.

[SJP 9/009. Barcelona: Fundamentos, noveno]

El verbo *ostentar*, como ocurre en el español general contemporáneo, se usa también en las sentencias con el significado de *tener*, a pesar de la advertencia recogida en el *Diccionario Panhispánico de Dudas*: "*Ostentar*. Llevar [algo] de modo que sea bien visible', 'hacer gala o alarde [de algo que se posee]' (...) Es impropio su empleo como mero equivalente de *tener*, sin que esté presente la idea de relevancia u honor" (DPD 2005: s.v. ostentar):

(95)

Que el debate procesal deba desarrollarse en condiciones de igualdad, de modo que todos los intervinientes tengan plena capacidad de alegación y pruebas (...), y que por ello tanto acusador como acusado **ostenten** esa misma garantía (...)

[SJP 10/2009. Getafe: Fundamentos, primero]

(96)

(...) ya que el préstamo se concedió a Hasa AS. Que es una sociedad que posee el 100% del capital de la mercantil Inversiones Huarte SL. y ésta a su vez **ostentaba** el 50,30% de Huarte SA. (...) la doctrina del levantamiento de velo no es aplicable, ya que la pertenencia al Grupo de la hoy actora, era circunstancia conocida y admitida por los contratantes en el momento de la constitución de la hipoteca (...), por lo que perteneciendo el bien hipotecado a la actora que **ostenta** distinta personalidad que la prestataria (...)

[SJPI 7/2000. Madrid, Fundamentos, séptimo]

Las impropiedades léxicas pueden llegar a acumularse en alguna secuencia del texto de las sentencias:

(97)

"El día 9 de julio de 2.007, funcionarios de la Udyco que realizaban labores de vigilancia sobre el chalet núm. NUM000 de la CALLE000 NUM001 de la URBANIZACIÓN000 en la localidad de Yeves (Guadalajara), como consecuencia de que era ocupado por el procesado Conrado, persona (...) que residía en el mismo. (...) Sobre las 12.30 horas, del citado día, llego a las proximidades del chalet el vehículo SEAT Toledo (...) conducido por su titular Inocencio. (...) Sin bajarse del vehículo Inocencio continuó hasta el Hospital Provincial de Guadalajara al que se desplazó Conrado (...). Posteriormente Conrado abandono el Hospital, dirigiéndose nuevamente a la localidad de Yeves (...), introduciéndose en **el repetido chalet** en el que residía. (...) Estando los cuatro procesado en el interior del chalet citado, se **observó por la vigilancia policial**, que en la zona de garaje se oían golpes (...) Tras dos horas y media de estancia de las cuatro personas en el chalet, salieron del mismo, en primer lugar Inocencio y Romeo (...). Romeo cuando conducía su vehículo fue interceptado por la fuerza policial y requerido para que retuviera el mismo (...) sin embargo por el contrario **aceleró la velocidad** de marcha del vehículo dirigiéndolo contra los agentes (...) En el chalet que el procesado Conrado había alquilado en (...) Yeves se llevó a cabo dicha diligencia (...), incautándose los agentes de la autoridad de los ciento doce paquetes que contenían la cantidad de cocaína que **arrojó un peso neto** de 101.922,78 grms.

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid, Antecedentes, primero]

Así, el *repetido chalet* tendría que haber sido el *mencionado* chalet; la *vigilancia policial* no puede *observar*, porque la acción significada por observar requiere de un agente humano o animal; el significado de *acelerar* 'dar mayor velocidad, aumentar la velocidad' (DRAE 2001:

s. v. acelerar) hace impropia la secuencia *acelerar la velocidad: aumentar la velocidad* hubiera sido un uso léxico propio. Por último, el verbo *arrojar* toma, en realidad, el significado de *registrar* ‘contabilizar’ (DRAE 2001: s. v. registrar) o de *alcanzar* ‘llegar hasta cierto punto o término’ (DRAE 2001: s. v. alcanzar).

Quizás el uso llegue a asentar alguna vez estos significados todavía impropios; pero lo cierto es que aún hoy las impropiedades léxicas que aquí hemos recogido no son registradas como acepciones nuevas en los diccionarios. Por tanto, quien redacta las sentencias debería tomar conciencia de la impropiedad, y evitarla si pretende facilitar la comprensión de sus escritos y consolidar su credibilidad como hablante culto.

2.2. Particularidades estilísticas

También apartan a los textos jurídicos del grado de concisión sintáctica, precisión y de riqueza léxica inherente a los textos cultos ciertas particularidades estilísticas que se perciben como una manifestación de pobreza léxica o, al menos, de conocimiento limitado de las posibilidades que ofrece la lengua española en el nivel léxico.

Destacamos entre estas manifestaciones la repetición léxica, el recurso a dobles o parejas léxicas (sinónimos consecutivos), los circunloquios o perífrasis formadas por verbos excesivamente polisémicos y un nombre de acción, y el abuso de locuciones complejas.

2.2.1. Repetición léxica

La reiteración injustificada de una misma voz en enunciados contiguos es una práctica difícilmente aceptada por el lector de un texto culto, que siente que la variedad léxica aporta a los textos mayor riqueza de matices semánticos.

Por ello desaconsejamos repeticiones léxicas tan poco afortunadas como las que señalamos en negrita en la siguiente secuencia narrativa:

(99)

El repetido chalet, se ubica en una Urbanización denominada URBANIZACIÓN000 de la localidad de Yebe (Guadalajara), que esta formada por un conjunto residencial con múltiples chalets, dúplex y edificios de viviendas y servicios, con calles de paso de vehículos y **zonas** de viandantes y **zonas** ajardinadas. La **zona** en la que se ubica **el chalet tantas veces citado**, tiene en su parte posterior una **zona** de garaje, que se compone de un **acceso** común y público para personas y vehículos, a través de la cual los vehículos **acceden** a los garajes individuales propios de los chalets, los que se encuentran cerrados e individualizados por obra de material y cierre metálico. Estando los cuatro procesados en el interior del **chalet citado** se observó por la vigilancia policial que en la **zona** de garaje se oían golpes característicos de rotura y desguazamiento de objetos y caída de herramientas, así como las voces de los procesados, por lo que **accediendo** a través del **acceso** público a la **citada zona** común de **acceso** a los garajes (...)

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Antecedentes, primero]

O como las que también señalamos en negrita en la siguiente secuencia argumentativa:

(100)

No es posible, sin embargo, sostener esta misma conclusión bajo la **vigencia** de nuestra **vigente ley concursal**, ya que la mera declaración de **concurso** no conlleva el vencimiento anticipado de los créditos **concursoales** aplazados, como ocurría con la quiebra, sino que el legislador ha diferido dicho efecto a la apertura de la liquidación (*art 146 de la LC*). Ahora bien, que el legislador no haya previsto el vencimiento anticipado de los créditos **concursoales** por la declaración de **concurso** no quiere decir que los sometidos a plazo deban reconocerse como contingentes.

[SJM 8/2010. Madrid: Fundamentos, cuarto]

2.2.2. Dobletes o parejas léxicas

Motivados por una pretensión explicativa, los dobles -o parejas léxicas o sinónimos consecutivos- solo alargan innecesariamente la expresión, con lo que contravienen el principio pragmático de la economía lingüística y merman la calidad lingüística de los textos. Son, por tanto, también desaconsejables:

(101)

No se convierte en "copia" en el sentido literal de reproducción de otro objeto -en contra de la tesis de la defensa- por el hecho de que la información original necesariamente haya de ser **recibida y recepcionada** en soportes aptos, como es el CD, para así poder ser utilizada en las diligencias de investigación policiales o judiciales, como es el caso.

[Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada. Fundamentos, segundo]

(102)

Es así que, a pesar de no indicarse en la demanda con demasiada claridad las acciones que se ejercitan, debe concluirse, de conformidad con la súplica de la demanda, que **la causa o razón** de pedir no es exclusivamente la realización de un ilícito desleal (...)

[SAP B 1434572009. Barcelona. Fundamentos, segundo]

2.2.3. Formas perifrásticas

Es, asimismo, desaconsejable, también por alargar innecesariamente la expresión, la tendencia observada en los escritos jurídicos examinados de recurrir a giros contruidos con verbos vacíos + nombres de acción, aun cuando estos giros contruidos con varias palabras podrían expresarse con una única forma simple sin modificación significativa.

Es especialmente frecuente el empleo de la perífrasis con el verbo *proceder*. En las siguientes muestras textuales, los giros *procedieran a la adquisición* o *procedió a realizar* son gratuitos. Las formas simples: *adquirieran* o *realizó*, respectivamente, hubieran bastado:

(103)

Afirma que dicho asesoramiento personalizado se hizo con la intención que los hoy actores **procedieran a la adquisición** de instrumentos financieros que resultaban objetivamente inadecuados a su perfil de inversores minoristas conservadores (...)

[SJPI 4/2010. Madrid: Fundamentos, primero]

(104)

El acusado Modesto (...), formando parte de la plantilla de la entidad bancaria Banco Español de Crédito (...) **procedió**, movido por ilícito ánimo de lucro, **a realizar** apuntes ficticios en las libretas de ahorros en las que los clientes creían eran reflejo de sus inversiones realizadas (...)

[SAP J835/2009. Jaén: Antecedentes, primero]

Otros verbos vacíos intervienen en estas formas perifrásticas: *hacer*, *realizar*, *dar*. Así, las formas perifrásticas de las siguientes secuencias extraídas del texto de varias sentencias podrían sustituirse también por las formas simples: *mencionará*, *dispararon*, *va a avisar* (o *avisará*), *valorando conjuntamente*, *trasladó*:

(105)

Como quiera que los perjudicados por la operación ni el Ministerio Fiscal han solicitado la devolución de estas cantidades, no **se hará mención** a las mismas.

[SAP J835/2009. Jaén. Fundamentos, quinto]

(106)

(...) Posteriormente otros funcionarios policiales que seguían al vehículo Passat (...) **realizaron disparos** al vehículo (...)

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Antecedentes, primero]

(107)

El Sr. Víctor manifiesta que cuando se encuentra caminando hacia la puerta de entrada del Hotel Majadahonda, a donde se dirige con su hijo para tomar un refresco, observa de manera directa, al encontrarse frente a ellos, como el acusado levanta su mano derecha e impacta sobre la perjudicada, la

cual se encuentra encogida en el suelo, lo que hace que se dirija a D. Eulalio y le llame la atención por ello, anunciándole que **va a dar oportuno aviso** a la policía (...)

De todo lo anterior, **haciendo una valoración** conjunta de la prueba practicada (...)

[SJP 10/2009. Getafe: Fundamentos, primero]

(108)

Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGÓN, S.L., mediante escrito del que **se dio traslado** a la otra parte, que se opuso.

[SAP B 14345/2009. Antecedentes, segundo]

La tendencia a la nominalización característica del tecnolecto jurídico puede explicar la preferencia por las formas analíticas, que exigen el uso de un nombre de acción; las formas simples, en cambio, prescinden del sustantivo. Con todo, insistimos en la necesidad de respetar la máxima de concisión para lograr textos claros y facilitar su lectura. En estas secuencias que acabamos de comentar, un verbo podría haber expresado, pues, sin pérdida de matiz significativo, lo mismo que la forma perifrástica.

2.2.4. Abuso de locuciones complejas

Cerramos este apartado del informe añadiendo un recurso que también dilata innecesariamente la expresión y que, además, produce afectación en el discurso. Es el empleo abusivo de locuciones preposicionales, o de locuciones nominales y adverbiales con función preposicional, que postergan el uso de las preposiciones propias. Así, las locuciones *al objeto de*, *en virtud de*, de las secuencias textuales con las que ejemplificamos el abuso de locuciones complejas, podrían haber sido reemplazadas por las preposiciones *para* o *por*, respectivamente:

(109)

Una vez firme la presente, dedúzcase testimonio de la misma, con los particulares necesarios (acta escrita y copia en CD del Juicio Oral), al Juzgado Decano de este Partido Judicial **al objeto de que**, por el Juzgado de Instrucción que por reparto corresponda, se depuren las responsabilidades que **en virtud de** lo dispuesto en el *artículo 458 del Código Penal* pudiera eventualmente haber incurrido Dña. Sabina.

[SJP 10/2009. Getafe: Fallo]

En la siguiente secuencia, *de conformidad con* es fácilmente sustituible por según:

(110)

Es así que, a pesar de no indicarse en la demanda con demasiada claridad las acciones que se ejercitan, debe concluirse, **de conformidad con** la súplica de la demanda, que la causa o razón de pedir no es exclusivamente la realización de un ilícito desleal sino, también, la infracción contractual.

[SAP B 1434572009. Barcelona. Fundamentos, segundo]

No recomendamos, pues, ningún uso lingüístico que contribuya a retrasar el aporte de información, o que confiera lentitud, complejidad y afectación a la prosa jurídica.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS CUESTIONES DE NORMATIVA

1. INTRODUCCIÓN. LA TRASCENDENCIA DE LA NORMA ACADÉMICA EN EL LENGUAJE JUDICIAL

Los estudios sobre lenguaje jurídico suelen reparar, en mayor o en menor medida, en los errores de uso lingüístico que se observan en textos como decretos, informes, actas, citaciones o resoluciones judiciales (sentencias, autos). Todos estos estudios reprueban estos errores, que manifiestan un uso desviado de los esquemas normativos de la lengua. También se hacen eco de la frecuencia con que estos usos antinormativos se documentan en los textos legales.

El juicio reprobatorio se fundamenta en la necesidad ineludible de respetar la norma académica para garantizar el grado de formalidad y de cuidado en la expresión lingüística exigido a los documentos jurídicos (Tomás Río 2005). No en vano, en contextos formales, la lengua normativa se usa como modelo de realización culta y de buen uso de la lengua. El español culto formal, la lengua normativa, el español estándar es 'la lengua que todos empleamos, o aspiramos a emplear cuando sentimos la necesidad de expresarnos con corrección', se subraya en el prólogo del *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005), que es actualmente la fuente principal de consulta y reproducción de la normativa académica. El lenguaje jurídico aspira a una expresión correcta.

El desvío de esta lengua normativa conlleva la percepción, por parte del lector de un texto jurídico, de que el autor del texto ha descuidado la redacción. Lo cierto es que algunos de los errores: omisión de acentos en determinados tiempos verbales, errores de concordancia, usos incorrectos del gerundio, etc. pueden incluso perturbar la comprensión de los textos. Por tanto, solo el esmero por la calidad verbal que implica el respeto por la norma académica lleva a garantizar que un texto se perciba como un texto cuidado, y que un texto se entienda, o que no se entienda mal.

Los usos desviados de la norma no son, con todo, exclusivamente inherentes a los textos jurídicos: se pueden documentar en otros tecnolectos. En ocasiones las anomalías están

consolidándose en el habla de los niveles socioculturales medio y alto, y pueden llegar a adquirir con el tiempo el grado de prestigio necesario para entrar a formar parte del modelo de lengua académico. En otros casos, algunos redactores de textos jurídicos cometen errores por desconocimiento de usos antaño censurados que se han convertido ya hoy en norma: tal es el caso de la acentuación diacrítica de formas como *sólo* vs. *solo* o de la acentuación de los demostrativos. La norma es, pues, de naturaleza relativa y cambiante, según criterios conocidos de vigencia, extensión y frecuencia en el uso general culto. Finalmente, algunas vacilaciones registradas manifiestan la duda del redactor del texto respecto de la corrección o incorrección de una determinada forma o estructura lingüística.

Nuestro estudio del corpus de documentos jurídicos ha revelado la presencia en los documentos manejados de distintos fenómenos alejados del estándar panhispánico. Recogemos en este informe las desviaciones más frecuentes. Nuestra obra de referencia fundamental es el *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005), aunque también manejamos el resto de las obras de referencia publicadas por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española: la versión digital del *Diccionario de la lengua española* (2001), la *Nueva Gramática de la lengua española* (2009), y la *Ortografía de la lengua española* (2010).

Hemos organizado este apartado de nuestro informe, sobre los usos desviados del estándar académico, en tres bloques: (a) Particularidades ortográficas; (b) Particularidades gramaticales; y (c) Particularidades ortotipográficas. No se incluye aquí un bloque relativo a las impropiedades léxicas, porque quedan recogidas en el capítulo que presentamos bajo el epígrafe *Principales problemas relacionados con el dominio léxico de los géneros jurídicos*. Tampoco desarrollamos en el bloque (b) *Particularidades gramaticales*, aquellos fenómenos gramaticales antinormativos que se han comentado en otros capítulos de nuestro informe.

Así, es en el capítulo relativo a *Problemas de estructura textual (IV): expresiones anafóricas*, donde se aborda el uso del falso anafórico *el mismo*; así como el empleo inadecuado del pronombre *cuyo*. En el capítulo *Problemas de estructura oracional (I): la subordinación* se comentan los usos incorrectos de nexos subordinantes (conjunciones y locuciones conjuntivas) y los usos incorrectos subordinación mediante formas no personales (el caso del gerundio).

También en este caso describimos cada patología, aportamos ejemplos comentados representativos del fenómeno que se aborda y, en ocasiones, incluimos ejemplos de buenas prácticas.

2. PRINCIPALES PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS USOS DESVIADOS DE LA NORMA ACADÉMICA

2.1. Particularidades ortográficas

2.1.1. Acentuación: ausencia de tilde

a) Palabras agudas, llanas y esdrújulas

Uno de los usos antinormativos más recurrentes en los escritos jurídicos que manejamos es la ausencia -no sistemática- de tilde en las palabras agudas y esdrújulas que se atienen a la regla general de acentuación de los polisílabos. Las palabras llanas, en cambio, suelen estar bien acentuadas, excepto en el caso de los nombres propios.

La ausencia de tilde es especialmente frecuente en las palabras esdrújulas, como muestran a continuación algunas secuencias textuales extraídas de distintas sentencias. Se observará que conviven, en las secuencias, esdrújulas no acentuadas (señaladas en negrita) y esdrújulas acentuadas (subrayadas):

(1)
(...) pero deberá superarse inexcusablemente el umbral **mínimo**, sin que pueda fundarse la demanda simplemente en alegaciones meramente **retóricas**.
[SAN 3911/2009. Madrid: Fundamentos, tercero]

(2)
(...) cada una de las respectivas filiaciones reflejadas en los DNI y firmadas con **idénticas rubricas**, que a su vez (...)
[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Antecedentes, primero]

Las palabras esdrújulas no acentuadas llegan a veces a cumularse en breves segmentos discursivos; lo que dificulta la comprensión lectora si, atendiendo a la ortografía, estas palabras se leen primero en tanto que formas llanas:

(3)
(...) frente a todo **genero** de intromisiones ilegítimas (...) sin fijar apriorísticamente **límites** (...) entre ellos (...) referidas asuntos de relevancia **publica** que sean de interés general (...)
[SJPI 5/2010. Madrid: Fundamentos, segundo]

Un ciudadano lego en materia de leyes puede también dudar en la pronunciación de una palabra esdrújula que no ha sido acentuada debidamente. En el siguiente fragmento la duda es entre *depósito*, o *deposito* o *depositó*, si la palabra se interpreta como un tecnicismo alejado de la pronunciación de este sustantivo en la lengua común:

(4)
(...) deberá acreditar haber hecho el **deposito** de 300,51 Euros previsto en el art. 227 de la Ley de Procedimiento Laboral (...)
[SAN 3911/2009. Madrid: Fallo]

La ausencia de tilde entorpece, pues, en ocasiones, la comprensión de los textos o genera dudas en el lector.

También en las sentencias, entre las palabras agudas no acentuadas, y más allá de los nombres propios, solo algunos nombres comunes se escriben, en ocasiones, sin el acento prescriptivo:

(5)
(...) se aprehendieron, entre otros efectos, un trozo de 65,09 gr. de **hachis** (...)
[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Antecedentes, primero]

En cambio, es frecuente la ausencia de tilde en las terceras personas del singular del pretérito perfecto simple de los verbos en -ar:

(6)
(...) sin embargo por el contrario **acelero** la velocidad de marcha del vehículo dirigiéndolo contra los agentes (...). Posteriormente otros funcionarios policiales que seguían al vehículo Passat (...), realizaron disparos al vehículo (...), finalmente el vehículo se detuvo al colisionar con un obstáculo que impedía el paso por obras, el citado Romeo se **bajo** del coche y pretendió huir a pie, siendo detenido por la fuerza policial. Romeo se identificó (...)
[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Antecedentes, primero]

La ausencia de tilde en estas formas verbales es particularmente significativa porque estos pretéritos sin acentuar pueden leerse en un primer momento como si fueran formas de presente, lo que, una vez más, añade dificultad a la comprensión de las secuencias narrativas de los textos jurídicos.

En estas formas verbales, además, la ausencia de tilde sigue siendo, en cualquier caso, aleatoria: algunas formas son acentuadas; otras no lo son. Es un indicio, para ciertos lectores, de dejadez en la redacción:

(7)
(...) pretensión que **encontró** la oposición de las codemandandas (salvo Huarte SA que si bien **intereso** la desestimación de la demanda frente a ella comparte los razonamientos de la actora y la existencia de los perjuicios reclamados) (...)

[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, primero]

El descuido de la tilde en las palabras llanas solo se documenta en los nombres propios. De hecho, es una constante la ausencia de tilde en buena parte de los topónimos y antropónimos que lo requieren, ya sean palabras agudas, llanas o esdrújulas. En el siguiente fragmento representativo, ni el apellido *Varcárcel*, ni el apellido *Guillén* son acentuados.

(8)
(...) en nombre y representación de Josefa **Varcárcel** (...), representado por el Procurador Sr. García **Guillen** (...)

[SJPI 7/2000. Madrid: Fallo]

b) Diptongos, triptongos e hiatos

Entre las palabras con grupos vocálicos, las que presentan hiato son las que manifiestan con más frecuencia una ortografía antinormativa: se observan descuidos en la acentuación de la vocal cerrada tónica. Este descuido afecta a formas verbales, fundamentalmente:

(9)
(...) En efecto, en el expediente incoado al Delegado de USCA en el Centro de Control de Área de Santiago de Compostela, que fue **sobreseído** por la falta de elementos (...)

[SAN 3911/2009. Madrid: Fundamentos, tercero]

(10)
(...) pero no impide la pérdida de bien en la correspondiente subasta, ya que **seria** un tema, en su caso, de "sobrante" (...)

[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, noveno]

(11)
Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias (...)

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Publicación]

Con todo, también alcanza a algún sustantivo:

(12)
(...) Así se desprende de la **auditoria** llevada a cabo por el banco Santander Central Hispano (...)

[SAP J 835/2009. Jaén: Fundamentos, quinto]

En lo que atañe a las palabras con diptongo o triptongo, apenas se documentan formas con una acentuación antinormativa. Aportamos aquí, en cualquier caso, una secuencia textual en que la vocal cerrada átona de la preposición *hacia* es incorrectamente acentuada.

(13)
(...) que iba andando **hacia** delante, y luego se cruzó hacia el tren, por las vías, hasta llegar a la cabeza del TALGO, antes dio un pitido, y entonces vio a esa misma persona en el lado derecho, es decir, en el anden de la vía 4, andando **hacia** atrás (...)

[SJP 19/2006. Albacete: Fundamentos, 12ª]

En otra secuencia es la palabra *hipotecaria* la incorrectamente acentuada:

(14)
(...) y como aquí la hipoteca no había sido cancelada ni puede considerarse extinguido el crédito de la prestamista, aún cuando consideráramos como pago cierto el abono de 1.052.863.200 pesetas por BCH y el importe del depósito constituido por ESSA (836.670,000 ptas.) al deberse solamente por principal 3000 millones, la ejecución **hipotecaria** no puede considerarse indebida, ya que el acreedor (...)

[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, noveno]

Estos errores en la acentuación de hiatos, o de diptongos o triptongos también entorpecen la lectura, sobre todo cuando están implicadas formas verbales. En (14), por ejemplo, la preposición *hacia* mal acentuada lleva a la confusión de esta preposición con la forma verbal *hacía*. En (15) la confusión se establece entre el adjetivo *hipotecaria* y la forma verbal *hipotecaría*. En (11), la forma del verbo *sería*, sin acento, puede ser interpretada como un adjetivo femenino. Se atenta, pues, contra la máxima de claridad y precisión exigida a los textos jurídicos.

c) Los monosílabos

En el *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005), al igual que en la *Ortografía de la lengua española* (2010) se especifica que las palabras monosílabas no se acentúan nunca gráficamente, salvo en los casos de tilde diacrítica. Con todo, todavía algunos jueces perpetúan acentos gráficos no diacríticos, hoy ya antinormativos:

(15)
(...) Que teniendo por presentada y admitida a trámite la anterior demanda de Juicio Ordinario, se **dió** traslado de la misma (...)
[SJPI 5/2010. Madrid: Antecedentes, segundo, p. 1]

(16)
...pues se estaría dando **pié** a fomentar o al menos a que se hablara...
[SJPI 5/2010. Madrid: Fundamentos, sexto]

Al contrario, también se observa en algunos escritos la omisión de la tilde diacrítica normativa en palabras monosílabas, aun cuando la tilde diacrítica tiene la función de distinguir palabras con idéntica forma:

(17)
...el sector **mas** importante...
[SJPI 5/ 2010. Madrid: Fundamentos, segundo]

(18)
...sin que por **si** misma entrañe fraude procesal demandar a su matriz...
[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, sexto]

(19)
...Es lo que se ha venido a denominar "actos de favorecimiento al favorecedor del tráfico", que no ayudan directamente al tráfico, pero **si a** la persona que lo favorece...
[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Fundamentos, cuarto]

d) Pronombres, adjetivos y adverbios interrogativos

Los pronombres, adjetivos y adverbios interrogativos son tónicos y llevan tilde diacrítica. No suelen presentar dificultades de acentuación cuando se introducen en enunciados interrogativos directos; pero su acentuación es dudosa cuando se introducen en oraciones interrogativas indirectas.

Los redactores de los textos judiciales no escapan de esta duda ortográfica, y, así, dejan de acentuar formas que deberían acentuarse:

(20)
...no se exige una corroboración plena (...), y tampoco puede definirse **que** ha de entenderse por corroboración...
[Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 10/2008. Granada: Fundamentos, primero]

(21)
Existe, pues, prueba directa, de tres secuencias (alzar el brazo derecho el acusado teniendo en frente suya a la perjudicada, lanzarlo hacia abajo en ademán de acometimiento, y quedar inmediatamente después de ello ésta en el suelo) que bajo las reglas de la más esencial de las lógicas hace comprender a cualquiera **como** aconteció el acto agresivo.
[SJP 10/2009. Getafe: Fundamentos, primero]

Fruto de esta duda, acentúan, en cambio, las mismas formas cuando son átonas y funcionan como relativos o conjunciones:

(22)

Otro tanto ocurre con la libreta de Ahorros nº NUM007, de la que son titulares Asunción y Hernán, **dónde** el acusado realizó cinco apuntes deudores

[SAP J 835/2009. Jaén: Fundamentos, quinto]

Una vez más, en una breve secuencia, pueden alternar formas correctamente acentuadas y formas con ausencia de acentuación normativa:

(23)

...lo primero que se precisa es que se fije un término comparativo, estableciendo respecto a **qué** o a **quien** se discrimina, lo que omite la actora.

[SAN 3911/2009. Madrid: Fundamentos, tercero]

e) *El adverbio aún / aun*

La pronunciación oscilante de este adverbio, entre el hiato [a-ún] y el diptongo [aun], dependiendo de su valor semántico, su emplazamiento en el enunciado, el origen geográfico del hablante, la rapidez o énfasis con que se emite; y el hecho de que no pueda establecerse una correspondencia unívoca entre sus usos y su forma con diptongo o con hiato, lleva a considerar la tilde en esta forma como un caso de tilde diacrítica. Así se expone en el *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005). Tanto en esta obra de referencia como en la *Ortografía de la lengua española* (2010) se establece que la palabra aún lleva tilde cuando puede sustituirse por *todavía*. Cuando equivale a *hasta, también, incluso* o *ni siquiera*; o tiene un valor concesivo, se escribe sin tilde.

Posiblemente la pronunciación oscilante de esta palabra lleve a los jueces a descuidar su acentuación gráfica normativa:

(24)

...Y que salió del local llevando consigo en su vehículo al acusado D. Romeo que, a continuación pasó a utilizar su propio vehículo. Y **aun** se añade que en uno de los domicilios...

[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Fundamentos, cuarto]

La pronunciación oscilante explica también que se escriba una tilde antinormativa cuando el adverbio tiene un sentido concesivo, especialmente en la locución conjuntiva *aun cuando*:

(25)

...ya que únicamente comparte y refuerza los razonamientos de la actora (sociedad por ella dominada), **aún cuando** frente a ella considera que la demanda no puede prosperar...

[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, sexto]

f) *Las palabras solo y sólo*

La Ortografía académica de 1959 ya exponía la regla ortográfica también recogida en la Ortografía de 1999, que establece que la tilde del adverbio *solo* se suprime en todos los casos, salvo en aquellos en que esta palabra pueda interpretarse en un mismo enunciado como adverbio o como adjetivo. En la *Ortografía de la lengua española* (2010) se especifica que incluso en casos de doble interpretación se podrá prescindir de la tilde.

La regla, sin embargo, parece que es desconocida o no ha sido aceptada por todos los hablantes: los medios de comunicación, por ejemplo, siguen acentuando *solo* en su función adverbial, haya o no ambigüedad. Este uso extendido, propiciado por el hecho de que en el *Esbozo de una nueva gramática de la lengua española* (1973) -obra que carece de validez normativa-, se estipulaba, en el cuerpo del texto del epígrafe 1.8.3.F: "Igualmente se suele escribir con tilde el adverbio sólo (=solamente), frente al adjetivo solo", puede explicar que

también sea un rasgo del lenguaje jurídico la acentuación antinormativa del adverbio en enunciados no ambiguos:

(26)

...que idoneidad incriminatoria de la prueba asumida debe ser no **sólo** apreciada por el Juez, sino también plasmada en la Sentencia...

[SJP 10/2009. Getafe: Fundamentos, primero]

(27)

Tras el desistimiento efectuado por la parte actora, en el acto del juicio, de las pretensiones que se contenían en los apartados b), c) y d) del Súplico de su escrito de demanda, **solo** ha de centrarse el objeto de este litigio en determinar si se ha producido vulneración del derecho...

[SAN 3911/2009. Madrid: Fundamentos, tercero]

g) *Los demostrativos*

Por otro lado, también la norma académica ha evolucionado respecto de la acentuación de los demostrativos. Así, si bien en la Ortografía académica de 1999 se señala que la tilde en los pronombres (no en los adjetivos) demostrativos es opcional, y obligatoria únicamente en casos de percibirse ambigüedad; en el *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005) se da un paso adelante y se especifica que, si no hay riesgo de ambigüedad, los demostrativos no se acentúan nunca en su función pronominal. La *Ortografía de la lengua española* (2010) establece, finalmente, que incluso en casos de doble interpretación se podrá prescindir de la tilde en los pronombres.

Una vez más, quienes redactan documentos jurídicos parecen desconocer esta regla, o no aceptarla, a juzgar por la acentuación gráfica documentada:

(28)

...debe abonar el tiempo de prisión provisional para el cumplimiento de la pena correspondiente en la misma causa aunque **aquél** haya coincidido con el cumplimiento de otras penas...

[STS 1724/2010. Madrid: Fundamentos, tercero]

(29)

Así por **ésta** mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

[SJP 5/2010. Madrid: Fallo, p. 9]

(30)

...al pago a la actora de la cantidad de 2.355 millones de pesetas, por ser **éste** el valor del edificio subastado (...); (...) al pago a la actora de la cantidad de 2.355 millones de pesetas, por ser **ésta** la cantidad pagada por la demandante...

[SAN 3911/2009. Madrid: Antecedentes, p. 1]

Aun así, hemos podido observar algún ejemplo de buenas prácticas:

(...) Consta de igual forma probado, que ante el impago de Hasa SA. de las obligaciones asumidas, en fecha 5-7-96 Rheinhyp declaró resuelto el préstamo por la cláusula de vencimiento anticipado, requiriendo de pago a la deudora, hipotecantes y avalistas por la suma de 3000 millones de principal, 135 777.778 ptas, correspondientes a intereses ordinarios, 18.097.378 ptas por intereses de demora hasta 5-7-96, más los intereses posteriores, sin que el pago fuera atendido y por BCH en cumplimiento de los compromisos asumidos abono 1.052.863.200 ptas a Rheinhyp, cediendo **esta** a **aquel** parcialmente su posición contractual en el préstamo y en la hipoteca (...)

[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, tercero, p. 3]

No son, tampoco infrecuentes los adjetivos demostrativos acentuados, caso no contemplado como correcto por la normativa académica:

(31)

(...) En primer lugar, **éste** caso ni ha sido contemplado ni resuelto (...)

[STS 1724/2010. Madrid: Fundamentos, cuarto]

h) Las palabras compuestas sin guión

La acentuación gráfica de las palabras compuestas sin guión, que recae sobre la sílaba tónica del último elemento, en caso de que sea necesaria la tilde, no suele presentar con frecuencia patologías en los documentos jurídicos que hemos manejado.

No obstante, sí se observa duda particularmente en la acentuación de los numerales ordinales compuestos, por lo que en una misma sentencia pueden convivir formas acentuadas incorrectas con formas no acentuadas correctas:

(32)

Décimoprimero.- 1. El Letrado de la acusación particular constituida por...

Décimosegundo.- 1. El Letrado de la acusación particular constituida por (...)

Decimotercero.-1. El Letrado de la acusación particular constituida (...)

[SJP 19/2006. Albacete: Antecedentes, decimoprimer, decimosegundo, decimotercero]

2.1.2. La ortografía de los grupos consonánticos cultos

Fuera del ámbito de la acentuación, la escritura de los grupos consonánticos cultos todavía es dudosa en algunos documentos jurídicos, si bien los errores ortográficos en este ámbito tampoco son frecuentes. Las dificultades documentadas se focalizan en los grupos *bs* y *ns*, fundamentalmente, que la normativa panhispánica tiende a simplificar.

Así, por ejemplo, en el *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005) por primera vez se dice que todas las palabras que se escriben con el prefijo *trans-* pueden escribirse solo con *tras-*. Solo una lista de 50 palabras se escriben obligatoriamente con *tras-*. Es el caso de *trastorno*, que, por ultracorrección se halla documentada en las sentencias como *transtorno*:

(33)

(...) le quedaron secuelas consistentes en transtorno de estrés postraumático (1 punto) (...)

[SJP 19/2006. Albacete: Fundamentos, tercero]

En los documentos jurídicos se prefiere, en cualquier caso, y en general, las formas *trans-* cuando es opcional escribirlas como *tras-*. Es también la opción preferida por la Asociación de Academias de la Lengua:

(34)

(...) se trata por tanto de un plazo preprocesal durante el cual la resolución recaída en la vía administrativa previa puede ser impugnada ante la jurisdicción y que, una vez agotado, no extingue el derecho sino que el único efecto que se produce es la pérdida de eficacia de la reclamación, de modo que la apreciación del **transcurso** de tal plazo, en la fase jurisdiccional (...)

[SJS 4/2007. Murcia: Fundamentos, primero]

En cambio, algún juez prefiere escribir el grupo *bs* cuando la norma académica prefiere la forma simplificada. En (37), por ejemplo, se opta por *substancial*, que en el DRAE (2001) remite a *sustancial*, por la tendencia a simplificar el grupo culto. El derivado *substancialidad* no se recoge en el diccionario normativo.

(35)

(...) se entenderá un conjunto de información práctica no secreta, **substancial** y determinada (...). Se entenderá por "determinada" que los conocimientos técnicos deben estar descritos de manera suficientemente exhaustiva, para permitir verificar si se ajustan a los criterios de secreto y **substancialidad**".

[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fundamentos, cuarto]

2.1.3. La ortografía de las palabras homónimas homófonas

No es frecuente documentar en los documentos jurídicos una ortografía anómala en palabras homónimas homófonas como *haber / a ver; porque / por que / porqué/ por qué; con que /*

con que / con qué; adónde / a dónde / adonde / a donde; sino / si no, etc. No obstante, esporádicamente se registra alguna ortografía incorrecta, como ejemplificamos a continuación respecto de las formas *ha / a*:

(36)
(...) pertenecía al Grupo Hasa que es **ha** quien se concedió (...)
[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, séptimo]

2.1.4. La ortografía de las siglas y de las abreviaturas

El *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005) establece que las siglas se han de escribir sin puntos ni blancos de separación: solo se escribe punto tras las letras que componen las siglas cuando estas van integradas en textos escritos enteramente en mayúsculas. La *Ortografía de la lengua española* (2010) indica ya que en todos los contextos las siglas se escribirán sin puntos ni blancos de separación:

De acuerdo con la norma entonces vigente, en los textos jurídicos que hemos analizado, escritos antes de 2010, hay ejemplos de buenas prácticas:

(37)
(...) Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGÓN, S.L., mediante (...)
[SAP 14345/2009. Barcelona: Antecedentes, segundo]

(38)
Antecedentes
Primero.- Según consta en autos, el día 19 de Junio de 2009 se presentó demanda por el Sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA en adelante), en materia de Tutela del derecho de Libertad Sindical, contra la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA en adelante).
(...)
Hechos probados
(...) La demandada AENA, desde el año 2002 (...)
[SAN 3911/2009. Madrid: Antecedentes, primero, y Hechos probados, tercero]

Sin embargo, una misma sigla puede observarse bien ortografiada en una sentencia (40), y mal ortografiada en otras sentencias (41). Es el caso de la sigla TC, correspondiente a Tribunal Constitucional, por ejemplo:

(39)
(...) tal interpretación viene avalada por *sentencias anteriores del TC*, como las (...)
[SAN 3911/2009. Madrid: Fundamentos, tercero]

(40)
En este supuesto ya hemos señalado en nuestros precedentes (...), que la sentencia del **T.C.**, sucesora de (...)
[STS 1724/2010. Madrid: Fundamentos, tercero]

O es el caso también de la sigla correspondiente a Tribunal Supremo (TS):

(41)
(...) La *cláusula general del art. 5LCD* contempla un supuesto de ilicitud con sustantividad propia (*SSTS 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007*)
[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fundamentos, tercero]

(42)
(...) en este supuesto ya hemos señalado en nuestros precedentes, constituidos por las **S.S.T.S.** 1391/2009 Y 82/2010, que la sentencia del T.C. (...)
[STS 1724/2010. Madrid: Fundamentos, tercero]

Hay, pues, duda, en la ortografía de la sigla.

Sobre las abreviaturas, en las remisiones a otros documentos, la ortografía de la abreviatura de la palabra sentencia, sea en singular o en plural, es también aleatoria: Sirvan los ejemplos (42): **SSTS** y (43): **S.S.T.S.**, pertenecientes a distintas sentencias.

En la *Ortografía de la lengua española* (2010), como también en la publicada en 1999, se señala, además, que el plural de las abreviaturas formadas por una sola letra se puede expresar duplicando dicha letra, pero no añadiendo un punto a la primera letra duplicada. Así, *S.S.* es una abreviatura incorrecta para el plural de la abreviatura *S.* de *sentencia*. Lo correcto sería *SS*.

Siguiendo con las abreviaturas, la normativa académica recoge, asimismo, abreviaturas que se escribirán sin punto: los símbolos de los elementos químicos y de las unidades de medida. Así, es incorrecto el punto de la abreviatura de *gramo*, por ejemplo, en la secuencia de la siguiente sentencia:

(43)
(...) en el curso de dicha diligencia se aprehendieron, entre otros efectos, un trozo de 65,09 **gr.** de hachís
(...)
[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Antecedentes, primero]

También se establece que la abreviatura de *Sociedad Anónima* es *S.A.*, no *SA.*, como se observa en la siguiente secuencia:

(44)
(...) con imposición a la actora y a Huarte, **SA.** (hoy Obrascón Huarte Lain SA.)
[SJPI 7/2000. Madrid: Fallo]

Por otro lado, en la Ortografía académica se señala que las abreviaturas formadas por letras voladas llevan punto antes de dichas letras: *D.^a*. Este punto es inexistente en el texto de los documentos jurídicos que hemos examinado:

(45)
(...) representado por la Sra. Procuradora D^a M^a Teresa Cátedra Fernández (...)
[SAP J 835/2009. Jaén: Encabezamiento]

Se registran, asimismo, abreviaturas incorrectas, sobre todo en las fórmulas de tratamiento cortés:

(46)
Itma. Sra. Dña. MILAGROS DEL SAZ CASTRO (...)
[SJP 7/2000. Madrid: Encabezamiento]

La abreviatura correcta, en este caso, es *llma.*

Con frecuencia se olvida el punto en algunas abreviaturas:

(47)
(...) Claudio reclama la cantidad de 1.202,02 euros (200.000 **ptas**) por la realización (...)
[SAP J 835/2009. Jaén: Antecedentes, primero]

2.1.5. Las letras mayúsculas

a) Tendencia al mayusculismo

La aparición de la letra mayúscula en un texto viene condicionada por distintos factores. En los textos jurídicos como los que manejamos, por ejemplo, pueden llegar a escribirse enteramente en mayúscula algunas voces, con la finalidad de destacarlas. Así, a nuestro juicio, está justificado destacar enteramente en mayúscula verbos que presentan el objetivo fundamental

de la secuencia del documento que introducen, como en el verbo que introduce el Fallo. Esta mayúscula facilita la legibilidad del texto:

(48)
Fallo
DESESTIMAMOS el recurso de apelación (...)

[SAP B 14345/2009. Barcelona, Fallo]

Por el mismo motivo, también juzgamos como buena práctica destacar enteramente en mayúscula los números ordinales que ordenan los Antecedentes o lo Fundamentos:

(49)
Antecedentes
PRIMERO.- La parte dispositiva de la resolución (...)
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución (...)
TERCERO.- En la tramitación del juicio

[SAP B 14345/2009. Barcelona, Antecedentes, primero, segundo, tercero]

Con todo, los textos examinados deben revisar su práctica ortográfica respecto de las mayúsculas iniciales, dado que suelen convivir en un mismo texto jurídico mayúsculas normativas y mayúsculas antinormativas. Estas últimas solo pueden explicarse por desconocimiento de la norma del estándar panhispánico, o por propósitos expresivos que manifiestan la voluntad de quien escribe de destacar títulos o cargos, o algún segmento del texto. Sin embargo, el abuso manifiesto de la letra mayúscula con este último propósito expresivo convierte este uso en un sinsentido: es la tendencia patológica hacia el *mayusculismo*.

Al mismo tiempo, en un mismo texto se emplean minúsculas donde la norma exige el uso de mayúsculas. El resultado es un uso aleatorio de las letras mayúsculas iniciales en los textos de documentos como las sentencias, y un uso de letras minúsculas donde debería escribirse una letra mayúscula:

Aportamos a continuación, a modo representativo, ejemplos extraídos del texto de una misma sentencia:

(50)
Primero.- La plantilla de **Controladores Aéreos** que prestan servicios en los aeropuertos gestionados por la demandada se compone de 2366 trabajadores (...)
Segundo.- Más del 95% del total de controladores están afiliados al sindicato demandante. (...)
Tercero.- La demandada AENA, desde el año 2002 ha incoado un total de 35 expedientes disciplinarios, que afectaban a 39 controladores aéreos. (...)
Cuarto.- El **Convenio Colectivo** vigente prevé los trámites del expediente disciplinario en AENA en su artículo 13.
[SAN 3911/2009. Madrid: Hechos probados, primero-cuarto]

(51)
(...) sin entrar consiguientemente en el tema de si tal vulneración ha existido o no respecto a los **Delegados Locales** de USCA (...)
En el primero de ellos, bajo el epígrafe "Vulneración del **derecho de Libertad Sindical** de USCA y la discriminación que sufre este sindicato de AENA", se dice que la conducta de la demandada ha vulnerado el derecho de libertad sindical de USCA en la dimensión colectiva (...), en cuanto constituye una exclusión y un rechazo de esta entidad **Sindical**, al estarle (...)
[SAN 3911/2009. Madrid: Fundamentos, tercero]

(52)
(...) y al **Delegado** en la **Torre del Aeropuerto de Madrid** en fecha 23-2-2009 no han incurrido en irregularidad alguna. (...) En cuanto al expediente seguido al **Delegado** de USCA en la **torre del Aeropuerto de Madrid- Barajas**, que terminó (...)
[SAN 3911/009. Madrid: Fundamentos, tercero]

También pertenecen a una misma sentencia los siguientes ejemplos que ilustran, del mismo modo, la tendencia al mayusculismo, o el uso de minúsculas por mayúsculas:

(53)
(...) el Sr. José Ángel reconoció ante su esposa que mantenía relaciones con otra mujer, volviendo a discutir los cónyuges durante otro espacio de tiempo hasta que el marido decidió marcharse a una de las **Habitaciones** de la casa (...)
[SJP 9/2009. Barcelona: Hechos probados, segundo]

(54)
(...) Le golpeó la cabeza contra el marco de la puerta con intención de aturdirla e **Intentó** echarla de la habitación (...)
[SJP 9/2009. Barcelona: Fundamentos, tercero]

(55)
(...) tuvo el dominio del hecho desde el primer momento en que inmovilizó a su mujer agarrándola con **Fuerza** de las muñecas (...)
[SJP 9/2009. Barcelona: Fundamentos, noveno]

(56)
(...) pero es evidente que la mujer creyó de verdad que esto era así —el operador de emergencias transmitió a los **mossos d'escuadra**: "... es una trucada molt estranya (...)
[SJP 9/2009. Barcelona: Fundamentos, noveno]

El lector de un texto jurídico solo puede percibir, pues, caos en el uso de las letras mayúsculas y en el uso de algunas letras minúsculas.

b) Omisión de la tilde en las mayúsculas

No podemos cerrar el comentario sobre la ortografía de las mayúsculas en textos judiciales sin dedicar un apartado a señalar una ausencia aleatoria de tilde en las letras mayúsculas cuando esta tilde es obligatoria. La falsa creencia extendida de la no obligatoriedad de acentuación gráfica de las mayúsculas puede explicar esta patología:

(57)
JUZGADO **NUMERO** DIECISIETE CIVIL. Mayor Cuantía 708/97
[SJPI 7/2000. Madrid: Encabezamiento]

En segmentos breves de texto suelen convivir mayúsculas acentuadas con mayúsculas no acentuadas:

(58)
En el procedimiento 000016/2009 seguido por demanda de **UNION** SINDICAL DE CONTROLADORES (USCA contra AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA) (...)
[SAN 3911/2009. Madrid: Encabezamiento]

2.1.6. La ortografía de los extranjerismos

Los textos judiciales también recogen voces extranjeras al uso entre la comunidad de hablantes. La normativa académica suele proponer una adaptación de estas voces extranjeras, pero no censura el derecho de quien escribe a mantener la grafía originaria, siempre que quien opte por el extranjerismo crudo resalte este extranjerismo tipográficamente mediante la cursiva o las comillas.

En el texto de las sentencias, sin embargo, no suele resaltarse el extranjerismo crudo:

(59)
(...) que la actividad realizada por la demandada con posterioridad a la finalización del contrato constituía la explotación del **know-how** de la actora (...)
[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fundamentos, tercero]

Las adaptaciones propuestas por las academias de la lengua no son, tampoco, siempre seguidas. En los ejemplos, *standard* podría haber sido escrito *estándar*; la voz francesa *chalet*

es voz adaptada al español como *chalé*. Además, según se propone en el *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005), *chalé* forma el plural como *chalés*:

(60)
(...) con una amplia variedad de colores **standard** y mezclas a su gusto (...)
[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fundamentos, tercero]

(61)
(...) a través de la cual los individuos acceden a los garajes individuales propios de los **chaléts** (...). Tras dos horas y media de estancia de las cuatro personas en el **chalet**, salieron del mismo (...)
[Tribunal Supremo 1353/2009. Madrid: Antecedentes, primero]

Tampoco se evita siempre el extranjerismo innecesario. Así, el extranjerismo crudo *on-line*, que en un documento jurídico consultado se adapta sin guión, podría haberse reemplazado por la locución *en línea*:

(62)
(...) También en la información **on line** referente a la empresa PAVIPRINT (...)
[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fundamentos, tercero]

Mención aparte merecen las locuciones latinas, que, en consonancia con el uso culto mayoritario, es adecuado que se escriban en cursiva o entre comillas, También las voces latinas simples no adaptadas al español deben destacarse gráficamente.

En los textos jurídicos, sin embargo, no siempre se destaca gráficamente el latinismo crudo o la locución latina, a pesar de las indicaciones de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española:

(63)
(...) la valoración como indicio de la ausencia de una explicación alternativa por parte del acusado, de la acreditación de la falsedad de sus manifestaciones o de su manifiesta inverosimilitud, no implica invertir la carga de la prueba ni vulnera el principio "**nemo tenetur**", siempre que exista (...)"
[SJP 19/2006. Albacete: Fundamentos]

(64)
(...) el principio de seguridad jurídica, fundamentado en la regla "**pacta sunt servanda**", que se quebraría de aceptarse la posibilidad de revocar lo pactado (...)
[SAP J 835/2009. Jaén: Fundamentos, primero]

(65)
(b) la conducta desleal denunciada fue constante y continuada desde el día 1 de junio de 2004 hasta la actualidad. De lo que, a juicio de la actora, el **dies a quo** para el cómputo del plazo de prescripción se actualiza (...).
[SAP B 14345/2009. Barcelona: Fundamentos, primero, p. 3]

(66)
1º y 3º.- Al amparo del art. 852 de la LECrim se invoca vulneración de derecho a la Presunción de Inocencia y a la tutela judicial efectiva, al no describirse en el **factum** "hechos susceptibles de subsumirse en una conducta delictiva de tráfico de estupefacientes"
[Tribunal Supremo 1353/2009, Antecedentes, cuarto]

El lector de documentos jurídicos agradecería, pues, que se sistematizara esta ortografía.

2.1.7. La ortografía de los números y de la fecha

Otro de los rasgos característicos de la prosa jurídica es la mezcla injustificada de cifras y de letras en la expresión escrita de los números, según muestran los siguientes fragmentos:

(67)
(...) Rollo número 14 de 2.008 seguido por el Juzgado de Instrucción **número uno** de La Carolina (...)
[SAP J 835/2009. Jaén: Encabezamiento]

(68)
(...) ha visto en juicio oral y público celebrado el día 12 del mes en curso el Procedimiento Abreviado nº 355/22008 procedente del Juzgado de Instrucción nº 2 de Aranjuez (...)
[SJP 10/20009. Getafe: Encabezamiento]

(69)
(...) Segundo. CONDENO a José Ángel como autor criminalmente responsable de una falta de lesiones, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de 1 mes a razón de 12 euros al día con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas (...)
[SJP 9/2009. Barcelona: Fallo]

Tal vez se persigue facilitar la rapidez lectora de los números cuando se evita su escritura en letras: la escritura en números es más breve y el número queda destacado en la cadena de letras.

Este propósito puede explicar, asimismo, otra forma de escritura de los números documentada en los textos jurídicos que analizamos, que recuerda la forma de expresión escrita de cifras en formatos digitales y que, por ello, consideramos inadecuada en documentos jurídicos. En estos casos podría prescindirse del 0:

(70)
(...) respecto del que solicitó la imposición de las siguientes penas; prisión de 09 meses y 01 día, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 02 años y 02 días (...)
[SJP 9/2009. Barcelona: Antecedentes, segundo]

La patología en la expresión numérica se documenta, asimismo, en el uso no lingüístico del punto. En este sentido, el *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005) señala que es incorrecto el uso del punto tras las unidades de millar en la expresión numérica de los años. Con todo, no es difícil observar este punto en el texto de las sentencias y de otros documentos jurídicos:

(71)
Vista en juicio oral y público por la Sección Tercera de esta Audiencia, en Procedimiento Abreviado número 45 del año 2.006 (...)
[SAP J 835/009. Jaén: Encabezamiento]

Al contrario, tampoco es sistemática la escritura del punto obligatorio que facilita la lectura de números que constan de más de cuatro cifras:

(72)
PRIMERO.- En el presente procedimiento la parte actora interesa con carácter principal, sean condenados los bancos demandados a abonarle la suma de 4536 millones de pesetas (...)
SEGUNDO.- Consta acreditado en autos que mediante documento privado de fecha 18-4-94, el banco Rheinyp Reinische Hypothekebank, AG (...) concedió a Hasa, SA. un préstamo con garantía hipotecaria por la suma de 3.000 millones de pesetas, en el que se pactaba la constitución de hipoteca sobre la finca propiedad de la actora de 5774,42 m2 (...)
[SJPI 7/2000. Madrid: Fundamentos, primero y segundo]

Ciertamente, la ausencia de este punto dificulta la lectura de las cifras.

Sobre la ortografía de la fecha, se observa, asimismo, una falta de consenso. Así, en el texto del Encabezamiento, podemos documentar distintos modos de expresión de la fecha:

(73)
Madrid, a catorce de septiembre de dos mil nueve.
[SAN 3911/2009. Madrid: Encabezamiento]

(74)
En la Villa de Madrid, a ocho de noviembre de dos mil seis.
[SAN 547/2006. Madrid: Encabezamiento]

(75)

En Madrid a 29 de abril de 2005.

[Audiencia Nacional 25/2005. Madrid: Encabezamiento]

(76)

En la ciudad de Jaén a diecisiete de Junio de dos mil nueve.

[SAP J 835/2009. Jaén: Encabezamiento]

(77)

En la ciudad de Madrid, a diez de Noviembre de dos mil.

[SJPI 7/2000. Madrid: Encabezamiento]

(78)

En la ciudad de Barcelona, a dieciséis de diciembre de dos mil

[SAP B 14345/2009]

(79)

En Getafe, a 16 de noviembre de 2009.

[SJP 10/2009. Getafe: Encabezamiento]

En el *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005) se establece que las fechas pueden escribirse enteramente con letras. Esta parece ser la opción preferida por los jueces: ejemplos (73), (74), (76), (77), (78). También la fecha puede escribirse enteramente con números, opción no contemplada en el *Encabezamiento* de los documentos jurídicos que hemos manejado. Por último, la fecha puede escribirse, asimismo, con una combinación de letras y números: ejemplos (75) y (79).

Para un lector no avezado en el manejo de documentos jurídicos puede resultar sorprendente que la opción preferida en el *Encabezamiento* de una sentencia sea la escritura completa de la fecha con letras. De hecho, en el mismo artículo del *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005) se advierte de que no es habitual en la lengua común escribir las fechas enteramente con letras: el sistema común combina letras y números, como en (75) y (79). En este caso, el día y el año se escriben con números arábigos, y el mes, con letras y siempre con inicial minúscula. Así se establece también en la *Ortografía de la lengua española* (2010). La inicial mayúscula de los meses del año que observamos en (76) y en (77) contraviene, pues, la norma académica.

Nada se dice en el *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005) sobre la escritura del punto al final de la fecha, lo que consideramos innecesario. Por otro lado, tal vez sería conveniente unificar la expresión de la localidad de la que procede el documento jurídico, así como el uso de la coma antes de introducir la fecha.

Más aún: el *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005) señala, asimismo, que con mucha frecuencia, para abreviar, las fechas se escriben solo con números, separando las cifras correspondientes a día, mes y año con guiones, barras o puntos, y sin blancos de separación. Esta práctica es habitual en el desarrollo del texto de los documentos jurídicos, si bien no es sistemática. Se observan, pues, en los Antecedentes o en los Fundamentos de las sentencias, secuencias en que la fecha está abreviada con números, y secuencias en que la fecha se expresa siguiendo las opciones documentadas en el Encabezamiento:

(80)

SEGUNDO. En la tarde del día **02 de abril de 2009** la Sra. Inmaculada (...)

[SJP 9/2009. Barcelona: Hechos probados, segundo]

(81)

Este es el momento en que ella sitúa el arañazo, no antes. Así lo afirmó todas y cada una de las ocasiones en las que se ha pronunciado sobre lo ocurrido: 1.- A las 23:20 horas del día **02/04/09**, inmediatamente después de ocurrir los hechos (...)

[SJP 9/2009. Barcelona. Fundamentos, quinto]

(82)

De una valoración conjunta de la prueba practicada en el plenario, se declara como probado que sobre las 14,00 horas del día **2 de agosto de 2008**, el acusado (...)

[SJP 10/2009. Getafe: Hechos probados, único]

(83)

En cuanto al expediente seguido al Delegado de USCA en la torre del Aeropuerto de Madrid- Barajas, que terminó con la imposición de la sanción por Resolución de **17-6-09**, se aprecia en la copia del expediente aportada por la demandada que con fecha **17-6-09** se dio traslado (...)

[SAN 3911/2009. Madrid: Fundamentos, tercero]

En las formas abreviadas, cabe tener en cuenta que la norma académica recomienda no anteponer un cero a la cifra simple si el número que indica el mes o el día es inferior a diez. También según la norma académica, el año puede aparecer indicado con sus cuatro cifras o solo con las dos últimas. La opción preferida en las sentencias es escribir el año con las dos últimas cifras.

2.2. Particularidades gramaticales

Recogemos aquí algunos usos que contravienen la norma académica en el nivel de análisis gramatical. No son patologías frecuentes, en el texto de documentos jurídicos como las sentencias, pero conviene evitarlas si se pretende una escritura cuidada, correcta y precisa.

Como señalábamos en la introducción de este capítulo, no incluimos a continuación patologías gramaticales que ya han sido comentadas en otros capítulos anteriores del informe.

2.2.1. Los verbos

a) Incorrecciones en la conjugación verbal

La incorrección en la conjugación verbal es prácticamente inexistente en los textos jurídicos, excepto en lo que atañe al verbo *prever*. Así, es frecuente la forma antinormativa *prevee*, de un inexistente verbo *preveer*, debido al cruce con el verbo *proveer*. Esta forma, extendida incluso en el uso de hablantes cultos, debería evitarse en el texto de las sentencias y del resto de los documentos jurídicos.

(84)

El *Convenio Colectivo vigente prevee los trámites del expediente disciplinario en AENA en su artículo 13.*

[SAN 3911/2009. Madrid: Hechos probados, cuarto]

b) El uso del futuro de subjuntivo

No puede señalarse siempre la incorrección del uso del futuro de subjuntivo, pero sí debe subrayarse que este tiempo verbal está ya en desuso en la lengua común contemporánea con un valor de futuro hipotético, como se expone en la *Nueva gramática de la lengua española* (2009). Por tanto, tendría que revisarse este uso en los documentos jurídicos, por sentirse arcaizante:

(85)

Los hechos declarados probados en el apartado SEGUNDO son legalmente constitutivos de un delito de prevaricación judicial, previsto y penado en el artículo 446 número 3º del Código Penal (RCL 19955, 3170 y RCL 1996, 777) vigente, por concurrir los elementos objetivos y subjetivos de dicho tipo penal. Dispone esta norma que "El Juez o Magistrado que, a sabiendas, **dictare** sentencia o resolución injusta será castigado" (...)

[TSJAnd 10/2008. Granada: Fundamentos, tercero]

En este fragmento (85), así como en (86), el futuro de subjuntivo podría evitarse si se recurre, por ejemplo, al presente de subjuntivo (85) o al pretérito imperfecto de subjuntivo (86):

(86)

Con fecha 17 de julio de 2009 se dictó Auto por el que se acordaba citar y emplazar a los demandados para que se **personaren** y **contestaren** por un plazo de 20 días hábiles, con los apercibimientos legalmente establecidos para este tipo de procedimiento.

[SJPI 4/2010. Madrid: Antecedentes de hecho, primero]

c) Las perífrasis [*deber de + infinitivo*] y [*deber + infinitivo*]

No son ajenos los textos jurídicos al uso extendido en la lengua general de la perífrasis *deber + de + infinitivo* con el valor de obligación, cuando esta perífrasis entraña suposición, conjetura o creencia:

(87)

En trámite de conclusiones definitivas, en la sesión del 9 de mayo de 2006, presentó escrito de modificación, en el aspecto penal, para interesar l pena de 2 años de prisión y 6 meses de prisión, e inhabilitación especial para desarrollar las funciones de factor de circulación durante cinco años, y costas, incluidas las de acusación particular, y, en relación con la responsabilidad civil para solicitar lo siguiente: por perjuicios económicos y morales la cantidad de 704.795 euros, **debiéndose de descontar** de dicha cantidad las percibidas a cuenta de Mapfre Industrial, SAS, de 96.789,33 y 40.328,88 euros; el resto a definitivas.

[SJP, 19/2006. Albacete: Antecedentes, decimoprimer]

El uso incorrecto de esta perífrasis puede dificultar la correcta comprensión del texto legal.

No es extraño, tampoco, que en un mismo documento se alterne el uso de las perífrasis *deber + infinitivo* y *deber + de + infinitivo*, ambas para expresar obligación:

(88)

Afirma que **debe existir** un folleto base una vez se concretan y completan las emisiones y dicho folleto **debe estar** a disposición del inversor y hacerse un resumen del mismo, de manera que pueda conocer con exactitud los riesgos de mercado, liquidez y crédito (insolvencia). Finalmente explicitó que, ante un supuesto de inversor que pretenda adquirir productos financieros, la primera obligación de éste es procurarse información, si no le quedan claras las informaciones facilitadas por la entidad, **deberá solicitar** mayores aclaraciones o respuestas a sus preguntas y dudas, si así no se aclara con el producto, **debería de no invertir**, aunque aseveró a renglón seguido, salvo que la entidad financiera presionara para adquirir el producto.

[SJPI 4/2010. Madrid: Fundamentos, primero]

173

2.2.2. Los adverbios nominales seguidos de posesivos

La incorrección que comentamos en este epígrafe atañe a un grupo de adverbios que poseen rasgos propios de los nombres. Son los adverbios nominales: *cerca*, *lejos*, *delante*, *detrás*, *dentro*, *fuera*, *encima*, *debajo*, *enfrente*, *alrededor*, *antes*, *después*.

Estos adverbios pueden ir complementados por nombres o grupos nominales o adverbiales precedidos de la preposición *de*, que expresan el término de referencia: *enfrente de él*. En la lengua común, su rasgo nominal hace que algunos de estos adverbios tiendan a ser complementados por posesivos, como si se tratara de nombres: *enfrente suyo*. Sin embargo, por su condición de adverbios, estas formas *adverbio nominal + posesivo* no se consideran correctas -a pesar de su justificación gramatical-.

Del mismo modo, al carecer de género los adverbios, no parece gramatical que los posesivos que los complementan tomen las informaciones de género y de número de los sustantivos. Son, también, pues, incorrectas construcciones como *delante suya*.

En los textos jurídicos examinados documentamos ambas patologías: adverbios nominales complementados por posesivos, y posesivos que complementan a adverbios nominales que toman información de género y número del sustantivo:

(89)
(...) ven como D. Eulalio, teniendo **delante suya** a Dña. Sabina, “levanta el brazo derecho” (palabras de D. Jesús María), y lo “lanza hacia abajo”, en claro ademán de acometimiento (palabras plenarias de Dña. Guillermina) (...) Existe, pues, prueba directa, de tres secuencias (alzar el brazo derecho del acusado teniendo **en frente suya** a la perjudicada, lanzarlo hacia abajo en ademán de acometimiento, y quedar inmediatamente después de ello ésta en el suelo).

[SJP 10/2009. Getafe: Fundamentos, primero]

La extensión en el uso de hablantes cultos de estas construcciones no admitidas en el estándar panhispánico explica que se documenten en los textos jurídicos.

2.2.3. Las preposiciones

Tal vez se trate en algunos casos de lapsus, pero el texto de los documentos jurídicos recoge usos preposicionales agramaticales -o ausencia de uso de la preposición- no contemplados por el estándar panhispánico del español, como los que se aportan a continuación:

(90)
(...) toda vez que la finalidad de esas denuncias fue la de **reclamar por** los objetos perdidos
[SJP 19/2006. Albacete: Fundamentos, primero]

(91)
(...) Es decir, la actuación comercial realizada por el demandado tras la finalización del contrato de 1 de junio de 1999 que, a juicio de la actora, **atenta los** pactos contractuales aludidos.
[SAP B 1435/2009. Barcelona: Fundamentos, tercero]

(92)
(...) Pero, evidentemente, no pensó en **actuar ninguna de estas posibilidades** (...)
[SJP 19/2006. Albacete: Fundamentos, primero]

Así, en (92), el verbo reclamar es transitivo en su acepción ‘pedir o exigir con derecho o con instancia algo’. Por tanto, no puede aceptarse la construcción reclamar por. Al contrario, en (93) y en (94), la preposición contra ha sido elidida: atenta contra los pactos contractuales y actuar contra ninguna de estas posibilidades hubieran sido las construcciones deseables.

2.2.4. Concordancia

Cerramos el comentario de las desviaciones gramaticales más relevantes documentadas en los textos jurídicos que examinamos poniendo de manifiesto algunos fallos de concordancia. Una vez más, estos fallos pueden ser debidos a meras erratas, fruto de una redacción apresurada o no revisada; al desconocimiento del estándar gramatical panhispánico; a un uso extendido en la lengua común; o a la tendencia a alargar innecesariamente párrafos y oraciones, lo que conlleva una falta de control sobre la construcción sintáctica en su globalidad.

A modo ilustrativo aportamos aquí una secuencia textual en que se observa un fenómeno de inmovilización del pronombre *le*; esto es, la falta de concordancia entre el pronombre *le* y su referente en plural, lo que no es extraño en los usos orales y escritos cuando ambas formas están alejadas la una de la otra. También se observa falta de concordancia en femenino entre el sujeto: *la prisión provisional* y el participio *abonado*:

(93)
De acuerdo con lo previsto en el art. 58.1 del Código penal citado **le** será abonado **a los penados la prisión provisional cumplida** por esta causa, siempre que no (...)
[Tribunal Supremo 1353/009. Madrid: Antecedentes, segundo]

La falta de concordancia en género es relativamente frecuente en los textos jurídicos. En un nuevo ejemplo, falla la concordancia en femenino:

(94)

(...) que permite imputar a **una persona**, objetiva y subjetivamente, unos hechos por los que es **acusado**; y que la valoración (...)

[SJP 10/2009. Getafe: Fundamentos, primero]

Esta falta de concordancia está íntimamente relacionada con la tendencia manifiesta al anacoluto, en los textos jurídicos examinados. La ruptura sintáctica, derivada de la construcción de oraciones extensas en las que se acumulan cláusulas subordinadas, es uno de los errores de construcción oracional y textual que más perturba la comprensión de los textos jurídicos. También la falta de concordancia perturba la comprensión de los textos.

En distintos capítulos de este informe se han ido comentando distintos anacolutos, especialmente en la parte correspondiente al *Análisis de problemas de estructura oracional (i) La subordinación*. No incluimos, pues, aquí, nuevos ejemplos de anacolutos; pero sí queremos insistir en la necesidad de eliminar de los textos jurídicos las incoherencias sintáctico-lógicas.

2.3. Particularidades de la reproducción del discurso ajeno

2.3.1. Los estilos citativos: cita directa, cita indirecta, cita mixta

La parte del informe correspondiente a los problemas relacionados con cuestiones de normativa quedaría incompleta sin una referencia a las citas. Las citas son procedimientos de reproducción del discurso ajeno, frecuentes en la redacción de los textos jurídicos. No en vano, estos textos se caracterizan por su carácter polifónico. Así, quien redacta documentos jurídicos como informes o sentencias convoca en su discurso a otras voces: voces de otros jueces, a los que se cita remitiendo a otras sentencias; voces del Ministerio Fiscal; voces de agentes no jurídicos que participan en el proceso, como las de los peritos; voces de testigos e implicados directamente en los hechos.

Las palabras de estas voces son reproducidas siguiendo esquemas canónicos de cita directa o de cita indirecta, como ilustramos a continuación:

a) Cita directa canónica:

(95)

Este es el momento en que ella sitúa el arañazo, no antes. Así lo afirmó todas y cada una de las ocasiones en las que se ha pronunciado sobre lo ocurrido: 1.- A las 23:20 horas del día 02/04/09, inmediatamente después de ocurrir los hechos, habló por teléfono con los mossos d'escuadra atemorizada y **dijo: "... me ha golpeado, yo me he defendido, le he arañado... yo también me he defendido, me he intentado defender pero claro..."**. 2.- A las 03:45 horas del día 03/04/09 en la comisaría de los mossos d'escuadra, sin asistencia letrada **refirió: "... El Sr. José Ángel ha empezado a empujar a la Sra. Inmaculada para que saliera de la habitación dándole golpes contra la pared... la ha cogido por las muñecas, se la ha retorcido y han forcejeado..."**.

[SJP 9/2009. Barcelona. Fundamentos, quinto]

En las citas directas, la voz del locutor reproducido irrumpe en el enunciado de discurso referido sin ningún tipo de reajuste de las marcas de deixis personal o espacio-temporal originales. Marcas tipográficas: los dos puntos y las comillas, delimitan las palabras ajenas que se reproducen con (una pretendida) literalidad. La parataxis caracteriza la relación sintáctica entre el marco de la cita y la cita propiamente dicha.

b) Cita indirecta canónica:

(96)

(...) **Se sostiene por la parte actora que el sindicato USCA ha sido objeto de discriminación (...)**

[SAN 3911/2009. Madrid: Fundamentos, tercero]

(97)

(...) **La Sra. Inmaculada denunció a la policía que su marido la había agredido, pero también hizo constar que no era una persona agresiva.** (...)

[SJP 9/2009. Barcelona: Fundamentos, siete]

La cita indirecta es responsabilidad de quien cita. El locutor reproductor acomoda a su marco enunciativo las marcas personales y espacio-temporales originarias de la voz citada. No existe voluntad de literalidad, sino que el discurso indirecto se considera una paráfrasis, un resumen o una reformulación de lo dicho anteriormente. En su estructura sintáctica, la cita propiamente dicha es funcionalmente objeto directo del verbo de comunicación, y su categoría gramatical es la de subordinada sustantiva.

Con todo, un tercer estilo citativo, censurado en manuales de estilo, también se observa en los textos jurídicos: la cita mixta. Este tercer estilo, a nuestro juicio, facilita la redacción de las secuencias narrativas, expositivas o argumentativas de los textos jurídicos, por no romper la linealidad discursiva. Debería, pues, revisarse la censura a este estilo citativo.

La estructura sintáctica de estas citas mixtas escapa a la que caracteriza los dos tipos canónicos de cita. Así, una cita mixta presenta una estructura sintáctica de cita indirecta pero incluye fragmentos literales entrecorridos. Este estilo citativo es frecuente en el texto de los documentos jurídicos examinados, y convive con las formas canónicas de cita:

c) Cita mixta:

(98)

Ya había sido amenazado por **este interno** en ocasiones anteriores con motivo de una huelga de hambre y la necesidad de hidratarle, **diciéndole que “tendría consecuencias”**.

[SAN5247/2006. Madrid, Fundamentos, cuarto]

(99)

La Sra. Inmaculada denunció a la policía que su marido la había agredido, pero también hizo constar que no era una persona agresiva. **Ante el juez de instrucción dijo que “pese a todo le sigue queriendo”,** y no puede olvidarse (...)

[SJP 9/2009. Barcelona: Fundamentos, siete]

(100)

Sostiene el recurrente que no le ha sido abonado en la ejecutoria 1172007 el tiempo de prisión provisional sufrido en la misma “por haber coincidido con la prisión provisional decretada en otro procedimiento y con el incumplimiento de la pena impuesta en la sentencia firme”.

[STS 1724/2010. Madrid: Fundamentos, segundo]

(101)

La testifical directa de D. Jesús María y Dña. Guillerma, quienes, como dijimos anteriormente, desde la cristalera del hall del hotel, siguen visualmente los acontecimientos que ocurren en el exterior. **Ambos, de forma coincidente, señalan que,** sin ver directamente el cuerpo de Dña. Sabina, al quedar el mismo oculto a su visión por el del acusado, **ven como D. Eulalio,** teniendo delante suya a Dña. Sabina, **“levanta el brazo” (palabras de D. Jesús María), y lo “lanza hacia abajo”, en claro ademán de acometimiento (palabras plenarias de Dña. Guillermo luego de confrontarle la Fiscal su declaración instructora obrante al folio 52 de las actuaciones)** (...)

[SJP 10/2009. Getafe: Fundamentos, primero]

2.3.2. La ortotipografía de la cita: la delimitación de las palabras ajenas

La patología que con mayor frecuencia presentan estos estilos citativos es de carácter ortotipográfico: el descuido en la apertura o cierre de las comillas impide delimitar con claridad el inicio y el final de unas palabras citadas. En el siguiente fragmento ilustrativo, no se cierran las comillas; además, se incluyen unas comillas internas, que deberían haber sido distintas a las primeras (comillas latinas, por ejemplo):

(102)

En aquella se decía: “Nadie discute que el *artículo 574*, incluido por el legislador dentro de la Sección 2ª del Capítulo V. Título XXII del Libro II del Código Penal vigente “De los delitos de terrorismo”, contiene una cláusula residual o de cierre, aplicable a los supuestos que específicamente no hayan sido objeto de cualificación en los anteriores artículos. Con ello, se pretende vincular aquellos delitos de la parte especial que carecen de relación con esta modalidad delictiva, y por tanto para su relevancia típica habrá que establecer una vinculación con el propósito perseguido, la alteración del orden constitucional y la paz pública. Pero en este caso, (al igual que en el de autos) el delito de amenazas terroristas viene expresamente tipificado en el *artículo 572.1.3º del Código Penal*, (...)

[SAN 5247/2006. Madrid: Fundamentos, tercero]

En la siguiente secuencia, se prescinde incluso de las comillas:

(103)

Los hechos declarados probados, a tenor de lo dispuesto en el *artículo 741 de la LECrim*, son constitutivos de un delito de amenazas terroristas, previsto y penado en el ***artículo 572.1.3º del Código Penal***, que dispone: **Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública (*artículo 571*), atentaren contra las personas, causando cualesquiera otra lesión o detuvieran ilegalmente, amenazaren o coaccionaran a una persona, incurrirán en la pena de prisión de diez a quince años.**

[SAN 5247/2006. Madrid, Fundamentos, primero]

En (104) se prescinde de los dos puntos y de la mayúscula inicial que canónicamente introduce la cita directa, tras el marco de la cita: *señala el Tribunal Constitucional*, si se quiere una cita directa; o se prescinde del nexos subordinante que tras el verbo de comunicación *señala* y el sujeto verbal *el Tribunal constitucional*, si se quiere una cita mixta. También se incluyen comillas dentro de las comillas de cita, sin que ambas comillas se distingan tipográficamente:

(104)

El condicionamiento jurídico del principio acusatorio estriba en la calificación de los hechos realizada por la acusación. Atendidas las facultades del Juzgador penal, también **señala el Tribunal Constitucional**, “**por las cuestiones de orden público implicadas en el ejercicio del “ius puniendi”, el Juez podrá condenar por un delito distinto al solicitado por la acusación siempre que sea homogéneo con él y no implique una pena de superior gravedad**”, también con cita de las *SSTC 87 y 118/01*, precisando finalmente que “lo decisivo a efectos de la lesión del artículo (...)”.

[SAN 5247/2006. Madrid, Fundamentos, primero]

Y todavía puede señalarse una nueva patología. En (105), además de que no se cierran las comillas, es antinormativa la coma tras el nexos *que*. Se hubiera preferido aquí, tal vez, una cita directa canónica, o sustituir la coma por dos puntos si se hubiera optado por la cita mixta:

(105)

La *STS 20/2001, de 28 de marzo*, dispone que, “**El derecho a la presunción de inocencia, según la doctrina de esta Sala, alcanza solo a la total ausencia de prueba y no a aquellos casos en que en los autos se halla reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales (*STS 511/2002, de 18 de marzo*)**.”

[SAN 5247/2006. Madrid, Fundamentos, cuarto]

Es censurable, asimismo, el espacio en blanco que en ocasiones sucede a las comillas que abren cita, o que precede a las comillas que cierran cita.

ANEXO. OTROS DOCUMENTOS DIFERENTES DE LA SENTENCIA

1. INTRODUCCIÓN: PRINCIPALES PATOLOGÍAS DEL ESPAÑOL JURÍDICO (II): OTROS TEXTOS

La sentencia judicial es, sin duda alguna, el género jurídico que ha merecido mayor atención por parte de los lingüistas, debido probablemente a su indudable repercusión procesal y social. Ello puede llevar a pensar que, frente al resto de documentos de carácter jurídico, la sentencia contiene problemas y propiedades peculiares. Sin embargo, lo cierto es que buena parte de las patologías que se han observado en la primera parte del informe (o informe base) pueden encontrarse también en muchos otros textos escritos generados en contextos de este mismo ámbito profesional. Así, existen recursos y prácticas discursivas que, más allá del género de la sentencia, se observan de forma transversal en todos los documentos que emiten los operadores jurídicos.

El carácter transversal de tales patologías lingüísticas y textuales se debe a que los profesionales del Derecho, además de compartir conocimientos y técnicas específicas, configuran una *comunidad discursiva* (Swales 1990) que se caracteriza por emplear unas mismas rutinas, prácticas y estrategias comunicativas. Asimismo, los textos jurídicos se definen por su notable *intertextualidad* (Bazerman 1994), esto es, muy a menudo unos documentos citan, reproducen y parafrasean otros textos jurídicos previos. En ese sentido, un verdadero proceso de modernización del lenguaje jurídico en español no puede concentrarse únicamente en el género de la sentencia, sino que debe pasar necesariamente por la renovación de las formas comunicativas que comparten todos los profesionales implicados en el ejercicio del Derecho. Solo la reforma del discurso jurídico en su totalidad revertirá en una auténtica transformación de las prácticas textuales de la Administración de Justicia.

Este anexo se ocupa, precisamente, del análisis de las patologías textuales presentes en textos jurídicos diferentes de la sentencia, tales como el escrito de calificación del Ministerio Fiscal o el informe que emite el Registro Civil. Dado que los problemas que se han señalado para el género de la sentencia pueden extrapolarse, en buena medida, a los demás géneros del Derecho, se seguirá el mismo protocolo de análisis y la misma clasificación que en el informe previo. Se proporcionarán algunos fragmentos de textos jurídicos que sirven para

ilustrar las patologías identificadas que, en el análisis del corpus, han resultado más frecuentes y significativas. En todos los fragmentos, como ha venido haciéndose hasta aquí, se indicará el tipo de género del que se trata, así como el operador jurídico que ha emitido ese texto en concreto; cuando sea posible, además, se precisará la ciudad española donde ese texto fue escrito.

Referencias

- Bazerman, Charles (1994): "Systems of Genres and the Enactment of Social Intentions", en Aviva Freedman & Paul Medway (eds.) *Genre and the New Rhetoric*, Londres: Taylor & Francis, 79-101.
- Swales, John (1990): *Genre analysis: English in academic and research settings*. Cambridge: Cambridge University Press.

2. DELIMITACIÓN DE UNIDADES TEXTUALES

2.1. Introducción. La construcción textual: el párrafo

2.1.1. Principales problemas relacionados con la construcción parafrástica

a) Párrafos unioracionales

En los ejemplos de párrafos oracionales que siguen, se observa una acumulación de incisos, lo que dificulta la delimitación de la oración principal, y, en consecuencia, la interpretación del fragmento. Como se ve, los autores no han usado puntos y seguido para delimitar unidades oracionales más pequeñas que facilitarían la lectura. Adviértase que en ambos casos se trata de párrafos constituidos por una sola oración:

(1)
En efecto, de las declaraciones del acusado en el Plenario en el que palmariamente se reconoce tal condición y [a] cuyo visionado dada su brevedad y elocuencia esta parte se remite para evitar caer en el Traduttore traditore se llega inequívocamente a esa conclusión y por ello se considera errada la interpretación de los hechos del juzgador y se considera que el Tribunal de Apelación puede corregir el error pese a la última doctrina del Tribunal Constitucional, sentada a partir de la STC167/02, que recoge la imposibilidad de revocar las sentencias absolutorias que se dicten en la 1ª Instancia penal, basadas en pruebas orales, salvo que estas se vuelvan a practicar en la 2ª, lo cual no es admitido por las normas procesales penales que solo permiten la práctica de aquellas pruebas por causas no imputables al recurrente [que] no se hayan podido practicar en la 1ª instancia.

[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal nº 3 bis de Madrid. 19/03/2009]

(2)
El principio "non bis in idem", en consecuencia, no se vulnera en los supuestos de Delitos Contra la Ordenación del Territorio, por la actuación de la jurisdicción penal, en el caso de haber recaído sanción previa en vía administrativa, en aplicación de la doctrina antes referida, considerándose la preferencia de la jurisdicción penal (artículos 133 L.R.J.A.P y Procedimiento Administrativo Común, y 114 L.E.Criminal) en el enjuiciamiento de aquellas conductas que, suponiendo un ataque al bien jurídico protegido en la norma (la ordenación del territorio entendida no como norma, sino como utilización racional del suelo de acuerdo a dicha normativa para la realización del interés general), reúnen, como es el caso presente, todos los requisitos objetivos y subjetivos requeridos para la configuración del tipo del artículo 319 del Código Penal, tanto si ha recaído sanción en vía administrativa en el correspondiente expediente sancionador, como si no ha sido así y ha recaído resolución de suspensión del expediente administrativo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 114 L.E.Criminal y 195.4º de la Ley 17/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

[Impugnación recurso de apelación. Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas 773/08]

El siguiente párrafo está también compuesto por una única oración; es decir, no existe en su interior ningún punto y seguido que fragmente la lectura en unidades sintácticas más pequeñas que, de este modo, pudieran distribuir de modo más legible los diferentes miembros textuales:

(3)

Según se me manifiesta por las Funcionarias de Gestión y Auxilio respectivamente Dña. y de Auxilio Dña., quienes desempeñan su trabajo en este Registro Civil de Ciutadella de Menorca, efectivamente se incoó en fecha 06.09.06, Expediente de Nacionalidad por Residencia a instancia de D., tramitado bajo el numero/2006 no pudiendo precisarse en este momento el estado en que dicho expediente se encontraba, cuando, aproximadamente en el pasado mes de Julio al interesarse esta persona por el estado actual de su expediente de Nacionalidad, se constató que al parecer el mismo se había extraviado.

[Informe. Registro civil, Ciutadella (Menorca). 26/10/2009]

De hecho, este párrafo reúne múltiples problemas de tipo textual y lingüístico. A continuación, proponemos una **versión alternativa** que muestre que una escritura eficiente mejora la claridad de la lectura y favorece una mayor economía en el esfuerzo de interpretación:

(3bis)

Las funcionarias Dña. y Dña., que desempeñan su trabajo en este Registro Civil de Ciutadella de Menorca, afirman lo siguiente: en fecha 6 de septiembre de 2009, D. solicitó un expediente de nacionalidad por residencia, que, en efecto, se incoó y tramitó con el número/2006. Aproximadamente en el pasado mes de julio, D. se interesó por el estado de su expediente; fue entonces cuando las señoras constataron que, al parecer, el expediente se había extraviado. Ninguna de ambas puede asegurar en qué estado se encontraba éste cuando se extravió.

b) Párrafos excesivamente largos

Como puede comprobarse, el párrafo de (4) es demasiado largo e infringe una de las reglas de composición adecuada de los párrafos que se han propuesto en el capítulo 1 del informe: que un párrafo debe desarrollar un único tópico. Por el contrario, el párrafo que sigue contiene, al menos, dos tópicos diferentes: uno, la situación del Registro Civil del municipio de Collado Villalba; dos, la solicitud que realizó el Registro para tratar de paliar la falta de personal y en qué aspectos esa solicitud fue atendida.

(4)

primer tópico [Sobre este Registro Civil pesa una gran carga de trabajo toda vez que la población ha aumentado durante los últimos diez años alcanzando actualmente los 64.815 habitantes la población de Collado Villalba y los 166.585 la del partido judicial, con un porcentaje de población extranjera de un 16,8 por ciento, que ha disparado fundamentalmente los expedientes de nacionalización de los 147 tramitados en el año 1999, a 653 en el año 2.003 y de esa cantidad en el año 2.009 en más de un 144 por ciento, hasta los 1595. Tal aumento poblacional no ha ido acompañado de un correlativo aumento de plantilla, por lo que en numerosas ocasiones se ha solicitado tal medida así como la dotación de unas instalaciones adecuadas]. **segundo tópico** [Para paliar en lo posible tal situación fue solicitada como medida de refuerzo el nombramiento de funcionaria interina del cuerpo de tramitación procesal, habiéndose atendido dicha solicitud y prorrogándose la misma hasta haber pasado su plaza a formar parte de la plantilla orgánica en mayo del pasado ejercicio 2.009. No obstante y tal como se recogía en solicitud de prórroga de la medida indicada formulada en fecha de 19 de febrero de 2.009, se hacía imprescindible el nombramiento de otros dos funcionarios más para que la situación fuera equivalente a la que mostraba el Registro Civil de Getafe en enero de 2.006, que con un volumen de población menor "gozaba" de la adscripción de cinco funcionarios, en vez de los tres que conforman la actual plantilla de este Registro. Tal solicitud no fue atendida y por ello se solicitó y fue concedida prolongación de jornada a dos funcionarias de este Registro con objeto de tramitar los expedientes que finalizó en el mes de septiembre y que se encuentra pendiente de informe favorable de prolongación de la medida por la Unidad Inspectora correspondiente del Consejo General del Poder Judicial].

[Informe. Registro Civil de Collado Villalba. 2009]

En el ejemplo anterior sería, por tanto, conveniente separar los dos tópicos señalados en dos párrafos independientes, que diesen cuenta del cambio informativo que tiene lugar en el texto.

2.2. Anacolutos provocados por la superestructura

El ejemplo de (5) ilustra cómo los formulismos son en ocasiones incluidos mecánicamente por la persona encargada de la redacción de los documentos jurídicos. Ello se traduce en ocasiones en diferentes tipos de anomalías textuales. Una de ellas se ejemplifica en el párrafo siguiente, en el que se observa que uno de los componentes de la fórmula se repite un poco

más adelante en el cuerpo del texto, como si no se hubiera incluido todavía en la redacción, dando lugar a un anacoluto (error en la construcción sintáctica).

Por otro lado, en el fragmento, el verbo principal está en primera persona a pesar de que el sujeto no está constituido por ninguna marca de primera persona:

(5)
D^a CARMEN MARÍN GARCÍA, JUEZ ENCARGADA DEL REGISTRO CIVIL DE VINARÒS, **INFORMO**:

Que en relación con la queja formulada ante el Defensor del Pueblo D....., remitida a este Registro Civil por la Dirección General de los Registros y del Notariado, con número de referencia [...], **informo** que el promotor no compareció ante esta oficina [...].

[Informe. Registro Civil de Vinaròs. 5/11/2009]

2.2.1. Cláusulas de participio y gerundio truncadas

El caso de (6) ilustra otro caso de anacoluto; en esta ocasión provocado por el uso de un formulario que implica una estructura de participio que queda truncada (el participio *emitido*):

(6)
DON JESÚS YUNTA GARCÍA-PRIETO Juez de Primera Instancia Encargado/a del Registro Civil de Requena (VALENCIA)

INFORME

Emitido en relación con la queja presentada ante el Defensor del Pueblo por....., una vez dada cuenta, tengo el honor de informar a la Subdirección General de nacionalidad y Estado Civil: (...)

2.3. Problemas con los mecanismos de transición entre párrafos

En el ejemplo de (7), por efecto de la superestructura del documento, en el que se separan los motivos de la conclusión, aparece un conector consecutivo que contiene una estructura de relativo (*por lo que*). Resulta poco recomendable iniciar un párrafo con un conector de este tipo, que contiene un elemento pronominal (*lo*) que alude al párrafo anterior y se subordina sintácticamente a este mediante la estructura de relativo. Para iniciar un párrafo indicando que lo que sigue se desprende como consecuencia del párrafo anterior, es preferible seleccionar conectores que posean mayor autonomía sintáctica, como *por lo tanto* o *en consecuencia*:

(7)
OTROSÍ DIGO que, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3.b) y 6 de la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ acompaño a este escrito resguardo de consignación en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre del Juzgado del depósito exigido para interponer el recurso por importe de 50 euros.

Por lo que, SUPLICO AL JUZGADO que tenga por constituido el depósito, dejando interesada desde este momento su devolución para el caso de estimación total o parcial del recurso.

[Preparación de un recurso de apelación civil]

Del mismo modo, el conector consecutivo *con lo cual*, del que aparece un ejemplo en (8), resulta poco recomendable para introducir un párrafo nuevo. En realidad, *con lo cual* introduce la oración subordinada que contiene la consecuencia de la información de la oración principal; entre oración principal y subordinada debe ponerse una coma. En el texto del ejemplo, dado que se cambia de párrafo, resulta más recomendable utilizar otro tipo de conector, como *En consecuencia* o *Por consiguiente*.

(8)
[...] solicita se le entregue en mano su expediente matrimonial n^o/2009 para su inmediata entrega al Registro Civil de Galapagar.

Se procede a dicha entrega en este acto.

Por SS^a se accede a lo solicitado.

Con lo cual se dio por terminada la presente, que leída y hallada conforme por el compareciente, la firma, después de SS^a, conmigo la Secretaria, de lo que doy fe.

[Acta de comparecencia. Registro Civil de Collado Villalba. 2009]

3. LA ELABORACIÓN DE LAS SECUENCIAS TEXTUALES (I): LA DESCRIPCIÓN Y LA NARRACIÓN

3.1. Principales problemas en la elaboración de las secuencias narrativas de los géneros jurídicos.

3.1.1. Los problemas más frecuentes en las narrativas del corpus de otros géneros jurídicos

a) *La delimitación defectuosa de los diferentes eventos narrados en la secuencia narrativa*

b) *Combinación arbitraria de formas verbales de presente y formas verbales de pasado*

El ejemplo que sigue muestra la combinación frecuentemente confusa de formas verbales de pasado (*fue, dio*) y de presente (*es, acuerda, inadmite*, etc.) para narrar eventos del pasado:

(9)

-Que **fue** el propio Ayuntamiento quien **dio** traslado a la Fiscalía de su conocimiento de las obras, por si los hechos fueran constitutivos de infracción penal (folios 50 a 52).

-**Es** el Ayuntamiento (no la autoridad judicial) quien **acuerda** la demolición de la obra en resolución de 27 de octubre de 1999, confirmando tal resolución en la denegación del recurso de reposición interpuesto por el interesado en resolución de 6 de octubre de 2000 e **inadmite** la acción de nulidad planteada contra la anterior por el interesado en resolución de 19 de marzo de 2001 (contra la que se **alzaría** el interesado en recurso contencioso administrativo. Todo ello recogido en la sentencia que obra en los folios 251 a 254).

[Diligencias previas. Fiscalía de Málaga. Procedimiento de diligencias urgentes]

c) *Delimitación defectuosa por uso antinormativo de las formas de gerundio*

Los siguientes ejemplos ilustran cómo el empleo inadecuado de las formas de gerundio en fragmentos narrativos dificulta e, incluso, impide, la ubicación temporal de los eventos relatados. En este sentido, los gerundios destacados en negrita en (10) provocan una notable dificultad a la hora de establecer con claridad en qué momento compareció la señora en el Registro para solicitar el expediente (¿antes o después de la llamada telefónica?):

(10)

Igualmente me informa que una vez finalizada su tramitación y debido a la proximidad de la fecha de la boda concertada por la señora, contactó telefónicamente con la misma a fin de informarle de la finalización del mismo y remisión al Registro Civil de Galapagar, excusándose por la tardanza y posibles molestias, **habiendo comparecido** la señora Tena en la sede de este Registro y **solicitando** la entrega del expediente.

[Informe. Registro Civil de Collado Villalba. 2009]

En el ejemplo siguiente se destacan también con negrita las formas de gerundio antinormativas que crean dificultad en la interpretación:

(11)

CONCLUSIONES

1ª.- El acusado arriba referido en fecha 11 de noviembre de 2009, sobre las 11:30 horas, **encontrándose** en la Plaza Escamilla de la localidad de Coín (Málaga), se aproximó a, con la que estuvo casado y que se encontraba en el lugar en compañía de una amiga, **diciéndole** que iba a ver si le había ingresado la pensión alimenticia de sus hijos comunes, ante lo cual el acusado le dijo que no le iba a pagar "por guarra", **propinándole** un guantazo en el rostro, que sin embargo no dejó signos externos de lesión.

[Escrito de acusación. Fiscalía de Málaga. Procedimiento de diligencias urgentes]

d) *La imbricación confusa de narración y argumentación*

El párrafo de (12) constituye un ejemplo de imbricación confusa de miembros narrativos y miembros argumentativos:

(12)

Ello no obstante, en el mismo escrito de denuncia se advierte la construcción de una nave-vivienda por parte de en suelo calificado como zona verde, existiendo una resolución dictada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, nº 376/2003, de 7 de noviembre (resultaría ser del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de esta capital –folios 251 a 254), donde, resolviendo recurso contra la resolución del expediente de restablecimiento del orden jurídico incoado a raíz de las obras por la Gerencia Municipal de Urbanismo, se inadmite el recurso interpuesto por....., confirmando la resolución del Alcalde de Málaga de 19 de marzo de 2001, que acordaba inadmitir la acción de nulidad contra la resolución del Decreto de la Alcaldía de 6 de octubre de 2000 que por vía de desestimación del recurso de reposición confirma la anterior de fecha 27 de octubre de 1.999, acordando la demolición de la obra.

[Diligencias previas. Fiscalía de Málaga. Procedimiento de diligencias urgentes]

4. LA ELABORACIÓN DE LAS SECUENCIAS TEXTUALES (II): LA ARGUMENTACIÓN

4.1. El mal uso de las marcas lingüísticas que introducen las premisas y la conclusión

4.1.1. Marcas que introducen las premisas

Hemos seleccionado el siguiente ejemplo porque constituye una buena práctica de formulación argumentativa, ya que el emisor emplea diversos recursos para mostrar al lector la estructura de la argumentación que está llevando a cabo. Hemos destacado mediante color rojo el mecanismo utilizado y se ha glosado entre corchetes en qué consiste exactamente:

(13)

TERCERO.- La sentencia aquí recurrida **fundamenta la desestimación de la petición de demolición en dos únicos argumentos.** [Presentación explícita de las premisas, expresión predictiva de la enumeración] a saber: [Marcador que anuncia la aparición de los argumentos]

-Que no consta en la causa la existencia de otros expedientes de paralización que afecten a casa o edificaciones vecinas sobre la zona.

-Que la documental administrativa obrante requiere al acusado para una posible legalización, sin constar si se ha iniciado o no. [Introducción de cada argumento en párrafos aparte, con guion y estructura sintáctica paralelística (que..., que...)]

Examinaremos ambos argumentos por separado: (...)

[Expresión predictiva que anuncia el desarrollo de cada argumento]

[Recurso de apelación. Fiscalía Provincial de Málaga. Diligencias previas nº 1215/06]

183

4.1.2. Uso de un conector

El marcador causal *toda vez que*, de uso casi limitado al ámbito jurídico, resulta poco recomendable ya que no resulta transparente para el hablante medio. Mucho más claro resultaría el empleo de otras marcas causales como *ya que* o *dado que*, propias de la lengua común.

(14)

Sobre este Registro Civil pesa una gran carga de trabajo **toda vez que** la población ha aumentado durante los últimos diez años alcanzando actualmente los 64.815 habitantes...

[Informe. Registro Civil de Collado Villalba. 2009]

4.1.3. Marcas que introducen la conclusión

En el siguiente ejemplo se observa un error en la selección del marcador empleado para introducir el párrafo con el que se concluye un escrito del Ministerio Fiscal, ya que el autor ha confundido el funcionamiento discursivo del conector parentético *en consecuencia* y el del conector integrado *como consecuencia de*:

(15)

En Como consecuencia en de todo lo anteriormente expresado, se interesa del juzgado se tenga por presentado este escrito y por interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra la sentencia nº 235/09, de 5 de junio de 2.009, y de la Sala el dictado, en su día y tras los trámites oportunos, de una

resolución que, estimando los motivos antes expuestos, acuerde la demolición de la obra ilegal a costa del acusado, confirmando los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida.

[Recurso de apelación. Fiscalía Provincial de Málaga. Diligencias previas nº 1215/06]

5. LA ELABORACIÓN DE OPERACIONES TEXTUALES RECURRENTES. LA ENUMERACIÓN

5.1. Introducción. La enumeración en los documentos del corpus de otros operadores jurídicos

En este corpus de documentos que no son sentencias, hemos encontrado diferentes casos de enumeraciones vagas o inconclusas, pero se trataba de enumeraciones incluidas en documentos que constituían un formulario, por lo que remitimos al informe técnico correspondiente sobre los formularios para su análisis.

5.2. Principales problemas de las enumeraciones en los documentos de este corpus

Incluimos a continuación un ejemplo de enumeración que cumple con los requisitos fundamentales de una lista bien redactada, por los siguientes motivos:

- (a) Presenta una expresión predictiva que constituye una introducción adecuada, pues anuncia la naturaleza de los componentes de la enumeración y también el número de ellos con los que el lector va a encontrarse. La enumeración cumple luego las expectativas generadas por la expresión predictiva.
- (b) Contiene elementos homogéneos tanto desde el punto de vista de su naturaleza como en cuanto a su expresión lingüística. Los componentes están, además, secuenciados en un orden lógico.
- (c) Está marcada de un modo claro y consistente.

(16)

SEGUNDA.- En cuanto a la solicitud de archivo de las actuaciones, es conocida la doctrina del Alto Tribunal respecto a la función y naturaleza del auto de transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado (**SSTS de 9.10.2000 y 2.7.1999**, entre otras), en cuanto a que tal resolución cumple una triple función:

-Concluye provisoriamente la instrucción de las Diligencias Previas.

-Acuerda continuar el trámite a través del Procedimiento Abreviado, por estimar que los hechos constituyen delito de los previstos en el artículo 757 LECrim, desestimando tácitamente las otras posibilidades previstas en el artículo 779.

-Con efectos de mera ordenación del proceso, adopta la primera resolución que el ordenamiento prevé para la fase intermedia del procedimiento abreviado, dar traslado a las partes acusadoras, para que sean éstas las que soliciten el sobreseimiento, formulen acusación, o bien, excepcionalmente, interesen alguna diligencia complementaria.

[Impugnación de recurso de apelación. Ministerio Fiscal. Diligencias previas 773/08]

6. EL MANTENIMIENTO DEL REFERENTE: LAS EXPRESIONES ANAFÓRICAS

6.1. Problemas derivados del uso inadecuado de pronombres

6.1.1. Los pronombres posesivos (su)

Tal como se expuso en el informe base, el uso de la forma de posesivo su puede crear notable ambigüedad. Ese es el caso el ejemplo siguiente:

(17)

PRIMERO.- Las presentes actuaciones tienen su origen en denuncia de dos concejales del Grupo de IU-LV-CA del Ayuntamiento de Málaga a la Fiscalía, donde se pone en **su** conocimiento la recalificación de determinados terrenos, a **su** juicio sospechosa de poder ser constitutiva de infracción penal. No se aporta otra evidencia en este sentido que determinados artículos de prensa y algunos planos.

[Diligencias previas. Fiscalía de Málaga. Procedimiento de diligencias urgentes]

6.1.2. El falso anafórico el mismo/la misma/los mismos/las mismas

Como se ya ha indicado en el informe base, la normativa del español desaconseja el uso de las diferentes formas de *el mismo* con valor pronominal anafórico (es decir, para referirse a un elemento del texto aparecido previamente). La razón de la recomendación académica de rehuir el uso de este sintagma reside en que cuando se utiliza con valores anafóricos acarrea habitualmente una notable ambigüedad.

El fragmento de (18) muestra de manera paradigmática la querencia abusiva de la prosa jurídica por este elemento:

(18)

HECHOS

ÚNICO.- Que mi mandante es la Asociación de Consumidores ... reuniendo los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio 1984, según resulta de la inscripción **de la misma** que se aporta como documento n.º.... en el ejercicio de sus funciones ha comprobado que la mercantil de cara a suministrar utiliza el contrato tipo que como documento n.º ... se adjunta a esta demanda, siendo prueba de la masiva utilización **del mismo** la aportación de otros contratos por suministros distintos y que se adjuntan como documentos n.º ... Entre las cláusulas de **los mismos** se incluye la 6.ª que se estima abusiva ya que en **la misma** se indica que la entrega de los suministros se hará dentro de un margen de fechas que se dice solamente opera a título orientativo eximiéndose la suministradora de toda responsabilidad en el incumplimiento de tales plazos.

[Demanda a un Juzgado de 1.ª Instancia]

(19)

[...] se tiene por formalizada la demanda por don, se me entrega copia de **la misma** y del expediente administrativo y se me emplaza [...]

[Escrito de contestación (demanda contencioso abogados)]

185

6.1.3. La dificultad para delimitar el antecedente

(20)

TERCERA.- Se alega por la recurrente la **vulneración del principio de intervención mínima**, que preside el derecho penal.

Ciertamente, el derecho penal está informado por los principios de intervención mínima, lo que determina a que sea éste la "última ratio", el último remedio a utilizar para remediar el ataque a un determinado bien jurídico, para el caso de que el ordenamiento jurídico no ofrezca otro remedio menos lesivo. **Esto** determina su carácter subsidiario y fragmentario.

[Impugnación recurso de apelación. Ministerio Fiscal. Diligencias previas 773/08]

Además de la dificultad para dar con el antecedente del demostrativo que hemos marcado en rojo, el ejemplo anterior muestra otras patologías frecuentes en los textos jurídicos, como una excesiva pasivización ("se alega por la recurrente", "el derecho penal está informado por los principios..."), inconsistencia en cuanto al número gramatical singular o plural ("el principio de intervención mínima" y "los principios de intervención mínima") o usos anómalos de las preposiciones ("para el caso de que", "determina a").

Es cierto que, en numerosas ocasiones, resulta aconsejable sustituir los pronombres neutros como el del ejemplo anterior por expresiones anafóricas más informativas, que proporcionen más "pistas" al lector sobre a qué elemento desea referirse el emisor. De ahí que suela aconsejarse sustituir los pronombres neutros por sintagmas en los que aparezca un sustantivo que indique el tipo de entidad a la que se refiere el emisor. Sin embargo, esta sustitución no siempre garantiza que el destinatario pueda interpretar la expresión sin problemas.

6.2. Problemas derivados del empleo inadecuado de sintagmas nominales anafóricos

6.2.1. Expresiones anafóricas redundantes

El ejemplo de (21) muestra una acumulación de usos de expresiones anafóricas redundantes:

(21)

1ª.- El acusado **arriba referido** en fecha 11 de noviembre de 2009, sobre las 11:30 horas, encontrándose en la Plaza Escamilla de la localidad de Coín (Málaga), se aproximó a , con la que estuvo casado y que se encontraba en el lugar en compañía de una amiga, diciéndole que iba a ver si le había ingresado la pensión alimenticia de sus hijos comunes, ante lo cual el acusado le dijo que no le iba a pagar "por guarra", propinándole un guantazo en el rostro, que sin embargo no dejó signos externos de lesión.

Sobre el acusado pesaba una orden de prohibición de aproximación y comunicación respecto a....., dictada por el Juzgado nº 2 de Coín en fecha 17/08/09 en D.U. 169/09 y notificada al acusado el mismo día, vigente a la fecha de **los hechos antes referidos**, actuando el acusado con pleno conocimiento de la misma y de las consecuencias en caso de quebrantamiento.

2ª.- **Los hechos antes relatados** son constitutivos de Un delito de lesiones leves en el ámbito familiar del art. 153.1 y 3ª (quebrantamiento de medida cautelar) del Código Penal.

3ª.- **De las anteriores infracciones** es responsable el acusado en concepto de autor del art. 28 del Código Penal.

[Escrito de acusación. Fiscalía de Málaga. Procedimiento de diligencias urgentes]

6.3. La dificultad para acceder al agente de una acción (problemas de recuperación del agente)

El fragmento siguiente muestra cómo la acumulación de estructuras verbales no personales provoca que devenga muy complicado interpretar quién es la persona que realiza la acción expresada por la forma verbal. En este párrafo se combinan, de un lado, estructuras impersonales con *se* (*se significa*, *se me ha manifestado*), que, como se ve, impiden saber quién es el agente o responsable de la acción; por otro lado, aparece una construcción en pasiva perifrástica, *serán remitidos a este Registro Civil los expedientes*; y, por último, aparecen también formas de gerundio (*interesándose*, *incorporándose*), que, como formas no personales de verbo que son, no indican tampoco quién es el agente. El resultado global es un estilo que cabe denominar "misterioso", nada conveniente para un tipo de texto que persigue la máxima claridad:

(22)

Se significa que esta Secretaría se ha puesto en contacto telefónico con el Destacamento de Fiscalía **interesándose** por este expediente, y **se me ha manifestado** que la próxima semana seguramente **serán remitidos** a este Registro Civil los expedientes con los informes respectivos, dado que la Fiscal que ha de informarlos se halla en período de vacaciones, **incorporándose** a su puesto de trabajo el próximo día 02.II .09.

[Informe. Registro civil de Ciutadella (Menorca). 26/10/2009]

(23) **DIGO:**

Que el pasado 3 de junio **me ha sido notificada** Diligencia de Ordenación por la que **se tiene por formalizada** la demanda por don, **se me entrega** copia de la misma y del expediente administrativo y **se me emplaza** por veinte días para que la conteste, [...]

[Escrito de contestación (demanda contencioso abogados)]

7. LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

7.1. La coma

7.1.1. Principales problemas relacionados con el uso de la coma

a) Coma entre sujeto y verbo o verbo y complementos fuertes

En el párrafo de (24) mostramos mediante color rojo la coma antinormativa; de otra parte, entre corchetes y de color lila aparece la paráfrasis del error:

(24)
Dado el volumen de asuntos, el tiempo transcurrido entre la solicitud de inscripción y la llegada del expediente al calificador [sujeto], [coma antinormativa que separa sujeto y verbo] está en la media entre los expedientes de matrimonio.

[Oficio Registro Civil. Madrid. 9/2/2010]

Las comas destacadas en rojo en los fragmentos siguientes son incorrectas, ya que aparecen entre sujeto y verbo.

(25)
La menor, conocía al procesado por ser el novio de su prima.
De resultados de uno de los anteriores actos sexuales, quedó embarazada de una niña, que nacería el 1 de Enero de 2.006.

[Escrito de calificación. Ministerio Fiscal]

(26)
El Fiscal, interpone recurso de apelación al amparo del Art. 790.5.de la LE Crim. (. . .)
[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid. 13/02/2009]

(27)
La Disposición Final Primera del mencionado Texto Estatutario, establece que:
[Escrito de contestación (demanda contencioso abogados)]

En el ejemplo (28) aparece un caso de coma antinormativa entre el verbo (*constando*) y el complemento directo (*copia*):

(28)
[. . .] constando en el expediente, copia de la cédula de citación y no constando que [. . .]
[Informe. Registro Civil de Vinaròs. 5/11/2009]

En el siguiente ejemplo, la primera coma destacada en rojo es incorrecta porque separa el sujeto del verbo principal de la oración; en cambio, la segunda lo es porque separa dos elementos oracionales que dependen del mismo verbo ("debe entenderse"):

(29)
La afirmación efectuada en la resolución en el sentido de que la licencia debe entenderse concedida por silencio administrativo, debe entenderse circunscrita a los solos efectos de resolución del recurso de alzada interpuesto, y efectuada sin tener en cuenta los datos que sí que constan en el procedimiento penal.

[Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas nº 1314/2008. Fiscalía Provincial de Málaga]

Una posible solución consiste en eliminar ambas comas. Otra posibilidad es añadir una coma detrás de "resolución", delimitando así la información siguiente como un inciso aclaratorio, y eliminar la segunda coma previa a la conjunción "y", tal como muestra la siguiente versión alternativa:

(29bis)
La afirmación efectuada en la resolución, en el sentido de que la licencia debe entenderse concedida por silencio administrativo, debe entenderse circunscrita a los solos efectos de resolución del recurso de alzada interpuesto y efectuada sin tener en cuenta los datos que sí que constan en el procedimiento penal.

b) Ausencia de coma para delimitar incisos y marcadores discursivos parentéticos

En los ejemplos que siguen, hemos indicado entre corchetes los lugares en los que faltan comas, de acuerdo con la normativa de los signos de puntuación en español:

(30)

Es costumbre la remisión de los expedientes al Destacamento de Fiscalía que se encuentra en la Localidad de Mahón, aproximadamente a unos 50 Km. de Ciutadella[,] para la emisión por parte del Ministerio Fiscal de los correspondientes Informes, e incluso en algunas ocasiones[,] se da la circunstancia de que[,] aprovechando el desplazamiento que con motivo de la celebración de Juicios o practica de cualquier diligencia de índole Penal o Civil realizan los Fiscales a este Juzgado[,] se llevan los expedientes en mano para la realización de los aludidos informes al Destacamento de Fiscalía para informarlos desde allí, y luego son devueltos a este Juzgado por correo ordinario.

[Informe. Registro civil de Ciutadella (Menorca). 26/10/2009]

(31)

La sentencia recurrida interpreta erróneamente la función desarrollada por Don[,] ya que lo considera como empleado de la sociedad cuando[,] en realidad[,] es un testaferro y así se le considero en el escrito de acusación

[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid. 13/02/2009]

(32)

En el supuesto que nos ocupa[,] la resolución impugnada, es, sin lugar a dudas, la adecuada al momento procesal en que el procedimiento se encuentra,, existiendo fundados indicios de [...]

[Impugnación recurso de apelación. Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas 773/08]

(33)

En fecha 21 de noviembre de 2008 el Ministerio Fiscal, acogiéndose a la nueva reforma operada en la Constitución de Ecuador[,] informa desfavorablemente.

[Informe. Registro Civil de Valencia. 11/2/2010]

En los siguientes ejemplos, faltan comas exigidas normativamente para delimitar incisos o elementos conectivos:

(34)

En consecuencia, dictada la citada resolución, que no es recurrible excepto en lo que se refiera a la situación personal de los acusados, el juez instructor pierde toda la competencia sobre el procedimiento en orden a dictar una resolución de fondo sobre el mismo, restándole únicamente[,] y como cuestión procesal de mero trámite, proceder conforme determina el artículo 784 L.E.Crim.

[Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas nº 1314/2008. Fiscalía Provincial de Málaga]

(35)

Se ha de tener en cuenta que la Consejería citada no es competente para revocar los actos que en materia urbanística hayan dictado los órganos municipales y[,] en consecuencia, tampoco es competente para resolver los recursos contra los actos en materia de concesión o denegación de licencias urbanísticas dictados por los Ayuntamientos.

[Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas nº 1314/2008. Fiscalía Provincial de Málaga]

c).Uso de la coma para separar elementos complejos de una enumeración

En el siguiente ejemplo, se emplea una coma para separar los elementos de una enumeración compleja, en lugar del punto y coma que exige la norma de puntuación académica:

(36)

Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 del Código Civil OPTA POR LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA así como por la vecindad civil catalana que es la correspondiente al lugar de su domicilio[,] presta juramento de fidelidad a S.M. el Rey y obediencia a la Constitución y demás leyes españolas, sin renunciar a la nacionalidad dominicana que ostenta, acogiéndose al Convenio de doble nacionalidad vigente entre ambos países.

[Acta. Registro Civil de Terrassa. 19/02/2006]

Además del problema mencionado, en el fragmento previo al punto y coma aparecen varios incisos que no están delimitados por comas, tal como se muestra en la siguiente versión alternativa:

(36bis)

Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 del Código Civil[,] OPTA POR LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA[,] así como por la vecindad civil catalana[,] que es la correspondiente al lugar de su domicilio,[,] (...).

7.2. El punto y coma

7.2.1. Punto y coma para introducir una enumeración

En el párrafo de (37) aparece de manera incorrecta un punto y coma insertando una secuencia enumerativa:

(37)

Y tal declaración la hace, precisamente, frente a Sentencia de fecha 29 de marzo de 2007, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en el recurso de apelación 8/2003, en la que se llegaba a conclusión opuesta a la decidida por el Tribunal Supremo, señalando el Alto Tribunal al respecto que en la resolución impugnada;

“...También justifica su decisión la Sala de Málaga con lo establecido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002”.

[Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas nº 1314/2008. Fiscalía Provincial de Málaga]

8. LA SUBORDINACIÓN

8.1. La subordinación como procedimiento de construcción paragrafíca

En los siguientes ejemplos, se observa una acumulación de oraciones subordinadas, destacadas entre corchetes, lo que dificulta la comprensión del fragmento:

(38)

La actuación del Ayuntamiento al respecto de la demolición de la obra denunciada, [si bien no ha sido, por supuesto, diligente], tampoco cabe calificarla de delictiva, [en la medida que el propio encargado de ejecutar sus actos (Ayuntamiento) es quien tiene conocimiento de la modificación en la norma urbanística que permitirá autorizar la obra inicialmente ilegal], [ya que el Planeamiento urbanístico es precisamente una de sus competencias]. Siendo rechazable esta justificación (y así lo ha declarado el propio Tribunal Constitucional en reciente sentencia 22/09, dictada en Recurso de Amparo), lo cierto es que no reviste caracteres de clamorosa, irracional y absurda.

[Diligencias previas. Fiscalía de Málaga. Procedimiento de diligencias urgentes.]

(39)

Según se me manifiesta por las Funcionarias de Gestión y Auxilio respectivamente Dña.y de Auxilio Dña., [quienes desempeñan su trabajo en este Registro Civil de Ciutadella de Menorca], efectivamente se incoó en fecha 06.09.06, Expediente de Nacionalidad por Residencia a instancia de, tramitado bajo el numero 234/2006 [no pudiendo precisarse en este momento el estado en que dicho expediente se encontraba]. [cuando, [aproximadamente en el pasado mes de Julio al interesarse esta persona por el estado actual de su expediente de Nacionalidad], se constató que al parecer el mismo se había extraviado].

[Informe. Registro civil. Ciutadella (Menorca). 26/10/2009]

8.1.1. Dificultad de identificación de la oración principal

El fragmento siguiente ilustra el caso en el que un error en la puntuación (uso de un punto y seguido donde debería aparecer una coma) “aísla” la oración subordinada consecutiva “por lo que tampoco se descartaría la posibilidad...” de su correspondiente principal. La oración queda, así, truncada, lo que provoca un anacoluto que, además de constituir un error de normativa sintáctica, acarrea problemas en la comprensión correcta del texto:

(40)

Se quiere dejar constancia además que al venirse elaborando las resoluciones que se dictan en los expedientes del Registro Civil, mediante documentos Word, que no se almacenan, es imposible conocer a día de hoy el momento procesal exacto en que se hallaba el expediente de nacionalidad antes indicado en el momento en que se produjo su extravío, y tampoco recuerdan los funcionarias el tramite procesal exacto

del que pendía el expediente cuando resultó extraviado. Por lo que tampoco se descartaría la posibilidad de que se hubiese extraviado en el momento de su remisión a la Dirección General de Registros y del Notariado.

[Informe. Registro civil, Ciutadella (Menorca), 26/10/2009]

8.1.2. Omisión de la oración principal

La omisión de la oración principal conlleva que en la siguiente secuencia textual se documenten párrafos que se inician con una cláusula completiva subordinada. El lector se ve obligado, por esta razón, a realizarse un esfuerzo adicional para poder reconstruir esta oración principal (entre corchetes y de color rojo):

(41)
Ante D^a AMAIA CASTAÑO AGUIRRE Magistrado Encargado del Registro Civil de Terrassa, con mi asistencia, comparece D....., hijo de y de....., nacido en SAN JUAN DE LA MAGUANA –REPÚBLICA DOMINICANA- (...), de estado civil SOLTERO, vecino de TERRASSA con domicilio (...) con PERMISO DE RESIDENCIA (...), asistido por D^a con DNI (...), madre y legal representante del compareciente.

[El que comparece manifiesta]

Que es hijo de la madre que le asiste la cual ostentaba (...)
Que mediante resolución de fecha 02 de OCTUBRE DE 1988 le fue concedida a su madre (...)
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 del Código Civil (...)
Que su nacimiento no consta inscrito en ningún Registro Civil español (...)
Que a los procedentes efectos legales (...)
Que interesa que una vez practicada (...)
Previa ratificación de la compareciente (...)

[Acta. Registro Civil. Terrassa. 19/05/2006]

8.1.3. Omisión de la oración subordinada

En el siguiente ejemplo se observa un nexa subordinante *que*, que hemos destacado en rojo, que no introduce ninguna oración subordinada, ya que, entre los múltiples incisos que siguen, no hay ningún verbo al que parezca afectar este nexa:

(42)
En este sentido, consideramos interpretación adecuada de dicha expresión, la realizada por la Audiencia Provincial de Granada, **que** [nexa subordinante sin verbo] en SAP de Granada, 257/2008, de 25/04/08, que efectúa un exhaustivo análisis de la medida de demolición prevista en el artículo 319.3º del Código Penal, llegando a la conclusión de que la orden de demolición se efectúa sin distinción entre una y otra modalidad delictiva (de las previstas en el propio precepto), ya que "...cualquiera de las dos conductas vulneran ese bien jurídicamente protegido.

[Recurso de apelación]

8.2. Mecanismos de subordinación no estándar o antinormativos

8.2.1 Uso de nexos subordinantes no estándar

En estos ejemplos, se emplean una locución conjuntiva que no forman parte de la lengua estándar:

(43)
Para esta constatación es indiferente que la administración haya actuado diligentemente en el ejercicio de sus facultades **en orden a** la restauración del orden jurídico perturbado en la zona dañada, o haya dejado de actuar, sin que la suerte del procedimiento penal pueda en absoluto depender de esta circunstancia.

[Recurso de apelación. Fiscalía Provincial de Málaga. Diligencias previas.]

(44)
En consecuencia, dictada la citada resolución, que no es recurrible excepto en lo que se refiera a la situación personal de los acusados, el juez instructor pierde toda la competencia sobre el procedimiento **en orden a** dictar una resolución de fondo sobre el mismo, (...)

[Escrito del Ministerio Fiscal. Fiscalía Provincial de Málaga. Diligencias previas.]

8.2.2. Subordinación mediante formas no personales

a) El caso del gerundio

El abuso del gerundio como mecanismo de subordinación en los documentos judiciales comporta que se produzcan empleos de esta forma en los que su valor resulta ambiguo, como ocurre en el siguiente caso, en el que no está claro si los dos gerundios coordinados tienen o no el mismo valor causal:

(45)

Dado el volumen de asuntos, el tiempo transcurrido entre la solicitud de inscripción y la llegada del expediente al calificador, está en la media entre los expedientes de matrimonio, y el tiempo transcurrido entre la llegada del expediente al calificador y el resto de la tramitación hasta la fecha de la queja se puede decir que ha sido ágil, **demorándose** [¿aunque se ha demorado o porque se ha demorado?] al última hora por el cambio de domicilio de los promotores y **no pudiéndose** [¿porque no se ha podido?] tomar declaración de la audiencia reservada por el Registro Civil de Herencia, Ciudad Real.

[Oficio Registro Civil. Madrid. 9/2/2010]

b) Uso incorrecto 1: El gerundio con valor de posterioridad

Los siguientes ejemplos presentan un uso no normativo del gerundio con valor de posterioridad:

(46)

El acusado repitió el anterior proceder en fecha no determinada de mediados del posterior mes de Mayo, sobre las 14,30 horas, cuando tras seguir a la menor que salía del Instituto, y convencerla para que subiera a su vehículo, la llevó al mismo lugar, **procediendo** entonces a bajar los pestillos de las puertas para evitar la huida de aquella.

[Escrito de calificación. Ministerio Fiscal.]

(47)

Que mediante resolución de fecha 02 de OCTUBRE DE 1998 le fue concedida a su madre la nacionalidad española, **habiendo prestado** juramente el día 30 DE OCTUBRE DE 1998.

[Acta. Registro Civil. Terrassa. 19/05/2006]

(48)

En relación a la solicitud de información de ese Centro Directivo respecto a informe actualizado del estado del expediente de inscripción de matrimonio correspondiente a y significarle que el exhorto librado al Registro Civil de Reus tuvo entrada en este Registro el 9 de septiembre de 2009, **dictando** acuerdo denegatorio por impedimento de ligamen en fecha 25 de septiembre de 2009 y **siendo remitido** para su notificación al interesado a través del Registro Civil de Reus en fecha 14 de octubre de 2009.

[Carta. Registro Civil. Reus]

(49)

Frente a tal resolución, presenta el interesado nuevo escrito, **solicitando** la suspensión de la orden de demolición (folio 278-279), **emitiéndose** informe contrario a sus pretensiones, que se le notifica el 16/03/04 (folio 285 vto).

[Diligencias previas. Fiscalía de Málaga. Procedimiento de diligencias urgentes.]

c) Uso incorrecto 2: El gerundio con valor de causa-consecuencia

Conviene tener en cuenta que el gerundio puede tener muchos valores, entre ellos, el causal, y que, dada la centralidad de las relaciones lógicas de causa-consecuencia en el razonamiento judicial, siempre es preferible marcar las causas y segmentos justificativos con conectores explícitos en lugar de mediante el uso de esta forma verbal no personal:

(50)

D. Procurador de los Tribunales y de D., cuya representación tengo acreditada en el proceso arriba expresado, comparezco y como mejor proceda en Derecho, digo lo siguiente:

-Que en fecha se me ha notificado la sentencia de fecha recaída en los presentes autos y no **encontrándola** [MEJOR: **dado que no la encuentro**] ajustada a derecho, dicho sea con los debidos respetos y en términos de defensa, por medio del presente escrito preparo contra la misma recurso

de apelación que me propongo entablar, para ante la Audiencia Provincial de, impugnando todos sus pronunciamientos, tanto el condenatorio de mi representado al pago de la indemnización, como los relativos a intereses y costas.

[Preparación de un recurso de apelación civil]

(51)

No **constando** [MEJOR: *dado que no consta*] informatizada la tramitación del expediente en cuestión, pues fue en mayo de 2009 cuando fue proveído este Registro por la Comunidad de Madrid con sistema informático, esta Encargada no puede especificar las posibles incidencias acaecidas en la tramitación del expediente...

[Informe del Registro Civil. Collado Villalba. 2009]

(52)

Que su nacimiento no consta inscrito en ningún Registro Civil español, y solicita la inscripción en el Registro Civil Central, **interesando** [MEJOR: *por lo que interesa que*] se consignen los que hace constar en la hoja de declaración de datos que presente, que son respectivamente los de su padre y su madre y son los que ya usa.

[Acta. Registro Civil. Terrassa. 19/05/2006]

(53)

En el supuesto que nos ocupa la resolución impugnada, es, sin lugar a dudas, la adecuada al momento procesal en que el procedimiento se encuentra, **existiendo** [MEJOR: *dado que existen*] fundados indicios de la comisión de un delito[...]

[Impugnación recurso de apelación. Ministerio Fiscal. Diligencias previas.]

d). *Uso incorrecto 3: El gerundio con valor ilativo*

En los siguientes ejemplos, se ilustra un uso incorrecto del gerundio consistente en encadenar oraciones que deberían emplear un verbo en forma no personal:

(54)

El precepto citado se traspone de manera casi literal en prácticamente todos los expedientes de su genero y no implica en todo caso la posibilidad de legalización de la obra, sino que deberá analizarse su compatibilidad con la legislación urbanística vigente, **siendo** la demolición la única solución legalmente prevista para los casos de absoluta incompatibilidad con la norma, como es el presente.

[Recurso de apelación del Ministerio Fiscal. Málaga. Diligencias previas.]

(55)

Es todo lo que tengo el honor de informar, **quedando** a su disposición para cualquier duda o aclaración.

[Carta adjunta al Acta. Registro Civil. Terrassa. 19/05/2006]

(56)

[...]informo que el promotor no compareció ante esta oficina cuando fue citado al objeto de notificarle la resolución que obra en autos, **constando** en el expediente, copia de la cédula de citación y no **constando** que haya sido devuelta [...]

[Informe. Registro Civil de Vinaròs. 5/11/2009]

Los ejemplos ilustran también el exceso de pasivización característico de los textos jurídicos ("fue citado", "haya sido devuelta"), así como el uso de un nexa anómalo: "al objeto de".

e) *Uso incorrecto 4: El gerundio con valor relativo (o gerundio BOE)*

Los siguientes ejemplos ilustran el último uso del gerundio: el gerundio que introduce un complemento de nombre. En esos casos, sería preferible emplear una oración de relativo:

(57)

En fecha 30/12/08 se solicita la inscripción de matrimonio en este Registro Civil Central de Dª **aportando** [CORRECTO: *'que aportan'*] como domicilio C/... DE HERENCIA, CIUDAD REAL.

En fecha 09/07/09 se dicta providencia **solicitando** [CORRECTO: *'en la que se solicita'*], mediante exhorto al Registro Civil de Herencia, se tome declaración de audiencia reservada a los cónyuges, y requiriendo [en la que se requiere] al esposo para que aporte certificado de su primer matrimonio con marginal de divorcio.

En fecha 23/10/09, se recibe en este Registro Civil Central escrito con nuevo domicilio de los promotores, **siendo este** [CORRECTO: *'que se encuentra'*] en Miranda de Ebro, Burgos.

[Oficio Registro Civil. Madrid. 9/2/2010]

(58)
(...) al que se acompaña Acta de Opción y comunicación procedente del Registro Civil **indicando**
[CORRECTO: 'en la que se indica'] el Tomo y Página donde ha quedado practicada la inscripción (...)
[Oficio adjunto al Acta. Registro Civil. Terrassa. 19/05/2006]

9. OTROS ASPECTOS SINTÁCTICOS

9.1. Problemas de disposición de los elementos de la oración

9.1.1. Alteraciones del orden natural de la frase en los textos jurídicos

El ejemplo que sigue no respeta el orden habitual de constituyentes en español. Nótese la diferencia de claridad en la **versión alternativa** del ejemplo, en la que aparece cada constituyente en su lugar:

(59)
Alega a este respecto el recurrente que el propio Consejo [...]
[Escrito de contestación (demanda contencioso abogados)]

(59bis)
A este respecto, el recurrente alega que el propio Consejo [...]

En el ejemplo que sigue, la alteración del orden de constituyentes, que hemos resaltado en rojo, se combina con una coma antinormativa. En la **versión alternativa**, señalada en color lila, se resuelven ambos problemas:

(60)
En este sentido, **consideramos interpretación adecuada de dicha expresión, la realizada por la Audiencia Provincial de Granada, que en SAP de Granada, 257/2008, de 25/04/08, que efectúa un exhaustivo análisis de la medida de demolición prevista en el artículo 319.3º del Código Penal, llegando a la conclusión de que la orden de demolición se efectúa sin distinción entre una y otra modalidad delictiva (de las previstas en el propio precepto), ya que "...cualquiera de las dos conductas vulneran ese bien jurídicamente protegido.**
[Recurso de apelación, diligencias previas nº 1215/06, Fiscalía Provincial de Málaga]

(60bis)
En este sentido, **consideramos adecuada la interpretación de dicha expresión realizada por la Audiencia Provincial de Granada, que en SAP de Granada, 257/2008, de 25/04/08, que efectúa un exhaustivo análisis de la medida de demolición prevista en el artículo 319.3º del Código Penal, llega a la conclusión de que la orden de demolición se efectúa sin distinción entre una y otra modalidad delictiva (de las previstas en el propio precepto), ya que "...cualquiera de las dos conductas vulneran ese bien jurídicamente protegido.**

9.1.2. Incisos parentéticos que dificultan la comprensión

El párrafo que siguen ejemplifican una acumulación de incisos, que dificulta la interpretación del fragmento, ya que interrumpen la linealidad de la lectura. Un modo de facilitar la lectura de estos fragmentos sería delimitar unidades oracionales más pequeñas mediante el uso de puntos y seguido.

(61)
Por su parte, la jurisprudencia de nuestros Tribunales (Sentencias de 21 de septiembre de 1999, 16 de octubre de 2001, 25 de febrero de 2002 y 4 de febrero de 2004), en relación con la confluencia de normas reguladoras, ha señalado que a la legislación estatal le corresponde fijar los principios y reglas básicas a que han de ajustar su organización y competencias las corporaciones de Derecho público representativas de intereses profesionales, así como la normativa de aquellos aspectos generales de organización, regulación y deontología de la profesión en los que pueda apreciarse una exigencia de igualdad y de una ordenación general del ejercicio profesional; y ha establecido que en las materias asumidas por los Estatutos de Autonomía, las normas que dicten las Comunidades Autónomas desplazan, sin mayores especificaciones, siempre que respeten los principios y reglas básicas en la legislación del Estado, a las dictadas por éste sobre las mismas materias.

[Escrito de contestación (demanda contencioso abogados)]

9.1.3. La posición del adjetivo

a). Anteposiciones inadecuadas

(62)

[...]existiendo **fundados indicios** de la comisión de un delito[...]

[Impugnación recurso de apelación. Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas 773/08]

9.1.4. Anacoluto

El anacoluto o ruptura sintáctica que se aprecia en el ejemplo siguiente está provocado, tal como se indica en color rojo, por la omisión de un verbo flexionado que soporte la oración:

61)

COMRAVENTA DE INDUSTRIA

En la ciudad de, a

REUNIDOS

De una parte, don/doña, con domicilio en, vecindad civil común y provisto de NIF número, como vendedor.

De otra parte, don/doña, con domicilio en, vecindad civil común y provista de NIF número, como comprador.

DON, en nombre y representación de la mercantil “ ” y en calidad de, cuya representación acredita mediante copia de la escritura de poder otorgada el día de de ante el Notario de, Don bajo el número de su protocolo, inscritos dichos poderes en el Registro Mercantil Provincial de al tomo, folio, sección, hoja número, inscripción, La mencionada sociedad tiene su domicilio social en calle, número, e **[FALTA VERBO]** inscrita en el Registro Mercantil de, al tomo, folio, sección, hoja número, inscripción y con C.I.F., denominado en lo sucesivo el VENDEDOR.

[Contrato de Compraventa de industria]

Por su parte, el siguiente ejemplo ilustra un caso de anacoluto provocado por el uso de fórmulas estereotipadas y formulismos. Adviértase, en efecto, que al inicio del fragmento aparece la fórmula “Por el presente y en contestación a su escrito” que, manejada de manera automatizada, acarrea la inserción, apenas unas palabras más adelante, del sintagma tautológico “por medio del presente escrito”:

(62)

Por el presente y en contestación a su escrito con numero de Referencia M.A.6.2.I.-1282/ 2009, relativo a la Queja del Sr., por medio del presente escrito y de acuerdo con lo solicitado paso a efectuar el INFORME siguiente:

[Informe. Registro civil, Ciutadella (Menorca), 26/10/2009]

El anacoluto en esta secuencia viene determinado por la elisión de un elemento imprescindible en esta oración: la preposición *a* regida por el verbo *remitir*:

(63)

En efecto, de las declaraciones del acusado en el Plenario en el que palmariamente se reconoce tal condición y **[a]** cuyo visionado dada su brevedad y elocuencia esta parte se remite para evitar caer en el Tradutore traditore se llega inequívocamente a esa conclusión (...)

[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid, 13/02/2009]

En el ejemplo de (64) la ruptura sintáctica se produce en varios miembros del párrafo:

(64)

SUPPLICO AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO AMDINISTRATIVO que, por presentado este escrito se sirva admitirlo y con base en las alegaciones y fundamentos jurídicos que se expresan y previos los trámites oportunos, declare ajustada a derecho la Resolución acordada por el día, confirmándola en todos sus pronunciamientos, con lo demás que proceda en derecho

[Escrito de contestación (demanda contencioso abogados)]

9.2. La voz pasiva en los textos jurídicos

Al igual que en ejemplos analizados en las páginas previas, en el caso de (70) puede observarse una acumulación de estructuras y formas verbales no personales, lo que acarrea que resulte muy complejo establecer de manera exacta quién es el responsable de cada acción. El resultado es una impresión de vaguedad y oscurantismo que choca frontalmente con los objetivos de claridad y precisión que persigue la prosa jurídica:

(65)

Se quiere dejar constancia [¿quién?] además que al venirse elaborando [¿quién?] las resoluciones que se dictan [¿quién?] en los expedientes del Registro Civil, mediante documentos Word, que no se almacenan [¿quién?], es imposible conocer [¿quién?] a día de hoy el momento procesal exacto en que se hallaba el expediente de nacionalidad antes indicado en el momento en que se produjo su extravío, y tampoco recuerdan los funcionarios el tramite procesal exacto del que pendía el expediente cuando resultó extraviado. Por lo que tampoco se descartaría [¿quién?] la posibilidad de que se hubiese extraviado en el momento de su remisión a la Dirección General de Registros y del Notariado.

[Informe. Registro civil, Ciutadella (Menorca), 26/10/2009]

9.2.1. La pasiva mixta

(66)

No constando informatizada la tramitación del expediente en cuestión, pues fue en mayo de 2009 cuando fue proveído este Registro por la Comunidad de Madrid con sistema informático, esta Encargada no puede especificar las posibles incidencias acaecidas en la tramitación del expediente...

[Informe del Registro Civil – Collado Villalba, 2009]

Tal como se ha indicado en el apartado correspondiente a la pasiva mixta del informe base, la pasiva mixta, que tan productiva resulta en el discurso jurídico, debe ser evitada, dado que provoca ambigüedades. En el ejemplo de (71), sería más recomendable la **versión alternativa** siguiente, que resulta más natural y más fácilmente legible:

(66bis)

No constando informatizada la tramitación del expediente en cuestión, pues fue en mayo de 2009 cuando la Comunidad de Madrid **proveyó de sistema informático a este Registro**, esta Encargada no puede especificar las posibles incidencias acaecidas en la tramitación del expediente...

Igualmente, resultaría mucho más comprensible evitar la pasiva mixta del ejemplo siguiente:

(67)

Por SSª se accede a lo solicitado.

[Acta de comparecencia, Registro Civil – Collado Villalba, 2009]

y, en su lugar, emplear una oración activa (**versión alternativa**):

(67bis)

SSª [Su Señoría] accede a lo solicitado.

Los ejemplos de uso de este mecanismo son muy numerosos:

(68)

[...] así como que, de las mismas **se ha evidenciado la posible comisión de un hecho delictivo por el imputado**.

[Impugnación recurso de apelación. Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas 773/08]

Dado que la pasiva mixta es una estructura de altísima frecuencia de aparición en los textos jurídicos, ejemplos como el anterior devienen todavía más difíciles de interpretar: resulta arduo para el lector habituado a la estructura [se + verbo + agente introducido por *por*] resolver si, en el fragmento citado, “el imputado” es el agente de la acción expresada mediante el verbo “evidenciar” o de la incluida mediante el nombre deverbal “comisión”.

(69)

CUARTA.- Por último, aún cuando no se alega expresamente, se afirma por la recurrente que la conducta de la imputada ya fue objeto de expediente sancionador[...]

[Impugnación recurso de apelación. Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas 773/08]

En este último ejemplo de (69), tampoco resulta claro si *la recurrente* es solamente el agente de la acción expresada mediante el verbo *afirmar* o si lo es también de la acción expresada mediante *alegar*. A continuación, aparecen más casos:

(70)

Por los inspectores de la Gerencia se gira visita de inspección a las obras el 21/10/04, comprobando que permanecen las mismas en estructura (folio 289-290). Aquí termina la actuación de la Gerencia de Urbanismo en relación con la orden de demolición, transcurriendo casi dos años hasta que el nuevo instrumento de planificación prevea la posibilidad de legalización de las obras.

[Diligencias previas, Fiscalía de Málaga, Procedimiento de diligencias urgentes]

9.2.2. Uso poco natural de la pasiva perifrástica

(71)

Pese a que **no nos ha sido devuelto [no se nos ha devuelto / X no nos ha devuelto]** el exhorto librado al Registro civil de Herencia, con fecha de hoy se remite otro exhorto al Registro civil de Miranda de Ebro al objeto de que se practiquen las audiencias reservadas.

[Oficio Registro Civil, Madrid, 9/2/2010]

En ejemplos como el anterior, la pasiva perifrástica resulta poco natural en español y parece responder a un intento de ocultar el agente de la acción. Es preferible la pasiva con *se* o una formulación activa en la que se especifique el agente, siempre que sea posible.

9.3. Problemas sintácticos relacionados con elisiones

9.3.1. Elisión de la conjunción completiva “que”

En los siguientes ejemplos se ha marcado en rojo la omisión injustificada delnexo subordinante *que*:

(72)

El Fiscal, interpone recurso de apelación al amparo del Art. 790.5. de la LE Crim. del recurso promovido por la representación procesal de D. e interesa [que] se revoque parcialmente la sentencia (...)

[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid, 13/02/2009]

(73)

Entre las cláusulas de los mismos se incluye la 6.ª que se estima abusiva ya que en lamisca se indica que la entrega de los suministros se hará dentro de un margen de fechas que se dice [que] solamente opera a título orientativo (...)

[Demanda al Juzgado de 1.º Instancia]

9.3.2. Elisión de determinantes y preposiciones

Otras elisiones muy frecuentes en este tipo de documentos son las que afectan a determinantes y preposiciones:

(74)

En relación con la queja formulada, ante el Defensor del Pueblo, por D., relativa a la inscripción de su nacimiento tras haber adquirido la nacionalidad española por opción, a fin de dar respuesta a la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, se adjunta [el] informe elaborado por el Registro Civil de Terrassa, al que se acompaña [el] Acta de Opción y comunicación procedente del Registro Civil Central indicando el Tomo y [la] Página donde ha quedado (...)

[Oficio adjunto al Acta. Registro Civil, Terrassa, 19/05/2006]

(75)

se adjunta ∅ informe elaborado por [...]

[Carta adjunta al Informe. Registro Civil de Vinaròs. 5/11/2009]

(76)
[...]me ha sido notificada Ø Diligencia de Ordenación por la que[...]
[Escrito de contestación (demanda contencioso abogados)]

(77)
El Acuerdo de 11 de diciembre estimó la pretensión del Sr. en el sentido Ø declarar incompetente al para conocer y resolver la denuncia presentada contra él por don Sin entrar a conocer del fondo del asunto, se remitió el expediente al por considerarse que era el competente.
[Escrito de contestación (demanda contencioso abogados)]

En este último ejemplo, en una ocasión se elide la preposición *de* y, a continuación, la misma preposición aparece donde no debería estar. Fragmentos como este parecen responder a una redacción apresurada y no revisada.

(78)
Finalmente, en fecha [de] 2 de noviembre de 2009 se dictó [un] Auto declarando la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor....., que fue notificado el 30 de noviembre, a través de [un] auxilio judicial, y fue objeto de práctica mediante la oportuna anotación marginal en el Registro Civil de Chiva.
[Informe, Registro Civil, Valencia, 11/2/2010]

9.3.3. Otras elisiones

La tendencia a elidir elementos gramaticales átonos (necesarios) afecta también a otras clases de palabras, como el pronombre *se*:

(79)
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se admiten y Ø tienen por reproducidos los citados en la demanda[...]
[Escrito de contestación (demanda contencioso abogados)]

10. PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL LÉXICO

10.1. Principales problemas relacionados con el dominio léxico de los géneros jurídicos

Dado que, para proponer una versión alternativa de los numerosos formulismos, giros, latinismos y otras particularidades léxicas de los textos jurídicos españoles, sería conveniente mantener reuniones de trabajo conjuntas entre lingüistas y especialistas en Derecho, en este informe nos limitaremos a sugerir algunas propuestas de versiones más transparentes de algunos arcaísmos que hemos localizado en el corpus de manera reiterada.

10.1.1. Particularidades léxicas

a) *Formulismos*

En los textos del corpus de documentos diferentes de sentencias que se ha manejado para este informe anexo, se ha documentado igualmente el frecuente recurso por parte de los autores a fórmulas estereotipadas que en la actualidad se sienten como anacrónicas. Estas fórmulas anclan los textos en un conservadurismo innecesario y retardan la comprensión con rodeos y expresiones vacías. Dichas fórmulas deberían, pues, ser eliminadas, simplificadas o reemplazadas por otras más acordes con los usos lingüísticos actuales:

Así, por ejemplo, se percibe como arcaica por el grueso de los hablantes de español la siguiente fórmula de petición cortés, documentada en un Acta del Registro Civil de Terrassa:

(80)
(...) interesando que, verificadas, **tenga a bien dar** cuenta a este Registro para constancia en los antecedentes y traslado a la interesada así como remitir la certificación de nacimiento para obtención del DNI (...)

[Acta. Registro Civil, Terrassa, 19/05/2006]

También es anacrónica la siguiente fórmula de expresión de cortesía:

(81)
En relación con el informe que interesa relativo a la queja de D....., **tengo el honor de** informar lo siguiente: (...)

(...) Es todo lo que **tengo el honor de informar** (...)

[Carta adjunta al acta del Registro Civil, Terrassa, 19/05/2006]

Del mismo modo resulta arcaica la fórmula *Doy fe*, que funciona como cierre textual:

(82)
Leída y conforme firman los concurrentes después de S. Sª y **doy fe**

[Acta, Registro Civil, Terrassa, 19/05/2006]

b) *Tratamientos protocolarios. Aspectos de cortesía*

Al hilo de lo expuesto en el apartado anterior, con los siguientes ejemplos nos proponemos reiterar la idea de que el discurso jurídico reúne excesivos elementos lingüísticos que resultan arcaicos para el hablante medio de español, como, por ejemplo, ciertos títulos o tratamientos de cortesía. Se trata de títulos de relación interpersonal propios de una sociedad en la que las relaciones sociales eran más jerárquicas que las actuales. Hay que preguntarse, pues, si tiene sentido mantener tratamientos como el de Ilustrísima:

(83)
(Sentencias de la **Ilma.** Audiencia Provincial de Madrid (Sección 16ª) de 8 de febrero (...)

[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid, 13/02/2009]

c) *Latinismos*

Las locuciones latinas, de gran precisión jurídica, aparecen con frecuencia en los textos que manejamos para elaborar este anejo. A pesar de su precisión conceptual, tal vez podrían evitarse si el texto tiene que ser leído por un ciudadano lego en materia de Derecho, o se quiere simplificar el lenguaje jurídico. En el ejemplo, además del latinismo, aparece una expresión italiana escrita de manera incorrecta:

(84)
para evitar caer en el **Tradutore traditore** se llega inequívocamente (...)
Dicha doctrina se refería a las pruebas orales, a cuya práctica no había asistido el tribunal "**ad quem**", con lo que se vulneraba (...)

[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid, 13/02/2009]

d) *Arcaísmos*

Como se ha señalado en la introducción del capítulo dedicado al léxico, en el lenguaje jurídico se emplean términos que han caído en desuso en la norma lingüística actual. A modo de ejemplo, a continuación se ofrece una lista de correspondencias entre algunos términos anacrónicos y los correspondientes términos que sugerimos porque el ciudadano puede percibirlos como más actuales y comprensibles:

OTROSÍ.-Habida cuenta que esta representación, mediante el presente recurso de apelación, interesa que, por parte del órgano **«ad quem»**
órgano *a quo* / *ad quem* – órgano de origen / revisor

De todo lo anterior, (...) hemos de concluir (...) que ha de darse como acreditado el relato de los hechos consignados en nuestro factum, relato respecto del cual, tanto acusado como perjudicada han dado una **mendaz** versión (...) **mendaz versión – versión (intencionalmente) falsa**

Resuelto a hacer la compra, en días posteriores al 7 de febrero, el acusado aforado encargó a su amigo el también acusado Gerardo (...) que le buscara un abogado para redactar los documentos necesarios para la compra de la vivienda. Así lo hizo este último quien transmitió el encargo al también acusado Juan Alberto (...) quien aceptó la **encomienda**, con conocimiento del acusado aforado (...) **encomienda – petición, encargo**

La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: Con desestimación íntegra de la demanda interpuesta por el procurador Sr., en nombre y representación de PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGÓN S.L., no **ha lugar a** imponer la cesación de la actividad (...) **ha lugar a – cabe, es posible**

D. Víctor (...) ha mantenido con total integridad y sin aditamentos progresivos, el núcleo de su versión inculpativa, lo que demuestra una objetividad ajena a los avatares intersubjetivos con el acusado **habidos** con posterioridad a los hechos. **habidos – sucedidos, acontecidos**

Contra lo dicho por el recurrente, la sentencia de instancia no solamente descarta la atenuación **por mor de** la naturaleza del delito y la persistencia en el tiempo del comportamiento delictivo. **por mor de – a causa de, debido a**

(...) Pero **como quiera que** los perjudicados por la operación ni el Ministerio Fiscal han solicitado la devolución de estas cantidades, no se hará mención de las mismas. **como quiera que – ya que**

Al amparo de los arts. 849 de la LECrim. Y 5.4 de la LOPJ se invoca vulneración del art. 18.3 de la CE, en relación con el derecho al secreto de las comunicaciones, así como del art. 24 de la CE. **al amparo de – de acuerdo con**

e) Giros poco habituales

Ciertos giros cultos o pretendidamente cultos, de uso poco frecuente en la lengua común, podrían ser reemplazados por otros -propuestos entre corchetes en los ejemplos que siguen- que simplificarían la comprensión de los textos y les restarían un barroquismo expresivo innecesario. Recogemos aquí algunos de estos giros poco habituales:

(85)
CUARTO.- Acción ejercitada. -La de **cesación [cese]** en el uso de de una condición general de contratación nula del art. 12 de la Ley 13 de abril 1998.

[Demanda al Juzgado de 1.ª Instancia de...]

(86)
(...) y por ello se considera errada la interpretación de los hechos del **juzgador [juez]** y se considera (...) El propio T.C. ha ido matizando su doctrina y no la ha aplicado cuando existe la posibilidad de apreciar directamente la prueba documental obrante en la causa, a la que la Sentencia no hace en ningún momento referencia alguna, y que según el **tenor [contenido literal]** de la última sentencia citada (...) **[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid, 13/02/2009]**

(87)

A mayor abundamiento [es más] no se ha presentado en este caso ninguna circunstancia que pudiera justificar una eventual tramitación de urgencia y en aplicación del art. 354 del Reglamento del Registro Civil se ha guardado el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza.
[Informe, Registro Civil, Valencia, 11/2/2010]

f) Terminología (unidades léxicas especializadas) con significado distinto en el dominio del léxico común

El léxico jurídico suele manejar con significado técnico (especializado) términos de la lengua general. Los significados habituales de tales términos pueden interferir en su interpretación, de manera que si el texto jurídico va dirigido al ciudadano, es conveniente que este disponga de claves de interpretación de esta terminología. Aportamos, a continuación, algunos de estos términos que aparecen de manera recurrente en el corpus manejado. Algunos de ellos pueden ser sustituidos por términos que no conducen a equívoco, según proponemos entre corchetes:

(88)

(...) al que se acompaña Acta de Opción y comunicación procedente del Registro Civil Central indicando el Tomo y Página donde ha quedado practicada [realizada] la inscripción además de la copia de certificación que lo acredita.

[Oficio adjunto al Acta. Registro Civil, Terrassa, 19/05/2009]

(89)

LA MADRE del/a inscrito/a ha ADQUIRIDO la nacionalidad española sobrevenida [el participio sobrevenida es innecesario], por RESIDENCIA en fecha (...)

[Certificación Literal. Registro Civil Central, Sección1., Madrid, 22/12/2009]

(90)

Que su nacimiento no consta inscrito en ningún Registro Civil español, (...), interesando [solicitando] se consignen los que hace constar en la hoja de declaración de datos que presente....., que son respectivamente los de su padre y su madre y son los que ya usa.

[Acta. Registro Civil, Terrassa, 19/06/2009]

(91)

En particular, indica que son nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado [formalizado] con un consumidor.

[Acta. Registro Civil, Terrassa, 19/06/2009]

(92)

SUPPLICO [Solicito] AL JUGADO: Que tenga por presentada la presente demanda con los documentos a ella adjuntos y por parte en la representación que ostento se tenga por formulada demanda de acción de cesación en el uso de condición general de la contratación y en virtud de ella se condene a ... a eliminar (...) adjuntos como doc. la n.º ... que se reputa [considera / juzga] nula (...)

[Demanda al Juzgado de 1.ª Instancia de ...]

(93)

Que mi mandante [representado] es la Asociación de Consumidores (...)

[Demanda al Juzgado de 1.ª Instancia de...]

(94)

La queja viene motivada porque habiendo optado por la nacionalidad española el quejoso [que formula la queja], y habiéndose remitido al Registro Civil Central (...)

[Carta adjunta al Acta. Registro Civil, Terrassa, 19/06/2009]

g) Omisión de términos jurídicos consabidos

A pesar de que la exigencia de concisión expositiva lleva a menudo a los profesionales del Derecho a omitir términos jurídicos consabidos, estimamos que estas omisiones deberían evitarse para eliminar cualquier posibilidad de ambigüedad interpretativa y garantizar la precisión de significado. Aportamos a continuación algunas muestras de secuencias en las que se aprecia la omisión de términos:

(95)
SEGUNDO.-Legitimación.-Le corresponde a esta parte **la activa** ante la condición de Cámara de Comercio (...) y **la pasiva a la mercantil** demandada ya que hace uso de la cláusula (...)
En este caso los contratos aportados van dirigidos entendiéndose por tales en todo caso **las definidas** en los artículos 82 al 90 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, (...)
[Demanda al Juzgado de 1.ª Instancia de...]

(96)
En efecto, de las declaraciones del acusado en **el Plenario** en el que palmariamente se reconoce (...)
[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid, 13/02/2009]

(97)
(...) a fin de dar respuesta a **la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo** (...)
[Oficio adjunto al Acta. Registro Civil, Terrassa, 19/05/2006]

(98)
(...) uno de cuyos ejemplares se remitirá en unión de los documentos presentados al Registro Civil Central para la práctica de la correspondiente inscripción de nacimiento y **marginal de opción**, interesando que, verificadas, tenga a bien (...)
[Acta. Registro Civil, Terrassa, 19/05/2006]

(99)
SE ADJUNTAN 2 **LITERALES**
[Carta adjunta al Acta. Registro Civil, Terrassa, 19/05/2006]

h) Abreviaciones

Las manifestaciones de intertextualidad o remisión a otros textos jurídicos son frecuentes en los documentos que manejamos. Las abreviaciones pueden conllevar dificultades de lectura en la decodificación de las siglas resultantes:

(100)
TERCERO.- Procedimiento.- Es el juicio ordinario con fundamento en el **art. 249.1.5º LEC** al ser una demanda referente a la impugnación de un acuerdo social.
[Demanda al Juzgado de 1.ª Instancia]

(101)
(...) y se considera que el Tribunal de Apelación puede corregir el error pese a la última doctrina del tribunal Constitucional, sentada a partir de la **STC167/02**, que recoge la imposibilidad (...)
[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid, 13/02/006]

También se observa en un mismo texto una alternancia entre el recurso a la abreviación y la falta de abreviación en la remisión a mismo texto jurídico. Esta alternancia puede molestar a un lector que alberga expectativas de una redacción muy cuidada:

(102)
En este caso los contratos aportados van dirigidos, entendiéndose por tales en todo caso las definidas en los **artículos 82 a 90 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre**, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Concretamente, el **art. 87** considera cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones (...)
[Demanda al Juzgado de 1.ª Instancia de...]

i) Impropiiedades léxicas

Aunque no es frecuente, más allá de los textos de las sentencias también en otros documentos jurídicos algunas palabras adquieren significados impropios o insospechados. Esta patología dificulta, sin duda, la comprensión de los textos.

En este sentido, hay que documentar una vez más el uso del verbo *ostentar* con el significado de *tener*, sin que esté presente la idea de relevancia u honor. La norma académica considera impropio este uso:

(103)

Que es hijo de la madre que le asiste la cual **ostentaba** la nacionalidad DOMINICANA al tiempo de su nacimiento y por tanto la nacionalidad de la compareciente es la DOMINICANA.

[Acta. Registro Civil, Terrassa, 19/05/2009]

También en la siguiente secuencia el sustantivo deverbal *visualización* se usa de forma impropia. Debería, pues, haberse utilizado en el contexto el sustantivo *visionado*, que sí recoge la acepción de la que carece el verbo *visualizar*: 'examinar técnica o críticamente, en una sesión de trabajo, un producto cinematográfico, televisivo, etc.' (DRAE 2001: s.v. *visionar*), que es la que se ajusta a las necesidades del texto. La proximidad formal de ambas piezas puede explicar esta confusión.

(104)

En el presente caso, la prueba pericial para discernir el debate, es la prueba documental, a la que tiene pleno acceso la Sala, pudiendo además mediante la **visualización** del DVD de la grabación del acto del Juicio Oral, acceder a las demás pruebas practicadas, con salvaguarda del principio de inmediación.

[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º3 bis de Madrid, 13/02/2009]

Por otro lado, también se confunde el adjetivo *errado/da* con el adjetivo *erróneo/a*, posiblemente por su proximidad formal. Solo *erróneo/a* significa 'que contiene error' (DRAE 2001: s.v. *erróneo*):

(105)

En efecto, de las declaraciones del acusado en el Plenario en el que palmariamente se reconoce tal condición y [a] cuyo visionado dada su brevedad y elocuencia esta parte se remite para evitar caer en el Traduttore traditore se llega inequívocamente a esa conclusión y por ello se considera **errada** la interpretación de los hechos del juzgador y se considera que el Tribunal de Apelación puede corregir el error pese a la última doctrina del tribunal Constitucional (...)

[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal nº 3 bis de Madrid, 19/03/2009]

10.1.2. Particularidades estilísticas

202

a) Formas perifrásticas

(106)

5ª.- Procede imponer, al acusado, la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, con accesorias de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por TRES AÑOS, así como, conforme a lo dispuesto en el art. 57.2 en relación al 48.2 del Código Penal, prohibición de aproximación a una distancia inferior a 500 metros **respecto de**....., a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, así como de comunicar con ella por cualquier medio por tiempo de TRES AÑOS.

[Escrito de acusación, Fiscalía de Málaga, Procedimiento de diligencias urgentes]

Los giros contruidos con verbos vacíos + nombres no son ajenos a los documentos jurídicos que examinamos. Su uso es desaconsejado por retrasar innecesariamente el aporte de información y alargar la expresión, de manera que estos giros son fácilmente sustituibles por una única forma simple (entre corchetes) sin modificación significativa:

(107)

SEGUNDO.- Legitimación.- Le corresponde a esta parte la activa ante la condición de Cámara de Comercio (...) y la pasiva a la mercantil demandada ya que **hace uso de [usa/se atiende a]** la cláusula que antes se ha mencionado (...)

[Demanda al Juzgado de 1.ª Instancia]

(108)

Por el presente, **ponemos en su conocimiento [le comunicamos]** que ha sido practicada (...)

[Carta adjunta al Acta. Registro Civil, Terrassa, 19/05/2006]

(109)

En relación con la queja formulada ante el Defensor del Pueblo, por D., relativa a la inscripción de su nacimiento tras haber adquirido la nacionalidad española por opción, a fin de **dar respuesta [responder]** a la Adjunta Primera (...)

[Oficio adjunto al Acta. Registro Civil, Terrassa, 19/05/2006]

b) Abuso de locuciones complejas

Los textos analizados para elaborar este anexo repiten y prolongan la lista de locuciones preposicionales documentadas en las sentencias. Estas locuciones también dilatan innecesariamente la expresión y, además, producen afectación en el discurso. Así, a las locuciones *al objeto de, en virtud de, de conformidad con* registradas también en textos de sentencias se añade, por ejemplo, la locución compleja *de cara a*, fácilmente sustituible por *para*:

(110)
(...) En el ejercicio de sus funciones ha comprobado que la mercantil **de cara a** suministrar. utiliza el contrato tipo que como documento n.º se adjunta a esta demanda (...)
[Demanda a un Juzgado de 1.ª Instancia]

11. CUESTIONES DE NORMATIVA

11.1. Principales problemas relacionados con los usos desviados de la norma académica

11.1.1. Particularidades ortográficas

a) Acentuación

i). Palabras agudas, llanas y esdrújulas

Como en el texto de las sentencias, documentamos también en el corpus de textos que estudiamos en este anexo la ausencia de tilde en las terceras personas del singular del pretérito perfecto simple de los verbos en -ar:

(111)
La sentencia recurrida interpreta erróneamente la función desarrollada por Don ya que lo considera como empelado de la sociedad cuando en realidad es un testafarro y así se le **considero** en el escrito de acusación
[Recurso de apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid. 13/02/2009]

Errores como el del ejemplo anterior deben evitarse por entorpecer la comprensión del texto: es fácil leer esta forma verbal como una forma de presente antes que como una forma de pretérito. Además del error que acabamos de comentar, es también frecuente la ausencia de tilde en palabras agudas, llanas o esdrújulas:

(112)
Por el presente y en contestación a su escrito con **numero** de Referencia M.A.6.2.I. 1282/ 2009, relativo a la Queja del Sr., por medio del presente escrito y de acuerdo con lo solicitado paso a efectuar el INFORME siguiente:
[Informe. Registro civil de Ciutadella (Menorca). 26/10/2009]

b) Los monosílabos

También es frecuente en los documentos analizados la confusión en la acentuación diacrítica de palabras monosílabas.

(113)
sin entrar en esta prematura discusión, **si** conviene poner de relieve que el suelo donde la imputada (hoy acusada) ha llevado a cabo obras de construcción, está clasificado como No urbanizable[...]
[Impugnación recurso de apelación. Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas 773/08]

c) El adverbio *aún* / *aun*

En los siguientes ejemplos, se acentúa incorrectamente el adverbio *aun* equivalente a incluso:

(114)

CUARTA. - Por último, **aún** cuando no se alega expresamente, se afirma por la recurrente que la conducta de la imputada ya fue objeto de expediente sancionador[...]

[Impugnación recurso de apelación. Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas 773/08]

(115)

SEGUNDO. - **Aún** en el improbable caso de que el razonamiento anterior no fuera compartido y se entrase a resolver sobre el sobreseimiento solicitado, entendemos que el mismo es absolutamente improcedente, (...).

[Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas nº 1314/2008. Fiscalía Provincial de Málaga]

(116)

Aún cuando tal razonamiento no parece justificar la inactividad municipal respecto a la demolición acordada, entendemos que tal inactividad no debe ser considerada como constitutiva de infracción penal.

[Diligencias previas. Fiscalía de Málaga. Juzgado de instrucción nº 3]

d) *Las palabras solo y sólo*

La acentuación del adverbio *solo* es antinormativa en contextos en que no hay posibilidad de confusión con el adjetivo *solo*. Incluso en estos contextos puede evitarse esta tilde. Con todo, la lengua común sigue acentuando este adverbio en estos contextos no ambiguos, como también queda reflejado en secuencias como la que aportamos a continuación:

(117)

(...) lo cual no es admitido por las normas procesales penales que **sólo** permiten la práctica de aquellas pruebas que por causas no imputables al recurrente no se hayan podido practicar en la 1ª instancia.

[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid. 13/02/2009]

e) *Los demostrativos*

El siguiente ejemplo muestra un caso de acentuación antinormativa del demostrativo *este*, que nunca se acentúa cuando acompaña a un nombre:

(118)

Le consta a **éste** Juez Encargado del Registro Civil, que para la superioridad a la que tengo el honor de informar no es desconocida la carga de trabajo que arrastran algunos Registros Civiles, de cuyo exceso es fiel reflejo este Registro Civil.

[Informe. Registro Civil de Valencia. 11/2/2010]

f) *Las palabras compuestas sin guión*

Apenas hemos constatado patologías en la acentuación de las palabras compuestas sin guión, excepto en lo que atañe a la acentuación de un adverbio en *—mente*, que debería haberse acentuado por ser esdrújulo el adjetivo que precede al sustantivo *mente*:

(119)

(...) esta parte se remite para evitar caer en el Traduttore traditore se llega **inequívocamente** a esa conclusión (...)

[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid. 13/02/2009]

g) *La ortografía de las palabras homónimas homófonas*

En el siguiente ejemplo se destaca un error recurrente en los textos analizados: la confusión ortográfica entre palabras con una grafía o sonido similar:

(120)

El segundo argumento el requerimiento para la legalización de la obra, sin constancia de su resultado, implica una sensible contradicción con el propio sentido condenatorio del fallo de la sentencia apelada.

Elo es así **perqué** **porque** si la juzgadora considera que no está suficientemente acreditada en las actuaciones la condición de no autorizable de la obra denunciada, no puede condenar como autor del delito del artículo 319.2º, ya que es este un requisito esencial del tipo.

[Recurso de apelación. Fiscalía Provincial de Málaga. Diligencias previas nº 1215/06]

h) La ortografía de las siglas y de las abreviaturas

Analizando el corpus de sentencias judiciales ya señalamos cómo el *Diccionario Panhispánico de Dudas* (2005) establece que las siglas se han de escribir sin puntos ni blancos de separación. No son, pues, correctas algunas ortografías de las siglas documentadas en los textos analizados para este anexo, como se observa en el siguiente fragmento, en que la sigla correspondiente a Tribunal Constitucional se escribe con puntos:

(121)

El propio **T.C.** ha ido matizando su doctrina y no la ha aplicado cuando existe la posibilidad (...)
[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid. 13/02/2009]

Sobre las abreviaturas, es general la ausencia del punto que debe preceder a la letra volada:

(123)

[.....] ... solicita se le entregue en mano su expediente matrimonial nº/2009 para su inmediata entrega al Registro Civil de Galapagar.
Se procede a dicha entrega en este acto.
Por **SS^a** se accede a lo solicitado.
Con lo cual se dio por terminada la presente, que leída y hallada conforme por el compareciente, la firma, después de **SS^a**, conmigo la Secretaria, de lo que doy fe.
[Acta de comparecencia. Registro Civil de Collado Villalba. 2009]

(124)

Ante **D^a**Magistrado Encargado del Registro Civil de Terrassa (...)
Prevía ratificación de la compareciente en sus manifestaciones a la que presta plena conformidad la madre asistente, acuerda **S.S^a** se levante acta (...)
[Acta. Registro Civil de Terrassa. 19/05/2009]

Con frecuencia se olvida también el punto en algunas abreviaturas:

(125)

"(...) lo que permitirá dictar una sentencia condenatoria sin contravenir la conocida doctrina del Tribunal Constitucional respecto de la valoración de la prueba de apelación" (**Sentencias de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid** (...)
[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid. 13/02/2009]

i) Las letras mayúsculas

Tendencia al mayusculismo.

El uso abusivo, injustificado o asistemático de letras mayúsculas es también manifiesto en los documentos analizados, y convive con la escritura en minúscula de letras iniciales que deberían escribirse en mayúscula: en un mismo texto, además, un mismo nombre puede escribirse en letra inicial mayúscula o minúscula aleatoriamente. Este uso inconsistente de las letras mayúsculas o minúsculas dificulta la lectura de los textos y conlleva una pérdida de la carga significativa que implica el uso de este elemento ortotipográfico:

(126)

Según se me manifiesta por las **F**uncionarias de **G**estión y **A**uxilio respectivamente Dña. y de Auxilio Dña., quienes desempeñan su trabajo en este Registro Civil de Ciutadella de Menorca, efectivamente se incoó en fecha 06.09.06, **E**xpediente de **N**acionalidad por **R**esidencia a instancia de D., tramitado bajo el numero .../2006 no pudiendo precisarse en este momento el estado en que dicho expediente se encontraba, cuando, aproximadamente en el pasado mes de **J**ulio al interesarse esta persona por el estado actual de su expediente de **N**acionalidad, se constató que al parecer el mismo se había extraviado.

[Informe. Registro civil de Ciutadella (Menorca). 26/10/2009]

(127)

(...) y cuyo visionado dada su brevedad y elocuencia esta parte remite para evitar caer en el Traditore traditore se llega inequívocamente a esa conclusión y por ello se considera errada la interpretación de los hechos del juzgador y se considera que el Tribunal de Apelación puede corregir el error pese a la última doctrina del tribunal Constitucional, sentada a partir de la STC167/02, que recoge la imposibilidad de revocar las sentencias absolutorias que se dicten en la 1ª Instancia penal, basadas en pruebas orales, salvo que estas se vuelvan a practicar en la 2ª, lo cual no es admitido por las normas procesales penales que sólo permiten la práctica de aquellas pruebas que por causas no imputables al recurrente no se hayan podido practicar en la 1ª instancia.

[Recurso de Apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid. 13/02/2009]

(129)

[...] un delito Contra la Ordenación del Territorio[...]

[Impugnación recurso de apelación. Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas 773/08]

j) Omisión de la tilde en las mayúsculas

La omisión aleatoria de la tilde en las mayúsculas es frecuente en los textos analizados, sobre todo si se trata de nombres propios. Valga la siguiente secuencia como muestra:

(130)

(...) comparece D....., hijo dey de, nacido en SAN JUAN DE LA MANAGUA -REPUBLICA DOMINICANA- en (...)

[Acta. Registro Civil de Terrassa. 19/05/2006]

k) La ortografía de los números y de la fecha

En los documentos analizados es frecuente escribir la fecha con una combinación de números (día y año) y de letras (mes), como suele ser práctica habitual en la lengua común. Con todo, persisten algunas patologías ya señaladas en la construcción del texto de las sentencias. Así, es incorrecto escribir en mayúscula el nombre del mes:

(131)

OFICIO

S/REF: 09016108

N/REF: EV.6.2.2.1.-2906/2009

FECHA: 26 de Febrero de 2010

(...)

[Oficio adjunto al Acta. Registro Civil de Terrassa. 19/05/2006]

También es incorrecto escribir punto en la expresión numérica del año o al final de la escritura de la fecha. Además, debería sistematizarse la escritura de la coma tras la expresión de la localidad:

(131)

Atentamente,

Le saluda, en Terrassa[,] a 8 de febrero de 2.010.

[Carta adjunta al Acta, Registro Civil, Terrassa, 19/05/2006]

Sería conveniente, asimismo, separar las fórmulas de despedida de la expresión de la fecha, al contrario de lo que muestra el ejemplo anterior, en que la fórmula *Atentamente le saluda* queda truncada.

La expresión de la fecha o de la hora en letras, infrecuente en lengua común, es en cualquier caso, desaconsejada, ya que obstaculiza la rapidez lectora. La documentamos en documentos relacionados con el Registro Civil:

(132)
Registro Civil Central
Certificación Literal
Sección 1ª
DATOS DEL INSCRITO
Nombre:
(...)
Fecha de nacimiento: seis de junio de mil novecientos ochenta y ocho
(...)
La presente inscripción se practica en virtud de transcripción de CERTIFICADO DEL REGISTRO CIVIL LEGALIZADO Y HOJA DE DATOS FIRMADA POR DECLARANTE
EXP 18246/06
Hora: ocho horas veintiséis minutos
Fecha: veintidós de diciembre de dos mil nueve
[Certificación Literal adjunto al Acta, Registro Civil, Terrassa 10/05/2006]

Consideramos, asimismo, inadecuado en textos jurídicos que el 0 preceda a las cifras de un solo dígito en las fechas, por ser calco de la escritura digital:

(133)
Que mediante resolución de fecha 02 de OCTUBRE DE 1998 le fue concedida a su madre la nacionalidad española, habiendo prestado juramente el día 30 DE OCTUBRE DE 1998.
[Acta. Registro Civil de Terrassa. 19/05/2006]

11.1.2. Particularidades gramaticales

a) Los verbos

i) Las perífrasis [*deber + de + infinitivo*] y [*deber + infinitivo*]

En el ejemplo de (134) la perífrasis [*deber + de + infinitivo*] aparece en lugar de [*deber + infinitivo*]. Además, la forma *debiendo* ilustra un uso incorrecto del gerundio:

(134)
La decisión de archivar la causa, al amparo del artículo 779.1.1ª L.E.Crim, sin embargo, sólo podrá ser adoptada por el instructor cuando las diligencias practicadas evidencien de forma objetiva y clara, sin necesidad de interpretaciones subjetivas, la inexistencia de los hechos objeto de la investigación o la atipicidad de los existentes, **debiendo**, en consecuencia, tales hechos, **de** carecer extrínsecamente de apariencia delictiva[...]
[Impugnación recurso de apelación. Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas 773/08]

ii) Las preposiciones

La confusión en el uso de algunas preposiciones puede conllevar una dificultad añadida a la comprensión de los textos jurídicos. Así, la secuencia *por parte en* debería haberse evitado, y sustituido por *por parte de*:

(135)
SUPPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentada la presente demanda con los documentos a ella adjuntos y por parte **en** la representación que ostento se tenga por formulada demanda de acción de cesación en el uso de condición general de la contratación y en virtud de ella (...)
[Demanda al Juzgado de 1.ª Instancia de ...]

Por otro lado, la secuencia *en base a* es censurada por la norma académica, que propone la sustitución por las secuencias *sobre la base de*, *en función de*, *basándonos en*, *a partir de*, *de acuerdo con*, *según*, etc. (DPD 2005):

(136)
En base a lo anterior,
SUPPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentada (...)
[Demanda al Juzgado de 1.º Instancia de ...]

A continuación, se muestran otros casos de empleos anómalos de preposiciones identificadas en los textos redactados por fiscales y abogados:

(137)

Sobre el acusado pesaba una orden de prohibición de aproximación y comunicación respecto a, dictada por el Juzgado nº 2 de Coín en fecha 17/08/09 en D.U. 169/09 y notificada al acusado el mismo día, vigente **a** la fecha de los hechos antes referidos, actuando el acusado con pleno conocimiento de la misma y de las consecuencias en caso de quebrantamiento.

[Escrito de acusación. Fiscalía de Málaga. Juzgado de instrucción nº 2 de Coín]

(138)

EL FISCAL, en el procedimiento de referencia, notificado el día 19/06/09 **de [¿acerca de / tratado en / mediante?]** la sentencia de fecha 5 de junio de 2.009, en tiempo y forma, interpone recurso de apelación contra dicha resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 790 L.E. Crim, al entenderla no ajustada a derecho, en base a las siguientes:

ALEGACIONES

[Recurso de apelación. Fiscalía Provincial de Málaga. Diligencias previas nº 1215/06]

(139)

Ciertamente, el derecho penal está informado por los principios de intervención mínima, lo que determina **a** que sea éste la "última ratio", el último remedio a utilizar para remediar el ataque a un determinado bien jurídico[...]

[Impugnación recurso de apelación. Escrito del Ministerio Fiscal. Diligencias previas 773/08]

(140)

Que el pasado 3 de junio me ha sido notificada Diligencia de Ordenación por la que se tiene por formalizada la demanda por **don**, se me entrega copia de la misma y del expediente administrativo y se me emplaza **por** veinte días para que la conteste, lo que vengo a hacer por medio del presente escrito con base en los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

[Escrito de contestación (demanda contencioso abogados)]

iii) La concordancia

El formulismo al que se recurre en la construcción de algunas secuencias de los textos puede explicar patologías relacionadas con la falta de concordancia. Así, por ejemplo, hemos documentado una patología relacionada con la concordancia en género, que puede explicarse, asimismo, por la tradición de no marcar el género femenino en los sustantivos que designan profesiones o cargos desempeñados tradicionalmente por hombres:

(141)

Ante **D^a** Magistrado Encargado del Registro Civil de Terrasa (...)

[Acta. Registro Civil de Terrasa, 19/05/2009]

Con todo, en la carta adjunta al documento al que pertenece el ejemplo anterior, la concordancia en femenino es la normativa, de lo que se deduce que la falta de concordancia no es sistemática:

(142)

Fdo: Amaia....., Magistrado, Juez el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Terrasa, Encargada del Registro Civil

[Carta adjunta al Acta. Registro Civil de Terrasa. 19/05/009]

El siguiente ejemplo muestra un problema de concordancia de número entre el sujeto de la oración y el verbo principal, ambos destacados en rojo:

(143)

Si al día de hoy **el suelo de la parcela** donde se han efectuado las obras objeto del escrito de acusación, **cuentan** con las condiciones exigidas en el artículo 45 LOUA para ser considerados como Suelo urbano (a falta de normas de planeamiento aplicables), es por (...).

[Escrito del Ministerio Fiscal. Fiscalía Provincial de Málaga. Diligencias previas nº 1314/2008.]

11.1.3. Particularidades de la reproducción del discurso ajeno

a) La ortotipografía de la cita: la delimitación de las palabras ajenas

Como se observa en los siguientes ejemplos, es frecuente omitir signos de puntuación en los límites de las citas directas canónicas. En ningún caso esta omisión está justificada. Así, el siguiente fragmento ejemplifica la ausencia de los dos puntos que introducen la cita directa canónica y del punto final que la cierra:

(144)

La sentencia recurrida interpreta erróneamente la función desarrollada por Donya que lo considera como empleado de la sociedad cuando en realidad es un testafarro y así se le considero en el escrito de acusación

El acusado Donse avino a petición de Donya fallecido a ser nombrado administrador único de la sociedad actuar como testafarro de la empresa Componentes Unidos Potentes SL y domicilio social en la Calle Eduardo Marquina de Madrid dedicada a la compra de material informático en la Unión Europea y a su posterior reventa a sociedades españolas

Don era el único autorizado en las cuentas bancarias de la sociedad y además de la relación con los clientes se ocupaba de acudir a los bancos para afirmar los documentos bancarios que brandados, percibiendo por ello 230

En efecto, de las declaraciones del acusado en el Plenario en el que palmariamente se reconoce (...)

[Recurso de apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid. 13/02/2009]

En ocasiones, en un mismo documento, se observan vacilaciones entre introducir o no la cita directa. El ejemplo que aportamos a continuación pertenece al mismo documento que el ejemplo anterior, de manera que aquí la cita no está desgajada, aunque sí entrecomillada y destacada mediante un subrayado:

(145)

El propio T.C. ha ido matizando su doctrina y no la ha aplicado cuando existe la posibilidad de apreciar directamente la prueba documental obrante a la causa, a la que la Sentencia no hace en ningún momento referencia alguna, y que según el tenor de la última sentencia citada: “El propio Tribunal Constitucional no ha aplicado su doctrina relativa a la imposibilidad de revocar sentencias absolutorias basadas en pruebas orales, cuando existe prueba documental suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al acusado y cuando el juicio de inferencia del Juez “a quo” ha ido en contra de las reglas de la lógica, dictándose una sentencia absolutoria que según los documentos aportados es contraria a la sana crítica, a la lógica y al sentido común.”

[Recurso de apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid. 13/02/2009]

También se vacila entre situar el punto final de la cita directa dentro o fuera de las comillas, si bien la norma académica prescribe que el punto ha de escribirse siempre detrás de las comillas. En el ejemplo que acabamos de comentar, la ubicación del punto final contraviene la norma académica.

Por último, la vacilación alcanza al uso de la cursiva o de la letra redonda, al uso o no del sangrado inicial, y al uso o no de las comillas delimitadoras, cuando la cita queda desgajada del texto que la introduce. Puede observarse esta vacilación si se compara el primer ejemplo que aportamos en este apartado con esta última secuencia que reproducimos a continuación, que pertenece también al mismo documento:

(146)

Esta última sentencia recoge un caso similar al de autos y por su interés la reproducimos casi completa *“El acusado José Pablo, mayor de edad y sin antecedentes penales, a petición del otro coacusado, a quien no afecta la presente resolución por estar declarado en rebeldía, se avino a actuar como testafarro de una empresa denominada JSS Componentes Informáticos S.L. dedicada a la compra de componentes informáticos en el extranjero que después vendían en el local abierto al público sito en la C/Castillo núm. 11 de Madrid”.*

[Recurso de apelación. Juzgado de lo Penal n.º 3 bis de Madrid. 13/02/2009]

El lector siempre agradece la homogeneidad en la introducción de citas en el desarrollo de un texto.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CITADAS EN EL INFORME

- ADAM, J.M. y LORDA, CL. (1999): *Lingüística de los textos narrativos*, Barcelona: Ariel.
- ALCARAZ VARÓ, E. y HUGUES, B. (2002): *El español jurídico*, Barcelona: Ariel Derecho.
- ALCARAZ VARÓ, E. y HUGUES, B. (2003): *Diccionario de términos jurídicos*, Barcelona, Ariel.
- ÁLVAREZ, M. (1994): *Tipos de escrito: narración y descripción*. Madrid, Arco/Libros.
- ÁLVAREZ, M. (1997): *Tipos de escrito III: epistolar, administrativo y jurídico*, Madrid: Arco/Libros.
- ÁLVAREZ, D.; CATALÁN, S.; GINER, S.; GRAS, P.; LÓPEZ SAMANIEGO, A.; MARTÍNEZ, E.; MIÑANO, J.; POLANCO, F.; SANTIAGO, M.; VELÁZQUEZ, R.; YÚFERA, I. (2008): *Destino Erasmus 2*, Madrid: SGEL.
- ATIENZA, M. (1991): *Las razones del derecho*, CEC, Madrid.
- ATIENZA, M. (1993): *Tras la justicia*, Ariel, Barcelona.
- ATIENZA, M. (2006): *El Derecho como argumentación. Concepciones de la argumentación*. Barcelona: Ariel.
- BAYO DELGADO, J. (1996): "La formación básica del ciudadano y el mundo del Derecho. Crítica lingüística del lenguaje judicial", *Revista de Llengua i Dret*, 25, 51-72.
- BAYO DELGADO, J. [coord.] (1997): *Lenguaje judicial*, Madrid: CGPJ.
- BAYO DELGADO, J. [coord.] (2002a): *Lenguaje Forense*, Estudios de Derecho Judicial nº 32, Madrid: CGPJ.
- BAYO DELGADO, J. (2002b): "El lenguaje forense: estructura y estilo" en BAYO DELGADO, J. [coord.] *Lenguaje Forense*, Estudios de Derecho Judicial nº 32, Madrid: CGPJ, 37-75.
- BENNETT, L. y FELDMAN, M. (1981): *Reconstructing reality in the courtroom. Justice and Judgment in American Culture*. Londres: Tavistock.
- BORJA ALBÍ, A. (2000): *El texto jurídico inglés y su traducción al español*, Barcelona: Ariel Derecho.
- BORJA ALBÍ, A. (2007): "Los géneros jurídicos" en E. ALCARAZ, J. MATEO y F. YUS (eds.) *Las lenguas profesionales y académicas*, Barcelona: Ariel / IULMA, 141-153.
- BOURCIER, D.; BRUXELLES, S. (1995): «Une approche sémantique de l'argumentation juridique. Dire et C'est-à-dire», *L'Année Sociologique* 45(1), 35-58.
- BRUNER, J. (2002): *Making stories: Law, Literature, Life*, Nueva York: Farrar, Straus Giroux.

- CALVO RAMOS, L. (1980): *Introducción al estudio del lenguaje administrativo*, Madrid: Gre-dos.
- CALVO RAMOS, L. (2004): "Renovación de las leyes", *Revista de Lengua i Dret*, 42, 11-39.
- CAMPOS PARDILLOS, M. A. (2007): "El lenguaje de las ciencias jurídicas: nuevos retos y nuevas visiones" en E. ALCARAZ, J. MATEO y F. YUS (eds.) *Las lenguas profesionales y académicas*, Barcelona: Ariel / IULMA, 155-165.
- CAPELLA, J. R. (1968): *El derecho como lenguaje. Un análisis lógico*, Barcelona: Ariel.
- CARRETERO GONZÁLEZ, C. (2006): "Características del lenguaje jurídico. El lenguaje procesal en ciertos actos de comunicación", *Revista de Derecho Procesal*, 1, 189-218.
- CASANOVAS, P. (2006): "L'argumentació en dret: pressupòsits pragmàtics i cognitius per a la construcció de sistemes intel·ligents" en ALTURO, N., J. BESA, O. BLADAS y N. NOGUÉ (eds.) *L'argumentació*, Barcelona: PPU, 33-62.
- CASSANY, D. (2005): "Plain Language in Spain", *Clarity*, 53, 41-44.
- CASTELLÓN, H. (2000): *Los textos administrativos*, Madrid: Arco Libros.
- CASTELLÓN, H. (2001): *El lenguaje administrativo. Formas y uso*, Granada, Editorial La Vela.
- CASTELLÓN, H. (2006): "Empleos actuales del lenguaje administrativo. Enfoques recientes de estudio", *Revista de Lengua i Dret*, 46, 181-203.
- CAZORLA PRIETO, L. M. (2007): *El lenguaje jurídico actual*, Madrid: Aranzadi.
- CILLA CALLE, E., GUILLÉN SORIA, J. M., LABADO SANTIAGO, J. M^a & MARTÍN CONTRERAS, L. (1997): *Libro blanco de la justicia: proyecto alternativo de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales*. [en línea] Disponible en: <http://procuradores-alicante.com/EI%20libro%20blanco%20de%20la%20%20Justicia.html>
- COHEN DE CHERVONAGURA, E. (1998): "Discurso judicial y flexión verbal" en *Hesperia. Anuario de Filología Hispánica*, 1, 9-24.
- CORNU, G. (1990). *Linguistique juridique*. París: Montchrestien.
- COTTERILL, J. (2003): *Language and power in court: a linguistic analysis of the O. J. Simpson trial*, Basingstone: Palgrave.
- DE MIGUEL, E. (2000): "El texto jurídico-administrativo: análisis de una orden ministerial", *Revista de Lengua y Literatura Españolas*, 2, 6-31.
- DESSOUTER, C. (2006) : "Le processus de simplification du langage administratif en France" en GOTTI, M. y D. GIANNONI (eds.) *New Trends in Specialized Discourse*, Berna: Peter Lang, 163-182.
- DUARTE, C. (1993): *Llengua i Administració*, Barcelona: Columna.
- DUARTE I MONTSERRAT, C. (1997): "Lenguaje administrativo y lenguaje jurídico" en J. BAYO DELGADO [coord.] *Lenguaje judicial*, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 41-85.
- DUARTE, C. y A. MARTÍNEZ (1995): *El lenguaje jurídico*, Buenos Aires: AZ Editora.
- DUBAY, W. H. (2004): *The Principles of Readability*. [en línea] Disponible en: <http://www.nald.ca/fulltext/readab/readab.pdf>. [Consulta 15/10/2010]
- ETXEBARRÍA, M. (1997): "El lenguaje jurídico-administrativo. Propuestas para su modernización y normalización", *Revista Española de Lingüística*, 27, 2: 341-380.
- EZQUIAGA, F. J. (1987): *La argumentación en la justicia constitucional española*. Bilbao: Instituto Vasco de Administración Pública.
- FETERIS, E. (1997): "A Survey of 25 Years of Research on Legal Argumentation", *Argumentation*, 11, PP. 355-376.
- FETERIS, E. (2002): «A Pragmadiialectical Approach of the Analysis and Evaluation of Pragmatic Argumentation in a Legal Context», *Argumentation* 16, 349-367.
- FIGUERAS, C. (2000): "La puntuación", en E. MONTOLÍO [coord.], *Manual práctico de escritura académica*, Barcelona: Ariel, pp. 77-149.
- FIGUERAS, C. (2000): "Las expresiones referenciales" en E. MONTOLÍO [coord.] *Manual práctico de escritura académica*, Barcelona: Ariel, vol. III, pp. 17-76.
- FIGUERAS, C. (2001): "Modalidad y género discursivo: la diligencia policial como tipo de texto específico" en GOTTI, M. y M. DOSSENA (eds.) *Modality in Specialized Texts (Selected papers of the 1st CERLIS Conference)*, Berna: Peter Lang, 261-287.
- FLORES SIERRA, S. (2004): "Citizen's Language. Plain English in México", *Clarity*, 42, 40-41.

- GIBBONS, J. (ed.) (1994): *Language and the law*, Harlow: Longman.
- GIBBONS, J. (2003): *Forensic linguistics. An introduction to language in the justice system*, Oxford: Blackwell Publishing.
- GIBBONS, J. (2004): "Language and the Law" en DAVIES, A. and C. ELDER [coords.] *Handbook of applied linguistics*, Oxford: Blackwell Publishing, 285-303.
- GONZÁLEZ RUIZ, V. M. (1997): "Apuntes sobre la traducción al español del inglés jurídico. (El concepto de claridad en los textos legales)", *Revista de Lenguas para Fines Específicos*, 4, pp. 157-171.
- GONZÁLEZ SALGADO, J. A. (2009): "El lenguaje jurídico del siglo XXI, Diario La Ley, nº 7209 [en línea] Disponible en: <http://www.uria.com/docs/069salgado.pdf> y en <http://www.dia-riolaley.es> [Consulta 10/09/2010]
- GOODRICH, P. (1987): *Legal Discourse. Studies in Linguistics, Rhetoric and Legal Analysis*, London: Macmillan.
- GRUP D'ESTUDIS DE TÈCNICA LEGISLATIVA (GRETEL) (1986): *La forma de las leyes. 10 estudios de técnica legislativa*, Barcelona: Bosch.
- GRUP D'ESTUDIS DE TÈCNICA LEGISLATIVA (GRETEL) (1989): *Curso de técnica legislativa*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
- GUERRERO, S. (2007): *La creatividad en el lenguaje periodístico*. Madrid: Cátedra.
- GUTIÉRREZ, J. M. (2010): *El lenguaje jurídico: estudio y propuesta didáctica*, en Biblioteca Virtual Redele, 11 [en línea] Disponible en: http://www.educacion.es/redele/Biblioteca2010_2/.../MemoriaJavierGutierrez.pdf [Consulta 10/09/2010]
- HEFFER, C. (2005): *The language of jury trial: a corpus-aided analysis of legal-lay discourse*. Basingstoke/ Nueva York: Palgrave.
- HENRÍQUEZ SALIDO, M^a C. (2007): "Los adjetivos calificativos en las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo", *Revista de Investigación Lingüística*, 101-119
- HENRY, G. (1975): *Comment mesurer la lisibilité*, Paris : F. Nathan, Éditions Labor.
- HEREDIA GALIÁN, M^a J. (2002): "Los testamentos. Un tipo textual con tradición: de la Edad Media a la actualidad", *Revista de investigación Lingüística*, 1, vol. V, 155-178.
- HERNANDO DE LARRAMENDI, M. (2001): "Propuesta de estructuración y clasificación del léxico jurídico para su enseñanza en E/LE2". [en línea] Disponible en: <http://www.ub.es/filhis/culturele/larramen.htm> [Consulta 13/09/2010]
- IGARTUA, J. (2003): *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- ITURRIALDE SESMA, V. (1989): *Lenguaje legal y sistema jurídico*, Madrid: Tecnos.
- KIMBLE, J. (2003): "The elements of plain language", *Clarity*, 50, 22-23.
- KURZON, D. (1985): "How lawyers tell their tales. Narratives aspects of a lawyer's brief", *Poetics*, 14: 467-481.
- KURZON, D. (1997): "'Legal language': varieties, genres, registers, discourses", *International Journal of Applied Linguistics*, 7(2), 119-139.
- LABOV, W. y WALETZKY, J. (1967): "Narrative analysis: oral versions of personal experience", en Helm, J. (ed.) *Essays on the verbal and visual arts*. Seattle: University of Washington Press, 12-44.
- LOCKE, J. (2004): "A History of Plain Language in the United States Government" [en línea] Disponible en: <http://www.plainlanguage.gov/whatisPL/history/locke.cfm>.
- LÓPEZ SAMANIEGO, A. (2005): "La terminología jurídica en los diccionarios de lengua del siglo XXI", en A. CURADO, M. RICO, E. M. DOMÍNGUEZ, P. EDWARDS, R. ALEJO, J. A. GARRIDO (eds.) *Languages for Academic and Professional Purposes in the 21st Century University Framework*, Cáceres: Universidad de Extremadura, 289-298.
- LÓPEZ SAMANIEGO, A. (2006a): "El uso meta-argumentativo de las perífrasis obligativas en el lenguaje judicial español" en M. V. CALVI y L. CHIERICHETTI (eds.) *Nuevas tendencias en el discurso de especialidad*, Berna: Peter Lang, 117-140.
- LÓPEZ SAMANIEGO, A. (2006b): "Los ordenadores del discurso enumerativos en la sentencia judicial, ¿estrategia u obstáculo?", *Revista de Lengua i Dret*, 45, 61-87.
- LÓPEZ SAMANIEGO, A. (2006c): "Ordenar, agrupar y contar: los ordenadores del discurso en español", *Actas del VII Congreso de Lingüística General*, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, publicación en CD-Rom (ISBN 84-475-2086-8).

- LÓPEZ SAMANIEGO, A. (2010): "Documentos profesionales con destinatarios no expertos. El empleo de los mecanismos referenciales en la sentencia del 11M", *Revista Signos*, 43(72), 99-123.
- LÓPEZ SAMANIEGO, A. (en prensa): "El género profesional del informe jurídico. Recomendar e interpretar la ley" en L. Chierichetti y G. Garofalo (eds.) *Lengua y Derecho: Perspectivas Interculturales*. Berna: Peter Lang.
- LÓPEZ SAMANIEGO, A. y TARANILLA, R. (2009): "La operación de recomendar en los discursos profesionales" en Caridad de Otto, E. y López de Vergara, A. [coords.] *Las lenguas para fines específicos ante el reto de la Convergencia Europea. Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos*. [Publicación en CD-ROM] La Laguna: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 459-471.
- MARTÍN DEL BURGO Y MARCHÁN, A. (2000): *El lenguaje del Derecho*, Barcelona: Bosch.
- MARTÍN Y MARTÍN, J. (1991): *Normas de uso del lenguaje jurídico*, Granada: Comares.
- MARTÍNEZ LINARES, M^a A. (2006): "Sobre la coordinación y la ambigüedad estructural en las sentencias", *Estudios de Lingüística*, 20, 259-285.
- MAZZI, D. (2005): "Grounds and reasons: argumentative signals in judicial texts", *Linguistica e Filologia*, 20, 157-178.
- MAZZI, D. (2006): "'This is an attractive argument, but...': Argumentative Conflicts as an Interpretive Key to the Discourse of Judges" en BHATIA, V. y M. GOTTI (eds.) *Explorations in Specialized Genres*, Berna: Peter Lang, 271-290.
- MAZZI, D. (2007a): "The Construction of Argumentation in Judicial Texts: Combining a Genre and a Corpus Perspective", *Argumentation*, 21, 21-38.
- MAZZI, D. (2007b): "Reporting verbs: a tool for a poly phonic reading of judgements" en HELLER, D. y K. EHLICH (eds.) *Studien zur Rechtskommunikation*, Berna: Peter Lang, 183-206.
- MAZZI, D. (2007c): "The Rhetoric of Judges: the Interplay of Reported Argumentation and the judge's argumentative Voice" en GARZONE, G. y S. SARANGI (eds.) *Discourse, ideology and specialized communication*, Berna: Peter Lang, 379-399.
- MELLINKOFF, D. (1963): *The Language of the Law*, Boston-Toronto: Little & Brown Company.
- MILLÁN GARRIDO, A. (1997): *Libro de estilo para juristas. Normas básicas y reglas técnicas en la elaboración del trabajo académico*, Barcelona: Bosch.
- MAP (MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) (1990): *Manual de estilo del lenguaje administrativo*, Madrid: INAP.
- MINISTERIO DE JUSTICIA (2002): *Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia. Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, el día 16 de abril de 2002*. Disponible en línea: <http://www.mjusticia.es/cs/Satellite?blobcol=urlpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=AtCiudadanoPrincipal&blobwhere=1068628785163&ssbinary=true> [Consulta 3/10/2010]
- MONTOLÍO, E. [coord.] (1999/2000): *Manual práctico de escritura académica*, Barcelona: Ariel, 3 vols.
- MONTOLÍO, E. (2000): "Les estructures condicionals [si p, q] i la seva rellevància en les formulacions legislatives, administratives y jurídiques", *Revista de Llengua i Dret*, 34, 67-91.
- MONTOLÍO, E. (2001): *Conectores de la lengua escrita*. Barcelona: Ariel.
- MONTOLÍO, E. (2002). Construcción de textos para juristas. En *II Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI)* [CD-ROM] Versión Windows 95/98/2000/Millennium/NP/XP. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona – Universitat de Barcelona – Universitat Politècnica de Catalunya - Universitat Rovira i Virgili, c. 2002. ISBN 84-88795-66-1.
- MONTOLÍO, E. (2004): "PowerPoint y el uso de la lengua escrita", *Español actual*, 82, 91-105.
- MONTOLÍO, E. (2006a) "De técnicos informáticos a gestores de proyectos informáticos: la comunicación escrita como factor crítico de desarrollo profesional. El caso de los informá-

- ticos de la Caixa” en F. Ramallo *et al.* (eds.) *Discourse and Enterprise (Communication, Business, Management and other Professional Fields)*. München: Lincom, 23-36.
- MONTOLÍO, E. (2006b) “Estrategias argumentativas en las corporaciones. El caso de la Oficina del Defensor del Cliente de ENDESA” en N. Alturo, *et al.* (eds.) *L’Argumentació*, Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias: 181-208. [Publicado de nuevo en A. ESCOFET *et al.* (eds.) *Español para fines específicos. Actas del III CIEFE*, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 17-34].
- MONTOLÍO, E. (2006c): “Formación en técnicas de comunicación escrita dirigida a ingenieros de informática. El caso de la marcación de la operación textual de la enumeración” en M. Gotti & D. S. Giannoni (eds.), *New Trends in Specialized Discourse Analysis*, Berna: Peter Lang, 247-278.
- MONTOLÍO, E. (2007): “Advising without Committing: The Use of Argumentative Reservation in Texts Written by Consultants” en S. Sarangi y G. Garzone (eds.) *Ideology and Ethics in Specialized Communication: a discourse perspective*, Berna: Peter Lang, 251-275.
- MONTOLÍO, E. (2008a): “El informe de Consultoría: un género para la toma de decisiones” en M.V. Calvi, G. Mapelli y L.J. Santos (eds.) *Lingue, culture, economia: comunicazione e pratiche discorsive*. Milán: Franco Angeli, 213-228.
- MONTOLÍO, E. (2008b): “Consultors i lingüistes. Quan el producte de l’empresa és un text”, en Montolío, E. [coord] *Llenguatge, Comunicació i Societat*, nº 6 monográfico *Lingüística i Comunicació a les organitzacions*, 41-48.
- MONTOLÍO, E. (2010a): “Mejorar las recomendaciones contenidas en los informes elaborados por consultores. La optimización del discurso”, *Onomázein*, 21 (2010/1): 237-253
- MONTOLÍO, E. (2010b): “Discourse Grammar and Professional Discourse Analysis: conditional structures and their functions in legal discourse” en M. Gotti (ed.) *Researching Language and the Law: Intercultural Perspectives*, Berna: Peter Lang, 19-47.
- MONTOLÍO, E. y LÓPEZ SAMANIEGO, A. (2006): “La propuesta didáctica en formación escrita llevada a cabo en la Escuela Judicial de España”. En *Actas del V Congreso Internacional de AELFE*, pp.64-69. [CD-ROM] Windows 95/98/2000/ Millenium/NP/XP. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, c. 2006. ISBN 84-7733-846-9.
- MONTOLÍO, E. y LÓPEZ SAMANIEGO, A. (2008): “La escritura en el quehacer judicial: la propuesta aplicada en la Escuela Judicial de España”, *Revista Signos: estudios de lingüística*, 66, 33-64.
- MONTOLÍO, E. Y LÓPEZ SAMANIEGO, A. (2010): “Especificidades discursivas de los textos profesionales frente a los textos académicos: el caso de la recomendación profesional”, en Parodi, G. (ed.), *Alfabetización académica y profesional en el Siglo XXI: Leer y escribir desde las disciplinas*, Madrid: Planeta.
- OLVERA LÓPEZ, J. J. (2004): “El lenguaje de las sentencias y el derecho a la información”. *Admonjus. Revista del Poder Judicial del Estado de Baja California*, 23, Vol. VIII, Año 8, Cuarta Época. [en línea] Disponible en: <http://www.poder-judicial-bc.gob.mx/admonjus/default.asp?ed=23> [Consulta 15/10/2010]
- ORTEGA ARJONILLA, E., M^a C. DOBLAS y S. PANEQUE (1997): “Peculiaridades del lenguaje jurídico desde una perspectiva lingüística” en P. SAN GINÉS y E. ORTEGA (eds.) *Introducción a la traducción jurídica y jurada (inglés-español)*, Granada: Comares, 25-40.
- PARDO, M. L. (1996): *Derecho y lingüística. Cómo se juzga con palabras*, Buenos Aires: Nueva Visión.
- PASCUAU LIAÑO, M. (1997): “Las peculiaridades del lenguaje jurídico desde la perspectiva del jurista” en P. SAN GINÉS y E. ORTEGA (eds.) *Introducción a la traducción jurídica y jurada (inglés-español)*, Granada: Comares, 9-24.
- PECES MORATE, J. E. (1994): “La sentencia. Técnica de redacción”. *Revista del Poder Judicial* nº 36, 153-202.
- PERELMAN, CH. Y OBRECHTS-TYTECA, L. (1958): *Tratado de argumentación. La nueva retórica*, Gredos, Madrid, 1989.
- PERELMAN, CH. (1976): *La lógica jurídica y la Nueva Retórica*, Madrid: Civitas, 1979.
- POBLETE OLMEDO, C. (2006): “Plain Language in the Senate of Chile”, *Clarity*, 55, 22-23.
- PORTOLÉS, J. (1998): *Marcadores del discurso*, Barcelona, Ariel.

- PRIETO DE PEDRO, J. (1960): "La exigencia de un buen lenguaje jurídico y estado de derecho" en *Revista de Administración Pública*, 140, pp. 111-129.
- PRIETO DE PEDRO, J. (1991): *Lenguas, lenguaje y Derecho*, Madrid: Civitas.
- PRIETO, J. Y ABRIL, G. (1987): "Reflexiones y propuestas para la modernización del lenguaje jurídico administrativo castellano", *Revista de Lengua i Dret*, 10, 7-32.
- PROVENCIO GARRIGÓS, H. (2004): "Características discursivas de las manifestaciones textuales del lenguaje legal" en VILLAYANDRE, M. (ed.) *Actas del V Congreso de Lingüística General* (León 5-8/3/2002), Madrid: Arco/Libros, 2281-2296.
- REIG, A. (2001): "El marcador del discurso «en todo caso» en los textos legislativos", *Revista de Lengua i Dret* 36: 9-22.
- RICÓS VIDAL, A. (1998): "La pasiva con *se* agentiva en los textos jurídico-administrativos: su incidencia pragmática" en *Hesperia. Anuario de Filología Hispánica*, I, vol. 5, 125-141.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1999): *Ortografía de la lengua española*. Madrid: Espasa.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): *Diccionario de la lengua española*, Madrid: Espasa.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA - ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2005): *Diccionario panhispánico de dudas*. Madrid: Santillana.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA - ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2009): *Nueva gramática de la lengua española*. Madrid: Espasa.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2010): *Ortografía de la lengua española*. Madrid: Espasa.
- RIESSMAN, C.K. (1993): *Narrative analysis*, California: Sage Publications.
- RODRÍGUEZ-AGUILERA, C. (1969): *El lenguaje jurídico*, Barcelona: Bosch.
- RODRÍGUEZ-AGUILERA, C. (1974): *La sentencia*, Barcelona: Bosch.
- SALMI-TOLONEN, T. (2005): «Persuasion in judicial argumentation: the opinions of the Advocates General at the European Court of Justice», en HALMARI, H.; VIRTANEN, T. (eds.): *Persuasion across genres. A linguistic approach*. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 59-102.
- SAMANIEGO FERNÁNDEZ, E. (2005): "El lenguaje jurídico: peculiaridades del español jurídico" en FUERTES OLIVERA, P. A. [coord.] *Lengua y sociedad: investigaciones recientes en Lingüística Aplicada*. Valladolid: Universidad de Valladolid, 273-310.
- SANTIAGO, M. (2000): "El uso del gerundio", en MONTOLÍO, E. (coord.): *Manual práctico de escritura académica*, Barcelona, Ariel, vol. I, pp. 90-98.
- SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (2005). *Doctrina y lineamientos para la redacción de textos jurídicos, su publicación y divulgación*. México: Secretaría de Gobernación.
- SOLAN, L. M. (1993): *The language of judges*, Chicago: The University of Chicago Press.
- TARANILLA, R. (2006): "Consideraciones sobre la polifonía en el escrito de declaración del atestado policial". En *Actas del V Congreso Internacional AELFE*, pp. 70-76. [CD-ROM] Windows 95/98/2000/ Millenium/NP/XP. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, c. 2006. ISBN 84-7733-846-9.
- TARANILLA, R. (2007): "«Con cuentos a la policía»: las secuencias narrativas en el acta de declaración policial", *Revista de Lengua i Dret*, 47, 79-111.
- TARANILLA, R. (2009): "La gestión de la propia imagen en las argumentaciones del Tribunal Constitucional: la función retórica de las estrategias de cortesía", *Revista de Lengua i Dret*, 52, 117-149.
- TARANILLA, R. (en prensa): "Análisis lingüístico de la transcripción del relato de los hechos en el interrogatorio policial", *Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante*, 24.
- TARANILLA, R. (en prensa): "Forma y función de los enunciados jurídicos de recomendación: las Recomendaciones de la Comisión Europea" en L. Chierichetti y G. Garofalo (eds.) *Lengua y Derecho: Perspectivas Interculturales*. Berna: Peter Lang.
- TIERSMA, P. (1999): *Legal Language*, Chicago-London: The University of Chicago Press.
- TOMÁS RÍOS, J. (2005): "Las sentencias judiciales: estudio y análisis sociolingüístico", *Tonos. Revista Electrónica de Estudios Filológicos*, núm. IX. Disponible en línea: <http://www.um.es/tonosdigital/znum9/corpora/juridicos.htm> [Consulta 10/10/2010]
- TOULMIN, S. E. (1958): *The Uses of Argument*, Cambridge University Press: Cambridge.
- VV.AA. (2000): *Ley de Enjuiciamiento Civil. En Boletín Oficial del Estado (BOE)*, nº 7, pp. 575-728.

WAGNER, A. y CACCIAGUIDI-FAHY (eds.) (2006): *Legal language and the search for clarity*,
Berna: Peter Lang.

ESTUDIO DE CAMPO:
LENGUAJE ORAL

COMISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO

Dirigido por Antonio Briz Gómez, (Universidad de Valencia).

Salvador Pons Bordería, Antonio Hidalgo Navarro, Julia Sanmartín Sáez, Virginia González García, María Estellés Arguedas, Adrián Cabedo Nebot, María del Pilar Folch Asins, Marta Pilar Montañez Mesas, Paola Quintanilla Vázquez, Elena López-Navarro Vidal, Melania Sánchez Masiá, María Ruiz Santabalbina y Cristina Villalba Ibáñez.

ÍNDICE

1. OBJETIVO	4
2. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS.....	5
1. Obtención de datos	5
2. Contenido del corpus	6
3. Fichas de análisis.....	7
3. ANÁLISIS Y RESULTADOS.....	11
1. Nivel fónico.....	11
1.1. Introducción	11
1.2. Errores generales de articulación fónica	11
1.3. Errores segmentales (articulación de sonidos).....	13
1.4. Errores suprasegmentales (intensidad, entonación, velocidad de habla).....	15
2. Nivel léxico-semántico. propuestas específicas	22
2.1. Cultismos y nivel sociocultural	24
2.2. Tecnicismos y competencia léxica (I)	24
2.3. Tecnicismos y competencia léxica (II).....	27
2.4. Tecnicismos y competencia léxica (III).....	28
2.5. Tecnicismos y competencia léxica (IV)	29
2.6. Neologismos desconocidos.....	30
2.7. Paráfrasis léxicas excesivamente complejas	31
2.8. Construcciones preposicionales complejas	33
2.9. Arcaísmos	33
3. Nivel morfosintáctico	34
3.1. Introducción. Consideraciones previas	34
3.2. Tipología de los errores	34
3.2.1. Errores de normativa	34
3.2.2. Errores estilísticos	41
4. NIVEL PRAGMÁTICO-SITUACIONAL	57
1. Introducción. Cuestiones previas	57
2. Tipología de las observaciones.....	57
2.1. Errores por inadecuación al registro o nivel de habla	57
2.2. Errores por falta de cortesía lingüística	60
2.3. Errores por falta de comprensión de otras variantes del español	63
2.4. Problemas de intercomprensión producidos por otras razones	63
2.5. Otros aspectos de la interacción	64
5. AGRADECIMIENTOS	66

OBJETIVO

El informe que sigue se enmarca en el Plan de transparencia judicial emprendido por el Ministerio de Justicia español, entre cuyos objetivos se encuentra acercar al ciudadano el lenguaje de los profesionales de la justicia. En las páginas siguientes, se recoge el análisis del lenguaje *oral* de los profesionales de la justicia, un análisis realizado en los términos que se explicitan más abajo (ver §2). Los resultados del presente estudio, así como las recomendaciones sugeridas por los investigadores a la luz de los datos, se conciben como vías para contribuir a esa transparencia judicial perseguida.

Así, se ha planteado como objetivo proporcionar una radiografía lo más precisa posible del discurso hablado de los juristas y de las dificultades que puede plantear al ciudadano medio.

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS

1. OBTENCIÓN DE DATOS

Durante los meses de junio, julio y septiembre, un amplio grupo de más de diez investigadores acudieron debidamente acreditados a los juzgados de Valencia, Madrid y Ciudad Real con la finalidad de presenciar y analizar en directo diferentes actos judiciales. Catorce personas, así pues, han sido las encargadas de recopilar el material de diversa índole que conforma este corpus.

La metodología utilizada para esta investigación ha sido la que se expone:

- En el sector público, se acudió a las vistas y comparencias, se anotó el número de procedimiento y se tomaron notas de campo. En los servicios de atención del cliente y en el sector privado, se tomó una muestra del audio. Para ello, previamente se requirió el permiso correspondiente de los participantes. En las interacciones entre profesionales y usuarios se ha firmado sistemáticamente un papel de confidencialidad.
- Posteriormente, los mismos investigadores solicitaron al secretario judicial de su sala una copia en vídeo de los actos judiciales a los que habían asistido. Transcurrido algún tiempo y realizadas las copias, se volvió a los juzgados para retirarlas. En la mayoría de los casos, se les solicitó que firmaran una declaración en la que se comprometían a mantener la confidencialidad de los datos.
- Todo el material (unas 40 horas de vídeos y archivos de audio) se repartió entre el equipo de investigación de manera proporcional, y se pretendió que cada investigador fuera responsable de analizar el juicio al que había asistido.
- Cada investigador ha cumplimentado en su análisis dos tipos de fichas: una técnica y una de entradas particulares. Los campos de esos formularios se han incluido en una base de datos a la que se ha accedido mediante una plataforma *online* (creada en un entorno informático *PHP/MySQL* por la empresa Tecnolingüística). El acceso a los formularios y la consulta de los datos se han restringido con una contraseña privada.

-Se han mantenido reuniones semanales en tres fases distintas de la investigación: al principio, para determinar los campos relevantes que debían incluirse en las fichas; seguidamente, para unificar los criterios de inclusión de datos en cada ficha y homogeneizar los análisis; finalmente, para poner en común los resultados de los informes particulares, como se explica en (6).

-Por último, el elevado número de registros introducido en la base de datos (1100 fichas) ha permitido realizar un análisis pormenorizado de los diferentes niveles lingüísticos (fónico, morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-situacional).

2. CONTENIDO DEL CORPUS

El material recogido en este corpus procede de tres espacios geográficos diferenciados: Valencia, como base, y Madrid y Ciudad Real, que se han tomado como grupos de control, dado el retraso en la obtención de las grabaciones. En tal sentido, el material audiovisual (vídeos y grabaciones sonoras) procedente de Valencia es el más amplio, como puede observarse en el siguiente gráfico:

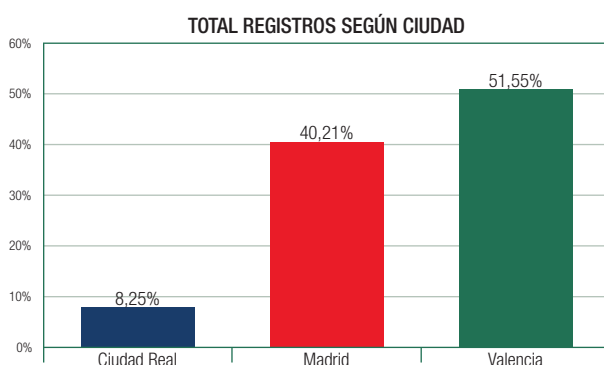


Gráfico 1

Por su parte, los documentos que forman este corpus se han logrado a partir de varias fuentes:

-Sector privado: bufetes de abogados.

-Sector público: Han sido varios los órganos jurisdiccionales incluidos en la fase de recogida de material y que pertenecen a las instituciones oficiales del Estado:

Valencia	Atención al ciudadano	<ol style="list-style-type: none"> Servicio de orientación jurídica (SOJ). Servicio de información al ciudadano. (Se descartó por mala calidad del audio). Centro de internamiento de inmigrantes. (Dados los problemas derivados de su vinculación al Ministerio de Interior, los responsables del proyecto en el Ministerio de Justicia decidieron desestimar esta actuación). Oficina de atención a las víctimas del delito. (Sin grabación).
	Penal	<ol style="list-style-type: none"> Juzgado de menores. Juzgado de lo penal. Audiencia provincial (incluye apelación y juicio con jurado). Juzgado de instrucción (incluye faltas y rápidos).
	Civil	<ol style="list-style-type: none"> Juzgado de primera instancia.
	Social	<ol style="list-style-type: none"> Juzgados de lo social. (La conciliación previa se celebra dentro de la sala del juicio, pero no se graba).

Madrid	Penal	1. Audiencia Nacional. 2. Juzgados de violencia sobre la mujer.
	Civil	1. Juzgados de primera instancia especializado en verbal de incapacidad.
	Contencioso-administrativo	1. Juzgado de lo contencioso administrativo.
	Atención al ciudadano	1. Oficina de atención a las víctimas. (No recogido en Madrid).
Ciudad Real	Civil	1. Juzgado de primera instancia. 2. Sección de la Audiencia Provincial.

El porcentaje analizado en cada caso se observa en el gráfico aportado a continuación:

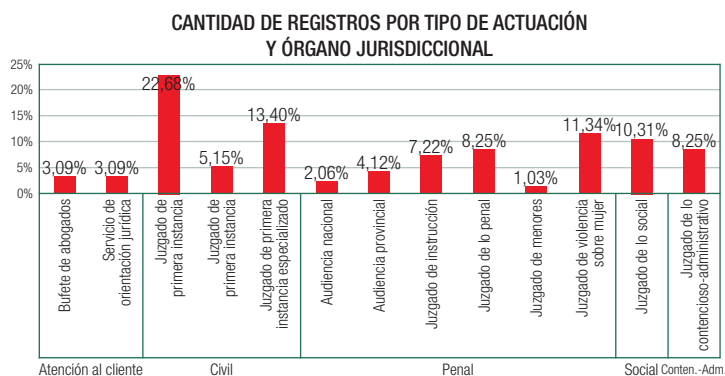


Gráfico 2

Los gráficos anteriores permiten articular una idea de la proporcionalidad existente entre el tipo de acto estudiado (vista, comparecencia, etc.) y órganos jurisdiccionales. Los porcentajes se corresponden con una cantidad mínima de dos actuaciones por cada uno de los órganos judiciales y órdenes jurisdiccionales así como de otras unidades y servicios.

En ese sentido, el gráfico que aparece más adelante (Gráfico 3) aglutina el material recogido según el órgano jurisdiccional:

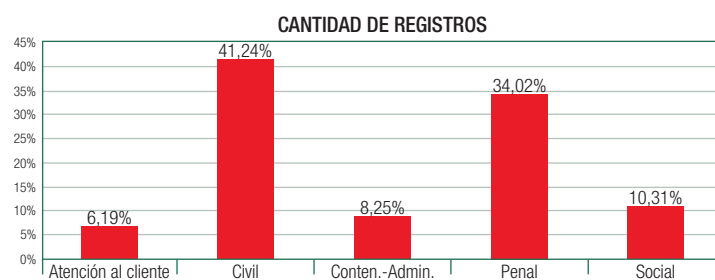


Gráfico 3

3. FICHAS DE ANÁLISIS

Como se ha avanzado antes, las fichas que se han utilizado para analizar el corpus han sido dos: una, para introducir los datos generales del acto (a modo de *ficha técnica*); otro, para incorporar los fenómenos lingüísticos (generales o particulares) que se han detectado en el análisis de los datos. El investigador, por su parte, ha tenido la posibilidad de cumplimentar este último formulario tantas veces como fenómenos ha podido registrar en el acto o evento analizado.

Así pues, el primer formulario (Figura 1), que contiene los datos más generales, recoge la siguiente información:

Ficha técnica

- Sala.
- Órgano jurisdiccional. Puede ser penal, civil, social o contencioso-administrativo.
- Persona de contacto. Normalmente, el secretario o el agente judicial.
- Tipo de acto. Vista previa, juicio penal, comparecencias, atención al cliente...
- Número de procedimiento.
- Ciudad: Valencia, Madrid o Ciudad Real.
- Fecha del acto.
- Participantes en el evento:
 - i. Juez.
 - ii. Fiscal.
 - iii. Abogado defensa.
 - iv. Acusado/s.
 - v. Testigo/s.
 - vi. Jurado.
 - vii. Público.
 - viii. Perito.
 - ix. Agente judicial.
 - x. Secretario Judicial.
 - xi. Abogado acusador.
 - xii. Intérprete jurado.
 - xiii. Parte demandante.
 - xiv. Parte demandada.
 - xv. Procurador.
 - xvi. Oficial letrado.
 - xvii. Parte recurrente.
 - xviii. Parte recurrida.
- Observaciones sobre los participantes.
- Estructura del acto:
 - i. Fase de apertura.
 - ii. Fase de alegaciones previas.
 - iii. Fase de pruebas documental.
 - iv. Fase de pruebas pericial.
 - v. Fase de pruebas testifical.
 - vi. Conclusiones.
 - vii. Visto para sentencia.
 - viii. Otro.
- Observaciones de la estructura.
- Incidencias.
- Comentarios generales sobre la argumentación de los profesionales.
- Factores pragmalingüísticos que pueden resultar de interés (adecuación, relación entre participantes...).
- Incorrecciones generales/particulares.
- Investigador que realiza la ficha.

El segundo formulario (Figura 2), el que se ha utilizado para introducir todos los fenómenos característicos del lenguaje jurídico tiene los siguientes campos:

- Número de procedimiento.
- Elemento o fenómeno lingüístico.
- Justificación. En este campo se explica por qué se ha elegido el fenómeno anterior.
- Contexto. Transcripción más amplia del fragmento en el que se inserta el elemento problemático.
- Minutos y segundo de ocurrencia.
- Nivel lingüístico:
 - i. Nivel fónico.
 - ii. Nivel léxicosemántico.
 - iii. Nivel morfosintáctico.
 - iv. Nivel pragmático situacional.
- Emitido por:
 - v. Juez.
 - vi. Ministerio Público.
 - vii. Abogado de la defensa.
 - viii. Abogado de la acusación.
 - ix. Agente judicial.
 - x. Secretario judicial.
 - xi. Intérprete jurado.

- xii. Parte demandante.
 - xiii. Parte demandada.
 - xiv. Abogado del bufete.
 - xv. Procurador.
 - xvi. Oficial letrado.
 - xvii. Otro.
- Dirigido a:
- xviii. Juez.
 - xix. Ministerio Público.
 - xx. Abogado de la defensa.
 - xxi. Abogado de la acusación.
 - xxii. Agente judicial.
 - xxiii. Secretario judicial.
 - xxiv. Intérprete jurado.
 - xxv. Parte demandante.
 - xxvi. Parte demandada.
 - xxvii. Público.
 - xxviii. Cliente del bufete.
 - xxix. Procurador.
 - xxx. Oficial letrado.
 - xxxi. Inespecífico.
 - xxxii. Otro.
- Alternativa sugerida por el investigador.
- Autocorrección realizada por el emisor o a solicitud del receptor. Puede darse el caso de que el emisor, al ver que no ha sido entendido, rectifique su propia emisión.
- Parte de la estructura del juicio:
- xxxiii. Fase de apertura.
 - xxxiv. Fase de alegaciones previas.
 - xxxv. Fase de pruebas documental.
 - xxxvi. Fase de pruebas pericial.
 - xxxvii. Fase de pruebas testifical.
 - xxxviii. Conclusiones.
 - xxxix. Visto para sentencia.
 - xl. Otro.
- Otra parte de la estructura del juicio.
- Autor de la entrada.

The image shows a screenshot of a web application interface. The main window is titled 'Proyecto del Ministerio de Justicia'. On the left, there is a sidebar with a 'Proyecto del Ministerio de Justicia' section containing several input fields. The main content area displays a 'ficha técnica' (technical card) with the following fields and options:

- Sala:** Input field.
- Órgano:** Input field.
- Persona de contacto:** Input field.
- Tipo de acto:** Input field.
- Número de procedimiento:** Input field.
- Ciudad:** Dropdown menu.
- Fecha:** Date picker (DD / MM / YYYY).
- Participantes en el evento:** A list of checkboxes for roles:
 - Juez
 - Fiscal
 - Abogado defensa
 - Acusado/s
 - Testigo/s
 - Jurado
 - Público
 - Perito
 - Agente judicial
 - Secretario Judicial
 - Abogado acusador
 - Intérprete jurado
 - Parte demandante
 - Parte demandada

Below the technical card, there are several empty text input fields and a 'Continuar' button at the bottom left.

Figura 1. Captura de pantalla de la ficha técnica

Entradas lingüísticas por ficha
En este formulario se introducen los datos lingüísticos encontrados en la fase de análisis.
MUY IMPORTANTE: cada entrada debe tener el MISMO número de procedimiento de la ficha correspondiente.

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO *

Elemento o fenómeno lingüístico *

Justificación *

Contexto

Aquí podemos poner una transcripción un poco más amplia o simplemente comentar las circunstancias de la emisión de este elemento.

Minutos y segundo de ocurrencia *

Nivel lingüístico

Nivel lingüístico al que corresponde el fenómeno lingüístico que queremos introducir.

Partes de la estructura del juicio

- Parte de apertura
- Parte de alegaciones previas
- Parte de prueba documental
- Parte de prueba pericial
- Parte de prueba testifical
- Deprecaciones
- Parte para confesión
- Otro (indicare tipo)

Dirección de la administración del juicio

Autor de la entrada *

Figura 2. Captura de pantalla de una ficha de entrada

ANÁLISIS Y RESULTADOS

1. NIVEL FÓNICO

1.1. Introducción

En general, el análisis del lenguaje judicial en el ámbito fónico ha dado a conocer diversos problemas e inadecuaciones. Estas incorrecciones fónicas atentan principalmente contra dos de los principios comunicativos más importantes, la claridad (en la práctica totalidad de los casos que hemos registrado como erróneos) y la cortesía (cuando alguno de los profesionales implicados en el proceso llega a resultar, o al menos lo parece, descortés con alguno de los implicados no profesionales, sean acusados, testigos, peritos, etc.).

Con objeto de organizar de manera coherente el material recopilado y comentado, la siguiente exposición se dividirá en cuatro apartados:

- Fenómenos generales de articulación fónica.
- Fenómenos segmentales (articulación de sonidos).
- Fenómenos suprasegmentales (intensidad, entonación, velocidad de habla).
- Fenómenos paralingüísticos.

1.2. Errores generales de articulación fónica

Hay que evitar una mala articulación vocal, esto es, debe procurarse una vocalización clara e inteligible, haciendo un esfuerzo por marcar bien los diferentes sonidos de las palabras. Una articulación o vocalización deficientes denotan escasa destreza oral y, en consecuencia, hay serio peligro de que no se entienda adecuadamente lo que se quiere manifestar. Se rompe así de forma evidente el *principio de claridad*.

Por otro lado, una vocalización defectuosa podría denotar, incluso, desinterés por parte del profesional hacia lo que está leyendo o diciendo y, por lo tanto, desconsideración hacia los oyentes, lo que constituiría una clara ruptura del *principio de cortesía*.

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Mala articulación. Ej.: ((con la venia señoría), con la venia señoría.
Justificación	El abogado no articula bien, lo que obliga a emitir de nuevo el mismo segmento lingüístico.
Contexto	((Con la venia señoría), con la venia señoría.
Alternativa sugerida	Articulación más clara.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 1

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Mala articulación. Ej.: ((en algún momento que se cometió con el vehículo)).
Justificación	No se entiende lo que dice el abogado defensor, dada su articulación poco clara, lo que lleva al testigo a solicitar que repita la pregunta.
Contexto	Abogado: ((en algún momento que se cometió con el vehículo)) se puso delante. Testigo: <i>Disculpe ¿me puede repetir la pregunta?</i>
Alternativa sugerida	Emisión lingüística y articulación más clara.
Autocorrección realizada	En algún momento cuando ustedes se pusieron delante, les acometió con el vehículo. La articulación sigue siendo poco nítida a pesar de la repetición.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 2

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Mala pronunciación. ((¿El vehículo no iría a mucha velocidad cuando ustedes se pusieron delante??)).
Justificación	La pronunciación del abogado es poco precisa; el modo de formular las preguntas hace que el testigo no entienda lo que se le dice en diversas ocasiones del juicio.
Contexto	Abogado: ((¿el vehículo no iría a mucha velocidad cuando ustedes se pusieron delante??)) (...). Testigo: <i>no sé, no sé lo que me quiere decir con eso. ¿Qué quiere que le diga? ¿la velocidad a la que iba el vehículo?</i> Abogado: <i>no, hombre, no, repito (...).</i> Juez: <i>podría haber preguntas claras.</i>
Alternativa sugerida	Articulación más clara en el modo de pronunciar y empleo de estructuras lingüísticas interrogativas más directas.
Autocorrección realizada	<i>No, hombre, no, repito, no se preocupe.</i>
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 3

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	((Entendemos señoría que el principio de xxxx)).
Justificación	No se entiende lo que dice el abogado defensor.
Contexto	((Entendemos señoría que el principio de xxxx)).
Alternativa sugerida	Dicción más clara.

Ejemplo 4

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Escasa vocalización.
Justificación	La letrada apenas vocaliza, dificultando la comprensión de su mensaje incluso a la jueza, quien le dice “no le oigo” (15:05). A partir de este momento intenta articular mejor (no siempre con éxito).
Contexto	<i>La letrada comenta sus alegaciones previas en las que se opone a la declaración de incapacidad que demanda el otro abogado.</i>
Alternativa sugerida	Dicción clara.
Fase del juicio	Fase de alegaciones previas.

Ejemplo 5

RESUMEN: ERRORES GENERALES DE ARTICULACIÓN FÓNICA	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
((Con la venia señoría), con la venia señoría.	Articulación más clara.
((En algún momento que se cometió con el vehículo).	Emisión lingüística y articulación más clara.
((¿El vehículo no iría a mucha velocidad cuando ustedes se pusieron delante??).	Articulación más clara en el modo de pronunciar y estructuras lingüísticas interrogativas más directas.
((Entendemos señoría que el principio de xxxx).	Dicción más clara.
Escasa vocalización.	Dicción clara.

1.3. Errores segmentales (articulación de sonidos)

Con respecto a la articulación de los sonidos, se ha comprobado la presencia de cuatro clases de fenómenos de incorrección oral: relajación articulatoria (excesiva, según los casos), alargamientos vocálicos (de vacilación), repeticiones de sonidos o palabras y otros fenómenos de fonética sintáctica (por ejemplo, *to'l mundo* por *todo el mundo*).

La relajación articulatoria representa un comportamiento fonético impropio de una situación formal, como la de los juicios. Es habitual esta actitud con los participios en *-ado*, e incluso con otras palabras acabadas en *-ado* que no son participios:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Lao.
Justificación	En una situación tan formal no parece indicado (máxime después de las marcas vocales enfáticas que previamente introduce el hablante) omitir una (d) según el estilo comunicativo del acusado.
Contexto	<i>La separación significa que cada uno va por su lao.</i>
Alternativa sugerida	<i>La separación significa que cada uno va por su lado.</i>

Ejemplo 6

Este exceso de relajación fonética puede dar cierta impresión de vulgaridad expresiva en los profesionales.

Por otro lado, si bien es permisible la relajación articulatoria de los participios acabados en *-ado* como [á⁰o], no lo es en absoluto, en un registro formal, la articulación [áw] que se registra en algunas intervenciones, todas ellas en Madrid:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Prestau.
Justificación	El juez elide la -d- intervocálica en los participios y articula una u final.
Contexto	Juez: <i>porque usted que le pague a él el dinero que él le ha prestau, no quiere decir q tenga q dejar de pagar usted el arrendamiento.</i>
Alternativa sugerida	Evitar los relajamientos excesivos y vocalizar adecuadamente.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 7

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Amenazau/insultau.
Justificación	El juez elide la -d- intervocálica en los participios y articula una u final.
Contexto	Juez: <i>¿...algún otro episodio, que haya tenido usted, de... que le ha intentado herir, le ha amenazau, le ha insultau?</i>
Alternativa sugerida	Evitar los relajamientos excesivos y vocalizar adecuadamente.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 8

Los **alargamientos vocálicos** son a menudo señales inequívocas de **vacilación en el habla**, denotan falta de preparación del discurso y pueden llegar a confundir a la persona (acusado, testigo, perito, etc.) a la que se dirija el profesional. También puede ocurrir que tales vacilaciones obedezcan a la inseguridad de este:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Eee.
Justificación	Vacilación, alargamiento, provocado, aparentemente, por la falta de atención del propio juez en la lectura.
Contexto	El letrado de XXXeee perdón el letrado de YYY.
Alternativa sugerida	El letrado de YYY.
Autocorrección realizada	<i>El letrado de XXX eee perdón el letrado de YYY.</i>

Ejemplo 9

En cuanto a las **repeticiones de sonidos** (o de palabras, como a veces ocurre), son señales de vacilación expresiva por parte del profesional y sus consecuencias son análogas a las de los alargamientos vocálicos:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Respecto a, respecto a lo que, a lo que.
Justificación	Vacilaciones y repeticiones en la enunciación.
Contexto	<i>Nos adherimos a la petición de suspensión, al menos respecto a, respecto a lo que, a lo que se refiere a la testigo.</i>
Alternativa sugerida	Evitar repeticiones y vacilaciones.
Fase del juicio	Fase de apertura.

Ejemplo 10

La tendencia a una excesiva relajación articuladora puede llegar a conducir a efectos fonéticos extremos, particularmente visibles en el ámbito de la fonética sintáctica; así, pueden producirse **articulaciones coloquiales o vulgares**, con omisión extrema de sílabas, impropio de un discurso formal como el judicial (*tiró p'adelante*):

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Tiró p'alante.
Justificación	Emisión fónica poco apropiada contextualmente.
Contexto	<i>El policía local se colocó delante de su vehículo y usted tiró p'alante, que se tuvo que apartar el policía.</i>
Alternativa sugerida	Continuó hacia adelante.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 11

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Na más.
Justificación	Emisión fónica poco apropiada contextualmente.
Contexto	<i>Ya, pero es que no he aportado na más que la fotocopia.</i>
Alternativa sugerida	Nada más.
Fase del juicio	Alegaciones previas.

Ejemplo 12

RESUMEN: ERRORES SEGMENTALES	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
La separación significa que cada uno va por su <i>lao</i> .	Evitar la relajación articulatoria de las consonantes: la separación significa que cada uno va por su lado .
<i>Prestau.</i>	Presta(d)o.
Vacilaciones y repeticiones: -El letrado de XX ee de YYYY. -Respecto a, respecto a lo que, a lo que.	Aunque son normales en el discurso oral, se debe evitar que aparezcan con demasiada frecuencia, puesto que dan imagen de descuido, poco interés o poca preparación.
Fenómenos de articulación vulgar por fonética sintáctica: -Tiró p'alante -Na más	Son impropios de un discurso formal como el judicial: -Continuó hacia adelante. -Nada más.

1.4. Errores suprasegmentales (intensidad, entonación, velocidad de habla)

Por la variedad de efectos considerados en este ámbito, vamos a organizar este apartado en cuatro aspectos fundamentales: fenómenos relativos al funcionamiento de la *pausa*, fenómenos de *duración* y *velocidad elocutiva*, fenómenos de *intensidad* y fenómenos de *entonación*.

Con respecto al **empleo de la pausa, un uso excesivo o desordenado** de esta denota falta de preparación, siendo, pues, un índice muy claro de vacilación en la dicción. Pueden crearse en ocasiones situaciones embarazosas por la presencia desordenada de estos lapsos, que además dificultan el seguimiento del discurso de quien los articula:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Lapso de tiempo de 4".
Justificación	El abogado hace una pausa de 4", tras un inciso y antes de completar la oración. Una pausa tan larga en ese momento puede dificultar la comprensión.
Contexto	<i>(...) aporto en este acto documental, que entiendo que ((ha sido)) el momento procesal oportuno de aportarla, señoría, (4") correspondiente a nueve documentos.</i> (La pausa se debe a que el abogado está buscando algo entre sus papeles).
Alternativa sugerida	Evitar parar el discurso. En este caso, quizá, eso pasaría por el hecho de buscar los papeles que se van a necesitar (más adelante, en el 1:12, el mismo abogado vuelve a provocar que se pare el discurso, al no encontrar lo que busca).
Fase del juicio	Fase de alegaciones previas.

Ejemplo 13

Por lo que respecta a la duración, que podemos identificar en términos de velocidad de habla en el discurso continuo, se observan diversos fenómenos evitables:

Excesiva rapidez de habla, que dificulta enormemente el seguimiento del discurso por parte del lego. Este tipo de comportamiento se produce especialmente en varias situaciones:

- a) Al principio del juicio: al proceder a leer el texto inicial, el juez, en ocasiones, desarrolla un discurso excesivamente rápido; esto puede dificultar manifiestamente la comprensión. La solución sería realizar una lectura cuidadosa, no necesariamente lenta, pero con modulaciones vocales que permitan seguir con claridad lo expuesto en el texto, a fin de que los implicados entiendan bien qué es lo que figura en el expediente:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Discurso excesivamente rápido.
Justificación	La lectura debería ser precisa, clara, con marcas vocales que indiquen los cambios de tema, los cambios de estilo (en el paso del estilo indirecto al directo, por ejemplo).
Contexto	<i>(...) aporto en este acto documental, que entiendo que ((ha sido)) el momento procesal oportuno de aportarla, señoría, (4") correspondiente a nueve documentos.</i> (La pausa se debe a que el abogado está buscando algo entre sus papeles).
Alternativa sugerida	Lectura cuidadosa.

Ejemplo 14

- b) En la lectura o empleo de fórmulas ritualizadas (como, por ejemplo, cuando el juez recuerda a los testigos que pueden incurrir en perjurio):

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Velocidad de habla muy rápida.
Justificación	Se trata de una estructura formulaica que el juez repite cada vez que entra un testigo a una velocidad de habla tan rápida que dificulta que se comprenda el contenido, esto es, una advertencia legal.
Contexto	<i>El falso testimonio es causa penal, está castigado con pena privativa de libertad</i> (pronunciado con una alta velocidad).
Alternativa sugerida	Velocidad de habla adecuada, para que el mensaje sea comprensible.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 15

- c) Cuando, por ejemplo, los abogados leen las conclusiones, lo que suele denotar escasa deferencia hacia el público (el abogado o fiscal no se preocupan de que el lego entienda lo que están leyendo o exponiendo, ya que sabe que el juez dispone de ese texto, por lo que puede decirse que en este caso estarían siendo descorteses):

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Por todo, ello interesamos se dicte una sentencia condenatoria contra él.
Justificación	El ritmo de lectura o enunciación del ministerio fiscal es tan rápido que resulta difícil seguir el discurso.
Contexto	Por todo, ello interesamos se dicte una sentencia condenatoria contra él.
Alternativa sugerida	Ritmo de lectura o enunciación más pausado.

Ejemplo 16

En realidad, la rapidez de habla va acompañada de la ausencia de pausas y de inflexiones melódicas, con lo que se pierde una parte muy importante del componente expresivo y semántico de lo dicho o leído.

Frente a la excesiva rapidez de habla, ocasionalmente puede producirse la ralentización extrema del discurso. Es más, tal lentitud elocutiva asociada a algunas pausas improcedentes puede conducir a la exasperación de algunos de los interlocutores:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Por favor, no se reitere.
Justificación	El tono del enunciado refleja que la jueza se está empezando a enfadar.
Contexto	[El ritmo del interrogatorio a la acusada es muy lento]. Abogada (a la acusada): La obra ¿cuándo se ejecuta, me dice usted? ¿En el año 97? [Ya se lo había preguntado al principio del interrogatorio]. Jueza (a la abogada): Por favor, no se reitere. Gracias. Otra pregunta.
Alternativa sugerida	Moderar el tono y no ser reiterativo en las preguntas.
Fase del juicio	Otro.

Ejemplo 17

Por lo que respecta a la **intensidad** y a los problemas que su mala práctica puede acarrear en las actuaciones jurídicas, podemos considerar en primer término el uso de una elevación injustificada de esta; así, por ejemplo, que el juez indique a un testigo, con una intensidad de voz demasiado elevada, que se aproxime al micrófono para poder ser escuchado mejor podría crear en dicho testigo la sensación de actitud negativa hacia él o ella, e incluso llegar a interpretarse como una forma descortés de trato:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Acérquese al micrófono, acérquese al micrófono.
Justificación	Sin mediar falta de respeto, actitud hostil, etc. por parte del acusado, el juez se dirige a él con un volumen de voz altamente desproporcionado, para indicarle que se acerque al micrófono, como si este se negara a ello, cuando en realidad ignoraba que debía hacerlo. Se pierde la coherencia vocal con respecto a su actuación anterior.
Alternativa sugerida	Por favor, acérquese al micrófono para que se le pueda escuchar bien.

Ejemplo 18

Todavía más clara es la sensación de descortesía cuando esta elevación desmesurada tiene lugar en el marco de un interrogatorio y el fiscal, por ejemplo, después de varias emisiones

en intensidad muy alta, cesa bruscamente su intervención y se dirige al juez diciendo “no hay más preguntas”:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Entonación inadecuada.
Justificación	El fiscal eleva innecesariamente la voz para dirigirse al testigo, le interrumpe, no le deja apenas explicarse.
Contexto	<i>Ministerio fiscal: entonces usted estaba trabajando dentro, usted no sabe qué hacía este señor en la obra. Testigo 5: ¿el? [refiriéndose al acusado]. MF: CLAROO... T5: hombre, noo, yo solo sé que él []. MF: PUES ESO ES LO QUE LE PREGUNTO, NO, YO LE PREGUNTO ESO, QUE USTED NO LO VEÍA. T5: no, no lo veía []. MF: (deja al testigo con la palabra en la boca y se vuelve hacia el juez) pues no hay más preguntas, señoría.</i>
Alternativa sugerida	Mº fiscal: entonces usted estaba trabajando dentro, por tanto, no podía saber exactamente todo lo que hacía este señor en la obra. Testigo 5: hombre, noo, yo solo sé que él []. Mº fiscal: es decir, usted no lo veía.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 19

A la inversa, una **amplitud de voz baja** tiene también efectos negativos en la comprensión comunicativa de lo dicho. Si la voz de quien habla es imperceptible, se produce sencillamente la incompreensión de quien trata de escuchar, que, o bien no sabe lo que se le está preguntando, o bien, simplemente, no entiende lo que se está diciendo; obviamente, ello afectará muy negativamente a la buena marcha del juicio:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Dice usted que esá separado legalmente de esta señora (voz baja) PAUSA (2") ¿existe alguna sentencia? (elevación de tono).
Justificación	El acusado puede no haber entendido la pregunta (de hecho pregunta ¿sentencia de qué?), porque falta el complemento de nombre adscrito a "sentencia".
Alternativa sugerida	¿Existe alguna sentencia de separación entre Ud. y esta señora?

Ejemplo 20

Hay que evitar, pues, cualquier situación que pueda provocar el descenso inapropiado de la intensidad de voz en el juicio, para lo cual es conveniente no apartarse demasiado del micrófono:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	(Voz muy baja porque el juez se aparta en ese momento del micrófono).
Justificación	Si el testigo no estuviera cerca no habría escuchado en qué calidadva a declarar. El público por supuesto no habría escuchado nada (si hubiera público).
Contexto	<i>Usted viene a declarar en calidad de testigo.</i>
Alternativa sugerida	Elevar la voz y dirigir la mirada con atención al testigo en ese momento, para que sepa en condición de qué está actuando en el juicio.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 21

Los **fenómenos de entonación discordantes** son relativamente frecuentes en el corpus analizado. De entre ellos hemos destacado cuatro situaciones especialmente habituales: el uso de entonaciones engañosas, el uso del tono irónico, la presencia de anacolutos supra-segmentales y el abuso de entonación expresiva.

La **imprecisión en el uso de los patrones melódicos** por parte de algunos profesionales de la justicia, especialmente en el caso de las preguntas, da lugar a lo que podemos llamar *entonaciones “engañosas”*. Así, suele articularse una entonación confusa entre la aseveración y la interrogación, o directamente una entonación aseverativa (que confunde al interpelado), lo que provoca que quien es interrogado no sepa muy bien cómo reaccionar, al no reconocer si se le ha hecho una pregunta o se le ha dirigido una afirmación:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Es cierto que el día 28 de noviembre hubo un juicio en XXX (con entonación no interrogativa, pero con pausa final).
Justificación	La fiscal pronuncia la oración, hace una pausa y mira al acusado. La entonación es enunciativa, no interrogativa, por lo que el acusado duda de si debe responder (confirmar, ratificar) o permanecer callado (como se le ha exigido). La fiscal lo mira como preguntándole, pero el acusado duda de si debe o no responder en ausencia de la entonación adecuada.
Contexto	Fiscal: es cierto que el día 28 de noviembre hubo un juicio en XXX... (PAUSA, MIRADA). Acusado: ¿perdón? Fiscal: EN XXX, hubo un juicio el día 28 de noviembre, un juicio de faltas.
Alternativa sugerida	-¿Es cierto que el día 28 de noviembre hubo un juicio en XXX? -Es cierto que el día 28 de noviembre hubo un juicio en XXX, ¿verdad? Las preguntas y las aseveraciones han de entonarse como tales porque si no, el emisor confunde al interlocutor.
Autocorrección realizada	EN XXX, hubo un juicio el día 28 de noviembre, un juicio de faltas.

Ejemplo 22

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	¿Usted formuló denuncia en fecha 6 de julio?
Justificación	El juez está leyendo, por lo que la curva entonativa de la pregunta no es comprendida por la demandante y hay una pausa. Luego prosigue el juez.
Contexto	El juez pregunta a la demandante “¿Usted formuló denuncia en fecha 6 de julio?”
Alternativa sugerida	Curva entonativa interrogativa.

Ejemplo 23

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Entonación inadecuada de la pregunta.
Justificación	El fiscal emite la pregunta con entonación enunciativa, como si estuviera narrando o describiendo, no interrogativa, y sin ningún elemento que denote al acusado que debe responder, ni por la entonación ni por la presencia de ninguna pregunta confirmatoria al final. El juez se ve obligado a intervenir aportando la verdadera pregunta.
Contexto	FISCAL: Mire, usted, el 30 de julio del año 2009, a la altura de la calle XX con la calle YY había un turismo ¿eh? un BMW... un BMW... un Volkswagen, que se encontraba estacionado. Ese día usted con un objeto punzante le hizo una raya en todo el lateral. (Lo mira. Silencio del acusado). JUEZ: ¿Es cierto? ACUSADO: Noo. FISCAL: VAMOS A VER (Sube el volumen).

Alternativa sugerida	El 30 de julio del año 2009, a la altura de la calle Iglesia con la calle XXX había un turismo Volkswagen, que se encontraba estacionado. Ese día usted con un objeto punzante le hizo una raya en todo el lateral, ¿no es cierto?
Autocorrección realizada	Es el juez quien emite la forma interrogativa que completa el enunciado aseverativo del fiscal.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 24

Como puede comprobarse, estas entonaciones “engañosas” son en su mayor parte interrogaciones aseverativas que pueden llevar, incluso, a cierta manipulación (involuntaria) del interrogatorio: el oyente no ve claro, ante la situación formal, si el fiscal (o abogado, o juez, etc.) está afirmando algo o si le está interrogando. De hecho, no siempre aparecen preguntas finales confirmatorias del tipo “¿verdad?”, “¿no?”, etc.

Por lo que respecta al **uso del tono irónico**, en general, conviene evitar el empleo de la ironía en los juicios, puesto que puede entenderse como una actitud hostil hacia alguno de los implicados en el proceso; ello incluye, por supuesto, la necesidad de evitar también el tono irónico, que podría incluso resultar ofensivo o sarcástico en determinados casos, cuando no motivo de provocación y alteración de la marcha normal del juicio:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Tono irónico.
Justificación	En el interrogatorio el abogado de la defensa pregunta a su cliente con respecto a lo que se había dicho antes, sobre la gente que había en la calle montando carpas cuando el acusado iba conduciendo su coche imprudentemente, es entonces que el abogado con tono irónico, acompañado de movimiento de manos.
Contexto	¿Había alguna carpa (con tono irónico) o se estaba montando alguna carpa fallera?
Alternativa sugerida	Evitar este tipo de muestras de manipulación de la voz.
Fase del juicio	Otro (indícalo abajo).

Ejemplo 25

Debe evitarse igualmente el **recurso a la entonación expresiva (o emotiva)**. Evítense en este sentido las muestras de enojo o enfado (expresadas entonativamente), ya que pueden alterar el buen desarrollo del juicio:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Pues esta mañana.
Justificación	El tono de la jueza refleja cierto nerviosismo, ya que considera innecesaria la matización que le ha hecho la abogada.
Contexto	La jueza acaba de mostrar su enfado (se puede ver la ficha que corresponde a “13:30-13:47”). Su tono de voz manifiesta disconformidad o malestar. Jueza: ¿Se está refiriendo al escrito que presentaron en XXX ayer? Abogada: El escrito se ha presentado en XXX esta mañana [por la]. Jueza: [Pues] esta mañana.
Alternativa sugerida	...

Ejemplo 26

Por lo demás, la falta de concentración en la situación discursiva, o simplemente la falta de preparación oratoria, favorecen que ocasionalmente se produzcan los llamados *anacolutos suprasegmentales* (partes del discurso inconsecuentes), estructuras melódicas que comienzan siendo de un modo y acaban de otro muy diferente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando

alguno de los intervinientes comienza a formular una pregunta y acaba su enunciado aseverativamente:

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Entonación imprecisa de la interrogativa.
Justificación	El fiscal empieza a formular una pregunta pero la entonación no es la adecuada, por lo que vuelve a preguntar.
Contexto	La residencia que tenía XXX cuando iba a XXX...
Autocorrección realizada	¿Sabe usted dónde vivía o...?
Fase del juicio	Fase de alegaciones previas.

Ejemplo 27

RESUMEN: ERRORES SUPRASEGMENTALES	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
(...) <i>aporto en este acto documental, que entiendo que ((ha sido)) el momento procesal oportuno de aportarla, señora, (4") correspondiente a nueve documentos. (Lapso de tiempo de 4").</i>	Evitar parar el discurso.
<i>Al proceder a leer el texto, el juez desarrolla un discurso excesivamente rápido.</i>	Lectura cuidadosa, no necesariamente lenta, pero con modulaciones vocales que permitan seguir con claridad lo expuesto en el texto.
<i>Velocidad de habla muy rápida.</i>	Velocidad de habla adecuada, para que el mensaje sea comprensible.
<i>Por todo, ello interesamos se dicte una sentencia condenatoria contra él</i> (el ritmo de lectura o enunciación del ministerio fiscal es tan rápido que resulta difícil seguir el discurso).	Ritmo de lectura o enunciación más pausado.
<i>[El ritmo del interrogatorio a la acusada es muy lento]. Jueza (a la abogada): Por favor, no se reitera. Gracias. Otra pregunta.</i> El tono del enunciado, casi amenazante, refleja que la jueza se está empezando a enfadar.	Moderar el tono.
<i>ACÉRQUESE AL MICRÓFONO, ACÉRQUESE AL MICRÓFONO.</i>	Por favor, acérquese al micrófono para que se le pueda escuchar bien.
<i>Entonación inadecuada.</i> El fiscal eleva innecesariamente la voz para dirigirse al testigo, le interrumpe, no le deja apenas explicarse. <i>Testigo 5: ¿el? [refiriéndose al acusado].</i> <i>MF: CLARO...</i> <i>T5: hombree, noo, yo solo sé que él [].</i> <i>MF: PUES ESO ES LO QUE LE PREGUNTO, NO, YO LE PREGUNTO ESO, QUE USTED NO LO VEÍA.</i>	Mº fiscal: entonces usted estaba trabajando dentro, por tanto, no podía saber exactamente todo lo que hacía este señor en la obra. Testigo 5: hombree, noo, yo solo sé que él []. Mº fiscal: es decir, usted no lo veía.
<i>Dice usted que está separado legalmente de esta señora (voz baja) PAUSA (2") ¿existe alguna sentencia? (elevación de tono).</i> ¿Sentencia de qué?	¿Existe alguna sentencia de separación entre Ud. y esta señora?
<i>Voz muy baja porque el juez se aparta en ese momento del micrófono.</i>	Elevar la voz y dirigir la mirada con atención al testigo en ese momento, para que sepa en condición de qué está actuando en el juicio.
<i>Es cierto que el día 28 de noviembre hubo un juicio en XXX (con entonación no interrogativa, pero con pausa final).</i>	-¿Es cierto que el día 28 de noviembre hubo un juicio en XXX? -Es cierto que el día 28 de noviembre hubo un juicio en XXX, ¿verdad? Las preguntas y las aseveraciones han de entonarse como tales porque si no, el emisor confunde al interlocutor.

RESUMEN: ERRORES SUPRASEGMENTALES	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
<p>¿Usted formuló denuncia en fecha 6 de julio? El juez está leyendo por lo que la curva entonativa de la pregunta no es comprendida.</p>	Curva entonativa interrogativa.
<p>Entonación inadecuada de la pregunta. <i>FISCAL: Mire, usted, el 30 de julio del año 2009, a la altura de la calle XX con la calle YY había un turismo ¿eh? un BMW... un BMW... un Volkswagen, que se encontraba estacionado. Ese día, usted, con un objeto punzante le hizo una raya en todo el lateral. (Lo mira. Silencio del acusado).</i> <i>JUEZ: ¿Es cierto?</i> <i>ACUSADO: Noo.</i> <i>FISCAL: VAMOS A VER (Sube el volumen).</i></p>	El 30 de julio del año 2009, a la altura de la calle XX con la calle YY había un turismo Volkswagen, que se encontraba estacionado. Ese día, usted, con un objeto punzante le hizo una raya en todo el lateral, ¿No es cierto?
<p>Tono irónico. <i>¿Había alguna carpa (con tono irónico) o se estaba montando alguna carpa fallera?</i></p>	Evitar este tipo de muestras de manipulación de la voz.

Aquellos fenómenos vocales que no tienen naturaleza segmental ni suprasegmental corresponden al ámbito de la **paralingüística**. Un caso registrado en el corpus analizado es el de un “chasquido” en medio de un enunciado, lo que puede denotar falta de respeto hacia la situación formal del discurso judicial:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Chasquido.
Justificación	Ciertas acciones como esta, aunque sean inconscientes, no resultan adecuadas en una situación de extrema formalidad.
Contexto	<i>Y que, por lo tanto, entendemos que la declaración que efectúa la misma, es una declaración no solamente, pues bueno (chasquido boca) real sino además verás.</i>
Alternativa sugerida	Evitar este tipo de acciones.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 28

2. NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO. PROPUESTAS ESPECÍFICAS

Sin perjuicio de que se produzcan fenómenos de naturaleza mixta, las entradas del corpus que recogen errores léxico-semánticos suponen cerca de un 50% del total. De entre todas las tipologías de error, se ha realizado una selección que se incluye a continuación.

2.1. Cultismos y nivel sociocultural

El empleo por parte de los profesionales de un **léxico culto** hace difícil su comprensión para aquel interlocutor que posee un nivel sociocultural bajo o medio:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Referir (referido).
Justificación	Se trata de un elemento excesivamente culto y elaborado.
Contexto	<i>Aparte del empujón que usted ha referido, ¿hubo (...)?</i>
Alternativa sugerida	Contar, relatar.

Ejemplo 29

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Con carácter previo.
Justificación	Expresión culta difícil de descodificar.
Contexto	<i>¿Esas denuncias han dado lugar a procedimi- a juicios o usted las ha retirado con carácter previo?</i>
Alternativa sugerida	Antes/anteriormente/previamente.

Ejemplo 30

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Y otros concomitantes.
Justificación	Léxico culto que puede resultar difícil de comprender.
Contexto	<i>...porque habían unos hechos previos y otros concomitantes.</i>
Alternativa sugerida	Y otros relacionados/vinculados.

Ejemplo 31

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Enervar.
Justificación	Léxico culto que puede resultar difícil de comprender.
Contexto	<i>(...) manifiesta que está de acuerdo con este escrito de conformidad, y es al mismo tiempo una declaración de admisión de hechos...ee... que el Tribunal Constitucional indica que es suficiente para enervar, dejar sin efecto, la presunción de inocencia.</i>
Autocorrección realizada	Dejar sin efecto.

Ejemplo 32

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Foliados.
Justificación	El abogado de la acusación se sirve de palabras cultas.
Contexto	<i>Juez: ¿prueba, letrado? Abogado acus.: prueba documental consistente en ocho, en diez bloques documentales foliados eh, con más de cien documentos.</i>
Alternativa sugerida	Numerados.

Ejemplo 33

Este léxico culto no siempre resulta comprensible para los ciudadanos, en especial, para aquellos que poseen un nivel sociocultural bajo. Se observa, pues, que no existe una adecuación entre el léxico empleado por estos profesionales y el nivel sociocultural de algunos de los ciudadanos que son receptores directos o indirectos de este discurso por estar presentes en la sala, por ejemplo.

Por todo ello, se podrían emplear equivalentes más estandarizados o neutros que puedan facilitar la comprensión de esos posibles receptores que no poseen un nivel sociocultural alto, tal y como se expone a continuación:

RESUMEN: CULTISMOS Y NIVEL SOCIOCULTURAL	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Referir (referido).	Contar, relatar.
Con carácter previo.	Antes. Anteriormente. Previamente.
Y otros concomitantes.	Y otros relacionados/vinculados.
Enervar.	Anular, dejar sin efecto.
Foliados.	Numerados.

En definitiva, se trata de emplear en lo posible otros sinónimos o equivalentes más conocidos y estandarizados que permitan la comprensión de ese posible receptor (acusado/a o testigo/a) que no posee un nivel sociocultural alto.

2.2. Tecnicismos y competencia léxica (I)

Los profesionales tienden a emplear **términos y expresiones técnicas**, propias de su actuación jurídica y del desempeño de su actividad, pero opacas y crípticas para el posible lego en la materia, esto es, para todo aquel que no ha recibido una formación explícita en el ámbito del derecho. Por esta razón, muchas de estas voces no siempre se registran en diccionarios generales de uso y para comprobar su sentido es necesario acudir a diccionarios específicos de derecho. He aquí algunas voces y expresiones pertenecientes a esta terminología del ámbito jurídico:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Prueba de cargo.
Justificación	Expresión técnica, desconocida por el profano.
Contexto	<i>Entendemos, señoría, que en la manifestación de la señora XXX eh, se cumplen todos y cada uno de los requisitos que establece el Tribunal Supremo para darle eh a la única prueba de cargo el valor suficiente para la destrucción de la presunción de inocencia.</i>
Alternativa sugerida	Prueba incriminatoria, prueba de la acusación.

Ejemplo 34

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Corroboración periférica de carácter objetivo.
Justificación	Esta paráfrasis léxica puede causar una posible incompreensión.
Contexto	<i>Existe también una corroboración periférica de carácter objetivo. Tenemos la declaración de la testigo, de la vecina de arriba.</i>
Alternativa sugerida	Declaración de una testigo. Corroboración de parte de los hechos a partir del testimonio objetivo de la testigo.
Autocorrección realizada	<i>Tenemos la declaración de la testigo, de la vecina de arriba.</i>

Ejemplo 35

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Requisito de punibilidad.
Justificación	Se trata de un término demasiado técnico que puede causar problemas en su descodificación.
Contexto	<i>Pues en este acto se suspende este juicio por falta de requisito de punibilidad procediéndose al archivo del mismo. A continuación (11:07) el juez explica qué significa "requisito de punibilidad".</i>

Alternativa sugerida	Declaración de una testigo. Corroboración de parte de los hechos a partir del testimonio objetivo de la testigo.
Autocorrección realizada	El juez no lo hace a petición del emisor sino que libremente lo explica: <i>He empleado una expresión muy técnica que es falta de requisitos de punibilidad pero es que es la forma de decir que sin denuncia de ustedes no hay soporte para llevar a cabo el juicio y el proceso, ¿eh? Lo que significa que se archiva en este acto y este asunto ha quedado terminado.</i>
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 36

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Fecha de comisión.
Justificación	El léxico puede resultar difícil de comprender para los implicados no profesionales.
Contexto	<i>XXX, mayor de edad en la fecha de comisión de los hechos...</i>
Alternativa sugerida	Fecha en que ocurrieron/ fecha en la que se cometieron.

Ejemplo 37

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Auto de alejamiento.
Justificación	Léxico que puede resultar difícil de comprender para los profanos en la materia.
Contexto	<i>Se dictó por el juzgado auto de alejamiento para el acusado respecto de XXX.</i>
Alternativa sugerida	Orden de alejamiento.

Ejemplo 38

En determinados procesos judiciales, sobre todo, cuando tiene lugar la intervención de un perito especialista, la terminología empleada puede proceder de otros ámbitos, como sucede en el ejemplo posterior con el ámbito médico:

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Patología nuclear.
Justificación	Esta expresión puede causar problemas de comprensión.
Contexto	<i>Con la venia, señoría. XXX, ¿puede hacernos sucintamente un resumen de la patología nuclear o principal y de la patología secundaria pero atendiendo sobre todo a las disfunciones que padece este paciente?</i>
Autocorrección realizada	<i>Justo después de decir nuclear, se corrige y dice "o principal".</i>
Fase del juicio	Fase de pruebas pericial.

Ejemplo 39

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Ostenta titularidad.
Justificación	Es una forma que podría reemplazarse por otra más comprensible.

Contexto	AA: ¿es de propiedad exclusiva de ella? A: sí, ahora mismo es ella la... AA: ¿la dueña? A: es de alquiler, ¿eh? AA: ¿pero la que ostenta la titularidad ...
Alternativa sugerida	Es propietaria.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 40

Para conseguir que el lego en la materia pueda comprender el discurso emitido por los profesionales se podrían: a) sustituir estos tecnicismos por equivalentes léxicos contextuales más conocidos, aunque no se puedan considerar como sinónimos propiamente dichos; b) en caso de que la sustitución no sea posible, por no ajustarse a las fórmulas o a las denominaciones que así figuran en las normativas (códigos, leyes, tradición jurídica, etc.), se podría añadir ese equivalente léxico al término técnico a modo de aposición explicativa; c) si no se registra un término equivalente, también se podría emplear una paráfrasis léxica, una explicación del término en cuestión; d) siempre que sea posible y la situación lo permita minimizar el número de voces técnicas empleadas:

RESUMEN: TECNICISMOS Y COMPETENCIA LÉXICA	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Prueba de cargo.	Prueba inculpativa, prueba de la acusación.
Corroboración periférica de carácter objetivo.	Declaración de un testigo Corroboración de parte de los hechos a partir del testimonio objetivo de la testigo. Confirmación con pruebas concretas.
Fecha de comisión.	Fecha en que ocurrieron/fecha en la que se cometieron.
Auto de alejamiento.	Orden de alejamiento.
Ostentar titularidad.	Ser propietaria.

En el caso de la intervención de peritos especialistas, del mismo modo que se les pide que sinteticen la información, también se les puede solicitar que utilicen los términos más generales y conocidos que puedan. En este caso, es el propio letrado el que reformula su intervención y utiliza un equivalente léxico:

ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Patología nuclear.	Patología principal.

En ocasiones, los profesionales en el ejercicio de su actividad son conscientes de la dificultad de comprensión, ante la falta de respuesta del lego o las muestras gestuales de falta de entendimiento, por lo que o bien buscan otras alternativas en su discurso, como sucede en el siguiente ejemplo, en el que se utiliza una especie de equivalente léxico:

O bien parafrasean o explican con otras palabras los términos y expresiones técnicas utilizadas:

ELEMENTO PROBLEMÁTICO	AUTOCORRECCIÓN
Requisito de punibilidad.	El juez no lo hace a petición del emisor sino que libremente lo explica: <i>He empleado una expresión muy técnica que es falta de requisitos de punibilidad pero es que es la forma de decir que sin denuncia de ustedes no hay soporte para llevar a cabo el juicio.</i>

Cabe reconocer que son los propios profesionales quienes mejor pueden ofrecer alternativas léxicas o paráfrasis explicativas junto a la voz técnica, tal y como sucede con el término posterior:

ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Suplicos.	Término equivalente.

En suma, se trata de intentar ser lo más claro posible y para ello se debería usar con cautela y medida los términos técnicos y del lenguaje profesional; explicar y parafrasear la terminología especializada, si su uso es estrictamente necesario, con términos más comunes y comprensibles para las personas no profesionales, y más adecuados a su conocimiento; usar sinónimos más habituales en lugar de los términos técnicos y especializados o, al menos, usarlos junto a estos.

Esta búsqueda de claridad expositiva enlazaría, del mismo modo, con una necesidad de ajustarse a la competencia léxica del lego en la materia y adecuarse a sus conocimientos y recurrir a un discurso que tenga presente al interlocutor.

2.3. Tecnicismos y competencia léxica (II)

Los **tecnicismos polisémicos**. Los términos técnicos llegan a ser, además, más complejos y problemáticos cuando dichas voces poseen un sentido en la lengua general o estándar y otro sentido en el lenguaje jurídico, ya que provocan el desconcierto por parte del lego al escuchar palabras conocidas, pero cuyo significado más habitual no se ajusta al que se les pueda atribuir en esa situación comunicativa:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Interesar la condena.
Justificación	El verbo interesar posee un significado específico en la lengua general y otro distinto en el ámbito jurídico por lo que puede producir problemas de comprensión.
Contexto	<i>Por mi parte manifestar...interesar la condena en los términos que se han planteado' en este juicio.</i>
Alternativa sugerida	Manifestar el interés en que la condena se dicte en los términos en que se ha planteado.

Ejemplo 41

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Obrar.
Justificación	El verbo obrar puede plantear problemas de comprensión, ya que posee diversos significados.
Contexto	<i>Si bien, a la vista de la información eh que obra en los autos que la empresa se encuentra eh cerrada desde el 14 de mayo, solicitamos eh, por economía procesal de conformidad con el 284 de la Ley de Procedimiento Laboral y siendo imposible la readmisión, que se proceda a la extinción eh, del contrato laboral de los autores con la fecha de la sentencia.</i>
Alternativa sugerida	A la vista de la información que aparece en los autos.
Fase del juicio	Fase de alegaciones previas.

Ejemplo 42

A veces, incluso, los sentidos de la lengua general y del lenguaje jurídico pueden parecer como una especie de antónimos o contrarios, como sucede en el ejemplo siguiente:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Depuesto.
Justificación	Se trata de un término demasiado específico que puede llevar a confusión.
Contexto	<i>Desobedeció hasta en tres ocasiones las órdenes dadas concretamente por parte del agente de la policía local que ha depuesto en este acto como testigo.</i>
Alternativa sugerida	Testificado/declarado como testigo.

Ejemplo 43

En todos estos casos se propone, tal y como se ha señalado anteriormente, la sustitución de estos términos técnicos por equivalentes léxicos más conocidos o la adición de estos equivalentes junto a la voz técnica. También se puede recurrir al empleo de una paráfrasis explicativa del término:

RESUMEN: TECNICISMOS Y COMPETENCIA LÉXICA (II)	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Interesar la condena.	Manifiestar el interés en que la condena se dicte en los términos en que se ha planteado.
Obrar.	A la vista de la información que aparece en los autos.
Deponer, depuesto.	Que ha testificado/declarado como testigo.

Así pues, los términos técnicos, singulares del ejercicio profesional, que se emplean comúnmente en la lengua general con otro sentido, deberían explicarse si el emisor desea ser claro, dada la ambigüedad que estos usos provocan en el interlocutor.

2.4. Tecnicismos y competencia léxica (III)

Otro caso especial de opacidad lo constituye el **empleo de latinismos o locuciones latinas** propios del discurso técnico jurídico, en este caso, además, extraños al sistema lingüístico habitual del interlocutor, no siempre familiarizado con el latín:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Sentencia in voce.
Justificación	Se trata de un latinismo y, como tal, marca una separación entre el lenguaje jurídico y el estándar.
Contexto	<i>El acusado acepta el importe de la multa por lo que el juez decide dictar sentencia en ese mismo momento.</i>
Alternativa sugerida	Pronunciar sentencia en sala.

Ejemplo 44

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Petitum.
Justificación	Latinismo que puede resultar extraño a los legos en la materia.
Contexto	<i>Elevamos a definitivo el petitum de nuestra demanda.</i>
Alternativa sugerida	Elevamos a definitivo el ruego de nuestra demanda.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 45

En estos casos, el emisor debería, como en los casos anteriores, o bien sustituir estos términos latinos por expresiones similares propias del sistema lingüístico del español, o bien adicionar estas expresiones al lado de los latinismos:

RESUMEN: TECNICISMOS Y COMPETENCIA LÉXICA (III)	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Sentencia in voce.	Pronunciar sentencia en sala.
Petitum.	Elevamos a definitivo el ruego de nuestra demanda.

De esta manera, el emisor conseguirá mayor claridad y la comprensión del interlocutor no solo lego en la materia del ámbito del derecho, sino en muchas ocasiones desconocedor de la lengua -el latín- de donde se toman estas expresiones y, por consiguiente, incapaz de interpretar su posible significado.

2.5. Tecnicismos y competencia léxica (IV)

Otro tipo de expresiones propias del ámbito jurídico lo constituyen las **expresiones y fórmulas rituales**, o juramentos, que no siempre son claras para el profano.

Además, dado el carácter ritualizado de estas expresiones, por un lado, suelen emitirse con un ritmo de enunciación rápido y una entonación monótona, que complica todavía más el proceso de interpretación del significado de estas voces. Se leen o se oralizan tan rápidamente que nadie ajeno al lenguaje jurídico llega a entender. El lego en la materia no sabe en muchos momentos si se le formula una pregunta o si es un mero enunciado afirmativo.

Por otro lado, el profano en este ámbito profesional, ya tenso por el propio marco comunicativo (espacio de interacción no habitual), por la formalidad de la situación (cada persona debe ocupar un espacio concreto y solo puede interactuar cuando el magistrado le da el turno) y por las posibles consecuencias que su actuación conlleve (condena o absolución, por ejemplo), no consigue captar el significado de estas fórmulas rutinarias:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	¿Tiene usted interés en perjudicar o beneficiar, con el testimonio que va a prestar, a alguna de estas dos personas?
Justificación	Fórmula rutinaria, difícil de descodificar.
Contexto	Juez: ¿tiene usted interés en perjudicar o en beneficiar, con el testimonio que va a prestar, a alguna de estas dos personas? Testigo: ¿beneficiar? Juez: ¿ha venido usted para decir lo que sabe o para decir solo aquello que pueda beneficiar o perjudicar a alguno de ellos? ¿Para decir la verdad?
Autocorrección realizada	¿Tiene algo que ganar y perder, le afecta en algo el resultado?

Ejemplo 46

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	¿Alguna cuestión previa a la práctica de las pruebas?
Justificación	Pregunta ritualizada en la fase de apertura. La ritualización excesiva hace oscuras e incomprensibles algunas partes del proceso.
Contexto	Lo dice el juez en la fase de apertura, una vez presentado el número de vista y lo que se va a juzgar.
Alternativa sugerida	Antes de presentar las pruebas, ¿tienen los abogados alguna alegación previa? (según contexto).
Fase del juicio	Fase de apertura.

Ejemplo 47

Para conseguir una mayor claridad expositiva, los profesionales deberían simplificar las fórmulas rituales, ya que lo rutinario para el profesional se convierte en un impedimento para la comprensión del ciudadano medio. Para conseguir esta simplificación podría emplear en la medida de lo posible expresiones cuyo significado global sea fácilmente comprensible: sustituir las fórmulas compuestas perifrásticas por otras unidades simples y, cuando no sea posible, explicar el significado de las fórmulas. Además, debería emitirse de un modo claro y preciso para que el interlocutor reconozca el valor entonativo del enunciado (pregunta o afirmación) y evitar el excesivo automatismo, especialmente, en algunas partes de las distintas actuaciones.

RESUMEN: TECNICISMOS Y COMPETENCIA LÉXICA (IV)	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
¿Tiene usted interés en perjudicar o beneficiar, con el testimonio que va a prestar, a alguna de estas dos personas?	¿Ha venido usted para decir la verdad, para decir lo que sabe o para decir solo aquello que pueda beneficiar o perjudicar a alguno de ellos? ¿Para decir la verdad?
Por reproducida.	Lo que hemos visto, señoría.
¿Alguna cuestión previa a la práctica de las pruebas?	Antes de presentar las pruebas, tienen los abogados alguna alegación.

2.6. Neologismos desconocidos

Se aprecia la **creación de neologismos**; estos, por su parte, suponen una interpretación dificultosa del significado para quienes se encuentran poco familiarizados con el ámbito judicial:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Referenciado a.
Justificación	La palabra es difícil de comprender. En este contexto, el significado del neologismo <i>referenciar</i> ('hacer referencia a') parece distinto al que tiene en otra ocasión en ese mismo juicio (la jueza habla de <i>referenciar los documentos</i> : 'dar la referencia de').
Contexto	<i>La [prueba] ocho, correspondiente a honorarios, a la tabla de honorarios profesionales de topografía; y la [prueba] 9, correspondiente a honorarios profesionales de asistencia técnica. Todo ello referenciado a los honorarios profesionales de ingeniero superior agrónomo, que es mi principal, y que (...).</i>
Alternativa sugerida	Con relación a.
Fase del juicio	Fase de pruebas documental.

Ejemplo 48

Lo mismo sucede con determinadas palabras derivadas que se introducen con formas inventadas y que, sin embargo, cuentan con equivalentes correctos en español:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Claridez.
Justificación	En su afán de lucirse en sus discursos, es muy común que los profesionales creen derivados erróneos.
Contexto	<i>J: ...pero es importante que digamos, que ustedes lo tengan claro y que le transmitan esa sensación de claridez a la niña...</i>
Alternativa sugerida	Claridad.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 49

Sería aconsejable sustituir dichas voces por paráfrasis léxicas o por otras más conocidas por la comunidad de hablantes, al menos, más sencillas de entender que el neologismo especializado correspondiente:

RESUMEN: NEOLOGISMOS DESCONOCIDOS	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Referenciado a.	Con relación a, relativas a.
Claridez.	Claridad.

Cabe precisar que las equivalencias léxicas concretas o alternativas dependerán del contexto en que se emitan las voces, ya que un mismo verbo puede sustituirse por diferentes equivalentes en función del discurso. Son los profesionales de este ejercicio los más capacitados para encontrar los equivalentes léxicos más adecuados en el contexto:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Referenciar.
Justificación	Neologismo poco habitual (al menos, fuera del ámbito jurídico).
Contexto	[El abogado dice que va entregar 9 documentos, pero en lugar de entregarlos y de especificar de qué documentos se trata, interrumpe el discurso para separar los papeles que tiene que entregar de los otros]. ¿Quiere por favor referenciar los documentos y agilizar? Gracias.
Alternativa sugerida	Enumerar/dar la referencia de.
Fase del juicio	Fase de pruebas documental.

Ejemplo 50

2.7. Paráfrasis léxicas excesivamente complejas

No obstante lo anterior, en ocasiones, se utilizan **paráfrasis innecesarias y complejas**, una densidad léxica que hace ardua y difícil la comprensión por parte del que escucha. Es preciso tener presente que quien escucha no puede volver a “releer” el mensaje para captar su sentido y normalmente no se atreve a solicitar que se repita lo dicho o que se diga de un modo más claro, breve y sencillo. Será, así pues, el profesional el que tendrá que ponerse en su lugar:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Cosas distintas a las ciertas.
Justificación	Esta paráfrasis léxica induce a error.
Contexto	Si miente, si no dice la verdad, si por perjudicar o beneficiar a alguien usted dice cosas distintas a las ciertas, cometerá un delito de falso testimonio.
Alternativa sugerida	Cosas que no son ciertas, mentiras.

Ejemplo 51

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Por tiempo de tres años.
Justificación	Es una construcción excesivamente complicada.
Contexto	Prohibición de acercarse a la víctima a menos de trescientos metros por tiempo de tres años.
Alternativa sugerida	Durante tres años.

Ejemplo 52

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	La parte proponente (de)/(a) la parte demandada.
Justificación	Esta paráfrasis resulta incomprensible para el público y los acusados, aunque se puede desambiguar por la situación.
Contexto	Puede preguntar la parte proponente (de)/(a) la parte demandada.
Alternativa sugerida	¿La acusación a/de la defensa?

Ejemplo 53

Órgano	Social (Ciudad Real).
Elemento o fenómeno lingüístico	Se resuelve en el sentido desestimatorio.
Justificación	Se trata de una construcción enrevesada que podría expresarse de forma más clara.
Contexto	Eh, muchas gracias. Resolviendo, sobre las excepciones propuestas se resuelve en el sentido desestimatorio por las razones que acertadamente ha relatado la parte actora.
Alternativa sugerida	Resolvemos que se desestimen las excepciones propuestas por la defensa por las razones que ha relatado la parte actora”.

Ejemplo 54

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	A los efectos de.
Justificación	Locución prepositiva formal más propia de lo escrito.
Contexto	Insta a mantener una reunión con la contraria a lo efectos de ponerse de acuerdo.
Alternativa sugerida	Para ponerse de acuerdo.
Fase del juicio	Fase de alegaciones previas.

Ejemplo 55

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Ayudas administrativas.
Justificación	La demandante no entiende a qué hace referencia la abogada del demandado con “ayuda administrativa”.
Contexto	Ab.: ¿Recibe usted alguna ayuda administrativa por ser ma- eeh madre trabajadora? Demandante: No. Ab.: ¿No recibe absolutamente nada, como madre trabajadora? Demandada: No. J.: ¿Ayuda de comedor/de [beca]. Demandada: [ah, las becas] [...]. J. (en el 25:40) ¿o hay- o becas de libros?
Alternativa sugerida	La aclaración de la jueza parece una buena alternativa: “becas (de libros, de comedor)”.
Fase del juicio	Interrogatorio a la demandante.

Ejemplo 56

Estas paráfrasis léxicas innecesarias pueden inducir a error y resultan fácilmente sustituibles por otros equivalentes más sencillos que permiten una mayor claridad. Se trata, en síntesis, de enunciar o preguntar de un modo breve y de forma simple, de un modo directo, sin alargar las preguntas y las respuestas de forma innecesaria; y de evitar los rodeos léxicos y los circunloquios.

RESUMEN: PARÁFRASIS LÉXICAS EXCESIVAMENTE COMPLEJAS	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Cosas distintas a las ciertas.	Mentiras, falsedades.
Por tiempo de tres años.	Durante tres años.
La parte proponente (de)/(a) la parte demandada.	¿La acusación a/de la defensa?
Se resuelve en el sentido desestimatorio.	Resolvemos que se desestimen.
A los efectos de.	Para (ponerse de acuerdo).
Ayudas administrativas.	Becas.

2.8. Construcciones preposicionales complejas

Sin duda, locuciones prepositivas como las vistas en el apartado anterior (*a efectos de, por tiempo de* en lugar de *para, durante*) más propias de lo escrito, son frecuentes en el discurso jurídico oral. En nuestra opinión, complican a la vez que alargan el discurso. Más aún, estos excesos prepositivos llevan, incluso, al empleo de construcciones preposicionales no ajustadas a la normativa del español (*por el contrario de lo manifestado*), las cuales, además, resultan más difíciles de comprender que sus equivalentes normativos (*en contra de*) e, incluso, otros mucho más simples:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Respecto de/por cuanto/por contra de.
Justificación	Galicismo erróneo.
Contexto	<i>Esta parte interesa que se dicte una sentencia absolutoria respecto de mi representado, por cuanto, por contra de lo manifestado por el Ministerio Público, entendemos que no ha quedado anulada la presunción de inocencia.</i>
Alternativa sugerida	Esta parte solicita que se dicte una sentencia absolutoria respecto de mi representado (<i>la absolución de mi representado</i>), pues, en contra de lo manifestado por el Ministerio Público, entendemos que no ha quedado anulada la presunción de inocencia.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 57

Se aconseja usar construcciones preposicionales más simples y que se ajusten a los esquemas normativos de las estructuras morfológicas del español.

Todas las propuestas que se han realizado persiguen facilitar la comprensión de los posibles receptores y obtener una mayor claridad expositiva, bien porque no poseen un nivel socio-cultural alto (adecuación a la competencia de nivel de lengua del receptor) y, por consiguiente, desconocen el léxico culto correspondiente; bien porque no están familiarizados con los tecnicismos, neologismos o fórmulas rutinarias propios del lenguaje jurídico, crípticos para el lego en la materia (adecuación a la competencia léxica no especializada del receptor). En otros casos, la mejor comprensión se consigue a través de una simplificación de las paráfrasis léxicas o de las construcciones preposicionales (simplificación del lenguaje).

2.9. Arcaísmos

Se detectan usos arcaicos de palabras y construcciones. Esta característica es típica del lenguaje jurídico, pero en ocasiones puede llevar a una pérdida de transparencia innecesaria. Si existe una alternativa moderna en español estándar, es preferible emplearla.

Cabe destacar que el empleo de léxico arcaizante, así como el de construcciones verbales desusadas (futuro de subjuntivo; vid. §3.3.2. b) presenta un índice de aparición muy superior en Madrid y Ciudad Real.

Órgano	Social (Ciudad Real).
Elemento o fenómeno lingüístico	Ambos dos.
Justificación	De acuerdo con el DPD, se trata de una construcción arcaica que aunque pervive en la lengua culta, se desaconseja su uso.
Contexto	<i>Se plantea por la parte demandada dos excepciones: falta el litis consorcio pasivo necesario y la falta de representación del firmante por baja. Si quiere contestar a ambas dos...</i>
Alternativa sugerida	A las dos/a ambas.

Ejemplo 58

3. NIVEL MORFOSINTÁCTICO

3.1. Introducción. Consideraciones previas

En tanto que discurso oral, cualquiera de las intervenciones de los profesionales de la justicia recogidas en las muestras debe ser juzgada con los parámetros adecuados. Esta adscripción al modo oral implica dos aspectos que deben ser considerados; por una parte, no debe juzgarse con la dureza de un texto escrito, en el sentido de que en el discurso hablado abundan ciertas faltas de concordancia, anacolutos, reinicios, etc., debido al menor grado de planificación. Por otra parte, sin embargo, la formalidad de la situación, especialmente en juicios y vistas, impone ciertos límites a la presencia de tales fenómenos.

De acuerdo con esta línea de razonamiento, en el presente estudio de los rasgos morfosintácticos se han omitido las faltas de concordancia, los titubeos, los reinicios, los anacolutos, etc., cuando su incidencia en el idiolecto de un hablante no supera las proporciones esperables. En el análisis se han tenido en cuenta únicamente los casos que llaman la atención por su recurrencia.

3.2. Tipología de los errores

3.2.1. Errores de normativa

Como en cualquier tipo de texto, en las intervenciones orales jurídicas se cometen errores de normativa. Estos errores son de dos tipos: por un lado, hay incorrecciones que no están relacionadas con el tipo de discurso -jurídico- en que se producen, esto es, dependen del conocimiento del hablante y son, hasta cierto punto, idiosincrásicos. Ofrecemos a continuación una muestra de estos casos ordenados de menos a mayor incidencia en el corpus:

3.2.1.1. Uso no aceptado de los pronombres átonos

Se trata siempre de laísmos y leísmos, adscritos a la procedencia geográfica del hablante. Lógicamente, dada la extensión geográfica del fenómeno, se observa mayor incidencia de laísmos en los ejemplos de Madrid (en Valencia, solo se han detectado en un profesional, que comete el error sistemáticamente, lo cual induce a pensar que no es natural de la zona):

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	La ha dicho.
Justificación	Laísmo.
Contexto	<i>Nunca la ha dicho, ya no a la salida de ese juicio, sino con posterioridad, que...</i>
Alternativa sugerida	Le ha dicho.

Ejemplo 59

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	La digo.
Justificación	Laísmo.
Contexto	<i>F.: [(entonces) la digo LOS FESTIVOS] intersemanales (...).</i>
Alternativa sugerida	Le digo.

Ejemplo 60

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	La digo.
Justificación	Laísmo.
Contexto	<i>Vamos a ver, yo la digo ¿usted está conforme?</i>
Alternativa sugerida	Le digo.

Ejemplo 61

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	La paga/la gusta.
Justificación	Laísmo.
Contexto	<i>Y si a usted no la paga ningún extraordinario, y si usted en vez de hockey, la gusta ajedrez y pintura [...].</i>
Alternativa sugerida	Le paga/le gusta.

Ejemplo 62

3.2.1.2. Casos de verbo 'haber' concertado con objetos plurales

Consiste en el empleo de la forma del verbo haber en plural en lugar de singular, por confusión del OD con el sujeto. Este fenómeno tiene una mayor incidencia en Valencia que en las otras sedes estudiadas (es común en territorios bilingües catalanohablantes, además de en algunas zonas de América).

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Habían compañeros (concordancia).
Justificación	Es un error gramatical.
Contexto	<i>Habían bastantes más compañeros.</i>
Alternativa sugerida	Había.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 63

3.2.1.3. Infinitivos presentadores o narrativos

Se dan cuando se emplea un infinitivo, sin verbo principal, para introducir un tema. Se producen con una frecuencia considerable, y están estadísticamente más presentes en las fases más formulaicas: las de conclusiones y alegaciones previas:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Interesar (infinitivo suelto).
Justificación	Uso del verbo interesar y, además, en este caso, como infinitivo suelto.
Contexto	<i>Brevemente, señoría, interesar sentencia condenatoria.</i>
Alternativa sugerida	Brevemente, señoría, solicitamos/interesamos una sentencia condenatoria.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 64

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Infinitivo suelto.
Justificación	Falta un verbo auxiliar que justifique la aparición del infinitivo.
Contexto	<i>Solicitar que previo recibimiento del pleito a prueba se dicte sentencia de conformidad con el suplico de la demanda.</i>
Alternativa sugerida	Queremos solicitar.
Fase del juicio	Fase de alegaciones previas.

Ejemplo 65

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Infinitivo suelto.
Justificación	Falta un verbo auxiliar que justifique la aparición del infinitivo.
Contexto	<i>Pues señoría, ratificarnos en la demanda. Eeh, ampliar la cantidad en 500 euros por los motivos que indicaremos a continuación, y solicitar el recibimiento a prueba.</i>
Alternativa sugerida	Nos ratificamos/solicitamos que se amplíe [...] y solicitamos.
Fase del juicio	Fase de alegaciones previas.

Ejemplo 66

3.2.1.4. Oraciones de relativo mal construidas

Generalmente se da la elisión de la preposición correspondiente o la utilización de un *que comodín*:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Relativa incorrecta.
Justificación	Falta de normativa.
Contexto	<i>...y, por mi parte, señoría, aportar una fotografía original que consta en autos fotocopia...</i>
Alternativa sugerida	<i>...y, por mi parte, señoría, aporto.../por nuestra parte, señoría, aportamos...</i>
Fase del juicio	Fase de pruebas documental.

Ejemplo 67

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Relativa mal construida. "Que".
Justificación	Término para glosario.
Contexto	<i>...en atención al famosísimo informe del Instituto Nacional de Toxicología nº12691/2003 del 22 de diciembre de ese mismo año, del 2003, en que se determina la cantidad, perdón, el acuerdo de sala es del 19 de octubre de 2001, no de 2003, que se determinan las cantidades de las sustancias estupefacientes que se reputan de-de consumo ordinario y que se *reputan* de notoria importancia.</i>
Alternativa sugerida	En que.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 68

3.2.1.5. Otros errores, debidos a confusiones o cruces de verbos (*preveer por prever, debido a un cruce con proveer, o *recordarse de por acordarse de), que se presentan esporádicamente

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Incorrección: "preveerlas".
Justificación	Por incorrecto.
Contexto	<i>No tenga posibilidad alguna ni de preVEErlas ni de evitarlas.</i>
Alternativa sugerida	Preverlas.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 69

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	(Usted) se recuerda.
Justificación	La forma pronominal se no acompaña al verbo recordar.
Contexto	<i>Me explica de una manera un poco más detallada si se recuerda cómo se produce el atropello...</i>
Alternativa sugerida	Recuerda.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 70

RESUMEN: ERRORES GENERALES DE NORMATIVA	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
La ha dicho.	Le ha dicho.
Habían compañeros (concordancia).	Había.
Interesar (infinitivo suelto).	Brevemente, señoría, solicitamos/interesamos una sentencia condenatoria.
<i>Solicitar que previo recibimiento del pleito a prueba se dicte sentencia de conformidad con el suplico de la demanda.</i> Infinitivo suelto.	Queremos solicitar.
<i>...y, por mi parte, señoría, aportar una fotografía original que consta en autos fotocopia...</i> Relativa incorrecta.	...y, por mi parte, señoría, aporto.../por nuestra parte, señoría, aportamos...

RESUMEN: ERRORES GENERALES DE NORMATIVA	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
...en atención al famosísimo informe del Instituto Nacional de Toxicología nº12691/2003 del 22 de diciembre de ese mismo año, del 2003, en que se determina la cantidad, perdón, el acuerdo de sala es del 19 de octubre de 2001, no de 2003, que se determinan las cantidades de las sustancias estupefacientes que se *reputan* de-de consumo ordinario y que se *reputan* de notoria importancia. <i>Relativa mal construida. "Que" omnibus.</i>	En que.
Preveerlas.	Preverlas.
(Usted) se recuerda.	Recuerda.

Este primer grupo de incorrecciones son generales y, por tanto, a nuestro juicio, no merecen una atención específica en este informe sobre lenguaje judicial.

Sin embargo, junto a estos se dan errores normativos que son característicos de este ámbito. Estos últimos son especialmente peligrosos porque, al producirse en un entorno prestigioso como el de las vistas, juicios, etc., se extienden con facilidad. Dicho de otro modo, los hablantes los identifican como usos propios de abogados y jueces y, sin más, los imitan.

A continuación se incluye una clasificación de estos errores ilustrada con unos ejemplos. Tras cada fragmento aportado se incluye el orden jurisdiccional y la fase -en caso de que sea una vista o juicio ordinario- o el tipo de consulta profesional del que se trata.

3.2.1.6. Gerundios incorrectos

Se trata de una de las incorrecciones más comunes del lenguaje jurídico-administrativo. Se encuentran con insistencia en el corpus oral, como puede observarse en los fragmentos que siguen:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Gerundio (diciendo).
Justificación	El gerundio provoca que la sintaxis sea más compleja y costosa la descodificación de lo dicho.
Contexto	<i>Así se pronunció el Tribunal Constitucional en una sentencia que abocó al pleno para fijar su posición, diciendo que en cualquier caso que si realmente fuera por el mismo concepto, es decir,...</i>
Alternativa sugerida	En dicha sentencia se afirmaba que...

Ejemplo 71

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Gerundio (siendo).
Justificación	Provoca una subordinación innecesaria, que hace más difícil la descodificación por parte del oyente.
Contexto	<i>El acusado intentó huir corriendo, siendo seguidamente interceptado por la policía local, por el primero que le dio el alto.</i>
Alternativa sugerida	El acusado intentó huir corriendo y seguidamente fue interceptado por la policía local, por el primero que le dio el alto.
Fase del juicio	Fase de apertura.

Ejemplo 72

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Gerundio (lamentando).
Justificación	Provoca una subordinación innecesaria, que hace más difícil la descodificación por parte del oyente.
Contexto	<i>Señoría, a la vista de la renuncia del acusado, y de su manifestación expresa de renunciar a esta abogada, eeh nosotros manifestamos también nuestra renuncia del mismo [2"] lamentando los posibles [sic] perjuicios causados a la sala.</i>
Alternativa sugerida	[2"] Lamentamos (...).
Fase del juicio	Renuncia de la abogada de uno de los acusados.

Ejemplo 73

Conviene evitar, en la medida de lo posible, el abuso del gerundio, puesto que obliga a realizar alteraciones en el orden y a introducir complementos nominales complicados de construir en un discurso espontáneo. Utilizando la forma personal del verbo correspondiente, los complementos nominales se transforman en los papeles sintácticos habituales (CD, CI, CC...) y el hablante los construye con fluidez. Se evitan, por tanto, retruécanos expresivos que suelen desembocar en errores.

3.2.1.7. Uso incorrecto de las preposiciones

La confusión en el uso de las preposiciones se da en varios niveles; por un lado, como se ha señalado más arriba, abundan las elisiones en relativas. Por otro, también como error general, aunque muy frecuente en este discurso especializado, se puede citar la elisión de preposición ante el *que* completivo o *queísmo*:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Habida cuenta que.
Justificación	Queísmo.
Contexto	<i>Con carácter previo y habida cuenta que, en estos momentos (2"), y como proviene de monitorio, aporto en este acto documental (...).</i>
Alternativa sugerida	Habida cuenta de que.
Fase del juicio	Fase de alegaciones previas.

Ejemplo 74

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Queísmo.
Justificación	El letrado no utiliza las pertinentes preposiciones delante del relativo "que".
Contexto	<i>Si bien, a la vista de la información eh que obra en los autos *que* la empresa se encuentra eh cerrada desde el 14 de mayo, solicitamos eh, por economía procesal de conformidad con el 284 de la Ley de Procedimiento Laboral y siendo imposible la readmisión, que se proceda a la extinción eh, del contrato laboral de los autores con la fecha de la sentencia.</i>
Alternativa sugerida	A la vista de la información que aparece en los autos de que la empresa...

Ejemplo 75

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Conocimiento Ø si el menor.
Justificación	Omisión de la preposición de.

Contexto	<i>¿Tiene conocimiento si el menor (...)?</i>
Alternativa sugerida	<i>¿Sabe si el menor...?/¿Le consta si el menor...?/¿Tiene conocimiento de si el menor...?</i>
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 76

Además de este uso, destaca por su frecuencia en el lenguaje jurídico la confusión de preposiciones en la redacción verbal, tanto por elidirlos indebidamente:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Procede imponer (algo).
Justificación	Es una perífrasis sin la preposición a, esta elisión se presenta frecuentemente en el lenguaje jurídico.
Contexto	<i>Y procede imponer la pena de treinta y un días de trabajos en beneficio de la comunidad.</i>
Alternativa sugerida	Procede a imponer/impone.
Fase del juicio	Fase de apertura.

Ejemplo 77

Como por emplear preposiciones incorrectas allá donde deberían ir las regidas por el verbo correspondiente:

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Consistir con.
Justificación	El letrado utiliza un preposición que no corresponde.
Contexto	<i>Juez: ¿Pruebas, letrado?</i> <i>Letrado: Confesión de la demandada eh y documental consistente, señoría, con treinta documentos.</i>
Alternativa sugerida	Consistente en.
Fase del juicio	Fase de pruebas documental.

Ejemplo 78

En muchas ocasiones, la confusión sucede, como en el ejemplo anterior, porque hay elementos insertados entre el verbo y su preposición. En ese caso, se trataría de un error general asociado al modo oral. Sin embargo, en un alto porcentaje de los casos, cuando estas confusiones suceden se relacionan con la expresión de la acción mediante una forma no personal, un sustantivo o adjetivo de verbal, etc. (por ejemplo, un gerundio, como se ha indicado más arriba). Cuando el verbo adopta estas formas, poco frecuentes en el habla cotidiana y propias del discurso escrito, los hablantes parecen no relacionar bien la acción con la preposición que rige. Así pues, una simplificación de la sintaxis podría ayudar a paliar parcialmente esta situación.

RESUMEN: ERRORES PARTICULARES DE NORMATIVA	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Abuso del gerundio.	Conviene evitar, en la medida de lo posible, el abuso del gerundio, puesto que obliga a realizar alteraciones en el orden y a introducir complementos nominales complicados de construir en un discurso espontáneo. Utilizando la forma personal del verbo correspondiente, los complementos nominales se transforman en los papeles sintácticos habituales (CD, CI, CC...) y el hablante los construye con fluidez. Se evitan, por tanto, retruécanos expresivos que suelen desembocar en errores.

RESUMEN: ERRORES PARTICULARES DE NORMATIVA	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
<p><i>Así se pronunció el Tribunal Constitucional en una sentencia que abocó al pleno para fijar su posición, diciendo que en cualquier caso que si realmente fuera por el mismo concepto, es decir,...</i></p> <p>Gerundio (diciendo).</p>	En dicha sentencia se afirmaba que...
Gerundio (siendo).	El acusado intentó huir corriendo y seguidamente fue interceptado por la policía local, por el primero que le dio el alto.
Confusión de preposiciones.	En un alto porcentaje de los casos estas confusiones suceden se relacionan con la expresión de la acción con una forma no personal, un sustantivo o adjetivo deverbal, etc. (por ejemplo, un gerundio, como se ha indicado más arriba). Así pues, una simplificación de la sintaxis podría ayudar a paliar parcialmente esta situación.
<p>Queísmo.</p> <p><i>Si bien, a la vista de la información eh que obra en los autos *que* la empresa se encuentra eh cerrada desde el 14 de mayo...</i></p>	A la vista de la información que aparece en los autos de que la empresa...
Es una perífrasis sin la preposición a, esta elisión se presenta frecuentemente en el lenguaje jurídico. Procede imponer.	Procede a imponer/impone.
Consistir con.	Consistir en.

3.2.2. Errores estilísticos

El problema principal que presentan los textos orales en el ámbito de la justicia es, como se ha mencionado ya en varias ocasiones, la influencia del discurso escrito sobre el oral. Así, el habla reproduce estructuras sintácticas abigarradas, nominalizaciones forzadas, abusos constantes de la voz pasiva, alteraciones antinaturales del orden de palabras o empleos de locuciones prepositivas poco usuales, que sustituyen a otras más adecuadas a lo oral.

Incluimos a continuación una lista de fenómenos estilísticos desaconsejables:

3.2.2.1. Influencias de lo escrito en lo oral

Aunque este punto es aplicable a casi todos los errores estilísticos, tanto los que se detallan a continuación como los posteriores, existen algunas prácticas que son más claramente atribuibles al influjo de las estructuras escritas. Así, se pueden encontrar fragmentos como los siguientes:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Participios de pasado en pasivas, en construcciones absolutas, como adjetivos, etc.
Justificación	Por frecuentes.
Contexto	<i>Ab: En virtud de la prueba practicada, señoría, ((específicamente)) la documental, entendemos que ha sido acreditada, que han resultado acreditados todas y cada uno de los hechos aducidos en la demanda o de aquellos hechos que dan como consecuencia lo solicitado en el suplico de la misma;</i>
Alternativa sugerida	Racionalizar su empleo.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 79

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	(Gerundio compuesto). Estando separado. Habiendo reanudado.
Justificación	El gerundio complica innecesariamente la marcha del discurso y la comprensión por parte del interlocutor. Altera el orden de los constituyentes de la oración.
Contexto	[XXX] mayor de edad, sin antecedentes penales, estando separado judicialmente de XXX y sin que exista sentencia de divorcio, habiendo reanudado la convivencia, procedió a realizar los siguientes hechos.
Alternativa sugerida	En el momento en que se cometieron los actos [XXX], mayor de edad, sin antecedentes penales, estaba separado judicialmente de YYY sin sentencia de divorcio y había reanudado la convivencia (con YYY). En esas fechas, XXX realizó los siguientes hechos...

Ejemplo 80

Como se ha avanzado ya, las prácticas orales que reproducen el escrito en el ámbito judicial son, además, muy específicas, ya que reproducen una tradición discursiva escrita muy poco recomendable de por sí, en numerosas ocasiones, por su complejidad innecesaria. Es conveniente, por tanto, simplificarlas. Véase, por ejemplo, hasta qué punto mejora el último fragmento cuando se simplifica su estructura, y cuáles han sido los mecanismos empleados para hacerlo:

-Eliminación de la larga lista de complementos insertados entre el sujeto y el predicado:

XXX sujeto *mayor de edad, sin antecedentes penales, estando separado judicialmente de XXX y sin que exista sentencia de divorcio, habiendo reanudado la convivencia, procedió a realizar los siguientes hechos* predicado

En el momento en que se cometieron los actos, [XXX], mayor de edad, sin antecedentes penales, estaba separado judicialmente de YYY sin sentencia de divorcio y había reanudado la convivencia (con YYY). En esas fechas, XXX realizó los siguientes hechos...

-Una de las posibles maneras de hacerlo es transformar uno o varios complementos del sujeto en oraciones completas; los períodos oracionales se acortan, de manera que se aligera el resultado:

*...estando separado judicialmente de XXX y sin que exista sentencia de divorcio...
...estaba separado judicialmente de XXX sin sentencia de divorcio...*

*...habiendo reanudado la convivencia, procedió a realizar los siguientes hechos...
y había reanudado la convivencia (con YYY)*

-La noción de tiempo anterior que proporcionan las construcciones de gerundio (habiendo reanudado, estando separado, etc.) se ha recuperado con un complemento circunstancial situado al principio, que luego se retoma tras el punto; además, como se explicaba en el punto anterior, se han transformado en oraciones con verbo conjugado los sintagmas que antes presentaban dichos gerundios:

[XXX] mayor de edad, sin antecedentes penales, estando separado judicialmente de XXX y sin que exista sentencia de divorcio, habiendo reanudado la convivencia, procedió a realizar los siguientes hechos...

En el momento en que se cometieron los actos [XXX], mayor de edad, sin antecedentes penales, estaba separado judicialmente de YYY sin sentencia de divorcio y había reanudado la convivencia (con YYY). En esas fechas, XXX realizó los siguientes hechos...

-Se han eliminado, asimismo, expresiones parafrásticas innecesarias:

*[XXX] mayor de edad, sin antecedentes penales, estando separado judicialmente de XXX y sin que exista sentencia de divorcio, habiendo reanudado la convivencia, **procedió a realizar** los siguientes hechos...*

En el momento en que se cometieron los actos [XXX], mayor de edad, sin antecedentes penales, estaba separado judicialmente de YYY sin sentencia de divorcio y había reanudado la convivencia (con YYY). En esas fechas, XXX **realizó** los siguientes hechos...

Puede comprobarse, finalmente, la diferente impresión que causa el texto simplificado comparado con el original:

[XXX] mayor de edad, sin antecedentes penales, estando separado judicialmente de XXX y sin que exista sentencia de divorcio, habiendo reanudado la convivencia, procedió a realizar los siguientes hechos...	En el momento en que se cometieron los actos [XXX], mayor de edad, sin antecedentes penales, estaba separado judicialmente de YYY sin sentencia de divorcio, y había reanudado la convivencia (con YYY). En esas fechas, XXX realizó los siguientes hechos...
--	--

Aunque se podrían enumerar muchos más, se ha escogido una selección de ejemplos que ilustran las principales vías de penetración del escrito en el discurso hablado de los juristas.

A) ABUSO DE CONSTRUCCIONES NOMINALES Y SIMILARES

La práctica, típicamente escrita, de presentar la acción bajo la forma de un nombre o adjetivo verbal, en lugar de verbo en forma personal, genera errores colaterales cuando se inscribe en el discurso oral. El abuso de este tipo de estructuras nominales, típico del lenguaje judicial, provoca en el discurso hablado un ritmo lento y pesado, y una mayor dificultad para seguir el hilo de la argumentación o entender las preguntas. Conviene, pues, no abusar de estas construcciones:

-Nominalizaciones:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Su cotejo por el tribunal.
Justificación	Opacidad morfosintáctica por nominalización y pasiva innecesarias.
Contexto	<i>Traemos copia para las partes y original para su cotejo por el tribunal.</i>
Alternativa sugerida	Para que lo coteje el tribunal.
Fase del juicio	Fase de pruebas documental.

Ejemplo 81

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Nominalización: proceder a la venta.
Justificación	Opacidad morfosintáctica por nominalización innecesaria.
Contexto	<i>J: decidió proceder a la venta de esos bienes, ¿es cierto eso?</i>
Alternativa sugerida	Vender.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 82

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Nominalización que resulta en una construcción compleja: <i>manifestamos también nuestra renuncia.</i>
Justificación	Provoca una complejidad innecesaria, más si se tiene en cuenta que el acusado no es hispanohablante.
Contexto	<i>Señoría, a la vista de la renuncia del acusado, y de su manifestación expresa de renunciar a esta abogada, eeh nosotros manifestamos también nuestra renuncia del mismo.</i>
Alternativa sugerida	Nosotros también renunciamos a defenderlo.
Fase del juicio	Renuncia de la abogada de uno de los acusados.

Ejemplo 83

-Estructuras de participio pasado absoluto:

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	<i>Acreditados los hechos objetivos.</i>
Justificación	Por frecuente.
Contexto	<i>Eso hay que deducirlo acreditados los hechos objetivos, que están acreditados y son indiscutibles para acreditar el aspecto subjetivo o doloso.</i>
Alternativa sugerida	Cuando se hayan acreditado/Una vez acreditados.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 84

-Participios de presente:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	<i>Emitente.</i>
Justificación	Participio de presente (por frecuente). Complica la sintaxis.
Contexto	<i>No ha comparecido pese al ¿trasvase? del sumario el otro médico forense emistente del informe médico propiamente dicho, el señor X.</i>
Alternativa sugerida	El señor X, el otro médico forense que emitió el informe médico, no ha comparecido pese al ¿trasvase? del sumario.
Fase del juicio	Fase de pruebas pericial.

Ejemplo 85

B) ASPECTOS SINTÁCTICOS

La excesiva complejidad de la sintaxis producida, generalmente, por influencia del discurso escrito, genera incomprensiones y falta de claridad. Sin dejar de ser formal, en el discurso oral conviene, en ocasiones, optar por estructuras oracionales más sencillas y evitar la excesiva complejidad que desemboca en anacolutos y regresiones constantes.

-Orden sintáctico:

La **alteración del orden natural Sujeto-Verbo-Objeto** provoca problemas en el discurso oral: el oyente no puede volver sobre lo dicho, de modo que, o bien el hablante se ve obligado a retornar constantemente a partes del discurso que se han olvidado (tras un inciso, por ejemplo), o bien no lo hace y el oyente no entiende la pregunta. Conviene tratar de mantener el orden natural para evitar una expresión oscura.

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	(Gerundio compuesto). Estando separado. Habiendo reanudado.
Justificación	El gerundio complica innecesariamente la marcha del discurso y la comprensión por parte del interlocutor. Altera el orden de los constituyentes de la oración.
Contexto	<i>[XXX] mayor de edad, sin antecedentes penales, estando separado judicialmente de XXX y sin que exista sentencia de divorcio, habiendo reanudado la convivencia, procedió a realizar los siguientes hechos...</i>
Alternativa sugerida	En la fecha en que se cometieron los actos [XXX], mayor de edad, sin antecedentes penales, estaba separado judicialmente de YYY sin sentencia de divorcio y había reanudado la convivencia (con YYY). En esas fechas, XXX realizó los siguientes hechos...

Ejemplo 86

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Para interesar por su señoría se dicte sentencia condenatoria.
Justificación	Alteración innecesaria del orden natural.
Contexto	<i>Se dicte sentencia condenatoria de conformidad con los edictos escritos conclusos provisionales elevados a definitivos en el día de hoy.</i>
Alternativa sugerida	Para interesar que su señoría dicte una sentencia condenatoria...

Ejemplo 87

Asimismo, hay alteraciones en el orden de constituyentes sintácticos menores, como el sintagma nominal; así, si se invierte la tendencia natural del español a posponer los adjetivos clasificadores, se generan estructuras artificiales y pesadas.

-Complejidad sintáctica excesiva:

Una de las características del discurso escrito y, especialmente, del discurso judicial es la tendencia a emplear períodos oracionales largos, con abundante subordinación, o a usar dobles negaciones que hacen difíciles las preguntas a los testigos.

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Complejidad sintáctica.
Justificación	Complejidad sintáctica.
Contexto	<i>Estas personas no han declarado, la única declaración que consta es la recogida por diligencia en el atestado se trata de acreditar con su testimonio del paquete por cuanto estas son las personas que detectan la llegada eh a territorio español en Madrid, concretamente en el Aeropuerto de Barajas, el paquete y lo depositan y entregan eh vía aérea también a la policía, perdón, a la policía judicial de Valencia.</i>
Alternativa sugerida	Simplificar fragmento: <i>Estas personas no han declarado, la única declaración que consta es la recogida por diligencia en el atestado. Se busca acreditar la cadena de custodia del paquete, ya que estas personas son las que detectan en el Aeropuerto de Barajas la llegada del paquete, y quienes lo depositan y entregan por vía aérea a la Policía Judicial de Valencia.</i>
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 88

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Complejidad sintáctica.
Justificación	Complejidad sintáctica.
Contexto	<i>Con la venia, eh brevemente para interesar una sentencia condenatoria para la procesada [nombre] por considerarla autora de un delito contra la salud pública, tráfico de sustancias estupefacientes eh de los previstos en el artículo 368 inciso 1º del Código Penal en su modalidad de eh sustancias que causan grave daño a la salud con un circunstancia agravante cualificativa cual es prevista en el nº 6 del artículo 369 del Código Penal de notoria importancia.</i>
Alternativa sugerida	<i>Con la venia. Brevemente, queremos interesar/solicitar una sentencia condenatoria para la procesada [nombre] por considerarla autora de un delito contra la salud pública. Concretamente, incurriría en un delito de tráfico de sustancias estupefacientes previsto en el artículo 368 inciso 1º del Código Penal, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Además, se da la circunstancia agravante cualificativa prevista en el nº 6 del artículo 369 del Código Penal, de notoria importancia.</i>
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 89

Cuando esta práctica escrita se traslada a la oralidad, produce el mismo efecto que la alteración del orden de los componentes: la necesidad de volver una y otra vez a segmentos anteriores porque se han olvidado; por descontado, cuando este tipo de complejidad sintáctica se da en un interrogatorio, una consecuencia lógica es que suelen darse incomprensiones. Optar por oraciones más cortas no solo no empobrece el discurso, sino que contribuye a que se entienda mejor. Nótese, en el ejemplo 93, la valoración del propio juez que, consciente de estar siendo observado por investigadores, considera una fórmula de pregunta como responsable de “inducir a confusión”:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Anacoluto/interrogación doble.
Justificación	Se requiere una doble pregunta porque la interrogación propiamente dicha se formula al principio y le sigue un inciso muy prolongado que hace olvidar la pregunta inicial.
Contexto	<i>No ha comparecido pese al ¿trasvase? del sumario el otro médico forense emisor del informe médico propiamente dicho, el señor X. Ante esta incomparecencia, ¿hay algún inconveniente en poder celebrar la prueba pericial esta concreta con uno solo de los emitentes dando validez a la jurisprudencia que admite la emisión del dictamen de carácter verbal durante el acto del juicio por uno solo de los mismos, sin perjuicio de la eficacia probatoria del informe ya obrante en autos porque con carácter escrito por vía de prueba documental, hay algún inconveniente por parte del Ministerio Fiscal?</i>
Alternativa sugerida	El señor X, el otro médico forense que emitió el informe médico, no ha comparecido pese al ¿trasvase? del sumario. La jurisprudencia admite que durante el acto del juicio uno solo de los autores pueda emitir verbalmente el informe, sin perjuicio de la eficacia probatoria del informe escrito que consta en autos como prueba documental. ¿Hay algún inconveniente por parte del Ministerio Fiscal en celebrar la prueba pericial con uno solo de los peritos?
Fase del juicio	Fase de pruebas pericial.

Ejemplo 90

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	<i>¿No es más cierto que...?</i>
Justificación	Fórmula enrevesada que lleva a confusión.
Contexto	<i>J: podría haber preguntas claras. AD: vale. J: continúe. AD: la última, señoría ¿no es más cierto que ustedes...? J: es que no es más cierto, bueno, si quiere utilícelo, pero es una fórmula que puede inducir a confusión en las preguntas. AD: muy bien, señoría.</i>
Alternativa sugerida	Usar formas más sencillas de preguntar: <i>¿No es cierto que...?/¿Lo que pasó no fue que...?</i>
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 91

C) ABUSO DE LA VOZ PASIVA

El uso de la voz pasiva resulta poco natural en español, en general; más aún cuando está presente el complemento agente, caso en el que puede sustituirse perfectamente por la construcción activa correspondiente, en la que el complemento agente se transforma en el sujeto de la oración. Es recurrente en el corpus el empleo de la pasiva refleja con *se* y con este complemento agente introducido por un “*por parte de...*” o “*por*”:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	<i>¿El documento que se presenta por usted en la junta es el que ayer se reconoce por la comunidad de propietarios que es el presentado?</i>
Justificación	Construcción agentiva poco natural fuera del lenguaje jurídico.
Contexto	<i>¿El documento que se presenta por usted en la junta es el que ayer se reconoce por la comunidad de propietarios que es el presentado?</i>
Alternativa sugerida	Ayer la comunidad de propietarios reconoció un documento como el que usted había presentado. ¿Es ese el documento que usted presentó?
Fase del juicio	Otro.

Ejemplo 92

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	<i>Su cotejo por el tribunal.</i>
Justificación	Opacidad morfosintáctica por nominalización y pasiva innecesarias.
Contexto	<i>Traemos copia para las partes y original para su cotejo por el tribunal.</i>
Alternativa sugerida	Para que lo coteje el tribunal.
Fase del juicio	Fase de pruebas documental.

Ejemplo 93

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	<i>Se ha indagado por el agente judicial.</i>
Justificación	Construcción agentiva poco habitual fuera del lenguaje jurídico.
Contexto	<i>Según se ha indagado por el agente judicial de este tribunal, son tres personas.</i>
Alternativa sugerida	Según ha indagado el agente judicial de este tribunal, son tres personas.
Fase del juicio	Fase de pruebas documental.

Ejemplo 94

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Que se ha estado mencionando ahora por parte de la demandante.
Justificación	La pasiva refleja con complemento agente es poco natural y, además, más difícil de comprender que la estructura sujeto-verbo-objeto (o la variante en la que se pospone el sujeto al objeto).
Contexto	<i>Sobre el documento este que se ha estado mencionando ahora por parte de la demandante, para aclararlo [...].</i>
Alternativa sugerida	Que ha mencionado ahora la parte actora.

Ejemplo 95

D) UTILIZACIÓN DE TIEMPOS VERBALES OBSOLETOS

Típico del lenguaje judicial, se sigue empleando el futuro de subjuntivo en los juicios orales. La tendencia a emplear estos tiempos es, en el corpus que se ha manejado, exclusiva de Madrid:

Órgano	Contencioso-administrativo.
Elemento o fenómeno lingüístico	Futuro de subjuntivo.
Justificación	Este tiempo es arcaico en español actual.
Contexto	<i>Con estas premisas si tuviere alguna otra prueba distinta que proponer el señor letrado y recurrente en este acto de juicio, tiene la palabra.</i>
Alternativa sugerida	Uso del imperfecto de subjuntivo en vez del futuro: Con estas premisas, si tuviera alguna otra prueba distinta.
Fase del juicio	Fase de pruebas documental.

Ejemplo 96

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Futuro de subjuntivo.
Justificación	Este tiempo es arcaico en español actual.
Contexto	<i>O cualquier otro extremo de efecto procesal que pudiere impedir la continuación del juicio o que afectare a la acción jurídica constituida en el procedimiento.</i>
Alternativa sugerida	Uso del imperfecto de subjuntivo en vez del futuro: efecto procesal que puñera impedir la continuación del juicio o que afectara a la acción jurídica...
Fase del juicio	Fase de pruebas documental.

Ejemplo 97

Órgano	Contencioso-administrativo.
Elemento o fenómeno lingüístico	Futuro de subjuntivo.
Justificación	Variante de "con la venia".
Contexto	<i>Tiene la palabra el señor recurrente y letrado, ¿eh?, además, que se asiste a sí mismo como nos ha manifestado por la habilitación oportuna para manifestar en lo que a su derecho corresponde con relación a la ratificación del escrito de demanda, en su día deducido, y también para hacer las alegaciones que estimare el señor letrado y recurrente oportunas.[Más adelante también dice "afectare"].</i>
Alternativa sugerida	Estimara oportunas.
Fase del juicio	Alegaciones previas.

Ejemplo 98

E) ABUSO DE ADVERBIOS ACABADOS EN -MENTE

Otra de las influencias del lenguaje escrito es el empleo excesivo de los adverbios acabados en *-mente*, que por su naturaleza fónica son muy repetitivos al oralizarlos. En ocasiones, su uso puede entenderse erróneamente como una marca de prestigio, de ahí el ascenso que su empleo está teniendo también en el discurso oral general. Es frecuente encontrar segmentos como el siguiente, que, en pocas líneas, presenta siete de estos adverbios. No es difícil sustituir estos adverbios por locuciones adverbiales con el mismo sentido.

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Adverbios en <i>-mente</i> .
Justificación	Abuso de los adverbios en <i>-mente</i> . El fragmento seleccionado es solo una muestra de apenas 35" en que se usan 6 adverbios de este tipo.
Contexto	<i>La verosimilitud de los hechos, señoría, es muy dudosa. Es muy dudosa porque entendemos que en ningún caso se acreditan ni el- la supuesta caída, ni el golpe ni que esta señora poco menos que fuera flotando durante más de 2 metros y medio con los pies hacia atrás desde donde supuestamente tropezó hasta donde supuestamente se golpeó. Si sufrió los golpes que dice que efectivamente sufrió en la rodillas, en los nudillos, en el pecho, en el abdomen, etcétera, y luego posteriormente volvió a levantarse y volvió a caer con la cabeza sobre el mostrador, lo cual nos parece realmente... alucinante, pues bueno, obviamente como ha dicho el doctor debería haber acudido a urgencias.</i>
Alternativa sugerida	Construcción más cuidada, algunos adverbios son innecesarios (p. ej. luego posteriormente) y otros se repiten (supuestamente).
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 99

F) ALTERACIÓN EN EL ORDEN DE LOS ADJETIVOS

La posición natural de los adjetivos en español es tras el sustantivo al que modifican. Esto es especialmente válido para los adjetivos clasificadores, un conjunto de adjetivos que se caracterizan por no expresar cualidad (como los calificativos), sino estado, religión, nacionalidad, materia, origen, pertenencia o relación; estos adjetivos no pueden cuantificarse, por lo que no admiten cuantificadores como "muy" ("un código muy civil").

Los clasificadores resultan muy extraños si se anteponen (por ejemplo, no se dice *Las británicas tropas* sino *Las tropas británicas*). Sin embargo, se registran ejemplos de este uso:

Órgano	Social (Ciudad Real).
Elemento o fenómeno lingüístico	Legal representante.
Justificación	Alteración del orden del adjetivo clasificador.
Contexto	<i>En primer lugar interrogatorio del legal representante de la demandante,...</i>
Fase del juicio	Fase de pruebas documental.

Ejemplo 100

G) EMPLEO FRECUENTE DE CONECTORES MARCADOS EN DETRIMENTO DE OTRAS OPCIONES MÁS NATURALES

No es en absoluto condenable el hecho de emplear conectores o partículas discursivas variadas en la conversación; el problema surge cuando se abusa de algunos de ellos y cuando estos son, además, infrecuentes en la lengua hablada. En ocasiones se emplean de manera superflua, solo por una voluntad de dar ampulosidad a la forma. Es el caso de ejemplos como

el siguiente de *habida cuenta*, que, además de presentar una incorrección normativa por *queísmo*, no introduce ninguna causa:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Habida cuenta.
Justificación	Demasiado formal.
Contexto	<i>Con carácter previo y habida cuenta que, en estos momentos (2^o), y como proviene de monitorio, aporto en este acto documental, que entiendo que ((1)) momento procesal oportuno de aportarla, señoría, (4^o) correspondiente a 9 documentos.</i>
Alternativa sugerida	Si tenemos en cuenta (...).
Fase del juicio	Fase de alegaciones previas.

Ejemplo 101

Otra de las locuciones más explotadas es *por cuanto*, de la que se abusa con frecuencia en todas las ciudades analizadas. A menudo aparece con la forma incorrecta *por cuanto que*:

Órgano	Atención al cliente (sector privado).
Elemento o fenómeno lingüístico	Por cuanto que hubo un dinero.
Justificación	Estructura morfosintáctica recargada.
Contexto	<i>...el menor principal que ha tenido por cuanto que hubo un dinero que recibió como consecuencia de- de...</i>
Alternativa sugerida	"Porque hubo un dinero".

Ejemplo 102

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Por cuanto.
Justificación	La palabra es difícil de comprender. En este contexto, el significado del neologismo <i>referenciar</i> ('hacer referencia a') parece distinto al que tiene en otra ocasión en ese mismo juicio (la jueza habla de referenciar los documentos: 'dar la referencia de').
Contexto	<i>AA: como cuestión previa, simplemente, modificar parcialmente el hecho quinto de la demanda, en cuanto a los ingresos del marido, por cuanto desde que se interpuso la misma y hasta la actualidad, se han reducido bastante cuantitativamente, tal y como acreditaremos en su momento procesal oportuno.</i>
Alternativa sugerida	Ya que, porque, puesto que...
Fase del juicio	Fase de alegaciones previas.

Ejemplo 103

Asimismo, se abusa de las estructuras tematizadoras o estructuradoras, muy a menudo superfluas o incorrectamente utilizadas:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	¿Por parte de la señora xxx, dice que (...)?
Justificación	Uso injustificado de "por parte de".
Contexto	<i>En el momento en que se le reclama la deuda, ¿por parte de la señora xxx, dice que se le compense por una obra realizada con anterioridad, en la junta?</i>
Alternativa sugerida	¿La señora xxx dice que...?
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 104

Lo mismo sucede con *en cuanto a*, que se emplea con una asiduidad demasiado alta, a pesar de existir otros muchos modos de cambiar o introducir nuevos temas:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Tematizador "en cuanto a".
Justificación	Por frecuente.
Alternativa sugerida	Por lo que respecta a/ En lo tocante a/...
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 105

3.2.2.2. Elisiones

Se ha hablado anteriormente de la tendencia a elidir y confundir la preposición. No obstante, el fenómeno de la elisión no es exclusivo de las preposiciones, sino que se extiende a casi todas las categorías. En un buen número de ocasiones obedece a una supuesta economía, puesto que se eliminan palabras fácilmente recuperables por los profesionales del campo, especialmente términos. El problema estriba en que muchos legos son incapaces de recuperar las partes elididas, precisamente porque son comprensibles solo por expertos. Conviene, en la medida de lo posible, recuperar los términos elididos cuando se esté en presencia de persona no expertas.

Elisiones del sustantivo

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Documental consistente.
Justificación	Opacidad morfosintáctica.
Contexto	<i>Quisiéramos aportar documental consistente en certificación de antecedentes penales de Colombia de mi representado.</i>
Alternativa sugerida	...como prueba documental la certificación...
Fase del juicio	Fase de pruebas documental.

Ejemplo 106

Elisiones del verbo

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Elisión del verbo.
Justificación	Elisión del verbo.
Contexto	<i>Con la venia, señoría, Øpara informar que esta parte actora se ratifica en todos y cada uno de los hechos de nuestros fundamentos de derecho, pedimos sea recibido el "pleito a prueba" y se dicte sentencia estimatoria.</i>
Alternativa sugerida	Con la venia, señoría, informamos de que...
Fase del juicio	Fase de alegaciones previas.

Ejemplo 107

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Elisión del verbo.
Justificación	Elisión del verbo.
Contexto	<i>Con la venia, su señoría, Øpara afirmarnos y ratificamos con las demandas eh presentadas por despido por los dos actores.</i>
Alternativa sugerida	Con la venia, su señoría, nos afirmamos y ratificamos...
Fase del juicio	Fase de alegaciones previas.

Ejemplo 108

En otros casos, se eliden los determinantes, muy especialmente el artículo. Este es el fenómeno de elisión más frecuente en todo el corpus -supone cerca de un 80% de los casos- y afecta a todos los órdenes jurisdiccionales. Contrariamente a lo sucedido en los casos anteriores, eliminar el artículo no se justifica por el ahorro de un elemento consabido, sino que más bien desemboca en una pérdida de precisión en gran parte de los contextos.

Elisiones del artículo

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	¿Usted jura o promete decir verdad?
Justificación	Es bastante común la omisión del artículo y es posible que si en estas formas ritualizadas se recuperase, ocurriría lo mismo en el resto de casos.
Dirigido a	Testigos.
Alternativa sugerida	¿Usted jura o promete decir la verdad?.

Ejemplo 109

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	De oposición.
Justificación	Omisión del artículo.
Contexto	<i>Se da comienzo a la sesión, juicio verbal 500/2010, proviene de oposición a monitorio 1921/09.</i>
Alternativa sugerida	Proviene de una/la oposición al monitorio 1921/09.
Fase del juicio	Fase de apertura.

Ejemplo 110

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Omisión de artículo-formuló denuncia.
Justificación	La omisión de los artículos suele ser común en el lenguaje jurídico.
Contexto	<i>Bien, ¿es cierto que formuló denuncia por sustracción d una tarjeta el...?</i>
Alternativa sugerida	Formuló una denuncia.
Fase del juicio	Otro.

Ejemplo 111

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Omisión de artículo: para informe.
Justificación	Omisión de artículo.
Contexto	<i>El ministerio fiscal tiene la palabra para informe.</i>
Alternativa sugerida	Para el informe.
Fase del juicio	Informe del ministerio fiscal ¿?

Ejemplo 112

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Omisión de artículo: Así que tiene pleito pendiente.
Justificación	Omisión de artículo.
Contexto	<i>Jueza [con ironía]: "Qué bien. Qué maravilla de comunidad". Testigo: "Sí, sí, exacto". Jueza: "Sí, sí, una maravilla. Así que tiene pleito con la parte actora y ahora ha discutido con los demandantes, y va a decir verdad a lo que le pregunte."</i>
Alternativa sugerida	Un pleito pendiente.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 113

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	En contestación a la demanda (omisión del artículo).
Justificación	Omisión del artículo.
Contexto	<i>Usted en contestación a la demanda reconoce la totalidad de la deuda, excepto 90 euros.</i>
Alternativa sugerida	En la contestación a la demanda.
Fase del juicio	Otro.

Ejemplo 114

Nótese que este último ejemplo se refiere a un documento en el que la persona interrogada responde a la demanda; así, la presencia o ausencia de un artículo es determinante, porque en contestación a la demanda significaría 'como respuesta', sin más, mientras que en la contestación a la demanda actualizaría el sustantivo y pasaría a designar el documento en que se pone por escrito dicha respuesta.

3.2.2.3. Usos sexistas o de trato no igualitario

En un juicio ordinario, con todos los actores a la vista, se distingue inmediatamente el sexo del actor, fiscal, testigo, etc. Sin embargo, surgen casos como los siguientes¹:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Señor letrado.
Justificación	A pesar de la abogada es mujer, el juez le da el turno con el tratamiento: Señor letrado.
Contexto	<i>J: Señor letrado...</i>

¹ Comparativamente, se registran en Madrid más casos de uso no igualitario del lenguaje. Algunos se han plasmado en este apartado, pero no se ha comentado nada de su incidencia en el cuerpo del informe porque los datos no permiten conclusiones estadísticamente significativas. No obstante, frente a un caso en Valencia, se han encontrado cerca de diez en Madrid, pese a que el corpus analizado es mucho menor en esta zona.

Alternativa sugerida	Señora letrada.
Fase del juicio	Fase de pruebas documental.

Ejemplo 115

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Falta de concordancia-imputado.
Justificación	Al referirse a la acusada debería ser imputada y no imputado.
Contexto	<i>Pero es que ella en el juzgado, cuando declara como imputado...</i>
Alternativa sugerida	Imputada.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 116

Sin necesidad de renunciar al masculino genérico, existen circunstancias en las que el sexo de la persona referida es evidente, porque está presente o se conocen su nombre y apellidos. En los casos en que dicha persona es una mujer, no es justificable el empleo del masculino. Lo mismo sucede cuando, pese a hacerse explícito el género femenino mediante el artículo antepuesto (la), el nombre del cargo se mantiene en masculino.

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	La letrado.
Justificación	Sexismo lingüístico. La jueza llama a la abogada de la acusación la letrado.
Contexto	<i>J: conteste usted a las preguntas que le formule la letrado de la parte contraria.</i>
Alternativa sugerida	La letrada.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 117

RESUMEN: ERRORES ESTILÍSTICOS	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Usos sexistas.	Sin necesidad de renunciar al masculino genérico, existen circunstancias en las que el sexo de la persona referida es evidente. En los casos en que dicha persona es una mujer, no es justificable el empleo del masculino. Del mismo modo, conviene nombrar los cargos con su variante femenina (<i>la letrada</i>) y evitar el uso de la forma masculina porque resulte más prestigiosa (<i>la letrado</i>).
Elisiones.	En un buen número de ocasiones obedece a una supuesta economía, puesto que se eliminan palabras fácilmente recuperables por los profesionales del campo, especialmente términos. El problema estriba en que muchos legos son incapaces de recuperar las partes elididas, precisamente porque son comprensibles solo por expertos. Conviene, en la medida de lo posible, recuperar los términos elididos cuando se esté en presencia de público no jurista.
Elisión del sustantivo.	Documental consistente / prueba documental.
Elisión del verbo.	<i>Con la venia, señoría, Ø para informar</i> / Con la venia, señoría, informamos de que... <i>Con la venia, su señoría, Ø para afirmamos y ratificamos</i> / Con la venia, su señoría, nos afirmamos y ratificamos...

RESUMEN: ERRORES ESTILÍSTICOS	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
<i>Elisión del artículo.</i>	¿Usted jura o promete decir verdad? / ¿Usted jura o promete decir la verdad? De oposición / una/la oposición. Formuló denuncia / formuló una denuncia. Tiene pleito pendiente / Un pleito pendiente. En contestación a la demanda / en la contestación a la demanda.
<i>Influencias de lo escrito en lo oral.</i>	Las prácticas orales que reproducen el escrito en el ámbito judicial son, además, muy específicas, ya que reproducen una tradición discursiva escrita muy poco recomendable de por sí, en numerosas ocasiones, por su complejidad innecesaria.
<i>Construcciones nominales y similares.</i>	Esta práctica típicamente escrita genera errores colaterales cuando se inscribe en el discurso oral. El abuso de este tipo de estructuras nominales, típico del lenguaje judicial, provoca en el discurso hablado un ritmo lento y pesado, y una mayor dificultad para seguir el hilo de la argumentación o entender las preguntas. Conviene, pues, no abusar de estas construcciones.
<i>Nominalizaciones.</i>	Su cotejo por el tribunal / Para que lo coteje el tribunal.
<i>Participio pasado absoluto.</i>	Acreditados los hechos objetivos / Cuando se hayan acreditado/Una vez acreditados.
<i>Participios de presente.</i>	Emitente / que emitió.
<i>Aspectos sintácticos.</i>	La excesiva complejidad de la sintaxis producida, generalmente, por influencia del discurso escrito, genera incomprensiones y falta de claridad. Sin dejar de ser formal, en el discurso oral conviene, en ocasiones, optar por estructuras oracionales más sencillas y evitar la excesiva complejidad que desemboca en anacolutos y regresiones constantes.
<i>Orden sintáctico.</i>	La alteración del orden natural Sujeto-Verbo-Objeto provoca problemas en el discurso oral: el oyente no puede volver sobre lo dicho, de modo que, o bien el hablante se ve obligado a retornar constantemente a partes del discurso que se han olvidado (tras un inciso, por ejemplo), o bien no lo hace y el oyente no entiende la pregunta. Conviene tratar de mantener el orden natural para evitar una expresión oscura. (Gerundio compuesto) estando separado...habiendo reanudado. El gerundio complica innecesariamente la marcha del discurso y la comprensión por parte del interlocutor. Altera el orden de los constituyentes de la oración. Para interesar por su señoría se dicte sentencia condenatoria... Alteración innecesaria del orden natural / Para interesar que su señoría dicte una sentencia condenatoria...
<i>Complejidad sintáctica.</i>	Es la tendencia a emplear períodos oracionales largos, con abundante subordinación. Cuando esta práctica escrita se traslada a la oralidad, produce el mismo efecto que la alteración del orden de los componentes: la necesidad de volver una y otra vez a segmentos anteriores porque se han olvidado; por descontado, cuando este tipo de complejidad sintáctica se da en un interrogatorio, una consecuencia lógica es que suelen darse incomprensiones. Optar por oraciones más cortas no solo no empobrece el discurso, sino que contribuye a que se entienda mejor:

RESUMEN: ERRORES ESTILÍSTICOS	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
<i>Pasivas.</i>	<p>El uso de la voz pasiva resulta poco natural en español, en general. Aún más cuando está presente el complemento agente, caso en el que puede sustituirse perfectamente por la construcción activa correspondiente, en la que el complemento agente se transforma en el sujeto de la oración. Es recurrente en el corpus el empleo de construcciones pasivas (especialmente con participios) en los que se explicita el complemento agente introducido por un “por parte de...”:</p> <p>¿El documento que se presenta por usted en la junta es el que ayer se reconoce por la comunidad de propietarios que es el presentado? / Ayer la comunidad de propietarios reconoció ayer un documento como el que usted había presentado. ¿Es ese el documento que usted presentó?</p> <p>Su cotejo por el tribunal / Para que lo coteje el tribunal.</p> <p>Que se ha estado mencionando ahora por parte de la demandante / que ha estado mencionando ahora la parte actora.</p>
<i>Abuso de adverbios acabados en -mente.</i>	<p>Otra de las influencias del lenguaje escrito es el empleo excesivo de los adverbios acabados en -mente, que por su naturaleza fónica (tienen un acento primario y otro secundario) son muy repetitivos al oralizarlos. Es frecuente encontrar segmentos como este, que en siete líneas presenta siete de estos adverbios. No es difícil sustituir estos adverbios por locuciones adverbiales con el mismo sentido.</p>
<i>Empleo frecuente de conectores marcados en detrimento de otras opciones más naturales.</i>	<p>El problema surge cuando se abusa de algunos de ellos y cuando estos son, además, infrecuentes en la lengua hablada. En ocasiones se emplean de manera superflua, solo por una voluntad de dar ampulosidad a la forma.</p> <p>Habida cuenta / si tenemos en cuenta (...).</p> <p>Por cuanto que hubo un dinero / “porque hubo un dinero”.</p> <p>Estructuras tematizadoras: ¿por parte de la señora xxx, dice que (...)? / ¿la señora xxx dice que...?</p>

NIVEL PRAGMÁTICO-SITUACIONAL

1. INTRODUCCIÓN. CUESTIONES PREVIAS

El nivel pragmático estudia el desarrollo de la interacción entre los participantes de cualquier situación comunicativa. Aquí se estudian problemas de falta de comprensión, malos entendidos, desajustes entre las formas de comunicar entre distintos hablantes o casos de comunicación fallida.

En los juicios, especialmente en Penal y en Civil, se establece una doble relación comunicativa: la que se da entre los profesionales y la que se crea entre los profesionales y los ciudadanos. La primera relación debería producir un lenguaje especializado, altamente técnico y poco comprensible para las personas ajenas al mismo; la segunda, un lenguaje más coloquial, que los ciudadanos puedan entender. Lamentablemente, en casos de *conflicto*, el primero prima sobre el segundo (a esto no son ajenas cuestiones de *imagen social* y de prestigio relativo o lucimiento personal [delante del cliente o en la sala ante el tribunal]). Esto relega al ciudadano a un segundo plano y, produce, de forma directa o indirecta, fenómenos como los que se describen a continuación:

2. TIPOLOGÍA DE LAS OBSERVACIONES

2.1. Errores por inadecuación al registro o nivel de habla

Es frecuente que **las preguntas excesivamente técnicas** no sean entendidas por los ciudadanos. Esto hace que se tengan que repetir y que necesiten de una o de varias formulaciones sucesivas:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	¿Tiene interés en beneficiar o perjudicar a alguna de estas personas?
Justificación	La testigo no entiende cuando el juez le pregunta sobre si quiere beneficiar o perjudicar a alguna de las personas. Puede ser que la respuesta sea tan obvia que puede dar lugar a confusión.
Contexto	Juez: ¿tiene interés en beneficiar o perjudicar a alguna de estas personas? Testigo 2: ¿beneficiar? (movimiento de manos y cabeza, da señal de no entender).
Autocorrección realizada	Juez: ¿ha venido usted para decir lo que sabe o para decir solo aquello que puede beneficiar o perjudicar a alguno de ellos? Testigo 2: eso es, para decir la verdad.

Ejemplo 118

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Pregunta poco clara.
Justificación	El testigo, en este caso, la parte demandada.
Contexto	Abogado Demandante (ADte): ¿es usted promotor profesional. Testigo (T): ¿promotor profesional? (con un tono de duda o incompreensión de la pregunta? sí sí soy gerente de una empresa promotora.
Alternativa sugerida	Las preguntas han de ser claras y adecuadas en lo posible a las características socioculturales que se le suponen al testigo.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 119

Esto es un problema para el ciudadano, puesto que, como testigo o acusado en un proceso, de sus declaraciones se pueden derivar consecuencias legales. Ello provoca en el mismo una mayor inseguridad, añadida al hecho de que un juzgado es un espacio extraño y que impone. Para los profesionales, por el contrario, estas son fórmulas rutinarias, propias en muchos casos del lenguaje jurídico. Sería conveniente que la primera formulación se hiciera en un lenguaje no especializado porque, de todos modos, ante la falta de comprensión va a ser necesario repetir, simplificada, la formulación inicial.

Obsérvese que los casos de incompreensión pueden producirse incluso entre jueces y abogados:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Pregunta no clara.
Justificación	Porque la abogada no sabe la verdadera intención de la misma o no la entiende bien. Es preciso que la claridad y la simplicidad sean adoptadas en los procesos.
Contexto	J: pero entonces la entrega de este aval que finalmente se ejecuta con esa fecha... ¿la parte demandada la reconoce? Abog.: ¿qué es lo que se me pregunta: cuándo se me entregó el aval? J: la fecha de entrega del aval. Abog.:no lo sé ¿usted lo sabe?
Alternativa sugerida	¿Usted conoce la fecha de entrega del aval?
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 120

Asimismo, se ha comprobado el uso de expresiones excesivamente técnicas, que los ciudadanos -en especial los de nivel sociocultural bajo- no pueden entender:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Expresión excesivamente técnica.
Justificación	Preguntas que hacen que el testigo, como es el caso, no sepa muy bien qué responder y se quede pensativo y en silencio o llegue a contestar algo que puede no ser cierto, como ocurre en el intercambio analizado. Es evidente que si un banco presta dinero a una promotora existe una relación entre ambos.
Contexto	A: ¿conoce usted la () jurídica o la relación jurídica entre el banco y la promotora? T: ¿la relación jurídica...? No. A: sí, la relación que ha tenido el banco, como financiadora, con la promotora.
Alternativa sugerida	La que da el propio abogado después.
Autocorrección realizada	A: sí, la relación que ha tenido el banco, como financiadora, con la promotora.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 121

Como en el caso anterior, estas expresiones provocan una repetición de la pregunta original en términos no técnicos, lo que demuestra la inutilidad de la formulación original.

Al mismo tiempo que se observan excesivos tecnicismos y expresiones de un registro culto que, en ocasiones, dificultan su comprensión, se observa el fenómeno contrario, a saber, una fuerte presencia de **expresiones excesivamente coloquiales**, inadecuadas a la situación en que se emiten.

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Coloquialidad.
Justificación	El abogado de la defensa.
Contexto	¿Cómo tenía el Paco el teléfono móvil suyo a los dos años de usted llegar a... a España?
Fase del juicio	Fase de alegaciones previas.

Ejemplo 122

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Prueba pericial esta concreta.
Justificación	Coloquialismo.
Contexto	¿Hay algún inconveniente en poder celebrar la prueba pericial esta concreta con uno solo de los emitentes...?
Alternativa sugerida	¿Hay algún inconveniente en celebrar la prueba pericial /esta prueba pericial con uno solo de los peritos?
Fase del juicio	Fase de pruebas pericial.

Ejemplo 123

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Bien, pero... es lo que...hay lo que hay, ¿eh?
Justificación	Coloquial.
Contexto	[la letrada de la acusación no quiere renunciar a un testimonio aunque es consciente de la dificultad de localizarlo]. J: bien, pero... es lo que...hay lo que hay, ¿eh?
Alternativa sugerida	Bien, pero es muy poco probable que se consiga.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 124

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	El juez utiliza una palabra como “perras” para referirse al dinero.
Justificación	Coloquial.
Contexto	Y (nombre de la empresa de ascensores), que es una buena empresa, supongo, en fin, y bueno, que han sido clientes etcétera, ¿no tienen posibilidad de mmh...? (El representante de la empresa levanta las cejas y niega). Representante: Lo siento, señoría. Juez: No, aquí es usted el de las perras. (RÍEN).
Alternativa sugerida	Dinero.
Fase del juicio	Fase de apertura.

Ejemplo 125

Se recomienda a los profesionales de la Justicia que, en su interacción con los ciudadanos, utilicen un español culto, sin coloquialismos, pero que no impida la comprensión, del que estén ausentes tecnicismos innecesarios y expresiones que el interpelado no va a comprender: “Sea claro y adecuado, pero no claro para usted, sino para la persona a la que se está dirigiendo”.

RESUMEN: ERRORES POR INADECUACIÓN AL REGISTRO	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Preguntas excesivamente técnicas.	Sería conveniente que la primera formulación se hiciera en un lenguaje no especializado.
Uso de expresiones excesivamente técnicas.	Conviene sustituirlas por expresiones cultas no técnicas.
Expresiones coloquiales, inadecuadas.	Se recomienda evitarlas. La claridad no implica coloquialidad.

60

2.2. Errores por falta de cortesía lingüística

En ocasiones, se observan ciertas **faltas de cortesía** al dirigirse al ciudadano, como ironías hacia el testigo o hacia el acusado, comentarios condescendientes o, a veces, incluso despectivos:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Sin comentarios.
Justificación	La fiscal es irónica, que no procede en este caso.
Contexto	Sin comentarios respecto al testigo.
Alternativa sugerida	No tengo nada que decir.

Ejemplo 126

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Decortesía: Venga, sí, sigue.
Justificación	El juez no respeta la intervención del testigo y le insta a ser más rápido.
Contexto	El abogado de la defensa le pregunta al testigo qué tipo de averías se producían en el ascensor. Tes: averías como que a lo mejor llega un propietario a coger el ascensor/ [pulsa un]=. Juez: [venga, sí, sigue]. Tes: = botón...
Alternativa sugerida	Respetar el turno.

Ejemplo 127

Órgano	Social.
Elemento o fenómeno lingüístico	Descortesía por ironía.
Justificación	Comentario irónico dirigido a las partes.
Contexto	<i>[La jueza le dice a la abogada de la parte demandada que revise el documento que la otra parte aporta como prueba. Ella responde que necesita una fotocopia, y que, además, el documento no es actual. La jueza le contesta que se le va a dar la copia, y que si quiere examinar el documento que ha entregado la otra abogada. La abogada insiste en que los documentos no son actuales].</i> A.: No, no, no. De momento no quiero examinarlo, porque esa vida laboral no me dice cuáles son los ingresos actuales de la- de la actora, lo que. J.: Muy bien, estupendo- ya lo sé, señora letrada, ya lo sé. De todas formas, si ustedes quieren seguir el juicio sin contar conmigo, porque no hacen más que dirigirse la palabra entre ustedes, pues sigan ustedes, y yo me voy, ¿eh?
Alternativa sugerida	Dar una orden directa -educada- de silencio es preferible a la ironía.

Ejemplo 128

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Cuentos los tengo todos.
Justificación	El juez utiliza esta expresión coloquial que resulta descortés.
Contexto	<i>"Puede usted retirarse, que cuentos los tengo todos".</i> La acusada ha traído como testigos a dos familiares, una de las cuales (a la que se dirige en estos términos) no presenció el altercado. También hay que tener en cuenta que las declaraciones de los testigos hacían referencia a sucesos anteriores que no tenían que ver con el asunto que se estaba tratando.

Ejemplo 129

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Así que tiene pleito pendiente con la parte actora y ahora ha discutido con los acusados, y va a decir verdad a lo que le pregunte.
Justificación	Parece que la jueza esté poniendo en duda que el testigo vaya a decir la verdad. Ese comentario es inadecuado.
Contexto	<i>Jueza [con ironía]: "Qué bien. Qué maravilla de comunidad".</i> Testigo: "Sí, sí, exacto". Jueza: "Sí, sí, una maravilla. Así que tiene pleito con la parte actora y ahora ha discutido con los demandantes, y va a decir verdad a lo que le pregunte."
Alternativa sugerida	Evitar ese tipo de comentarios.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 130

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Comentario inapropiado para este tipo de acto.
Justificación	Comentario inapropiado para este tipo de acto.
Contexto	<i>Y buenas son las compañías para adelantar dinero, buenas son...</i>
Alternativa sugerida	Evitar este tipo de comentarios.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 131

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Comentario inapropiado.
Justificación	El abogado hace un comentario que no es políticamente correcto, debe reservarse sus comentarios.
Contexto	<i>Testigo: desde el día 2 en XXXX se montan las carpas por... mala suerte. Abogado defensor: (susurra) o buena suerte.</i>
Alternativa sugerida	Debe reservarse sus comentarios y puntos de vista.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 132

La falta de cortesía también se constata a veces en la interacción entre el juez y las partes:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Lo que tenían que haber hecho es ayer una junta para llegar a un acuerdo, no para traerlo al procedimiento.
Justificación	Ese comentario es un reproche, por el tono de voz y por el contexto.
Contexto	<i>La acusada está revisando un documento (durante más de 20 segundos), y la abogada le pide permiso a la jueza para quitarse la toga. Jueza: "Lo habíamos dicho antes, pero, por favor, AGILICEN, AGILICEN. Lo que tenían que haber hecho es ayer una junta para llegar a un acuerdo, no para traerlo al procedimiento".</i>
Alternativa sugerida	Evitar hacer ese tipo de comentarios en el transcurso del juicio.
Fase del juicio	Otro.

Ejemplo 133

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Descortesía y falta de adecuación al contexto.
Justificación	Descortesía y falta de adecuación al contexto.
Contexto	<i>Pero bueno, vamos a ver a lo mejor si aquí hubiera alguna posibilidad, pues, a lo mejor salen de aquí ustedes con un pleito terminado ya esta mañana, y no (TONO CANSADO) con la perspectiva de- de poner la sentencia, de luego la apelación yy, en fin, más juicios, más, (fin de TONO CANSADO)¿eh? Que no- luego dicen "es que el juez no quiere trabajar" oiga, no, no, es que a mí me cuesta más trabajo eh intentar que lleguen a un acuerdo que ((a ver quién se pone en la silla).</i>
Alternativa sugerida	Abstenerse de valoraciones personales.
Fase del juicio	Conclusiones.

Ejemplo 134

Es común en todos estos ejemplos que las faltas de cortesía las produzca la parte que tiene más poder, por lo que se pueden considerar claramente asimétricas. Por ello, se recomienda que se tenga en cuenta la desigualdad inherente a los juicios para que la parte más poderosa no abuse de su posición haciendo valoraciones ofensivas que no pueden, en dicho contexto, ser respondidas. "Sea cortés".

RESUMEN: ERRORES POR FALTAS DE CORTESÍA LINGÜÍSTICA	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Faltas de cortesía lingüística.	Se recomienda que la parte más poderosa no abuse de su posición haciendo valoraciones ofensivas que no pueden, en dicho contexto, ser respondidas.

2.3. Errores por falta de comprensión de otras variantes del español

Con ciudadanos provenientes de Hispanoamérica, se producen malos entendidos por el uso de variantes no peninsulares del español:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	Comer.
Justificación	Malentendido dialectal.
Contexto	AA: ¿...ya habían cenado y todo? TD: iba... iba... estaban trabajando. Salieron para comer. Llegaron tarde a comer. Y de ahí fueron a recogerme a mi casa. AA: A ver, ¿a comer o a cenar?
Alternativa sugerida	Aunque forma parte de la estrategia argumentativa de la letrada, debe entenderse que en determinadas zonas de Latinoamérica “comer” es ingerir la comida principal del día, sea a la hora que sea. Así lo recoge el DRAE: 3. intr. Tomar la comida principal del día. Almuerza a las doce y come a las siete. Hoy no como en casa.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 135

2.4. Problemas de intercomprensión producidos por otras razones

Con ciudadanos hispanoamericanos, se producen **conflictos por el distinto modo de gestionar la interacción**. Es preciso tener en cuenta los diferentes estilos comunicativos que pueden darse en otras normas del español. En un juicio por violación, la abogada defensora obligó a una testigo colombiana que había sido violada a repetir los insultos con los que su violador se refería al sexo de ella. Como dichas palabras conservan en el español de Colombia un valor fuertemente tabuizado que han perdido en España, la testigo se echó a llorar y fue incapaz de seguir su relato, a pasar de haber contado, hasta ese momento, todos los detalles de la agresión con una gran entereza. Mientras lloraba, el juez y los abogados de las partes se dedicaron a mirar sus papeles, dejando a la testigo sola ante su crisis. Si cualquiera de ellos le hubiera dedicado una palabra de consuelo, la crisis de la testigo se habría resuelto antes. Juez y abogados actuaron como miembros de una cultura de alejamiento (aquella que prima la privacidad sobre la confianza), mientras que la testigo necesitaba que actuaran como miembros de una cultura de acercamiento (aquella que prima la confianza sobre la privacidad).

Asimismo, la obligación a responder *sí* o *no* puede provocar una respuesta ambigua por parte de un hablante cuya cultura le impida realizar afirmaciones tajantes. Esto puede suceder, por ejemplo, con testigos procedentes de las zonas andinas de Perú, Bolivia y Ecuador o con hablantes chilenos.

Caso aparte merece la interacción entre funcionarios y víctimas en las **oficinas de atención al delito**. Dadas las especiales circunstancias que se dan en estos casos, especialmente en el caso de los funcionarios que atienden urgencias, es esencial crear una relación empática con la víctima, para lo que se hace imprescindible una relación comunicativa directa. Sin embargo, el funcionario se ve obligado a realizar un proceso de toma de datos que puede inhibir dicha relación e impedir que la víctima cuente lo que le acaba de pasar. Se recomienda que la entrevista personal se separe del proceso administrativo de toma de datos.

Quisiéramos subrayar la importancia de estas diferencias, que quedan oscurecidas, en el caso de ciudadanos provenientes de Hispanoamérica, por el hecho de compartir un mismo idioma. Por ello, se recomienda que los funcionarios que trabajan en centros de detención

o en oficinas de atención al delito reciban una formación de mediación intercultural y de cortesía verbal.

RESUMEN: PROBLEMAS DE INTERCOMPRESIÓN PRODUCIDOS POR OTRAS RAZONES	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Problemas de intercomprensión.	Se recomienda que los funcionarios que trabajan en centros de detención o en oficinas de atención al delito reciban una formación de mediación intercultural y de cortesía lingüística. Separar la entrevista personal de la fase de toma de datos en las oficinas de atención a las víctimas del delito.

2.5. Otros aspectos de la interacción

En lo relativo al dominio de las técnicas oratorias y de persuasión, se observa el **bajo nivel de conocimientos retóricos** de algunos de los abogados: así, los interrogatorios no suelen estar orientados hacia una determinada conclusión y acaban *in medias res*; es poco frecuente que se tenga en cuenta la argumentación de la parte contraria para contraargumentar; y, en algunos casos, se percibe cierta falta de preparación del caso.

Asimismo, muchos abogados son incapaces de atajar a un testigo que produzca una serie de respuestas vagas:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Pregunta poco clara. Respuesta poco clara. Pregunta clara. Respuesta clara.
Justificación	A pregunta poco clara (verbal o intencionalmente) sigue una respuesta igualmente poco clara. A respuesta directa, respuesta directa (como la del juez). Un lenguaje más próximo hace mayor la comprensión; en este caso, del testigo.
Contexto	ADte: <i>¿a fecha de hoy las viviendas se pueden habitar?</i> T: <i>la promoción está totalmente terminada y, tras conversaciones que hemos tenido con el señor alcalde, es posible que se empiecen a expedir las cédulas de habitabilidad.</i> ADte: <i>Yo no he preguntado eso... (Testigo y Adte discuten sobre la calidad de la respuesta dada por el primero y el abogado se dirige entonces al juez para que le indique al testigo que no conteste con respuestas "pasivas").</i> J: <i>(el juez interviene y toma la decisión de hacer él mismo la pregunta) ¿de lo que se deduce, de las conversaciones con el alcalde, o sea, no tiene cédula de habitabilidad en este momento?</i> T: <i>(el testigo contesta al juez, ahora con una respuesta directa a una pregunta directa) en este momento no hay cédula de habitabilidad.</i>
Alternativa sugerida	La del juez.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 136

En este ejemplo, el juez, que toma la decisión de hacer él mismo la pregunta, redirige el interrogatorio mediante una reformulación de la pregunta con el marcador "o sea", algo que el abogado no había sido incapaz de hacer hasta el momento.

También se observa la **reiteración**, bajo formulaciones distintas, **de una misma pregunta**:

Órgano	Civil.
Elemento o fenómeno lingüístico	Preguntas redundantes.
Justificación	La insistencia al preguntar varias veces lo mismo, de diferentes modos, lleva a poner nerviosos a los testigos. El juez se ve en la necesidad de intervenir.
Contexto	<i>Abog.: Lee los contratos antes de firmarlos oo (...).</i> <i>Abog.: (de nuevo) Pero, cuando usted firma un contrato...</i> <i>J: está contestado ya (...).</i> <i>Abog.: (de nuevo) Cuando firma el contrato con cualquier cliente, incluida esta parte, usted ya conocía los sobrecostos de la cimentación.</i> <i>J: Eso ya se lo ha preguntado antes y ha contestado que sí.</i>
Alternativa sugerida	Simplicidad, brevedad y claridad.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 137

Esta táctica ralentiza el proceso, no obtiene el resultado deseado y solo provoca una reprobación del juez.

También se observan formulaciones vagas de una pregunta:

Órgano	Penal.
Elemento o fenómeno lingüístico	No es cierto que...
Justificación	El juez llama la atención al abogado por la utilización de esta fórmula y pide que formule las preguntas de forma más directa.
Contexto	<i>Es que no es cierto; bueno, si quiere utilícelo, pero es una forma que puede inducir a confusión. Hágale la pregunta.</i>
Alternativa sugerida	Formular preguntas más directas.
Fase del juicio	Fase de pruebas testifical.

Ejemplo 138

Una pregunta formada con una doble negación es mucho más difícil de entender que una pregunta afirmativa y su uso ante testigos de escaso nivel cultural se puede tachar de espurio.

Se ha observado, como rasgo general, que, ante este tipo de estrategias, la reacción de los jueces consiste en apremiar a los abogados de las partes para que vayan al grano, expresando de forma clara sus preguntas. Se recomienda sustituir el actual estilo retórico ampuloso y contrario a la claridad y concisión por otro más centrado en la exposición de argumentos y menos preocupado por el lucimiento personal en el uso de las formas lingüísticas (en términos retóricos, más centrado en la *inventio* [precisión de objetivos] y en la *dispositio* [organización de ideas]). Tal vez una formación retórica en los primeros años de práctica, o incluso en la universidad, podría resolver o minimizar este problema.

RESUMEN: OTROS ASPECTOS DE LA INTERACCIÓN	
ELEMENTO PROBLEMÁTICO	ALTERNATIVA
Bajo nivel de conocimientos retóricos.	Se recomienda sustituir el actual estilo retórico por otro más centrado en la exposición de argumentos (más centrado en la <i>inventio</i> y menos en la <i>elocutio</i>).

AGRADECIMIENTOS

Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento, por su asesoría en todo momento y por facilitarnos siempre la tarea, a Pablo Zapatero, Raquel Ainhoa Paz García de Mateos y Ana María Sánchez Hernández.

Asimismo, agradecemos a las personas que se citan a continuación la ayuda que nos han prestado en la recogida de materiales de los distintos órganos judiciales y órdenes jurisdiccionales, así como de otras unidades y servicios dentro de la Ciudad de la Justicia de Valencia:

A las magistradas y magistrados:

D. José Luis Albiñana
Dña. Rosa Andrés
D. Juan Carlos Artero Mora
D. Salvador Camarena
D. Carlos Climent Durán
D. Juan Florencio Izquierdo
D. M. Ángel González Crespo
D. Juan Guerra Mora
Dña. Carmen Llombart
Dña. Ana Mestre Soro
Dña. Lucía Sanz
D. Lamberto Juan Rodríguez Martínez
Dña. Carmen Torregrosa

A los secretarios y secretarías judiciales:

D. Carlos Aparicio
Dña. Fuen María Blanco Eslava
D. Ángel Bonilla Correa
D. Fernando Carceller
Dña. Pilar Ferrando Mansanet
Dña. Cristina Martín López
D. J. Ramón Santamaría Blasco
Dña Francisca Tomás

A las fiscales:

Dña. Victoria Barrachina
Dña. Gemma García Hernández
Dña. Carmen Lafuente
Dña. Alicia Salabert

En los servicios de información al ciudadano y de atención a las víctimas

Decano de juzgados, D. Pedro Viguier, y al secretario del decanato, D. Luciano Borges, así como a Dña. Pilar Gil.

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV)

Al decano y vicedecana en funciones, D. Francisco Real Cuenca y Dña. María José Santa Cruz Ayo.

Servicio de Orientación Jurídica (SOJ)

Dña. José Luis Piedra y Dña Mercedes Pérez

Bufetes de abogados

Sáez y Santa Cruz
Bonmatí

En concreto, por llevar a cabo las encuestas (test de creencias) en la Escuela de Práctica Jurídica, nuestro más sincero agradecimiento va para D. Juan Añón Calvete, abogado y director de la Escuela de Práctica Jurídica (ICAV), y D. Emiliano Borja Jiménez, catedrático de Derecho Penal; Dña. Ángeles Jareño Leal, Dña. Ángela Matallín Evangelio, ambas profesoras titulares de Derecho Penal, y D. José Pascual Ortells Ramos, profesor asociado, por la realización de dichas encuestas en la Facultad de Derecho de la Universitat de València. Por supuesto, extendemos este agradecimiento a los licenciados de la Escuela de Prácticas y los estudiantes de cuarto año de la asignatura de Derecho Penal que tuvieron a bien rellenar las encuestas.

Agradecimiento especial:

Mención especial merece la colaboración y la gran ayuda de Dña. Regina Marrades Gómez, magistrada de la Sección tercera de la Audiencia provincial de Valencia, del letrado del Ayuntamiento de Valencia, D. Juan Carbonell Martínez y del secretario judicial de Valencia, D. Juan José Tomás, que nos han acompañado por la Ciudad de la Justicia de Valencia, nos han puesto en contacto con todos los colegas citados anteriormente y, sin duda, nos han facilitado infinitamente la investigación.

ESTUDIO DE CAMPO:
PLANTILLAS PROCESALES
COMISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO

Dirigido por Julio Borrego Nieto, (Universidad de Salamanca).

Juan Felipe García Santos, José Antonio Bartol Hernández y Álvaro Recio Diego.

ÍNDICE

1. DOCUMENTOS QUE HAN SERVIDO DE BASE PARA EL INFORME	4
2. DISFUNCIONES LINGÜÍSTICAS. DIAGNÓSTICO	6
1. Usos lingüísticos que dificultan en grado diverso la comprensión	6
2. Usos lingüísticos incorrectos	13
3. SOBRE EL VOCABULARIO	18
1. Tecnicismos del subgrupo 1: no fácilmente sustituibles y oscuros incluso para personas cultas	19
2. Tecnicismos del subgrupo 2: no fácilmente sustituibles pero inteligibles, al menos para personas cultas	20
3. Tecnicismos del subgrupo 3 y marcas de registro: sustituibles, en principio, por otros términos	21
4. ANEXO I. DOCUMENTOS DEL PAÍS VASCO	24
1. Documentos que han servido de base para el informe	24
2. Consideración general	24
3. Análisis y comentarios	25
4. Conclusión	30

DOCUMENTOS QUE HAN SERVIDO DE BASE PARA EL INFORME

El equipo ha analizado una muestra de 103 plantillas de la Administración Central, tomadas de los siguientes apartados:

PRIMERA ENTREGA

Jurisdicción civil. El juicio cambiario.

Jurisdicción civil. El juicio verbal de desahucio.

Jurisdicción penal. Juicios de faltas.

Jurisdicción contencioso-administrativa. Procedimiento abreviado en materia de extranjería.

SEGUNDA ENTREGA

Jurisdicción civil. Declaración de herederos ab-intestato.

Jurisdicción civil. Modificación de medidas de separación y divorcio.

Jurisdicción civil. Separación y divorcio contenciosos.

Jurisdicción penal. Instrucción. Diligencias previas.

Jurisdicción penal. Enjuiciamiento rápido.

Jurisdicción contencioso-administrativa. Ordinario de urbanismo.

La muestra se ha completado con 35 plantillas correspondientes a la Administración del País Vasco. Los apartados recibidos, y de los que se ha extraído dicha muestra, son los siguientes:

Jurisdicción penal. Diligencias previas.

Jurisdicción penal. Juicio de faltas.

Jurisdicción penal. Procedimiento de enjuiciamiento rápido de determinados delitos (juzgados de instrucción).

Jurisdicción penal. Procedimiento de enjuiciamiento rápido de determinados delitos (juzgados de lo penal).

Jurisdicción social. Procedimiento de despido.

Jurisdicción social. Procedimiento de reclamación de cantidad.

Jurisdicción social. Procedimiento en seguridad social.

Aunque en el análisis global se han tenido en cuenta todos los documentos y con todos ellos se ejemplifica, se ha estimado oportuno dedicar un apartado especial a los procedentes de la Administración Vasca. Se trata del ANEXO I del presente informe.

DISFUNCIONES LINGÜÍSTICAS. DIAGNÓSTICO

En el análisis de los textos se observan determinadas características lingüísticas cuyo cambio o modernización los mejoraría de forma notable. Algunas de esas características repercuten únicamente en la configuración estilística de las plantillas o los hacen desaconsejables desde el punto de vista de la norma académica. Otras, sin embargo, ponen en peligro la comprensión misma de los textos. Aunque desde el punto de vista operativo son las segundas las más necesitadas de corrección, el mantenimiento de las primeras confiere a las piezas jurídicas un tufillo rancio y arcaizante que las hace parecer ajenas a los usos habituales del ciudadano y que, por tanto, conviene evitar. Naturalmente, aunque en este informe se separen por conveniencia metodológica, ambas modalidades conviven en las muestras analizadas.

1. USOS LINGÜÍSTICOS QUE DIFICULTAN EN GRADO DIVERSO LA COMPRENSIÓN

Una de las características más visibles, que afecta a un buen número de las plantillas analizadas, es la **agrupación de los contenidos en párrafos excesivamente largos y complejos**, llenos, además, de meandros sintácticos y de los incisos que se mencionan en el apartado siguiente. El resultado es un texto trabado y de comprensión dificultosa, y ello aunque las construcciones resultantes no sean exactamente incorrectas desde el punto de vista normativo. Véase como ejemplo el texto siguiente:

(1)

En el marco de la investigación civil, amparada en el art. 113.1 f) de Protección de los Derechos e Intereses de Menores e Incapacitados, de la Ley General Tributaria y en el art. 36 de la Ley General de la Seguridad Social reformada por Ley 14/2000, el Juez de 1º Instancia solicita información patrimonial referente a la persona/entidad que a continuación se menciona, y para la protección de los derechos e intereses de menores e incapacitados, consultando para ello las bases de datos de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como todas aquellas bases o registros a los que se tenga acceso por vía telemática.

La comprensión mejoraría notablemente si el párrafo, que constituye una oración única, se dividiera en dos, por ejemplo así (en el texto se introducen, además, otras modificaciones menores, que en este momento no son objeto de atención):

En el marco de la investigación civil, amparada en el art. 113.1 f) de Protección de los Derechos e Intereses de Menores e Incapacitados, de la Ley General Tributaria y en el art. 36 de la Ley General de la Seguridad Social, reformada por Ley 14/2000, el Juez de Primera Instancia solicita información sobre el patrimonio de la persona/entidad que a continuación se menciona, con vistas a la protección de los derechos e intereses de menores e incapacitados. Se consultarán para ello las bases de datos de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como todas aquellas bases o registros a los que se tenga acceso por vía telemática.

La división de la oración en tres párrafos mejoraría aún más el texto:

El Juez de Primera Instancia solicita información sobre el patrimonio de la persona/entidad que a continuación se menciona, con vistas a la protección de los derechos e intereses de menores e incapacitados. Se consultarán para ello las bases de datos de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como todas aquellas bases o registros a los que se tenga acceso por vía telemática. Todo ello en el marco de la investigación civil, amparada en el art. 113.1 f) de Protección de los Derechos e Intereses de Menores e Incapacitados, de la Ley General Tributaria y en el art. 36 de la Ley General de la Seguridad Social, reformada por Ley 14/2000.

Véanse otros ejemplos:

(2)
Requírase al ejecutado D./D^a Datos de Persona a fin de que, en el plazo de |TX|INSERTE PLAZO |||FTX| días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

(3)
Primero.- *Dispone el artículo 22, en sus apartados 1 y 2, de la L.E.C., que cuando por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvenición, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se pondrá de manifiesto esta circunstancia al tribunal y, si alguna de las partes sostuviere la subsistencia de interés legítimo, negando motivadamente que se haya dado satisfacción extraprocésal a sus pretensiones o con otros argumentos, se convocará a las partes a una comparecencia y el tribunal decidirá si procede o no continuar el juicio.*

En el ejemplo (3) la comprensión viene dificultada aún más por la confluencia de otras características, como tecnicismos y fórmulas arcaicas, que serán mencionadas en algunos de los párrafos de abajo.

Traba también considerablemente la lectura **la acumulación de incisos**, que impide que este corra de manera fluida. Tales incisos, son, con frecuencia, datos referidos al proceso o al acto judicial de que se trate, como en el ejemplo siguiente:

(4)
Conforme a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el recurso contencioso-administrativo con los datos al margen, interpuesto por Datos de Persona contra resolución de esa Administración de fecha Datos de Procedimiento dictada en expediente Datos de Procedimiento sobre Datos de Procedimiento, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 48 de la LJCA, siendo necesarios el/los expediente/s que motivaron la/las resolución/ones impugnada/s, solicito a V. I.: [tex.pil.].

El texto ganaría en fluidez si los datos requeridos figuraran al margen o en otro lugar fijo del escrito y se remitiera a ellos, de una manera similar a esta:

Conforme a lo acordado en la resolución de [fecha], dictada en recurso contencioso-administrativo cuyos datos figuran al margen, y en cumplimiento del artículo 48 de la LJCA, es necesario disponer del expediente que motivó las resoluciones impugnadas. Por ello, solicito a V.I:

Los incisos, sin embargo, pueden ser también de otros tipos, como en los ejemplos siguientes:

(5)

Según doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (St. 18-4-85), rigiendo en el juicio de faltas el sistema acusatorio penal, conforme al cual la facultad de juzgar depende de que el Ministerio Fiscal y el acusador particular, o privado, promuevan la acción de la justicia, aplicado lo anterior al presente caso, no sostenida acusación por ninguna de las partes, y sin que vistas las circunstancias del hecho proceda utilizar el trámite dispuesto en el artº 644 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni aplicaren en su caso por "analogía" lo prevenido en el artº 733 de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, plantear la "tesis", procede dictar sentencia absolutoria, conforme a lo solicitado.

(6)

La L.E.C. establece en su artículo 215.2 que, si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado por el secretario judicial de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla.

El texto (7) de abajo es de comprensión complicada para el profano por la combinación de ambos tipos de incisos:

(7)

Por presentado el anterior escrito con fecha de Datos de Procedimiento por Datos de Persona, |TX|INSERTAR SI LO HACE A TRAVÉS DE SU PROCURADOR O ABOGADO CON RESEÑA DEL MISMO|||FTX| y habiéndose registrado la/s sesión/es del juicio oral celebrado en el presente Juicio de faltas en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen, |TX|INSERTAR SI PROCEDE EL FORMATO DE GRABACIÓN UTILIZADO|||FTX|, |TX|ACEPTAR SI SE PIDEN LAS COPIAS CON MOTIVO DE INTERPONER APELACIÓN| con suspensión del plazo para la interposición de recurso de apelación contra la Sentencia dictada en las presentes actuaciones, |FTX| expídase a su costa copia de la grabación original efectuada, conforme autoriza el artículo 972 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. |TX|ACEPTAR SI LAS COPIAS SE PIDEN CON MOTIVO DE INTERPONER APELACIÓN||De conformidad con el artículo 790.1 de la LECRIM, una vez consten entregadas las copias solicitadas, entiéndase reanudado el cómputo del plazo para interponer recurso de apelación por el término que reste, sin necesidad de nueva resolución. |FTX|.

En alguno de los fragmentos analizados, aunque no es lo más frecuente, las construcciones sintácticas, además de ser barrocas, resultan incorrectas. He aquí un ejemplo característico, en que la construcción se trunca porque queda confuso el sujeto del infinitivo *incluir*, que además carece de objeto directo:

(8)

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código-contencioso-Reposición". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formado dd/mm/aaaa.

Una versión del mismo texto, con la sintaxis corregida, podría ser esta:

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá incluirse **[adición de un se de pasiva refleja para orientar sobre el sujeto del infinitivo]**, tras el número de cuenta señalado y con un espacio de separación, la indicación "recurso", seguida del "codigo-contencioso-Reposición" **[la supresión de la preposición con hace que el verbo incluir se construya de manera adecuada]**. En caso de que se efectúen varios pagos en la misma cuenta, deberá realizarse un ingreso por cada concepto, incluso si corresponden a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones, mediante el formado dd/mm/aaaa, la fecha de la resolución recurrida.

He aquí algún ejemplo más:

(9)

*Adjunto remito a |TX|V.E. o Vd.|||FTX| cédula de emplazamiento dimanante de Autos de Procedimiento Judicial del art. 41 de la Ley Hipotecaria **[se percibe mal a quién complementa lo subrayado]** seguidos en este Juzgado al número referenciado **[no asigna con facilidad el complemento subrayado]** a instancia del/de la Procurador/a D/ña Datos de Profesionales.*

(10)

Por presentado [falta de nuevo el núcleo del complemento subrayado : “¿Se tiene por presentado?”] el anterior escrito con fecha de |TX|INSERTAR FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ESCRITO|||FTX| por |TX|INSERTAR QUIÉN PRESENTA EL ESCRITO|||FTX| [el complemento agente queda demasiado lejos del participio], interponiendo recurso de apelación contra la Sentencia dictada en el presente juicio de faltas, únase a las actuaciones de su razón a los fines procedentes [o se pone punto o se vincula de otra forma la oración subrayada a las anteriores. pero si se pone punto, la oración anterior queda sin verbo principal].

Se detectan, por otra parte, determinadas **construcciones ambiguas**, esto es, interpretables de más de una manera, ya sea por motivos estructurales o gramaticales, ya por un uso poco preciso de la puntuación. Esto último es lo más frecuente. Ejemplos:

(11)

Regístrense las actuaciones recibidas como diligencias previas, cumpléndose lo dispuesto en los artículos 301 y 302.

La laxitud en las relaciones sintácticas típica del gerundio hace que la expresión no resulte clara: ¿quiere decirse que así se cumple lo dispuesto por esos artículos? ¿O que se procede así para que se cumplan? ¿O más bien se conmina a que se cumplan?

(12)

ACUERDO:

-Declarar la incompetencia territorial de este órgano judicial [en el contexto, no queda claro de cuál] para conocer del presente recurso.

(13)

En el presente caso los recursos que se relacionarán en la parte dispositiva de esta resolución tienen por objeto |TX|INSERTAR OBJETO|||FTX| que es idéntico en todos ellos y no se han acumulado, por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley, procede la tramitación preferente del/los |TX|INSERTAR RECURSO/S|||FTX| y la suspensión del curso de aquéllos hasta que en éste/estos recaiga sentencia [de nuevo, no queda clara la referencia de los demostrativos].

(14)

De la valoración presentada se dio traslado por diez días [no queda claro a qué afecta este plazo] a D./Dª. Datos de Persona.

En la misma línea, el texto que sigue tiene, al menos para el profano, dos interpretaciones:

(15)

*Solicitada por |TX|INSERTAR QUE PARTE SOLICITA TERMINACION|||FTX| la terminación del presente proceso, al amparo de lo previsto en el artículo 22.1 de la L.E.C., se pone en conocimiento de la parte contraria para que, en el plazo de **DIEZ DIAS**, manifieste su acuerdo u oposición con lo interesado, entendiéndose que si no contesta en el plazo indicado muestra conformidad.*

PRIMERA INTERPRETACIÓN

La parte |TX|INSERTAR QUE PARTE SOLICITA TERMINACION|||FTX| ha solicitado la terminación del presente proceso al amparo de lo previsto en el artículo 22.1 de la L.E.C., lo que se pone en conocimiento de la parte contraria para que, en el plazo de **DIEZ DIAS**, manifieste su acuerdo u oposición con lo solicitado, entendiéndose que si no contesta en el plazo indicado muestra conformidad.

SEGUNDA INTERPRETACIÓN

La parte |TX|INSERTAR QUE PARTE SOLICITA TERMINACION|||FTX| ha solicitado la terminación del presente proceso. Lo cual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la L.E.C., se pone en conocimiento de la parte contraria para que, en el plazo de **DIEZ DIAS**, manifieste su acuerdo u oposición con lo solicitado, entendiéndose que si no contesta en el plazo indicado muestra conformidad.

Lo mismo le ocurre a este otro, y por la misma razón, es decir, porque no se sabe si las normas legales citadas sirven de fundamento a lo que precede o a lo que sigue:

(16)

Habiéndose considerado por la parte demandada que su lugar en el proceso debe ser ocupado por el tercero comparecido, |TX|INSERTAR TERCERO COMPARECIDO|||FTX|, según lo establecido en la regla 4ª, apartado 2, del artículo 14, en relación con el artículo 18 de la L.E.C., acuerdo dar traslado a las demás partes, por CINCO DIAS, para que aleguen lo que a su derecho convenga.

Se percibe en algunos textos un **exceso de nominalizaciones**, es decir, de referencia a acciones por medio de sustantivos, cuando podría hacerse lo mismo mediante verbos. La construcción nominal suele ser menos fluida que la verbal, además de comprimir y hacer abstracto el texto, lo que siempre dificulta su lectura. Así, en lugar de escribir:

(17)

por lo que no ha lugar a la estimación de la petición de acumulación.

podría haberse cambiado alguno de los sustantivos por una oración:

- a. por lo que se desestima la petición de acumulación.
- b. por lo que se desestima la petición de que se acumulen.

Otro ejemplo: el fragmento:

(18)

Habiéndose recibido en este órgano judicial la precedente oposición de la parte demandada respecto al desistimiento solicitado de contrario, deo las actuaciones para acordar lo pertinente.

Tendría esta forma si se emplea un estilo más “verbal” y menos “nominal”:

Se ha recibido en este órgano judicial el escrito que precede, en el que la parte demandada se opone al desistimiento solicitado por la parte contraria. En consecuencia, deo en suspenso las actuaciones para acordar lo que corresponda.

Contribuye asimismo a una sintaxis barroca que dificulta la lectura la **alteración del orden habitual** de los elementos oracionales, con especial tendencia al orden “verbo + sujeto + subordinada con que”, en lugar de “sujeto + verbo + subordinada con que”, disposición más habitual y más neutra en español. En ocasiones incluso se intercalan incisos o comas normativamente inadecuadas entre el sujeto (subrayado abajo) y *que*:

(19)

Dispone el artículo 13.1 de la L.E.C., que mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite un interés directo y legítimo en el resultado del pleito.

(20)

Dispone el art. 117.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria al proceso penal en virtud de lo previsto en los artículos 85 y 54 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que cuando el tribunal aprecie que la causa de la recusación alegada no es de las tipificadas en la ley declarará no haber lugar a la recusación.

La alteración del orden a que se alude en el apartado anterior suele acompañar a un **uso innecesario de la pasiva**, sobre todo de la construida con *se*. Nótese, por otra parte, que en los ejemplos que siguen hay dos tendencias contrarias a la “sintaxis llana”: la aparición del complemento agente (la persona que realiza la acción), que suele omitirse en las pasivas con *se*, y la colocación de aquel delante del verbo. Así, en lugar de:

(21)

Por la demandada se manifiesta tener interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo.

Convendría escribir:

La demandada manifiesta que tiene interés legítimo en la continuación del proceso, para que se dicte sentencia sobre el fondo.

Otros ejemplos:

(22)

Por la parte |TX|INDIQUE QUÉ PARTE QUE HA SOLICITADO LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS|||FTX| se presentó escrito solicitando la acumulación a este proceso del/los siguiente/s autos, también seguidos ante este órgano judicial con el número |TX|INSERTAR DATOS PROCESO QUE SE PRETENDEN ACUMULAR|||FTX|.

(23)

Por el tribunal |TX|INSERTAR DATOS DE TRIBUNAL REQUERIDO DE ACUMULACIÓN|||FTX|, se ha dictado resolución por la que acepta el requerimiento de acumulación de los autos.

En el texto que sigue, además de las pasivas innecesarias (*ser conducido, ser perseguido*), se percibe otra característica frecuente, y es la **proliferación de infinitivos** en lugar de las correspondientes formas personales del verbo. El infinitivo agiliza la expresión, pero tiene el inconveniente de que sus sujetos no son explícitos, lo que puede llevar a atribuciones erróneas:

(24)

250000 2ª CITACION: CONDUCCIÓN F.PUB. Y DELITO OBS.JUST. PL10

-Podrá acordar ser conducido por la Fuerza Pública ante este Juzgado, así como el apercibimiento de ser perseguido como reo del delito de obstrucción a la justicia tipificado en el artículo 463.1 del Código Penal, por ser el segundo llamamiento.

Por último, en las mismas construcciones se suprime el artículo del sujeto con una intensidad mayor de lo esperable:

(25)

Por Datos de Persona, se formuló recusación contra el Secretario Judicial de este Tribunal, D. Datos de Juez, por los siguientes motivos: |TX|INSERTAR SUCINTAMENTE CAUSA O MOTIVOS RECUSACION|||FTX|.

(26)

Por Datos de Persona, se presentó escrito formulando recusación del Secretario Judicial titular de este Órgano Judicial, por considerar que está incurso en |TX|INSERTAR SUCINTAMENTE CAUSA O MOTIVOS DE RECUSACION|||FTX|.

(27)

Por el Secretario Judicial recusado se emitió informe negando la certeza de la causa de recusación por las razones que figuran en el mismo, dándose el trámite establecido en el art. 118 L.E.Civil.

(28)

En este órgano judicial se tramitan autos de referencia, en los que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 279 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pero lo que más contribuye a caracterizar el lenguaje jurídico son ciertas **formas morfológicas arcaizantes** (entre las que sobresale el futuro de subjuntivo en *-ere*), determinadas **fórmulas sintácticas petrificadas** y, sobre todo, una gran cantidad de vocabulario específico, rasgos responsables, en buena medida, del carácter críptico que este lenguaje tiene para el ciudadano medio. He aquí algunos ejemplos de los rasgos morfológicos y las fórmulas sintácticas mencionadas:

(29)

Establece el art. 121 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que todos los que sean parte en una causa, si no se les hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tendrán obligación de satisfacer las indemnizaciones de los testigos que presentaren, cuando al declarar, hubiesen formulado su reclamación y el Juez o Tribunal la estimaren, añadiendo en su párrafo segundo que ni durante la causa ni después de terminada tendrán la obligación de satisfacer las demás costas procesales, a no ser que a ello fueren condenados.

(30)

se acordó la ratificación del solicitante, lo que tuvo lugar en el día señalado, y practicada que fue a continuación información testifical, se remitió el expediente al Ministerio Fiscal para dictamen.

(31)

Tener por renunciado en la representación que ostenta; sin embargo, no podrá abandonar la representación en tanto el poderdante designe nuevo profesional que le represente.

(32)

Segundo.- |TX|*INSERTE FUNDAMENTO CONCRETO QUE DESESTIMA ACUMULACION*|||FTX|, por lo que no ha lugar a la estimación de la petición de acumulación.

(33)

Se ha recibido escrito de la parte demandada allanándose parcialmente a las pretensiones de la parte actora, respecto del que acuerdo dar traslado a la misma para que inste lo que a su derecho convenga a los efectos del artículo 21.2 de la L.E.C.

Aunque son menos abundantes de lo que las largas y sinuosas oraciones harían esperar, existen en las plantillas algunos errores de concordancia y casos de anacoluto, es decir, de oraciones en que se quiebra la construcción sintáctica. Abajo se ofrecen ejemplos de ambos fenómenos:

(34)

*Señalar para su celebración el próximo día Agenda, que tendrá lugar en |TX|*INSERTAR LUGAR DE CELEBRACION*|||FTX|, citando a las partes para dicho acto. [Tal y como está construido, es “el día” el que “tendrá lugar”]*

(35)

consultando para ello las bases de datos de la Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de cuantas bases de datos o registros tenga acceso vía telemática. [Es decir, según el texto, se consultarán las bases de datos de cuantas bases tenga acceso. la frase, como se ve, carece de sentido]

(36)

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta [el sujeto es múltiple, por lo que el verbo debería ir en plural] al pie de la presente, extendiendo esta cédula en Datos de Órgano Judicial, a Fecha.

(37)

En este órgano judicial se admitió a trámite demanda de [DATOS DE PROCEDIMIENTO] seguido [si se refiere a demanda debería decir seguida] a instancia de Datos de Persona, frente a Datos de Persona..

El **vocabulario específico** de las plantillas y de los textos jurídicos en general debe ser objetivo fundamental de la modernización, por lo que se le dedica apartado propio (el 4. de este documento). Se avanza, no obstante, que existen dos tipos fundamentales de términos:

1. **Tecnicismos:** se trata de vocablos que recogen conceptos específicos del ámbito judicial. Algunos vocablos de este tipo podrían ser *actuaciones, alegaciones, auto, enervación, parte, contraparte, incoar e incoación, delitos dolosos, desistir y desistimiento, impugnar e impugnación, providencia, recurrir y recurso, sobreseer y sobreseimiento, vista*, etc. Es propio de los tecnicismos el que no se pueden sustituir por vocablos equivalentes, sino por paráfrasis más o menos extensas. No obstante, como se señalará en el apartado 4., quizá sea posible proponer sustitutos para algunos de ellos.

2. **Términos que tienen, dentro del ámbito judicial, un uso frecuente e incluso peculiar, pero que no son propiamente tecnicismos, por lo que podrían ser sustituidos por otros de la misma significación pero más comprensibles.** Algunos ejemplos podrían ser *referenciar, dar traslado, estar incurso en, interesar a alguien a que haga algo, librar algo, obrar y obrante(s), remitir y remisión, sito*.

Pese a la importancia de la división anterior, fundamental para decidir el sentido en que debe ser modernizado el léxico jurídico, no siempre es fácil determinar a cuál de los dos sectores se adscribe una pieza léxica o si es preciso proponer subdivisiones dentro de ellos.

A modo de ilustración, véase un texto en que la acumulación de léxico técnico, aunque no demasiado especializado, traba la lectura y dificulta la comprensión:

(38)

Primero.- Se dispone en los apartados 1, 2 y 3, del artículo 19 de la L.E.C., que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo.

2. USOS LINGÜÍSTICOS INCORRECTOS

Se recogen en esta sección una serie de características que no impiden o ni siquiera dificultan la comprensión, pero que son tenidos por no conformes con las normas académicas y que, por tanto, deben ser evitados en cualquier documento de carácter culto.

Se registran en las plantillas ciertos **usos incorrectos de la tilde**, bien por acción, bien por omisión:

(39)

Designado perito, se emitió dictámen, del que se dió traslado a las partes con el resultado que consta en las actuaciones.

(40)

si deja pasar dicho plazo sin evacuar el traslado o no efectua oposición motivada con concreción de los puntos en que discrepa de la relación presentada, se entenderá que presta su conformidad a los hechos alegados por la parte contraria.

(41)

UNICO: Que el artículo 2011 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece que [...].

(42)

Yo, el/la Secretario judicial, teniendo a mi presencia al/a la |TX|INSERTAR SI ES IMPUTADO/A PROCESADO/A CONDENADO/A|||FTX| **Datos de Persona**, le requiero para que se abstenga de residir y/o acudir a |TX|LUGAR/ES|||FTX|, así como de acercarse a |TX|INSERTAR DISTANCIA Y PERSONA/S A LAS QUE NO DEBE ACERCARSE|||FTX| bajo apercibimiento de ser inculcado por incurrir en el delito de quebrantamiento de condena si no respeta la prohibición que le ha sido impuesta.

Existen, asimismo, ejemplos de **puntuación inadecuada**, aunque sin producir la ambigüedad que se señala en 3.1.4., por lo que no han sido recogidos allí:

(43)

Por providencia de |TX|FECHA PROVIDENCIA|||FTX|, se acordó la ratificación del solicitante, lo que tuvo lugar en el día señalado, y practicada que fue a continuación información testifical, se remitió el expediente al Ministerio Fiscal para dictamen, el cual emitió los obrantes en autos, no oponiéndose finalmente a que se autorice la venta de los bienes inmuebles solicitada, **no obstante [salvo que esté en inciso, no obstante va precedido de punto o punto y coma] una vez autorizada dicha enajenación por el Juzgado, deberá acreditarse.**

(44)

Dispone el artículo 13.1 de la L.E.C., que [la oración subordinada introducida por que no se separa por coma] mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien [tampoco el sujeto se separa por coma de su verbo] acredite un interés directo y legítimo en el resultado del pleito.

(45)

La acusación popular que interponga recurso, consignará [de nuevo un sujeto separado por coma de su verbo] como depósito, la cantidad [ahora se hace lo mismo con el objeto directo] de 25 euros en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" de este Juzgado, cuenta Datos de Órgano Judicial, abierta en la Entidad Bancaria Datos de Órgano Judicial, lo que deberá ser acreditado.

(46)

PRIMERO.- Dispone el artículo 716 de la LEC, en su primer párrafo que [falta la coma que cierre el inciso], dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se celebre la vista, el tribunal dictará, por medio de auto, la resolución que estime justa, fijando la cantidad que deba abonarse al acreedor como daños y perjuicios.

Otros rasgos ortográficos inadecuados (en general, son poco frecuentes, y podría tratarse de erratas):

(47)

acuerdo citar a las partes a la vista prevenida en el artículo 443 de la L.E.C., tras la cual el Juez dictará sentencia por la que se declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la demanda habiendo lugar al deshaucio.

Resulta muy habitual en el lenguaje jurídico y administrativo, y también se detecta en las plantillas, la **profusión innecesaria de letras mayúsculas** y, sobre todo, la falta de sistematicidad en su uso, de modo que, con frecuencia, aparecen unas veces sí y otras no para el mismo término en el mismo documento. He aquí algunos ejemplos:

(48)

una vez firme la sentencia, el Secretario judicial llevará testimonio de la misma a los recursos suspendidos.

(49)

MODO DE IMPUGNACION

Recurso de apelación en un solo efecto en el plazo [...]

MODO DE IMPUGNACION

Recurso de Reposición en el plazo [...].

(50)

PARTE DISPOSITIVA

***SE INADMITE** a trámite la recusación formulada por Datos de Persona respecto al Secretario Judicial titular de este Órgano Judicial.*

***MODO DE IMPUGNACIÓN:** mediante interposición, ante este Órgano judicial, de **RECURSO DE REFORMA** en el plazo de **TRES DIAS**.*

Aparecen de modo muy reiterativo en las plantillas (como en los textos jurídicos en general) **usos del gerundio que se tienen por incorrectos** desde el punto de vista de la norma académica. Uno de ellos es el llamado “de posterioridad”, es decir, el que alude a un tiempo posterior al del verbo principal. En realidad se emplea como mero enlace para acumular todos los datos en una sola oración, de acuerdo con la tendencia descrita en 3.1.1. Así ocurre en los ejemplos siguientes:

(51)

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, adjunto devuelvo las |TX|INSERTAR PROCEDIMIENTO|||FTX| de ese Juzgado, al haberse rechazado la competencia para el conocimiento de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 759.1 LECRIM., elevándose en esta misma fecha exposición razonada a |TX|INSERTAR SUPERIOR JERARQUICO COMÚN|||FTX|.

Lo aconsejable, en el párrafo anterior, es dividir la oración en dos y prescindir del gerundio. Así:

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, adjunto devuelvo las |TX|INSERTAR PROCEDIMIENTO|||FTX| de ese Juzgado, al haberse rechazado la competencia para el conocimiento de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 759.1 LECRIM. Se eleva en esta misma fecha exposición razonada a |TX|INSERTAR SUPERIOR JERARQUICO COMÚN|||FTX|.

El texto que sigue es un segundo ejemplo:

(52)

Seguidamente, consultado el/la Secretario judicial de la agenda programada de señalamientos, se señala para la |TX|ELEGIR LO QUE PROCEDA|||FTX| de la presente el próximo día Agenda, quedando citadas las partes en este acto, sin necesidad de nueva citación.

El otro uso detectado que la Real Academia Española desaconseja es aquel en que el gerundio actúa como un adjetivo sustituible por una oración de relativo. En el texto de abajo hay dos ejemplos:

(53)

Se ha presentado escrito de la demandante, solicitando se dicte auto acogiendo las pretensiones allanadas por la parte demandada, respecto del que acuerdo dar cuenta a SSª para dictar la resolución pertinente.

Se propone que el párrafo se redacte de la siguiente forma:

La parte demandante ha presentado escrito en el que solicita que se dicte auto que acoja/recoja las peticiones acordadas con por la parte demandada. En consecuencia, acuerdo comunicarlo a SSª para que dicte la resolución pertinente.

Por último, he aquí un texto en que se recogen a la vez los dos usos descritos:

(54)

se ha/n presentado escrito/s manifestando que la referida resolución ha omitido pronunciarse sobre la pretensión consistente en |TX|INSERTE PRETENSIÓN CONCRETA QUE SE PRETENDE COMPLETAR|||FTX|, la cual, a su juicio, había sido alegada oportunamente y sustanciada en el proceso, solicitando se complete la resolución pronunciándose sobre la/s indicada/s pretensión/es.

Se detectan **errores en el régimen preposicional o, en general, en la complementación** de los verbos o de otras palabras:

(55)

de conformidad a [de conformidad con] lo dispuesto en el art. 715 de la LEC.

(56)

Con relación a [en relación con] la pretensión expresada por el Procurador |TX|INSERTAR NOMBRE PROCURADOR|||FTX| en el escrito de fecha |TX|INSERTAR FECHA|||FTX| y, cumpliendo los requisitos del artículo 30 de la L.E.C, acuerdo:

(57)

*Añade en su apartado 3, que la resolución que declare la falta de competencia mandará remitir todos los antecedentes al tribunal inmediato superior común. **[Al tribunal común inmediatamente superior]***

(58)

Librese oficio/mandamiento a |TX|INSERTE PERSONA U ORGANISMO|||FTX| a fin de que remita/n a este Tribunal la relación de bienes y derechos del ejecutado D./Dª Datos de Persona de los que tenga/n constancia, haciéndole/s saber el deber de colaboración que está/n obligado/s prestar [obligado/s a prestar] a este Tribunal, con apercibimiento que de no atender a dicho requerimiento podrá/n imponérsele/s multas coercitivas periódicas.

(59)

*Acuerdo la suspensión de los autos |TX|INDIQUE INSERTE DATOS DEL PROCESO MÁS AVANZADO|||FTX| hasta que los autos |TX|INDIQUE TIPO DE PROCEDIMIENTO Y NÚMERO DE AUTOS DEL PROCEDIMIENTO MENOS AVANZADO|||FTX|, se encuentren en el mismo estado procesal que |TX|INSERTE DATOS PROCESO MENOS AVANZADO|||FTX|, en cuyo caso se acordará. **[Momento en el cual se acordará la acumulación]***

(60)

Con el apercibimiento que [con el apercibimiento de que] caso de no comparecer le parará el perjuicio que hubiere lugar [a que hubiere lugar] en derecho.

Mención especial merecen en este apartado determinadas construcciones con el verbo tener seguido de *por + participio*: *tener por presentada; tener recibido*. La sustitución de tales construcciones por *considerar + participio* (*considerar presentada, considerar recibido*) resulta más acorde con los usos actuales del español. En algunos casos la combinación que se menciona no solo está anticuada sino que resulta incorrecta, puesto que se aplica a un verbo intransitivo, como desistir o renunciar:

(61)

*Se tiene por desistida a la parte demandante **[Se considera que la parte demandante renuncia]**. Datos de Persona, de la prosecución del presente procedimiento, imponiéndole el pago de las costas causadas.*

Es conveniente evitar expresiones que, aunque no son exactamente incorrectas, se tienen por **latiguillos del lenguaje administrativo** (*el mismo, cuestiones a considerar, etc.*). Se ofrecen solo dos ejemplos, aunque rara es la plantilla en que no aparece el mismo o alguna de sus variantes:

(62)

planteando cuestión prejudicial por entender que la apreciación de la misma era determinante, en su caso, de la culpabilidad o inocencia, en su caso, del/los imputado/s en las presentes actuaciones.

(63)

*Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de **CINCO DÍAS** hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición tenga efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida.*

Más que incorrección es desaliño estilístico la **repetición de una palabra** o de otra de la misma raíz o emparentada con demasiada proximidad:

(64)

*Acordada la celebración de la vista a la que se refiere el art. 715 de la LEC, **acuerdo**:
-Señalar para su celebración el próximo día Agenda.*

(65)

Por |TX|INSERTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE SOLICITA INTERVENIR|||FTX| se ha solicitado intervenir en el presente proceso como parte |TX|INSERTAR LO QUE PROCEDA||demandante-demandado|FTX|, alegando tener un interés directo y legítimo en su resultado alegando |TX|RESUMIR MOTIVOS ALEGADOS|||FTX|.

(66)

Acuerdo la suspensión de los autos |TX|INDIQUE INSERTE DATOS DEL PROCESO MÁS AVANZADO|||FTX| hasta que los autos |TX|INDIQUE TIPO DE PROCEDIMIENTO Y NÚMERO DE AUTOS DEL PROCEDIMIENTO MENOS AVANZADO|||FTX|, se encuentren en el mismo estado procesal.

No se han detectado, en cambio, usos que impliquen discriminación sexista. No son tales los empleos del llamado “masculino no marcado” o “masculino genérico”, puesto que se trata de un rasgo del español (y de otras lenguas) ligado a la economía lingüística y no a la ideología, dado que se aplica a ámbitos distintos a los personales (por ejemplo, a *día/noche*). Sí sería rasgo sexista el llamado “salto semántico”, es decir, la constatación de que el que escribe trata de hacerlo para todos pero está pensando exclusivamente en uno de los sexos. No tenemos casos en la muestra analizada.

Conviene advertir que la sustitución del “masculino genérico” por la dicotomía -o/-a entorpecería aún más la lectura de unos textos ya excesivamente complejos desde el punto de vista constructivo. Sí sería viable, en cambio, el recurso a epicenos como *las personas que* o a términos comunes en cuanto al género, como *quienes*, en lugar, por ejemplo, de *los que*. Es de destacar que las escasas veces en que la primera de las sustituciones mencionadas aparece en los textos analizados merece corrección, ya que suele afectar solo al artículo, pero no al sustantivo, como en el ejemplo siguiente:

(67)

*En ...Nombre de la ciudad (MS)..., a ...FECHA DE LA SESION DE TRABAJO LITERAL (MS)... La extiendo yo, ...Artículo determinado para sexo masculino o femenino (MS)... Secretario Judicial, para hacer constar que transcurrido el plazo de **CUATRO** días concedido al demandante para elegir la acción que pretende mantener, ...@BORRAR LO QUE NO PROCEDA#no ha ejercitado la opción // se ha mantenido la acumulación (TX)...*

Es de destacar que, en general, los ámbitos legislativos más recientes, por ejemplo los relativos al divorcio, están más libres que los anteriores de los defectos citados y son más fácilmente comprensibles. Hasta tal punto esto es así que las plantillas procedentes de la Administración del País Vasco, que, por lo que parece, han sido redactadas de nueva planta, presentan un aspecto mucho más moderno: sin prescindir de determinados tecnicismos, que

son obligados en los textos especializados, evitan, sin embargo, muchos de los fenómenos de los que han sido enumerados en este informe como entorpecedores de una lectura fluida, y resultan mucho más comprensibles. Dedicamos un ANEXO a dar más detalles sobre estos documentos.

SOBRE EL VOCABULARIO

Como se señala más arriba, el vocabulario de los textos jurídicos merece un apartado especial. Su análisis pone de manifiesto, de entrada, dos hechos evidentes. Por un lado, que es uno de los principales responsables de que el lenguaje jurídico sea poco accesible o, a veces, inaccesible para el ciudadano medio; por otro, que es un aspecto cuya solución resulta compleja, dado que se trata de un vocabulario técnico, especializado, que exige una alta precisión semántica. Nos encontramos, pues, ante una clara paradoja: culpable, pero difícil de condenar.

Las consideraciones que siguen se basan exclusivamente en la muestra de las plantillas extraídas de entre las proporcionadas. Como se recordará, hacen un total de 138 documentos, incluidos 35 del País Vasco. Al final del documento aparece el listado con todos los términos relevantes encontrados en ellos. No se ofrece, pues, un glosario exhaustivo, cuya realización requeriría de una planificación y ejecución más demoradas, así como de la colaboración conjunta de filólogos y juristas. Se trata únicamente de un diagnóstico que desbroce el terreno y sea indicativo de la dirección que debe seguirse.

Como se señala más arriba, en el léxico analizado pueden distinguirse dos grandes grupos:

- Tecnicismos**, es decir, vocablos que recogen conceptos específicos del ámbito jurídico.
- Términos que tienen, dentro del ámbito jurídico, un uso frecuente e incluso peculiar, pero que no son propiamente tecnicismos. Pueden considerarse más bien *marcas de registro*, en la medida en que contribuyen a *marcar*, caracterizar o identificar el campo o *registro* de que se trate (en este caso, el jurídico) pero no resultan imprescindibles. Muchos de ellos son arcaísmos que se han ido arrastrando a través de los años, como demuestra su inclusión en el Diccionario de la Real Academia (en adelante, DRAE).

Dentro de los tecnicismos, cabe distinguir, a su vez, tres subgrupos, atendiendo a su grado de sustitución por otros términos:

Subgrupo 1. Tecnicismos no fácilmente sustituibles y oscuros incluso para personas cultas.

Subgrupo 2. Tecnicismos no fácilmente sustituibles pero inteligibles, al menos para personas cultas.

Subgrupo 3. Tecnicismos, en principio, sustituibles por otros términos.

De los subgrupos establecidos, parece que el 2 es el menos necesitado de modernización. Habrá que trabajar, pues, fundamentalmente, en los subgrupos 1 y 3, aunque en direcciones distintas, así como en las llamadas *marcas de registro*.

Antes de entrar en el análisis de cada uno de los grupos debe señalarse que su determinación no siempre resulta sencilla y que lo que aquí se considera un tecnicismo difícilmente sustituible puede no serlo. Especialmente dificultoso resulta deslindar los tecnicismos sustituibles de las “marcas de registro”, aunque, dado que la solución propuesta para ambos subgrupos es la misma (cambio del término por otro más inteligible), esta cuestión no reviste especial trascendencia práctica. Por otra parte, las sustituciones propuestas pueden olvidar algún matiz que solo el jurista percibe. Por ejemplo, es posible que *verificar algo (un ingreso, un depósito, una comparecencia)* no sea solo llevarlo a cabo, sino hacerlo de forma fehaciente.

A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de los grupos y subgrupos distinguidos, ilustrados con ejemplos:

1. TECNICISMOS DEL SUBGRUPO 1: NO FÁCILMENTE SUSTITUIBLES Y OSCUROS INCLUSO PARA PERSONAS CULTAS

-*Allanar* y sus derivados *allanarse*, *allanado/-a*, *allanamiento*:

Se dispone en los apartados 1, 2 y 3, del artículo 19 de la L.E.C., que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, **allanarse**, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo.

Dispone el artículo 21.1 de la L.E.C., que cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el **allanamiento** se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante.

Se ha presentado escrito de la demandante, solicitando se dicte auto acogiendo las pretensiones **allanadas** por la parte demandada.

-*Dación de cuenta*:

En la causa arriba referenciada se ha dictado sentencia absolutoria y, según **dación de cuenta**, ha transcurrido el término legal sin que se haya interpuesto recurso alguno contra la misma.

-*Enervación*:

Acuerdo dar traslado a la parte demandante para que en el plazo de **DIEZ DÍAS** proceda a mostrar plena conformidad con la **enervación** solicitada.

-*Méritos acordados:*

Méritos acordados en Datos de Procedimiento **sobre** Datos de Procedimiento, sírvase dar las órdenes al POLICIA (MUNICIPAL O NACIONAL) con carnet profesional número ITXIINSERTAR NUMERO POLICIAIIIFTXI comparezcan ante el Juzgado de lo PENAL NUM.

-*Pendencia:*

Por la parte demandada en este proceso se ha presentado escrito, solicitando que se notifique la **pendencia** del proceso.

-*Reconvencción, reconvenional:*

Por el/la Procurador/a, Sr./a. *Datos de Profesionales*, en nombre y representación de *Datos de Persona*, parte demandada, se ha presentado demanda **reconvencional** frente a *Datos de Persona*.

Examinada por el/la Secretario/a Judicial la **reconvencción** formulada por la demandada.

Dispone el artículo 22, en sus apartados 1 y 2, de la L.E.C., que cuando por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvencción, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida,

-*Apud acta:*

Tener por personado y parte al Letrado/a Datos de Profesionales, en nombre y representación de la parte recurrente Datos de Persona, en virtud ITXIBORRAR LO QUE NO PROCEDA lldel poder general para pleitos que aporta/de la designación **apud acta** otorgada IFTXI.

20

2. TECNICISMOS DEL SUBGRUPO 2: NO FÁCILMENTE SUSTITUIBLES PERO INTELIGIBLES, AL MENOS PARA PERSONAS CULTAS

Forman parte de este grupo un gran número de términos. Unos aparecen en el *Diccionario de la Real Academia* (DRAE)¹ con la marca *Der[echo]*, otros no. En el primer caso están, por ejemplo, los siguientes:

Actuaciones, acumulación, acusación, acusación popular, alegar, alegaciones, apelar, apelación, audiencia, auto, citación, conocer de, costas, de oficio, diligencia, ejecutar, estado procesal, impugnar, imputar, inculpar, inhibirse, inhibición, partes, procedimiento, proceso, recurso, recusar, recusación, resolución, señalamiento, vista.

Aparecen sin marca en el DRAE, pero parecen tener un uso técnico en los documentos, términos como los siguientes:

Acto, atestado, causa, cédula, despacho, dictamen pericial, dictar, incoar, interponer un recurso, requerir, transigir.

¹ Se ha utilizado la 22ª edición, última aparecida hasta la fecha.

3. TECNICISMOS DEL SUBGRUPO 3 Y MARCAS DE REGISTRO: SUSTITUIBLES, EN PRINCIPIO, POR OTROS TÉRMINOS

Forman parte de este grupo un conjunto numeroso de palabras y expresiones, sean tecnicismos o no, cuya sustitución por otros términos más comprensibles parece factible y conveniente. He aquí algunos ejemplos:

-*Acción ejercitada*: se propone su sustitución por *acción emprendida, ejercida*. Aunque *ejercitar* tiene en el DRAE como segunda acepción la de 'ejercer', su uso es menos frecuente que el de las dos propuestas.

Por la parte demandante se ha manifestado su renuncia a la **acción ejercitada** y/o al derecho en que funda la pretensión objeto del presente proceso.

(Proponer explicar el significado en vez de sustituir el término)

-*Antecedentes fácticos*: se propone el cambio de *fáctico* por *de los hechos*. *Fáctico* es un adjetivo de poco uso, fuera del sintagma *poder fáctico*.

En el presente caso, atendiendo a las circunstancias concurrentes que han quedado indicadas en los **antecedentes fácticos** de esta resolución.

-*Dimanante*: procedente, derivado. Los términos propuestos son mucho más comunes y generales.

Adjunto remito a ITXIV.E. o Vd.IIIFTXI cédula de emplazamiento **dimanante** de Autos de Procedimiento Judicial del art. 41 de la Ley Hipotecaria.

-*Efecto suspensivo*: paralización (explicar).

Este auto será apelable sin **efecto suspensivo**.

-*Estar a lo previsto*: actuar según lo previsto.

Estar a lo previsto en el artículo 179.2 de la L.E.C.

-*Evacuar*: llevar a cabo, efectuar (DRAE. *evacuar*: cumplir un trámite).

haciéndole saber que si deja pasar dicho plazo sin **evacuar** el traslado.

-*Foliar*: numerar. Aunque *foliar* significa 'numerar los folios' (DRAE), es poco usado en la lengua común, en la que se prefiere *numerar*.

o bien copia autenticada del mismo, debidamente **foliado**.

-*Fundar*: apoyar, basar, fundamentar. En el DRAE *fundar* tiene como quinta acepción 'apoyar algo con motivos y razones eficaces o con discursos', pero con esta acepción está perdiendo uso en beneficio de las opciones propuestas.

y presenten, en su caso, los documentos en que directamente **funden** su derecho, y las copias preceptivas.

-*Indiciariamente*: según los indicios.

al no concurrir motivo racional que permita dudar que, **indiciariamente**, pertenecen al ejecutado.

-*Interesar*: señalar, solicitar, pedir. Ese uso de *interesar* viene recogido en el DRAE, pero en la acepción séptima.

a fin de que en el plazo de cinco días puedan **interesar** la extensión de sus efectos.

-*Justa causa*: causa justificada.

con la advertencia de que si no comparece, ni alega **justa causa** que se lo impida...

-*Litigar, litigantes*: las partes,. Sería conveniente unificar la terminología.

Dispone el artículo 19.1 de la L.E.C., que los **litigantes** están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán.

-*Obrar/obrante*: figurar, aparecer/que figura, presente. El significado con que obrar aparece en los textos está anticuado.

se remitió el expediente al Ministerio Fiscal para dictamen, el cual emitió los **obran-tes** en autos.

De dicha solicitud se ha dado traslado a la parte demandante, con el resultado que **obra** en autos.

-*Parar el perjuicio*: causar (el perjuicio). Este uso de *parar* es anticuado.

con el apercibimiento que caso de no comparecer le **parará** el perjuicio que hubiera lugar en derecho.

-*Participar*: comunicar. Con ese uso *participar* es poco utilizado (acepción 5ª del DRAE).

lo que se **participa** para su constancia y efectos.

-*Particulares*: Fragmentos de las actuaciones.

constan los **particulares** IFTXI del tenor literal siguiente.

-*Practicar*: llevar a cabo.

y advertido que las notificaciones para emplazamiento ITXIBORRAR LO QUE NO PROCEDAllson incompletas/no se han efectuado IFTXI, **practique** las necesarias para asegurar la defensa de los interesados.

-*Prosecución*: continuación, seguimiento.

ha dejado de haber interés legítimo en la **prosecución** del presente proceso.

-*Recaer resolución*: resolver.

DOY FE: Que en el procedimiento referenciado ITXIBORRAR LO QUE NO PROCEDAI Iha **recaído resolución** - constan los particulares IFTXI del tenor literal siguiente:

-*Referenciar/referenciado*: indicar, citar, mencionar/indicado, citado, mencionado.

Por haberlo acordado en este procedimiento mediante resolución judicial de esta fecha se cita a Vd. para que, en relación con el asunto arriba **referenciado**,

-*Reputar*: juzgar, estimar. Anticuoado.

que se **reputan** suficientes para cubrir las cantidades reclamadas IFTXI, librándose al efecto los despachos necesarios para garantizar la **traba**.

-*Traba*: embargo.

que se reputan suficientes para cubrir las cantidades reclamadas IFTXI, librándose al efecto los despachos necesarios para garantizar la **traba**.

A los vocablos citados a modo de ejemplo y a los que luego se mencionan en la lista de abajo habría que añadir una serie de expresiones y esquemas sintácticos petrificados que son muy habituales en los textos pero que tienen equivalente actual con mayor vigencia. Entre ellos están los siguientes:

-*A instancia de*: a petición de.

-*A tenor de*: según, conforme a.

-*En atención a*: atendiendo a.

-*Haber lugar (ha lugar)*: proceder, corresponder (procede, corresponde)

por lo que no ha lugar a la estimación de la petición de acumulación.

-*Tener por (desistida, renunciada)*:, que renuncia (véase comentario en 3.2.6).

Se tiene por desistida a la parte demandante.

ANEXO I. DOCUMENTOS DEL PAÍS VASCO

1. DOCUMENTOS QUE HAN SERVIDO DE BASE PARA EL INFORME

El equipo ha analizado una muestra de 35 plantillas correspondientes a la Administración del País Vasco. Los apartados recibidos, y de los que se ha extraído dicha muestra, son los siguientes:

- Jurisdicción penal. Diligencias previas.
- Jurisdicción penal. Juicio de faltas.
- Jurisdicción penal. Procedimiento de enjuiciamiento rápido de determinados delitos (juzgados de instrucción y de lo penal).
- Jurisdicción social. Procedimiento de despido.
- Jurisdicción social. Procedimiento de reclamación de cantidad. Procedimiento en seguridad social.

2. CONSIDERACIÓN GENERAL

Las calas realizadas en los documentos de la Administración Vasca ponen de manifiesto que su redacción presenta una sintaxis más moderna, más ordenada y más sencilla que la de los documentos de la Administración Central. Los tecnicismos y otras marcas propias del registro pueden, lógicamente, dificultar la comprensión en ocasiones, pero por lo general los documentos vascos presentan menos problemas que los de la Administración Central. Los párrafos, en los documentos vascos, son, con carácter general, cortos, están bien estructurados, y permiten hacer una lectura inteligible, aunque también es cierto que son rastreables en ellos algunas de las características mejorables de los documentos de la Administración Central, como son: el uso abusivo de gerundios innecesarios o anómalos; alguna construcción sintáctica no muy acertada; abuso y uso incoherente de la letra mayúscula, o ciertas concesiones a marcas de registro propias del ámbito jurídico.

3. ANÁLISIS Y COMENTARIOS

La trabazón sintáctica y el aspecto general ofrecen, en los documentos vascos, una base de partida más moderna en comparación con los documentos judiciales tradicionales, sin duda por tratarse de plantillas más recientes.

Los dos “Fundamentos” que transcribimos, son ejemplos de buena redacción, donde la sintaxis es la adecuada y, además, se han adaptado a la lengua general los términos propios o específicos del registro jurídico, con el resultado de un texto que podría servir de guía para la modernización que se pretende:

***PRIMERO.**- Dispone el artículo 81.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL) que el Secretario Judicial advertirá a la parte demandante de los defectos u omisiones de carácter formal en que haya incurrido al redactar la demanda, a fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro días (o de quince si se trata de omisión de la certificación del intento de conciliación previa -apartado 2 del artículo 81-).*

De no subsanarse el defecto, el Secretario Judicial debe dar cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión de la demanda (artículo 81.3 de la LPL).

***SEGUNDO.**- En este caso, la demanda presenta el defecto de ...TECLEAR DEFECTO (TX)... y la parte demandante no lo ha subsanado dentro del plazo concedido al efecto, por lo que procede no admitirla a trámite y archivar las actuaciones.*

Otro ejemplo pertinente es el siguiente, aunque pueden encontrarse otros similares. La sintaxis es, en general, adecuada, aunque sean precisas ciertas correcciones de detalle:

***PRIMERO.**- Examinada la anterior demanda se estima que este Juzgado tiene jurisdicción y competencia para conocer de [ella], según lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL).*

***SEGUNDO.**- Por otra parte, examinada la demanda, se estima [que] cumple con los requisitos precisos, por lo que procede admitirla a trámite y señalar el día y la hora en que haya de tener lugar el acto del juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 82.1 de la LPL).*

***TERCERO.**- Dispone el artículo 90.2 de la LPL que las partes podrán solicitar, al menos con diez días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en [él], requieran de diligencias de citación o requerimiento.*

En este caso la parte actora ha solicitado ...PRUEBA SOLICITADA (TX)..., extremo sobre el que debe darse cuenta al Tribunal para que resuelva lo que estime procedente.

Como prueba de lo dicho pueden compararse los dos textos siguientes, que tratan del mismo tema. En el primero, la distribución o separación en párrafos distintos de contenidos que son igualmente distintos mejora notablemente el resultado.

Texto de la Administración Vasca:

*Para interponer el recurso será necesaria la **constitución de un depósito** de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el ...NOMBRE BANESTO (MS)..., consignación que deberá ser acreditada al **interponer** el recurso (DA 15ª de la LOPJ).*

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Texto de la Administración Central:

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Datos de Órgano Judicial, en la cuenta de este expediente Datos de Órgano Judicial indicando, en el campo "concepto" la indicación "Recurso" seguida del código "00 Civil-Repósito". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación "recurso" seguida del código "00 Civil-Repósito".

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

No faltan en la Administración Vasca ejemplos de documentos necesitados de correcciones. No obstante, estas son, por lo general, de carácter parcial y se refieren a aspectos muy puntuales que no afectan a la sintaxis global ni a la estructura de los párrafos, por lo que la adecuación o la modernización requerirán un esfuerzo menor. Como ilustración podemos citar el documento siguiente (si se añade corrección, se hace entre corchetes):

1.- Con fecha ...PRESENTA FECHA LITERAL DE PRESENTACION DE LA DEMANDA EN EL JUZGADO (MS)... se ha recibido en esta Oficina judicial, procedente de la oficina de reparto, [el] escrito de demanda presentado el ...PRESENTA FECHA LITERAL DE PRESENTACION DE LA DEMANDA EN EL DECANATO (MS)... por ...NOMBRE Y APELLIDOS INTERV. (MS)... ..INSERTAR REPRESENTACIÓN SI LA HUBIERE (TX)..., sobre ...Materia social (MS)..., figurando [en el que figura] como parte demandada ...NOMBRE Y APELLIDOS INTERV. (MS)...

2.- Se observa en la misma [dicha demanda] el siguiente defecto subsanable:

[Inicio párrafo seleccionable GRUPO OR20]

[Inicio párrafo 44140500 No se acredita la representación art. 18/81.1].

- No se acompaña documento acreditativo de la representación en juicio del demandante por ...NOMBRE Y APELLIDOS INTERV. (MS)...

*Requírase [Pídase] a ...REPRESENTADO POR (MS)... para que [que], en el plazo de **CUATRO DÍAS** hábiles[,] contados desde el siguiente a la notificación de esta resolución[,] subsane el defecto advertido[,] en la forma dispuesta en el artículo 18 de la Ley de Procedimiento Laboral, advirtiéndole [y adviértasele] que[,] de no verificarlo, se dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión de la demanda (apartados 1 y 3 del artículo 81 de la LPL).*

[Inicio párrafo 44140530 Más de 10 demandantes no han designado representante común art. 19/81.1]

-No se designa un representante común con el que entender las diligencias, pese a demandar de forma conjunta más de diez actores (artículo 19 de la Ley de Procedimiento Laboral -LPL-).

*Requírase [Pídase] a los demandantes para que [que] en el plazo de **CUATRO DÍAS** hábiles, contados desde el siguiente a la notificación de esta resolución, designen un representante común con el que entender las sucesivas diligencias (artículo 81.1 de la LPL).*

Dicho representante deberá ser necesariamente Abogado, Procurador, Graduado Social colegiado, uno de los demandantes o un sindicato.

La representación podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante Secretario judicial, por escritura pública o mediante comparecencia ante el Servicio Administrativo de Mediación y Arbitraje.

Adviértase a los demandantes que, de no realizar la designación en el plazo y forma indicados, se dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión de la demanda (artículo 81.3 de la LPL).

[Inicio párrafo 44140560 Sindicato no acredita condición afiliado/comunicación a trabajador art. 20.2/81.1]

-No se acredita ...@BORRAR LO QUE NO PROCEDA#la condición de afiliado del trabajador // haber comunicado el propósito de presentar la demanda al trabajador (TX)... en cuyo nombre actúa el Sindicato ...TECLEAR SINDICATO (TX)... (artículo 20 de la Ley de Procedimiento Laboral -LPL-).

*Requírase al citado Sindicato para que en el plazo de **CUATRO DÍAS** hábiles, contados desde el siguiente a la notificación de esta resolución¹³ acredite dicho extremo, advirtiéndole que, de no verificarlo, se dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión de la demanda (apartados 1 y 3 del artículo 81 de la LPL).*

[Inicio párrafo 44140590 No aporta reclamación previa art. 69.2]

-No se acompaña copia de la resolución denegatoria o documento que acredite la presentación de la reclamación previa en vía administrativa (artículo 69.2 de la Ley de Procedimiento Laboral -LPL-).

*Requíerese a la parte demandante para que en el plazo de **CUATRO DÍAS** hábiles, contados desde el siguiente a la notificación de esta resolución⁴³ acredite dicho extremo, advirtiéndole que, de no verificarlo, se dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión de la demanda (apartados 1 y 3 del artículo 81 de la LPL).*

[Inicio párrafo 44140620 No aporta certificación acto conciliación previa 81.2]

-No se acompaña certificación del acto de conciliación previa.

*Adviértase al demandante que ha de acreditar la celebración o el intento del expresado [de celebración de dicho] acto en el plazo de **QUINCE DÍAS** hábiles, contados a partir del siguiente a la recepción de la notificación de esta resolución, apercibiéndole que, de no verificarlo, se dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión de la demanda (apartados 2 y 3 del artículo 81 de la Ley de Procedimiento Laboral -LPL-).*

[Inicio párrafo 44140650 Otros defectos]

...CONCRETAR EL DEFECTO OBSERVADO (TX)...

*Requíerese a la parte demandante para que en el plazo de **CUATRO DÍAS** hábiles, contados desde el siguiente a la notificación de esta resolución⁴³ subsane el defecto observado advirtiéndole que, de no verificarlo, se dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión de la demanda (apartados 1 y 3 del artículo 81 de la LPL).*

[Fin párrafo seleccionable GRUPO OR20]

Notifíquese [Comuníquese] esta resolución.

[Inicio párrafo 44101530 Modo de impugnación: reposición ante el secretario judicial]

MODO DE IMPUGNARLA: *mediante recurso de **REPOSICIÓN** ante el Secretario Judicial, a presentar [que se presentará] en la Oficina Judicial dentro de los **CINCO DÍAS** hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la LPL).*

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la LPL).

[Fin párrafo 44101530]

[Inicio párrafo 44110360 Pie diligencia de ordenación]

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

[Fin párrafo 44110360]

Con todo, hay que señalar también que algunos documentos de la Administración del País Vasco contienen todavía párrafos cuya sintaxis habría que revisar a fondo, o bien párrafos que deben ser sustituidos por otros con una redacción alternativa. Es el caso de los dos ejemplos que siguen:

TERCERO. *- Admitida la demanda, [se añade coma] procede que el Secretario Judicial señale el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente los actos de conciliación y juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, (artículo 82 de la LPL), citándose a las partes ...INDICAR SI DEBE CITARSE TAMBIÉN A INTERESADOS O MINISTERIO FISCAL (TX)...*

Aquí no se trata solo de la acumulación de gerundios; es, quizás, el caso más claro de necesidad de una nueva redacción, por ejemplo en los siguientes términos:

Admitida la demanda, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 82 de la LPL), procede que el Secretario Judicial señale el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente los actos de conciliación y juicio, y cite a las partes...

(...)

TERCERO. *- Si bien una vez admitida la demanda procede que el Secretario Judicial señale, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente los actos de conciliación y juicio, no resulta posible en este caso realizar el señalamiento en atención a ...CIRCUNSTANCIAS QUE IMPIDEN REALIZAR EL SEÑALAMIENTO (TX)...*

Otro ejemplo necesitado de redacción alternativa, en parte coincidente con el que se acaba de comentar. Pero nótese, en todo caso, que la corrección resulta facilitada por una base sintáctica de partida bastante adecuada:

Si bien una vez admitida la demanda procede que, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Secretario Judicial señale el día y la hora en que hayan de

tener lugar sucesivamente los actos de conciliación y juicio, no resulta posible en este caso realizar el señalamiento en atención a...

Son escasísimos los ejemplos de párrafos ininteligibles para un lector profano, pero culto. Quizás el caso más extremo –si no único– sea este pequeño fragmento:

Adjunto remito a testimonio del auto dictado por este Juzgado en los autos referenciados.

Todavía en el ámbito de la sintaxis, hay que señalar algún otro aspecto que no afecta a la estructura general, sino a cuestiones muy parciales o puntuales y, por lo tanto, fácilmente subsanables. Es el caso, por ejemplo, del uso todavía excesivo que se hace de la pasiva por la activa. Incluimos dos ejemplos con las correspondientes correcciones:

“Abierto el acto, por S.Sª se muestra al Funcionario citado, el informe pericial elaborado”: “Abierto el acto, S.Sª muestra al funcionario citado el informe pericial elaborado”.

Por ...NOMBRE Y APELLIDOS INTERV. (MS)... ..INSERTE REPRESENTACION SI LA HUBIERE (TX)... se ha presentado [XXX ha presentado] demanda frente a.

Quizás el aspecto sintáctico negativo más llamativo de los documentos de la Administración del País Vasco sea el uso abusivo que se hace del gerundio. En este caso, el uso inapropiado es totalmente equiparable, si no mayor, al que se hace en los documentos de la Administración Central. Se encuentran ejemplos en prácticamente todos los documentos y, con frecuencia, más de uno en cada documento. Pero, como en el caso de la pasiva, es un aspecto muy fácilmente subsanable ya que no afecta a la estructura general de la frase. Incluimos un ejemplo:

SEGUNDO.- *Estimándose [Se ha estimado] que dicha acumulación no estaba permitida, [por lo que] se ha requerido a la parte demandante para que, en el plazo de cuatro días, subsanase el defecto eligiendo [y eligiese] la acción que pretendiese mantener.*

Llama también la atención, en sentido negativo, en los documentos de la Administración del País Vasco, el uso con frecuencia inadecuado de la puntuación. Hay que corregir aspectos relacionados con esta cuestión en prácticamente todos los documentos. Pero es este también un aspecto fácilmente corregible. Incluimos un solo ejemplo en el que los tres Fundamentos son otros tantos ejemplos de sintaxis y redacción adecuadas, aunque mejorables con esa pequeña corrección de la puntuación:

PRIMERO.- *Si bien la Ley de Procedimiento Laboral admite en su artículo 27 la acumulación de acciones distintas en una misma demanda, excluye tal posibilidad en los casos que señala en ese mismo precepto, entre ellos ...TECLEAR SUPUESTO CONCRETO DE LA DEMANDA (TX)...*

SEGUNDO.- *Dicho defecto es subsanable en el plazo de cuatro días, según el apartado 1 del artículo 28, pero si en dicho plazo no se subsana o se mantiene la indebida acumulación, el tribunal acordará, en su caso, el archivo de la demanda.*

TERCERO.- *En el presente caso las acciones ejercitadas en la demanda no son acumulables, como se ha expuesto, y no se ha subsanado el defecto en el plazo legal. Por otra parte, no [Se ha añadido la coma] concurre ninguna de las circunstancias que, conforme al apartado 2 del artículo 28, determinan [Se han añadido las comas del inciso, aunque en este caso no serían totalmente necesarias, por coherencia con lo que se hace en el Fundamento Segundo] la continuación de la tramitación de alguna de las acciones, por lo que procede sin más acordar el archivo de la demanda.*

El uso de las letras mayúsculas es otro aspecto no resuelto en los documentos vascos, que ofrecen problemas similares a los de la Administración Central, y necesitan, por lo tanto, una unificación de criterios para dar coherencia interna a los documentos. Se trata, ciertamente, de otro problema menor cuya solución no requeriría un gran esfuerzo. Esta cuestión está presente en prácticamente todos los documentos, pero ejemplificamos con unas pequeñas muestras que ponen de manifiesto, ante todo, la falta de criterio y de coherencia interna en el uso de las mayúsculas y las minúsculas:

A la parte demandada, que si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado, representado por procurador o por graduado social colegiado, [tres buenos ejemplos de lo que debe ser el uso de las minúsculas, frente a la mayúscula de Juzgado, que viene inmediatamente detrás, y el uso que se hace de las mayúsculas en el fragmento paralelo de PV 11 que incluimos a continuación] debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de los DOS DÍAS siguientes al de la citación.

Compárese con el siguiente fragmento y nótese el distinto tratamiento, así como la propia incoherencia interna del ejemplo anterior:

"Dicho representante deberá ser necesariamente Abogado, Procurador, Graduado colegiado, uno de los demandantes o un sindicato".

En fin, otros buenos ejemplos de la confusión e incoherencia que ofrecen los documentos en este ámbito son los que siguen:

*2.- No se consigna en la misma el nombre del a [sic: errata] entidad gestora o Mutua. En consecuencia, requiérase a ...NOMBRE Y APELLIDOS INTERV. (MS)... para que en el plazo de CUATRO DÍAS presente en esta Oficina judicial [más abajo se encontrará "Judicial" con mayúscula, y alguna "oficina" con minúscula] el documento acreditativo de la cobertura del riesgo (artículo 141.1 de la Ley de Procedimiento Laboral -LPL-).
Notifíquese esta resolución.*

[Inicio párrafo 44101530 Modo de impugnación: reposición ante el secretario judicial]

MODO DE IMPUGNARLA: mediante recurso de **REPOSICIÓN** ante el Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los **CINCO DÍAS** hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la LPL).

PRIMERO.- Con fecha ...PRESENTA FECHA LITERAL DE PRESENTACION DE LA DEMANDA EN EL JUZGADO (MS)... se ha recibido en esta Oficina judicial, procedente de la oficina de reparto, [las incoherencias son llamativas]

Tildes. Con carácter esporádico, en los documentos se hace algún uso indebido del acento ortográfico; pero este es el menor de los problemas desde el punto de vista de la corrección. Se exceptúan los incisos directivos, como el que se transcribe a continuación, en que este aspecto se descuida por completo:

Notifíquese esta resolución.

[Inicio párrafo 44101530 Modo de impugnación: reposición ante el secretario judicial]

MODO DE IMPUGNARLA: mediante recurso de **REPOSICIÓN** ante el Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los **CINCO DÍAS** hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la LPL).

Aunque se trata de instrucciones de uso interno, que no trascienden al público, deberían estar también correctamente conformadas.

ÁMBITO LÉXICO. También en este aspecto los documentos de la Administración Vasca suponen un avance respecto de los de la Administración Central. Los documentos vascos tienen menos presencia de marcas de registro propias del ámbito judicial; por lo general, cuando hay posibilidad de elección, se inclinan por la más transparente (así, prefieren "parte demandante" a "parte actora", aunque esta última expresión aparezca alguna vez), y, en cualquier caso, la mejora de la sintaxis hace que las marcas léxicas propias del registro judicial sean un obstáculo bastante menor.

Ciertamente, hay tecnicismos que no podrán –y quizás no deban– ser sustituidos ni en los documentos de la Administración Central ni en la del País Vasco; pero sí cabe llevar a cabo una mejora importante en lo que solo son marcas propias del registro. En este sentido, hay que señalar que, sobre la base de los documentos de la Administración del País Vasco, sería factible y relativamente fácil en muchos casos llevar a cabo la adecuación y modernización del vocabulario, aunque siempre quedarán algunas zonas de una mayor dificultad.

En lo que sigue, recogemos una lista de ejemplos de marcas léxicas propias del registro que podrían ser fácilmente sustituidas por los términos de uso más común que se proponen:

- Ha tenido entrada: Ha entrado/Se ha recibido // a tenor de: de acuerdo con.
- Conexo: conectado/particulares: detalles/apercibimiento: advertencia/librar: enviar/reclamar de: preguntar a/interesar de: solicitar a/oficiar a: enviar oficio a/circunstancias exteriores: aspecto exterior.
- Opera como: se considera.
- Apercibir: advertir/se le tendrá por desistido de: se considerará que renuncia a
- Consignar: ingresar/consignación: ingreso.
- Con las prevenciones legales: de acuerdo con lo previsto por la ley/por tercero: por parte de una tercera persona/cumplimentar: llevar a cabo.
- Proposición: propuesta/alcanzar avenencia: llegar a un acuerdo/actuado: hecho, realizado/avenencia: acuerdo alcanzado.
- Requerir: pedir/notificar: comunicar.
- Inadmitir: no admitir (en algún documento se hace ya esta sustitución).
- Conocer: ¿hacerse cargo?.
- Participarlo: comunicarlo.

4. CONCLUSIÓN

En los documentos de la Administración del País Vasco se observan avances en la modernización del lenguaje judicial. Esto es válido para diversos aspectos, pero sobre todo para lo que afecta a la estructura sintáctica general. En este campo de la sintaxis, los problemas que todavía presentan los documentos vascos son casi exclusivamente de carácter muy puntual y, por lo tanto, fácilmente corregibles. Los avances se deben seguramente a que en este caso las plantillas han sido redactadas en época reciente. Baste recordar, para corroborar esta idea, que algo parecido sucede con las plantillas de la administración central de confección cercana en el tiempo, como las relativas a la separación o al divorcio.

También en un ámbito tan sensible para la modernización que se pretende como es el del vocabulario, los documentos de la Administración del País Vasco representan un avance importante. Las dificultades en este campo serán mayores que las que habrá que afrontar en el de la sintaxis, pero se aminoran cuando se parte de una estructura textual adecuada.

ESTUDIO DE CAMPO:
LENGUAJE DE LAS NORMAS
COMISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO

Dirigido por Salvador Gutiérrez Ordóñez.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
1. Lenguaje jurídico.....	5
2. Las disposiciones legales	6
3. Estudio de las leyes e intervención.....	6
2. HACIA UNA REDACCIÓN COMPRENSIBLE	7
1. Párrafos complejos	7
1.1. Indeterminación. Vaguedad. Ambigüedad y ambigüedad referencial	7
1.1.1. Indeterminación	7
1.1.2. Vaguedad	8
1.1.3. Ambigüedad	8
1.1.4. Ambigüedad referencial.....	8
1.2. Ideas distintas bajo un mismo párrafo	8
1.3. Orden confuso.....	9
1.4. Longitud excesiva (bloques unidos por un gerundio).....	10
1.5. Párrafo excesivamente largo y confuso.....	11
1.6. Necesidad de establecer relaciones de elementos en numeraciones excesivamente largas.....	11
1.7. Uso incorrecto o insuficiente de conjunciones y conectores	13
1.8. Exceso de subordinaciones de relativo encadenadas.....	14
1.9. Uso equivocado de relativos	14
1.10. Incongruencia formal	15
1.11. Impenetrabilidad conceptual.....	15
2. Puntuación	16
2.1. Coma entre sujeto y verbo.....	16
2.2. Coma para marcar el inicio o el fin de un inciso	17
2.2.1. Incisos iniciales o tópicos.....	17
2.3. Coma innecesaria	18
2.3.1. Adverbios y expresiones focalizadoras	18
2.3.2. Coma ante un complemento nominal especificativo.....	19
2.4. Coma para marcar un elemento periférico final (coda condicional, explicativa...).....	19
2.5. Sobre la coma y el punto y coma en relaciones coordinadas.....	20
2.6. Coma innecesaria ante un complemento circunstancial.....	20
2.7. Dos puntos para introducir una enumeración.....	21
3. Cuestiones de redacción	21
3.1. Concordancias y discordancias.....	21
3.1.1. Discordancias de género o de número.....	21
3.1.2. Sustantivos femeninos que comienzan por a o ha tónicas.....	22
3.2. Repeticiones.....	22
3.3. Abuso de participios de presente	23
3.4. Cambios de orden.....	23
3.5. Sustitución de adverbios para conseguir mayor precisión	25
3.6. Inclusión de elementos conjuntivos para conseguir mayor inteligibilidad	25
3.7. Coordinaciones. Uso de la conjunción /o/ en lugar de la conjunción copulativa /y/, etc.	26
3.8. Combinación congruente de preposiciones y locuciones prepositivas	26
3.9. Nueva redacción de un párrafo complejo o confuso	26
3.10. Armonización del inicio en párrafos que inician una relación	27
3.11. Restitución del núcleo nominal	28
3.12. Uso anafórico de la muletilla mismo-misma.....	28
3.13. Interpolación entre el nombre y un complemento relacional.....	29
3.14. Redacción innecesariamente confusa.....	29

3.15. Introducción de un artículo	30
4. Gerundios.....	30
4.1. Gerundio de posterioridad	30
4.2. Gerundio especificativo	33
4.3. Gerundio de conclusión	33
4.4. Gerundio de coordinación.....	34
4.5. Gerundio condicional.....	34
5. Pasivas reflejas y uso del complemento agente.....	34
5.1. Sustitución por la construcción activa.....	35
5.2. Sustitución por una construcción de pasiva perifrástica ser + participio	36
5.3. Complemento agente en la pasiva nominal.....	36
6. Coordinaciones.....	37
6.1. Coordinación y lenguaje jurídico.....	37
6.2. La segmentación de párrafos largos.....	37
6.3. Coordinaciones con así como	38
6.4. Introducción de coordinantes tanto ... como	38
6.5. Coma para diferenciar los dos niveles de la coordinación	40
7. Oraciones de relativo.....	40
7.1. Las oraciones de relativo	40
7.2. Recuperación del antecedente.....	40
7.3. Oraciones de relativo seguidas	40
7.4. Relativas explicativas y especificativas	41
7.5. Relativo el cual	42
7.6. Presencia del artículo.....	42
7.7. Relativo cuyo	42
8. Preposiciones	43
8.1. Galicismos.....	43
8.2. Repeticiones y ausencias de preposición	44
8.3. Cambios de preposición	46
9. Referencia a títulos de obras, leyes, etc.	46
10. Nombres extranjeros, latinismos. . .	48
11. Participios de presente	48
12. Mayúsculas y minúsculas	48
13. Palabras juntas y separadas	49
14. Numerales y ordinales.....	49
3. BIBLIOGRAFÍA.....	50

INTRODUCCIÓN

1. LENGUAJE JURÍDICO

El lenguaje jurídico, al igual que el de otras áreas del conocimiento y de la técnica posee caracteres propios que lo singularizan como un lenguaje sectorial de carácter técnico y administrativo. A diferencia de lo que ocurre con otros ámbitos de la ciencia o de la técnica, el lenguaje jurídico se halla en estrecha relación con la vida y los intereses de los ciudadanos. Afecta a todos ámbitos de su existencia desde su nacimiento (incluso antes) hasta su ausencia definitiva (e incluso después).

La especialización en el lenguaje jurídico es un proceso común con el que sufre el lenguaje en otros ámbitos sectoriales de la ciencia, de la tecnología: medicina, informática, navegación... Los profesionales manejan un léxico, unos giros y unos recursos lingüísticos que lo convierten en tecnolectos que facilitan su comunicación con otros profesionales del ámbito al que pertenecen.

Existen, no obstante, algunas de estas profesiones que necesitan dirigirse y hacerse entender con el ciudadano. Es el caso, por ejemplo, de la medicina y del derecho. En el área de la salud, médicos y otros sanitarios, con independencia del lenguaje que utilicen en sus estudios, trabajos de investigación... Llevan años adaptando su lenguaje con el fin de que el paciente y su entorno sean capaces de comprender el alcance, característica, pronóstico, formas de curación... de las enfermedades. Esto no ha ocurrido hasta el presente con el lenguaje jurídico. Las personas que entran en contacto con la ley y sus aplicaciones, en cualquiera de sus modalidades, han de salvar una sima de incomprensión a través de la mediación del sacerdocio ejercido por el abogado. Se llega así a la paradoja de que las leyes, sentencias, requerimientos, citaciones... dirigidas al ciudadano están configuradas en un lenguaje que este no comprende. De ahí que sea necesaria una intervención que, de forma paulatina, vaya acercando el lenguaje a las personas.

2. LAS DISPOSICIONES LEGALES

Las leyes, decretos, decretos leyes y otras disposiciones legales constituyen el primer puente entre la Administración y el ciudadano. Los órganos capacitados por la Constitución para ello, crean disposiciones legales que generan un vínculo de derechos y de obligaciones del ciudadano con la sociedad.

Por su relevancia y su vocación de permanencia se trata de disposiciones escritas, elaboradas y sometidas a debate. Su carácter general y las consecuencias negativas que una mala formulación puede entrañar para la Administración que las genera hacen que sean textos cuidadosos con su formulación.

El legislador obedece, por otra parte, a una tradición textual heredada y asimilada de forma inconsciente y continua a lo largo de sus años de estudio y de formación. Se repiten pautas, se calcan modelos y se reproducen estructuras que se han heredado de períodos en los que ha dominado una concepción barroca del lenguaje legal.

3. ESTUDIO DE LAS LEYES E INTERVENCIÓN

Nuestro estudio se basa en el examen de disposiciones legales que emanan de varias fuentes jurídicas. Unas constituyen proyectos de ley sometidos a examen de las universidades de la zona por el Parlamento de la Junta de Castilla y León, así como otras disposiciones legales de distinto rango tomadas del BOE y emanadas de diferentes ministerios.

El estudio pretende combinar la detección de aspectos problemáticos con su descripción y la forma de intervención destinada a corregirlos. Dividimos las intervenciones en dos apartados:

- Intervenciones destinadas a facilitar la **comprensión** de los textos legales.
- Intervenciones destinadas a corregir los **errores de corrección o de norma lingüística**.

Dado el carácter de textos técnicos no se propone una intervención en el léxico más que en casos excepcionales. Casi todas las propuestas afectan a la estructura textual del párrafo, a la concatenación sintáctica, a determinadas estructuras que violentan la norma general de la lengua, así como a defectos de puntuación.

Para mayor claridad, en las propuestas de intervención se muestra encuadrado el texto que ejemplifica la teoría. A la izquierda aparece el texto originario, donde se marcan en azul las partes que han de ser modificadas. En el cuadro de la derecha aparece el mismo pasaje con la corrección que se considera pertinente, señalada en tinta roja.

HACIA UNA REDACCIÓN COMPRENSIBLE

Uno de los hechos lingüísticos que establecen una barrera, cuando no una sima, entre la formulación de las leyes y su comprensión por parte del ciudadano reside en una tradición inveterada que afecta a la sintaxis de los enunciados, a la configuración de los párrafos y a la conexión textual.

La intervención en este ámbito no es fácil, pues el legislador ha de enfrentarse a toda una tradición de presentar los textos jurídicos, tradición que ha asimilado durante los años de estudio en la universidad y, especialmente, en la memorización de leyes en sus años como opositor y como profesional. Una estructura tradicional de las leyes un tanto alejada del resto de los textos que maneja el ciudadano; la longitud y complejidad en la construcción de oraciones, períodos, párrafos; la manera de ensamblarlos con marcadores de discurso y expresiones obsoletas; las particulares formas de denotar y referirse a hechos, conceptos y objetos... contribuyen a que el ciudadano se pierda como si estuviera en los laberínticos callejones de una ciudadela. El resultado es siempre el mismo: el ciudadano no entiende, ni en el nivel más bajo de comprensión, lo que esas leyes que garantizan sus derechos y formulan sus obligaciones.

1. PÁRRAFOS COMPLEJOS

1.1. Indeterminación. Vaguedad. Ambigüedad y ambigüedad referencial

1.1.1. Indeterminación

Un enunciado (o un texto) es *indeterminado* cuando proporciona al lector menos datos de los que necesita, no tanto para comprenderlo en su literalidad, como para poder resolver los casos prácticos que engloba. La formulación de muchas leyes es indeterminada, deja ángulos muertos y espacios de sombra que el ciudadano no puede resolver y que los juristas han de interpretar acudiendo a la interpretación, a la exégesis, a la jurisprudencia, a la analogía... En todos los ámbitos de la escritura pueden aparecer casos de indeterminación. En la circunscripción jurídica los casos prácticos desbordan con frecuencia las previsiones del legislador; sin embargo, este es un espacio de actuación importantísimo.

1.1.2. Vaguedad

Una expresión es vaga, poco precisa, cuando no delimita bien sus límites o fronteras. La vaguedad es una propiedad del significado de las voces que pertenecen al lenguaje banal o cotidiano. Los límites entre *calle* y *avenida*, entre *coche* y *furgoneta*, entre *zapatilla* y *zapato*, entre *árbol* y *arbusto*, etc. En el lenguaje jurídico las fronteras tienen que estar bien delimitadas. Mientras que en el lenguaje ordinario, expresiones como *mayor* y *menor* aplicadas a personas presentan fronteras borrosas, en el lenguaje jurídico se delimitan al segundo: el límite que marca las 00:00 del día en que se cumplen 18 años. En general, en las leyes no se incurre en este defecto, pues los términos y demarcaciones son definidos con precisión.

1.1.3. Ambigüedad

Una interpretación es ambigua cuando puede tener más de un significado: La secuencia *Vio a dos turistas con los prismáticos* puede ser interpretada como “Vio a dos turistas que llevaban los prismáticos” o “Vio a dos turistas con la ayuda de los prismáticos”. Las ambigüedades de sentido no son muy frecuentes, ni en el lenguaje ordinario ni en el lenguaje jurídico.

1.1.4. Ambigüedad referencial

Una de las funciones más importantes del lenguaje es la función denotativa o referencial. Las expresiones, aparte de tener un significado, pueden denotar o referirse a seres concretos en los actos de habla. La denotación o referencia es variable. La secuencia *estos libros* tiene siempre el mismo significado, pero cambia de referente en cada acto de habla. Esta variabilidad genera muchos casos de ambigüedad e incluso de indeterminación referencial. Con alguna frecuencia, en los textos jurídicos encontramos una expresión nominal o pronominal que hace referencia a algo dicho o presentado antes. Los párrafos largos suelen crear situaciones de ambigüedad referencial. Es frecuente con el posesivo *su*, que es invariable y puede denotar varios referentes: *de él*, *de ella*, *de ello*, *de ellos* y *de ellas*. En tales casos, se debe acudir a una redacción más explícita, como se hace en el siguiente ejemplo:

Su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos y se rige por la legislación básica estatal, por la Ley 8/1997,...	El Colegio, cuya estructura y funcionamiento deberán ser democráticos, se rige por la legislación básica estatal, por la Ley 8/1997,...
--	---

Ejemplo 1

1.2. Ideas distintas bajo un mismo párrafo

Es un rasgo muy frecuente que el legislador, tal vez apoyado en el loable intento de presentar una redacción que establezca conexión entre muchos conceptos, se exceda y coloque bajo un mismo párrafo e incluso en un mismo punto, dos ideas diferentes.

El consejo en estos casos consiste siempre en dividir el enunciado complejo. Aparte de la pésima impresión estilística, la claridad se ve alterada. Es preferible dividir el párrafo en varios puntos, aunque sea necesario repetir alguna expresión que sirva de enlace.

En el siguiente párrafo encontramos dos ideas que es necesario dividir con el fin de conseguir un párrafo claro:

- Los ayuntamientos denegarán licencias.
- Los ayuntamientos impondrán sanciones.

Los ayuntamientos denegarán las correspondientes licencias a los establecimientos e instalaciones que no cumplan lo dispuesto en esta Ley y en la normativa aplicable, especialmente la relativa al ruido y a la prevención ambiental, e impondrán medidas correctoras a los ya existentes para adaptarse a las mismas, cuyo incumplimiento determinará, según los casos, la suspensión o la revocación de las correspondientes licencias, además de las correspondientes sanciones.	Los ayuntamientos denegarán las correspondientes licencias a los establecimientos e instalaciones que no cumplan lo dispuesto en esta Ley y en la normativa aplicable, especialmente la relativa al ruido y a la prevención ambiental, e impondrán medidas correctoras a los ya existentes para adaptarse a ellas. Su incumplimiento determinará, según los casos, la suspensión o la revocación de las correspondientes licencias, además de las correspondientes sanciones.
--	---

Ejemplo 2

En estas repeticiones es preferible evitar los pronombres: al tener un significado muy genérico, suelen producir ambigüedad referencial. En la siguiente actuación se hace un punto y se repite un grupo nominal para enlazar de forma más clara con lo dicho anteriormente:

Se configura el Plan de Vivienda de Castilla y León como el elemento integrador de las medidas de fomento, esto es de impulso y de incentivo, que desde la Administración de Castilla y León se pretende realizar, modulando, en su caso, las actuaciones o medidas contempladas por la Administración General del Estado.	Se configura el Plan de Vivienda de Castilla y León como el elemento integrador de las medidas de fomento. Son medidas de impulso y de incentivo que desde la Administración de Castilla y León se pretenden realizar, modulando, en su caso, las actuaciones o medidas contempladas por la Administración General del Estado.
--	--

Ejemplo 3

La división de un párrafo que aglutina varias ideas se hace más urgente y necesaria cuando de su parte final depende toda una relación de elementos. Esto es lo que ocurría en el siguiente ejemplo:

Dicha comisión gestora, que actuará como órgano de gobierno provisional en los términos previstos en este régimen transitorio, representará de manera proporcional a las personas que ostenten los títulos definidos en los apartados a) y b) del artículo 3 y en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley: a) Elaborará y aprobará unos estatutos provisionales que regularán necesariamente la participación y el funcionamiento de la asamblea constituyente y su convocatoria.	Dicha comisión gestora, que actuará como órgano de gobierno provisional en los términos previstos en este régimen transitorio, representará de manera proporcional a las personas que ostenten los títulos definidos en los apartados a) y b) del artículo 3. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley: a) Elaborará y aprobará unos estatutos provisionales que regularán necesariamente la participación y el funcionamiento de la asamblea constituyente y su convocatoria.
--	---

Ejemplo 4

1.3. Orden confuso

Otro de los factores que intervienen en la inteligibilidad de los textos es el orden. En párrafos largos, el movimiento de algunos incisos, el cambio de orden de algunos complementos circunstanciales puede dejar muy alejado un grupo, lo que impide una lectura clara, sosegada y transparente. No es infrecuente que el lector de una disposición legal tenga que andar buscando el nombre con el que concuerda un adjetivo, un participio o un verbo. Ocurre también con el antecedente de los relativos.

Una leve intervención, cambiando el orden del inciso, hace que el párrafo sea más natural e inteligible:

En virtud de dicha previsión, y en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 70.1.31º del Estatuto de Autonomía, que reconoce a la Comunidad de Castilla y León competencia exclusiva en materia de industria cinematográfica y audiovisual, mediante la presente ley, se crea el Consejo Audiovisual de Castilla y León.	En virtud de dicha previsión, y en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 70.1.31º del Estatuto de Autonomía, que reconoce a la Comunidad de Castilla y León competencia exclusiva en materia de industria cinematográfica y audiovisual, se crea, mediante la presente ley, el Consejo Audiovisual de Castilla y León.
---	--

Ejemplo 5

En otras ocasiones, la causa del desorden se halla en una inadecuada forma de iniciar el período. Al cambiar de orden, el párrafo adquiere mayor lógica. Esto es lo que ocurre en el siguiente ejemplo: “Con la intensa participación de los ciudadanos...” adquiere valor de causa cuando se halla al principio entre pausas (lo que técnicamente se denomina *tópico*).

Esta ley, en sus casi dos décadas de vigencia, ha conseguido estructurar racionalmente los servicios sociales, con la intensa participación de los ciudadanos y de la iniciativa social.	Con la intensa participación de los ciudadanos y de la iniciativa social, esta ley, ha conseguido en sus casi dos décadas de vigencia estructurar racionalmente los servicios sociales.
--	---

Ejemplo 6

1.4. Longitud excesiva (bloques unidos por un gerundio)

La capacidad de retención en la denominada memoria a corto plazo es muy limitada. Según la Ley de Miller su espacio normal se mueve entre 5 y 9 entradas ($= 7 \pm 2$). Por muy ligados que se encuentren sus componentes, por muy jerarquizados que estén, es parece imposible que un lector no avezado, como es el ciudadano al que van destinadas las leyes, pueda al final de un párrafo de más de cinco líneas sin haber olvidado la parte inicial. En los párrafos largos hay otro factor: la lectura. Aunque la lectura en voz baja nos haya liberado de la servidumbre fónica y respiratoria, el acto de leer se halla aún ligado a su articulación. En la lectura en voz baja, se cansa la vista, se fatiga la memoria, se establecen con dificultad los nudos de dependencia sintáctica y, al fin, se genera incompreensión y abandono.

Una de las funciones negativas del gerundio consiste precisamente en convertirse en nexo de bloque extremadamente largos. En tales casos, se impone la presencia de un punto.

El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecución de las obras tendrá a estos efectos, la consideración de beneficio especial, siendo sujetos pasivos de estas contribuciones quienes se benefician de un modo directo con las carreteras, accesos y vías de servicio; y especialmente los titulares de las fincas y establecimientos colindantes.	El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecución de las obras tendrá a estos efectos, la consideración de beneficio especial. Serán sujetos pasivos de estas contribuciones quienes se benefician de un modo directo con las carreteras, accesos y vías de servicio; y, especialmente, los titulares de las fincas y establecimientos colindantes.
---	--

Ejemplo 7

El Título IV dispone el régimen de protección pública, de forma que se regula en un único texto legal, sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, todos los aspectos que afectan a la vivienda de protección pública, siguiendo una secuencia lógica y comprensible para los distintos operadores jurídicos.	El Título IV dispone el régimen de protección pública, de forma que se regulan en un único texto legal, sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, todos los aspectos que afectan a la vivienda de protección pública. Sigue una secuencia lógica y comprensible para los distintos operadores jurídicos.
---	--

Ejemplo 8

1.5. Párrafo excesivamente largo y confuso

Aunque no hubiera incorrecciones ni léxicas, ni sintácticas ni textuales, el exceso de longitud de un párrafo constituye un defecto en toda redacción. Más aún si se trata de disposiciones legales que han de llegar al ciudadano que carece de una formación especial en leyes y en la jerga jurídica. Ejemplos como los que se exponen no deberían ser desterrados de las disposiciones legales. En tal caso, podrían sobrevivir en los manuales de estilo como actividades destinadas a formar a los alumnos en la difícil tarea de dividir, segmentar y simplificar la sintaxis.

<p>La Constitución Española de 1978, que proclama el libre desarrollo de la personalidad como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social en nuestro Estado, coincide en la valoración que se efectúa desde la comunidad internacional en relación con la función de las familias en la construcción de la sociedad, y ha consagrado con el máximo rango jurídico los deberes y responsabilidades fundamentales de quienes integran el grupo familiar, al tiempo que establece los principios que han de presidir la actuación de las instituciones públicas en relación con su problemática específica.</p>	<p>La Constitución Española de 1978, que proclama el libre desarrollo de la personalidad como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social en nuestro Estado, coincide en la valoración de la familia que se efectúa desde la comunidad internacional en relación con su función en la construcción de la sociedad. Asimismo, ha consagrado con el máximo rango jurídico los deberes y responsabilidades fundamentales de quienes integran el grupo familiar, al tiempo que establece los principios que han de presidir la actuación de las instituciones públicas en relación con su problemática específica.</p>
---	--

Ejemplo 9

1.6. Necesidad de establecer relaciones de elementos en numeraciones excesivamente largas

Con relativa frecuencia aparecen tras dos puntos amplias enumeraciones no de palabras simples o complejas, sino de enunciados o expresiones relativamente largas. Cuando esto ocurre, es conveniente establecer una relación en lista de las partes que se citan y referencian. La disposición tipográfica establece un orden visual y jerárquico que nos orienta en todo momento de nivel de jerarquía, del punto que ocupa. Evita asimismo la pérdida de la comprensión, tan frecuente en la lectura de las leyes.

En el siguiente ejemplo, se establece una ordenación de los términos enumerados en forma de relación.

<p>La presente ley se estructura en nueve títulos: el preliminar, relativo al objeto y los principios generales de la política de vivienda; el título primero, relativo a las competencias y a la planificación en materia de vivienda; el título segundo, dedicado a la calidad de las viviendas; el título tercero, relativo a la protección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas; el título cuarto, abarca todo el régimen de las viviendas de protección pública; el título quinto, sobre las actuaciones para el fomento del alquiler; el título sexto se refiere a la colaboración público privada; el título séptimo, regula los órganos colegiados en materia de vivienda; el octavo y último título se dedica a regular el régimen sancionador. Además se recogen, dos disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y seis finales.</p>	<p>La presente ley se estructura en nueve títulos: -el preliminar, relativo al objeto y los principios generales de la política de vivienda; -el título primero, relativo a las competencias y a la planificación en materia de vivienda; -el título segundo, dedicado a la calidad de las viviendas, -el título tercero, relativo a la protección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas; -el título cuarto, que abarca todo el régimen de las viviendas de protección pública; -el título quinto, sobre las actuaciones para el fomento del alquiler; -el título sexto, que se refiere a la colaboración público privada; -el título séptimo, que regula los órganos colegiados en materia de vivienda; -el octavo y último título se dedica a regular el régimen sancionador. Además se recogen, dos disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y seis finales.</p>
---	--

Ejemplo 10

En este ejemplo se propone una actuación similar:

<p>...teniendo en cuenta junto a los tradicionales de venta o alquiler, la posibilidad del alquiler con opción de compra; las clases de viviendas de protección pública; la particularidad de la vivienda de protección pública en el medio rural y el alojamiento protegido en suelo dotacional; el valor del suelo en la promoción de viviendas de protección pública; el plazo del régimen legal de protección y la prohibición de la descalificación voluntaria; el precio máximo de venta y el precio de referencia para el alquiler; la calidad de las viviendas de protección pública; la calificación provisional y la definitiva, manteniendo el tradicional régimen dual por...</p>	<p>...y tiene en cuenta, junto a los tradicionales de venta o alquiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la posibilidad del alquiler con opción de compra; -las clases de viviendas de protección pública; -la particularidad de la vivienda de protección pública en el medio rural y el alojamiento protegido en suelo dotacional; -el valor del suelo en la promoción de viviendas de protección pública; -el plazo del régimen legal de protección y la prohibición de la descalificación voluntaria; -el precio máximo de venta y el precio de referencia para el alquiler; -la calidad de las viviendas de protección pública; -la calificación provisional y la definitiva. <p>Se mantiene el tradicional régimen dual...</p>
---	---

Ejemplo 11

En ocasiones los términos que se relacionan no son expresiones simples, ni siquiera breves enunciados, sino auténticos párrafos. Resultaría imposible establecer una relación de dependencia adecuada. Sin embargo, con la ayuda de este recurso tipográfico, se restablece el orden visual y el mental:

<p>En este sentido, y sin olvidar otras disposiciones encargadas de regular los requisitos para el reconocimiento y disfrute de las distintas prestaciones así como las condiciones exigidas para la prestación de servicios sociales por las entidades públicas y privadas, se aprobaron sucesivamente las siguientes normas de rango legal: la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, con el objeto de garantizar la accesibilidad y el uso de bienes y servicios de la Comunidad a todas las personas, y en particular, a las que tengan algún tipo de discapacidad; la Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León, cuya finalidad es garantizar los derechos de los menores de edad, promover su pleno desarrollo e integración socio-familiar y regular las actuaciones para la atención de aquellos que se encuentren en situación de riesgo o de desamparo; la Ley 5/2003, de 3 de abril, de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León, destinada a prestar una atención integral y continuada a las personas mayores, promoviendo su desarrollo personal y social, fomentando su participación y su integración social, y la ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León, cuyo objeto es promover, fomentar y ordenar la participación solidaria de los ciudadanos en las actividades organizadas de voluntariado y regular las relaciones que puedan establecerse con respecto a dichas actividades.</p>	<p>En este sentido, y sin olvidar otras disposiciones encargadas de regular los requisitos para el reconocimiento y disfrute de las distintas prestaciones, así como las condiciones exigidas para la prestación de servicios sociales por parte de las entidades públicas y privadas, se aprobaron sucesivamente las siguientes normas de rango legal:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, con el objeto de garantizar la accesibilidad y el uso de bienes y servicios de la Comunidad a todas las personas y, en particular, a las que tengan algún tipo de discapacidad; -la Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León, cuya finalidad es garantizar los derechos de los menores de edad, promover su pleno desarrollo e integración socio-familiar y regular las actuaciones para la atención de aquellos que se encuentren en situación de riesgo o de desamparo; -la Ley 5/2003, de 3 de abril, de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León, destinada a prestar una atención integral y continuada a las personas mayores, promoviendo su desarrollo personal y social, fomentando su participación y su integración social, y -la ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León, cuyo objeto es promover, fomentar y ordenar la participación solidaria de los ciudadanos en las actividades organizadas de voluntariado y regular las relaciones que puedan establecerse con respecto a dichas actividades.
--	--

Ejemplo 12

Las enumeraciones que vienen introducidas por un término genérico incluyente han de aparecer tras el signo de dos puntos, si son largas, conviene que aparezcan separadas.

<p>La reforma introducida en nuestro Derecho contable por la Ley 16/2007 define dos conceptos de grupo. El regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, que podríamos denominar de subordinación, formado por una sociedad dominante y otra u otras dependientes controladas por la primera, y el grupo de coordinación, integrado por empresas controladas por cualquier medio por una o varias personas, físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos...</p>	<p>La reforma introducida en nuestro Derecho contable por la Ley 16/2007 define dos conceptos de grupo: -El regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, que podríamos denominar de subordinación, formado por una sociedad dominante y otra u otras dependientes controladas por la primera, y -el grupo de coordinación, integrado por empresas controladas por cualquier medio por una o varias personas, físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos...</p>
---	---

Ejemplo 13

1.7. Uso incorrecto o insuficiente de conjunciones y conectores

Aunque se hará referencia a los problemas de la coordinación, aquí se enfoca en cuanto elemento que interviene en la complejidad de los párrafos. Se observa en los textos legales un afán de hilvanar todos los puntos, con lo que se consiguen sargas y secuencias peregrinantes de enunciados en un párrafo cuyo final nada tiene que ver con la estructura del inicio. Esta suerte de amalgamas contribuye a que los párrafos se conviertan en sargas de dura digestión en la lectura. Mejor hacer una pausa.

<p>La acción humanitaria incluirá no sólo la ayuda proporcionada con carácter de urgencia a las víctimas de los desastres, tanto los desencadenados por catástrofes naturales como por conflictos armados, o que se lleve a cabo mediante operaciones prolongadas para la población refugiada y desplazada, sino también aquella que se dirija a la protección de las víctimas y de sus derechos fundamentales en toda su extensión mediante actuaciones tales como la defensa de los derechos humanos, el testimonio, la denuncia y el acompañamiento.</p>	<p>La acción humanitaria incluirá la ayuda proporcionada con carácter de urgencia a las víctimas de los desastres, tanto los desencadenados por catástrofes naturales como por conflictos armados, o que se lleve a cabo mediante operaciones prolongadas para la población refugiada y desplazada. También incluirá aquella que se dirija a la protección de las víctimas y de sus derechos fundamentales en toda su extensión, mediante actuaciones tales como la defensa de los derechos humanos, el testimonio, la denuncia y el acompañamiento.</p>
---	--

Ejemplo 14

En ocasiones se utilizan de forma incorrecta los conectores. No es infrecuente la inclusión de una conjunción adversativa pero con valores próximos a la conjunción copulativa. Aunque no pone en peligro generalmente la comprensión, constituye una falta de corrección gramatical.

<p>En este Título se regula de forma pormenorizada el Libro del Edificio que se configura como una gran herramienta técnica para un adecuado mantenimiento y conservación de los edificios de viviendas, pero también como una gran herramienta jurídica para hacer valer los derechos...</p>	<p>En este Título se regula de forma pormenorizada el Libro del Edificio, que se configura como una gran herramienta técnica para un adecuado mantenimiento y conservación de los edificios de viviendas, y también como una gran herramienta jurídica para hacer valer los derechos...</p>
---	---

Ejemplo 15

En las coordinaciones lejanas entre complementos circunstanciales conviene mantener la preposición en el segundo segmento para mantener la claridad de la lectura y la facilidad de la comprensión. En el siguiente ejemplo, se suprime la locución prepositiva *con el fin de*. Al restituirla, el sentido se restablece.

Desde la puesta en funcionamiento del sistema se han dictado otras normas con el fin de atender a los diferentes sectores objeto de protección desarrollando las previsiones contenidas en la ley y de avanzar de acuerdo con las nuevas necesidades que surgen y son demandadas por los ciudadanos.	Desde la puesta en funcionamiento del sistema se han dictado otras normas con el fin de atender a los diferentes sectores objeto de protección desarrollando las previsiones contenidas en la ley y con el fin de avanzar de acuerdo con las nuevas necesidades que surgen y son demandadas por los ciudadanos.
--	---

Ejemplo 16

1.8. Exceso de subordinaciones de relativo encadenadas

El encadenamiento de oraciones de relativo produce el mismo efecto que la concatenación en cascada de enunciados por medio de conjunciones copulativas o, peor aún, de gerundios. El resultado son párrafos largos, de lectura difícil, de comprensión problemática, abiertos a dobles interpretaciones y, estilísticamente, insoportables. Cuando esto ocurre, es necesario dividir el párrafo. El efecto de referencia hacia lo anterior (antecedente) que provoca el relativo se puede conseguir, una vez hecha la pausa de un punto, por medio de otros pronombres o incluso por medio de la repetición de nombres. En el ejemplo que proponemos a continuación es la secuencia *En dicha Declaración* la que nos une con el antecedente.

La última muestra de lo cual es la Declaración del Milenio, aprobada en septiembre de 2000 por 189 estados, por la que se comprometieron a intensificar los esfuerzos mundiales para reducir la pobreza, mejorar la salud, alcanzar la paz y fomentar los derechos humanos, en la que se establecieron ocho grandes objetivos, los llamados Objetivos del Milenio. No cabe duda de que el desarrollo humano abarca mucho más que estos objetivos, pero éstos constituyen un referente crucial para medir el progreso hacia la creación de un nuevo orden mundial más justo, menos empobrecido e inseguro.	La última muestra de lo cual es la Declaración del Milenio, aprobada en septiembre de 2000 por 189 estados, por la que se comprometieron a intensificar los esfuerzos mundiales para reducir la pobreza, mejorar la salud, alcanzar la paz y fomentar los derechos humanos. En dicha Declaración se establecieron ocho grandes objetivos, los llamados Objetivos del Milenio. No cabe duda de que el desarrollo humano abarca mucho más que estos objetivos, pero éstos constituyen un referente crucial para medir el progreso hacia la creación de un nuevo orden mundial más justo, menos empobrecido e inseguro.
--	---

Ejemplo 17

1.9. Uso equivocado de relativos

Sucede en ocasiones que relativos adverbiales (*como* y *cuando*, sobre todo) se utilizan con valores que no les corresponde (modo y tiempo). En el siguiente ejemplo, cuando aparece en lugar de una expresión de lugar

El Título III, bajo la rúbrica "Protección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas", trata de profundizar en los derechos de quienes compren o arrienden una vivienda con especial atención cuando se trate de una vivienda de protección pública.	El Título III, bajo la rúbrica "Protección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas", trata de profundizar en los derechos de quienes compren o arrienden una vivienda, con especial atención a los casos en que se trate de una vivienda de protección pública.
--	--

Ejemplo 18

En el siguiente ejemplo, *como* aparece utilizado en lugar de *en cuanto*. Su corrección restablece el sentido.

La Administración de la Comunidad de Castilla y León propiciará, tanto en sus comunidades de origen como en los países de acogida el establecimiento de los mecanismos e instrumentos apropiados de apoyo a las políticas de corresponsabilidad, programas y proyectos de codesarrollo a los inmigrantes como agentes de desarrollo y para que mediante la creación de espacios de intercambio cultural en Castilla y León fomenten el acercamiento entre los pueblos y el conocimiento y respeto mutuos.	La Administración de la Comunidad de Castilla y León propiciará, tanto en sus comunidades de origen como en los países de acogida, el establecimiento de los mecanismos e instrumentos apropiados de apoyo a las políticas de corresponsabilidad, programas y proyectos de codesarrollo a los inmigrantes en cuanto agentes de desarrollo, con el fin de que, mediante la creación de espacios de intercambio cultural en Castilla y León, fomenten el acercamiento entre los pueblos y el conocimiento y respeto mutuos.
---	---

Ejemplo 19

1.10. Incongruencia formal

Se aplica la denominación de *oraciones ecuacionales* a un tipo de construcciones de carácter enfático, cuyo único verbo posible es el copulativo *ser* y que exige paralelismo categorial, semántico y formal entre las dos partes. Si el primer elemento posee una preposición, el segundo ha de repetirla:

- Es por eso por lo que...
- Es para eso para lo que...
- Es hacia allí hacia donde...

Es común la supresión de la preposición *por* en las regiones levantinas y catalanas, pero constituye una conculcación de la norma. Es lo que ocurre en el siguiente ejemplo:

Asimismo, el artículo 71.1.5 del Estatuto de Autonomía se refiere a las competencias de desarrollo normativo y de ejecución que la Comunidad de Castilla y León tiene en materia de defensa de los consumidores y usuarios; es por ello que la ley contempla la especial protección que adquirentes y arrendatarios deben tener en relación con la vivienda y, a tal efecto, se regula la publicidad y la información en materia de vivienda.	Asimismo, el artículo 71.1.5 del Estatuto de Autonomía se refiere a las competencias de desarrollo normativo y de ejecución que la Comunidad de Castilla y León tiene en materia de defensa de los consumidores y usuarios; es por ello por lo que la ley contempla la especial protección que adquirentes y arrendatarios deben tener en relación con la vivienda . A tal efecto, se regula la publicidad y la información en materia de vivienda.
---	--

Ejemplo 20

1.11. Impenetrabilidad conceptual

En particular, si bien la participación en otra sociedad y el ejercicio de los correspondientes derechos de voto se configura como el supuesto más habitual de ejercicio de control, no es menos cierto que lo verdaderamente relevante es que se posea o se pueda poseer el mismo, circunstancia que da entrada en los grupos de subordinación a la creación de vínculos dominante-dependiente y, en consecuencia, a la obligación de consolidar, en virtud de un acuerdo o contrato, así como al hecho de que para evaluar dicho control también deban considerarse los derechos potenciales de voto.	Difícil de solucionar.
---	------------------------

Ejemplo 21

2. PUNTUACIÓN

En los textos jurídicos la puntuación tiene una importancia capital en el momento de la conformación del sentido. La presencia o ausencia de uno de estos minúsculos elementos ortográficos puede tener repercusiones graves en el sentido. No es fácil proponer reglas que cubran la inmensa variedad de circunstancias del uso de la coma, del punto y coma, de los dos puntos e incluso del punto. Sin embargo, hay algunas normas que sí son claras y que constituyen una frontera que no se debe traspasar:

- Entre sujeto y predicado no hay coma.
- Tampoco se establece coma entre el verbo y sus complementos más allegados: complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, atributo y predicativo.
- Los complementos circunstanciales propios no se separan con coma.

Por el contrario, llevan siempre coma:

- Los complementos explicativos, ya sean adjetivos, ya sean oraciones de relativo.
- Los vocativos.
- Las interjecciones.
- Los complementos periféricos: todos van entre pausas fónicas.
- Los elementos que expresan punto de vista, entre los que hay muchos adverbios en -mente: *Desde el punto de vista moral, Desde una perspectiva científica, gramaticalmente*, etc.
- Los elementos que expresa una actitud del hablante hacia su enunciado y van entre pausas: *Desgraciadamente, por fortuna, verdaderamente, erróneamente...*
- Los complementos del decir: *sinceramente, con toda franqueza...*
- Los conectores de discurso. son tónicos y van entre pausas: *sin embargo, no obstante, por lo tanto, en consecuencia...*
- Los ordenadores del discurso: *En primer lugar, por un lado*, etc.

A continuación, vamos a repasar algunos de los errores más frecuentes:

2.1. Coma entre sujeto y verbo

En ocasiones, un sujeto muy largo requiere en la lectura una pequeña pausa o interrupción para la respiración. Es motivo frecuente de aparición de comas entre sujeto y predicado. Es lo que ocurre en los dos ejemplos que siguen:

<p>Artículo 2.- Ámbito territorial. El ámbito territorial de actuación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León, es el de la Comunidad de Castilla y León.</p>	<p>Artículo 2.- Ámbito territorial. El ámbito territorial de actuación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León es el de la Comunidad de Castilla y León.</p>
--	---

Ejemplo 22

<p>El estatuto definitivo aprobado en la asamblea constituyente, será remitido a la consejería que tenga atribuidas competencias en materia de colegios.</p>	<p>El estatuto definitivo aprobado en la asamblea constituyente será remitido a la consejería que tenga atribuidas competencias en materia de colegios.</p>
---	--

Ejemplo 23

En otras ocasiones, la presencia previa de un inciso de límites percibidos de forma incorrecta provoca un cambio de lugar de la coma, que pasa a dividir el sujeto del predicado. Es lo que ocurre en el ejemplo que sigue:

Pese a la utilidad y validez de estas normas su carácter reglamentario y dispersión, aconsejaba la elaboración de un texto único.	Pese a la utilidad y validez de estas normas , su carácter reglamentario y dispersión aconsejaba la elaboración de un texto único.
---	--

Ejemplo 24

Este error de puntuación es frecuente exceso, incluso en circunstancias en las que es difícil hallar una explicación:

El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León, se relacionará en los aspectos corporativos e institucionales.	El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León se relacionará en los aspectos corporativos e institucionales.
--	---

Ejemplo 25

El estatuto definitivo aprobado en la asamblea constituyente, será remitido...	El estatuto definitivo aprobado en la asamblea constituyente será remitido...
---	--

Ejemplo 26

Los efectivos de personal estatutario existentes, serán objeto de oferta de empleo público.	Los efectivos de personal estatutario existentes serán objeto de oferta de empleo público.
--	---

Ejemplo 27

2.2. Coma para marcar el inicio o el fin de un inciso

Como se recogía al inicio de este apartado dedicado a la puntuación, los incisos van siempre separados por comas. En su articulación fónica, vienen separados por pausas y, frecuentemente, acompañados de un descenso tónico. Vamos a diferenciar varios casos:

2.2.1. Incisos iniciales o tópicos

Son expresiones que normalmente aportan contenidos circunstanciales y que sirven de marco, de universo de discurso, de ámbito en el que lo que viene detrás encuentra validez o no. Hay tópicos de diferente naturaleza:

- De marco o acotación. Pueden aparecer con expresiones *como en cuanto a, en lo que se refiere a...*; pero, a veces, prescinde de estos introductores.
- De punto de vista: *moralmente, climáticamente, médicamente...*
- De espacio o de tiempo: *En Madrid, estudia.*

En el siguiente ejemplo, nos encontramos con un inciso de marco o acotación que no había sido puntuado:

En caso de titulaciones extranjeras habrán de ser homologadas o declaradas equivalentes por la autoridad competente.	En el caso de titulaciones extranjeras, habrá n de ser homologadas o declaradas equivalentes por la autoridad competente.
---	---

Ejemplo 28

Se aplica la denominación de **conectores de discurso** a expresiones tónicas, simples o complejas, originariamente de naturaleza adverbial o de expresiones asimilables, que se utilizan en la lengua para expresar relación semántica parecida a la que expresan las conjunciones (adición, oposición, disyunción...). Se diferencian de las conjunciones en que son

tónicos y, fónicamente, van entre pausas. En la escritura, cualquiera sea el lugar que ocupen, aparecen entre comas.

En los siguientes ejemplos nos encontramos con el caso de *además, asimismo, en general*:

Pero además, se prevé la posibilidad de planes de ámbito...	Pero, además, se prevé la posibilidad de planes de ámbito...
---	--

Ejemplo 29

Además este Título Primero regula la planificación en materia de vivienda.	Además, este Título Primero regula la planificación en materia de vivienda.
--	---

Ejemplo 30

Lo anteriormente expuesto sucede además en un contexto en el que se observa una gran penetración social.	Lo anteriormente expuesto sucede, además, en un contexto en el que se observa una gran penetración social.
--	--

Ejemplo 31

...servicios de la sociedad de la información y en general mediante cualquier mensaje que se envíe a un domicilio,...	...servicios de la sociedad de la información y, en general, mediante cualquier mensaje que se envíe a un domicilio,...
---	---

Ejemplo 32

Se prohíbe asimismo la venta o entrega a dichos menores de cualquier otro producto.	Se prohíbe, asimismo, la venta o entrega a dichos menores de cualquier otro producto.
---	---

Ejemplo 33

De esta manera se aprueba un texto normativo completo, coherente y sencillo, sin perjuicio de que sea necesario en muchos aspectos, el correspondiente desarrollo reglamentario.	De esta manera, se aprueba un texto normativo completo, coherente y sencillo, sin perjuicio de que sea necesario en muchos aspectos el correspondiente desarrollo reglamentario.
--	--

Ejemplo 34

2.3. Coma innecesaria

La inseguridad en la puntuación puede llevar a la colocación de comas innecesarias.

2.3.1. Adverbios y expresiones focalizadoras

El primer caso que se ejemplifica es el uso de algunos adverbios que sirven para focalizar o realzar algún concepto. Nunca van entre pausas. Encontramos varios tipos:

- Focalizadores exclusivos:** *sólo, solamente, únicamente, exclusivamente...*: Este producto se vende únicamente en *El Corte Inglés*; se llama simplemente María.
- Focalizadores incluyentes o excluyentes:** *también, aun, tampoco, incluso, hasta, ni siquiera*: Esto lo defenderé incluso ante el Rey.

-**Focalizadores de carácter identificativo:** *Exactamente, justamente, justo, precisamente:* Eran *exactamente* tres.

-**Focalizadores particularizadores:** *particularmente, precisamente, especialmente, específicamente, principalmente, en particular, sobre todo, mismamente, justamente, justo:* Matías es *particularmente* meticuloso; La piedra le dio *mismamente* en la cabeza

En los siguientes ejemplos aparecen dos elementos focalizadores situados incorrectamente entre pausas: *precisamente* y *al menos*:

Precisamente, para regular esta situación de hecho, se dictó la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia,...	Precisamente para regular esta situación de hecho, se dictó la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia,...
---	---

Ejemplo 35

...encontrarse en servicio activo y haber prestado servicios como personal estatutario fijo, al menos, dos años en la categoría de procedencia.	...encontrarse en servicio activo y haber prestado servicios como personal estatutario fijo al menos dos años en la categoría de procedencia.
--	--

Ejemplo 36

La dificultad nace de que estos elementos pueden aparecer en otros contextos con valor de inciso.

2.3.2. Coma ante un complemento nominal especificativo

En las disposiciones legales aparece de forma incorrecta una coma que separa de su núcleo un complemento nominal de fecha. La causa es la analogía o semejanza con expresiones de tipo: *la Ley 205/2009, de 25 de julio*. Fuera de estos contextos, si el complemento posee valor especificativo, ha de ir sin coma.

La creación de colegios profesionales, de acuerdo con lo que establece el artículo 6, de la Ley 8/1997, de 8 de julio...	La creación de colegios profesionales, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 de la Ley 8/1997, de 8 de julio...
--	--

Ejemplo 37

2.4. Coma para marcar un elemento periférico final (coda condicional, explicativa...)

De la misma forma que en el inicio de la oración aparecen a veces elementos en inciso, separados por pausas y que afectan a toda la oración, al final de los enunciados es frecuente la presencia de complementos de carácter explicativo o aclaratorio. También van separados por pausas y también afectan a toda la oración. Son muy frecuentes las oraciones causales con *pues, que, puesto que porque: Cállate, que me molestas; Cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí*. Muy semejantes a las causales, son otras construcciones concesivas, finales, condicionales... que se añaden como una coda para introducir una salvedad, una excepción, una limitación, una condición... Van siempre entre comas.

En las disposiciones legales aparecen incisos finales para indicar la causa o motivo por el cual se propone algo. Es lo que ocurre en los ejemplos que siguen. Dos están formados sobre la expresión *de conformidad con...*

a) Estar en posesión del título de Diplomado en Terapia Ocupacional de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1420/1990, de 26 de octubre.	a) Estar en posesión del título de Diplomado en Terapia Ocupacional, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1420/1990, de 26 de octubre.
---	--

Ejemplo 38

Se modifica el artículo 11 que queda redactado del siguiente modo: Las infracciones leves se sancionarán con multa desde 30 euros hasta 600 euros salvo las previstas en el artículo 49, apartado 2, párrafos a) y b) que se sancionarán con multa de hasta 30 € si la conducta infractora se realiza de forma aislada.	Se modifica el artículo 11, que queda redactado del siguiente modo: Las infracciones leves se sancionarán con multa desde 30 euros hasta 600 euros, salvo las previstas en el artículo 49, apartado 2, párrafos a) y b), que se sancionarán con multa de hasta 30 €, si la conducta infractora se realiza de forma aislada.
---	---

Ejemplo 39

2.5. Sobre la coma y el punto y coma en relaciones coordinadas

Las series de elementos coordinados que se cierran al final con una conjunción copulativa se separan, en general, por medio de una coma. Solo se aconseja el uso de punto y coma cuando dichos elementos coordinados son complejos e incluyen comas en su interior. De lo contrario, el punto y coma es inadecuado. Este es el fundamento de la corrección que se opera en estos textos:

Para hacer efectivo este derecho, la ley regula pormenorizadamente y siguiendo una sistemática lógica las competencias y planificación en materia de vivienda; la calidad y habitabilidad de las viviendas; la protección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas; el régimen legal de las viviendas de protección pública y el régimen sancionador.	Para hacer efectivo este derecho, la ley regula, pormenorizadamente y siguiendo una sistemática lógica las competencias y planificación en materia de vivienda, la calidad y habitabilidad de las viviendas, la protección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas, el régimen legal de las viviendas de protección pública y el régimen sancionador.
--	---

Ejemplo 40

No estará permitido que los mensajes publicitarios de las bebidas alcohólicas y productos del tabaco inciten a un consumo abusivo de estos productos o se asocien a una mejora del rendimiento físico o psíquico; al éxito social o sexual; a efectos terapéuticos, sedantes o estimulantes; a contribuir a superar la timidez o a resolver conflictos; a la realización de actividades educativas, sanitarias y deportivas; a la conducción de vehículos y al manejo de armas y, en general, con actividades que impliquen riesgo para los consumidores o responsabilidades sobre terceros. Asimismo, queda prohibido ofrecer una imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad.	No estará permitido que los mensajes publicitarios de las bebidas alcohólicas y productos del tabaco inciten a un consumo abusivo de estos productos o se asocien a una mejora del rendimiento físico o psíquico, al éxito social o sexual, a efectos terapéuticos, sedantes o estimulantes; a contribuir a superar la timidez o a resolver conflictos, a la realización de actividades educativas, sanitarias y deportivas, a la conducción de vehículos y al manejo de armas y, en general, a actividades que impliquen riesgo para los consumidores o responsabilidades sobre terceros. Asimismo, queda prohibido ofrecer una imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad.
---	---

Ejemplo 41

2.6. Coma innecesaria ante un complemento circunstancial

En la introducción a este apartado segundo, se expone que los complementos circunstanciales, si no están topicalizados se unen al verbo sin coma. Esto contribuye en numerosos casos a expresar diferencias de sentido: no es lo mismo *Estudia en Madrid* (complemento circunstancial sin coma) que *En Madrid, estudia* (tópico). Como regla práctica, los circunstanciales pospuestos no llevan coma.

Las dos actuaciones siguientes suprimen la coma en dos complementos circunstanciales postpuestos al verbo.

Deberán superar un período formativo o de prácticas ; antes de obtener nombramiento como personal estatutario fijo.	Deberán superar un período formativo o de prácticas antes de obtener nombramiento como personal estatutario fijo.
---	---

Ejemplo 42

Tal objetivo ha sido cumplido, a través del establecimiento de las normas básicas...	Tal objetivo ha sido cumplido por medio del establecimiento de las normas básicas...
---	---

Ejemplo 43

2.7. Dos puntos para introducir una enumeración

Las enumeraciones de elementos que explicitan una expresión genérica previa se expresan tras dos puntos. Sin embargo, no es infrecuente hallar el uso de comas

Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de interinidad, de carácter eventual o de sustitución.	Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser: de interinidad, de carácter eventual o de sustitución.
---	--

Ejemplo 44

3. CUESTIONES DE REDACCIÓN

Se agrupan bajo este apartado un conjunto de fenómenos de naturaleza varia (gramatical o estilística) que pueden contribuir a mejorar o a empeorar no solo la gramaticalidad y la elegancia, sino también la comprensión de las disposiciones legales.

3.1. Concordancias y discordancias

3.1.1. Discordancias de género o de número

En las construcciones nominales cuantificadas por expresiones del tipo *un montón de*, *una cantidad de*, etc. aparecen problemas constantes de concordancia. Sin embargo, no se encuentran con frecuencia en los textos legales, ya que la mayoría de sus usos es coloquial (*mogollón de*, *la tira de*, etc.). Los fallos de concordancia encontrados suelen ser más elementales. Algunos son puras erratas, debidas a una discordancia de género o de número con su antecedente o núcleo:

Actividades recreativas y espectáculos públicos sometidas a autorización de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.	Actividades recreativas y espectáculos públicos sometidos a autorización de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
--	--

Ejemplo 45

Se constituirá una comisión gestora integrada por personas designadas por los promotores de la creación del colegio de entre aquellos que figuren en el "Censo...	Se constituirá una comisión gestora integrada por personas designadas por los promotores de la creación del colegio de entre aquellas que figuren en el "Censo...
--	--

Ejemplo 46

Estudios de planeamiento. <i>Consiste</i> en la definición de un esquema vial en un determinado año horizonte,...	Estudios de planeamiento. <i>Consisten</i> en la definición de un esquema vial en un determinado año horizonte,...
---	--

Ejemplo 47

Algunas de estas discordancias son sintomáticas, pues no se deben tanto a una errata explorable, sino a una auténtica duda gramatical. Es el caso del uso del pronombre indefinido *tal/tales*, que es invariable en algunos contextos (como adverbio y en sus usos neutros).

...que aparecen formuladas como <i>tal</i> en el artículo 32.1.19ª...	...que aparecen formuladas <i>como tales</i> en el artículo 32.1.19ª...
---	---

Ejemplo 48

3.1.2. Sustantivos femeninos que comienzan por *a* o *ha* tónicas

Como es de esperar, en el lenguaje jurídico aparecen también con relativa frecuencia las confusiones en la concordancia de los demostrativos ante sustantivos femeninos que comienzan por *a* o *ha* que representan la vocal tónica /á/. Así hallamos casos de esta área, como el que representa el siguiente ejemplo:

...de actuación propia de los Ayuntamientos en Ayuntamiento en este área,...	...de actuación propia de los Ayuntamientos en <i>esta</i> área,...
--	---

Ejemplo 49

3.2. Repeticiones

El exceso de repeticiones no viola generalmente normas gramaticales, pero entorpece el estilo y afecta a la lectura. Es frecuente con algunas preposiciones, especialmente *de*. Su abuso contribuye a asentar la indeterminación y, a veces, la ambigüedad en el texto.

En el siguiente ejemplo aparece en tres líneas cinco veces la misma preposición.

...programas <i>de</i> ejecución directa, sin perjuicio, claro está, <i>de</i> la asignación <i>de</i> la ejecución <i>de</i> la política <i>de</i> cooperación al personal adscrito al centro directivo.	...programas de ejecución directa, sin perjuicio, claro está, <i>de que se asigne</i> la ejecución de la política de cooperación al personal adscrito al centro directivo.
---	--

Ejemplo 50

La repetición de elementos gramaticales es la que más daña a la recta interpretación. Ocurre también con el relativo y la conjunción *que*. Su abuso provoca falta de claridad y lectura dificultosa. La solución más conveniente en estos casos es dividir el párrafo, ya que, con frecuencia, estos usos repetidos del relativo *que* son el resultado de un deseo de colgar informaciones sucesivas.

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta la cláusula de supletoriedad del Derecho estatal a <i>que</i> alude el artículo 149.3 CE, <i>que</i> ha dado lugar a una importante doctrina del Tribunal Constitucional <i>que</i> desmiente la pretensión de aplicación supletoria del Reglamento estatal.	Por otro lado, también debe tenerse en cuenta la cláusula de supletoriedad del Derecho estatal a <i>que</i> alude el artículo 149.3 CE. <i>Esta</i> ha dado lugar a una importante doctrina del Tribunal Constitucional <i>que</i> desmiente la pretensión de aplicación supletoria del Reglamento estatal.
--	---

Ejemplo 51

Lo mismo ocurre con la voz *como*. Tiene numerosos valores: relativo, conjunción modal, conjunción comparativa, conjunción copulativa en las expresiones tanto...como, conjunción completiva (*Ya verás como viene*). En el siguiente ejemplo se sustituye la coordinación con el fin de que aparezca uno solo de sus usos:

La utilización tanto de la oposición e del concurso como sistemas únicos de selección deberá ser objeto de negociación en la Mesa Sectorial del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas.	La utilización de la oposición y del concurso como sistemas únicos de selección deberá ser objeto de negociación en la Mesa Sectorial del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas.
--	--

Ejemplo 52

3.3. Abuso de participios de presente

El participio de presente latino tenía un valor verbal y admitía construcciones verbales. En el español medieval y parte del moderno se utilizaba con complementos verbales. Sin embargo, poco a poco se ha asimilado a la categoría de los adjetivos. En el uso jurídico tiende a usarse el participio de presente con el valor de una oración de relativo o de un gerundio (*habilitante*=“que habilita”), lo que lo convierte en una expresión caduca y alejada del pueblo.

Para regular con carácter integral esta materia, habida cuenta el carácter limitado de su título competencial <i>habilitante</i> , se comprende, sin mayor dificultad, la necesidad de abordar la elaboración de un marco normativo global propio.	Para regular con carácter integral esta materia, habida cuenta el carácter limitado del título competencial <i>que la habilita</i> , se comprende, sin mayor dificultad, la necesidad de abordar la elaboración de elaboración de un marco normativo global propio.
--	---

Ejemplo 53

El rango de la norma deriva también del peligroso vacío sancionador resultante del insuficiente grado jerárquico del Real Decreto.	El rango de la norma deriva también del peligroso vacío sancionador <i>que resulta</i> del insuficiente grado jerárquico del Real Decreto.
--	--

Ejemplo 54

3.4. Cambios de orden

Muchas de las actuaciones en las correcciones de leyes tienen que ver con cambios de orden para conseguir mayor claridad en la interpretación mayor fluidez en la escritura. Generalmente, son incisos que están colocados fuera de sitio, que entorpecen la reconstrucción de la estructura sintáctica, que aportan confusión. La reubicación restituye claridad al texto. Veamos algunos ejemplos:

Las actuaciones relativas a las carreteras a que se refiere la presente Ley, <i>por constituir obras públicas de interés general</i> , no estarán sujetas a actos de control preventivo municipal.	<i>Por constituir obras públicas de interés general</i> , las actuaciones relativas a las carreteras a que se refiere la presente Ley no estarán sujetas a actos de control preventivo municipal.
--	---

Ejemplo 55

La Administración titular de la carretera, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones, podrá imponer, en el ámbito de sus competencias,...	<i>Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones, la Administración titular de la carretera podrá imponer, en el ámbito de sus competencias,...</i>
--	--

Ejemplo 56

...que deriva directamente de la denominación de los tres estatutos de personal -el estatuto de personal médico, el estatuto de personal sanitario no facultativo y el estatuto de personal no sanitario- de tales centros e instituciones.	...que deriva directamente de la denominación de los tres estatutos de personal de tales centros e instituciones: el estatuto de personal médico, el estatuto de personal sanitario no facultativo y el estatuto de personal no sanitario.
---	--

Ejemplo 57

Informar debidamente, de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables en cada caso y dentro del ámbito de sus competencias, a los usuarios y pacientes sobre su proceso asistencial y sobre los servicios disponibles.	Informar debidamente a los usuarios y pacientes sobre su proceso asistencial y sobre los servicios disponibles, de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables en cada caso y dentro del ámbito de sus competencias.
--	---

Ejemplo 58

La anteposición del complemento circunstancial también produce incertidumbre.

...lo que ha motivado que en el Servicio de Salud de Castilla y León y en sus centros sanitarios se encuentre prestando servicios personal con vinculación funcional, laboral y estatutaria.	...lo que ha motivado que se encuentre prestando servicios personal con vinculación funcional, laboral y estatutaria en el Servicio de Salud de Castilla y León y en sus centros sanitarios.
--	--

Ejemplo 59

La restitución de un adjetivo o de otro complemento verbal al margen posterior del nombre otorga mayor naturalidad al texto.

...desde la perspectiva de la esencial función de protección de la salud que desempeña el personal estatutario.	...desde la perspectiva de la función esencial de protección de la salud que desempeña el personal estatutario.
---	---

Ejemplo 60

A la percepción puntual de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio en cada caso establecidas.	A la percepción puntual de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio establecidas en cada caso.
--	--

Ejemplo 61

Otros casos de intervención en el orden para establecer una redacción más natural y fresca.

Corresponde al Consejero competente en materia de sanidad, con el fin de mejorar la actividad asistencial, la planificación de los recursos humanos del Servicio de Salud de Castilla y León para conseguir la máxima eficiencia en la asignación de los mismos.	Con el fin de mejorar la actividad asistencial, corresponde al consejero competente en materia de sanidad la planificación de los recursos humanos del Servicio de Salud de Castilla y León para conseguir la máxima eficiencia en la asignación de los mismos.
--	---

Ejemplo 62

Consecuencias económicas que para el personal se deriven de las actuaciones previstas en los planes, de conformidad con la legislación aplicable.	Consecuencias económicas para el personal que se deriven de las actuaciones previstas en los planes, de conformidad con la legislación aplicable.
---	---

Ejemplo 63

Atendiendo a la garantía de los principios constitucionales de acceso a la función pública de igualdad, mérito, y capacidad, así como al de competencia, la selección del personal estatutario fijo se realizará con carácter general a través del sistema de concurso-oposición.	La selección del personal estatutario fijo se realizará con carácter general a través del sistema de concurso-oposición, atendiendo a la garantía de los principios constitucionales de acceso a la función pública de igualdad, mérito, y capacidad, así como al de competencia.
---	---

Ejemplo 64

3.5. Sustitución de adverbios para conseguir mayor precisión

La expresión *en cualquier caso* se ha convertido en una muletilla del lenguaje jurídico. No es incorrecta, pero se hace pesada y también menos clara que otros adverbios y expresiones como *siempre*...

La forma de adjudicación de dichas áreas de servicio será en cualquier caso el concurso.	La forma de adjudicación de dichas áreas de servicio será siempre el concurso.
--	---

Ejemplo 65

3.6. Inclusión de elementos conjuntivos para conseguir mayor inteligibilidad

En el lenguaje jurídico aparece en ocasiones una tendencia hacia el laconismo conjuntivo, tendencia a ahorrar conjunciones repetidas. Esto que en expresiones breves puede ser loable, en oraciones complejas y de largo vuelo puede convertirse en un inconveniente grave para la comprensión.

Por razones de necesidad, urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, el Servicio de Salud de Castilla y León podrá nombrar personal estatutario temporal.	Bien por razones de necesidad o urgencia, bien para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, el Servicio de Salud de Castilla y León podrá nombrar personal estatutario temporal.
--	--

Ejemplo 66

Del mismo modo, cuando el sujeto elíptico de una oración pueda dificultar la identificación de su referente, conviene introducir pronombres que, a través de sus marcas de género y de número nos ayuden a identificarlo:

Las competencias que en materia de personal estatutario le sean asignadas por la normativa vigente o no vengan atribuidas expresamente a ningún otro órgano de la Administración.	Las competencias que, en materia de personal estatutario , le sean asignadas por la normativa vigente, así como aquellas que no vengan atribuidas expresamente a ningún otro órgano de la Administración.
---	---

Ejemplo 67

A veces, es necesario cambiar el elemento conjuntivo por otro de sentido más claro:

Al personal estatutario temporal le será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general del personal estatutario fijo.	Al personal estatutario temporal le será aplicable, siempre que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general del personal estatutario fijo.
---	--

Ejemplo 68

3.7. Coordinaciones. Uso de la conjunción /o/ en lugar de la conjunción copulativa /y/, etc.

A la redacción de las leyes llegan también algunos hábitos periodísticos, como el empleo de la conjunción disyuntiva *o* con valor de conjunción copulativa. Conviene evitar este uso y restituir en su lugar la conjunción copulativa:

...en las presiones demográficas y migratorias, en el deterioro ambiental, en los conflictos interétnicos <i>o</i> en la expansión de las epidemias.	...en las presiones demográficas y migratorias, en el deterioro ambiental, en los conflictos interétnicos y en la expansión de las epidemias.
--	--

Ejemplo 69

3.8. Combinación congruente de preposiciones y locuciones prepositivas

A veces, aparecen coordinando dos complementos de la misma naturaleza expresiones prepositivas, sinónimas en apariencia, pero cuya convivencia destaca sus diferencias:

Tal objetivo ha sido cumplido , a través del establecimiento de las normas básicas relativas a este personal y mediante la aprobación de su Estatuto Marco a través de la Ley 55/2003,...	Tal objetivo ha sido cumplido por medio del establecimiento de las normas básicas relativas a este personal y mediante la aprobación de su Estatuto Marco a través de la Ley 55/2003,...
---	--

Ejemplo 70

En los grupos preposicionales coordinados, conviene casi siempre mantener la presencia de la preposición y del artículo, con el fin de que el paralelismo funcional de los segmentos que se coordinan quede patente:

Comprometerse con el sistema sanitario público en el desempeño del puesto de trabajo, a través del cumplimiento de los objetivos relativos a cantidad de trabajo, calidad de trabajo, utilización racional de los recursos, gestión del activo y trato con los pacientes.	Comprometerse con el sistema sanitario público en el desempeño del puesto de trabajo, a través del cumplimiento de los objetivos relativos a la cantidad y calidad de trabajo, a la utilización racional de los recursos, a la gestión del activo, así como al trato con los pacientes.
--	--

Ejemplo 71

3.9. Nueva redacción de un párrafo complejo o confuso

La oscuridad, el desorden, la confusión... son cualidades malditas en cualquier tipo de texto (incluso el filosófico), pero con más motivo en los textos técnicos jurídicos. En muchas ocasiones la intervención necesaria consiste en proceder a una nueva redacción, tal como se ha operado en los textos que siguen:

Esta ley se completa con la regulación de las situaciones del personal, la acción social, el desarrollo profesional -construido sobre dos pilares básicos: la formación y la carrera profesional, entendida ésta como un sistema de reconocimiento individual de carácter voluntario, abierto y progresivo, ligado al reconocimiento de competencias de los profesionales y a la evaluación del desempeño-, la salud laboral, los sistemas de representación del personal, de participación y de negociación colectiva, el régimen disciplinario y las incompatibilidades, en sus <u>Capítulos X a XVI</u> .	Esta Ley se completa, en sus Capítulos X a XVI, con la regulación de las situaciones del personal, la acción social y el desarrollo profesional, construido sobre dos pilares básicos: la formación y la carrera profesional, entendida <u>esta</u> como un sistema de reconocimiento individual de carácter voluntario, abierto y progresivo, ligado al reconocimiento de competencias de los profesionales y a la evaluación del desempeño. Asimismo, en dichos Capítulos se regula la salud laboral, los sistemas de representación del personal, de participación y de negociación colectiva, el régimen disciplinario y las incompatibilidades.
--	---

Ejemplo 72

Establecer anualmente las normas para la aplicación del régimen retributivo del personal estatutario del Servicio de Salud, a iniciativa de los Consejeros con competencias en materia de política presupuestaria y gasto público y de sanidad.	Establecer anualmente, a iniciativa de los consejeros con competencias en materia de política presupuestaria y gasto público y de sanidad, las normas para la aplicación del régimen retributivo del personal estatutario del Servicio de Salud.
---	--

Ejemplo 73

Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros Tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.	Poseer la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Ostentar, en su defecto, el derecho a la libre circulación de trabajadores, conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España. En último caso, tener reconocido tal derecho por norma legal.
---	---

Ejemplo 74

3.10. Armonización del inicio en párrafos que inician una relación

La redacción de las leyes se ve precisada con frecuencia a establecer relaciones de elementos paralelos que dependen de un mismo núcleo. Cuando estos elementos son oraciones, es fácil que la atención del redactor se relaje y que los miembros de la enumeración comiencen con núcleos o formas no congruentes. Es necesario evitarlo. El siguiente texto, se iniciaba con infinitivos y cambiaba a núcleos nominales que no poseen significado de acción. Es necesario armonizar su inicio. Lo mismo ocurre en los textos que siguen:

f. Proponer a la Junta de Castilla y León el establecimiento de la jornada de trabajo del personal de centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud de Castilla y León. g. La convocatoria y resolución de concursos de provisión de puestos de trabajo del personal estatutario. h. Proponer a la Junta de Castilla y León la aprobación de la oferta de empleo público de personal estatutario. i. La convocatoria de pruebas de selección de personal estatutario, estableciendo las bases, programas y contenido de éstas. j. El nombramiento como personal estatutario fijo de aquellos aspirantes que hayan superado las pruebas de selección, y la expedición de los correspondientes títulos.	f. Proponer a la Junta de Castilla y León el establecimiento de la jornada de trabajo del personal de centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud de Castilla y León. g. Convocar y resolver los concursos de provisión de puestos de trabajo del personal estatutario. h. Proponer a la Junta de Castilla y León la aprobación de la oferta de empleo público de personal estatutario. i. Convocar las pruebas de selección de personal estatutario, así como establecer las bases, programas y contenido de éstas. j. Nombrar como personal estatutario fijo a aquellos aspirantes que hayan superado las pruebas de selección, y la expedición de los correspondientes títulos.
---	--

Ejemplo 75

c. Informar los planes de ordenación de recursos humanos, así como las previsiones y medidas que se deriven de los mismos y que tengan incidencia en el gasto público. d. La iniciativa conjunta con el Consejero competente en materia de sanidad en la propuesta de normas para la aplicación del régimen retributivo previsto en la presente ley al personal estatutario del Servicio de Salud.	c. Informar de los planes de ordenación de recursos humanos, así como las previsiones y medidas que se deriven de los mismos y que tengan incidencia en el gasto público. d. Tomar la iniciativa conjuntamente con el Consejero competente en materia de sanidad en la propuesta de normas para la aplicación del régimen retributivo previsto en la presente Ley al personal estatutario del Servicio de Salud.
---	---

Ejemplo 76

e. A la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, en la forma que prevean las disposiciones en cada caso aplicables.	e. A la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, en la forma que prevean las disposiciones aplicables en cada caso .
f. A que sea respetada su dignidad e intimidad personal en el trabajo y a ser tratado con corrección, consideración y respeto por sus jefes y superiores, sus compañeros y sus subordinados.	f. Al respeto de su dignidad e intimidad personal en el trabajo, al trato correcto, a la consideración y respeto por parte de sus jefes y superiores, así como de sus compañeros y subordinados.

Ejemplo 77

Se acordará el cese de personal estatutario eventual cuando concurra alguna de las circunstancias que se relacionan a continuación:	Se acordará el cese de personal estatutario eventual cuando concurra alguna de las circunstancias que se relacionan a continuación:
a. Se produzca la causa o venza el plazo que expresamente se determine en su nombramiento.	a. Cuando se produzca la causa o venza el plazo que expresamente se determine en su nombramiento.
b. Se supriman las funciones que en su día lo motivaron.	b. Cuando se supriman las funciones que en su día lo motivaron.
c. Resolución de la relación estatutaria durante el periodo de prueba, en los términos establecidos en esta Ley.	c. Cuando haya resolución de la relación estatutaria durante el periodo de prueba, en los términos establecidos en esta Ley.

Ejemplo 78

3.11. Restitución del núcleo nominal

La elipsis de un núcleo nominal modificado por un adjetivo o construcción equivalente (grupo prepositivo, oración de relativo) es posible cuando el contexto es rico en información. En algunos casos, estas elisiones dejan en la penumbra y en la duda al referente. Conviene evitar tales situaciones restituyendo el nombre:

l. Aceptar la renuncia a la condición de personal estatutario fijo de aquellos pertenecientes a centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud de Castilla y León.	l. Aceptar la renuncia a la condición de personal estatutario fijo de aquellas personas que pertenecen a centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud de Castilla y León.
m. Declarar la pérdida de la condición de personal estatutario fijo de los pertenecientes a centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud de Castilla y León, en los supuestos legalmente establecidos.	m. Declarar la pérdida de la condición de personal estatutario fijo de los profesionales pertenecientes a centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud de Castilla y León, en los supuestos legalmente establecidos.

Ejemplo 79

3.12. Uso anafórico de la muletilla mismo-misma

La referencia hacia una expresión precedente se realiza por medio de pronombres anafóricos (personales, demostrativos, relativos, indefinidos). El uso de las expresiones *el mismo, la misma...*, tan frecuente en el lenguaje jurídico, es rechazada por dos razones: porque desprende un aroma rancio, desusado, y porque genera normalmente dudas. Es preferible sustituirlo por otra expresión, tal como se hace en los siguientes ejemplos:

Colaborar con la Inspección de Servicios Sanitarios en las funciones encomendadas a la misma .	Colaborar con la Inspección de Servicios Sanitarios en las funciones a esta Inspección les sean encomendadas .
---	---

Ejemplo 80

Los Planes de Ordenación de Recursos Humanos, basados en causas objetivas, constituyen el instrumento básico de planificación de los mismos dentro del Servicio de Salud de Castilla y León.	Los Planes de Ordenación de Recursos Humanos, basados en causas objetivas, constituyen el instrumento básico de su planificación dentro del Servicio de Salud de Castilla y León.
---	--

Ejemplo 81

Plazo para presentar las mismas que habrá de ser como mínimo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y León".	Plazo para presentar las solicitudes, que habrá de ser, como mínimo, de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y León".
---	--

Ejemplo 82

3.13. Interpolación entre el nombre y un complemento relacional

Los relacionales constituyen un tipo de adjetivos que se diferencian de los calificativos en rasgos bastante precisos:

- Dan como resultado construcciones que podemos determinar como "un tipo de": un *teléfono móvil* es "un tipo de" teléfono, un *ordenador portátil* es "un tipo de" ordenador, un *reloj digital* es "un tipo de" reloj, etc.
- Entre el nombre y el adjetivo relacional no se pueden intercalar elementos de ningún otro tipo. Forman una unidad significativa solidificada.
- Los adjetivos relacionales no admiten gradación (comparativos y superlativos).
- Los adjetivos relacionales no pueden funcionar como atributos ni como predicativos.
- No se conmuta por el adverbio así.
- El mismo funcionamiento que los adjetivos relacionales ofrecen construcciones con preposición: *ordenador de mesa, reloj de caballero, avión a reacción, buque de guerra*, etc.

Con mayor frecuencia de la debida, aparecen en los textos jurídicos elementos interpuestos entre un nombre y un adjetivo relacional. Ha de ser evitado. Es una interpolación anómala. En el siguiente texto la expresión *sistemas de gestión* forma un grupo indivisible. El hecho de interpolar adjetivos como *autónomos* y *propios* violenta la construcción. No es una falta muy frecuente.

Los servicios y unidades de los centros e instituciones sanitarias podrán organizarse en Unidades de Gestión Clínica, que desarrollarán sistemas autónomos y propios de gestión,...	Los servicios y unidades de los centros e instituciones sanitarias podrán organizarse en Unidades de Gestión Clínica, que desarrollarán sistemas de gestión autónomos y propios ,...
--	---

Ejemplo 83

3.14. Redacción innecesariamente confusa

El lenguaje jurídico tiene a utilizar con mucha frecuencia sustantivos de acción a los que se adjuntan complementos propios de los verbos. En muchos casos es preferible el uso de infinitivos que no necesitan de preposiciones para introducir el sujeto y el complemento directo:

Es personal estatutario fijo el que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven.	Es personal estatutario fijo el que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, es nombrado para desempeñar con carácter permanente las funciones que de tal nombramiento se deriven.
---	--

Ejemplo 84

3.15. Introducción de un artículo

También con relativa frecuencia se elide el artículo indefinido o indeterminado. Aunque el contexto suele intervenir positivamente, puede la ausencia del artículo puede crear ambigüedades. En el siguiente ejemplo, la expresión *plaza de nuevo titular* puede entenderse como un tipo de plaza o bien como la plaza que ha de ocupar un nuevo titular. En esta última interpretación es conveniente la presencia del artículo

Incorporación a la plaza de nuevo titular como consecuencia de la resolución de cualquiera de los procedimientos establecidos para la provisión de plazas.	Incorporación a la plaza de un nuevo titular, como consecuencia de la resolución de cualquiera de los procedimientos establecidos para la provisión de plazas.
--	---

Ejemplo 85

4. GERUNDIOS

El gerundio es una de las formas gramaticales con mayores sutilezas de uso y, a la vez, una fuente de errores gramaticales, así como de desajustes estilísticos. Es celebrada la decisión de un director de periódico que solo autorizaba el uso de un gerundio por página.

Sin embargo, el gerundio es una de las formas más utilizadas en el lenguaje jurídico, hecho que lo convierte en diana de todas las diatribas de los gramáticos y también de los lectores con gusto formado en la buena escritura.

A continuación expondremos una relación de usos que se han de evitar, acompañada de los usos que sí son posibles.

Usos incorrectos	Usos correctos
Gerundio de posterioridad: la acción que denota es posterior a la señalada por el verbo principal: -Abrió el libro leyendo después un capítulo. -Se cayó de la bici rompiendo la clavícula. Se debe sustituir por una oración coordinada.	Complemento circunstancial de modo: responde a la pregunta ¿cómo? -Se hace caramelizando el azúcar.
Gerundio especificativo: se emplea como un adjetivo complemento nominal especificativo: -Compró un disco conteniendo muchas arias. Equivale a una oración de relativo. (Es correcto <i>agua hirviendo, clavo ardiendo</i>).	Atributo del verbo estar: -Están arreglando la ventana.
Gerundio predicativo de complementos indirectos o circunstanciales: -Da pan al pobre pidiendo limosna.	Gerundio predicativo de complemento directo o de sujeto: -La dejó llorando, Me quedé pensando.
	Gerundio como tópico: en posición inicial, separado por pausas, con valores adverbiales (concesivo, condicional).

4.1. Gerundio de posterioridad

Constituyen un uso muy frecuente en el lenguaje jurídico. Choca frontalmente contra la sensibilidad lingüística del ciudadano no jurista, no habituado al aterrizaje de esta forma verbal directamente sobre el verbo sin que admita ser sustituido por el interrogativo ¿cómo? Esta pregunta planteada al verbo suele constituir una buena piedra de toque sobre su uso correcto o incorrecto.

Aparte de esta prueba, el redactor de leyes, tras observar su significado de posterioridad, puede intentar conmutar el gerundio por una construcción coordinada. Si admite la prueba, deberá sustituirlo. Es lo que se ha hecho en los siguientes párrafos:

El Real Decreto 1420/1990... creó el título universitario oficial dándole validez en todo el territorio nacional.	El Real Decreto 1420/1990... creó el título universitario oficial y le dio validez en todo el territorio nacional.
--	---

Ejemplo 86

(No se crea el título al darle validez oficial)

Por último, se regula la Inspección Técnica de los Edificios considerando que debe ser esta ley la que regule y ponga las bases para un desarrollo reglamentario posterior.	Por último, se regula la Inspección Técnica de los Edificios y se considera que debe ser esta ley la que regule y ponga las bases para un desarrollo reglamentario posterior.
--	--

Ejemplo 87

(No se regula al considerar que debe ser esta ley...)

Independientemente del momento y circunstancias en las que nace, la presente ley tiene una vocación de permanencia en el tiempo y no meramente coyuntural, debiendo servir para establecer de forma ordenada y transparente las condiciones necesarias.	Independientemente del momento y circunstancias en las que nace, la presente ley tiene una vocación de permanencia en el tiempo y no meramente coyuntural, y deberá servir para establecer de forma ordenada y transparente las condiciones necesarias.
--	--

Ejemplo 88

En algunas ocasiones el gerundio debe sustituirse por un punto. El sentido de posterioridad se infiere del orden en que aparecen los enunciados. En el siguiente párrafo tenemos dos gerundios de posterioridad. Uno de ellos reclama la segmentación de un punto. El otro se resuelve con una coordinación:

En este sentido, la ley parte de la regulación exhaustiva de la vivienda de protección pública, empezando por su definición; los aspectos que se refieren al régimen de uso, teniendo en cuenta...	En este sentido, la ley parte de la regulación exhaustiva de la vivienda de protección pública. Empieza por su definición; los aspectos que se refieren al régimen de uso, y tiene en cuenta...
---	---

Ejemplo 89

Convocará la asamblea constituyente garantizando la participación en la misma de los profesionales que ejerzan en Castilla y León y reúnan los requisitos para incorporarse al colegio.	Convocará la asamblea constituyente y garantizará la participación en ella de los profesionales que ejerzan en Castilla y León y reúnan los requisitos para incorporarse al colegio.
--	--

Ejemplo 90

El gerundio de posterioridad se puede denominar también gerundio de enlace en tanto en cuanto sirve para conectar ideas. Esta conexión de posterioridad puede llevar aparejada una idea de causa explicativa. En tales casos, la sustitución más correcta es la de una oración de relativo que tiene como antecedente toda la oración que precede y legado a una preposición de causalidad:

...solicitó la creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León, abriéndose un procedimiento administrativo encaminado a la comprobación de los requisitos...	...solicitó la creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León, por lo que se abrió un procedimiento administrativo encaminado a la comprobación de los requisitos...
---	--

Ejemplo 91

...disfrutan de todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico vigente para los usuarios de los servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales de la Comunidad de Castilla y León, mereciendo particular atención los siguientes:	...disfrutan de todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico vigente para los usuarios de los servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales de la Comunidad de Castilla y León. Merecen particular atención los siguientes:
--	---

Ejemplo 92

En otras ocasiones, la sustitución puede realizarse con un complemento prepositivo. Este ejemplo no expresa propiamente posterioridad, sino que se aproxima a los ejemplos del gerundio complemento nominal del tipo *Un cartel advirtiendo*.

En la superficie frontal de las máquinas figurará, de forma clara y visible, como se determine reglamentariamente, que la venta de bebidas alcohólicas está prohibida a los menores de 18 años y advirtiendo de los perjuicios para la salud derivados del abuso de bebidas alcohólicas”.	En la superficie frontal de las máquinas figurará, de forma clara y visible, como se determine reglamentariamente, que la venta de bebidas alcohólicas está prohibida a los menores de 18 años, con la advertencia de perjuicios para la salud derivados del abuso de bebidas alcohólicas”.
--	--

Ejemplo 93

Dos casos más de gerundio que puede ser sustituido por una división de punto.

La organización de este sistema se articulaba sobre la diferenciación de dos niveles de actuación, los servicios básicos y los servicios específicos, destacando en los primeros los Centros de Acción Social (CEAS) como eje fundamental.	La organización de este sistema se articulaba sobre la diferenciación de dos niveles de actuación, los servicios básicos y los servicios específicos. En los primeros destacan los Centros de Acción Social (CEAS) como eje fundamental.
---	---

Ejemplo 94

En el Título I se establecen las disposiciones generales , iniciándose el texto con la determinación del objeto de la Ley. Quedan excluidas de esta Ley.	En el Título I se establecen las disposiciones generales. Se inicia el texto con la determinación del objeto de la Ley.
---	--

Ejemplo 95

No obstante, en el supuesto de que dos Jueces/as estén interesados en las vacantes que se anuncien en un determinado concurso, podrán condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en dicho concurso, entendiéndose , en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos.	No obstante, en el supuesto de que dos Jueces/as estén interesados en las vacantes que se anuncien en un determinado concurso, podrán condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en dicho concurso. En caso contrario, se entenderá anulada la petición efectuada por ambos.
---	--

Ejemplo 96

Por otro lado, el consumo es un área de actuación pública que se caracteriza por su interdisciplinariedad, constituyendo hoy en día uno de los sectores más dinámicos y complejos que requiere una continua expansión de su base normativa para la regulación de los derechos de los consumidores y usuarios.	Por otro lado, el consumo es un área de actuación pública que se caracteriza por su interdisciplinariedad. Constituye hoy en día uno de los sectores más dinámicos y complejos que requiere una continua expansión de su base normativa para la regulación de los derechos de los consumidores y usuarios.
--	---

Ejemplo 97

En algunos casos la coordinación copulativa posee un valor de suma (aditivo) y se sustituye con mayor naturalidad por la expresión *así como*:

La convocatoria de pruebas de selección de personal estatutario, estableciendo las bases, programas y contenido de éstas.	Convocar las pruebas de selección de personal estatutario, así como establecer las bases, programas y contenido de éstas.
---	---

Ejemplo 98

4.2. Gerundio especificativo

Ha sido caracterizado como un gerundio de naturaleza adjetiva que aparece especificando un nombre. Suena a galicismo crudo. Debe ser evitado. Una forma fácil de hacerlo es acudir a una oración de relativo. Así se hace en la intervención del ejemplo siguiente:

Ante la falta de norma autonómica debe dictarse una norma que tenga rango de ley atendiendo a la doctrina del Consejo de Estado.	Ante la falta de norma autonómica, se debe dictar una norma con rango de ley que atienda a la doctrina del Consejo de Estado.
--	---

Ejemplo 99

Estudio previo. Consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios para definir en líneas generales las diferentes soluciones de un determinado problema, valorando todos sus efectos.	Estudio previo. Consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios para definir en líneas generales las diferentes soluciones de un determinado problema, en las que se valoren todos sus efectos.
--	--

Ejemplo 100

Vengo en nombrar en propiedad a don Francisco José Gómez de Lorenzo-Cáceres, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, teniendo preferencia, además, durante los dos años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por el concurso voluntario no reservada a especialista.	Vengo en nombrar en propiedad a don Francisco José Gómez de Lorenzo-Cáceres, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, quien tendrá preferencia, además, durante los dos años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por el concurso voluntario no reservada a especialista.
--	--

Ejemplo 101

4.3. Gerundio de conclusión

Es una modalidad del gerundio de posterioridad. Tiene de singular el hecho presentar una conclusión. Conviene en estos casos colocar un punto e iniciar un nuevo enunciado. El sentido suele pedir la presencia de un pronombre neutro que haga referencia a toda la oración, tal como se observa en el siguiente ejemplo.

La expresada circunstancia aconteció el 1 de enero de 2002 de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad de Castilla y León de funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, realizándose la integración con las peculiaridades organizativas y funcionales...	La expresada circunstancia aconteció el 1 de enero de 2002, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre, sobre el traspaso a la Comunidad de Castilla y León de funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. Con ello se realizó la integración con las peculiaridades organizativas y funcionales...
--	---

Ejemplo 102

4.4. Gerundio de coordinación

La sustitución del gerundio de posterioridad se realiza aquí, no por un verbo, sino por un sustantivo que se coordina con el grupo nominal previo:

La búsqueda de la calidad a través del cumplimiento de objetivos asistenciales, promoviendo la mejora continua en el desempeño de los puestos de trabajo.	La búsqueda de la calidad a través del cumplimiento de objetivos asistenciales y la promoción de la mejora continua en el desempeño de los puestos de trabajo.
---	---

Ejemplo 103

4.5. Gerundio condicional

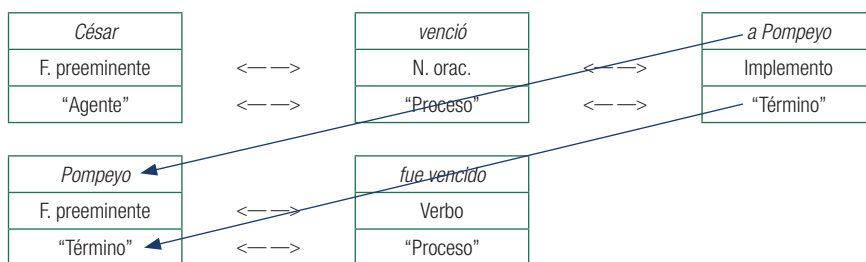
En posición de inciso inicial, en una construcción que afecta a toda la oración que sigue, el gerundio puede expresar valores condicionales: *Hablando, se entiende la gente* ('Si la gente habla, se entiende'). Sin embargo, este uso queda restringido a la posición de inciso inicial. En otros contextos es percibido como irregular y anómalo. En el siguiente ejemplo se ha de sustituir por una construcción condicional temporal:

A la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que resulten esenciales para la atención sanitaria a la población.	A la huelga, siempre y cuando se garantice el mantenimiento de los servicios que resulten esenciales para la atención sanitaria a la población.
--	--

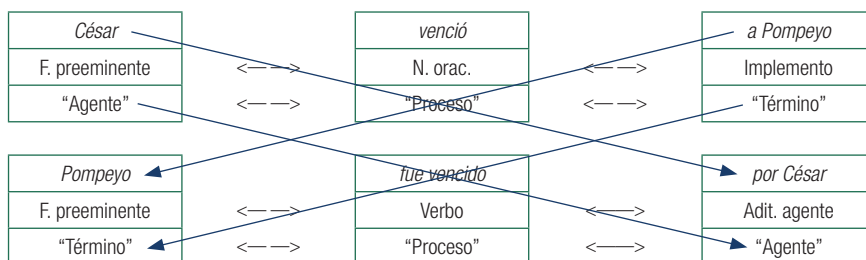
Ejemplo 104

5. PASIVAS REFLEJAS Y USO DEL COMPLEMENTO AGENTE

Las estructuras pasivas constituyen una forma de inversión de los enunciados activos. En un principio, era un proceso iniciado en la supresión del sujeto, con la clara intención de eludir su cita o referencia. El hablante construía una oración agentiva sin la intención de referirse al agente. Como consecuencia de esta supresión se producía una transformación: el antiguo complemento directo pasaba a ocupar la posición vacía del sujeto.

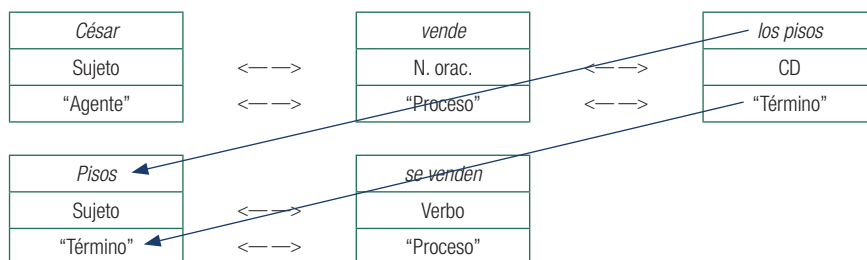


Sin embargo, la generalización de la estructura, ya en latín generó la aparición de un complemento externo que introducía por la puerta de atrás al agente.



En la lengua romance se origina un proceso similar, pero sin el concurso de la flexión verbal pasiva (que había desaparecido). El medio gramatical que se utiliza es la partícula *se*.

-César vende los pisos —> Se venden los pisos



A diferencia de las pasivas clásicas, aquí la introducción del complemento agente es agramatical. La gramática no admite **Los pisos se venden por César*. El uso de la pasiva refleja en castellano es más frecuente que el de la llamada pasiva perifrástica.

En el lenguaje jurídico el recurso a la pasiva refleja es constante; pero, a diferencia del lenguaje cotidiano y también del literario, el lenguaje jurídico acude con frecuencia a la introducción del complemento agente. Este recurso, que puede tener alguna justificación en la forma de ordenar la estructura textual, choca contra el buen uso de la sintaxis del español. El jurista, habituado a su lectura frecuente y a su uso en la escritura, no percibe la agramaticalidad. Sin embargo, el ciudadano, destinatario de las leyes, siente rechazo.

Existen dos soluciones:

- Acudir a la construcción activa
- Sustituir la por una estructura pasiva con participio

35

5.1. Sustitución por la construcción activa

En este proceso de transformación de una pasiva refleja en activa:

- La partícula *se* es eliminada.
- El verbo queda como estaba.
- El sujeto retorna a su papel de complemento directo
- El complemento agente se convierte en sujeto.

La redacción adquiere no solo gramaticalidad, sino también fluidez y naturalidad:

Se han incorporado todos aquellos valores, principios, objetivos y directrices que se hubieran adoptado o que se vayan a adoptar en el futuro por los organismos internaciones competentes en la materia.

Se han incorporado todos aquellos valores, principios, objetivos y directrices que hubieran adoptado o que vayan a adoptar en el futuro los organismos internaciones competentes en la materia.

Ejemplo 105

Previa negociación en la Mesa Sectorial del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas y dentro de los límites presupuestarios, ~~por el Consejero competente en materia de sanidad se adoptarán~~, atendiendo, entre otros, a factores organizativos, sociales y demográficos.

Previa negociación en la Mesa Sectorial del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas y dentro de los límites presupuestarios, **el consejero competente en materia de sanidad adoptará**, atendiendo, entre otros, a factores organizativos, sociales y demográficos.

Ejemplo 106

...de acuerdo con la programación que se establezca al efecto por el Servicio de Salud de Castilla y León.	...de acuerdo con la programación que establezca al efecto el Servicio de Salud de Castilla y León.
--	--

Ejemplo 107

5.2. Sustitución por una construcción de pasiva perifrástica ser + participio

La pasiva refleja se convierte en pasiva perifrástica:

- El sujeto se mantiene como sujeto.
- Desaparece la forma se.
- El verbo adopta la forma ser + participio.
- El complemento agente, si lo hubiere, se mantiene como tal.

Es lo que ocurre en la siguiente oración en la que el infinitivo activo se convierte en infinitivo pasivo. El complemento agente deja de convertirse en un factor anómalo.

La cooperación bilateral, que podrá desarrollarse directamente por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.	La cooperación bilateral, que podrá ser desarrollada directamente por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
--	--

Ejemplo 108

En el siguiente ejemplo

Si transcurrido dicho plazo y un mes más y no se hubiera evacuado el informe citado por la referida Consejería se entenderá su conformidad con el mismo.	Si, transcurrido dicho plazo y un mes más, y no hubiera sido evacuado el informe citado por la referida Consejería, se entenderá su conformidad con el mismo.
--	--

Ejemplo 109

Cuando los accesos se solicitasen por los particulares directamente interesados,...	Cuando los accesos fuesen solicitados por los particulares directamente interesados,...
---	--

Ejemplo 110

5.3. Complemento agente en la pasiva nominal

En contra de lo que solían explicar las gramáticas, existe también una pasiva nominal. Los nombres de acción pueden invertir la jerarquía de sus complementos, como se puede comprobar en los siguientes ejemplos:

- La destitución del presidente de un ministro.
- La destitución de un ministro por el presidente.

En este último caso, existe un complemento agente.

En el lenguaje jurídico, por causas en las que no podemos entrar aquí, es muy frecuente el recurso a los nombres de acción. Sustituyen a oraciones. Los complementos de estos nombres se corresponden con el sujeto y otros argumentos verbales. Como consecuencia, son también numerosos los casos de pasiva nominal.

Existe un hecho que se ha de tener en cuenta. La pasiva nominal admite complementos agentes, pero su expresión es más natural si se utiliza el giro prepositivo *por parte de*.

En este sentido, y sin olvidar otras disposiciones encargadas de regular los requisitos para el reconocimiento y disfrute de las distintas prestaciones así como las condiciones exigidas para la prestación de servicios sociales por las entidades públicas y privadas, se aprobaron sucesivamente las siguientes normas de rango legal...	En este sentido, y sin olvidar otras disposiciones encargadas de regular los requisitos para el reconocimiento y disfrute de las distintas prestaciones, así como las condiciones exigidas para la prestación de servicios sociales por parte de las entidades públicas y privadas, se aprobaron sucesivamente las siguientes normas de rango legal...
--	--

Ejemplo 111

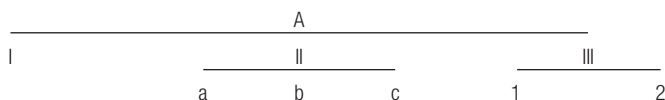
6. COORDINACIONES

6.1. Coordinación y lenguaje jurídico

En las construcción sintáctica existen dos grandes tipos de relación: la coordinación y la subordinación. La primera (que incluye la clásica yuxtaposición) une elementos de la misma naturaleza, categoría y función.

La coordinación, en cualquiera de sus manifestaciones (adjunción o cópula, disyunción o alternancia, oposición o adversatividad), es de enorme uso en el lenguaje jurídico. Con gran frecuencia el legislador se ve en la precisión de relacionar todos los elementos afectados por una disposición.

Existe otro rasgo del lenguaje jurídico que impulsa el uso de las coordinaciones: su voluntad de exhaustividad y de presentar todo relacionado ha creado el hábito de construir párrafos largos y complejos. Por eso, en el lenguaje jurídico se observa, más que en otros tipos de textos, la frecuencia de las llamadas coordinaciones en cascada o coordinaciones en diferente nivel jerárquico, tales como se muestran en este esquema abstracto:



6.2. La segmentación de párrafos largos

Una de las intervenciones más convenientes ante la presencia de párrafos largos llenos de coordinaciones es la segmentación en puntos. Nada tan claro e inteligible como los puntos breves. La supuesta pérdida de información y de explicitud no es tal si la división se efectúa con cuidado. Es preferible dividir, aunque para ello se haya de repetir expresiones que faciliten el enlace con lo que precede y con lo que sigue. Es lo que se propone en el siguiente texto:

También se contempla el que la Administración de la Comunidad fomente la participación de su personal para la colaboración en acciones, proyectos y programas de cooperación y ayuda humanitaria y se regula la posibilidad de solicitar la colaboración y de contratar personas físicas o jurídicas especializadas, provenientes del sector privado o de otras instituciones, bajo la normativa propia de la contratación pública.	También se contempla el que la Administración de la Comunidad fomente la participación de su personal para la colaboración en acciones, proyectos y programas de cooperación y ayuda humanitaria. Asimismo se regula la posibilidad de solicitar la colaboración y de contratar personas físicas o jurídicas especializadas, provenientes del sector privado o de otras instituciones, bajo la normativa propia de la contratación pública.
---	---

Ejemplo 112

6.3. Coordinaciones con *así como*

Las coordinaciones de elementos pueden tener lugar en diferentes niveles. Si en la coordinación de elementos del nivel I se utiliza la conjunción copulativa y, es conveniente, por razones de claridad, acudir a otras expresiones en las coordinaciones del nivel inferior. Entre estos coordinadores se halla la expresión conjuntiva *así como*. Tiene, sin embargo, una particularidad: ha de ir precedida de coma. Esto la diferencia de la copulativa y, más prototípica y frecuente. Esto es la causa de errores, como los que aparecen en los ejemplos que siguen:

...los plazos de entrega a sus destinatarios y los cambios de uso o destino <i>así como</i> las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer.	...los plazos de entrega a sus destinatarios y los cambios de uso o destino, <i>así como</i> las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer.
---	--

Ejemplo 113

...respetando lo establecido con carácter básico por la normativa estatal <i>así como</i> las competencias exclusivas del Estado en la materia.	...respetando lo establecido con carácter básico por la normativa estatal, <i>así como</i> las competencias exclusivas del Estado en la materia.
---	--

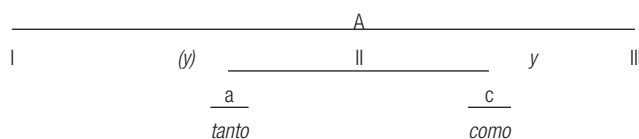
Ejemplo 114

...se observa una gran penetración social de las bebidas alcohólicas, una generalización de su uso y abuso y una gran precocidad en los primeros contactos con el alcohol, el tabaco y las drogas ilegales.	...se observa una gran penetración social de las bebidas alcohólicas, una generalización de su uso y abuso, <i>así como una gran precocidad</i> en los primeros contactos con el alcohol, el tabaco y las drogas ilegales.
---	--

Ejemplo 115

6.4. Introducción de coordinantes tanto...como

En los párrafos largos, donde hallamos coordinaciones en diferentes niveles, la superpoblación de la conjunción copulativa y es foco de frecuentes problemas de comprensión. Cuando esto ocurre, es necesario intervenir. Si el párrafo no se divide, además del recurso a la expresión *así como*, vista en el apartado anterior, cabe la posibilidad de acudir al coordinante complejo *así...como...* Posee valor copulativo y contribuye a diferenciar niveles de coordinación.



En los siguientes ejemplos se recoge tres casos de intervención en los que la introducción del coordinante binario *tanto...como* introduce claridad y soltura en la redacción

La protección y mejora de la calidad del medio ambiente, respetando la biodiversidad y la conservación y utilización razonable y sostenible de los recursos naturales.	La protección y mejora de la calidad del medio ambiente, respetando <i>tanto</i> la biodiversidad <i>como</i> la conservación y utilización razonable y sostenible de los recursos naturales.
--	---

Ejemplo 116

A los efectos de esta ley, se entenderá por acción humanitaria el conjunto diverso de intervenciones de ayuda a las víctimas de desastres, orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así como a frenar el proceso de desestructuración económica de las comunidades a las que pertenecen y prevenir los desastres.	A los efectos de esta ley, se entenderá por acción humanitaria el conjunto diverso de intervenciones de ayuda a las víctimas de desastres, orientadas tanto a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, como a frenar el proceso de desestructuración económica de las comunidades a las que pertenecen y prevenir los desastres.
---	---

Ejemplo 117

El reconocimiento del papel económico, social y medioambiental de las mujeres en los países empobrecidos para la consecución de un desarrollo real y sostenible y el fomento de las acciones, programas y proyectos, en especial los implementados por las propias mujeres y sus organizaciones, para la satisfacción de sus necesidades, el acceso a los recursos económicos y sociales y el pleno disfrute de sus derechos.	El reconocimiento del papel económico, social y medioambiental de las mujeres tanto para la consecución de un desarrollo real y sostenible y el fomento de las acciones, programas y proyectos, en especial los realizados por las propias mujeres y sus organizaciones, como para la satisfacción de sus necesidades, el acceso a los recursos económicos y sociales y el pleno disfrute de sus derechos.
--	---

Ejemplo 118

...así como la producción de conocimientos en ese ámbito de la cooperación al desarrollo a través de apoyo a líneas de investigación que formulen propuestas sobre la eficacia de la cooperación descentralizada, y el intercambio de conocimientos y recursos humanos mediante la transferencia de tecnología con el fin de fortalecer y abrir nuevas vías para la cooperación.	... asimismo comprende la producción de conocimientos en ese ámbito de la cooperación al desarrollo a través de apoyo a líneas de investigación que formulen propuestas sobre la eficacia de la cooperación descentralizada, así como propuestas sobre el intercambio de conocimientos y recursos humanos mediante la transferencia de tecnología , con el fin de fortalecer y abrir nuevas vías para la cooperación.
--	--

Ejemplo 119

La Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León y la aplicación de los sucesivos Planes Regionales sobre Drogas,...	La Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León , así como la aplicación de los sucesivos Planes Regionales sobre Drogas,...
---	--

Ejemplo 120

Dirigir la negociación con la representación sindical de las condiciones de trabajo del personal de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León, de acuerdo con las instrucciones de la Junta de Castilla y León, y proponer a ésta la aprobación de los acuerdos alcanzados.	Dirigir la negociación con la representación sindical de las condiciones de trabajo del personal de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León, de acuerdo con las instrucciones de la Junta de Castilla y León, así como proponer a esta la aprobación de los acuerdos alcanzados.
--	--

Ejemplo 121

Se han de evitar los cruces entre las construcciones *así como* y *tanto...como*, como la que se refleja en el caso siguiente:

...las previsiones contenidas tanto en las directivas comunitarias de aplicación así como en la propia Ley.	...las previsiones contenidas tanto en las directivas comunitarias de aplicación como en la propia Ley.
---	---

Ejemplo 122

6.5. Coma para diferenciar los dos niveles de la coordinación

La presencia de dos niveles de coordinación se puede resolver en párrafos no muy complejos con la presencia de una coma. En el siguiente texto, hay una coordinación entre dos elementos nominales (*su desarrollo y aplicación*) inmediatamente seguida de otra conjunción y que une lo que sigue (*ejerce la potestad reglamentaria en materia de personal estatutario*) con lo que precede (*La Junta de Castilla y León...*). La presencia de la coma ante la segunda conjunción muestra que su acción se sitúa en un nivel distinto de la anterior:

La Junta de Castilla y León establece la política de personal, dirige su desarrollo y aplicación y ejerce la potestad reglamentaria en materia de personal estatutario,...	La Junta de Castilla y León establece la política de personal, dirige su desarrollo y aplicación, y ejerce la potestad reglamentaria en materia de personal estatutario,...
--	---

Ejemplo 123

7. ORACIONES DE RELATIVO

7.1. Las oraciones de relativo

Las oraciones de relativo constituyen un recurso lingüístico de enorme importancia en la lengua. Permiten crear un número ilimitado de expresiones con valor adjetival, valores que no podría albergar ningún diccionario del mundo. Por otra parte, nos permiten interpolar informaciones, especificaciones y explicaciones.

En los textos jurídicos es particularmente abundante la presencia de oraciones de relativo. Su carácter de conectores permite al legislador enlazar partes del texto e introducir las especificaciones y salvedades que necesita.

7.2. Recuperación del antecedente

Las oraciones de relativo tienen un antecedente, generalmente nominal, cuyo significado y referente es necesario conocer y tener presente para interpretar de forma inconfundible lo denotado por el relativo. En el lenguaje cotidiano, cuando el contexto es amplio y son posibles las repeticiones y explicaciones, el antecedente puede no estar citado de forma explícita. Basta muchas veces un pronombre. Sin embargo, en la redacción de las leyes, donde los párrafos suelen ser largos y estar poblados posibles antecedentes, es necesario evitar la indeterminación. Cuando no quede claro se ha de introducir explícitamente, como en el ejemplo que se propone:

También se incorporan aquellas sobre las que la doctrina ha alcanzado un consenso generalizado: la lucha contra la pobreza, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural.	También se incorporan aquellas acciones sobre las que la doctrina ha alcanzado un consenso generalizado: la lucha contra la pobreza, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural.
---	--

Ejemplo 124

7.3. Oraciones de relativo seguidas

Al igual que ocurría en las coordinaciones, hallamos con relativa frecuencia dos o más oraciones de relativo en secuencia. Como se trata de oraciones subordinadas que se incrustan en un grupo nominal, se crea una sensación de incrustación sucesiva que se asemeja a una caja china. Aparte del efecto negativo estético, este tipo de incrustaciones repercute en la claridad del texto.

En tales casos conviene evitar la secuencia de dos relativos idénticos. Una de las intervenciones posibles consiste, siempre que se pueda, sustituir uno de los relativos por otra forma equivalente:

- donde... donde —> donde... en el que
- cuanto... cuanto —> cuanto... lo que

Cuando sea posible, también mejora la redacción sustituir la oración de relativo por un participio, como se hace en el ejemplo siguiente. El participio permite mantener los elementos de la oración de relativo: el relativo queda reemplazado por su antecedente, el sujeto se convierte en complemento agente y el lexema del participio sigue transmitiendo el mismo contenido verbal. Como el participio y la oración de relativo poseen un valor funcional de adjetivo, no se necesita modificar la estructura general.

Esta participación activa de los poderes públicos debe coexistir con el respeto absoluto al principio de libertad de empresa que consagra la Constitución Española, que implica un reconocimiento a la iniciativa privada y libertad de decisión,...	Esta participación activa de los poderes públicos debe coexistir con el respeto absoluto al principio de libertad de empresa consagrado por la Constitución Española, que implica un reconocimiento a la iniciativa privada y libertad de decisión,...
--	--

Ejemplo 125

En ocasiones, cuando tenemos dos oraciones de relativo seguidas y coordinadas, se puede suprimir el relativo. Esta posibilidad está restringida, sin embargo, a la inteligibilidad. Si produce confusión, es necesario restituir el relativo elidido. Es lo que se hace en la operación del siguiente ejemplo:

El instrumento esencial de planificación de la política de cooperación al desarrollo será el Plan Director, que tendrá una duración cuatrienal y contendrá las líneas generales y directrices básicas,...	El instrumento esencial de planificación de la política de cooperación al desarrollo será el Plan Director, que tendrá una duración cuatrienal y que contendrá las líneas generales y directrices básicas,...
---	---

Ejemplo 126

En estos mismos casos de coordinación de oraciones de relativo, lo que falta es el coordinante. En coordinaciones normales, la supresión de la conjunción genera una construcción yuxtapuesta, fácilmente inteligible. Sin embargo, la caída de la conjunción que une dos oraciones de relativo seguidas puede provocar ambigüedad. El lector tiende a buscar el antecedente del relativo en un sintagma nominal inmediato, no lejano. Por eso, es conveniente no elidir la conjunción.

Establecer las directrices conforme a las cuales ejercerán sus competencias en materia de personal estatutario los distintos órganos de la Administración que permitan una gestión de personal coordinada, eficaz y eficiente.	Establecer las directrices conforme a las cuales ejercerán sus competencias en materia de personal estatutario los distintos órganos de la Administración y que permitan una gestión de personal coordinada, eficaz y eficiente.
--	--

Ejemplo 127

7.4. Relativas explicativas y especificativas

Van siempre entre pausas. La presencia de la coma es necesaria, pues su ausencia conlleva un cambio de sentido. A veces, la presencia de otra coma en sus inmediaciones permite la distracción y la falta ortográfica, como ocurre en el siguiente caso.

...no había sucedido así respecto al personal estatutario que , sin perjuicio de determinadas modificaciones normativas puntuales, se encontraba en gran parte regulado por estatutos preconstitucionales.	...no había sucedido así respecto al personal estatutario, que , sin perjuicio de determinadas modificaciones normativas puntuales, se encontraba en gran parte regulado por estatutos preconstitucionales.
---	--

Ejemplo 128

Por el contrario, en las relativas especificativas no puede parecer la coma. También habría posibilidad de confusión grave de sentido.

El personal estatutario fijo adscrito a centros o instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León, que obtenga nombramiento en un puesto de trabajo .	El personal estatutario fijo adscrito a centros o instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León que obtenga nombramiento en un puesto de trabajo provisto por libre designación ,
---	---

Ejemplo 129

7.5. Relativo el cual

El relativo *el cual* es motivo constante de redacciones incorrectas. Con antecedente, solo se permite su uso cuando tiene antepuesta una preposición. En el resto de los casos, es preferible sustituirlo por un pronombre con valor anafórico (es decir, con capacidad de referirse a lo anterior). Por ejemplo, un demostrativo. En tales casos es aconsejable dividir el párrafo con un punto.

Un aspecto novedoso son los preceptos introducidos en materia de financiación de carreteras, los cuales además de la financiación tradicional posibilitan legalmente los mecanismos concesionales con vistas a la construcción y explotación de carreteras.	Un aspecto novedoso son los preceptos introducidos en materia de financiación de carreteras. Estos, además de la financiación tradicional, posibilitan legalmente los mecanismos de concesión con vistas a la construcción y explotación de carreteras.
--	---

Ejemplo 130

7.6. Presencia del artículo

Cuando el relativo que viene precedido de una preposición y de un artículo, hay contextos en los que se permite la elisión del artículo: *La pomada con (la) que te cura*. Sin embargo, esta elisión está fuertemente restringida a casos concretos. Cuando haya duda, es preferible colocar el artículo:

...no estarán sujetas a actos de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84-1b) de la Ley 7/1985.	...no estarán sujetas a actos de control preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84-1b) de la Ley 7/1985.
---	--

Ejemplo 131

7.7. Relativo cuyo

El relativo cuyo ha desaparecido prácticamente del lenguaje oral. Sin embargo, se mantiene en el lenguaje escrito. Son cada día más numerosos los intentos de sustitución de este relativo tratando de desdoblarse sus funciones. Así lo encontramos con frecuencia dividido en dos formas: *que le, que su*, etc.

- Un niño cuyo padre tiene un camión.
- Un niño que su padre tiene un camión.

La presencia de *cuyo* bien utilizado no provoca confusiones. Si hubiera que sustituirlo a causa de la longitud y la complejidad del párrafo, existen varios recursos. Uno es la división del párrafo en dos. El otro es sustituir la oración de relativo por un participio. Es la medida que se toma en el siguiente ejemplo:

El personal estatutario fijo adscrito a centros o instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León, que obtenga nombramiento en un puesto de trabajo cuyo procedimiento de provisión sea la libre designación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 38 de la presente ley , tendrá derecho a la reserva de su plaza de origen.	El personal estatutario fijo adscrito a centros o instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León que obtenga nombramiento en un puesto de trabajo provisto por libre designación , de conformidad con lo estipulado en el artículo 38 de la presente Ley , tendrá derecho a la reserva de su plaza de origen.
--	---

Ejemplo 132

8. PREPOSICIONES

El uso adecuado de las preposiciones constituye otro caballo de batalla en todo el aprendizaje de la escritura. Los complementos verbales, nominales, adjetivales y adverbiales suelen tener restringido su uso a los factores semánticos que traten de expresar. Existe, pues, una dificultad en la elección de la preposición adecuada. Hay ocasiones en las que el desvío se debe al uso de calcos de otras lenguas. Son muy frecuentes los galicismos. En construcciones complejas, por otra parte, nos encontramos con la supresión innecesaria o incluso poco deseable.

8.1. Galicismos

La influencia de la cultura francesa y de su lengua durante gran parte del siglo XIX ha generado calcos que afectan especialmente al uso de preposiciones. Algunos han cristalizado y han sido aceptados por nuestra lengua (*barco a vapor, avión a reacción*). Sin embargo, otros siguen provocando resistencia en los hablantes cultos.

En el lenguaje jurídico es frecuente el recurso a este tipo de galicismos, especialmente unidos a infinitivos de proyección futura. Es necesario evitarlos dentro de lo posible. Si el complemento expresa finalidad, la opción más loable es introducir la preposición *para* o la locución *a fin de*:

En todo caso, se exige un plus de información en el caso de que la vivienda a comprar, en primera o ulterior transmisión, o a alquilar sea una vivienda de protección pública.	En todo caso, se exige un plus de información en la circunstancia de que la vivienda para comprar , en primera o ulterior transmisión, o para alquilar sea una vivienda de protección pública.
---	---

Ejemplo 133

Las razones concretas que justifican la necesidad y oportunidad de abordar a través de una Ley la intervención administrativa a desarrollar por esta Comunidad en materia de espectáculos públicos.	Las razones concretas que justifican la necesidad y oportunidad de abordar a través de una Ley la intervención administrativa de esta Comunidad en materia de espectáculos públicos.
--	---

Ejemplo 134

En otras ocasiones la sustitución más adecuada se corresponde con una oración de relativo. Si la construcción de infinitivo comporta cierta carga de obligatoriedad, la oración de relativo puede concretar esa idea a través de una perífrasis que conforme ese contenido (*haber de, tener que...*).

...suprimir las tarifas que constituyen la contraprestación de los servicios a prestar por las sociedades concesionarias.	...suprimir las tarifas que constituyen la contraprestación de los servicios que han de prestar las sociedades concesionarias.
---	--

Ejemplo 135

...las características socioprofesionales del colectivo que pueda acceder a las pruebas o de las funciones a desarrollar. Cuando las peculiaridades de las tareas específicas a desarrollar o el nivel de cualificación requerido así lo aconsejen, la selección podrá realizarse por el sistema de concurso.	...las características socioprofesionales del colectivo que pueda acceder a las pruebas o de las funciones que se han de desarrollar. Cuando las peculiaridades de las tareas específicas que se han de desarrollar o el nivel de cualificación requerido así lo aconsejen, la selección podrá realizarse por el sistema de concurso.
--	--

Ejemplo 136

Si carece de obligatoriedad y simplemente aporta un contenido de futuro, basta con una oración de relativo que aporte descripción de un hecho posterior.

Los criterios para la clasificación del personal estatutario, basados en las funciones a desarrollar.	Los criterios para la clasificación del personal estatutario, basados en las funciones que va a desarrollar.
---	--

Ejemplo 137

Una tercera solución para evitar los galicismos preposicionales con /a/ es acudir a adjetivos de origen verbal, especialmente los adjetivos en -ble. Aportan también idea de posterioridad y de posibilidad.

El sistema a utilizar deberá ser negociado con carácter previo en la Mesa Sectorial del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas.	El sistema utilizable deberá ser negociado con carácter previo en la Mesa Sectorial del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas.
--	--

Ejemplo 138

8.2. Repeticiones y ausencias de preposición

A veces, la repetición de una misma preposición se hace enojosa para el estilo. En tales circunstancias, conviene buscar una solución alternativa. A veces, el cambio por una preposición equivalente no modifica el sentido:

...así como la solidaridad social con las personas con problemas de drogodependencia.	...así como la solidaridad social hacia las personas con problemas de drogodependencia.
---	---

Ejemplo 139

Consiste en la definición de un esquema vial en un determinado año horizonte.	Consisten en la definición de un esquema vial con un determinado año horizonte.
---	---

Ejemplo 140

En las coordinaciones de varios elementos que comienzan por preposición no siempre se puede elidir estos elementos de enlace. Puede cambiar seriamente el sentido. En otros casos, se trata simplemente de un problema de claridad y de facilidad interpretativa. Como regla general, se ha de evitar la elisión de preposiciones en elementos coordinados si estos no forman un bloque referencial. No es lo mismo:

- cartas de su maestro y amante.
- cartas de su maestro y de su amante.

En el siguiente ejemplo, se restituyen las preposiciones elididas para introducir más claridad y ritmo narrativo.

Al mismo tiempo, en un mundo donde tanto las amenazas como las oportunidades están interconectadas, la cooperación al desarrollo no sólo es un imperativo moral, sino también una inversión en la prosperidad compartida, la seguridad colectiva y el futuro común.	Al mismo tiempo, en un mundo donde tanto las amenazas como las oportunidades están interconectadas, la cooperación al desarrollo no sólo es un imperativo moral, sino también una inversión en la prosperidad compartida, en la seguridad colectiva y en el futuro común.
---	--

Ejemplo 141

La presencia de una preposición elidida en coordinaciones puede recordar el núcleo lejano de un complemento verbal. En el siguiente ejemplo la presencia de la preposición hace patente el paralelismo con la secuencia *con multas*. . . y su dependencia del participio *sancionadas*.

Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas, en su caso, con multas; suspensión, cancelación o prohibición de recibir financiación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; suspensión temporal de la actividad y cierre temporal o definitivo de la empresa, establecimiento, centro o servicio.	Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas, en su caso, con multas; suspensión, cancelación o prohibición de recibir financiación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; con suspensión temporal de la actividad y cierre temporal o definitivo de la empresa, establecimiento, centro o servicio.
--	--

Ejemplo 142

La planificación viaria de las carreteras objeto de esta Ley se realiza a través del Plan Regional de Carreteras y los Planes Provinciales de Carreteras.	La planificación viaria de las carreteras objeto de esta Ley se realiza a través del Plan Regional de Carreteras y de los Planes Provinciales de Carreteras.
---	---

Ejemplo 143

...cuando las condiciones, situaciones, exigencias técnicas o seguridad vial de las carreteras lo requieran,...	...cuando las condiciones, situaciones, exigencias técnicas o de seguridad vial de las carreteras lo requieran,...
---	---

Ejemplo 144

...sino también una inversión en la prosperidad compartida, la seguridad colectiva y el futuro común.	...sino también una inversión en la prosperidad compartida, en la seguridad colectiva y en el futuro común.
---	--

Ejemplo 145

En las relaciones con términos regidos por una preposición, esta no debe ser elidida. Es el caso del siguiente ejemplo: el verbo atender exige un complemento de régimen con la preposición */a/*. Su elisión provoca irregularidad:

Las actividades de cooperación al desarrollo atenderán, de forma prioritaria: a) Los países y territorios empobrecidos que cuenten con menor índice de desarrollo humano y los que contengan extensas capas de su sociedad especialmente desfavorecidas y desestructuradas. b) Los países empobrecidos con los que existan relaciones de tipo histórico, social y cultural.	Las actividades de cooperación al desarrollo atenderán de forma prioritaria: a) A los países y territorios empobrecidos que cuenten con menor índice de desarrollo humano y los que contengan extensas capas de su sociedad especialmente desfavorecidas y desestructuradas. b) A los países empobrecidos con los que existan relaciones de tipo histórico, social y cultural.
---	---

Ejemplo 146

8.3. Cambios de preposición

Aunque no es demasiado frecuente, se registran en la redacción de las leyes usos erróneos de preposiciones. Es lo que ocurre en el siguiente ejemplo. La preposición que exige la palabra derechos con un complemento genérico es *de*: *derecho de reunión*. Su uso con la preposición *a* y artículo también es posible, pero con infinitivos (*derecho a votar*) o con elementos no genéricos (*derecho a la prima de lactancia*):

e. A la reunión.	e. De reunión.
-----------------------------	---------------------------

Ejemplo 147

En el ejemplo que sigue, serían posibles las dos preposiciones (*en* y *por*). Sin embargo, la más apropiada tras el participio para expresar el complemento agente es indudablemente *por*.

Cumplimentar los registros, informes y demás documentación clínica o administrativa establecidos en la correspondiente institución, centro o en el Servicio de Salud de Castilla y León.	Cumplimentar los registros, informes y demás documentación clínica o administrativa establecidos por la correspondiente institución o centro, así como por el Servicio de Salud de Castilla y León.
--	---

Ejemplo 148

9. REFERENCIA A TÍTULOS DE OBRAS, LEYES, ETC.

Las disposiciones legales utilizan la cursiva solamente en los títulos y entradas. Con alta frecuencia hacen referencia a otras leyes y disposiciones. Lo normal en las citas de títulos es utilizar la letra cursiva o las comillas, que marcan el inicio y el final (poseen función demarcativa). Sin embargo, en el texto de las leyes no se utiliza este procedimiento, lo que obliga a utilizar mayúsculas en todas las categorías léxicas (nombres, adjetivos, verbos y adverbios) y minúscula en las categorías gramaticales. En otras ocasiones, cuando no se marcan los títulos, se abre una ambigüedad patente.

Una forma menos costosa y más común de presentar los títulos consistiría en utilizar cursivas y evitar las letras mayúsculas en nombres comunes y adjetivos. Se exceptuarían aquellas denominaciones:

Ministerio de Economía y Hacienda Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.	Ministerio de Economía y Hacienda Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las <i>Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas</i> y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el <i>Plan general de contabilidad de pequeñas y medianas empresas</i> aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.
--	--

Ejemplo 149

Se observa una inestabilidad, una inseguridad y una variación de criterios continua en estos aspectos: no existen criterios fijos, hecho que conduce a incertidumbres continuas y a posibles errores en la interpretación. Aquí aparecen comillas para referirse a una materia. La presencia de las comillas aporta una información equívoca. No se trata de títulos de artículos, ni de capítulos, sino simplemente de materias sobre las que se trata.

La demora en el esclarecimiento del marco jurídico de referencia europeo en materia de “Combinaciones de negocios” y “Consolidación de estados financieros”, motivó que la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2008, no fuera acompañada de la aprobación de un real decreto que revisase las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.	La demora en el esclarecimiento del marco jurídico de referencia europeo en materia de combinaciones de negocios y consolidación de estados financieros , motivó que la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2008, no fuera acompañada de la aprobación de un real decreto que revisase las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
---	---

Ejemplo 150

Como en otras instancias y circunstancias, los plurales de nombres propios se convierten en nombres comunes, hecho por el que deben ser representados con minúsculas.

Asimismo, la disposición final habilita al Gobierno a dictar las normas complementarias del citado Plan, en concreto, las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, al objeto de desarrollar los aspectos contenidos en la nueva redacción de los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en las Directivas Comunitarias y teniendo en consideración las normas internacionales de información financiera adoptadas por los Reglamentos de la Unión Europea.	Asimismo, la disposición final habilita al Gobierno a dictar las normas complementarias del citado Plan, en concreto, las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, al objeto de desarrollar los aspectos contenidos en la nueva redacción de los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en las directivas comunitarias y teniendo en consideración las normas internacionales de información financiera adoptadas por los reglamentos de la Unión Europea.
---	---

Ejemplo 151

En junio de 2009 han sido aprobados los Reglamentos (CE) n.º 494/2009 y 495/2009 de la Comisión, de 3 de junio de 2009, que modifican el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo.	En junio de 2009 han sido aprobados los reglamentos (CE) n.º 494/2009 y 495/2009 de la Comisión, de 3 de junio de 2009, que modifican el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo.
---	--

Ejemplo 152

En ocasiones los nombres de los capítulos aparecen sin resalte que marque el principio y el fin:

El capítulo I, sujetos de la consolidación, en sintonía con el Código de Comercio y el nuevo Plan, define las sociedades incluidas en la consolidación, esto es, las sociedades dependientes, multigrupo y asociadas.	El capítulo I, “Sujetos de la consolidación” , en sintonía con el Código de Comercio y el nuevo Plan, define las sociedades incluidas en la consolidación, esto es, las sociedades dependientes, multigrupo y asociadas.
---	---

Ejemplo 153

Los sustantivos de las materias que no constituyan el nombre propio de una disciplina deben ir con minúsculas:

...con la finalidad de poner a disposición de las restantes sociedades un marco contable armonizado con el Derecho comunitariocon la finalidad de poner a disposición de las restantes sociedades un marco contable armonizado con el derecho comunitario .
---	---

Ejemplo 154

La reforma introducida en nuestro Derecho contable por la Ley 16/2007...	La reforma introducida en nuestro derecho contable por la Ley 16/2007...
---	---

Ejemplo 155

10. NOMBRES EXTRANJEROS, LATINISMOS...

La ausencia en el texto de cursivas impide destacar el carácter de términos o locuciones extranjeras que corresponde a las palabras o expresiones que se toman de otras lenguas. En el lenguaje jurídico es común la referencia a expresiones latinas. La formulación de las leyes

Sin embargo, en la medida que la consolidación también puede exigir integrar sociedades que no constituyen un negocio, o que la unidad de iure obligada a consolidar...	Sin embargo, en la medida que la consolidación también puede exigir integrar sociedades que no constituyen un negocio, o que la unidad <i>de iure</i> obligada a consolidar...
---	--

Ejemplo 156

11. PARTICIPIOS DE PRESENTE

Excepcionalmente, si la autoridad del Estado contratante competente según los artículos 5 ó 6, considera que la autoridad de otro Estado contratante está en mejor situación para apreciar, en un caso particular, el interés superior del niño, puede...	
---	--

Ejemplo 157

12. MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS

D. Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Impuesto sobre las Primas de Seguros. Impuesto sobre la Cerveza. Impuesto sobre el Vino y Bebidas fermentadas. Impuesto sobre Productos intermedios. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas derivadas. Impuesto sobre Hidrocarburos. Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Impuesto sobre la Electricidad. Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte. E. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. G. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.	D. Impuesto sobre las <i>ventas minoristas</i> de <i>determinados hidrocarburos</i> . Impuesto sobre las <i>primas de seguros</i> . Impuesto sobre la <i>cerveza</i> . Impuesto sobre el <i>vino y bebidas fermentadas</i> . Impuesto sobre <i>productos intermedios</i> . Impuesto sobre el <i>alcohol y bebidas derivadas</i> . Impuesto sobre <i>hidrocarburos</i> . Impuesto sobre las <i>labores del tabaco</i> . Impuesto sobre la <i>electricidad</i> . Impuesto especial sobre <i>determinados medios de transporte</i> . E. Impuesto sobre <i>vehículos de tracción mecánica</i> . G. Impuesto sobre <i>transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados</i> .
---	--

Ejemplo 158

Asimismo, esta Ley supone un alineamiento con las <i>Directivas, Comunicaciones, Decisiones y Recomendaciones</i> de las instituciones europeas.	Asimismo, esta Ley supone un alineamiento con las <i>directivas, comunicaciones, decisiones y recomendaciones</i> de las instituciones europeas.
--	--

Ejemplo 159

La Ley General de la Comunicación Audiovisual deroga en su totalidad doce <i>Leyes</i> y parcialmente otras <i>séis</i> y cuenta con ocho <i>Disposiciones Finales</i> .	La Ley General de la Comunicación Audiovisual deroga en su totalidad doce <i>leyes</i> y parcialmente otras <i>seis</i> y cuenta con ocho <i>disposiciones finales</i> .
--	--

Ejemplo 160

13. PALABRAS JUNTAS Y SEPARADAS

<p>El Real Decreto ...de acuerdo con las exigencias derivadas de distintas disposiciones nacionales, así como de la normativa comunitaria sobre bienestar animal, higiene y sanidad pecuaria, y protección del medioambiente. De esta forma, estableció unas condiciones mínimas dirigidas a minimizar los riesgos de tipo sanitario y medioambiental que este tipo de explotaciones puede conllevar.</p> <p>...En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, con la aprobación previa de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de septiembre de...</p>	<p>Se ha de procurar congruencia.</p>
---	---------------------------------------

Ejemplo 161

Los prefijos no se adjuntan a la palabra por medio de un guión, a no ser que sean mayúsculas (*anti-OTAN*) o sean cifras (*super-8*):

<p>Esa contraprestación se puede realizar, entre otras, en la forma de suscripción, pre-pago o pago por visión directa, ya sea para visionar o escuchar canales, programas o paquetes de programas.</p>	<p>Esa contraprestación se puede realizar, entre otras, en la forma de suscripción, prepago o pago por visión directa, ya sea para visionar o escuchar canales, programas o paquetes de programas.</p>
---	--

Ejemplo 162

14. NUMERALES Y ORDINALES

<p>La disposición adicional cuadragésima sexta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (...)</p> <p>(...)y de acuerdo con la disposición adicional cuadragésimo sexta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como con la resolución de 15 de octubre de 2009 del Servicio Público de Empleo Estatal, antes citada, resolvemos:</p>	<p>La primera parte de los ordinales concuerda con en sustantivo al que modifica.</p>
--	---

Ejemplo 163

BIBLIOGRAFÍA

El estudio inicial ha sido realizado sobre las correcciones efectuadas en proyectos de ley elaborados por las Cortes de Castilla y León. A continuación se detalla el nombre de los citados proyectos y algunas otras disposiciones legales, de diferente procedencia, que han contribuido a completar el estudio.

PROYECTOS DE LEY DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN:

- PROYECTO DE LEY DE CARRETERAS DE CASTILLA Y LEÓN.
- PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE CASTILLA Y LEÓN.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA Y REGULA EL CONSEJO AUDIOVISUAL DE CASTILLA Y LEÓN.
- PROYECTO DE LEY DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.
- PROYECTO DE LEY DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y DE GESTIÓN PÚBLICA.
- PROYECTO DE LEY PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y REGULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL.
- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 3/1994, DE 29 DE MARZO, DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES DE CASTILLA Y LEÓN.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/1991, DE 14 DE MARZO, POR LA QUE SE CREA Y REGULA LA COMARCA DE EL BIERZO.
- PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO JURÍDICO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN.
- PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DEL PARQUE NATURAL "SIERRA DE GUADARRAMA" (SEGOVIA Y ÁVILA).
- PROYECTO DE LEY DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN.
- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA Y LEÓN.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE APOYO A LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE CÁMARAS DE LA PROPIEDAD URBANA DE CASTILLA Y LEÓN Y SU CONSEJO GENERAL.

PROYECTO DE LEY DE CARRETERAS DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 3/1994, DE 29 DE MARZO, DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE LA HACIENDA Y DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE LA VIÑA Y DEL VINO DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE MONTES DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE APROBACIÓN DE LAS DIRECTRICES ESENCIALES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO JURÍDICO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE TRANSFERENCIA DE DETERMINADAS COMPETENCIAS ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LAS ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCE COMO UNIVERSIDAD PRIVADA A LA “UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CASTILLA Y LEÓN”, CON SEDE EN BURGOS.

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 3/2003, DE 28 DE MARZO, DE UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS SOBRE URBANISMO Y SUELO.

PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DE LA RESERVA NATURAL DE LAGUNAS DE VILLAFÁFILA (ZAMORA).

PROYECTO DE LEY DEL VOLUNTARIADO EN CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN “UNIVERSIDAD S.E.K.” POR “IE UNIVERSIDAD”, CON SEDE EN SEGOVIA.

PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE MONTES OBARENES-SAN ZADORNIL (Burgos).

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AMPLÍA EL PARQUE NATURAL DE LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA (SALAMANCA).

PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DEL PARQUE NATURAL HOCES DEL ALTO EBRO Y RUDRÓN (Burgos).

PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE “LAGUNA NEGRA Y CIRCOS GLACIARES DE URBIÓN” (Soria).

PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE “LAGUNAS GLACIARES DE NEILA” (Burgos).

PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO JURÍDICO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DE LA RESERVA NATURAL “ACEBAL DE GARAGÜETA” (Soria).

PROYECTO DE LEY DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA “SOCIEDAD PÚBLICA DE MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN”.

PROYECTO DE LEY DE SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS SOBRE URBANISMO Y SUELO.

PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN.

OTRAS DISPOSICIONES LEGALES:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica.

JEFATURA DEL ESTADO. Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996.

JEFATURA DEL ESTADO. Real Decreto 1588/2010, de 19 de noviembre, por el que se nombra en propiedad a don Francisco José Gómez de Lorenzo-Cáceres, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas.

JEFATURA DEL ESTADO. Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Acuerdo de 22 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a los Jueces a quien corresponde por turno de antigüedad, y se anuncia concurso para cobertura de vacantes.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

JEFATURA DEL ESTADO. Instrumento de Ratificación del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO. Real Decreto 1089/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica la normativa reguladora en materia de explotaciones porcinas extensivas.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Resolución de 12 de julio de 2010, del Instituto Social de la Marina y del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la tramitación electrónica automatizada de diversos procedimientos en materia de protección por desempleo del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Resolución de 12 de julio de 2010, del Instituto Social de la Marina y del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la tramitación electrónica automatizada de diversos procedimientos en materia de protección por desempleo del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdo entre Irlanda, el Reino de los Países Bajos, el Reino de España, la República italiana, la República portuguesa, la República francesa, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el que se crea un Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Drogas, hecho en Lisboa el 30 de septiembre de 2007.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Orden EHA/1338/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración

e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Decreto ley 2/2010, de 30 de marzo, por el que se modifica la Ley 11/2007, de 11 de octubre, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Real Decreto 449/2010, de 16 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1917/2009, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2010 del Plan Estadístico Nacional 2009-2012.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. Ley Foral 6/2010, de 6 de abril, de modificación de diversas leyes forales para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, por la que se establece el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

ESTUDIO DE CAMPO:
POLÍTICAS PÚBLICAS COMPARADAS
COMISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO

Dirigido por Cristina Carretero González, (Universidad Pontificia de Comillas).

M^a de los Reyes Corripio Gil-Delgado, Alicia Duñaiturria Laguarda, Federico de Montalvo Jääskeläinen, Blanca Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso y Pilar Úcar Ventura.

ÍNDICE

1. DATOS POR PAÍSES	5
1. España.....	5
1.1. Introducción. Base legal	5
1.2. Instituciones públicas diversas que han realizado acciones en materia de lenguaje jurídico en otros sectores distintos de justicia.....	7
1.3. Breve aproximación al lenguaje jurídico desde el punto de vista doctrinal y universitario.....	8
1.4. Instituciones públicas y privadas en CC.AA.....	10
1.4.1. Andalucía	10
1.4.2. Aragón	11
1.4.3. Asturias	12
1.4.4. Cantabria.....	13
1.4.5. Castilla-La Mancha	15
1.4.6. Castilla y León	15
1.4.7. Cataluña.....	16
1.4.8. Extremadura	16
1.4.9. Galicia	19
1.4.10. Islas Baleares	19
1.4.11. Islas Canarias	21
1.4.12. La Rioja.....	22
1.4.13. Madrid	25
1.4.14. Murcia.....	29
1.4.15. Comunidad Foral de Navarra.....	32
1.4.16. País Vasco	33
1.4.17. Comunidad Valenciana	34
1.5. Otras Organizaciones	35
2. Europa continental	35
2.1. Francia.....	35
2.1.1. Iniciativas públicas	35
2.2. Alemania	37
2.2.1. Iniciativas públicas	38
2.2.2. Iniciativas privadas	40
2.3. Italia.....	40
2.3.1. Iniciativas públicas	40
2.4. Bélgica.....	43
2.4.1. Iniciativas públicas	43
2.4.2. Iniciativas privadas	44
2.5. Portugal	45
2.5.1. Iniciativas públicas	45
2.5.2. Iniciativas privadas	46
2.6. Suecia.....	46
2.7. Holanda	46
2.7.1. Iniciativas públicas	46
3. Países anglosajones.....	47
3.1. Gran Bretaña	47
3.1.1. Iniciativas públicas: iniciativas de lenguaje claro (plain language)	47
3.1.2. Iniciativas privadas	50
3.2. Canadá	52
3.2.1. Iniciativas públicas	52
3.3. Australia.....	54
3.3.1. Iniciativas públicas	54
3.3.2. Iniciativas privadas	55
3.3.3. Iniciativas mixtas.....	55

3.4. EE.UU.	55
3.4.1. Iniciativas de lenguaje claro (plain english)	56
4. Países latinoamericanos	57
4.1. Argentina	57
4.1.1. Iniciativas públicas	57
4.1.2. Iniciativas privadas	58
4.2. Chile	59
4.2.1. Programa Ley Fácil	59
4.2.2. Programa Derecho	60
4.3. México	60
4.3.1. Iniciativas públicas	60
4.3.2. Iniciativas privadas	61
4.4. Brasil	61
4.4.1. Iniciativas públicas	61
4.4.2. Iniciativas privadas	61
4.4.3. Iniciativas mixtas	62
2. INSTITUCIONES	64
3. CONCLUSIONES	69
1. Conclusiones preliminares	69
2. Conclusiones por países	69
2.1. España	69
2.2. Europa continental	71
2.3. Países anglosajones	72
2.4. Países latinoamericanos	74
4. BIBLIOGRAFÍA	75

DATOS POR PAÍSES

1. ESPAÑA

1.1. Introducción. Base legal

En primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.1 y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en su artículo 6, reconocen, con distintas formulaciones, el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los tribunales en un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Esto mismo se reconoce en la Constitución Española en el artículo 24.

En segundo lugar, también el artículo 120 de la Constitución resalta el carácter público de las actuaciones judiciales, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento, y añade la obligación de que las sentencias sean siempre motivadas y se pronuncien en audiencia pública.

Con estas premisas se apunta la necesaria publicidad de las actuaciones judiciales, que deberá cumplir al menos dos objetivos primordiales: proteger a los ciudadanos de una justicia sustraída al control y conocimiento públicos y mantener la confianza de la comunidad en los tribunales.

En este caso y desde nuestro punto de vista, el lenguaje jurídico se vincula directamente a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española y además al artículo 120.3 del mismo texto normativo, ya que uno de los factores más importantes para la comprensión de las sentencias es el uso que se hace del lenguaje jurídico, en especial en la motivación de las mismas.

Por último, la idea de transparencia judicial ha de relacionarse necesariamente con lo establecido en el artículo 9 de la Constitución Española. Para poder exigir de los poderes públicos la responsabilidad que proclama dicho precepto, a la que también se alude en los artículos 106 y 121 del texto constitucional (en este último en el ámbito de la Administración de Justi-

cia), es preciso que se pueda tener buen conocimiento de las resoluciones judiciales; y buen conocimiento sólo se puede tener si se comprende bien el alcance de las mismas.

La claridad en el lenguaje jurídico se desarrolla a través de diversos instrumentos:

-La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia (2001). Sujetos: La Proposición no de Ley sobre la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, el día 16 de abril de 2002.

Fundamento de la Carta: En la Carta se explica que el ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho y se hace garante de este derecho a los jueces y magistrados.

Objetivos: Se insta a que las sentencias y otras resoluciones judiciales se redacten de forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando -sin perjuicio de su rigor técnico- una sintaxis y estructura sencillas.

Además, el ejercicio de estos derechos se debe facilitar en aquellos procedimientos en los que no sea obligatoria la intervención de abogado y procurador. Existen diversos formularios de Atención al Ciudadano para que éste pueda exponer su queja, sugerencia o simplemente solicitud de información¹.

-El Plan de Transparencia Judicial (2005). La resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, dispuso la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, en que se aprueba este Plan (BOE de 1 de noviembre de 2005).

Fundamento: Se argumenta que debe mejorar también el lenguaje jurídico utilizado por los distintos intervinientes en el proceso, cuya finalidad última es pacificar los conflictos entre las partes, siendo exigible para lograr dicho objetivo, que los justiciables comprendan de modo efectivo el devenir del proceso. Se pretende así, contribuir al conocimiento transparente del funcionamiento de este servicio público, debiendo publicarse, con la misma finalidad, el lugar de situación de los puntos de información para los ciudadanos, desplegados por las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia así como por los Colegios profesionales, ya que los ciudadanos en general y los usuarios en particular se quejan reiteradamente de una información deficiente antes y durante el proceso, y una de las críticas de éstos se centra precisamente en que el lenguaje jurídico aparece como prácticamente ininteligible.

Objetivos: En el Acuerdo se expone inicialmente que, al objetivo de conseguir una Justicia transparente, se suma la necesidad de obtener una Justicia comprensible para los ciudadanos, relacionándose el catálogo de derechos relativos a los términos de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, al lenguaje a utilizar en las vistas y comparecencias, a la sintaxis e inteligibilidad de las sentencias y demás resoluciones judiciales y a la disposición gratuita de los formularios necesarios para el ejercicio de los derechos ante los tribunales cuando no resulte necesaria la intervención de abogado y procurador.

¹ A estos formularios se puede acceder a través de la dirección de internet: www.poderjudicial.es. Dentro en: Juzgados y tribunales; atención al ciudadano; quejas y reclamaciones y dentro tenemos la posibilidad de acceder a la Información Básica para presentar una reclamación; un formulario de queja en papel (en diferentes lenguas); y la posibilidad de presentar una queja o reclamación *on-line*.

El plan contiene una serie de principios que hacen referencia a varias cuestiones de importancia para tratar este lenguaje del Derecho. Se expresan igualmente algunas recomendaciones:

“Convendrá conciliar criterios tendentes a desechar fórmulas y expresiones anacrónicas o vacías de contenido que no proporcionan ninguna información y, especialmente, prestar atención a la comprensibilidad de las citaciones que las Oficinas [sic] judiciales dirijan a los ciudadanos, quienes en las últimas Encuestas [sic] a usuarios de la Administración de Justicia realizadas por el Consejo General del Poder Judicial todavía manifiestan, en un porcentaje que sería deseable reducir [sic] que no han entendido el lenguaje jurídico que los tribunales han empleado, permaneciendo como usuarios con más problemas con este lenguaje los de clase baja o media-baja, los usuarios de juicios de faltas y juicios penales y, más en concreto, los denunciados, los acusados, los testigos y los testigos-víctimas, por este orden”.

En cada vez más frecuentes ocasiones, hay voces que se han alzado reivindicando el papel del lenguaje jurídico en la justicia en general. Así, en la X edición de los cursos de verano de la Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos, el 15 de Julio del 2009, el antiguo Defensor del Pueblo, D. Enrique Múgica Herzog, ofreció una conferencia denominada “Medios y remedios para la Administración de Justicia” en la que sostenía: “Desde la oficina del Defensor del Pueblo se vienen solicitando informes al Ministerio de Justicia sobre las gestiones llevadas a cabo para la ejecución del compromiso adoptado en orden a crear e impulsar la actuación de la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico, así como de cualquier otra actuación encaminada a la eliminación de las barreras lingüísticas que, en la actualidad, impiden un fluido entendimiento entre el ciudadano y la Administración de Justicia”.

Así, en el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 2009-2012, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 2009, se prevé la constitución de una comisión para mejorar la calidad y la claridad del lenguaje empleado por los profesionales del Derecho (actuación 4.1.2).

En consecuencia, y a propuesta del Ministro de Justicia, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 30 de diciembre de 2009, acordó la constitución de una Comisión institucional, como grupo de trabajo. En cuanto a la composición, la Comisión se adscribe a la Secretaría de Estado de Justicia y está presidida por su titular. La vicepresidencia de la Comisión corresponde al Director de la Real Academia Española. La Comisión está compuesta por los siguientes Vocales: Sra. doña Gabriela Bravo Sanestanislaos; Sr. don Carlos Carnicer Díez; Sra. doña Gabriela Cañas Pita; Sr. don Alex Grijelmo García; Sr. don Jesús María García Calderón; Sra. doña Mercedes Bengoechea Bartolomé; Sra. doña María Peral Parrado; y Sr. don Salvador Gutiérrez Ordóñez. La Comisión puede estar asistida por un Comité Técnico, que será coordinado por el Director del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia. Este Comité dispondrá de los medios necesarios para el ejercicio de sus funciones.

El objetivo de esta Comisión es elaborar un informe con el fin de analizar la situación actual del lenguaje empleado por los profesionales del Derecho y que contenga recomendaciones. Asimismo, la Comisión habrá de impulsar las acciones que considere pertinentes para que el lenguaje jurídico sea más comprensible para la ciudadanía. El plazo para cumplir lo mandado es de 12 meses desde su primera reunión.

1.2. Instituciones públicas diversas que han realizado acciones en materia de lenguaje jurídico en otros sectores distintos de justicia

-El Ministerio para las Administraciones Públicas publica el Manual de *Estilo del Lenguaje Administrativo* (1990). (en 1997, 6ª reimpresión), Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública.

-**Consejo de Ministros.** Aprobación de Directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de ley (1991). En el año 1991, mediante Acuerdo de 18 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó las Directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de ley con la finalidad de elevar su calidad técnica en beneficio de la seguridad jurídica.

Esas Directrices, que también se habían venido aplicando por analogía a los proyectos de reales decretos con el respaldo de la tradición y el buen entendimiento entre los departamentos ministeriales, intentaban homogeneizar técnicamente los textos e influir en posteriores directrices elaboradas por gobiernos autonómicos; supusieron, pues, un paso importante en el desarrollo de una conciencia de calidad en los redactores de textos normativos en el seno de la Administración General del Estado. Sin embargo, el incremento de la producción normativa, la evolución de los estudios científicos sobre la materia y la propia voluntad de mejora de la calidad del producto en todos sus aspectos obligan a ampliar tanto el objeto de las directrices como su ámbito de aplicación.

Las Directrices de técnica normativa aprobadas tenían un objetivo fundamental, lograr un mayor grado de acercamiento al principio constitucional de seguridad jurídica, mediante la mejora de la calidad técnica y lingüística de todas las normas de origen gubernamental con la homogeneización y normalización de los textos de las disposiciones. Se trataba de una herramienta que permitía elaborar las disposiciones con una sistemática homogénea y ayudaba a utilizar un lenguaje correcto de modo que puedan ser mejor comprendidas por los ciudadanos.

-**Consejo General del Poder Judicial** ha publicado, de manera destacada dos volúmenes en 1997 y 2000, respectivamente, dedicados al lenguaje jurídico. El número 16 de la Colección: Cuadernos de Derecho Judicial, en 1997, se denomina: *Lenguaje judicial*. El número 32 de la Colección de Estudios de Derecho Judicial es: *Lenguaje forense*.

-**Consejo de Estado.** En este tema existen dos memorias interesantes (ver en sus Publicaciones —> Memorias).

- a) Memoria del año 92. Incorporación de D. F. Lázaro Carreter como consejero. En la presentación del Presidente del Cº Eº y en el discurso del académico, se hace una mención a la necesidad de unir Derecho y Lenguaje, y el Consejo se felicita por haber contado entre sus miembros con literatos.
- b) Memoria del año 93. El Consejo eleva una sugerencia al Gobierno para mejorar la claridad del Derecho Comunitario y la técnica normativa.

-**Ministerio de la Presidencia.** Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa (BOE de 29 de julio de 2005). Se ha firmado un convenio de colaboración entre la **Real Academia Española y la Vicepresidencia del Gobierno**, con la intención de mejorar la lengua empleada en la redacción de las leyes (2006).

1.3. Breve aproximación al lenguaje jurídico desde el punto de vista doctrinal y universitario

El interés por la modernización del lenguaje jurídico viene gestándose de un tiempo a esta parte de forma acusada, pero, como es sabido, la mayoría de las propuestas no se han llevado a la práctica. Las críticas a la opacidad de este lenguaje han trascendido incluso a la prensa escrita².

² Así, ALEX GRIJELMO, presidente de la Agencia Efe, criticaba el empleo indiscriminado de imprecisos vocablos como "tema", incluso en el mundo jurídico, en su *Críticas con humor sobre el idioma y el diccionario*, Madrid, 2004.

Sin centrarnos aquí en las iniciativas públicas (como por ejemplo la variante española de la "Better Regulation"), desde el **plano doctrinal**, tanto juristas como lingüistas han abordado el tema de la modernización en sus publicaciones. Los primeros³, con el claro fin de aproximar el lenguaje jurídico-administrativo al ciudadano pero sin que aquel pierda lo que conforma su razón de ser y especificidad: la precisión y la concisión (que en sí mismas encierran, a modo de ejemplo, las locuciones latinas, de tal forma que sean "lugares comunes" para que los juristas); los segundos⁴, analizando los rasgos del lenguaje jurídico como una variedad dentro de los llamados "lenguajes especiales" (como el científico-técnico), señalando los vicios más acentuados de esta variante de lenguaje y proponiendo alternativas para la actualización del mismo: es interesante señalar que algunos de estos estudios se orientan al uso de un lenguaje jurídico-legal desde una perspectiva "no sexista"⁵.

Pero la fusión de ambos enfoques llevados a la práctica aún debe consolidarse; se puede citar, actualmente, la presencia en la Comisión del Lenguaje jurídico, del Catedrático de Lingüística General en la Universidad de León y académico de la RAE, D. Salvador Gutiérrez Ordóñez.

Una iniciativa práctica fue la "propuesta didáctica para la formación en técnicas de comunicación escrita de jueces en espera de destino", llevada a cabo en la Escuela Judicial de España -con sede en Barcelona- por iniciativa de las lingüistas Estrella Montolio Durán y Anna López Samaniego. El curso se denominó "Redacción de resoluciones. Ortotipografía y estilo de la sentencia", impartido en el Curso de Formación inicial para los alumnos de la citada institución y en el marco del Libro Blanco de la Justicia y de las iniciativas europeas para mejorar el lenguaje jurídico. Cabe recordar que los cursos que se impartieron a funcionarios de la Administración en las décadas de los 80 y 90 dieron pie a la elaboración de manuales como el conocido *Manual de estilo de lenguaje administrativo o el Manual de Documentos administrativos*.

En las Universidades se carece, por lo general, de una disciplina común que forme a los futuros juristas en la modernización del lenguaje, aunque cada vez se aprecia un mayor acercamiento (en materia de asignaturas optativas especialmente). Por ejemplo, podemos citar a Deusto, en Bilbao, universidad en cuya Facultad de Derecho se imparte una disciplina optativa en el primer semestre denominada "Técnicas de expresión y redacción jurídicas". En Madrid, la Universidad Pontificia Comillas, en su Facultad de Derecho, dentro de los planes de estudio de Grado en Derecho, tiene una asignatura de primer curso denominada: "Habilidades profesionales" que trata el lenguaje jurídico en sus versiones escrita y oral. También en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, desde 2003 se imparte una asignatura llamada "Lenguaje jurídico", dirigida a alumnos de último curso, durante un semestre. Posiblemente sea esta Facultad una de las que más se han implicado, pues como se señalará en párrafos posteriores ha colaborado con las diferentes administraciones madrileñas en la elaboración de manuales o guías sobre los principales errores del lenguaje jurídico-administrativo (véase Madrid).

En algunas Facultades de Derecho, hay también breves tanteos acerca de este tema en la asignatura de "Teoría del Derecho", sin que sean más que un mero esbozo. Asimismo, con el nombre de "Argumentación jurídica", en algunos centros universitarios españoles (algunos de los cuales han quedado reflejados en sus respectivas Comunidades Autónomas) se muestra

3 Vid. Entre otros a PRIETO DE PEDRO, J., *Lenguas, Lenguaje y Derecho*, Madrid, 1991; CAZORLA PRIETO, L.M., *El lenguaje jurídico actual*, Cizur Menor, 2007.

4 Como ETXEBARRÍA, M., "El lenguaje jurídico y administrativo: propuestas para su normalización y normalización", en *Revista española de Lingüística*, 27, 1997, pp.341-380. Vid. Asimismo: CALVO RAMOS, L., "Gramaticalidad y gramática normativa en el discurso legal castellano", *Revista de Lengua y Dret*, 48, 2007, pp. 116-120.

5 E incluso se ha aprobado por la Asociación de Estudios Históricos sobre la mujer de la Universidad de Málaga en colaboración con el Área de la Mujer del Ayuntamiento de la misma localidad un "Manual de Lenguaje administrativo no sexista". En esta línea, vid. BENGOCHEA BARTOLOMÉ, M., "La categorización masculina del mundo a través del lenguaje verbal de los medios", en *Manual de Información de Género*, Instituto de la Mujer, Madrid, 2004.

al alumno cómo fundamentar sus decisiones con la técnica jurídica precisa pero tratando de que ésta sea o más asequible posible.

Es en el plano de la emergente Traducción e Interpretación donde nos encontramos con universidades que ofrecen a sus alumnos (futuros traductores), materias como “Traducción jurídica”, en la licenciatura-grado (como en Granada) y, en el postgrado (como en la Autónoma de Barcelona). Así mismo en la Universidad Pontificia Comillas en el Departamento de Traducción e Interpretación se imparten las asignaturas de Traducción especializada jurídica y económica.

En las Facultades de Filología se estudia el lenguaje jurídico, así como en la de Ciencias de la Información, donde se enseña Lengua española y se dedican algunos bloques formativos y prácticas a este tipo de lenguaje; como ejemplo, podemos citar la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, en su Grado en Periodismo para el próximo curso 2010-11.

En la Universidad de Alcalá de Henares, se ha apostado decididamente por la traducción especializada que también toca el lenguaje jurídico y administrativo.

En lo concerniente a proyectos de investigación directamente relacionados con esta cuestión, no tenemos constancia de que se estén llevando a cabo en la actualidad demasiados proyectos sobre el lenguaje jurídico. Como muestra dejamos constancia de un par de proyectos en los que han intervenido juristas, de manera principal. En la Universidad Pontificia Comillas se realizó un proyecto denominado “El lenguaje jurídico y la comunicación del Derecho”, bajo la dirección de los profesores Ramón Garrido Nombela y Cristina Carretero González, y en la actualidad, se ha aprobado en el seno de la misma universidad otro proyecto de investigación, “El Derecho en los medios de comunicación”, dirigido por la profesora Carretero, donde también se abordará el tema que nos ocupa.

Grupos de Investigación relacionados con el lenguaje jurídico en facultades de Derecho:

- Grupo de Investigación: Derecho y lenguaje, de la Universidad Pontificia Comillas (UPCO). Facultad de Derecho. Disciplinas Comunes.
- Grupo de Investigación sobre el Derecho y la justicia. Universidad Carlos III de Madrid. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Departamento de Derecho Internacional Público, Eclesiástico del Estado y Filosofía del Derecho.

1.4. Instituciones públicas y privadas en CC.AA.

1.4.1. Andalucía

Se destaca el Plan Andaluz de Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 2007-2010. En este Plan, el Eje 1, en sus páginas 23 a 26, contiene varios apartados dedicados a ese primer eje estratégico denominado: “La aproximación y personalización de los servicios de Justicia para la Ciudadanía”. Dentro hay dos líneas de actuación y la segunda se denomina: Una justicia más comprensible para la ciudadanía”.

A su vez, esta segunda línea contiene dos importantes medidas:

- La simplificación del lenguaje jurídico.
- La divulgación de los servicios de Justicia.

En el primer apartado se propone la simplificación del lenguaje jurídico, la creación de protocolos de normalización y tratamiento lingüístico para simplificar y lograr la corrección de los escritos de carácter jurídico.

A nivel universitario, citamos, aunque sea de manera indirecta, el ejemplo de la Universidad Pablo de Olavide, que en sus cursos de verano 2010 reunió varias mesas, una de las cuales se destinaba al debate sobre la Administración electrónica (que en el fondo tiende a acercar al ciudadano a la Administración) con el título de “Redes sociales y administración electrónica”.

1.4.2. Aragón

La principal iniciativa en Aragón en relación con el lenguaje claro son las “Instrucciones para la redacción de normas” del Gobierno de Aragón (febrero de 2010). Con ella se pretende guiar la elaboración de textos normativos, atendiendo tanto a la exigencia de precisión técnica de las disposiciones legales o reglamentarias, como al principio de inteligibilidad, que requiere sencillez expresiva, es decir, lenguaje correcto; no sólo porque el destinatario de la norma la asumirá y acatará tanto mejor cuanto mejor la comprenda, y sólo podrá comprenderla si empieza por entender con claridad su texto literal y su intención, sino porque, además, a los poderes les atañe directamente el mandato constitucional de defensa y promoción de la cultura, de velar por la conservación del patrimonio cultural, cuya primera y más básica manifestación es el idioma, en el cual ha de darse a conocer la norma.

El propio documento se encarga de remarcar que las directrices que contiene no tienen el carácter de norma jurídica: no son obligatorias y carecen de fuerza vinculante. Son sugerencias y recomendaciones, a modo de instrucciones técnicas y consejos prácticos, que tienen la voluntad de ayudar a los encargados de redactar los borradores o los anteproyectos y proyectos de normas de distinto rango, aclarando dudas, apuntando soluciones, proponiendo cierta homogeneidad de criterios y, en definitiva, tratando de contribuir a un proceso de perfeccionamiento continuo de la calidad de las disposiciones preceptivas cuya creación impulsa el Ejecutivo autonómico -y lleva a cabo a través de su Administración Pública- que redunde tanto en la mejora del escenario jurídico de los aragoneses como en el prestigio de la imagen de las instituciones de la Comunidad Autónoma.

En el documento elaborado por el Gobierno de Aragón se recogen diferentes menciones a la exigencia de claridad del lenguaje jurídico. Así, se señala, como criterio general, que la redacción del texto normativo debe buscar la claridad expresiva, por medio de una estructura gramatical sencilla y directa, más cercana al nivel común, aunque correcto, de la lengua que a ningún tipo de engolamiento literario: ni el hipérbaton, ni la metáfora, ni los demás tropos del lenguaje, ni el rebuscamiento sintáctico, ni la prosa hinchada, ni el verbalismo florido, ni la adjetivación ornamental, ni la experimentación léxica... han de tener cabida en la norma, aunque puedan ser recursos lícitos para la brillantez de cualquier otra clase de documentos escritos.

A continuación, el documento recoge una serie de consejos prácticos relativos al orden de los elementos de la oración, voz, modo y tiempo del verbo o el uso del estilo negativo.

Concluye el documento señalando que el empleo de un lenguaje claro y sencillo no supone que se acuda a vulgarismos, equívocos e imprecisiones. Así, se señala que la recomendación de que el lenguaje normativo se aproxime lo más posible a las pautas comunes del idioma no implica abogar por incorporar, sin más, el habla de la calle, los modismos coyunturales, las jergas dominantes o los desaliños generalizados que son frecuentes no sólo en la conversación privada sino en los medios de comunicación, tanto orales como escritos, en la publicidad, en las manifestaciones de muchos personajes de relevancia pública e incluso en productos editoriales con pretensiones literarias.

A continuación, el documento recoge una serie de recomendaciones concretas en relación con dichas cuestiones. La idea subyacente de esta iniciativa es *la sencillez expresiva y la inteligibilidad*.

1.4.3. Asturias

Desde la propia Consejería de Justicia (Jefa de prensa, M^a Flor Pavón Fernández), se nos ha informado de la inexistencia de políticas relativas a la modernización del lenguaje jurídico-administrativo, ni en el sentido de manuales ni otras iniciativas públicas.

Desde el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada⁶ se ofrecen a los empleados públicos diferentes cursos que se relacionan con este tema y sobre todo con el de simplificación de la Administración. En este sentido, destacamos varios cursos: acerca del “Manual de estilo sobre la utilización del lenguaje no sexista”; otro curso, también interesante, denominado “Escritura eficaz en la Administración Pública” (sobre las diferentes fases del proceso de escritura y en particular del lenguaje administrativo, del que se estudian sus características, sus vicios y algunas cuestiones ortotipográficas, con la finalidad de adquirir habilidades para comprender y redactar textos administrativos); otro denominado “La calidad en la Administración”, referido a la gestión de calidad y al modelo europeo de excelencia EFQM; u otro sobre “Ortotipografía en la elaboración de escritos”, para la mejora de la redacción, etc.

De esta manera, como en todos los Institutos y/o Escuelas de Formación Pública que existen en las diferentes CCAA, se pretende formar al gestor público desde el inicio de su dedicación a la tarea administrativa, unificando, además, los criterios de formación para facilitar su accesibilidad al ciudadano.

Por otra parte, sí están más desarrolladas las políticas de *Simplificación administrativa*. Desde la Consejería de Administraciones Públicas se nos ha proporcionado una presentación en formato *power point* (Ignacio Poncela García, a quien agradecemos la documentación), sobre la Administración electrónica, digital, y las políticas encaminadas a la aludida simplificación así como a la reducción de cargas administrativas.

La Administración electrónica es una nueva forma de gestión pública basada en el uso de las nuevas tecnologías (TICs) para prestar mejores servicios a los ciudadanos, empresas y a nivel interno de las propias administraciones.

El principal aspecto de esta administración electrónica es lo que se llama “Interoperabilidad”, que con la finalidad de reducir la documentación que debe aportar el ciudadano, supone que éste no presente documentación que ya opera en poder de la Administración, evita la falsedad documental, simplifica los documentos así como su tramitación, y conlleva la colaboración entre diferentes Administraciones Públicas para intercambiar información (atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Acceso Electrónico de la Ciudadanía a los Servicios Públicos, norma que reconoce el derecho de las personas a no aportar los datos y documentos que ya obren en poder de las Administraciones públicas, obligando a las Administraciones a utilizar medios electrónicos para recabar la información necesaria).

Actualmente, la administración asturiana realiza intercambios de información con la Dirección General de Policía, con el INE, con el Catastro, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con Hacienda. En junio de 2003, los documentos que se han dejado de solicitar a los ciudadanos ascendían a 65.996.

6 www.iaap.es

El ciudadano, para ello, tendrá que otorgar su consentimiento expreso. Como toda iniciativa que se pone en marcha, la propia Consejería es consciente de algunas dificultades que este sistema puede ocasionar de cara al ciudadano, como por ejemplo, saber lo que ofrecen los distintos organismos, saber con quién contactar, etc.

La Administración Digital, por su parte, implica la eliminación del papel en los procedimientos administrativos e impulsa la eficiencia administrativa. Se basa en cuatro aspectos: digitalización registro de entrada/digitalización de fondos/tratamiento documental/sistema de gestión documental.

Con relación a lo anterior, y en el marco de la iniciativa “*Better regulation*” de la Comisión Europea. En línea con estas actuaciones la Administración del Principado de Asturias está desarrollando un proyecto que tiene por objeto:

- Identificar y medir las cargas administrativas en las áreas que se determinen como prioritarias.
- Establecer las acciones que permitan la reducción y simplificación de dichas cargas.
- El proyecto se va a desarrollar en tres fases.
- En una primera fase se va a analizar la normativa autonómica e identificar y seleccionar las obligaciones de información en cada una de las áreas.
- En una segunda fase se va a proceder a la medición de las cargas identificadas y a la identificación de propuestas de reducción de cargas administrativas.
- En la fase final se identifican las medidas de reducción, se priorizan y se elabora un informe final.

Finalmente, desde el portal corporativo del Principado, se pone a disposición del ciudadano un teléfono (012) para contactar con la Administración, así como el llamado **Servicio de Atención ciudadana (SAC)**, que es un órgano administrativo dotado de los medios técnicos y de los profesionales mejor cualificados para atender las consultas que los ciudadanos formulan a la Administración, orientarles acerca del modo de obtener un servicio público, realizar trámites en nombre de los ciudadanos cuando así lo soliciten, recibir y tramitar sus reclamaciones y sus sugerencias, en definitiva, ser el primer punto de contacto con la Administración y servir de intermediario entre ésta y la ciudadanía asturiana a fin de conseguir una mayor cercanía. Para ello se dedica a:

- Suministrar información.
- Apoyo y orientación a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
- Registro de la documentación.
- Realización de trámites.
- Realización de encuestas de satisfacción.
- Recepción y tramitación de iniciativas y reclamaciones.
- Envío de mensajes y avisos.

En el ámbito universitario, la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo imparte, para el Grado en Derecho, una asignatura -Argumentación jurídica-, optativa, de 6 créditos para 2º curso.

1.4.4. Cantabria

Plan Marco 2005-2007 de Modernización de los Servicios de la Administración del Gobierno de Cantabria

Instrumento: Programas anuales para la promoción de la modernización y calidad de los servicios de la Administración del Gobierno de Cantabria.

Origen: Iniciativa pública del Gobierno cántabro en 2005.

Objetivos: no constituye, en concreto, un plan de lenguaje claro, pero, a través de la modernización y de la mejora de la calidad de los servicios promueve una mejor relación Administración-ciudadano en la que ha de tener encaje el lenguaje a emplear por aquélla. Así, el Plan Marco promueve, como objetivos generales: 1º. Potenciar los servicios de información administrativa y de atención a la ciudadanía; 2º. Crear un proceso de mejora permanente de los servicios públicos prestados 3º. Fomentar en los/as empleados/as públicos/as una mentalidad de calidad en el desempeño de su función; y 4º. Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios públicos que se le presta.

Medidas implementadas:

Al amparo de este Plan se elaboró el Manual de Atención a la Ciudadanía en el que se recogen varias menciones a la exigencia de que por la Administración y su personal se utilice un lenguaje claro y sencillo en sus relaciones con los ciudadanos (*"comunicándose de manera comprensible y evitando, en la medida de lo posible, la utilización de un lenguaje demasiado técnico"*). El lenguaje ha de atender tanto al contexto como al nivel cultural del ciudadano. La Administración y su personal han de ser capaces de *"entender las necesidades de nuestros clientes, de transmitir adecuadamente la información que poseemos, y de que el ciudadano la reciba y la comprenda correctamente, garantiza que podamos prestar un servicio de calidad"*. Para ello, dar la información oral acompañada de *"de lenguaje corporal, facilita la comunicación y reduce los factores que impiden que ésta sea eficaz"*. En todo caso, la *"respuesta debe ser concisa e inteligible para el ciudadano, formulada en un lenguaje sencillo y adaptada a su nivel cultural. En el caso de tener que utilizar términos técnicos en nuestra explicación, deberemos aclarar previamente su significado"*.

También, el Plan anual 2006 recoge medidas de normalización documental y así se pretenden analizar los contenidos de los impresos de la Administración, con la finalidad de hacerlos comprensibles a efectos de darles una redacción correcta y moderna que los aleje del antiguo lenguaje administrativo. Idéntico propósito se recoge en el Plan anual 2007.

De la misma manera, el Gobierno de Cantabria ha promovido una política concreta para erradicar el lenguaje sexista. Así, a propuesta de la Dirección General de la Mujer, se ha instalado en los ordenadores de la Administración una herramienta informática (Themis) que incorpora un diccionario que incluye las expresiones excluyentes y propone términos equivalentes en cada búsqueda.

Por último, en el portal informático (página web) del Gobierno de Cantabria se recoge, dentro del área de atención al ciudadano, un buscador de procedimientos de manejo no complejo en el que los ciudadanos pueden consultar los diferentes trámites y requisitos que se exigen en sus relaciones con la Administración autonómica.

Universidad de Cantabria. Grado de Derecho.

En el nuevo Grado de Derecho ofertado por la Universidad de Cantabria se recogen como competencias específicas: el desarrollo de la oratoria jurídica, la capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio, la capacidad de redactar escritos jurídicos, los conocimientos básicos de argumentación jurídica y la capacidad de creación y estructuración normativa.

Igualmente, el grado incluye una asignatura de Teoría General del Derecho que pretende promover las competencias lingüísticas y que contiene cuestiones que vienen referidas al lenguaje jurídico.

Aula de oratoria. Fundación Torres Quevedo. Universidad de Cantabria.

Imparte cursos de oratoria para docentes tanto presenciales como en formato on line. Sin embargo, ninguno de dichos cursos tiene por objeto la claridad en el lenguaje jurídico.

1.4.5. Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha se ha aprobado el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2010, que aunque enfocado claramente a la revitalización de la economía, tiene como uno de sus objetivos la "Simplificación administrativa", el cual se orienta a facilitar a las empresas el uso de las TIC, así como a agilizar procedimientos variados (firma electrónica, registro telemático de documentos, etc), en consonancia con otras autonomías como Madrid. En esta línea, resaltar además la creación de la Ventanilla Única Empresarial (VUE), que funciona por ejemplo en Toledo, y pretende superar los obstáculos que papeleos, licencias, permisos y otros trámites administrativos suponen para los emprendedores. La simplificación administrativa en Castilla-La Mancha, además, obedece al cumplimiento, entre otras normas, de la Disposición Final 1ª de la Ley 8/2006 de 20 de diciembre que establece el Régimen Jurídico aplicable a la Resolución administrativa en determinadas materias.

En el portal corporativo de esta autonomía se recoge que en base al Pacto por Castilla-La Mancha, de 2009, el tercer eje está dedicado íntegramente a la simplificación y agilización de trámites administrativos, en un compromiso basado en los principios de credibilidad, accesibilidad, eficacia, proximidad y responsabilidad, para lo que ha puesto en marcha tres canales fundamentales de acceso de la ciudadanía a la Administración Regional, como son las Oficinas de Información y Registro (OIR), que garantizan una atención presencial de calidad, el Teléfono Único de Información 012 y la tramitación administrativa a través de Internet (acceso a la Administración Regional en internet, a través de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En el portal "Atención a la ciudadanía" se pueden iniciar procedimientos y puede encontrarse información sobre trámites administrativos, tales como convocatorias, becas, servicios, autorizaciones o licencias).

En la Escuela de Administración regional se ofrecen a los empleados públicos cursos on-line dentro de su Plan de Formación para el año 2010:

- Formación en ofimática, completando la formación presencial.
- Manual de estilo y lenguaje administrativo, para conocer cómo ha de ser el lenguaje en una Administración moderna.

En la Facultad de Derecho de Ciudad Real, y dentro de la Licenciatura en Derecho, existe una asignatura optativa denominada: Argumentación Jurídica; se estudia la introducción a la argumentación, los tipos de argumentos, los razonamientos y las falacias, la retórica, el razonamiento jurídico (con casos), la interpretación jurídica y la negociación.

En la misma Facultad, en el Grado en Derecho se prevé una asignatura optativa denominada en esta ocasión: Argumentación y negociación estratégica.

En la Facultad de Derecho de Albacete, se ofrece un curso de: Argumentación jurídica, de 4.5 créditos (3 teóricos y 1.5 prácticos) como asignatura optativa de quinto curso de la Licenciatura de Derecho.

1.4.6. Castilla y León

Destacamos, en la Comunidad de Castilla y León la elaboración en 2009 de un Manual de Calidad Normativa aplicando las políticas europeas y nacionales en este sentido.

De este Manual -de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de la Consejería de Administración Autonómica- destacamos dos capítulos en especial. El cuarto está dedicado a la elaboración de las normas. En él se tratan, en una primera parte, los pasos previos a la creación de las normas, y la necesidad, transparencia, proporcionalidad, coherencia, accesibilidad y responsabilidad; y en una segunda, la aplicación de los principios. En el capítulo quinto, sobre calidad normativa, se estudia, por una parte la evolución del Impacto Regulatorio (contenido del documento y el formato del documento), y por otra parte la calidad normativa como resultado del procedimiento de elaboración jurídica.

Se tratan aspectos generales, recomendaciones, pero no aspectos concretos, como sintaxis, gramática, etc.

Interesa destacar que desde la propia Junta de Castilla y León se han convocado en 2010 los Premios a la Calidad y Modernización de la Administración, que recompensan la excelencia, las mejores prácticas y las sugerencias sobre modernización de la Administración de Castilla y León.

En Castilla y León además, el Colegio de Abogados de Valladolid ha elaborado unas Cartas de Servicios al colegiado y al ciudadano, para orientar a los primeros y ayudar los segundos en la asistencia legal que necesiten, gracias al servicio de orientación jurídica (SOJ). Asimismo organiza cursos y jornadas abiertos al público y colabora con la Universidad a través de la Escuela de práctica jurídica.

Existe, una “Comisión de Estilo Alfonso X”, “con el fin de vigilar y difundir el uso correcto del español en los textos legales emanados de las Cortes de Castilla y León”, y se dice que “estará formada por profesores especialistas en Lengua Española de las cuatro Universidades públicas de Castilla y León” bajo la presidencia del director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Dichas Universidades “habrán de organizar adecuadamente y mediante los medios materiales y humanos que estimen oportunos, su trabajo -análisis, corrección y, en su caso, propuesta alternativa-, que se recogerá en un informe”. Así, las Cortes envían al Instituto los proyectos de ley y ésta los remite al coordinador de cada Universidad. Una de ellas se encarga luego de recibir las correcciones, armonizarlas y remitirlas al Instituto, quien las reenvía a las Cortes. Los responsables son: D. Julio Borrego Nieto (U. de Salamanca), D. Luis Santos Domínguez (U. de Valladolid), D. Salvador Gutiérrez Ordóñez (U. de León) y D. Antonio Álvarez Tejedor (U. de Burgos).

1.4.7. Cataluña

Juzgamos muy interesante la información procedente de la Generalitat de Catalunya por las numerosas posibilidades que ofrece en una bastante bien organizada página web⁷.

Dentro de la mencionada página, el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, en el apartado Temes, y dentro, en Justicia, puede leerse: Dret i entitats jurídiques (Derecho y entidades jurídicas) y dentro un apartado dedicado al lenguaje jurídico: Llenguatge jurídic. Por tanto, resulta muy sencillo encontrar ayuda para comprender este lenguaje.

Dentro de este apartado, hay tres capítulos muy adecuados:

- Herramientas de las que dispongo.
- Terminología.
- Formularios administrativos y jurídicos.

⁷ www.gencat.cat

- Criterios lingüísticos (contiene criterios lingüísticos referidos a cuestiones de sintaxis y redacción tales como puntuación, abreviaturas, citas bibliográficas y otras).
- Criterios para rotulación.
- Existe un manual específico para centros penitenciarios.
- Formar y capacitar.
 - Tiene un apartado sobre el autoaprendizaje del lenguaje jurídico y
 - Certificados en catalán.
- Apoyo con el que contar.
 - Aquí se ofrecen: Fuentes de conocimiento, con enlaces a estudios, jornadas, congresos, estudios, artículos y libros.
 - Consultas en línea. Importante. Si se accede a este apartado, nos envía a un correo: justicia@gencat.cat, para que podamos realizar una consulta de relativa al lenguaje jurídico.
 - E información sobre derechos lingüísticos.

Desde 2003, se cuenta con un *Manual de llenguatge judicial*. Es obra del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya. Su elaboración ha corrido a cargo del Equipo de Normalización lingüística del ámbito judicial y la redacción y coordinación a cargo de Anna Estopà Casals y de Cristina García Ginestà.

Es un documento muy interesante que se ocupa de los Criterios de redacción, del vocabulario de dudas, de convenciones y un último apartado, muy práctico dedicado a la documentación judicial, donde se pueden leer algunos de los documentos más interesantes manejados en y por los tribunales. Se trata de poder acercar la terminología de este lenguaje especializado a los ciudadanos, aclarando y explicando a un tiempo.

El Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, contiene en su página web la indicación del Servicio: “**Saps què?**”; se trata de un producto elaborado por el Servicio Lingüístico del Ámbito Judicial de Gerona y el objetivo es formentar un buen uso del catalán en la Administración de Justicia. Se puede hallar en la intranet de la Administración de Justicia⁸.

Es precisamente en Cataluña donde ha visto la luz la primera revista especializada en este tema, “Revista de Llengua y Dret”⁹. Y está dentro de la página de la Escuela de Administración Pública de Cataluña.

En el ámbito universitario también se ha tenido en cuenta la importancia del lenguaje jurídico. Así, en la Universidad de Barcelona, como asignatura de libre elección, se oferta la materia de “Argumentación jurídica”.

En la página del Ministerio de Educación¹⁰ y con logo de la universidad de Barcelona puede leerse un trabajo denominado: “El lenguaje jurídico: Estudio y propuesta didáctica”, de Javier Gutiérrez Álvarez, partiendo de la realidad de la enseñanza del español para fines específicos.

1.4.8. Extremadura

La Junta de Extremadura, a través de su portal ciudadano o corporativo ofrece a la ciudadanía todo un sistema de información administrativa (por temas, por consejerías, por perfiles y por

⁸ adjucat.intranet/organitzacio/contacte/suport/slaj/gj/index.html

⁹ Editada por la Escola d'Administració Pública de Catalunya, dependiente de la Generalitat y que, desde 1983, lanza una publicación semestral con estudios académicos sobre el lenguaje jurídico y administrativo en general. www.10.gencat.cat/eapc_rld

¹⁰ www.educacion.es/redele/Biblioteca2010_2/JavierGutierrez.shtml

necesidades) así como una unidad de atención personalizada *on line*, por teléfono o presencialmente que informa y atiende las diferentes quejas y sugerencias.

Entre ellos destacamos los:

CADS (Centros de Atención administrativa), que se encuentran repartidos a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura cuya misión principal es la de facilitar a los ciudadanos información administrativa de carácter general sobre la organización y funciones de los diferentes organismos de la Junta de Extremadura, así como de los trámites que regulan. También se encargan de la recepción y remisión a su destino de todo escrito, comunicación u oficio dirigido a cualquier órgano de las Administraciones Públicas.

UDIS: Las Unidades Departamentales de Información Administrativa, nacidas bajo el amparo del Decreto 139/2000 que regula la información administrativa y atención al ciudadano. Se crean como unas oficinas cuya misión principal es la de facilitar a los ciudadanos la información que soliciten sobre la organización y actividad de la consejería de la que dependen.

ORPS (Oficinas de respuesta personalizada), son una red de espacios que permiten ofrecer servicios integrados de información, orientación, atención y tramitación sobre determinadas áreas de la actividad administrativa de la Junta de Extremadura.

Por otro lado, la Escuela de Administración Pública de Extremadura ofrece cursos a sus empleados públicos como el de "Habilidades sociales" que mejora la comunicación verbal, no verbal y paralingüística con el ciudadano; "Taller de atención e información al ciudadano", orientado sobre todo a mejorar la calidad en la comunicación, y en lo que a nosotros más nos interesa, un curso de "Lenguaje administrativo", para mejorar el estilo de redacción y diseño de los diferentes formularios y modelos de escritos, en la ortografía, gramática, léxico y estilo.

Además, la propia Junta de Extremadura cuenta con el Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos, que tiene como misión obtener y difundir la información global sobre el funcionamiento del conjunto de unidades administrativas combinando para ello distintos indicadores, compartiendo conocimiento, metodologías e incorporando los niveles de percepción que los ciudadanos apuntan con sus opiniones respecto de estos servicios, inspirado en los siguientes valores:

- Transparencia.
- Objetividad.
- Compromiso con la calidad.
- Participación ciudadana.
- Aprendizaje y soporte para la mejora.
- Rendición de cuentas.

El Observatorio supone el principal instrumento de medición global y de síntesis sobre calidad de servicios públicos de la Administración autonómica, como señala el Decreto 149/2004, de 14 de Octubre, por el que se aprueba la Carta de Derechos de los Ciudadanos, se regulan las Cartas de Servicios y se definen los sistemas de análisis y observación de la calidad en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El **OCSP** integra de forma coordinada y sinérgica una serie de herramientas dirigidas a analizar los servicios autonómicos desde el compromiso con la gestión orientada a resultados, la mejora continua de las prestaciones y la participación de los ciudadanos. Estos instrumentos se asientan en los siguientes pilares:

- Sistema de Cartas de Servicios (CdS).
- Sistema de Medición del Índice de Percepción de la Calidad de los Servicios (IPCS).

- Sistema de Quejas y Sugerencias.
- Sistema de Indicadores de Resultados.

Según el Plan de Modernización, Simplificación y Calidad para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (2004-2007), aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión del día 26 de febrero de 2004, siendo presidente D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se aprobaron una serie de medidas, entre las que se encuentra la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos. Ésta recoge los siguientes derechos: a una Administración moderna, transparente, accesible y abierta a los ciudadanos; obtener información; administración ágil y avanzada; responsable ante al ciudadano, y principalmente, como derecho a recibir una atención adecuada se recoge: “Que las notificaciones contengan términos sencillos y utilicen un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para todo ciudadano”.

1.4.9. Galicia

Existe un manual jurídico en gallego que pretende promover su uso entre los ciudadanos y la Administración. Contiene documentación jurídica y administrativa editada en lengua gallega. Depende de la Secretaría Xeral de Política Lingüística y la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) y su finalidad es la promoción y normalización del uso de la lengua propia de Galicia entre los ciudadanos y los trabajadores en este ámbito.

También en Galicia, se ha publicado el “Estatuto xurídico de la lingua galega”¹¹, sobre todo lo referente a este tema. Realizado por profesores de Universidad de Vigo y Santiago.

1.4.10. Islas Baleares

1.4.10.1. El Gobierno Balear

El Gobierno Balear ha trabajado el lenguaje jurídico en una doble vía: estableciendo directrices lingüísticas en el plano de elaboración de normas y mejoras del lenguaje al hilo de la simplificación administrativa.

Respecto a la primera cuestión, el Gobierno Balear ha aprobado directrices y recomendaciones sobre la redacción de Anteproyectos de Ley:

- El Acuerdo de 29 diciembre 2000 que aprueba las directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de Ley¹², aunque esta norma no recoge ningún criterio relativo a la mejora de la calidad o claridad del lenguaje empleado
- El Acuerdo de 22 de octubre de 2001 que aprueba las recomendaciones sobre la redacción, en catalán, de disposiciones generales y de actos administrativos¹³, y que sí contempla, fundamentalmente en el apdo. III, titulado “Aspectos de legibilidad”, la necesidad de introducir criterios de claridad en la legibilidad de texto. Se reconoce que la legibilidad de los textos, esto es “ser comprensibles por sus destinatarios”, es un deber ineludible y democrático para garantizar el ejercicio de igualdad de derechos de todos los administrados. Así pues, la mejora de la legibilidad es un objetivo ligado a los valores democráticos”.

En segundo lugar, la preocupación por la claridad del lenguaje puede apreciarse en las medidas adoptadas para la simplificación de procedimientos administrativos, particularmente en:

11 A. X. Ferreira et alii, editorial Xerais, Vigo, 2005.

12 BO. Illes Balears 27 enero 2001, núm. 12.

13 Acuerdo de 22 de octubre de 2001 BO. Illes Balears 23 febrero 2002, núm. 24, [pág. 2673], LIB\2002\42.

- El segundo plan estratégico de calidad (2007-2017) actualmente vigente tiene entre sus objetivos básicos el impulso de la transparencia y de la equidad, y acercar la voz de los ciudadanos. No se contemplan en una primera aproximación, políticas específicas dirigidas a la claridad del lenguaje jurídico.
- La Ley balear 3/2003, de 26 de marzo (LIB 2003, 75) de Régimen jurídico de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que recoge una disposición adicional séptima en la que impulsa la realización “de modificaciones en el procedimiento con objeto de simplificarlos y racionalizarlos, reduciendo trámites y cargas” aunque no recoge específicamente la problemática del lenguaje.
- Esta problemática se aprecia más en la Ley balear 11/2007, de 22 de junio (RCL 2007/1222), de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en cuyo art. 34 establece la obligatoriedad de simplificar los procedimientos, “con mejora de la transparencia y la información”. Incorporando indirectamente la necesidad de mejorar la transparencia y la información en las comunicaciones electrónicas.
- La preocupación por la calidad normativa, también aparece reflejada en el Acuerdo de 8 mayo 2009 que impulsa la simplificación y la reducción de cargas administrativas en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears¹⁴. Crea, en su Capítulo Primero, núm. 2, y dentro de la Comisión Interdepartamental de Calidad, un grupo de impulso para la simplificación que se encargará del estudio, el diseño y la puesta en marcha de actuaciones de cada una de las partes que intervienen y que tengan como objetivo la agilización de tramitaciones administrativas; simplificar y reducir trámites y procedimientos y garantizar el acceso electrónico de la ciudadanía y utilizar las técnicas y herramientas jurídicas para garantizar los principios simplificación y reducción de cargas administrativas y la calidad normativa, tanto en los procedimientos en vigor como en las nuevas normas.
- Dentro de esta línea de simplificación normativa destacan las medidas urgentes para el impulso de la inversión en Baleares aprobadas en el año 2009 mediante el Decreto-Ley 1/2009, de 30 de enero, uno de cuyos ejes es la simplificación de los trámites administrativos, enlazando con la Directiva 2006/123/CE de servicios en el mercado interior. Al hilo de esta norma se aprobó el Decreto 60/2009, de 25 septiembre que establece la unificación de los procedimientos y la simplificación de los trámites en materia turística.
- Mas allá de la simplificación normativa, en la línea de la mejora de la comunicación con los ciudadanos, será la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears¹⁵ la que reconozca un auténtico derecho de los destinatarios de los servicios sociales a recibir la valoración de su situación en un lenguaje claro y comprensible. (Artículo 7: reconoce a los destinatarios de los servicios sociales el Derecho a recibir la valoración de su situación y, si procede, la valoración de las necesidades sociales de los familiares o de las personas que las cuidan, en un lenguaje claro y comprensible).

1.4.10.2. Universidades

En la Universidad de las Islas Baleares (UIB), se ha incorporado al grado en Derecho una asignatura titulada “Nociones Básicas de Derecho” impartido en los Grados de Derecho, Turismo, Economía, ADE y Geografía de la Universidad Illes Balears con la competencia específica de “Adquirir un conocimiento básico del lenguaje jurídico y comprensión a nivel básico de textos jurídicos”; ahora bien, no trabaja de forma específica la claridad del lenguaje ni hay investigación al respecto.

14 BO. Illes Balears 20 mayo 2009, núm. 73-Ext., [pág. 52] LIB\2009\136.

15 BO. Illes Balears 18 junio 2009, núm. 89, [pág. 104].

De manera especial, un profesor de la citada Universidad (UIB), Gregorio Robles, ha centrado en solitario sus trabajos de Teoría del Derecho en el tema de las relaciones entre el lenguaje, la comunicación y el Derecho.

1.4.11. Islas Canarias

1.4.11.1. Gobierno Canario

Las actuaciones del Gobierno Canario se centran de modo fundamental en medidas de simplificación de procedimientos administrativos y calidad normativa.

El acuerdo de 15 de febrero de 2005 aprobó el plan de simplificación y racionalización de la gestión administrativa en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El objetivo marco era aproximar la Administración al ciudadano, facilitándole el ejercicio de sus derechos con plenas garantías así como la prestación de servicios eficientes y de calidad.

Esta simplificación y racionalización también queda recogido en el Acuerdo de 22 de abril de 2008, adoptó, entre otros, el acuerdo por el que se aprueban las acciones “para la modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad tiene atribuido por Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba su Reglamento orgánico, entre otras funciones la de proponer al Gobierno programas de racionalización y modernización de la gestión administrativa, planes y programas para la mejora y la implantación de la calidad en los sistemas de gestión pública, así como proponer medidas para el impulso de la modernización de las Administraciones Locales Canarias mediante la utilización de las nuevas tecnologías.

Finalmente el plan estratégico de Modernización de la Administración Pública¹⁶ incluye varios ejes de actuación: la potenciación de la administración electrónica y mejora de la sostenibilidad (eje 1), la Administración pública más cercana al ciudadano (eje 2) y las mejoras en el ámbito organizativo y de gestión (eje 3).

En relación con el lenguaje jurídico habremos de esperar hasta el Decreto 48/2009, de 28 abril que establece en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa¹⁷, en particular su artículo 23, para encontrar la inclusión expresa de utilizar un lenguaje administrativo claro. En efecto, y como parte del proceso de simplificación se procurará que el lenguaje administrativo sea claro, sencillo y fácilmente comprensible para el ciudadano y que esté orientado a la efectiva fluidez de las relaciones del ciudadano con la Administración”.

1.4.11.2. Universidades Públicas

En la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, no hay asignaturas en los nuevos grados en las que de forma específica se trabaje el lenguaje jurídico con los alumnos. No están especificados aún los contenidos de cada asignatura.

En la Universidad de La Laguna, los nuevos grados en Derecho cuentan con una asignatura denominada “Comunicación y Recursos para los Juristas”.

¹⁶ www.gobiernodecanarias.org/cpj/temas/modernizacion_adm/acciones/docs/acciones_modernizacion.pdf

¹⁷ BO. Canarias 12 mayo 2009, núm. 89, pág. 10120.

1.4.12. La Rioja

Como sucede en otras Comunidades Autónomas, la Rioja no tiene una política claramente definida como “Modernización del lenguaje jurídico-administrativo”; antes bien, su labor, en aras de facilitar la relación del ciudadano con la Administración, se encamina más bien a lo que se denomina *Políticas de Calidad y de Simplificación administrativa*.

En el portal corporativo de la Rioja, se recogen todas las políticas adoptadas por esta comunidad para facilitar la simplificación administrativa.

El Plan Estratégico de la Rioja (Consejería de Desarrollo autonómico y Administraciones Públicas), del 2003 presenta como retos:

- Facilitar el acceso y la actuación del ciudadano en su relación con la Administración Pública, sin restricciones, con el menor tiempo y el menor coste.
- Dotar a la Administración Pública de unas técnicas y sistemas de información que permitan mejorar sus políticas públicas y obtener un alto grado de objetividad, eficacia y eficiencia.
- Convertir al Gobierno de La Rioja en una Administración Pública que garantice la igualdad de acceso a sus servicios y actuaciones a todos los ciudadanos de La Rioja, sin ningún tipo de restricción por motivos territoriales, sociales o tecnológicos.

Como prioridades del Gobierno de la Rioja en su búsqueda de Calidad, seleccionamos:

- Consolidación y evolución del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) y del Sistema de Gestión Integrado de Procedimientos (SGIP).
- El establecimiento de una puerta unificada de la Administración (incluyendo la local) para el ciudadano que como mínimo permita: registro, solicitud de información, y respuesta inmediata a solicitudes y/o procedimientos simples.
- Administración Telemática: sistema de identificación y acceso (fiable, fácil y seguro) que garantice confidencialidad y seguridad. Información 24 horas al día, 7 días semana, correo electrónico, reconocimiento digital, tarjeta de servicios, interfaz única.
- Cartas de servicios y decálogo de derechos del ciudadano.
- Medir la satisfacción del ciudadano quejas y sugerencias, medición de la calidad...; (se destaca que el ciudadano valore, entre otros criterios, la intimidad, rapidez, amabilidad, así como la claridad en el lenguaje). Para ello se emplearían encuestas o se realizarían simulacros utilizando la técnica de observación directa (mystery shopper) realizada por una persona anónima que se hace pasar por un ciudadano/a quien plantea una serie de cuestiones y demanda unos determinados servicios. Se rellenaría una ficha reflejando la situación de los elementos tangibles de la oficina (instalaciones) y la valoración de la atención recibida (personas, tiempo, ...); su análisis permitiría extraer conclusiones sobre las acciones que implantar en las áreas de mejora. Asimismo mediante la mejora y creación de nuevas Oficinas de Atención al ciudadano.

En el campo de la gestión, en el nivel legislativo se quiere finalizar el proyecto de ley de publicaciones, el cual establecería una normativa común a seguir en todas las publicaciones que cualquier “unidad” (u organismo público) quisiera hacer en el Boletín Oficial de La Rioja; fomentar la calidad en los documentos generados (normalizarlos, estandarizar los formatos, ...) y remitirlos informáticamente, así como otras medidas que afectan más al campo de la actuación del operador público, más que al de la modernización en sí. Para todo ello, se busca implicar al funcionario con incentivos (cursos, premios, concursos, etc).

Por su importancia y estrecha relación con el informe que presentamos, reproducimos una parte del texto del Plan Estratégico de la Rioja, así como las iniciativas que se adoptan tras el

mismo. En dicho texto, se detecta una clara concienciación por parte de esta administración autonómica del tema que nos ocupa.

"Base legislativa necesaria:

La calidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico ha dejado de ser un problema de valor literario y lingüístico para convertirse en una exigencia constitucional, cuyo incumplimiento implica una violación del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución Española) Es cierto que el Tribunal Constitucional no ha declarado hasta la fecha, la inconstitucionalidad de una norma por defectos en la técnica normativa, aunque la mala calidad de muchas de las normas del ordenamiento jurídico está provocando una reacción que anuncia la posibilidad de futuras anulaciones de leyes y reglamentos que no cumplan los requisitos mínimos de una correcta formulación técnica.

Tampoco se puede ignorar que el problema más grande que plantea nuestro derecho positivo no surge de la mala calidad de cada una de las normas sino de la extraordinaria complejidad de nuestro ordenamiento jurídico. Por eso muchas veces no está del todo claro si el vicio que es denunciado es un defecto superable o por si el contrario no es más que la característica inevitable del complejo ordenamiento jurídico de nuestro tiempo.

Por otro lado se puede fácilmente comprobar el crecimiento espectacular en nombre y extensión de las leyes y sobre todo de las normas reglamentarias, pero aún así existen en la actualidad críticas sobre la falta de normas que regulen unos u otros temas. Por tanto podemos decir que la complejidad del ordenamiento jurídico no está motivado sólo por la cantidad de las normas que lo integran sino también por las diversas fuentes que lo alimentan. La complejidad del sistema se ha hecho más grande cuando el Estado centralista se ha transformado en un Estado Autonómico, y el poder normativo se ha diversificado en muchos centros de decisión que producen normas por vías muy diversas. A esto se le une la apertura al ordenamiento comunitario europeo.

La técnica normativa ha de establecer reglas que sirvan para mejorar tanto la calidad de cada norma considerada en ella misma, así como la adecuada integración de la norma en el ordenamiento jurídico. Las normas deberían reunir unos requisitos mínimos en la claridad de la expresión, la estructura formal y la lógica interna.

Consideradas en relación con el contexto, las normas han de ajustarse a las circunstancias de la realidad sobre la cual actúan y han de integrarse en el ordenamiento existente.

En este sentido destacamos la siguiente Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1990 de 4 de octubre que en relación a lo dicho hasta el momento, dice;

"Cada norma singular no constituye un elemento aislado e incommunicado en el mundo del derecho sino que se integra en un ordenamiento jurídico determinado, en el cual y conforme a los principios generales que lo informan y soportan han de resolver las contradicciones y vacíos normativos ya sean reales o aparentes que resulten de su articulación. ..."

A continuación mostramos una serie de observaciones y recomendaciones para la redacción de textos legales y disposiciones:

- El lenguaje de las leyes y de las disposiciones es un lenguaje técnico que tiene como características esenciales la formalidad y la funcionalidad.*
- La formalidad del lenguaje legal favorece la adopción de soluciones propias de la expresión bien redactada, que hemos de evitar que deriven en una expresión artificial y excesivamente distante.*
- El lenguaje jurídico se ha de ajustar a un principio de objetividad y de respeto a las personas.*
- El lenguaje legal necesita de una expresión precisa para cumplir adecuadamente la función que le corresponde.*
- Es necesario la ordenación rigurosa del contenido de la redacción legal con un uso adecuado de los sistemas de división de los textos legales y disposiciones, poniendo*

primero el contenido general y después el contenido más específico, diferenciando lo más importante.

-Hay que redactar los textos legales con la máxima claridad para evitar que se produzcan interpretaciones erróneas.

-Se necesita seleccionar el contenido de los textos y la forma con que se redactaran. Es preferible la utilización de frases cortas sin que lleguen a ser excesivamente esquemáticas.

-El lenguaje legal tiene unas formas y unos comportamientos específicos. Es necesario utilizarlos con prudencia.

-Es necesario evitar lo más posible el uso de términos que impliquen un tratamiento discriminatorio entre los sexos

Por otra parte tenemos que tener en cuenta que la normativización extrema de los elementos y procesos administrativos es uno de los puntos más singulares y característicos de la Administración Pública.

Una de las características principales es la obligatoriedad del cumplimiento del principio de legalidad, el cual implica la sumisión de la Administración Pública a la Ley. Esta legalidad se ha transformado en una legalidad dogmática, debido a la extensión y la complejidad del mundo normativo de la Administración Pública.

El problema con el que habitualmente se enfrenta la sociedad es que existen multitud de decretos y órdenes de organización que regulan los órganos de las distintas unidades administrativas y muchas veces es difícil saber los artículos que tienen vigencia y los que no la tienen ya que las cláusulas derogatorias normalmente no especifican la normativa derogada.

En el caso de las Comunidades Autónomas, podemos decir que éstas se caracterizan por haber tenido procesos de constitución y maduración relativamente largos, y por encontrarse con una densidad normativa enorme.

Un obstáculo más grande lo constituye la implementación normativa, es decir la normativización de las propuestas. Un cambio en las estructuras administrativas implica la creación o modificación de un decreto y de la orden que lo desarrolla. Este proceso es largo, los órganos jurídicos tienen que confeccionar la disposición, se tiene que presentar al Consejo Técnico y al Consejo Ejecutivo, posteriormente se tienen que elaborar la orden mediante un proceso similar, que finaliza con la promulgación del Consejero.

Cuando se produce un cambio organizativo es posible generar o modificar un decreto y una orden que regule la organización de un área administrativa determinada. Ahora bien es totalmente imposible modificar la normativa básica que regula la Administración, como por ejemplo la Ley de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración o la mayoría de las legislaciones sobre la Función Pública.

En la realización de cualquier actividad se han de tener en cuenta los límites normativos que existen, para no realizar ninguna actuación que vaya en contra de la normativa.

Debido a la escasez de normas de carácter autonómico, se ha visto necesario proponer la creación de normativas o modificación de las existentes, para dar soporte legal a las nuevas formas de actuación que se pretenden establecer en la Comunidad de La Rioja².

Desde el Gobierno de la Rioja se ha presentado el *Plan para la Excelencia en el Gobierno de La Rioja 2008-2011*, del que se ha ejecutado alrededor de un 91%. Este Plan del 2008-11 es un complemento, en líneas similares, del Plan Estratégico descrito con anterioridad.

El Consejo de Gobierno en Octubre de 2007 aprobó las *Medidas para la Simplificación Administrativa*, que pretendían ser ejecutadas en un plazo de 18 meses desde su aprobación para hacer una administración mas ágil y flexible, partiendo del Decálogo de Compromisos con la Excelencia que en 2003 había aprobado el Consejo de Gobierno. Medidas para reducir tiempos, carga administrativa y documental y costes.

Las 10 medidas, desde nuestro interés, y en resumen, buscan revisar la oportunidad de la emisión de determinados informes preceptivos en materia de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general y tramitación administrativa en general. Con ello se intenta, sobre todo, facilitar la agilización de procedimientos y su simplificación para lo que se elaborarán Manuales de buenas prácticas y documentos tipo de las normativas más frecuentes., suprimir algunas informes, el tiempo de tramitación de disposiciones administrativas, ampliar los mecanismos de administración electrónica de cara al ciudadano, en definitiva toda aquella documentación que sea innecesaria, etc.

Por otra parte, desde el mismo Gobierno de La Rioja (Consejería de Administraciones Públicas y Política legal) se ha editado un *Libro de Estilo*, en el 2005, que no tiene por objetivo mejorar el lenguaje jurídico, pero sí contribuir a normalizar las ediciones del Gobierno regional estableciendo criterios de composición, identidad visual y propuestas de uso de los elementos integrantes de las publicaciones.

1.4.13. Madrid

En líneas generales, la Comunidad de Madrid ha enfocado la modernización y mejora de su lenguaje y política administrativa con relación al ciudadano en dos líneas: lo que podemos llamar (como en otras comunidades) Simplificación administrativa y Políticas de Calidad, destinado al ciudadano, así como *corrección del lenguaje jurídico-administrativo*. En donde se han implicado y colaborado Universidades como la Rey Juan Carlos. Lo desglosamos en nueve puntos.

En la página institucional de la Comunidad de Madrid¹⁸ hay que destacar el área de Estudios Jurídicos, que informa de todas las normas que regulan nuevos procedimientos en la CAM y sus correspondientes impresos normalizados, con el fin de racionalizarlos y simplificarlos.

Además supervisa los proyectos de normas sobre asuntos de la competencia de la Dirección General de Calidad de los Servicios y asiste jurídicamente a las diferentes áreas. Dicha Dirección General de Calidad ha realizado varios informes (sobre todo relacionados con mujer, Educación y Empleo) en los que indicaba las modificaciones necesarias para racionalizar/simplificar los procedimientos (en cumplimiento del art. 4.f del Decreto 85/2002 de 3 de mayo, por el que se regulan los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos).

El Plan de Calidad lo constituyen el conjunto de proyectos de la Comunidad de Madrid orientados a la implantación de una cultura de Excelencia en la Administración Pública tales como:

- Fomento de la adopción del Modelo EFQM.
- Implantación de un Sistema de Cartas de Servicios (las Cartas de Servicios son documentos que informan al ciudadano sobre las condiciones en que se prestan los servicios públicos).
- Realización de Actividades Formativas en Calidad (dirigidas al personal de todas las unidades de la Administración Regional para adquirir conocimientos en las técnicas y herramientas necesarias para ofrecer unos servicios públicos de calidad. Los cursos son gestionados por personal de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano en colaboración con el Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP). Las acciones formativas se integran tanto en el bloque de Formación General como en el de Formación Especializada. Destacamos el curso de "Habilidades en la atención al público" o el curso de "La atención al ciudadano en la CAM: organización y funcionamiento multicanal").

18 www.madrid.org —> Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno: Planes y Actuaciones

-Premio de Excelencia y Calidad del Servicio Público (anualmente, la Comunidad de Madrid convoca los premios a la Excelencia y Calidad en el servicio público, como reconocimiento público de la Comunidad de Madrid al esfuerzo de los empleados cuyos resultados han mejorado la calidad del servicio prestado al ciudadano).

El Plan de Calidad se completa con una Carta del Ciudadano y el Decálogo sobre los Derechos de los Ciudadanos (también contribuyentes y opositores) cuyo primer derecho reza así "*Derecho a obtener informaciones claras, veraces y completas sobre las actividades desarrolladas por la Comunidad de Madrid*".

Asimismo, y con el objetivo de agilizar la gestión administrativa y satisfacer más rápidamente al ciudadano, la CAM dispone de la Atención al Ciudadano, un conjunto de actividades y medios que la Administración de la Comunidad pone a disposición de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos. Se destaca el teléfono de atención 112, Registros, Ventanilla Única, y la figura del Defensor del Contribuyente de la CAM.

En su afán de renovación se encuentra el área de Evaluación de los Servicios Públicos, cuyas funciones son: edición de índices, como es el IPCS (índice de percepción de la calidad del servicio de atención al ciudadano) o el IRCSP (índice regional de la calidad de los servicios públicos); la emisión de informes preceptivos y previos a la implantación de instrumentos de evaluación de cualquier Servicio Público y la función de impulso de la cultura de la evaluación en la Comunidad de Madrid.

Plan Estratégico de Simplificación de la Gestión Administrativa (PESGA): la segunda fase se elaboró del 2005-07, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio al ciudadano mediante la simplificación de la gestión administrativa.

El Plan para el desarrollo de la Sociedad Digital y del conocimiento de la CAM (Madrid, Comunidad Digital) impulsado desde la Consejería de la Presidencia, y que tiene entre otros objetivos: acercar al ciudadano y empresas al uso de las nuevas tecnologías y en especial a los empleados públicos a los que se forma tanto virtual como presencialmente y a los que se integra en el Plan con la utilización de correo electrónico corporativo y otras herramientas tecnológicas.

También en este Plan, la Administración se compromete a "proveer información de interés no solo a través del canal telefónico sino también a través del Portal corporativo" con información actualizada (gráfica, fotográfica y sonora) enfocada a los intereses de los ciudadanos.

Forma parte de este Plan del proceso de modernización interna de la Administración que abarca a todas las Consejerías, para evitar la "obsolescencia tecnológica" y lograr más y mejor proximidad al ciudadano.

Asimismo, dicha modernización alcanzará progresivamente a los organismos y servicios adscritos a cada Consejería, entre los que destacan como objetivos según se informa en dicho Plan:

- En materia judicial, implantación de los Servicios de Administración Electrónica Judicial de la Comunidad, la extensión a todas las Salas del sistema de grabación digital de juicios y la extensión de la videoconferencia a todos los partidos judiciales de la Comunidad.
- Respecto de los centros docentes, se extenderá el plan de desarrollo de las TIC en los centros docentes no universitarios, en los que se pondrá en funcionamiento un plan de gestión integral, cuya base de datos administrativa y académica sobre alumnos permita la difusión de información de admisión de alumnos, matriculación,

pruebas selectivas, becas, etc. En cuanto a las Universidades, se avanzará en la implantación de la red de comunicaciones que les permita interrelacionarse.

- Se va a consolidar la red de comunicaciones de banda ancha entre los distintos centros sanitarios y los ciudadanos y se creará el soporte tecnológico para la instalación de la Agencia Sanitaria Virtual.
- Conexión en red de todos los centros de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, y se tiene planificado crear una base de datos con información general y especializada y que permita acceder a los expedientes administrativos relativos a ayudas públicas y prestaciones sociales.

Con este Plan, además, se van a intentar reducir los trámites administrativos, el tiempo de su realización, la documentación que se requiere, y acciones que impliquen la unificación y normalización de criterios aplicables a la generalidad de los departamentos de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de lograr la normalización de las actuaciones administrativas.

Todo ello requiere la colaboración con la Administración local; por ello, y en colaboración con la administración estatal y local, la Comunidad de Madrid, desde 2003, está cofinanciando y supervisando la ejecución de tres proyectos de Ciudades Digitales (Programa de Ciudades Digitales: realización de proyectos demostración para la implantación de la Sociedad de la Información, a través de redes de telecomunicaciones a alta velocidad y aplicaciones en teleadministración, comercio/negocio electrónico, tele-trabajo, tele-formación, telemedicina, gestión de servicios de uso público, aplicaciones para colectivos con requerimientos especiales, cultura, turismo y ocio, entorno doméstico y móvil, etc.).

Destacamos especialmente el llamado "Plan de Modernización de la Justicia de la Comunidad de Madrid", que desde 2005 (dado que a partir de 2002 se trasladó a la Comunidad la provisión de medio económicos y materiales para la Administración de Justicia) tiene como objetivos: Plan de mejora de las infraestructuras técnicas; Plan de Sistemas de Información; Nuevo sistema de grabación de vistas.

En el segundo de los Planes citados la finalidad es:

- Convertir al Ciudadano en la pieza fundamental de la Administración de Justicia, facilitando el acceso a todas sus instancias.
- Abrir nuevas vías de información y participación ciudadana en la Administración de Justicia, desde una concepción de la Justicia como un servicio público y no como una potestad del Estado.
- Mejorar la eficacia y calidad de la Administración de Justicia, dotándola de los medios materiales y técnicos adecuados para el desempeño de sus funciones.

En este sentido se abrió un Portal de la Administración de Justicia cuyos servicios propuestos son: Información (directorio judicial, funciones de jueces, abogados, fiscales, procuradores, etc.); orientación a la víctima; orientación jurídica; repositorio de formularios; preguntas frecuentes; información relacionada con las vistas o con la situación del procedimiento; comunicaciones vía SMS y correo electrónico; información relacionada con la Asistencia Jurídica Gratuita; puntos de información (kioscos en las Oficinas judiciales).

En el marco europeo, resaltamos el Centro de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid, creado en 1988; adscrito a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno (Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado). Está especializado en difundir información y documentación sobre la Unión Europea, y está orientado a servir de punto central de recepción y difusión de toda la información relacionada con los asuntos comunitarios.

Cuenta con publicaciones generadas por los órganos e instituciones de la UE, así como un variado número de títulos referentes a las instituciones y a las políticas de la Unión Europea y al Derecho Comunitario.

De libre acceso a todos los ciudadanos, éstos pueden realizar consultas específicas sobre legislación, jurisprudencia, licitaciones o programas comunitarios. También pueden acceder a una amplia colección de boletines, informes, estadísticas, monografías, manuales, revistas y todas aquellas obras que faciliten la información precisa acerca de cualquier materia relacionada con la Unión Europea. Tanto la información proporcionada por el Centro como su envío son gratuitos.

Como servicio anexo al Centro de Documentación está el Punto de Información *Europe Direct*, que proporciona al público una primera respuesta a su petición de información sobre la Unión Europea.

Dentro de la CAM pero en el plano local, partimos de una iniciativa pionera como fue la elaboración en el año 2008, por la Universidad Rey Juan Carlos, de un Manual para el Ayuntamiento de Madrid con el fin de simplificar el lenguaje administrativo (fruto de un convenio entre ambas instituciones). A través del mismo, se facilitan una serie de herramientas sencillas que cumplen con el requisito de que, si el personal utiliza con solvencia el idioma, el ciudadano entenderá todo aquello que le afecta en su relación con el Ayuntamiento de Madrid y podrá ejercer en libertad los derechos y deberes que se derivan de su estatus de ciudadano.

Existe una empresa denominada Consultores de Gestión Pública¹⁹ con sede en Madrid, Barcelona y Vizcaya, formada por profesionales procedentes del sector público y que oferta servicios profesionales para las administraciones públicas y afines, entre cuya cartera de servicios está la formación (como por ejemplo en el ámbito de atención al ciudadano y prestar servicios de calidad), edición de manuales, cursos, etcétera, para lograr la simplificación de los servicios de las Administraciones Públicas. Municipios de todo el panorama nacional (algunos de ellos de la CAM), Diputaciones provinciales, Comunidades Autónomas y otras instituciones han contratado los servicios de esta empresa. Uno de los últimos cursos, celebrado en junio de 2010, llevaba por título “Reglas prácticas para simplificar y mejorar la tramitación de los expedientes administrativos”, impartido por D. Miguel García-Rescalvo.

Dependiente de la CAM, existe el Instituto Madrileño de la Administración Pública (IMAP), con la finalidad de formar a los empleados públicos, y que realiza varias actividades:

- Cursos: atención al ciudadano, habilidades en la atención al público... y sobre todo un curso denominado “*Lenguaje administrativo: habilidades lingüísticas en la redacción*”, que aborda los requisitos del lenguaje administrativo, del lenguaje sexista y cuestiones sobre léxico común y léxico administrativo, etc.
- Ofrece una “*Guía Práctica nº1: errores más frecuentes del lenguaje administrativo*” (Publicaciones del IMAP), elaborada por Fernando Vilches y Ramón Sarmiento (ambos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos), del año 2009, que a través de listado de los errores más frecuentes, pretende mejorar el uso de este lenguaje.
- Asimismo cuenta con una publicación que fue ganadora del V Premio de Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública de la CAM: “El discurso administrativo: análisis de la documentación pública de la Comunidad de Madrid”, del año 2008, de Asela Reig, que analiza distintos documentos emitidos por organismos de la CAM y propone mejoras.

A nivel universitario, ya hemos señalado la implicación de la Universidad Rey Juan Carlos (a nivel local y autonómico) en el lenguaje; además, esta Universidad ofrece un “Curso Cero”

19 CGP; www.gestiónpública.es

de preparación para el alumno, que entre otros programas tiene el denominado curso de 20 horas sobre el “lenguaje jurídico”.

La Universidad Alfonso X el Sabio, en su plan 1999, que se empieza a extinguir en el curso 10/11, imparte una asignatura llamada “Redacción general y aplicada” en la que se enseña el lenguaje jurídico, la terminología jurídica, como redactar correctamente, etc.

La Universidad Complutense ofreció en el pasado curso 2009-10 un título de Experto en “Retórica y Argumentación jurídica”, propio de la UCM.

En la Universidad Pontificia Comillas, se estudia en el Grado de Derecho y en la Facultad de Derecho una asignatura troncal de primer curso denominada: Habilidades Profesionales, en la que se estudian las características y redacción del lenguaje jurídico. En esta misma Universidad existe un Grupo de Investigación denominado Derecho y lenguaje que estudia todo lo concerniente al lenguaje jurídico.

Como conclusión, se detecta una seria intención por parte de la Comunidad de Madrid por corregir los errores y obsolescencia del lenguaje jurídico y administrativo, poniendo a disposición, no sólo del empleado público (lo que se completa con formación) sino del ciudadano, guías o manuales que perfeccionen el mismo. La aplicación práctica de estas medidas, necesitaría una mayor difusión entre los miembros de la Administración, así como la generalización efectiva a todas las escalas.

La segunda medida -la relacionada con la simplificación administrativa- parece que se ha implantado con fuerza aprovechándose de las nuevas tecnologías; no obstante hemos detectado que el ciudadano desconoce o no accede a todo lo que la Administración en general pone a su disposición. Habría, pues, que generalizar aún más todos estos medios.

1.4.14. Murcia

La mayoría de las iniciativas que hemos hallado referidas a esta Comunidad Autónoma son de naturaleza pública. Aunque sí se ha trabajado en la modernización del lenguaje a través de un Manual (al que nos referimos en párrafos posteriores), la gran mayoría de actuaciones van encaminadas a facilitar al ciudadano y/o empresas el contacto con la Administración, simplificando trámites, procesos y demás actuaciones.

Desde la propia Comunidad, se ha impulsado un Plan de Información Inter-administrativo para 2009 pero prolongado a 2010, dirigido a todo el personal de la Función pública regional, de las Corporaciones locales, Universidades públicas, etc, uno de cuyos cursos (denominado Manual de lenguaje y estilo administrativo) tiene por objetivo modernizar el lenguaje administrativo así como distinguir lo sexista. Se impartió (en 2010 también hay cursos previstos en esa línea) por la Escuela de la Administración Pública dependiente de la Comunidad.

Es muy importante resaltar cómo en este organismo se han elaborado varios Manuales y el más importante en este ámbito (área jurídico-administrativa) se cuenta con un “*Manual de lenguaje y estilo administrativo*”. Queremos agradecer a este organismo, y en particular a Juanjo Pellicer, la información suministrada.

Desde el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Presidencia se ha presentado un documento sencillo y de fácil de aplicación para incorporar un lenguaje no sexista en el trabajo diario, tal y como prevé la normativa vigente.

El portal administrativo incorpora contenidos de diversa naturaleza (actualidad, información institucional, Guía de servicios y trámites. . .) accesibles al ciudadano, para que entre en contacto con la Administración, y de forma específica, el Portal Tributario ha conseguido facilitar al contribuyente la acción de obtener, cumplimentar y presentar telemáticamente los modelos

tributarios evitando la necesidad de presentar documentación adicional. Para el resto de tramitaciones telemáticas se abordó un proyecto en 2005 que consistió en la actualización y depuración de la Guía de Servicios Electrónica, con el fin de hacerla accesible a todos los ciudadanos a través del portal administrativo citado.

En relación con lo anterior, la Consejería de Economía y Hacienda ha sido merecedora de una mención especial en los Premios TECNIMAP, en la candidatura “Servicios para los ciudadanos” por el proyecto titulado “Prestación de Servicios de Administración Electrónica en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.

El proyecto galardonado tiene como objetivo fundamental acercar la administración al ciudadano apostando decididamente por la prestación de “e-servicios” disponibles por un mayor número de canales que posibilitaran tramitaciones completas y automáticas. Se trata pues, de “facilitar las relaciones de los ciudadanos con la Administración, reduciendo el tiempo, el espacio, el coste, la complejidad y la incertidumbre”.

En este proyecto, liderado por la Consejería de Economía y Hacienda, han estado implicados numerosos equipos de trabajo (eAdministración, Tributos, Portal Administrativo) con más de veinte personas implicadas en él, y, debido a su naturaleza multidisciplinar, ha colaborado estrechamente el Servicio de Atención al Ciudadano, la Secretaría Autonómica de Administración Pública, así como las Secciones de Calidad -responsables de la elaboración de la Guía de Servicios- y los Servicios de Informática de las Consejerías y Organismos Autónomos de la CARM.

El mismo portal de la Comunidad de Murcia permite a los ciudadanos acceder a información sobre Europa a través de varios medios, entre los que destaca el “Centro de información europea de la Región de Murcia-Europa directo”, con un teléfono gratuito y una página web²⁰.

La implicación de la Administración murciana es tal que, en agosto de 2009 el Consejo de Gobierno aprobó el primer “Plan de Calidad y Modernización de la Administración Regional”, presupuestado en 910.266 euros. El Plan preveía la ejecución de unas ochenta acciones específicas para la mejora de la gestión y la calidad en las nueve consejerías que conforman actualmente el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, incluyendo cuatro programas transversales de actuación, centrados en la Calidad, la Atención a Ciudadanos y Empresas, la Mejora Continua de la Formación, y la Cooperación Inter-administrativa. Estas acciones tienen como objetivo la implantación de sistemas de calidad, estudios de satisfacción, mejora de la gestión, mejora de procesos, implantación de herramientas de calidad, manuales de procedimientos, cartas de servicios, formación e intercambios de experiencias, entre otros.

La Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Murcia también ha puesto en marcha el “Plan de Simplificación Administrativa”. Ambas acciones, el Plan de Calidad y Modernización y el Plan de Simplificación, están unidas para lograr una Administración menos burocratizada, adaptada a las nuevas tecnologías, con capacidad para llevar a los hogares y a las empresas a través de internet el mayor número posible de trámites administrativos.

Según la propia Consejera ante la Asamblea de dicha Comunidad Autónoma, el grado de ejecución del Plan de 2009 supera el 91%, y del total del proyecto se han desarrollado y se han completado 72 acciones, correspondientes a 24 en la Consejería de Presidencia y de Administraciones Públicas, 17 en la de Educación, Formación y Empleo, 11 en la Consejería de Agricultura y Agua, 5 en Economía y Hacienda, 4 en Sanidad y Consumo, 3 en Universidades, Empresa e Investigación, 3 también en Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 3 en Política Social, Mujer e Inmigración, y 2 en la Consejería de Cultura y Turismo. Las restantes,

²⁰ ec.europa.eu/europedirect/index_es.htm

hasta el total de las 79 que se han incluido en el plan, culminarán a lo largo de 2010, pero ya presentan un grado de desarrollo superior al 75%.

El "Plan de Calidad y Modernización de la Administración Regional" en 2009 comprende:

- El Programa de Calidad, que incluye acciones para promover y divulgar iniciativas de gestión de la calidad que garanticen la excelencia y la mejora continua en las unidades administrativas, con la medición de la calidad de los servicios públicos y de satisfacción ciudadana (elaboración de estudios de evaluación de la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, la elaboración de cartas de servicios, implantación del modelo EFQM de eficiencia en la gestión, etc).
- El Programa de Atención al Ciudadano y a Empresas incluye acciones necesarias para facilitar el acceso, tanto de los ciudadanos como de las empresas a los servicios que se están ofreciendo por parte de la Administración regional, habilitando nuevos canales de interrelación, como la TDT o los SMS, y mejorar los medios existentes para facilitar la participación ciudadana. También se pretende potenciar la web corporativa de la Comunidad Autónoma.
- Programa de cooperación Inter-administrativa tiene por objeto facilitar a los ciudadanos y a las empresas los procesos de tramitación, promoviendo la agrupación de servicios administrativos, (acciones para crear redes de buenas prácticas, definir el marco jurídico que apoye la interoperabilidad entre administraciones, jornadas y encuentros de intercambio y experiencias, etc).

Actualmente parece ser que se están celebrando varios convenios para desarrollar acciones dentro de este apartado. En concreto, un convenio marco entre la Administración general del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. También se está trabajando en un convenio marco de colaboración entre la Administración general del Estado, el Ministerio de la Presidencia y la Comunidad, en materia de reducción de cargas administrativas, y a su vez en un tercer convenio de colaboración, también entre el Ministerio de la Presidencia y la propia Comunidad, para la prestación mutua de servicios en administración electrónica. De hecho, se interactúa también con otras Consejerías como la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación (que ha realizado el análisis organizativo y diagnóstico de los procesos de la Oficina Sectorial de Atención al Ciudadano, con el fin de mejorar la gestión de la misma, para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos que hacen uso de ella).

Otros proyectos que continúan en este año 2010 son, por ejemplo, el emprendido desde la Consejería de Presidencia y de Administraciones Públicas respecto de la mejora del sistema de quejas, sugerencias y peticiones por parte de los ciudadanos, mediante notificaciones certificadas por mensajería SMS (del que se han tramitado 175 solicitudes, tanto para comunicar la recepción de quejas y sugerencias como para solicitar información). Se trata de implantar un canal SMS en las peticiones de información (además de quejas y sugerencias) a las que no se les pueda ofrecer una respuesta inmediata desde el servicio de atención telefónica 012, o desde las oficinas de atención al ciudadano (ventanillas únicas); se considera que va a suponer un ahorro en tiempo y costes, frente a los sistemas de notificación de correos ordinarios mediante su certificado.

En cuanto al "Plan de Simplificación administrativa", su objetivo es simplificar las relaciones de la Administración con los administrados y ganar en efectividad y en agilidad, acabando con la burocracia innecesaria, con el consiguiente ahorro de costes (la propia Consejera ha señalado que el proyecto es tan complejo como ambicioso, pues se trata de estudiar y rediseñar los más de mil procedimientos administrativos vigentes ahora mismo en la Administración regional y reducir su tramitación al máximo, lo que conlleva, de algún modo, instaurar una nueva cultura administrativa para evitar al ciudadano y a las empresas la presentación de innumerable documentación que la Administración puede obtener por sí misma); por ejem-

plo, certificados de empadronamiento, fotocopias del DNI, certificados de familia numerosa, discapacidad, rentas, etcétera.

Ahora mismo se encuentran en la segunda fase del plan, y la intención es enfocar las acciones de simplificación a los procedimientos de mayor incidencia social, por un lado, y también, por otro, a las empresas, ya que, según la Consejera, la descarga burocrática incide directa y muy positivamente en la economía.

A nivel universitario, en Murcia hay una optativa para el Grado en Derecho de la Universidad de Murcia relativa a los Sistemas jurídicos a través del lenguaje, y otra optativa sobre Oratoria y casuismo jurídico.

1.4.15. Comunidad Foral de Navarra

1.4.15.1. Gobierno de Navarra

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Personas consultadas: María Cruz Guembe: Secretaria de Gabinete; Salvador Estébanez: Director General de la Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid; Ildefonso Sebastián: Director general de Presidencia; y Roberto Rubio: Director General de Justicia.

Servicio de Modernización de la Administración de Justicia.

Conclusiones:

- En este momento, el departamento está ocupado en la coordinación de nuevas tecnologías entre las diferentes comunidades autónomas.
- Ante esta tesitura, y dada la relevancia y actualidad del tema de la Modernización del lenguaje, se piensa que éste ha de tratarse “a nivel Estado”, es decir, con directrices centrales para homogeneizar y unificar la terminología jurídica, equiparables a todas las comunidades autónomas y aplicables por igual en todas ellas. Después se tratará de su difusión al receptor y al sujeto de derecho de la manera más inteligible posible.
- Aportan información sobre Técnica normativa en el Servicio de Acción Legislativa y Coordinación.

1.4.15.2. Otros organismos

Colegio de Abogados; Instituto de Administraciones Pública; Tribunal Superior de Justicia

No existen iniciativas en este sentido sobre “Modernización del lenguaje jurídico dentro de la Administración Foral”.

No existen grupos de investigación ni materias específicas que traten el tema de la modernización del lenguaje jurídico.

1.4.15.3. Universidades

Universidad Pública de Navarra:

Dra. M^a Luisa Arcos: Profesora titular de Derecho Civil: entiende que hay dudas acerca de la realización y eficacia de dicha iniciativa ante el apego por parte de muchos juristas a mantener las estructuras de su lenguaje específico.

Universidad de Navarra:

Dra. Carmen Saralegui, Profesora Ordinaria de Dialectología: Curso de “Técnicas de comunicación oral y escrita” en el que se consideran diferentes tipos de texto, oral y escrito, para análisis en la Facultad de Filología.

ILCE: Instituto de Lengua y Culturas españolas: Se atiende a lenguajes específicos, en especial, la petición de la Clínica de la Universidad: introducción del español técnico de la medicina a médicos extranjeros.

IESE: Curso de español de los negocios: manejo de las destrezas textuales específicas de la economía.

No se busca innovar, modernizar ni aclarar, en el sentido de la actual iniciativa ministerial.

Departamento de Lingüística: Hay un proyecto interfacultativo (e interuniversitario) de análisis del discurso. Entre sus fines no se encuentra el de posible clarificación y modernización de los textos jurídicos.

Facultad de Derecho editó, y estudió, el llamado *Fuero Reducido de Navarra*, del siglo XVI y se analizaron los sinónimos terminológicos del lenguaje jurídico y su posible correspondencia.

1.4.16. País Vasco

La página web: Justizia Net²¹, de la Administración de Justicia en Euskadi ofrece información sobre el lenguaje jurídico. Hay numerosa y diversa información expuesta de manera clara:

- Dentro de su página se explican algunos términos, como: auto, demandante, ejecutoria o habeas corpus.
- También dentro de la página, aparece la posibilidad de consultar preguntas frecuentes por tema y en: “Conceptos Jurídicos”, podemos obtener contestación a ciertas preguntas, por ejemplo: ¿cómo se estructura el Departamento de Justicia y Administración Pública? o, ¿cuál es la diferencia entre juicios civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales?
- Existe igualmente una pestaña denominada “ABC de la Justicia” con numerosas explicaciones fundamentales; y
- Una oficina de atención a la ciudadanía.

Asimismo, desde la Consejería de Justicia y Administración Pública se ha puesto en marcha el llamado Plan de Innovación Pública del Gobierno vasco (PIP), que incluso tiene acceso desde Facebook, para mejorar continuamente la calidad de la Administración y lograr mayor participación de la ciudadanía.

Igualmente se ha abierto un blog (“administraciones en red”) para que todas aquellas personas involucradas en la mejora de los servicios administrativos puedan entrar en contacto con los ciudadanos.

En las universidades, existe también alguna materia concerniente al tema que nos ocupa. Por ejemplo, en la Universidad del País Vasco, en su Facultad de Derecho encontramos: “Comunicación en Euskera: Área Jurídica”, y del temario se desprende en su conjunto todo el tratamiento del lenguaje jurídico, su comprensión y el desarrollo de destrezas para mejorar la expresión. En Deusto, en la Facultad de Derecho se imparte una disciplina optativa en el primer semestre denominada “Técnicas de expresión y redacción jurídicas”.

²¹ www.justizia.net

1.4.17. Comunidad Valenciana

1.4.17.1. Abogacía de la Generalitat

Aprobado un Decreto sobre la forma, estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat; Decreto sobre técnica normativa del 13 de febrero de 2009.

1.4.17.2. Revista ELUA

Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante: Aparecen con cierta asiduidad algunos artículos relativos a la modernización del lenguaje jurídico, como ejemplos:

- “La compleja identidad del lenguaje jurídico” (Grupo TermAH), Manuel Martí Sánchez.
- “Lingüística y Derecho” (Universidad de Almería) Francisco García Marcos.

1.4.17.3. Universidades

Universidad de Valencia:

Existen los siguientes cursos relacionados con la explicación del lenguaje jurídico:

- Introducción al lenguaje del derecho*: José García Añón (Titular de Filosofía del Derecho).
- Curso de lenguaje jurídico y administrativo* (curso monográfico), impartido por la Asociación Valenciana de Lengua y Sociedad (AVALES) y en su programa en el objetivo nº 3 se especifica: “Redactar textos empleando un estilo administrativo moderno”.

Universitat d’Alacant:

Universidad pionera sobre la investigación en la traducción jurídica y su transmisión clara y modernizada gracias a los catedráticos: Alcaraz y Hughes; Campos y Gianbruno.

Universitat Jaume I:

En la Licenciatura de Traducción e Interpretación, existe el curso de *Lenguaje jurídico B (inglés) y C (francés)*. Se trabaja en la aplicación de las nuevas tecnologías para la difusión de glosarios y terminología jurídicos a un público mayoritario²².

Página de esta universidad en la que se recogen los trabajos realizados sobre lenguaje jurídico y los géneros en que se divide dicho lenguaje específico: destacan por su claridad y amplia difusión.

Grupo de investigación: GITRAD: sus trabajos van destinados a docentes de la traducción y lingüistas que forman a futuros estudiantes y elaboran corpus terminológicos susceptibles de ser utilizados como sistemas de traducción asistida por ordenador. Ej: GITRAD-GENTT: corpus jurídico caracterizado por su simplicidad y fácil manejo para la traducción jurídica.

22 www.gitrad.uji.es

1.5. Otras Organizaciones

Existe una Asociación de Lectura Fácil, creada por bibliotecarios y documentalistas catalanes²³ y afiliada a la red internacional, además de varios grupos de trabajo en diferentes comunidades, que promueven la publicación de libros y materiales de lectura fácil para diferentes colectivos. Se destaca en la Universidad Autónoma de Madrid el grupo Fácil Lectura²⁴ que ha publicado esta versión reseñada del Quijote y de la Constitución Europa y que promueve investigaciones empíricas en español de lectura fácil que se proponen proceden de lenguas anglogermánicas. También debemos mencionar el programa Extremadura vive la fácil lectura, de la Junta de Extremadura²⁵, con varias iniciativas de edición de libros, talleres y clubes de lectura.

Algunos blogs tienen información exhaustiva y actualizada al respecto: ver los comentarios de Silvia Senz en Addenda & Corrigenda²⁶ o, la de “El ciudadano-bibliotecario”²⁷.

2. EUROPA CONTINENTAL

2.1. Francia

2.1.1. Iniciativas públicas

2.1.1.1. Ministerio de Justicia Francés

En su página web cuenta con diversos enlaces para explicar la terminología jurídica. De entre ellos, el más directo es el que se encuentra en la propia página, en esta misma página accedemos a: *Arbo/Rubrique* y encontramos el enlace denominado: *Le mots-clés de la Justice-Lexique*²⁸, es decir el léxico jurídico por palabras.

Si se accede a cualquiera de las letras del alfabeto, se obtienen definiciones claras de cada una.

Dentro de la propia página, en: *Organisation de la justice*, observamos: *professions juridiques et judiciaires*, y por ejemplo, en el caso de los notarios, encontramos: *lexique*, un acceso al léxico por orden alfabético, como en el supuesto anterior.

2.1.1.2. La Ley n° 2009-526 de 12 mayo de 2009, de simplificación y clarificación del derecho y de aligeramiento de los procedimientos (“De simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures”)

Fue presentada por el diputado Jean-Luc Warsmann en 2008 como proposición de ley. Tiene 140 artículos. Parece ser que la proposición de Ley de Jean-Luc Warsmann sobre la simplificación del lenguaje jurídico, discutida y adoptada ha sido criticada ya que la noción de simplificación del derecho resulta ambigua.

23 www.lecturafacil.net/index.php

24 www.fg.uam.es/facil_lectura/informacion.html

25 www.facillectura.es/

26 addendaetcorrigenda.blogia.com/2007/012402-lectura-facil-o-la-edicion-inclusiva-y-ii-.php

27 elciudadano-bibliotecario.blogspot.com/2008_02_01_archive.html

28 www.justice.gouv.fr/les-mots-cles-de-la-justice-lexique-11199

2.1.1.3. “Mission de recherche Droit et Justice”, Misión de investigación Derecho y Justicia²⁹

Creación: Se creó por una Orden de 11 de febrero de 1994, por iniciativa conjunta del Ministerio de Justicia y el Centro Nacional de Investigación Científica: CNRS (Centre national de la recherche scientifique). La fórmula adoptada es la de una agrupación de interés público: *GIP: Groupement d'intérêt public*³⁰ y dentro del enlace: Partenaires, en la página principal del Ministerio de Justicia Francés³¹.

Cometido: Esta *Mission* también realiza diversos estudios y entre ellos se incluyen estudios sobre el lenguaje del Derecho. De hecho, su revista: *Recherche Droit&Justice*, ha publicado en su edición de primavera-verano de 2010, un número, el 34, dedicado a cuestiones de lenguaje jurídico. Resulta muy interesante y recomendable la lectura de este número completo³².

2.1.1.4. Asamblea Nacional francesa

En su página web se puede acceder al sitio: “**Simplifions la loi**”³³.

2.1.1.5. La Commission des lois/Comisión de las leyes

Dependiente de la Asamblea Nacional Francesa, ha tomado la iniciativa de simplificar el derecho. Fundamento: Se ha entendido que la inflación de los textos y la degradación de su calidad, no supone únicamente una desvalorización e inestabilidad, sino también un perjuicio a la competitividad y atracción por Francia. Inspirado en el dicho de Montesquieu según el cual “las leyes inútiles debilitan las leyes necesarias”, la Comisión de las leyes ha asumido como tarea, realizar la ley más accesible, más legible y más comprensible tanto para los ciudadanos como para quienes tienen por misión interpretarla y aplicarla.

Acciones: Con la finalidad de llevar a cabo los principios y objetivos de valor constitucional de claridad, accesibilidad e inteligibilidad de la ley, se propone:

- Abrogar las disposiciones que se hayan convertido en inútiles, redundantes u obsoletas.
- Lograr la coherencia de las disposiciones mal coordinadas y estudiar posibles contradicciones; y
- Sugerir la reescritura de las disposiciones poco inteligibles.

Este trabajo se establecerá durante la legislatura y necesita el concurso de todos.

Por ello, existe un sitio en Internet en la página de la Asamblea Nacional, en el que se invita a los ciudadanos a que citen aquellas disposiciones legislativas que a su juicio presenten dificultades.

La *Commission des lois* ha presentado proposiciones de reforma legislativa que han sido examinadas por un Parlamento:

- Un informe legislativo sobre la simplificación de la ley; y
- Un informe legislativo sobre la claridad de la ley.

²⁹ www.gip-recherche-justice.fr

³⁰ www.gip-recherche-justice.fr/

³¹ www.justice.gouv.fr/

³² www.gip-recherche-justice.fr/IMG/pdf/RDJ-34-4.pdf

³³ www.simplifionslaloi.assemblee-nationale.fr

2.1.1.6. Comisión General de Terminología

La Comisión general de terminología y neología, creada por Decreto de 3 de julio de 1996, relativa al enriquecimiento de la lengua francesa. Ha tenido el cometido de constituir una institución interministerial de terminología para dar homogeneidad a la terminología utilizada en ámbitos económicos, trabajos científicos, actividades técnicas y jurídicas proponiendo términos nuevos que puedan servir de referencia.

El resultado obtenido por esta Comisión proviene también de procedimientos de cooperación con diferentes actores: Comisiones especializadas, Comisión general, Academia francesa, colaboradores científicos y técnicos, organismos y expertos de otros países de habla francófono³⁴. Existe un informe de 2008 para el Ministerio de Cultura y de la Comunicación³⁵.

2.1.1.7. Universidades y otras instituciones

También se han ocupado de este tema. Sí se ha detectado interés universitario por esta materia (por ejemplo, las universidades de Poitiers, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Panthéon-Assas (Paris II), Paris X (Nanterre), Paris XI, y otras³⁶).

Por otra parte, véase el caso del Centro de Estudios Jurídicos Europeos y comparados, que organiza, junto con la Sociedad de legislación Comparada y la Comisión de Estudios Comunitarios, un ciclo de debates con el tema: Aproximación crítica al vocabulario jurídico europeo (**Les débats du cejec-années 2007/2009**); *Le Centre d'Études Juridiques Européennes et Comparées*³⁷ organise en partenariat avec la *Société de Législation Comparée*³⁸ et la *Commission pour l'Étude des Communautés Européennes*³⁹ un cycle de débats sur le thème: "Approche critique du vocabulaire juridique européen"⁴⁰.

2.2. Alemania

En Alemania hay una exigencia legal que se encuentra en el **Reglamento Común de los Ministerios Federales** al indicar, para todos los proyectos de ley del Gobierno Federal, que estos deben ser lingüísticamente correctos y a ser posible comprensibles para todo el mundo (§ 42, Párrafo 5 GGO).

Exige también una comprobación de su sistemática y forma jurídica por el **Ministerio Federal de Justicia** (§ 46, Párrafo 1, GGO), teniendo también en cuenta que un proyecto de ley sea lingüísticamente correcto y en lo posible comprensible.

34 Según la página 6 del informe anual de 2008.

35 www.dglf.culture.gouv.fr/cogeter/Rapport_Cogeter_2008.pdf
Consultado el 1 de julio de 2010.

36 Algunas referencias que se manejan en Francia son: "Introduction à la langue juridique française"/Christine Schmidt. 1ère édition-Baden-Baden: Nomos Verlag Gesellschaft (1997) ISBN 3-7890-4998-0.; "La langue juridique : maux et remèdes": en: Juripôle, en la dirección: www.juripole.fr/Articles/tradjur.php. Sourieux (J-L) et Lerat (P) *Le langage du droit*, Paris, PUF, 1975; Chiara Preite. *Langage du droit et linguistique. Étude de l'organisation textuelle, énonciative et argumentative des arrêts de la Cour (et du Tribunal) de justice des communautés européennes*. Rome, Aracne editrice. Quaderni di Linguistica e Linguaggi specialistici dell'Università di Teramo, n° 2, 2005, 320 pp. Con resumen en francés en el sitio: www.corela.edel.univ-poitiers.fr/document.php?id=180

37 www.u-paris10.fr/cejec

38 www.legiscompare.com

39 www.cedece.org

40 www.legiscompare.com/IMG/pdf/les_debats_du_cejec_2007_2009.pdf

2.2.1. Iniciativas públicas

2.2.1.1. Gesellschaft für die deutsche Sprache

La GfdS -Gesellschaft für die deutsche Sprache- es la Sociedad para la lengua alemana. Se trata de una institución peculiar que tiene intervención en las políticas públicas. La Sociedad para la lengua alemana (GfdS) se configura como una asociación políticamente independiente para el fomento y la investigación del idioma alemán. Se fundó en 1947 y tiene como objetivo vigilar el desarrollo de la lengua alemana y con base a la investigación científica, dar recomendaciones para la utilización general del idioma.

Se revisan los proyectos de leyes, reglamentos y otros textos en cuanto a su exactitud y comprensión lingüística. El mandato del equipo de redacción de la GfdS en el Parlamento alemán queda establecido en la disposición (§) 80ª del Reglamento del Bundestag de la siguiente manera:

- Un equipo de redacción de la GfdS instalado en el Bundestag debe examinar, por decisión del Comité correspondiente, un proyecto de ley por su precisión y comprensión lingüística y en caso necesario enviar recomendaciones a dicho Comité. El Comité correspondiente puede implicar al equipo de redacción durante todo el recorrido del procedimiento y solicitar su comprobación. Esto rige especialmente para la verificación de enmiendas cuya aprobación se espera.
- El equipo de redacción ofrece además asesoramiento lingüístico por cualquier circunstancia.

Aparte de lo anterior, el Reglamento Común de los Ministerios Federales prevé que se envíen las disposiciones legales del Gobierno Federal al equipo de redacción.

Objetivo fundamental: la tarea principal del equipo de redacción en el Bundestag alemán es corregir lingüísticamente los proyectos de leyes y disposiciones.

La GfdS se apoya por el gobierno federal de Alemania, según una decisión del Parlamento alemán, y por los gobiernos de los Länder. La GfdS es una organización, sin fines de lucro, que recibe igualmente contribuciones y donaciones deducibles de los impuestos. Además, se mantiene gracias a los servicios que presta a terceros.

2.2.1.2. Ministerio de Justicia

Destacamos el manual de forma jurídica, editado por el Ministerio de Justicia⁴¹ (*Handbuch der Rechtsförmlichkeit*) contiene numerosas e interesantes recomendaciones sobre la forma de redacción de normas jurídicas (reglamentos según traducción) para que resulte clara y precisa, tanto como sea posible.

Equipo de Redacción del GfdS para el lenguaje jurídico en el Ministerio de Justicia alemán. Aparte del equipo de redacción del GfdS en el Bundestag, en 2009 se ha creado un equipo de redacción para el lenguaje en el Ministerio de Justicia⁴².

La creación de este equipo de redacción es el resultado de un proyecto del GfdS y del Ministerio de Justicia denominado: "Leyes Comprensibles" de dos años de duración (2007 y 2008), basado en una iniciativa parlamentaria. Dicho proyecto ha resultado convincente a juicio de los implicados.

41 hdr.bmj.de

42 www.bmj.de. Concretamente en: www.bmj.de/enid/68d5612798ef051c4eb0cfda9fe60784,c1b2c85f7472636964092d0935323933/Verstaendliche_Gesetze_und_Buerokratieabbau/Verstaendliche_Gesetze_1nd.html
Véase: Themen/Verständliche Gesetze und Bürokratieabbau/Verständliche Gesetze.

Como el proyecto ha tenido éxito, el Ministerio de Justicia ha posibilitado el asesoramiento lingüístico para todos los proyectos de leyes. Ha recibido fondos presupuestarios para ello, que de momento están asegurados hasta finales de 2012.

Desde 2009 existe este asesoramiento lingüístico para todos los ministerios federales. El Ministerio de Justicia ha empleado para ello a tres lingüistas (la así llamada oficina lingüista) y da además da empleo a través de un contrato con la GfdS a otros siete lingüistas externos (el denominado Consejo de Redacción para el lenguaje jurídico). En total 10 lingüistas examinan los proyectos de leyes y reglamentos de todos los ministerios para lograr su exactitud y comprensión lingüística. Se indican debilidades en la estructura del texto y rupturas lógicas, cuidan de que tenga una terminología uniforme, señalan construcciones de frases complicadas o “lenguaje burocrático” y ofrecen alternativas. Intentan dialogar directamente con los autores, porque en numerosas ocasiones los conflictos lingüísticos manifiestan problemas de contenido sin resolver, para los cuales sólo se puede encontrar la mejor solución en el trabajo conjunto.

El asesoramiento lingüístico constituye parte obligatoria de la arriba mencionada comprobación jurídica del Ministerio de Justicia; pero consideran que este momento de la comprobación se produce demasiado tarde para un trabajo lingüístico efectivo y por ello ofrecen a los Ministerios la inclusión de lingüistas lo más tempranamente posible en el trabajo inicial del proyecto.

El asesoramiento lingüístico está disponible para los empleados de todos los ministerios con el fin de solucionar consultas lingüísticas ad-hoc de forma rápida, por teléfono o por e-mail.

El Consejo de Redacción en el Bundestag acompaña ahora a los proyectos de ley exclusivamente durante la fase parlamentaria.

Se puede encontrar información referente al asesoramiento lingüístico en la página web del Ministerio de Justicia⁴³.

El Ministerio de Justicia edita además desde hace años -como los otros ministerios- textos aclaratorios a diversas leyes con el fin de facilitar a los ciudadanos la comprensión del sentido de estas leyes y las consecuencias para el propio proceder.

Existen folletos y páginas especiales en internet sobre todo para leyes que tienen una importancia especial para los ciudadanos, por ejemplo para cuestiones de derecho sucesorio, ayudas para la vivienda, derecho de divorcio o ayudas al paro. Estos folletos se elaboran en la unidad de trabajo correspondiente en colaboración con la sección de prensa y publicidad.

Una de las conclusiones obtenidas de estas experiencias en Alemania es la que se deriva de la inmediatez del asesoramiento lingüístico, ya que el mejor resultado se obtiene con relación a la claridad de las leyes. Las leyes resultan más convincentes y creíbles y se ha entendido que, además, supone un ahorro de tiempo y burocracia, ya que se evitan más intermediarios en la “interpretación”; de ahí la importancia de la precisión y la claridad en lo expuesto.

El equipo realiza sugerencias y propuestas y finalmente el responsable decide.

2.2.1.3. Juzgados de primera instancia y colegios de abogados

En el juzgado de primera instancia correspondiente a la residencia de los ciudadanos, pueden ofrecer asistencia judicial o a través del colegio de abogados, en el que se puede pedir aclaración de los términos técnico-jurídicos.

43 www.bmj.bund.de/enidverstaendliche

2.2.1.4. Universidades

Existen diversos grupos de investigación relacionados con el lenguaje claro especialmente para legislar⁴⁴.

Profesorado. Entre otros muchos, destacamos a la profesora Christine Schmidt-König, de la Universidad de Trier (en Renania Palatinado)⁴⁵.

2.2.2. Iniciativas privadas⁴⁶

2.2.2.1. IDEMA

Es una empresa privada, que desde hace 10 años ofrece servicio tanto a particulares como a instituciones federales, a los Länder, a las administraciones locales y a la Universidad. Tiene 3 bancos de datos:

- Idema BUND: Es un diccionario electrónico para un idioma comprensible en judicatura y administración dirigida a la administración federal. Desde Julio 2009 todo el que trabaje en la administración federal tiene acceso por vía intranet al banco de datos IDEMA Bund.
- Idema COMUNAL: Mediante el banco de datos IDEMA COMUNAL se ofrece asesoramiento lingüístico para la administración local. Los clientes son las ciudades que se abonan para atener acceso a la base de datos.
- Idema CAMPUS: Ofrece el mismo servicio a la administración de las universidades.

2.2.2.2. Diccionarios

- Diccionario jurídico en internet⁴⁷, vía internet se puede obtener información, de manera gratuita, en la página de este diccionario jurídico.
- Diccionario DUDEN: se trata de un diccionario del idioma alemán, editado por primera vez en 1880, renovado regularmente cada cuatro o cinco años. Este año ha presentado un software de corrección del idioma alemán con un componente especial jurídico y administrativo dirigido al sector público en general. En las correcciones se tienen en cuenta la ortografía, gramática, separación de palabras, longitud de frases, palabras técnicas del lenguaje jurídico, modismos en latín y abreviaciones de palabras del lenguaje jurídico.

2.3. Italia

2.3.1. Iniciativas públicas

En Italia se estudia esta cuestión de modo especial y acerca de la simplificación del lenguaje administrativo, desde que en 1993 el *Dipartimento per la Funzione Pubblica* publicó el “**Código de Estilo de las comunicaciones escritas para el uso de las Administraciones Públicas**” (“**Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle Amministrazioni Pubbliche**”). *Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Roman, 1993*).

44 www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/germ1/schwerpunkte/sprachgebrauch/bereich2.html

45 www.uni-trier.de/index.php?id=7093&L=2

46 Direcciones web relacionadas con el lenguaje en Alemania:
www.zentrum-rechtslinguistik.de; www.deutscher-sprachrat.de; www.did.de;
www.duden.de; www.bundesregierung.de; www.kmk.org; www.bundestag.de;
www.aski.org; www.goethe-institut.de; www.ids-mannheim.de; www.daad.de;
www.deutscheakademie.de; www.sprachverein.ch; www.unwortdesjahres.org;
www.gal-ev.de

47 www.rechtswörterbuch.de

En 1997 se publicó el “*Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*” a cargo de Alfredo FIORITTO (en *Il mulino*).

Durante el mandato de Franco Bassanini como *Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali* (1996-2001) se dictaron un conjunto de leyes conocidas como “**Leggi Bassanini**” o “**della Semplificazione amministrativa**” simplificación de los procedimientos administrativos: Legge Bassanini (15 marzo 1997, n. 59), Legge Bassanini bis (15 maggio 1997, n.127), Legge Bassanini ter (16 giugno 1998, n.191) y Legge Bassanini quater (8 marzo 1999, n.50).

Tras estas medidas, el 9 de agosto de 2001 el Presidente del Consejo de Ministros delegó en el Ministro de la Función Pública la simplificación normativa.

Las Directivas de 7 de febrero (“sull’attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”) y de 8 de mayo de 2002 (“sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi”) dieron lugar al Proyecto “Chiaro!” (claro), dependiente del Departamento de la Función Pública.

Como resultado de estas disposiciones y de otras que vendrían a completarlas con posterioridad, surgieron en Italia distintas formas de evaluación de la calidad normativa:

- El “*analisi tecnico-normativo*” (ATN), que procede de la Ley 8 de marzo de 1999, n. 50, sirve para determinar la incidencia de la norma en el ordenamiento, su constitucionalidad, adecuación a la normativa europea y el respeto a las regiones y a los entes locales⁴⁸.
- El “*analisi di impatto della regolamentazione*”⁴⁹ (AIR) se estableció por la Directiva del Presidente del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2000 y busca medir el impacto que una determinada norma puede tener sobre ciudadanos, empresas y administración antes de su puesta en marcha.
- La “*verifica dell’impatto della regolamentazione*”⁵⁰ (VIR) fue establecida por Decreto del Presidente de la República 21 de septiembre de 2001, n.422,y busca medir el impacto que una determinada norma puede tener sobre ciudadanos, empresas y administración una vez que ya se ha puesto en aplicación.

Hasta la fecha se han dictado dos leyes de simplificación normativa: La Legge 29 luglio 2003, n. 229, llamada “**Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione-Legge di semplificazione**”⁵¹ y la Legge 28 novembre 2005, n. 246, llamada “*Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005*”⁵².

En el Parlamento Italiano existe desde 2005 una “**Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione**”, más conocida como “*Commissione parlamentare per la semplificazione*”⁵³, compuesta por igual número de diputados que de senadores.

El 15 de julio de 2007 se publicó el “**Plan de acción para la simplificación y calidad normativa**”⁵⁴.

48 www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_air/analisi.html

49 www.governo.it/Presidenza/AIR/index.html

50 www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/regolamento_vir/

51 www.parlamento.it/parlam/leggi/032291.htm

52 www.camera.it/parlam/leggi/052461.htm

53 www.parlamento.it/bicamerale/43775/43778/43787/43822/paginabicameralei.htm

54 www.innovazionepa.gov.it/media/162734/piano_semplificazione.pdf

Se han constituido los siguientes órganos:

- *Cabina di regia sulla semplificazione normativa e sulla qualità della regolazione* (Ley n. 246/2005, Decreto Ley n. 4/2006 y Decreto Ley n. 181/2006).
- *Unita' per la semplificazione e la qualità della regolazione* (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 de septiembre de 2006).
- *Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione* (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 de septiembre de 2006).

En 2008 se crea el Ministerio “per la semplificazione normativa”⁵⁵, en cuya página web se encuentra numerosa información sobre las medidas llevadas a cabo durante estos años en materia de simplificación normativa. Algunas de las disposiciones más importantes dictadas por este Ministerio son:

- *Decreto ley n. 112/2008, de 25 de junio, convertido en Ley n. 133/2008, de 6 de agosto, sobre “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.*
- *Decreto ley n. 185/2008, de 29 de noviembre de 2008, convertido en Ley n. 2/2009, de 28 de enero “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.*
- *Decreto ley n. 200/2008, de 22 de diciembre, convertido en Ley n. 9/2009, de 18 de febrero de 2009, sobre “misure urgenti in materia di semplificazione normativa”.*
- *Decreto ley n. 78/2009, de 1 de julio, convertido en Ley n. 102/2009, de 3 de agosto, establece el Texto refundido (“coordinato”) sobre “Provvedimenti anticrisi, nonché prorroga di termini”.*
- *Decreto ley n. 103/2009, de 3 de agosto, sobre “Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009”*
- *Ley n. 69/2009, de 18 de junio, sobre “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.*
- *Ley n. 99/2009, de 23 de julio, sobre “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*
- *Decreto Ley n. 135/2009, de 25 de septiembre, sobre “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (09G0145)”*
- *Proyecto de Ley (Disegno di legge) de 12 de noviembre de 2009 sobre “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri della amministrazioni pubbliche”*

2.3.2. Iniciativas privadas

Desde el Curso 1006-1997 en la Università Degli Studi di Padova⁵⁶, la Cátedra de Lingüística Italiana ha promovido la investigación en el campo de la simplificación del lenguaje administrativo.

Desde el Curso 2007-2008 existe un Master in “Diritto Amministrativo e semplificazione normativa e amministrativa”⁵⁷, en la Università telemática Telma.

⁵⁵ www.semplificazonenormativa.it/

⁵⁶ www.maldura.unipd.it/buro/

⁵⁷ www.unitelma.it/sito/master/dettagli.php?id_elemento=9

La Asociación Italiana de Derecho urbanístico⁵⁸ va a dedicar su XIII Congreso Nacional, que se celebrará en Trento en los días 8 y 9 de octubre de 2010 a “La semplificazione nella disciplina del territorio”).

2.4. Bélgica

2.4.1. Iniciativas públicas

2.4.1.1. Gobierno federal belga

Desde el año 1999 el gobierno federal belga ha integrado explícitamente la simplificación de la legislación como objetivo de su política; prueba de ello, es una declaración gubernamental titulada “*La voie vers le XXI^e siècle*”.

Como complemento de lo anterior, y bajo el lema o paraguas de: “*Une administration efficace et attentive*”, se busca no sólo la simplificación administrativa sino someter a la legislación a un permanente proceso de evaluación, con la finalidad de conseguir una administración accesible y que se renueve, introduciendo directivas generales para la normalización y la simplificación.

Este objetivo tiene además efectos prácticos en los propios poderes públicos, porque en el año 2003 con la formación de un nuevo gobierno, Vincent Van Quickenborne obtuvo el puesto de Secretario de Estado para la *Simplificación Administrativa*, que extiende su competencia a la obtención de una justicia más eficaz.

Asimismo, y desde el gobierno también, se quiere conseguir que la justicia sea más accesible, y requisito sine qua non para ello es la mejora del lenguaje jurídico (en esta línea, acuerdo gubernamental de Yves Meterme.

2.4.1.2. Iniciativas legislativas e institucionales

Creación en el Parlamento de una **Comisión** con el objetivo de evaluar el funcionamiento y la eficacia de las leyes vigentes de forma que puedan ser modificadas o derogadas con flexibilidad.

Proposición de ley por la que se modifica el art. 43 de Código de Justicia con el fin de simplificar el lenguaje judicial (*doc.parl., Chambre, 52/1429*) y Propuesta de Resolución sobre utilización de un lenguaje jurídico más claro (*doc. parl., Chambre, 52/1340*). El 8 de julio de 2008, Hilde Vautmans y Bruno Steegen, presentaron en la Cámara de Representantes Belga una proposición de Resolución relativa a la utilización de un lenguaje jurídico más claro y más comprensible⁵⁹.

2.4.1.3. Programa PHENIX⁶⁰

La ley de 10 de agosto de 2005 crea el sistema de información **Phenix**.

Objetivos: (art. 2) mejora de la Oficina judicial, que incluye la simplificación del lenguaje judicial; conservación de los *dossiers* judiciales; constitución de un banco de datos de jurisprudencia; elaboración de estadísticas y colaboración para la gestión y la administración de las instituciones judiciales.

58 events.unitn.it/aidu

59 www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/1340/52K1340001.pdf

60 www.juridat.be/phenix_new/phenixFr/image/phenixwet.pdf

Adaptación del sistema Phenix a cualquier modificación normativa, legislativa o reglamentaria que mejoren la eficacia y simplificación del lenguaje judicial (art. 17).

2.4.1.4. El Consejo superior de Justicia

Organismo: Consejo Superior de la Justicia (compuesto de magistrados y abogados, entre otros) tiene encomendada la organización y selección de los magistrados y lleva a cabo, además, un control sobre el funcionamiento de la justicia; para ello emite recomendaciones e informes.

Objetivos: incluye entre sus objetivos más destacados la modernización del aparato judicial, con la clara finalidad de mejorar la comunicación con el ciudadano, para que éste comprenda mejor cómo se organiza y funciona la justicia. Se han organizado grupos de trabajo para formar a los magistrados cuyas temáticas versan, entre otras cosas, del lenguaje judicial y la argumentación. Jean-Luc COTTYN⁶¹.

El interés por la claridad del lenguaje jurídico aparece recogido en el manual de los profesores W. Smedts et K. Hendrickx titulado "Redactie van juridische teksten. Een meer toegankelijke juridische taal"⁶² (2002 y en el Manual del Servicio Público Federal de Justicia, Direktorat général de l'organisation judiciaire, Formation ordre judiciaire, 2003).

Actividades Permanentes. Ley 20 de julio de 2006, creación de una Comisión de Modernización del Orden Judicial (Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire) y un Consejo General de socios del orden judicial (Conseil general des partenaires de l'Ordre judiciaire⁶³).

Entre estas actividades destaca la realización de proyectos para ayudar a la mejora y utilización óptima de los medios del orden judicial, de los procesos judiciales y administrativos, y para favorecer la transparencia en el trabajo. En el informe anual 2010, (correspondiente al año 2009), Se destaca la creación de dos grupos de intercambio de información y comunicación (el e-grupo de información y el e-grupo de comunicación⁶⁴), aunque todavía no se perciben actuaciones en materia de lenguaje jurídico, propiamente.

2.4.1.5. Ministro de Justicia y de Reformas Institucionales

Organismo : Vice-primer Ministro y Ministro de Justicia y de Reformas Institucionales (Le vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles). Ha atendido consultas como la realizada el 22 de octubre de 2008 en la Comisión de la justicia por Clotilde Nyssens, sobre el "lenguaje judicial". Boletín de Informaciones Parlamentarias núm. 52 de la Cámara de Representantes Belga (del 22 del 10 al 24 del 10 de 2008).

2.4.2. Iniciativas privadas

2.4.2.1. Colegio de abogados francófonos y germanófonos de Bélgica (ordre des barreaux francophones et germanophone)

Han preparado en el año 2010 un *Memorando*⁶⁵ en el que exponen sus reivindicaciones, tanto para los abogados como para los propios justiciables. Entre ellas se incluye (pág. 15)

61 www.csj.be/doc/divers/Barometre_Justitie_2007_Def_FR.pdf

62 CSJ, Conseil supérieur de la Justice, formation permanente des magistrats, formation en "schriftelijke communicatie".

63 www.just.fgov.be/fr_htm/ordre_judiciaire/cmoj.html
www.cmro-cmoj.be/FR/welkom.htm

64 www.cmro-cmoj.be/pdf/rapport_2010_FR.pdf

65 www.avocat.be/gallery/documents/communiqués/23-06-2010-o.b.f.g.-memorandum-2010-doc.-final.pdf

una mejora de los actos judiciales en general, y del lenguaje y el estilo de redacción de los mismos en particular.

2.4.2.2. Asociación Sindical de la Magistratura

Tal y como ellos se definen son una asociación de magistrados progresistas fundada en el año 1979 y dedicada a estimular la mejora de la administración de justicia. Ha presentado algunas proposiciones en su documento: “*Dire le droit et être compris*”⁶⁶ dedicado básicamente al lenguaje judicial.

2.4.2.3. Publicaciones de profesores universitarios y juristas

Anne Wagner y Sophie Cacciaguidi-Fahy han publicado el artículo titulado “Legal Language and the Search for Clarity-Le langage juridique et la quête de clarté, Peter Lang, Bruxelles”. Una recensión del mismo puede encontrarse publicada en el International Journal for the Semiotics of Law, Vol. 21, núm. 1, marzo de 2008, o la obra de Sébastien Bissardon, *Guide du Langage Juridique-Les Pièges à Éviter*⁶⁷.

2.5. Portugal

2.5.1. Iniciativas públicas

El Decreto ley 135/99, de 22 de abril, conocida como la Ley de Modernización administrativa, establecía en artículo 16, titulado “Redacción de documentos” que:

“En la redacción de los documentos, especialmente de formularios, oficios, minutas de requerimientos, avisos, convocatorias, certificaciones y declaraciones, en especial en las comunicaciones con los ciudadanos, debe usarse un lenguaje simple, claro, conciso y con sentido, sin siglas, términos técnicos o expresiones reverenciales o intimidatorias.”

En 2007 se creó la “Agência para a Modernização Administrativa”, AMA⁶⁸, una institución pública integrada en la administración indirecta del Estado y dependiente de la “Secretária de Estado da Modernização Administrativa”⁶⁹, dentro del “Ministro da Presidência”.

Su objetivo es poner en práctica todas aquellas iniciativas para la modernización administrativa, impulsando la implicación de administración y ciudadanos.

Uno de los campos de acción de esta Agencia lo constituye la simplificación administrativa y legislativa, materia que se lleva desarrollando en Portugal desde que en 2006 se inaugurara el Programa “Simplex”⁷⁰, cuyo objetivo es “facilitar la vida de los ciudadanos y las empresas en sus relaciones con la Administración y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la eficiencia interna de los servicios públicos”. Para ello, es necesario actuar en dos campos interdependientes: por un lado, fomentar la administración electrónica y, por otro, simplificar las medidas administrativas y legislativas. Inicialmente este proyecto estaba dirigido a la Administración central, pero desde julio de 2008 también se extiende a la Administración local (el llamado “SIMPLEX AUTÁRQUICO”).

Desde mayo de 2010 el Gobierno portugués, como nueva fase del Programa Simplex, ha creado **Simplegeis** (Programa de Simplificação Legislativa), que pretende simplificar la le-

66 www.asm-be.be/fichierpdf/langagejudBoulogne.pdf

67 Publicado en el International Journal for the Semiotics of Law Volume 17, Number 1/marzo de 2004.

68 www.ama.pt/

69 www.gsema.gov.pt/index.php?lang=pt

70 www.simplex.pt

gislación, un mayor y mejor acceso de las personas y de las empresas a las leyes y una mejor aplicación de las leyes⁷¹.

La Direcção-Geral da Política de Justiça⁷² incluye en su página web un proyecto que ha llamado “Leis da Justiça”, que presenta como una colección estructurada y sistemática de todas las normas relacionadas con la Administración de Justicia para simplificar el acceso y el conocimiento de las mismas. Sus destinatarios, además de los profesionales del Derecho, son los propios ciudadanos.

El Instituto Nacional de Administração ha creado un **Diploma de Especialização em Simplificação da Comunicação Legislativa e Regulamentar** (DELEGE), destinado a la formación de personas de los cuadros superiores de la Administración⁷³.

El Gabinete de Documentação e Direito Comparado ha creado un diccionario jurídico electrónico llamado “**Dicionário Jurislingue**”⁷⁴.

2.5.2. Iniciativas privadas

En Portugal se ha constituido una empresa llamada “Português Claro”⁷⁵, cuyo objetivo es simplificar la comunicación de las empresas con sus clientes. Entre el 12 y el 14 de octubre de 2010 se ha celebrado en Portugal la IV Conferencia Internacional de “Clarity”⁷⁶.

2.6. Suecia

Comité Gubernamental de Expertos en lenguaje (The Plain Swedish Group -Klarspråksgruppen-).

Origen: Iniciativa pública del Gobierno sueco de 1993.

Objetivos: revisión de todos los textos oficiales con el fin de garantizar su claridad y accesibilidad para los ciudadanos.

Medidas implementadas: creación de un **Comité de Expertos**, integrado por diez personas, cinco de ellas, expertas en lenguaje, y otras cinco expertas en Derecho, que presta labores de asesoramiento a los diferentes Ministerios y de revisión de los textos legales que van a ser promovidos. El Comité se encuentra ubicado físicamente en el Ministerio de Justicia.

Término: *Clear Legislation*.

2.7. Holanda

2.7.1. Iniciativas públicas

En 1994 se estableció el Programa MDW (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) sobre fuerzas de mercado, desregularización y calidad legislativa. Su primer objetivo fue hacer una legislación más eficaz y reducir las trabas administrativas. Desde finales de

71 www.portugal.gov.pt/GC18/Documentos/PCM/simplegis.pdf
www.portugal.gov.pt/GC18/Governo/Ministerios/PCM/MP/ProgramaseDossiers/Pages/20100510_MP_Prog_Simplegis.aspx

72 www.dgpi.mj.pt/sections/leis-da-justica/apresentacao-do-projeto

73 www.ina.pt/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=227

74 jurislingue.gddc.pt/

75 www.portuguesclaro.pt/

76 www.clarity2010.com/

la década de 1990 estas iniciativas se centraron especialmente en el ámbito empresarial, si bien últimamente también los ciudadanos son los destinatarios del programa.

Dentro de este programa es especialmente importante el “Regulatory Reform Group” que es una comisión dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y de Finanzas. Tiene como principal objetivo reducir los trámites administrativos en el mundo empresarial⁷⁷.

En 2000 se formó ACTAL⁷⁸ (Adviescollege toesting administratieve lasten), una comisión independiente de asesoramiento al gobierno y parlamento holandés sobre la “presión regulatoria”. En sus comienzos su misión se centró en asesorar acerca del impacto de la regulación en los trámites administrativos relacionados con los negocios. En 2004 se acordó su continuidad y al año siguiente se amplió su mandato a las cuestiones relacionadas con los ciudadanos. Desde 2008 se dedica, además, a asesorar a las autoridades locales.

Desde 2009 el gobierno ha puesto a disposición de ciudadanos y empresas una página web experimental⁷⁹ que permite al conjunto de la sociedad civil hacer sus sugerencias sobre normas en formación.

3. PAÍSES ANGLOSAJONES

3.1. Gran Bretaña

3.1.1. Iniciativas públicas: iniciativas de lenguaje claro (plain language)

3.1.1.1. Renton Committee

Instrumento: Informe para el análisis del lenguaje que se emplea en la redacción de las leyes públicas (*Public Bills*) y para la propuesta de medidas que impulsen un lenguaje más claro y sencillo.

Origen: iniciativa pública promovida por el Gobierno y la Cámara de los Comunes en 1973 mediante la creación de una Comisión de expertos, presidida por el miembro de las Cámara de los Comunes, Lord Renton.

Objetivo: revisar las leyes públicas aprobadas por el Parlamento británico y hacer propuestas de mejora en su redacción con el fin de dotar a las mismas de mayor claridad.

Medidas implementadas: elaboración de un informe bajo el título de “*The preparation of legislation: report of a committee appointed by the Lord President of the Council*”.

Una de las principales medidas implementadas al amparo de las recomendaciones del informe ha sido la de incluir en las leyes que son aprobadas por el Parlamento británico notas explicativas (explanatory notes) con el fin de hacer más comprensible el texto normativo a los ciudadanos.

Igualmente, la aprobación de algunas leyes se ha acompañado de la publicación de guías en las que se pretende explicar el contenido de la norma en un lenguaje claro y sencillo (véase, por ejemplo, la Mental Capacity Act 2005).

Conclusiones del informe: en su informe, el Comité destacó que poco o nada podía hacerse para implantar el lenguaje sencillo en el mundo jurídico sin la colaboración de sus actores

⁷⁷ english.ez.nl/english/Subjects/Reducing_the_regulatory_burden.htm

⁷⁸ www.actal.nl

⁷⁹ www.internetconsultatie.nl/

principales: *“we must add that little can be done to improve the quality of legislation unless those concerned in the process are willing to modify some of their most cherished habits”*.

También, el informe señala que el interés de los destinatarios de la norma debe ser prioritario para el legislador: *“In principle the interests of the ultimate users should always have priority over those of the legislators”*. Sin embargo, el mismo Comité también recogía en su resumen que la claridad no puede ir en detrimento de la seguridad o certeza (*certainty*) y, en ocasiones, la claridad que puede obtenerse a través de la redacción de la norma puede ir en detrimento de la certeza acerca de la interpretación que ha de recibir la misma. Ello, además, afecta a la seguridad jurídica y, además, puede suponer un incremento de gastos para que, a través de litigios, los jueces acaben aclarando cuál es el significado de la norma.

Entre las propuestas más novedosas que propuso el Comité figura la de crear una Comisión o similar encargada de revisar, antes de su publicación y entrada en vigor, las leyes aprobadas por el Parlamento a fin de revisar si contienen cláusulas oscuras. Una vez revisada la norma, esta se devolvería al Rey para su promulgación.

3.1.1.2. The Public Administration Select Committee

Instrumento: creación de una Comisión para la revisión del lenguaje empleado por los poderes públicos y elaborar un informe.

Origen: Iniciativa pública promovida por la Cámara de los Comunes dentro del proyecto general de modernización de dicha en el que está trabajando la *Modernization Committee*. Esta Comisión propuso ya en un informe de 1996-1997 que las normas aprobadas por las Cámaras deberían ser fáciles de entender en un inglés sencillo: *“legislation should, so far as possible, be readily understandable and in plain English”*. La iniciativa pública puede consultarse a través de la página web de la Cámara de los Comunes⁸⁰.

Objetivo: revisar las normas y directrices redactadas por la Administración Pública con el fin de analizar la claridad del lenguaje empleado en las mismas y elaborar un informe con el resultado de dicho análisis y recomendaciones.

Medidas implementadas: a finales de 2009, la Comisión presentó su primer informe bajo el título de *“Bad Language: The Use and Abuse of Official Language”*.

Conclusiones del informe: la Comisión parte en su trabajo del principio de que el uso por los poderes públicos de un lenguaje poco claro es un elemento evidente de mala administración: *“We believe that the use of inaccurate, confusing or misleading official language which results in tangible harm, such as preventing individuals from receiving benefits or public services, should be regarded as maladministration. People should be encouraged to complain about cases of bad official language directly to the body concerned, and government needs to take such complaints of maladministration seriously”*. Los políticos y gestores públicos son, en palabras del informe, servidores públicos y como tales les es exigido comunicarse con los ciudadanos en un lenguaje comprensible para estos: *“The language used in politics and government matters because politics is a public activity and the services that government provides are public services. The public nature of government and its activities means that politicians and public servants should be required to communicate with people in a straightforward way, using language that people understand”*.

Por otro lado, el informe apunta, como ya hiciera el anterior informe Renton, que es preciso establecer un equilibrio entre lenguaje claro y sencillo y lenguaje preciso. Por ello, el recurso a notas aclaratorias que apoyen la comprensión de determinados textos, sobre todos, aquellos que por su necesario carácter técnico sean más difíciles de comprender para los ciudadanos,

80 www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmpubadm/17/17.pdf

es un elemento que puede ayudar a aclarar las normas sin perjudicar la necesaria precisión que pueda ser requerida. Sin embargo, la Comisión considera que el Parlamento y en general los poderes públicos deben ir más allá y abordar la tarea de revisar las leyes y normas vigentes con el fin de hacerlas más comprensibles en la línea de la labor que viene realizando en el ámbito de las leyes y normas tributarias.

3.1.1.3. Tax Law Rewrite Project

Instrumento: proyecto público para revisar la legislación tributaria principal.

Origen: Iniciativa pública promovida por el *Her Majesty's Revenue and Customs*. Esta institución se configura como un departamento no ministerial del Poder Ejecutivo del Reino Unido que tiene encomendada la labor de la recaudación de tributos y el sustento económico de determinados gastos públicos. Su naturaleza es similar a la de nuestra Agencia Tributaria. Puede accederse a esta iniciativa a través de la página web de la institución, en www.hmrc.gov.uk/rewrite.

Objetivo: revisar las principales normas tributarias con el fin de, sin cambiar su contenido, hacerlas más claras y accesibles a los ciudadanos.

Medidas implementadas: hasta la fecha se han revisado y redactado en lenguaje sencillo ocho leyes principales. En la página web se recoge toda la información sobre el desarrollo del proyecto, incluyéndose periódicamente las nuevas revisiones. Además, se incorporan también a la página todos los documentos elaborados al amparo de dicha labor de revisión.

3.1.1.4. National Consumer Council

Instrumento: guías para la promoción del lenguaje sencillo en los contratos de consumo.

Origen: iniciativa público-privada promovida por el *National Consumer Council* (similar a nuestras asociaciones de consumidores y usuarios) en 1984.

3.1.1.5. Civil Service

En las diferentes guías de trabajo que tiene editadas la Función Pública británica⁸¹ (*Civil Service*) se recoge diferentes menciones a la exigencia del inglés sencillo tanto en los documentos dirigidos al público como en los documentos de uso interno de la Administración (*printed information and letters should be in plain English with unavoidable jargon explained simply and clearly*).

3.1.1.6. Her Majesty's Courts Service

*Her Majesty's Court Service*⁸² constituye una agencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia encargada de la administración y gestión de los Tribunales de Justicia. En su página web se incluye un apartado de información a modo de ayuda para las personas que han de acudir o actuar ante los Tribunales. Así, existe un glosario de términos a través de los cuales se llega a las diversas guías que tratan de explicar de manera sencilla los diferentes requisitos y normas legales. Por ejemplo, en la guía sobre actuación como testigo ante un Tribunal se recogen las diferentes cuestiones que pueden preocupar a un ciudadano que en determinado momento ha de ocupar dicha posición a través de la fórmula de preguntas frecuentes y respuestas. Las guías son, en general, bastante claras aunque resultan menos

81 www.civilservice.gov.uk

82 www.hmcourts-service.gov.uk

dinámicas que las que se emplean en otros países, como los Estados Unidos de América y, en concreto, la Corte de Nueva York.

3.1.2. Iniciativas privadas

3.1.2.1. Simplification Centre

Instrumento: creación de un centro de investigación multidisciplinar (integrado por filólogos, psicólogos, sociólogos, economistas y juristas) de carácter universitario para la promoción de un lenguaje sencillo.

Origen: Iniciativa privada promovida dentro de la Universidad de Reading⁸³. Objetivos: pretende introducir técnicas de lenguaje sencillo a través de fórmulas más globales que no sólo atienden al mero análisis de los textos, sino también al análisis de cuáles son los canales de comunicación y las preferencias de los usuarios. Propone la elaboración de diagramas de estructura acerca del contenido de la comunicación, promoviendo lecturas estratégicas. A este respecto, fundamenta su proyecto en el recurso a la tecnología en el empeño de lograr un lenguaje más claro, pero sin olvidar la necesidad de precisión.

Dentro de estos objetivos, promueven tanto la revisión de documentos de instituciones como el desarrollo de cursos de entrenamiento en el manejo de dichas herramientas.

Término: *simplification*.

3.1.2.2. Plain English Campaign

Instrumento: premios, congresos internacionales, protestas públicas y, en general, promoción ciudadana de la sencillez en el lenguaje empleado tanto por los poderes públicos como por sectores privados con especial atención al ámbito de los Tribunales de Justicia. También, publicación de guías con consejos sobre lenguaje sencillo.

Origen: Iniciativa privada (*Plain English Campaign*⁸⁴) promovida a título personal por Chrissie Maher en 1971 frente al Ayuntamiento de Liverpool (se fundó un periódico en lenguaje sencillo y una Fundación) y, posteriormente, a nivel nacional para exigir a las Administraciones Públicas el uso de un lenguaje sencillo.

Objetivos: A principios de los años ochenta, y como consecuencia de la importancia que tomó a nivel nacional dicho movimiento, la Administración Pública británica inició la revisión de los diferentes modelos y formas de comunicación con los ciudadanos, revisándose más de 171.000. En 1982, el movimiento promovió la sencillez del lenguaje jurídico (había venido colaborando también en el sector financiero y asegurador) y se propusieron diferentes medidas para aclarar el lenguaje que se utilizaba en el contratos de consumidores (*Small Print*). Curiosamente, han sido los abogados los que se mostraron desde un principio más recelosos de este movimiento al considerar que podía minusvalorar su profesión, al introducir un lenguaje poco técnico. Boleszczuk, citando a Tiersma, señala que ello obedece tanto a razones personales como económicas. Así, por un lado, los juristas se han sentido más confortables y seguros empleando sus fórmulas rituales y, por el otro, consiguen que los ciudadanos sean más dependientes de sus servicios (BOLESZCZUK, E., *Comparative analysis of legalese and plain English. A case study of wills*, tesis doctoral, Universidad de Gdansk, 2009, p. 10).

El movimiento tiene también instaurados una serie de premios al lenguaje sencillo y ha desarrollado cursos para el desarrollo de habilidades relacionadas con el lenguaje sencillo a partir

83 www.reading.ac.uk

84 www.plainenglish.co.uk

de 1988. También han celebrado diferentes congresos internacionales, siendo el primero el de Cambridge en junio de 1990.

En noviembre de 1996, el Gobierno británico inició un plan de revisión de las normas fiscales que dio lugar a la aprobación por el Parlamento de la *Capital Allowances Act 2001*.

Igualmente, en 1999 se inició un proyecto estatal de revisión de la jurisdicción civil, entre cuyos fines principales (reducir las dilaciones, el coste de los procesos y su complejidad) se incluía el de hacer más accesible el lenguaje en los Tribunales, eliminando latinismos y expresiones legales antiguas. Este proyecto se inspiró en el Informe elaborado por Lord Woolf in 1996 "Access to Justice".

Medidas implementadas: la organización ha elaborado diferentes guías de lenguaje sencillo a las que se puede acceder gratuitamente a través de su página web. Así, se recogen tanto guías generales con recomendaciones de lenguaje sencillo (por ejemplo, se recoge una guía para la elaboración de páginas web en lenguaje sencillo) como guías sectoriales, entre las que podemos destacar la Guía *A to Z of legal phrases*. Igualmente, ha publicado algunos documentos con el mismo fin, entre los que puede destacarse igualmente el manual *Language on Trial*, que pretende formar a los abogados en el empleo de un lenguaje sencillo ante la Corte y sus clientes.

También ha creado un *sello de calidad* que tendría como función acreditar que un determinado documento se ajusta a las exigencias del inglés claro, *Crystal Mark*. El sello está ampliamente implantado tanto en el sector público como privado. Así, prácticamente todos los Ministerios y agencias dependientes del Gobierno británico cuentan con dicho sello, al igual que las grandes corporaciones y empresas del Reino Unido.

3.1.2.3. Clearest

Origen: Iniciativa privada (*Clearest*⁸⁵) promovida por Martin Cutts, autor de diversas obras sobre lenguaje sencillo (véase, *The Oxford Guide to Plain English*, Oxford University Press).

Objetivos: entre sus actividades se encuentra la acreditación de documentos oficiales de instituciones, tanto públicas como privadas, mediante el sello *English Clear Standard* y de páginas web mediante el sello *Winning Website* y la impartición de cursos tanto presenciales como por medios telemáticos para el desarrollo de habilidades en el ámbito del inglés claro.

Dato de interés: la relación entre esta organización y la anterior, *Plain English*, no parece ser buena, ya que *Clearest* denunció en 2007 que los premios que anualmente concede *Plain English Campaign* al mejor proyecto de inglés claro recaían habitualmente en empresas o instituciones que eran clientes o colaboradores de aquella.

3.1.2.4. Statute Law society⁸⁶

Origen: entidad benéfica creada en 1968. Su Consejo es presidido por uno de los miembros del reciente creado Tribunal Supremo del Reino Unido, Lord Rodger of Earlsferry. La entidad tiene como fin el intercambio de conocimientos sobre las normas y publicaciones legales de interés que se van produciendo, organizando diferentes foros y encuentros sobre novedades jurídicas. Sin embargo, también ha participado activamente en el impulso de las políticas de claridad en el lenguaje legal. A este respecto, se le reconoce como uno de los promotores de la creación de la Comisión Renton a la que antes nos hemos referido.

85 www.clearest.co.uk

86 www.statutelawsociety.org

3.2. Canadá

3.2.1. Iniciativas públicas

3.2.1.1. Gubernamentales

En el año 1971 el gobierno de Canadá instituyó la “Comisión para la Reforma de la Ley”. Dicha Comisión tenía la responsabilidad de revisar todas las leyes federales existentes y publicar recomendaciones para su mejora. En 1976, la Conferencia de Lenguaje Uniforme, elaboró las Convenciones para Escritura Legislativa que incorporaba principios de lenguaje sencillo y claro. Estas Convenciones tenían como objetivo modernizar y estandarizar los estilos de escritura y redacción en todo documento normativo.

El caso del gobierno canadiense resulta ser un caso exitoso ya que ese país cuenta con gran experiencia para reescribir legislación con alto contenido técnico. De hecho el Ministerio de Justicia, no sólo utilizó un lenguaje sencillo y claro, sino que, además, se preocupó por realizar consultas a los usuarios y en muchos casos realizó pruebas piloto sobre el uso de la nueva legislación.

Existe un esfuerzo gubernamental permanente a través del Comité Intersecretarial de Plain Language y la Secretaría Nacional de Alfabetización para adoptar el uso de las técnicas del lenguaje sencillo y claro.

Desde hace cinco años se ha producido una avalancha por el interés de la forma y redacción escrita de los documentos legales.

Se ha establecido por parte del Canadian Law Information Council el Plain Language Centre en Toronto con el objeto de publicar y difundir una colección de artículos, libros y manuales sobre el estilo jurídico y el lenguaje ciudadano.

De esta manera el Drafting Conventions for the Uniform Law Conference of Canada⁸⁷ recomienda la escritura simple, clara y precisa en lenguaje ordinario:

“An Act should be written simply, clearly and concisely, with the required degree of precision, and as much as possible in ordinary language.”

El **Plain Language Institute** se creó con una suma de tres millones de dólares y tuvo su sede en la Universidad British Columbia con la idea de analizar y revisar el lenguaje que se usa en los documentos legales. Se llamó: **The Canadian Legal Information Centre** (se disolvió en 1993, tras dejar una importante huella de literatura y producciones escritas).

Siguiendo sus pasos se creó el **The Plain Language Coalition** que ha continuado trabajando en grupos sobre el tema de la claridad del lenguaje jurídico.

El **Gobierno Saskatchewan** ha iniciado un programa basado en parte en el éxito del Programa homólogo de Reino Unido como servicio público para dar cobertura a la inteligibilidad del lenguaje jurídico entre sus usuarios, es decir, entre el Gobierno y el público.

La organización: **Alberta’s Consumer and Corporate Affairs** ha sugerido recientemente diferentes iniciativas para el uso del lenguaje sencillo en los contratos de sus usuarios.

El **Canadian Institute for the Administration of Justice** organiza por segundo año consecutivo una serie de seminarios que recogen la sugerencias de expertos juristas y de público

87 www.ulcc.ca

interesado en el *Plain Language* de cara a favorecer la correcta y clara escritura de documentos; se llevan a cabo no sólo en universidades sino también en organismos locales y municipales auspiciados por ayuntamientos.

En este sentido se destaca la labor del **Alberta Law Reform Institute**.

El **Department of Justice Canada Legal Counsel, Civil Code Section**, ha favorecido la publicación por parte de Louise Maguire Wellington del libro "*Bijuralism in Canada: harmonization methodology and terminology*".

El **Ministerio de Justicia**⁸⁸ ha establecido una regulación destinada a implantar y fijar los pasos básicos para un lenguaje jurídico basado en la claridad de la terminología jurídica.

El **Tribunal de Apelaciones** ha fomentado además del Plain language, la publicación de una serie de manuales de autoayuda para el público que tenga que acudir a los tribunales y pueda así conocer el proceso judicial; de forma que las apelaciones sean más sencillas justas y efectivas (Chief Justice: Warren K. Winkler, September 9, 2008).

En **Nueva Escocia, la Court Services Division of the Department of Justice**⁸⁹, publicó en 2004 el *Glosario de términos jurídicos empleados en las leyes de familia de Nova Scotia*.

El **Tribunal Supremo de New Brunswick**⁹⁰ tiene un glosario de términos jurídicos en su página web dentro de la política de *Plain legal language*.

Todas estas cuestiones tienen en Canadá una repercusión también en las sentencias judiciales, como señala el informe anual del **Tribunal Supremo de British Columbia**⁹¹ del año 2004 (p. 26).

El **Alberta Law Reform Institute** ha realizado un informe (19 de septiembre de 2002) sobre las consultas públicas que llevó a cabo para la reforma de las reglas del Tribunal Supremo. La mayoría de consultados coinciden en que el uso de un lenguaje claro ayudaría y beneficiaría la comprensión y los procedimientos judiciales.

3.2.1.2. Universidades

En la **British Columbia University**, el *Plain Language Committee of the Law Practice Management Section* apoya y fomenta el trabajo y la promoción del lenguaje sencillo y claro en las leyes.

En la misma Universidad existe un curso en el que se preparan casos para su presentación con lenguaje claro y sencillo: Advanced Legal Research Law.

En la **Universidad de Alberta**⁹²: existe el **Centre for Constitutional Studies** que en su informe de 2009-2010 dirigido por Eugene Oscapella, destaca la necesidad de revisar las recomendaciones que se hacen al uso del *Plain Language* por parte de los estudiantes y profesores de derecho. Se aconseja que lo tengan en cuenta en lo que se refiere a la redacción de documentos. Dicho informe incluye artículos de muy variada índole relativos a la complejidad del lenguaje jurídico.

88 www.justice.gc.ca

89 www.courts.ns.ca/self_rep/fc_terms&defs.pdf

90 www.gnb.ca/Cour/glossary-e.asp

91 www.courts.gov.bc.ca/supreme_court/about_the_supreme_court/annual_reports/Annual_Report_2004.pdf

92 www.law.ualberta.ca/centres/ccs/

En la **Universidad de Saskatchewan** en la titulación de Derecho, se estudian en sus aulas casos prácticos de sentencias de tribunales canadienses donde se alude a la importancia de un lenguaje jurídico sencillo (*Plain legal language*) al alcance de los implicados, especialmente en casos donde los implicados pertenecen a diferentes etnias y lenguas, caso muy habitual en Canadá⁹³.

3.3. Australia

3.3.1. Iniciativas públicas

3.3.1.1. Gobierno de Australia (Office of Parliamentary Counsel)

Instrumento: Plan del Gobierno australiano para promover el uso del lenguaje sencillo en la Administración Pública.

Origen: iniciativa pública promovida por el Gobierno Australiano en 1990 mediante la aprobación del *Green Paper, The language of Australia*.

Objetivo: introducir el inglés sencillo en la actividad de la Administración.

Medidas implementadas: se ha llevado a cabo en los años noventa una revisión de las leyes tributarias y mercantiles para adaptarlas a un lenguaje sencillo. Por otro lado, en la página web del *Office of Parliamentary Counsel* se recoge un apartado específico sobre *Plain Language*. En dicho apartado se incluyen dos subapartados, uno referido a páginas web relacionadas con el lenguaje sencillo, y otro de documentos. En este se recogen, entre otros, y por lo que ahora interesa, un Manual de estilo (*Plain English Manual*). También, se recoge en dicho subapartado una encuesta realizada recientemente y publicada en septiembre de 2010 en la que se muestran los resultados de la consulta hecha a los diferentes actores que intervienen en el mundo jurídico (jueces, abogados, fiscales y funcionarios públicos) acerca de su nivel de satisfacción con las últimas novedades incorporadas a la redacción de las normas legales al amparo del Plan Plain English. De los resultados de dicha encuesta podemos destacar que, en general, el nivel de satisfacción con los cambios introducidos han sido bien recibidos por todos estos actores (puede accederse a tales resultados a través de la página web www.opc.gov.au/plain/docs.htm). Así, se valora positivamente novedades tales como acompañar las normas de notas explicativas, el empleo de tablas, la subdivisión en secciones o la inclusión de la explicación de los conceptos que incorporan las normas. Como puntos de insatisfacción se recoge, sobre todo, entre jueces y abogados, el uso frecuente de la segunda persona del singular, el empleo de asteriscos o de diagramas, o el uso excesivo de notas que puede afectar a la fluidez del texto.

Término: *Plain language*. Se ha optado por este término en lugar de *Plain English* porque se considera que aquél alcanza un abanico más amplio de técnicas y prácticas.

3.3.1.2. Federal Court of Australia

En la página web del Tribunal Federal de Australia⁹⁴ se recogen apartados de información a modo de ayuda para las personas que han de acudir o actuar ante los Tribunales. Así, existe un glosario de términos a través de los cuales se llega a las diversas guías que tratan de explicar de manera sencilla los diferentes requisitos y normas legales. Por ejemplo, en la guía sobre actuación como testigo ante un Tribunal se recogen cuestiones que pueden preocupar a un ciudadano que en determinado momento ha de ocupar dicha posición a través de la

93 library2.usask.ca/native/cnlc/vol07/236.html, library2.usask.ca/native/cnlc/vol06/199.html, library2.usask.ca/native/cnlc/vol06/273.html.

94 www.fedcourt.gov.au

fórmula de preguntas frecuentes y respuestas. Incluso, se incluyen resúmenes de dichas guías en formato tríptico en pdf. También, recoge un glosario de términos legales y una visita virtual a una Sala del Tribunal.

3.3.2. Iniciativas privadas

3.3.2.1. Law and Justice Foundation

Origen: Iniciativa privada promovida por la Fundación Derecho y Justicia⁹⁵. Dicha institución es una entidad independiente que promueve, con carácter general, la mejora en el acceso a la Justicia de los grupos social y económicamente más desfavorecidos. Entre los objetivos principales de la Fundación destaca la promoción del inglés sencillo para hacer más comprensible la información legal (*promoting the use of Plain English to produce understandable legal information*).

Medidas implementadas: la Fundación ha elaborado diferentes guías relacionadas con el uso del inglés sencillo en diferentes ámbitos y principalmente en el mundo jurídico. Dichas guías abarcan desde la redacción de documentos hasta la elaboración de páginas web en lenguaje sencillo, incluyendo diferentes consejos prácticos al respecto. También recoge un apartado muy completo en la página web de enlaces a otras páginas y documentos relacionados con el inglés sencillo en el ámbito legal.

3.3.3. Iniciativas mixtas

3.3.3.1. University of Technology Sidney⁹⁶

Instrumento: Plan para la implantación del inglés sencillo en la Universidad, tanto en los programas de los diferentes estudios que se imparten en la Universidad como en los documentos y comunicaciones internas y externas.

Origen: Iniciativa privada promovida por la Universidad en noviembre de 1991 al amparo del Plan iniciado por el Gobierno de Australia para promover el inglés sencillo en todos los ámbitos de los poderes públicos (*Green Paper, The language of Australia*).

Objetivo: introducir el inglés sencillo como asignatura en los diferentes estudios que se imparten en la Universidad y también en los diferentes documentos que emplea la Universidad para su comunicación interna y externa. Se estableció como fecha para la culminación del proyecto 1993.

Medidas implementadas: Revisado el programa de asignaturas de la carrera de Derecho se recogen algunas asignaturas en cuyo contenido puede figurar el inglés sencillo (véase, habilidades profesionales). Sin embargo, no hay ninguna asignatura específica en dicho Grado de lenguaje jurídico o similar.

3.4. EE.UU.

Se recogen dos modalidades de iniciativas, las relacionadas con el objetivo de procurar la claridad y sencillez del lenguaje en las normas y actos de los poderes públicos (1) y las relacionadas con el objetivo de facilitar el acceso y actuación de los ciudadanos ante los Tribunales de Justicia (2).

95 www.lawfoundation.net.au

96 www.uts.edu.au

3.4.1. Iniciativas de lenguaje claro (*plain english*)

3.4.1.1. Iniciativa presidencial de modernización del lenguaje de la administración pública

Instrumento: Memorándum aprobado por la Presidencia de los Estados Unidos de América (Presidente Clinton) el 1 de junio de 1998, dando instrucciones a los responsables de los diferentes Departamentos y Agencias de la Administración Pública federal.

Origen: Iniciativa pública (Presidencia). Sin embargo, el precedente del Memorándum se encuentra en una iniciativa de varios empleados públicos de Departamentos y Agencias de la Administración Federal, denominada *Plain Language Action and Information Network (PLAIN)*⁹⁷, con el fin de promover a principios de los años noventa una página web, como instrumento para facilitar la implementación del lenguaje claro en el quehacer diario de los empleados públicos.

Objetivos: hacer comprensible a los ciudadanos el lenguaje que emplea la Administración Pública dentro de un plan general de transparencia de los poderes públicos federales.

El Memorándum propone como propuestas para hacer accesible el lenguaje de la Administración lo siguiente:

- Utilización de términos comunes, salvo que sea necesario emplear un término técnico;
- Utilización del *tu* y otros pronombres;
- Emplear la voz activa; y
- Frasas cortas.

Se establecen tres fases para la implementación de las propuestas que se recogen en el Memorándum:

- El 1 de octubre de 1998, se usará el lenguaje claro en todos los nuevos documentos que no sean normas, y que versen sobre cómo obtener una prestación o un servicio o cómo cumplimentar una solicitud.
- El 1 de enero de 2002, todos los documentos de la misma naturaleza que los descritos en el párrafo anterior y que sean anteriores a 1 de octubre de 1998, deberán estar redactados en lenguaje claro.
- Por otra parte, desde el 1 de enero de 1999, se empleará el lenguaje claro en todas las normas que se publiquen en el Boletín Federal (Federal Register). Se propone también redactar nuevamente en lenguaje claro todas las normas anteriores a dicha fecha, pero ello queda sometido a que el Departamento o Agencia cuente con los medios y recursos suficientes para llevarlo a cabo.
- Al amparo del Memorándum, muchas normas que ya habían sido publicadas en el Boletín Federal con anterioridad se han visto sujetas a modificaciones (enmiendas) para incorporar un lenguaje claro.
- Además, también al amparo del Memorándum, diversas normas que se publican en el Boletín Federal recogen una dirección tanto de correo postal como electrónico a las que los ciudadanos pueden remitir sus comentarios acerca de la claridad del lenguaje empleado en la misma.

97 www.plainlanguage.gov

3.4.1.2. Otras iniciativas

El **Colegio de Abogados del Estado de Michigan**⁹⁸ creó hace años un Subcomité de Lenguaje Claro que se encarga de la publicación de artículos en la Revista del Colegio sobre lenguaje claro en el ámbito legal. Igualmente, se convoca un premio anual (Clarity Award) al mejor lenguaje legal claro.

Se han publicado en los últimos años diferentes libros promoviendo el *Plain English* en el ámbito jurídico. Entre estos, podríamos destacar: WYDICK, R.C., *Plain English for Lawyers*, Carolina Academic Press, Durham, 2005; y GARNER, B.A., *Legal writing in plain English. A text with exercises*, University of Chicago Press, Chicago, 2001.

Iniciativas para facilitar el acceso a la Justicia en la **ciudad de Nueva York**: página web para facilitar el acceso e intervención de los ciudadanos ante los tribunales.

Origen: Iniciativa pública (Tribunal de Justicia de Nueva York⁹⁹) y privada (Colegio de Abogados del Condado de Nueva York) de 1999. Objetivos: hacer comprensible el acceso de los ciudadanos a los Tribunales de Justicia y las actuaciones ante los mismos a través de una página web redactada en diferentes lenguas (inglés, español, francés, ruso, coreano y chino).

Medidas implementadas: se ha creado un acceso (*court help*) en la propia página web del Tribunal en el que se incluyen diferentes contenidos:

- Guías explicando cómo funciona el Tribunal y los procesos que se celebran ante el mismo en un lenguaje sencillo.
- Formularios de escritos sencillos respecto de los procesos en los que no es legalmente necesaria la intervención de abogado (Manual del Tribunal de reclamos menores).
- Vídeos explicativos del funcionamiento del Tribunal.
- Glosario de términos legales con una explicación sencilla de su significado.
- Listas de preguntas frecuentes con sus contestaciones.
- Por último, como dato singular, en la página se incluye un apartado para niños en que se recoge un cuaderno en pdf (*coloring book*) con diferentes imágenes de la Corte al objeto de que pueda ser coloreado por los niños que tienen que acudir a un Tribunal, como instrumento de familiarización de los niños con la Corte.

Medidas implementadas: se ha creado un acceso (*court help*) en la propia página web del Tribunal en el que se incluyen diferentes contenidos.

Hay iniciativas similares en los Tribunales de Otros Estados y ciudades (véase, California, Wisconsin), aunque en la búsqueda realizada, la más completa y sugerente, por los recursos que incorpora, es la de Nueva York.

4. PAÍSES LATINOAMERICANOS

4.1. Argentina

4.1.1. Iniciativas públicas

Mediante la Ley 24.967, sancionada el 20 de mayo y promulgada el 18 de junio de 1998¹⁰⁰, se aprobaron los principios y el procedimiento para contar con un régimen de consolidación

98 www.michbar.org

99 www.nycorts.gov/courthelp

100 www.puntoprofesional.com/P/0650/LEY24967.HTM

de las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación, proyecto más conocido con el nombre de “**Digesto Jurídico Argentino**”.

Para realizar esta obra se hizo una licitación pública que ganaron las siguientes editoriales jurídicas: La Ley, Jurisprudencia Argentina y El Derecho.

El “Digesto Jurídico Argentino”, proyecto en el que participaron más de 200 juristas, se dividió en dos partes en agosto de 1999:

- La formación de un Manual de Técnica Legislativa y
- La revisión de los textos normativos dictados desde 1853.

En 2001 se publicó el **Manual de Técnica legislativa**¹⁰¹.

En 2005 se creó **INFOLEG**¹⁰², dependiente del Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El 1 de marzo de 2005 el entonces Presidente Néstor Kirchner comunicó en el Parlamento que el Digesto estaría terminado en ese mismo año, como así fue, siendo entregado a Alberto Iribarne, Ministro de Justicia de la Nación. Desde entonces el proyecto espera ser sancionado.

En la actualidad se está conformando la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación para la Confección del Digesto Jurídico Argentino¹⁰³.

Varias provincias han sancionado su propio Digesto Jurídico: Misiones en 2008¹⁰⁴, Chubut en 2009¹⁰⁵, Entre Ríos en 2010, Río Negro en 2009¹⁰⁶, Neuquén¹⁰⁷ y Tucumán¹⁰⁸.

En varios sitios de internet¹⁰⁹ aparece dentro del Programa de asistencia técnica para el fortalecimiento del sistema nacional de inversión pública (FOSIP) -dependiente del Ministerio de Economía y financiado por el Banco Mundial- un proyecto que existió a mediados de la década de 2000 llamado “Comunicación en Lenguaje Claro” con el objetivo de mejorar primero las comunicaciones intergubernamentales y, después, entre ciudadanos y administración. Incluso, en 2005 se celebró un seminario titulado “Hacia un lenguaje claro en las comunicaciones escritas del gobierno”.

4.1.2. *Iniciativas privadas*

En la Universidad del Museo Social Argentino se ha incluido un Taller de Lenguaje Jurídico en el Primer Curso de Derecho¹¹⁰.

101 exwww.dsp.unipi.it/didattica/Digesto/manual.html
infoleg.mecon.gov.ar/basehome/manualdetecnicalegislativa.html

102 infoleg.mecon.gov.ar/

103 www.diariojudicial.com/contenidos/2009/12/02/noticia_0004.html

104 www.diputadosmisiones.gov.ar/digesto/

105 www.legischubut.gov.ar/digesto/

106 www.legismn.gov.ar/DIGESCON/condigstan.php

107 www.neuquen.gov.ar/dijun/

108 hit.gov.telematicaisp.com.ar/digest_main.html

109 La página más fiable de las encontradas es: innova.fox.presidencia.gob.mx/funcionarios/biblioteca/index.php?contenido=873&pagina=18&26&imprimir=true

110 www.umsa.edu.ar/Carreras-de-Grado/Cs-Juridicas/Abogacia/Plan-de-Estudios.aspx

Los abogadas Diana Bichachi y Nora Chaponik han creado una página web llamada “Legislar bien”¹¹¹.

El abogado Pablo Gordillo Arriagada ha creado un blog llamado “Técnica legislativa e información jurídica”¹¹².

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires organiza un Maestría en Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas¹¹³.

4.2. Chile

4.2.1. Programa Ley Fácil

Instrumento: **Programa Ley Fácil, de 2004.**

Origen: Iniciativa pública de la Biblioteca del Congreso Nacional (institución que, entre otras funciones, actúa como Archivo del Parlamento Chileno, realizando, además, labores de apoyo y asesoramiento a los miembros del Parlamento. La iniciativa surge, en cierto modo, de un estudio llevado a cabo en 2002 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sobre Análisis de las Políticas Públicas en materia de difusión del Derecho y contribuciones al Conocimiento del Derecho por los Ciudadanos.

Objetivos:

- Sensibilizar a los empleados y poderes públicos acerca de la importancia del lenguaje en la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos;
- Capacitar a los funcionarios públicos que escriben y diseñan las normas, resoluciones y actos administrativos en el manejo del lenguaje claro;
- Reescribir normas y resoluciones en lenguaje claro, atendiendo al mayor interés de los ciudadanos; y,
- Todo ello, sin eliminar el lenguaje técnico jurídico cuando sea preciso.

Medidas implementadas: acceso en la página web de la Biblioteca a una relación de las materias incluidas en las Leyes aprobadas por el Congreso Nacional, con una explicación sencilla de su significado (preguntas frecuentes que aclaran, en un lenguaje sencillo, los principales contenidos de diversas leyes).

En la actualidad, existen más de cien leyes incluidas ya en la relación de materias de ley fácil. La misma página web incorpora también dramatizaciones de las materias reguladas por las leyes en formato audio (*podcast*). Los audios recrean una situación de la vida diaria donde se explica la aplicación de alguna ley en no más de dos minutos y treinta segundos.

Los documentos y audios están elaborados tanto en español como en la lengua mapuche (mapudungún).

Términos empleados para definir la política de Lenguaje Claro: lenguaje ciudadano y ley fácil.

111 www.legislarbien.com.ar/

112 www.tecnicalegislativa.blogspot.com/

113 www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_tpen_juridicas.php

4.2.2. Programa Derecho

Origen: iniciativa pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Objetivos: acercar el Derecho al ciudadano, para que pueda conocer las normas básicas relativas a aquellas materias que le son de interés, de manera que cuente con las herramientas necesarias para desenvolverse en la sociedad.

Medidas implementadas: página web para los empleados públicos¹¹⁴ que realizan labores de información a los ciudadanos, a fin de facilitarles herramientas sencillas para que puedan cumplir con mayor claridad su función (formularios, folletos informativos).

4.3. México

Iniciativa gubernamental (“Agenda de Buen Gobierno”), desde 2004. Parte de la política de “Mejora Regulatoria”. Objetivos: cambio cultural emprendido por los servicios públicos con la finalidad de aproximar al Gobierno a los ciudadanos, y así mejorar la calidad del servicio.

La tarea básica en México la desempeña la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental en la Administración Pública Federal. En otros países se opta por “lenguaje sencillo/plano, etc. En México se ha tendido a emplear la denominación de “lenguaje ciudadano¹¹⁵”. En el conjunto de países de Latinoamérica, México es pionero en esta iniciativa.

4.3.1. Iniciativas públicas

Desde la Secretaría de la Función Pública se ha elaborado un “Manual para el lenguaje claro”, elaborado por personal de la Dirección General de Simplificación Regulatoria, del que ya se han hecho varias ediciones. El Gobierno de Felipe Calderón ha puesto en marcha el Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012, para que la información pública del Gobierno sea cada vez más clara.

Iniciativa semipública es la conocida como **Red de Lenguaje Claro**, instituida en 2005, con académicos y profesionales del mundo de la comunicación, empresarios, funcionarios, etc. Esta institución es civil, ajena a partidos políticos, y entre sus varias acciones concede premios a aquellos que fomentan el lenguaje claro. En 2006, 94 instituciones se dedicaron a reelaborar documentos de importancia de acuerdo con las consignas del lenguaje ciudadano y así hacerlos accesibles al ciudadano.

México forma parte de la Asociación Internacional “Clarity” sobre el lenguaje claro. En la **Escuela Judicial de México**, dependiente del Gobierno del Estado, se estudia como materia obligatoria la “Terminología Jurídica”, basada en la práctica del lenguaje jurídico y judicial.

La Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de leyes, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Poder Judicial de la Nación) recomienda el libro *Lexicología jurídica*¹¹⁶ en su Boletín de Novedades Bibliohemerográficas.

En la web: de la presidencia de México¹¹⁷, se destacan 10 puntos propuestos por el Presidente para transformar a México “a fondo”. El nº 8 (Reforma regulatoria de Acuerdos y Reglamentos) Se destaca el esfuerzo del gobierno por facilitar la vida de los ciudadanos sim-

114 www.infoderecho.cl

115 www.lenguajeciudadano.gob.mx

116 Muñoz Rocha, 2008, editado por Oxford University Press.

117 www.presidencia.gob.mx

plificando todos los trámites (se accede en la página escrita en enlace “Logros del Gobierno federal-categoría: Buen Gobierno”).

Además, el Gobierno Federal (igual página web) ha puesto en práctica una serie de PROGRAMAS de todo tipo: en el denominado “Gobernabilidad y Política”, ha creado un centro de “Contacto ciudadano”, que es un área habilitada para facilitar y asesorar al ciudadano los trámites legales, entre otros. El mismo Gobierno Federal ha creado un “Portal ciudadano” para que todo aquel que tenga internet, pueda recibir y dar información sobre servidores públicos, ciudadanos, etc., para todo tipo de temas (a nivel federal, estatal y municipal). Aunque tangencialmente relacionado con el tema del lenguaje claro, se ha creado lo que se llama “Estrategia del usuario simulado”, una herramienta que permite captar permanentemente información sobre la calidad y transparencia de los servicios públicos, aunque sobre todo se ha encaminado a combatir la corrupción del empleado público.

4.3.2. Iniciativas privadas

La Universidad Autónoma de México imparte de forma obligatoria una disciplina llamada “Lexicología jurídica”. Es de carácter obligatorio, y consta del estudio del propio lenguaje, locuciones latinas y su impacto en los medios de comunicación. Dentro de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas cuenta con una serie de investigadores y colaboradores centrados en la accesibilidad del lenguaje al ciudadano. Ej: D. Jose Manuel Lastra, Issa Luna Plana, Miguel Carbonell, investigadores del centro, o el abogado Diego Valadés, que fue Director y es miembro de la Academia mexicana de la Lengua. Este mismo, pronunció un discurso al ingresar en la Academia Mexicana de la Lengua en 2005 referido a “La lengua del derecho y el derecho de la lengua”, relacionado directamente con este tema.

Otras muchas Universidades, públicas y privadas, también imparten en su programa de estudios esta materia, como la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Valle de Puebla, y así, más de una veintena.

En el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), profesores como Luis Raigosa han publicado libros¹¹⁸ y artículos en revistas de ámbito internacional como Clarity¹¹⁹.

La Consultora “Deloitte” ha elaborado un informe, “Justicia pronta y expedita en México”, para agilizar conflictos y en el que se alude a que el lenguaje jurídico es inadecuado.

4.4. Brasil

4.4.1. Iniciativas públicas

Grupos de trabajo: Derecho y Sociedad vinculado a la Asociación Nacional de Posgrados e Investigación en Ciencias Sociales (ANPOCS) desde 1979 hasta 1989. Objetivo: análisis del paradigma legal y su consecuencia social.

Asociación de Jueces para la Democracia: Sao Paulo, 1991. Objetivo: difusión de la cultura jurídica democrática con revistas como: *Juizes para a Democracia* y *Justicia & Democracia*.

4.4.2. Iniciativas privadas

Instituto de Derecho Alternativo (IDA), 1991. Objetivo: organizar y divulgar congresos y conferencias sobre prácticas jurídicas alternativas.

118 México 2008, edición a cargo del Senado de la República.

119 n° 61, Mayo 2009.

Grupo de Magistrados Gauchos: unidos al sector cultural de la Asociación de Jueces de Río Grande del Sur (Ajuris/RS). Objetivo: organizar debates y conferencias sobre la idea de un “nuevo” derecho.

Organizaciones populares, ONG y asesorías universitarias:

- Instituto de Apoyo jurídico Popular (AJUP-Río de Janeiro).
- Núcleo de Estudios para la Paz y los Derechos Humanos (NEP) con la organización del curso: “O direito achado na rua” (“El derecho de la calle).
- Gabinete de Asesoría Jurídica a las Organizaciones Populares (GAJOP).
- Servicio de Asesoría Jurídica Universitaria de la UFRGS (SAJU-Porto Alegre/RS).

Todos estos grupos y otros de carácter menor tienen como fin común el difundir un derecho más “humano” y “social”, es decir, el alejarlo de los tecnicismos y favorecer su claridad en orden a solventar la oscuridad terminológica que empaña el contenido de las leyes y así hacerlo viable y efectivo ante los usuarios.

4.4.3. Iniciativas mixtas

Desde 2005, **la Asociación de Magistrados de Brasil junto con la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro** están promocionando entre sus socios y miembros la claridad de la redacción del lenguaje jurídico.

Se plantean como objetivo practicar un lenguaje más sencillo y objetivo tanto en las facultades de Derecho como en los Tribunales con el fin de aproximar el Poder judicial a los ciudadanos. Han editado un libro con términos accesibles que tienen el significado equivalente a las expresiones complejas y específicas del lenguaje jurídico frecuentemente utilizadas en los documentos por los profesionales del derecho.

Almeida Abogados. Objetivo: Asesorar a empresas multinacionales brasileñas a través de un lenguaje claro y no jurídico para lograr la comunicación inteligible.

Universidade Santa Cecilia en el Estado de Sao Paulo. En la Facultad de Derecho, existen dos asignaturas en la carrera de Derecho: Redacción y Lenguaje jurídico I (primer semestre); Redacción y Lenguaje jurídico II (segundo semestre).

Además, esta universidad ha recibido el *Sello de la Comisión de Educación Jurídica del Colegio de Abogados Federal* que es un Acuerdo de cooperación con el Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo, que incluye la expansión de pasantías para estudiantes de 1º a 5º año, así como la cooperación con la Junta de Conciliación, Mediación y Arbitraje y tiene los siguientes focos:

- 1.-Esta universidad permite a los estudiantes que en sus últimos cuatro semestres y bajo la supervisión de los jueces, actúen como conciliadores.
- 2.-La Oficina de Asistencia Legal es otra de las actividades curriculares y extracurriculares, con un promedio de trescientas llamadas al mes.
- 3.-Proyecto Ciudadano, un acuerdo firmado con el Fondo de Solidaridad Social del Estado de São Paulo. Los estudiantes dan discursos en las ciudades sobre Derecho de Familia, trabajo, niños y adolescentes y garantías individuales, para sensibilizar a la población sobre sus derechos. Se producen y distribuyen folletos sobre estos derechos.

Bajo el patrocinio del Dr. John Freitas Guimaraes, profesores y estudiantes simulan todos los detalles de un juicio¹²⁰: el vocabulario, los procedimientos y la postura de juez, fiscal y abogados, así como el comportamiento del público. Todas estas líneas tienen en común el facilitar y aclarar el lenguaje jurídico a sus usuarios para su completa comprensión.

Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Carlos Alberto Shimote Martins, Profesor titular, enseña la asignatura de Argumentación y lenguaje jurídico en la Facultad de Letras.

Facultad de Derecho de Varginha, Monografía de grado, 2007, Ariovaldo Sérgio Moreira Valforte, *A modernização da linguagem no Direito: aspectos relevantes sobre a opacidade da linguagem jurídica e sua necessária clarificação*, dirigida por Sunita Pereira Mourão.

Revistas, *Direito, Estado e Sociedade del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica (PUC/RJ)* y la *Direito Alternativo* (último número en 1994). Recanto das letras, "Qual será o fim do juridiquês", Juliana S. Valis, 13/01/2007. Código do texto T345256. *Consultor Jurídico*, "Democratização começa com simplificação da linguagem jurídica", Oriana Piske de Azevedo Magalhaes Pinto, profesora de derecho en la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE) y publicado también en el Anuario da Justiça Minas Gerais en 2010. *Ámbito Jurídico.com.br*, Simplificar é preciso, Carlos Alberto Robinson.

INSTITUCIONES

Asociación Internacional, "**Clarity International**", formada por abogados e interesados en leyes con el fin de usar correctamente el lenguaje jurídico. Publican una revista internacional: "Clarity"; Celebran conferencias internacionales sobre el uso correcto del lenguaje, seminarios y otras iniciativas; y Conceden premios a los más destacados en este ámbito¹²¹.

CALC: Commonwealth Association of Legislative Council¹²², constituye una asociación de la Commonwealth, no dependiente del Gobierno de Australia aunque sí patrocinado por él, que incentiva la participación de expertos en materias de redacción jurídica. Tiene un foro internacional para promover la discusión. La forman más de mil miembros.

SCRIBES: The American Society of writers on legal subjects¹²³, nacida en 1953, con publicaciones trimestrales, premios anuales, y una revista de reconocido prestigio.

PLAIN: The Plain Language Association International¹²⁴, es una asociación internacional de abogados y profesionales del derecho, no lucrativa, que lucha de forma clara por la claridad del lenguaje jurídico. Su directorio de países implicados abarca Canadá, EEUU, México, Australia y Nueva Zelanda, y como continentes, a Europa y África (sobre todo en Sudáfrica).

ILLA¹²⁵: International Language and Law Association. La forman miembros de todas las naciones, lenguas y tradiciones jurídicas (académicos, abogados y jueces, entre otros...).

Aparte de publicar una revista, han celebrado muchas conferencias (desde Colorado a Beijing pasando por Holanda) pero tienen previstas varias en Montreal, Poznan (Polonia), etc., en las cuales se han implicado departamentos de universidades como la Facultad de Leyes de

121 www.clarity-international.net

122 www.opc.gov.au

123 www.scribes.org

124 www.plainlanguagenetwork.org

125 www.illa.org

la “Seconda Università degli Studi di Napoli”, de Italia, o la “Chair of English Language and Applied Linguistics”, de Łódź University en Łódź, Polonia.

Destacamos también **CLAD** (Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo), con sede en Venezuela.

Desde el punto de vista del lenguaje jurídico resalta: “A importância da informação e do documento na administração pública brasileira”, de Brasil. Comissão Especial de Preservação do acervo documental. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público, 199-133 páginas. CLAD L-1173300.

En Europa hay que citar a **EULETA**, *European Legal English Teachers' Association*, formada por profesores, escritores, abogados y académicos cuyo objetivo es formar a profesores de inglés como abogados-lingüistas. Constituye una asociación de mucho peso reconocida por prestigiosas editoriales.

En el portal oficial de la **Unión Europea** se detecta, en general, un creciente interés por facilitar, de forma clara, información acerca de cómo son las instituciones, quién las forma, etc. Se encuentran bastantes entradas y entre ellas destacan:

- Una *Guía explicativa de la jerga*¹²⁶.
- Un “*Libro de estudio interinstitucional*” en el que se explican las siglas, acrónimos, países y demás normas sobre ortografía, puntuación y uso.
- La propia Comisión Europea en su versión española ha elaborado un manual, “*Cómo escribir con claridad*”, para el personal de la Comisión¹²⁷.
- Todo ello en el marco de una campaña llamada “Fight the fog”.
- De igual forma hay un glosario sobre términos técnicos o jurídicos¹²⁸.
- La Comisión, para más información sobre cómo escribir en la red, remite a la “*Guía de los proveedores de información*”¹²⁹.

Dentro de las instituciones europeas, el **Tribunal de Justicia** también se está preocupando de aspectos relacionados con la redacción de los documentos. Así, en las Instrucciones prácticas relativas a los recursos directos y a los recursos de casación, publicadas en el DOUE (*Diario Oficial Unión Europea*) L 98, de 16 de abril de 2003, se indica que “el escrito procesal debe estar estructurado, ser conciso y evitar las reiteraciones” al tiempo que “se recomienda utilizar frases con una estructura simple y usar un vocabulario común y preciso”.

Por su gran importancia, se ha de hacer una referencia expresa y específica a la **Comisión Europea**, en lo concerniente a su preocupación por legislar mejor. Su página web, en particular “Políticas transversales”, se centra en un programa denominado “Legislar mejor” (“Better Regulation”). En dicha web se señalan las medidas adoptadas por la Comisión, otras instituciones y Estados miembros así como enlaces. Constituye una iniciativa para perfeccionar y simplificar el marco regulador, mejorar la legislación y la eficacia de las normas de acuerdo a los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. En el Plan “Legislar mejor”, la Comisión Europea muestra cómo se han llevado a cabo, especialmente desde 2002, una serie de acciones basadas en:

- Sistema para evaluar el “impacto” (económico, social y medio ambiental de las propuestas) y mejorar el diseño de las propuestas de la Comisión. Desde 2003 se han elaborado más de 150 evaluaciones. Con ello, entre otras cosas, se consigue uno

126 europa.eu/abc/eurojargon/index_es.htm

127 ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_es.pdf

128 europa.eu/scadplus/glossary/index_es.htm

129 ec.europa.eu/ipg/content/tips/index_en.htm

de los objetivos marcados en la “Estrategia de Lisboa”. La implantación de la evaluación de “impacto normativo” se relanzó sobre todo a instancias de los Ministros de Administraciones Públicas europeos quienes aprobaron el “Informe Mandelkern” en 2001¹³⁰. En dicho informe participaron expertos de 15 estados miembros y de la Comisión Europea, y se ha convertido en un referente fundamental en Europa. Según el Informe, la regulación debe usarse cuando sea necesaria, y ser transparente, accesible y lo más simple posible; el proceso de análisis de la regulación lo plantearon como continuo y circular, y también se concluyó en dicho informe que el éxito de las políticas de calidad normativa debía pasar por un cambio cultural profundo y de la legislación de las políticas públicas. Tras el Informe, la Comisión ha publicado un *Plan de Acción sobre simplificación y mejora del entorno normativo* en 2002, que ha dado importantes progresos, como manifiesta el *Informe de la Comisión sobre Better Law Making* (Mejor regulación legal) de 2003. En este sentido, véase “La Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas: reflexiones y propuesta de creación: informe Comisión de expertos” de Juan A. Garde, INAP 2005.

- Simplificar la legislación. En principio la referida a sectores como el automóvil, residuos, etc. Particularmente en nuestro país, parece que no existen medidas específicas en este sentido.
- Estudiar alternativas a leyes y reglamentos (se hace referencia a la “autorregulación” o “corregulación”).
- Consultar a ciudadanos y empresas antes de hacer una propuesta de legislación (libros blancos, verdes, etc).
- Reducir burocracia y costes administrativos (cargas administrativas o “administrative burdens”). Varios Consejos Europeos como el del 2004 y 2005 se han dedicado a este tema. En España la simplificación administrativa compete a la Comisión Interministerial de Simplificación administrativa en la que están presentes todos los Ministerios bajo la presidencia del MAP.
- Derogar normas obsoletas.
- Para hacer las leyes más comprensibles y accesibles, la Comisión propone la tarea de codificar y refundir la legislación. Para ello se destaca el sitio web “Internet EUR-Lex”, con acceso a normas de la UE; acuerdos, sentencias, diarios, etc.

Ahora bien, en el citado Plan, la Comisión manifiesta que estas políticas han de hacerse conjuntamente con el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y los Estados miembros.

Uno de los documentos más destacados en materia de “Better regulation” fue la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 2005 (97) “Better regulation for Growth and Jobs in the European Union” (“Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la UE”): en la Comunicación se implicaba a los Estados miembros para que recogieran los principios de Better Regulation en sus Programas Nacionales de Reforma así como a las instituciones europeas para que sobre lo ya tratado, participaran en esta tarea. Acerca de este tema parece que se ha estado y se está trabajando con Grupos de expertos de alto nivel en el entorno de la Comisión y de los Estados miembros (por ej. El Consejo de Competitividad, grupo de trabajo sobre “Better Regulation”, que en España se representó por varios Ministerios como el de AAEE o Industria).

Fruto de esta política de “Better regulation” en la UE y gracias al empuje de la Comisión, en 2007 se aprobó el “Programa de Acción para la reducción de las cargas administrativas” con el objetivo de reducir un 25% de las mismas para 2012.

La Comisión, con relación a este asunto, propone los siguientes sitios web:

130 ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf

- Sitio Internet de la Comisión Europea “Legislar mejor”: ec.europa.eu/governance/better_regulation/index.en.htm
- Sitio Internet de la Comisión Europea “Evaluación de impacto”: ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
- Sitio Internet de la Comisión Europea “Sociedad civil”: ec.europa.eu/civil_society/index_en.htm
- Sitio Internet de EUR-Lex: eur-lex.europa.eu

En la web citada existe un link que desglosa con detenimiento todo lo referido a la política de “Legislar mejor o Better regulation”, e incluso recoge la política que determinados Estados (Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Suecia, Reino Unido) han llevado a cabo dirigida este tema.

La implicación española no ha sido plena en este sentido aunque en los últimos años se detecta una mayor participación: sí se adoptaron algunas medidas como el Plan Nacional de Reformas de 2005 (extensible hasta el presente año 2010) en el cual se preveía la realización de una evaluación anual (por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que existe desde 2007) del éxito de las medidas del Programa. También hay algunas instituciones españolas relacionadas indirectamente con el “Better Regulation”: la Comisión General de Codificación, el Consejo de Estado, Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), así como la ya citada Agencia Estatal.

Con el fin de acceder a normas administrativas y al entorno de la Administración en general, se abrió la web www.060.es, y para hacer más accesibles y claras las normas se han publicado resoluciones y directrices por parte del Gobierno con el objeto de conseguir un lenguaje más claro. De igual forma, en la página web del Ministerio de Presidencia se dice que España, de cara al nuevo horizonte europeo 2020, y en el contexto de lo que se entiende por Regulación Inteligente (regulación flexible, amigable, fácil de cumplir, transparente y comprensible para el ciudadano) se ha presentado en mayo de este año a la Comisión un documento estratégico en el que se expresa la visión sobre lo que ha de ser dicha regulación (“Definición estratégica de España sobre Smart Regulation”). En el tiempo en que España ha estado al frente de la Presidencia del Consejo de la UE se celebraron en Madrid reuniones y conferencias en este sentido. En esta misma página web del Ministerio de la Presidencia se pueden encontrar las actuaciones españolas al respecto. Como ejemplo a nivel autonómico, la Comunidad de Castilla y León ha elaborado en 2009 un Manual de Calidad Normativa¹³¹ aplicando las políticas europeas y nacionales en este sentido.

La **OCDE** también se ha implicado en el tema del “Better Regulation”, cuyas recomendaciones a los Estados se publicaron en el 2005 con el título de “*OECD guiding principles for regulatory quality and performance*”. En ella se trata de asegurar la calidad de la regulación aconsejando que sea acometida en todos los niveles de gobierno.

Finalmente, conviene resaltar **páginas web** relacionadas:

- www.geocities.com/Athens/Acrópolis/6478/indice/htm
- www.geocities.com/Eureka/3727
- www.arrakis.es/-neromar/derecho
- www.intercom.es/web.jur
- www.jurídica.com/esp
- www.leggio.com
- www.plainlanguagenetwork.org/conferences/index.html
- www.eumed.net/rev/cccss/03/jab.htm
- es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_llano

¹³¹ Véase la CA de Castilla y León en este mismo informe.

En especial sirven para facilitar a los traductores jurados el tema del lenguaje.

Otras páginas ya fuera del contexto europeo:

- Cursos de derecho en línea para legos: www.counsel.com/cyberspace
- Language in the judicial process: www.hamlet.utk.edu/perm/pub-info.html
- International journal for the semiotics of law: legaltheory.demon.co.uk/ijsl/html
- Manual del lenguaje jurídico administrativo no sexista (Málaga, 2000): [www.ayto-malaga.es/pls/portal30/docs/fólder/mujer/manual no sexista.pdf](http://www.ayto-malaga.es/pls/portal30/docs/fólder/mujer/manual_no_sexista.pdf)
- Comisión interamericana de la mujer, El sexismo lingüístico y el lenguaje jurídico, S. José de Costa Rica disponible en www.ilamud.or.cr/justiciagénero/sexismo.pdf

CONCLUSIONES

1. CONCLUSIONES PRELIMINARES

Hemos observado que la claridad del lenguaje jurídico, en la mayoría de los países que estudiamos, comprende dos líneas de actuación:

- La claridad de las normas (línea de actuación más abordada en los países estudiados).
- La claridad del lenguaje con relación al lenguaje de los órganos jurisdiccionales (línea de actuación menos abordada en los países estudiados).

2. CONCLUSIONES POR PAÍSES

2.1. España

1º. La necesidad de modernizar el lenguaje jurídico se vincula directamente a los artículos 24 y 120.3 de la Constitución española, por tanto, obedece a un mandato constitucional.

2º. España, como estado miembro de la Unión Europea, se ha implicado (aunque no plenamente) en las directrices marcadas sobre todo por la Comisión Europea (Better Regulation, Informe Mandelkern...), poniendo en marcha la Aeval (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios) o elaborando un documento sobre Regulación Inteligente ("Definición estratégica de España sobre Smart Regulation").

Además, y para cumplir este propósito se elaboró la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y el Plan de Transparencia Judicial del 2005. Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó el Plan estratégico para la Modernización de la Justicia 2009-2012.

3º. Hemos observado que en España, la modernización del lenguaje jurídico administrativo se orienta a dos direcciones:

- a) Modernización del lenguaje jurídico en sentido estricto, que ha sido tratada por diferentes instituciones pero sin un claro sentido unitario, abundando las iniciativas particulares. Desde el punto de vista doctrinal se pone el acento en la necesidad de abordar esta tarea, pero por ejemplo, tal deseo no ha encontrado aún su reflejo práctico.
- b) Simplificación administrativa, que consiste en racionalizar y simplificar las fases, trámites y papeleo que los ciudadanos han de emplear en sus relaciones con las administraciones en general, logrando así que además de reducir tiempo y costes, se logre una mayor accesibilidad al lenguaje administrativo. En este sentido, hemos comprobado cómo los entes autonómicos y municipales han desarrollado una importante tarea en lo que se conoce como “e-Administración”, pues para lograr los objetivos citados, se precisa del uso de las nuevas tecnologías o TICS.

4º. Entrando de lleno en las diferentes Comunidades Autónomas (o Iniciativas Públicas), podemos concluir que:

Los diferentes portales corporativos autonómicos hacen especial hincapié en el contacto del ciudadano con su respectiva autonomía en los siguientes ámbitos: racionalizar la excesiva burocracia y la dificultad aneja de su lenguaje, facilitando el uso de la red para aligerar los procedimientos administrativos. El administrado encontrará en su respectivo portal teléfonos generales de información, direcciones web, ventanillas únicas u oficinas de atención al ciudadano que le guiarán para la mejor consecución de sus propósitos. Esta información se hace extensiva a Europa, para que la Unión (órganos y leyes), se integre en el día a día del ciudadano.

En dichos portales, la simplificación administrativa se orienta a todos los sectores públicos: justicia, hacienda, sanidad, educación, etc.

Algunas Comunidades han elaborado Manuales de atención a la ciudadanía, entre cuyos objetivos se pretende que el empleado público utilice un lenguaje sencillo y directo pero preciso, de estructura normativa unitaria, en su relación con el ciudadano. En este sentido, recordamos las Directrices de Técnica Normativa del Gobierno de Aragón, pero también, y desde otro enfoque, la Guía de Errores que la Comunidad de Madrid ha publicado en la que se señalan los fallos que con mayor frecuencia se cometen en la Administración, o el Manual de lenguaje judicial catalán.

Relacionado con lo anterior, dependiendo de las CCAA, se han creado Escuelas o Institutos de Formación Pública, que bien de forma presencial u on-line, imparten cursos variados, entre los que destacamos aquellos que enseñan un uso adecuado del lenguaje jurídico y administrativo. En alguna de estas autonomías, como Murcia, dicha institución ha elaborado un Manual de lenguaje y estilo administrativo.

La corrección del lenguaje jurídico también se enfoca a un uso de lenguaje no sexista (dentro de Andalucía, Málaga se ha destacado en este campo).

Para incentivar y mejorar la relación ciudadano-Administración, los diferentes entes autonómicos a través de sus respectivas consejerías, fomentan la mejora del servicio público por varias vías: Agencias de calidad, índices de percepción, índices de impacto normativo, planes variados y entrega de premios de excelencia a la calidad del servicio público. Incluso se accede a las redes sociales (*Facebook*) o se abren blogs para que los ciudadanos participen e intervengan activamente en la mejora de la Administración.

Todo lo anterior no se hace de forma individualizada por cada ente autonómico, sino que se fomenta la cooperación con la propia Administración General del Estado, con los entes locales, diputaciones y otros organismos privados como universidades (en este sentido, véase la colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos). A esta colabo-

ración apuntan vocablos como “Interoperabilidad”, propios, por ejemplo, de la Administración asturiana.

Finalmente, podemos concluir que no existe uniformidad en las actuaciones, pues mientras algunas CCAA como Madrid, Murcia o Cataluña, ofrecen información amplia en este sentido y se detecta un claro interés en la mejora del lenguaje jurídico administrativo, en otras como Galicia, la política emprendida en este sentido es sensiblemente inferior. Faltaría una actuación igualitaria y uniforme entre todas las Autonomías, como hemos puesto de manifiesto en las recomendaciones finales.

Es más importante la actuación de las CCAA en la línea que hemos llamado de “Simplificación administrativa” (sin olvidar que incluye la mejora del lenguaje administrativo), que en la de “Modernización del lenguaje jurídico” en sentido estricto.

5º. Universidades e iniciativas privadas. No existe una iniciativa general de formación en las Universidades referidas al lenguaje jurídico, sino que los avances en este sentido son particulares. En los primeros cursos de grado, en las Facultades de Derecho, se puede impartir tangencialmente algún aspecto sobre el uso del lenguaje en disciplinas como Teoría del Derecho o Habilidades profesionales. Sí se recogen en los planes de estudio de algunas universidades asignaturas como Oratoria o Argumentación jurídica, que aunque no se enfocan directamente al lenguaje jurídico, tienen como competencia la redacción y estructuración de la norma, razonamientos, falacias, expresión oral, etc. Muchas de estas materias son optativas, no consideradas de formación obligatoria. En posgrados o másteres, así como en algunas Escuelas judiciales (destacamos la Judicial con sede en Barcelona) se imparten cursos para mejorar la redacción y estilo judicial conforme al lenguaje.

Las facultades de Filología enseñan el lenguaje jurídico administrativo como un nivel más del lenguaje, como el científico, literario, etc. En las de Traducción e Interpretación se imparte con vistas a formar al futuro intérprete en el uso especializado de una variedad del lenguaje general.

En algunas ocasiones hay iniciativas mixtas, como en Castilla y León, donde profesores expertos en lengua española se encargan de velar por la pureza del lenguaje en los textos legales (Comisión Alfonso X); asimismo, la actuación conjunta que en la Autonomía madrileña han llevado a cabo las dos administraciones (local y autonómica) con la Universidad Rey Juan Carlos.

2.2. Europa continental

Las instituciones europeas demuestran un importante y creciente interés por la forma de redacción de las leyes y por lograr un acceso claro a sus instituciones; en diversas páginas webs de la Unión Europea (véase lo indicado en el apartado 1.3 de este estudio) se contienen diversas guías y manuales con el fin de lograr, en definitiva, una mayor inteligibilidad del lenguaje jurídico que se emplea o ha de emplearse. Específicamente destacamos la iniciativa: “Legislar mejor” (*Better Regulation*).

Del análisis conjunto de las diferentes propuestas que se han formulado y desarrollado en los países europeo-continental estudiados: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Suecia y Holanda, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1º. Existe una mayor preocupación por la inteligibilidad de las leyes que por el acercamiento del lenguaje jurídico a los ciudadanos en los procesos, en línea con lo que ocurre en otras zonas geográficas estudiadas.

2º. Para tratar de acercar el lenguaje jurídico a los ciudadanos, existen distintos mecanismos aunque no son muy numerosos. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia francés, cuenta en su página web con un enlace explicativo de terminología jurídica de sencillo acceso; y el Ministerio de Justicia alemán, aparte de otras cuestiones, tiene una opción de contacto directo con el Ministerio y hemos comprobado que es inmediatamente contestada.

3º. Se aprecia, sobre todo, gran interés en los países por lograr una mejor comprensión de las leyes, por ejemplo:

- En Francia, con la ley de simplificación y clarificación del derecho y aligeramiento de los procedimientos en Francia y la creación de la Comisión de las leyes en Francia.
- En Alemania con un equipo de la GfdS (Sociedad para la lengua alemana) en el Bundestag, para revisar proyectos de leyes en sus fases iniciales; el Manual de forma jurídica, del Ministerio de Justicia, para redactar normas jurídicas de forma clara y precisa; y la instalación de un equipo de redacción de la GfdS en el Ministerio de Justicia para lograr una buena redacción del lenguaje que proviene de dicho Ministerio, pero no sólo, sino también para asesorar en los proyectos y reglamentos de todos los ministerios. Este Ministerio también edita textos aclaratorios de diversas leyes para lograr una mejor comprensión.
- En Italia, con la producción de dos leyes de simplificación normativa y la sugerente creación, en particular, de un Ministerio para la simplificación normativa.
- En Bélgica, con la creación en el Parlamento de una Comisión que evalúe el funcionamiento y la eficacia de las leyes vigentes; o la formación de los jueces y magistrados en lenguaje jurídico por el Consejo Superior de Justicia.
- En Suecia, con la creación destacada del Comité Gubernamental de Expertos en lenguaje, ubicado en el Ministerio de Justicia, con tantos lingüistas como letrados para asesorar a los diferentes ministerios y revisar los textos legales que van a ser promovidos.
- Y en Holanda, con la creación de un Programa para lograr una legislación más eficaz.

En cuanto a concretas y comunes finalidades sobre claridad de las normas, interesa, prácticamente, a todos los países, lograr el asesoramiento y mejora de las disposiciones desde fases iniciales de su creación. Lograr la coherencia de las disposiciones mal coordinadas y estudiar posibles contradicciones; y, el asesoramiento acerca de la reescritura de disposiciones poco inteligibles para alcanzar la máxima inteligibilidad. Así como la mejora constante en la claridad del lenguaje jurídico.

4º. Existen diferentes apuestas por la investigación y la observación de la facilidad de comprensión de este lenguaje. Aparte de algunas iniciativas privadas, en la universidad se estudia el lenguaje jurídico tanto de manera individualizada como a través de revistas especializadas.

5º. En consecuencia, en los países analizados, en general, se aprecia una preocupación ascendente por la claridad del lenguaje traducida en la proliferación de entidades públicas y privadas que tratan de hacer más accesible este lenguaje. El esfuerzo dedicado, en particular, por las entidades públicas, concretamente por los Ministerios de Justicia y/o los Parlamentos, es cada día más notorio.

2.3. Países anglosajones

Del análisis conjunto de las diferentes propuestas que se han formulado y desarrollado en los países anglosajones (Reino Unido, Estados Unidos de América, Australia e Irlanda) pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1º. Se aprecia un papel relevante de la iniciativa privada y, en particular, de iniciativas promovidas por asociaciones o grupos privados, incluso algunas iniciativas individuales.

2º. Tal iniciativa privada, bien ha impulsado proyectos públicos al hacerse eco los poderes públicos de tal demanda, bien ha coexistido con tales proyectos, de manera que los poderes públicos han desarrollado políticas activas de promoción del lenguaje jurídico sencillo.

3º. Las iniciativas privadas se han desarrollado a través de diferentes instrumentos, tales como ofertas de colaboración con los poderes públicos (por ejemplo, a efectos de revisar la documentación y normas generadas por éstos), promoción de premios a las iniciativas de lenguaje sencillo, desarrollo de cursos de formación en lenguaje sencillo o publicaciones sobre la materia.

4º. Las políticas públicas de promoción del lenguaje jurídico sencillo se han desarrollado en un triple sentido:

-En primer lugar, en la promoción de prácticas administrativas que atiendan a tal pretensión. Tales políticas se insertan, normalmente, dentro de proyectos de más amplio calado sobre calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos. Se sitúa al ciudadano en el papel protagonista de la actividad de los poderes públicos y, como tal, las normas, actos o documentos que producen estos han de ser necesariamente inteligibles por aquellos. Como se destaca en el Reino Unido, el uso por los poderes públicos de un lenguaje poco claro es un elemento evidente de mala administración.

-En segundo lugar, en la promoción del lenguaje sencillo, en particular, en la actividad legislativa, tanto aprobando leyes de fácil acceso y comprensión para los ciudadanos como reformando o derogando aquellas que contengan términos obsoletos o de difícil comprensión. En este ámbito, se aprecian algunas voces que, con bastante fundamento, alertan de los peligros que frente a la seguridad jurídica pudiera ofrecer el uso indiscriminado de términos excesivamente comunes, vulgares o poco técnicos. Dentro de estas políticas, resulta de interés la novedad que ofrece los Estados Unidos de América, al incorporar a las leyes que se han venido aprobando en los últimos años un apartado que tiene como fin promover que los ciudadanos pongan de manifiesto qué términos, aspectos o apartados de la norma no resultan claros o inteligibles. Igualmente, destacar la política impulsada por el Reino Unido que ha supuesto que muchas leyes se acompañen de notas explicativas o guías.

-En tercer lugar, mediante el desarrollo de instrumentos que faciliten el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia. A este respecto, se han utilizado diferentes instrumentos, todos ellos, a través de las páginas web de los Tribunales, tales como, documentos explicativos e, incluso, vídeos que explican cómo funciona el Tribunal, una sesión de vista oral o, por ejemplo, cuál es el papel de quien ha de actuar como testigo. También se recogen diccionarios de términos legales con su explicación en términos sencillos. Igualmente, se recogen apartados que incorporan modelos de escritos y solicitudes, promoviendo la actuación de los ciudadanos sin la necesidad de apoyo técnico.

5º. En definitiva, en los países anglosajones se observa una gran sensibilidad por parte de los poderes públicos y de los propios ciudadanos hacia el lenguaje sencillo y, en concreto, hacia el lenguaje jurídico sencillo. Además, ya se han promovido proyectos que se encuentran muy avanzados.

6º. Los términos empleados para definir dichas políticas son los de *Plain English* o *Plain Language*.

2.4. Países latinoamericanos

Del análisis conjunto de las diferentes propuestas que se han formulado y desarrollado en los países Latinoamericanos (Argentina, Chile, México y Brasil), pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1°. Concedemos un lugar primordial a las iniciativas privadas que parten principalmente de algunos departamentos de las Facultades de Derecho que se ven auspiciadas, en muchos casos, por el apoyo de despachos y firmas jurídicos de relevancia en cada país; todo ello con la idea de promover la edición, desarrollo y promoción de manuales, así como la impartición de cursos específicos como Lexicología jurídica, entre otros.

Sirva como ejemplo, en este sentido el hecho de que la firma Deloitte ha implementado un programa y un informe al respecto de la claridad en el lenguaje jurídico en México.

2°. Reforzando lo anteriormente dicho, existen grupos de investigación e investigadores que trabajan muy estrechamente con las instituciones para acercar éstas a los usuarios y se publican libros y editan revistas con una gran cantidad de artículos que constituyen referencia para el tema que nos ocupa; sin olvidar la puesta en práctica del Portal del Usuario a través de Internet que acoge sugerencias, comentarios y preguntas de los ciudadanos de cara a la explicación de documentos y procedimientos jurídicos.

3°. Importante papel, a su vez, es el desarrollado por algunas ONG's, junto con asesorías universitarias que trabajan con asociaciones de Jueces y Magistrados para la revisión y elaboración de glosarios, "expresionarios" y diccionarios que ayuden al usuario.

4°. En cuanto a iniciativas públicas son los organismos de este carácter como Ministerios (de Economía y Justicia y Oficina de Presidencia), los responsables de la revisión de las leyes, de su promulgación o derogación -si en algún caso se ha visto su dificultad y ambigüedad a la hora de una mayor y mejor comprensión de las mismas-; de ahí los intentos y proyectos realizados para la elaboración de diferentes manifiestos, publicación de manuales y el trabajo que conjuntamente con las Universidades públicas y las Bibliotecas Nacionales en la línea de la difusión del *Lenguaje claro* o *Lenguaje ciudadano* han puesto en marcha para:

- Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y poderes públicos de la importancia de la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. Y,
- Elaborar y redactar normas y resoluciones en lenguaje claro, atendiendo al mayor interés de los ciudadanos.

5°. Todo ello viene apoyado además por la creación y la activación de páginas de internet muy esclarecedoras en las que se dan las instrucciones pertinentes a los ciudadanos a la hora de acudir a instancias judiciales, a la vez que cumplimentar documentos de este carácter y facilitar así los trámites necesarios.

6°. En algunas escuelas judiciales se están implementando programas, cursos y seminarios sobre terminología jurídica para difundir el Lenguaje ciudadano y preparar a los ciudadanos y a los funcionarios a su práctica efectiva.

7°. Los términos más empleados para estas políticas son: *Lenguaje claro* y *Lenguaje ciudadano*.

BIBLIOGRAFÍA

- ABREU Y ABREU, J. (2006). *Discurso jurídico y lenguaje ciudadano* (en línea). [www.lenguaje-ciudadano.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=5]
- Administrazioaren eta herritarren arteko komunikazioa hobetu nahian*. Vitoria-Gasteiz: Instituto Vasco de Administración Pública, 1996.
- ALCARAZ, E. y B. HUGUES. *El español jurídico*, Barcelona, 2002.
- ALFÉREZ CALLEJÓN, G., "Tratamientos honoríficos en escritos administrativos", en *Documentación Administrativa*, 133 (enero-febrero 1970), pp. 41-72.
- ARCE, J.C., "Lenguaje judicial", *La Razón*, 31 de enero de 2006.
- AYALA CASTRO, M.C.; GUERRERO SALAZAR, S.; MEDINA GUERRA, A. *Manual de lenguaje administrativo no sexista*. Málaga: Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer de la Universidad de Málaga/Área de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, 2002.
- BAYO DELGADO, J. "La formación básica del ciudadano y el mundo del Derecho. Crítica lingüística del lenguaje judicial", *Cuadernos de Derecho Judicial*, 16, 1997, pp. 11-19.
- Lenguaje Forense*. Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2000.
- BENGOECHEA BARTOLOMÉ, M., "La categorización masculina del mundo a través del lenguaje verbal de los medios", en *Manual de información de género*. Instituto de la Mujer, Madrid, 2004.
- BLANCO DE TELLA, L. "Reflexiones sobre el lenguaje administrativo", *Documentación Administrativa*, 122 (marzo-abril 1968), pp. 73-88.
- BORJA ALBI, A., *El texto jurídico inglés y su traducción al español*, Ariel, 2000.
- BARRUECO S., HERNÁNDEZ E. y L. SIERRA (ed.). *Lenguas para fines específicos (VI)*. Investigación y Enseñanza. Universidad de Alcalá.
- CALVO RAMOS, L. *Introducción al estudio del lenguaje administrativo. Gramática y textos*, Madrid, 1980.
- "Viabilidad de una modernización del lenguaje administrativo español y de otras lenguas peninsulares", *Revista de Llengua i Dret*, 2 (diciembre de 1983), pp. 21-31.
- "Gramaticalidad y gramática normativa en el discurso legal castellano", *Revista de Llengua i Dret*, 48, 2007, pp. 116-120.
- CAMPOS, M. *El lenguaje de las ciencias jurídicas: Nuevos retos y nuevas visiones*. Madrid, 2007.
- CARNICER, R. *Desidia y otras lacras en el lenguaje de hoy*, Planeta, Barcelona, 1983.

- CARRETERO, C., "Características del lenguaje jurídico: el lenguaje procesal de ciertos actos de comunicación", *Revista de derecho Procesal*, nº 1, 2006, p. 189-218
- CARRETERO, C., et alii, *Jueces y ciudadanos: elementos del discurso judicial*, Dykinson, 2009.
- CASSANY, D. "Plain language in Spain". *Clarity*, 53, 2005, pp.41-44.
- CASALS MARCÉN, J. M. *Manual de Impresos Administrativos*, Madrid, Presidencia del Gobierno, Secretaria General Técnica, 1974..
- CASTELLÓN, H., "Análisis normativo del lenguaje administrativo", *Revista de Llengua i Dret*, 30 (diciembre 1998), pp. 7-45.
- Los textos administrativos*. Madrid, 2000.
- "La reforma del lenguaje administrativo: la experiencia de los Estados Unidos de América", *Revista de Llengua i Dret*, 34, 2000, pp. 23-43.
- El lenguaje administrativo. Formas y uso*. Granada: Editorial La Vela, 2001.
- CAZORLA PRIETO L. M., *El lenguaje jurídico actual*, Cizur Menor, 2007.
- COMET I CODINA, R., La modernització de la l'Administració i el seu reflex en l'estil dels documents administratius, *Revista de Llengua i Dret*, 11, julio de 1988, pp. 7-27.
- CORNU, G. *Linguistique juridique*, Paris, 1990.
- DELGADO, J. *Lenguaje judicial*, 1998.
- DUARTE MONTSERRAT, C., "Lenguaje administrativo y lenguaje jurídico", *Cuadernos de Derecho Judicial*, 16, 1997, pp. 41-85.
- Llengua i administració. Estudis sobre la llengua, el dret i l'administració*. Barcelona, 1986.
- "La modernització del llenguatge administratiu", *Revista de Llengua i Dret*, 17, julio de 1992, pp. 269-270.
- ETXEBARRIA AROSTEGUI, M., "El lenguaje jurídicoadministrativo: propuestas para su modernización y normalización", *Revista Española de Lingüística*, 27/2, 1997, pp. 341-380.
- FERNÁNDEZ GARCÍA, M., "Reseña sobre el desatino lingüístico de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres", *Diario La Ley*, núm. 7073, 10 de diciembre de 2008, pág 5.
- FLORES, S. "Citizen's language. *Plain English in México*". *Clarity*, 2004, 42, 40-41.
- FORTIS, D., "Il linguaggio amministrativo italiano", *Revista de Llengua i Dret*, 43, 2005, pp. 47-116.
- FRANKENTHALER, M. R. y ZAHLER, S., "Las características del lenguaje jurídico: la comunicación en el ámbito legal", *Revista de Llengua i Dret*, 3, 1984.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, E., *El Derecho, la palabra y el libro, De Fray Luis a Luis Rosales*, Madrid, 2000.
- GIBBONS, J. "Language and the law", en A. Davies & C. Elder (Eds.), *Handbook of applied linguistics*, Oxford: Blackwell, 2004, pp. 285-303..
- GÓMEZ FONT, A.; MUÑOZ GUERRERO, F. *Libro de estilo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*. Madrid, 2007.
- GONZÁLEZ CASADO, S., "Errores sintácticos en los textos jurídicos: la calidad editorial por puntos", *Revista Jurídica de Castilla y León*, 7, 2005, pág. 242.
- GOODRICH, P. *Legal discourse. Studies in linguistics, rhetoric and legal analysis*. London: MacMillan, 1987.
- GOTTI, M. *Studies in specialized Discourse*, 2006.
- GRICE, P., "Logic and conversation", en H. Geirsson and M. Losonsky (eds.). *Readings in Language and Mind*, Londres, 1996, pp.121-133
- GUNNING, R. "Legal prose" in *The Technique of Clear Writing*, Nueva York-Londres-Toronto: McGraw-Hill, 1952, 212-220.
- HALLIDAY, M. A. K. *Spoken and written language*, Oxford, 1989.
- HERNÁNDEZ GIL, A. *El lenguaje del Código Civil*, Madrid, 1988.
- HENRÍQUEZ SALIDO, M. Del C., "El latín en la jurisprudencia del Tribunal Supremo español", en *Estudos em homenagem ao Professor Doutor Mário Vilela*, vol. II, Porto, 2005.
- Prefijación, composición y parasíntesis en el léxico de la jurisprudencia y de la legislación*. Vigo: Departamento de Filología Española, 1998.
- ITURRALDE SERNA, V., *Lenguaje legal y sistema jurídico*, Tecnos, 1989.

- Libro de estilo* Garrigues, Thomson-Aranzadi y Centro de Estudios Garrigues, 2ª edición. Pamplona, 2006.
- LOCKE, J. *A history of plain language in the United States Government* (en línea) [www.plain-language.gov/whatisPL/history/locke.cfm], 2004.
- LÓPEZ SAMANIEGO, A., “Los ordenadores del discurso enumerativos en la sentencia judicial, ¿Estrategia u obstáculo?” *Revista de Lengua i Dret*, 45, 2006, 61-87.
- LÓPEZ DE SANCHO, J. L. y NIETO MORENO, E., *El lenguaje forense. Análisis pragmático del acto comunicativo judicial*, en Bayo Delgado (coord.), 2000, 77-116.
- MAHER, G., “The past and present of Plain English Campaign”, *Administrazioaren eta herritarren arteko komunikazioa hobetu nahian*. Vitoria-Gasteiz: Instituto Vasco de Administración Pública, 1996, pp. 9-21.
- MARTÍN DEL BURGO MARCHÁN, A. *El lenguaje jurídico*, Bosch, 2000.
- MARTÍN MARTÍN, J. *Normas del uso del lenguaje jurídico*, Granada, 1991.
- MARTÍNEZ BARGUEÑO, M., “La modernización del lenguaje administrativo”, *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, núm. 250, 1991, pp. 217-233.
- “La simplificación del lenguaje administrativo en Italia”, *Revista de Lengua i Dret* 25, 1995, pp. 31-58.
- Teoría y práctica de la Información Administrativa al ciudadano*. Alcalá de Henares-Madrid, INAP, 1987.
- “La modernización del lenguaje administrativo”, *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, 250, 1991, pp. 217-233.
- “La publicación del Manual de estilo del lenguaje administrativo”, *Revista de Lengua i Dret*, 15, 1991, pp. 181-192.
- “Pasado y presente del lenguaje administrativo castellano”, *Revista de Lengua i Dret*, 15, 1992, pp. 7-24.
- “La simplificación del lenguaje administrativo en Italia”, *Revista de Lengua i Dret*, 25, 1995, pp. 31-58.
- MARTÍNEZ-CARDÓS RUIZ, J. L. *Técnica normativa*, Escuela de Práctica Jurídica, UCM, 2002.
- MARTÍNEZ MARÍN, J., “El lenguaje administrativo. Descripción y norma”, *Lingüística Española Actual*, XIX/2, 1997, pp. 215-228.
- MESTRES I SERRA, J. M., “Les relacions entre l'Administració i l'administrat/ada des del punt de vista del llenguatge administratiu i jurídic”, *Revista de Lengua i Dret*, 15, 1991, pp. 21-33.
- MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, *Manual de estilo del lenguaje administrativo*. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1990.
- Manual de documentos administrativos*. Madrid, Tecnos, 1994.
- MIGUEL, DE E., “El texto jurídico-administrativo: Análisis de una orden ministerial”, *Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, 4.
- MIGUEL, DE E., *La perversión del lenguaje*, Espasa Calpe, Madrid, 1985.
- MONTOLÍO, E., “Construcción de textos para juristas”, en *II Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI)* [CD-ROM], UAB, 2002.
- MONTOLÍO, E. y LÓPEZ SAMANIEGO, A., “La propuesta didáctica en formación escrita llevada a cabo en la Escuela Judicial de España”, en *Actas del V Congreso Internacional de AELFE* [CD-ROM], 2006.
- NÁÑEZ FERNÁNDEZ, E., “La locución prepositiva en el lenguaje administrativo”, *Boletín de la Real Academia Española*, LXXI, 1991, pp. 383-395.
- NINYOLES, R. LI. *et al.*, *Las lenguas nacionales en la Administración*. Diputación Provincial de Valencia, 1981.
- OLIVENCIA RUIZ, M. *La terminología jurídica de la reforma concursal*, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 2005, pp. 34-35.
- OLVERA, J. *El lenguaje de las sentencias y el derecho a la información* (en línea) [www.poder-judicial-bc.gob.mx/admonjus/default.asp?ed=23] 2004.
- ORTIZ SÁNCHEZ, M. *Introducción al español jurídico: principios del sistema jurídico español y su lenguaje para juristas extranjeros*, Comares, 2002.
- PARDO, M. L. *Derecho y lingüística. Cómo se juzga con palabras*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1996.

- POBLETE, C., "Plain language in the Senate of Chile". *Clarity*, 55, 2006, 22-23.
- PRIETO DE PEDRO, J. *Lenguas, lenguaje y Derecho*, Madrid, 1991.
- PRIETO, J. y ABRIL, G. "Reflexiones y propuestas para la modernización del lenguaje jurídico administrativo castellano", *Revista de Lengua i Dret*, 10, 1987, 7-32.
- ROBLES MORCHÓN, G., *Teoría del Derecho, Fundamentos de teoría Comunicacional del Derecho*, vol.1, 3ª edición, Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor, Navarra, 2010.
- Las reglas del Derecho y las reglas de los juegos*, 2ª ed, UNAM, México 1988.
- El Derecho como texto. Cuatro estudios de Teoría comunicacional del Derecho*, Civitas, Madrid, 1998.
- Comunicación, Lenguaje y Derecho*. Discurso de recepción como Académico de Número, (y contestación), Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 2009.
- Norma y regla técnica, *Revista de la Facultad de Derecho de la UCM*, Madrid, 1982.
- "La teoría del derecho como análisis del lenguaje de los juristas", *Doxa*, Alicante, 1984.
- RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E., "El lenguaje de la sentencia y la exigencia de hechos probados en el orden jurisdiccional civil y contencioso administrativo", *Estudios de Derecho Judicial*, 109, 2006, pp. 258-266.
- RODRÍGUEZ-AGUILERA, C. *El lenguaje jurídico*. Barcelona, 1969.
- La sentencia*, Barcelona, 1974.
- "Mayor personalización del discurso administrativo", *Revista de Lengua i Dret*, 29, 1998, pp. 147-157.
- RUIZ DE ZAROBÉ, L., "La modernización del lenguaje administrativo: hacia una mayor personalización del discurso administrativo", *Revista de Lengua i Dret*, 29, 1998, 147-157.
- SAMANIEGO, E. "El lenguaje jurídico: Peculiaridades del español jurídico", en P. Fuertes (Coord.), *Lengua y sociedad: Investigaciones recientes en lingüística aplicada*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2005, pp.273-310.
- SALVADOR, G., "Observaciones sobre el lenguaje de la Administración Pública", *EPOS*, VI, 1990, pp. 115-127
- SÁNCHEZ MONTERO, M. de C., *Aproximación al lenguaje jurídico*, 1996.
- SANDOVAL, P. X. de, "Contra el aberrante lenguaje de las leyes", *El País*, 26 de julio de 2006.
- SARMIENTO, R., "El lenguaje de la Administración", *Revista de Lengua i Dret*, 43, 2005, pp. 13-45.
- SOLAN, L., *The language of judges*, Chicago: The University of Chicago Press, 1993.
- TIERSMA, P., *Legal language*, Chicago: The University of Chicago Press, 1999.
- VARANTOLA, K., "Special language and general language: Linguistic and didactic aspects", *ALSED-LSP Newsletter*, 9 (23), 1986, 10-19.
- VILLAR PALASÍ, J. L., *La interpretación y los apotegmas jurídico-lógicos*, Madrid, 1975.

ESTUDIO DE CAMPO:
LENGUAJE JURÍDICO EN LOS MEDIOS
COMISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO

Dirigido por María Peral Parrado.

Mercedes Bengoechea Bartolomé, Gabriela Bravo Sanestanislaio, Carlos Berbell, José Luis Calvo, María Victoria Ortega, Isabel Valdecabres y Yolanda Vidales.

ÍNDICE

1. OBJETIVO	4
2. DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS Y MÉTODO DE ANÁLISIS.....	6
3. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS	8
1. Muestras aleatorias.....	8
1.1. Empleo de expresiones o términos jurídicos confusos, incomprensibles o incorrectos.....	8
1.2. Incorrecta descripción de los procedimientos.....	11
1.3. Incorrecta descripción de los órganos de la Administración de Justicia o de sus funciones	12
1.4. Presuntos autores, presuntos delitos. La confusión entre imputados, detenidos, acusados, sospechosos. . .	13
1.5. El lenguaje de las imágenes	16
1.6. Terminología de género	17
2. Muestras temáticas.....	17
2.1. El caso de Diego P.....	17
2.2. Violencia de género.....	18
2.3. El caso A.	20
2.4. La sentencia 3/99 de la Sala Penal del Tribunal Supremo.....	21
2.5. Los aforismos latinos	22

OBJETIVO

En este trabajo se analiza el empleo del lenguaje jurídico por los medios de comunicación (prensa escrita y digital, radio, televisión y agencias de noticias) para tratar de determinar si se produce una adecuada transmisión de la realidad de los procesos judiciales y de la labor de quienes intervienen en la Administración de Justicia.

Centrado el análisis estrictamente en el lenguaje jurídico, este estudio no valora en modo alguno los criterios de selección de los asuntos judiciales por parte de los medios ni qué tratamiento informativo o de opinión reciben en cada caso. Tampoco se abordan cuestiones deontológicas, ya que no se pretende establecer a qué reglas debe someterse la información sobre la actuación judicial. Todo lo anterior excedería notoriamente de los límites del encargo: establecer si, desde el punto de vista de los términos jurídicos que utilizan, los medios difunden apropiadamente la realidad de lo que sucede en nuestros Juzgados y Tribunales.

De poco serviría la modernización del lenguaje jurídico si esta labor clarificadora no se trasladara a los medios de comunicación, que cumplen una labor de relevancia constitucional vinculada al principio de publicidad de las actuaciones del Poder Judicial. Tanto la jurisprudencia europea como la constitucional han subrayado el papel de los medios de comunicación como “intermediarios naturales” entre los acontecimientos judiciales y la opinión pública (sentencia TC 30/1982 y sucesivas).

En concreto, se ha examinado:

- Si los conceptos e instituciones jurídicas se manejan con rigor o se vulgarizan hasta el extremo de desnaturalizar su significado etimológico;
- Si se usan términos o expresiones jurídicas incorrectas o que resultan oscuras o incomprensibles para el ciudadano medio;
- Si se utilizan palabras o imágenes que generan confusión o significados erróneos;
- Si se realizan descripciones inexactas de las distintas fases procesales, de las jurisdicciones o de los órganos judiciales
- Si la oscuridad del lenguaje jurídico se traslada a los medios de comunicación y tiene un reflejo mimético en las noticias periodísticas.

Este trabajo parte de la base de que una utilización correcta del lenguaje jurídico en los medios de comunicación es esencial para el conocimiento y la valoración de la Administración de Justicia por parte de la opinión pública.

El número de ciudadanos que tiene contacto directo con los Juzgados y Tribunales es muy pequeño. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, uno de cada cuatro españoles tendrá alguna vez en su vida contacto con la Administración de Justicia. Por tanto, la mayoría de la sociedad se informa sobre la Justicia y forma su opinión en esta materia a través de lo que difunden los medios. Una utilización errónea del lenguaje propio del mundo jurídico generará en el destinatario de la información ideas equivocadas o, cuando menos, confusas. Por el contrario, una información apropiada (desde el punto de vista de los términos empleados) no sólo ayudará a los ciudadanos a comprender el complejo mundo de la Justicia sino que contribuirá a su legitimación social, porque sólo se valora adecuadamente lo que se conoce adecuadamente.

Si ponemos el foco no en los medios sino en la propia Administración de Justicia, es claro que la accesibilidad del lenguaje jurídico que utilizan jueces, fiscales o abogados no concierne sólo a las personas directamente implicadas en un proceso. En un Estado social y democrático de Derecho, todos los ciudadanos son destinatarios de la actividad judicial. No puede ignorarse el valor que las resoluciones judiciales tienen para el conjunto de la sociedad, al poner de manifiesto qué comportamientos humanos se consideran lícitos o ilícitos, de qué forma solventan los jueces los conflictos y cómo protegen los derechos y libertades. Los ciudadanos tienen derecho no sólo a conocer las resoluciones que reflejan los criterios de decisión de los jueces sino que también tienen derecho a comprenderlas. Si "la Justicia emana del pueblo" (artículo 117 de la Constitución Española) parece una consecuencia obligada que el pueblo entienda cómo se aplica la justicia.

La legitimación social de la Administración de Justicia entronca con la necesidad de comprender el lenguaje con el que se expresa. Que se produzca una adecuada transmisión de los mensajes a la sociedad concierne, sin duda, a los medios de comunicación. Pero la accesibilidad del lenguaje jurídico compete, en primer término, a los productores del mensaje, esto es, a los redactores de las resoluciones judiciales, dictámenes y escritos jurídicos. En este trabajo se ha comprobado que determinadas sentencias de difícil comprensión (por su enrevesada redacción o por la complejidad terminológica) han tenido un reflejo incorrecto en las noticias periodísticas, lo que, desde luego, perjudica a la sociedad destinataria de la información pero también al órgano judicial¹.

¹ Esto se pone de manifiesto en una de las muestras seleccionadas para este trabajo referida a la sentencia que dictó la Sala Segunda de lo Penal del Supremo en la causa especial 1350/1997, sobre la negativa de un diputado a someterse a las pruebas de alcoholemia. Las dispares interpretaciones periodísticas de esta resolución -que llevaron al Tribunal al difundir al día siguiente una nota aclaratoria- se analizan en el apartado correspondiente.

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS Y MÉTODO DE ANÁLISIS

Se han seleccionado dos tipos de muestras. El primero es de carácter aleatorio y ha consistido en la recopilación indiscriminada de noticias de tribunales difundidas en la prensa escrita entre el 10 y el 16 de julio de 2010. Abarca tanto periódicos nacionales como de ámbito regional y provincial².

El segundo tipo de muestras es de carácter temático y se refiere a asuntos que han tenido un especial impacto en los medios de comunicación: la detención de un hombre en Canarias por la muerte de una niña de tres años, dos casos de violencia de género y el proceso por la desaparición de una joven.

En este segundo grupo de muestras se ha analizado el lenguaje jurídico utilizado tanto en prensa escrita (incluyendo algunas muestras de periódicos gratuitos y digitales) como en radio y televisión. Respecto al medio audiovisual, se ha puesto especial interés en incorporar, además de espacios informativos, una selección de distintos programas de entretenimiento que abordaron algunos de los asuntos objeto de la muestra. El motivo es la alta audiencia que estos programas obtuvieron, lo que indica que un gran número de personas se formaron una idea sobre esos procesos judiciales y, en general, sobre el funcionamiento de la Justicia a través de estos formatos televisivos³.

En relación con las muestras temáticas -en concreto, las referidas a dos casos de violencia de género-, se han incluido igualmente comunicados difundidos por los gabinetes de prensa de los Tribunales Superiores de Justicia. Ello se debe a que en numerosas ocasiones esos comunicados son la base informativa de las noticias que elaboran los medios.

2 La recopilación de este grupo de muestras la ha realizado el Gabinete de Comunicación del Ministerio de Justicia. El resto de las muestras ha sido seleccionado por la coordinadora y miembros del grupo de trabajo. Debemos hacer constar nuestro agradecimiento a los medios e instituciones que nos han ayudado en la obtención de las muestras, especialmente a RTVE, Cadena Ser, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y diario El Mundo.

3 La edición del programa de Telecinco "Rojo y negro" emitida el domingo 15 de febrero de 2009, que se dedicó a la desaparición de Marta del Castillo, logró una cuota de pantalla récord del 28,3%, 12 puntos superior a la audiencia media de esa cadena (16%). Casi dos millones de espectadores siguieron ese programa.

Se ha analizado, asimismo, el tratamiento informativo de la primera sentencia que dictó la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre un caso de alcoholemia. Esta selección específica pone de manifiesto que los problemas de incorrección del lenguaje jurídico se deben en ocasiones a la opacidad de la propia resolución judicial. Finalmente, se ha incluido un reportaje en Internet sobre un posible error judicial que evidencia la inaccesibilidad de expresiones jurídicas en latín de frecuente uso en las resoluciones judiciales.

Las muestras han sido estudiadas por un grupo de trabajo integrado por periodistas especializados en información de tribunales, juristas y filólogos. Al informe se adjunta una guía de expresiones latinas que aparecen con frecuencia en los textos jurídicos y cuya traducción en las noticias periodísticas es dificultosa. Para su elaboración ha sido inestimable el trabajo del fiscal Luis Carlos Díez. Creemos que ese documento puede ser de gran ayuda para los medios de comunicación e incluso para los redactores de escritos jurídicos que deseen implicarse en la necesaria tarea de hacer más accesible su lenguaje.

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

1. MUESTRAS ALEATORIAS

Los principales problemas detectados pueden sistematizarse de la siguiente manera:

1.1. Empleo de expresiones o términos jurídicos confusos, incomprensibles o incorrectos

En las muestras analizadas se han apreciado errores o inexactitudes en la descripción de los delitos y de las penas.

Es el caso de la Muestra-2, (en adelante M-x) en la que se indica que un empresario ha sido “*imputado por extorsión con grabación*”, delito inexistente. Parece aludir a la existencia de intervenciones telefónicas de las que se desprendían indicios de coacciones.

En la M-38 se lee: “*El Juzgado de lo Penal (...) consideró al imputado autor de un delito de falsedad en documento mercantil y otro de estafa, ambos en grado de tentativa (...)*”. Aparte de que, en esa fase del procedimiento, lo indicado habría sido hablar de acusado en vez de imputado, no estamos seguros de que el ciudadano profano entienda la expresión “en grado de tentativa”. Sin perder rigor conceptual, habría sido más clara una redacción como la que sigue: “*El Juzgado de lo Penal (...) consideró al acusado autor de un intento de estafa y de haber tratado de falsificar documentos mercantiles*”.

En la M-59 se dice que “*la menor, que actualmente tiene 17 años, reiteró ayer en la audiencia pontevedresa que su padrastro empezó a someterla a diversos tocamientos cuando sólo tenía ocho años. Estas agresiones sexuales, que se repetían dos o tres veces por semana...*”. El lector habrá sacado la conclusión de que los tocamientos son agresiones sexuales, pese a que se trata de abusos sexuales y su penalidad es inferior a la de las agresiones. La agresión sexual (la denominada violación) exige penetración.

En la M-73 se señala que “*la Fiscalía de Valladolid solicita 21 meses de pena*”, sin especificar de qué pena se trata.

El título de la M-53 es: “*La Audiencia rectifica al juez y condena a un año al padre que agredió al director de un colegio*”. Hay que ir al cuerpo de la noticia para enterarse de que es un año de cárcel y no de multa o de alejamiento o de cualquier otra pena.

En la M-90 se afirma que “*Ocho de los acusados llegaron a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y aceptaron 29 años de cárcel*”. No indica si se trata de la pena que correspondió a cada uno de ellos o del total de la pena para los ocho acusados en su conjunto, lo que supone una notable diferencia.

a) El problema de los conceptos jurídicos

Se constata la utilización de numerosos conceptos jurídicos poco accesibles: exequátur, inhibición, firmeza, sentencia de conformidad, eximente incompleta, agravante genérica, alevosía, ensañamiento, providencia, comisión rogatoria, diligencia, sobreseimiento, exhorto, personación, costas, pieza de convicción, incoación, prescripción... Pocas veces el periodista ofrece al lector una explicación, siquiera sea breve, sobre el significado de esos conceptos, lo que contribuye a su inaccesibilidad. Algunos de esos conceptos (diligencia, costas, ensañamiento) tienen un significado vulgar distinto, lo que puede aumentar la confusión del lector.

En numerosas ocasiones el periodista se limita a transcribir el contenido de la resolución, sin explicaciones añadidas. Esto hace que la noticia sea, sin duda, rigurosa desde el punto de vista de la terminología jurídica, pero también incomprensible para el lector.

La M-89 es un ejemplo de este problema. La noticia arranca así: “*El Juzgado de lo Penal número 1 de la capital albaceteña ha condenado a P.T.P. como autor penalmente responsable de un delito de lesiones, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de seis meses de privación de libertad, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximación a la víctima, J.D.F.N., a su domicilio o lugar de trabajo en un radio inferior a 300 metros, así como comunicarse con él por cualquier medio durante un período, por otra parte [sic], de dos años*”. Se trata de un párrafo excesivamente extenso (19 líneas tipográficas) en el que no aparece ni un solo punto, lo que se explica por ser una mera transcripción del fallo judicial. El periodista incorpora expresiones como “*sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal*” que, además de ser inaccesibles, eran prescindibles en una noticia periodística. En cambio, debió explicarse qué es la pena “*accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo*”.

En la M-58 vemos la expresión “*El Juzgado de lo Penal ha condenado a E.M.G. por un delito de lesiones imprudentes*”. Se trata de una traslación de la jerga judicial, pero es muy posible que los lectores se pregunten qué son las lesiones imprudentes y si hay lesiones prudentes. No cuesta nada escribir “*condenado por un delito de lesiones ocasionadas por una acción/ un comportamiento imprudente*”.

Otras veces el informador reproduce miméticamente lo que escucha en una vista pública, aunque sea poco comprensible. En la M-70 se destaca la afirmación del fiscal de que “*el auto de procesamiento carece de la base fáctica suficiente*”. Habría sido más claro señalar, simplemente, que en opinión del fiscal no hay hechos o comportamientos delictivos.

Hemos detectado numerosas confusiones de conceptos jurídicos. Así, se utiliza indistintamente, como si fuesen sinónimos, suspensión e inhabilitación (M-71), denuncia y demanda (M-64, M-72, M-78), demanda y recurso (M-74), acusación y denuncia (M-75), Sala y ponente (M-22), pleito y proceso penal (M-63), auto por proceso (M-89).

La necesidad periodística de buscar sinónimos de “sentencia” para no repetir el mismo término en la redacción de la noticia lleva, incorrectamente, a sustituirla por “auto” (M-55) e incluso por “dictamen” (M-13, M-46, M-55).

b) Redacción confusa del cuerpo de la noticia o de los titulares

La noticia que aparece en la M-78 lleva por título “*Archivan la denuncia contra un médico por no quitarse el ‘niqab’ ante la jueza*”. Del titular se desprendería que el que llevaba el velo era el médico y, no se sabe bien por qué, su negativa a quitárselo desembocó en el archivo de una denuncia contra él.

En el cuerpo de la noticia se explica que una mujer denunció a un ginecólogo por negarse a atenderla, pero su denuncia fue archivada “*por la Audiencia Provincial de Araba*” porque “*la demandante [sic] se negó a destaparse frente a la jueza por sus principios religiosos*”. El contenido de la noticia no hace sino aumentar la confusión del titular: al margen de la equivocación entre demandante y denunciante, no se explica qué hizo el Juzgado de la primera instancia ni cómo llegó el asunto a la Audiencia. Dado que tampoco se ofrecen los argumentos de la resolución que archivó la denuncia, una noticia como ésta, que induce a pensar en un comportamiento arbitrario de la Judicatura, añade a la confusión una patente falta de rigor.

En la M-87, el subtítulo señala “*La Audiencia Provincial rebaja la acusación de asesinato a homicidio al considerar que no hubo ni ensañamiento ni alevosía en los hechos*”. Se trata de una condena a 15 años de prisión impuesta a un hombre por la muerte de una mujer, crimen que es calificado como homicidio y no como asesinato. En el cuerpo de la noticia se insiste en que “*los magistrados rebajan la petición que hicieron tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular*”. En puridad, la Audiencia no rebaja nada: lo que hace es no acoger el delito objeto de acusación, lo que en este caso da lugar a una pena inferior a la solicitada. El término “*rebaja*” estaría bien empleado si, examinando la condena impuesta por un Juzgado de lo Penal, la Audiencia corrige a la baja la pena, lo que no es el caso. Los únicos que pueden “*rebajar la petición*” son los acusadores.

La misma noticia contiene una confusión cuando más adelante señala que “*En la sentencia se absuelve a Miguel Hernández, que no tenía antecedentes penales, del delito de homicidio. También se le absuelve de la agresión sexual (...)*”. Debía decir asesinato en vez de homicidio.

El antetítulo de la M-29 reza: “*Arranca en la Audiencia Provincial la vista oral pública por el incendio de hace cinco años*”. Parecería que se trata del juicio de los hechos, cuando en realidad era el examen de los recursos contra el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción en el caso del incendio de Guadalajara. Las explicaciones sobre las posturas de las partes son, además, confusas: “*El abogado de la Junta mostró su disconformidad con el auto de la jueza aunque sí se mostró de acuerdo con desestimar el recurso de los excursionistas*”. Una redacción más sencilla -y más clara para el lector- habría sido escribir que el abogado de la Junta responsabiliza en exclusiva a los excursionistas y pide la exculpación de todos los demás procesados (políticos de la Junta y alcaldes).

En la M-32 se subtitula “*El proceso estaba visto para sentencia, pero debido a la importancia del testimonio se retomará el día 8 de octubre*”. Tratándose de un juicio penal, si estaba visto para sentencia es porque estaba concluido y, si faltaba por practicar una prueba testifical, es que no estaba visto para sentencia.

En la M-37 puede leerse: “*Justo una semana después de que estallara la operación Brugal con fuerte aparato policial, mediático y político-judicial (...)*”. Ignoramos qué se quiere decir con “*aparato político-judicial*”, peligrosa simbiosis que la noticia no explica.

En la M-44 se indica que “*la sentencia [contra unos políticos] amaga con impedir su regreso -sí acaso se les pasara por la cabeza-en los próximos siete años*”. Se refiere a la pena de inhabilitación especial impuesta, que cita posteriormente. Los fallos judiciales “*no amagan*” y la pena de inhabilitación especial aparta al condenado de su cargo, profesión u oficio durante

el tiempo decretado por el tribunal. La redacción de la noticia puede llevar al lector a creer que el apartamiento de los condenados de sus cargos políticos es una posibilidad o intención futura del tribunal, cuando no hay amago alguno: están imposibilitados para ocupar esos cargos durante el tiempo establecido por el tribunal. La misma noticia añade que “*El fallo que se conoció ayer absuelve a ambos de dos delitos de los que estaban acusados* [sin decir cuáles] *pero les condena por la concesión de la licencia*”, sin precisar tampoco qué delito cometieron al conceder la licencia. Es imprescindible indicar qué infracciones criminales han sido objeto de absolución o de condena.

c). Otras incorrecciones

M-10: “*Durante sus testimonios, de poco más de 20 minutos, los imputados tuvieron que responder a preguntas...*”. Los testimonios se prestan por testigos; los imputados declaran. Es especialmente inidónea la construcción verbal imperativa “*tuvieron que responder...*”: uno de los derechos de los imputados es precisamente, a no responder.

M-29: “*Todos los abogados presentes (Ministerio Fiscal, de familiares de fallecidos, la Junta, el PP y Tragsa)...*”. El fiscal no es un abogado.

M-55: “*En los fundamentos de derecho de la solicitud el juez se reafirma en las consideraciones realizadas...*”. Confunde solicitud con sentencia. En párrafos anteriores confunde sentencia con auto.

M-61: “*El fiscal ultima su escrito de calificación provisional antes de enviarlo al Juzgado*”. El concepto “escrito de calificación provisional” puede resultar inaccesible para un lector profano y es, en este caso, incorrecto. Más claro (y adecuado, tratándose de un procedimiento abreviado) es “escrito de acusación” siempre que la pretensión del fiscal sea acusatoria y no absolutoria.

M-64: “*presuntos delitos penales*”, “*sumario administrativo*”.

M-72: “*recurso de anticonstitucionalidad*”.

1.2. Incorrecta descripción de los procedimientos

En las muestras aleatorias hemos detectado descripciones incorrectas en los siguientes aspectos: procesos sometidos al Tribunal del Jurado, sentencias de conformidad, procedimientos de inconstitucionalidad, la fase de cuestiones previas y los recursos administrativos y judiciales.

Respecto al Jurado, las dificultades se centran en el procedimiento de selección de sus miembros, lo que puede deberse en parte a la falta de familiaridad con el funcionamiento de este tribunal, reintroducido en España hace sólo 15 años. La farragosa redacción de la propia ley que regula el funcionamiento del Jurado tampoco ayuda en exceso a un consultor profano en la materia. En la M-47 se lee: “*La sala (sic) quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en Vigo continúa con la fase de `tacha` del jurado popular que dará paso a la selección de los primeros seleccionados que, el próximo septiembre, deberán volver a someterse a la decisión del fiscal y de los abogados de la acusación particular, así como de la defensa, en el acto del juicio sobre su participación en la segunda vista*”. En la M-73: “*El juicio debe celebrarse con un tribunal de jurado integrado por nueve personas y dos suplentes. Previamente, la Audiencia Provincial ha elegido a 36 candidatos residentes en la provincia de Valladolid para poder formar un grupo de 20 que servirán a las partes, acusadora y particular, para designar el jurado titular de nueve miembros definitivos*”.

Los procedimientos de inconstitucionalidad parecen ser especialmente desconocidos, de lo que son reflejo la M-72 (*“Los ecologistas también están a la espera de el TSJC se pronuncie sobre el recurso de anticonstitucionalidad solicitado hace dos semanas (...). Una vez que el TSJC decida abordar el mencionado recurso, las partes tendrán un plazo de 10 días para presentar alegaciones antes de que el tribunal eleve al Tribunal Constitucional el caso”*) y la M-67 (*“Ben Magec elevará una petición de inconstitucionalidad a través del Defensor del Pueblo”*).

Varias noticias (M-58, M-89) utilizan el concepto “sentencia de conformidad” sin ofrecer una explicación asequible. En un caso es *“una sentencia que se dicta oralmente de conformidad en el acto del juicio”* y en otro *“las partes personadas solicitaron al juez que se dictase sentencia de conformidad con el escrito definitivo de acusación del Ministerio Fiscal y que previamente había variado sobre el inicial para finalmente interesar precisamente la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta”*. No se explica, llanamente, que se trata de un fallo dictado sobre la base de un acuerdo alcanzado entre la acusación y defensa por el que el acusado asume haber cometido los hechos delictivos a cambio de una rebaja de la pena, lo que hace innecesario celebrar el juicio oral.

La fase de cuestiones previas está mal explicada, por ejemplo, en la M-54: *“Las cuestiones previas de los juicios, resueltas a través de un auto y no de viva voz o en sentencia, no tienen posibilidad de recurso y el juicio se celebra sin ellas”*. Cuando no se conoce suficientemente el procedimiento, es preferible ahorrar explicaciones incorrectas o confusas.

La M-74 refleja una reiterada confusión entre el ámbito administrativo y el ámbito jurisdiccional. La noticia se refiere a la condena penal por una falta de vejación impuesta a un funcionario por insultar a un compañero. La condena dio lugar a una sanción disciplinaria de carácter administrativo. En este contexto, se relata que *“Agotada la vía administrativa, el condenado [en realidad, el sancionado] formaliza una demanda recurriendo la sentencia [en realidad, la sanción disciplinaria], pero el Juzgado de lo Social la desestima. (...) La Sala de lo Social del Tribunal Superior ha desestimado la demanda [en realidad, el recurso contra el fallo del Juzgado de lo Social]”*.

Hemos encontrado otras inexactitudes menores, por ejemplo respecto al procedimiento para resolver un indulto. En la M-66 se afirma que *“La Fiscalía ya rechazó la petición de indulto (...). Ninguno de estos informes son vinculantes para la decisión final, que corresponde al Ministerio de Justicia”*. Debió decir que la Fiscalía *“ya se pronunció en contra de la concesión del indulto (...). Ninguno de estos informes son vinculantes para la decisión final, que corresponde al Consejo de Ministros/Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia”*.

1.3. Incorrecta descripción de los órganos de la Administración de Justicia o de sus funciones

Los principales problemas que hemos observado se refieren a las siguientes cuestiones:

a) Confusión de jurisdicciones: *“El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela decretó ayer prisión eludible con fianza...”* (M-2), *“El Juzgado de primera instancia ha abierto una causa por los delitos de cohecho...”* (M-8). Son los Juzgados de Instrucción los competentes en la jurisdicción penal. En la M-41 se atribuyen facultades de instrucción a un Juzgado de lo Mercantil: *“El juez que instruye la impugnación de Iberdrola de varios acuerdos adoptados en la última junta de accionistas de la constructora ACS...”*.

b) Confusión de órganos judiciales: *“Jacobo Piñero saliendo ayer del Juzgado de Vigo tras personarse por primera vez en la sala quinta”* (pie foto en la M-47).

c) Denominación incompleta o incorrecta del órgano judicial: “*El juez de Penal 3 de Granada*” (M-40), “*El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela*” (M-2), “*La sala quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra*” (M-47), “*La sala de la Audiencia Provincial considera...*” (M-88).

Nos llama la atención el frecuente empleo del calificativo “alto tribunal” para referirse a los Tribunales Superiores de Justicia (ver M-67 o M-69). Nos parece impropio en la medida de que por encima de los TSJ se encuentra el Tribunal Supremo y, en materia de garantías constitucionales, el Tribunal Constitucional.

d) Errónea descripción de funciones: “*La Fiscalía concretará la pena contra Fabra...*” (M-35) [Corresponde a los jueces concretar la pena y a los fiscales, concretar la petición de pena]. “*El juez acordó los mismos cargos para su hijo*” (M-10) [Los cargos se atribuyen/imputan, no se acuerdan]. “*El juez archiva la imputación contra el padre...*” (M-57) [Lo que se archiva son los procesos; las imputaciones se rechazan/deseestiman. Más directo y más claro: “*El juez exonera/exculpa al padre*”].

e) Utilización indistinta de juez y tribunal. El ejemplo más patente lo encontramos en el titular y el subtítulo de la M-41: “*El juez equilibra la batalla judicial que enfrenta a Iberdrola con ACS. El tribunal dice que la auditoría de Deloitte no invalida el fondo de la denuncia*”.

Esa indebida identificación se encuentra también en el cuerpo de las noticias y puede responder a la exigencia periodística de no reiterar términos. Juez y tribunal no deben utilizarse como sinónimos, primero, porque no lo son. Pero también porque envían al receptor un mensaje equivocado: si la actuación es de un juez significa que el asunto lo ha visto una sola persona, mientras que si la actuación es de un tribunal, el lector puede deducir que la cuestión ha sido examinada por tres personas al menos. De otro lado, las decisiones de los órganos judiciales unipersonales habitualmente son recurribles, lo que transmite al lector la idea de la provisionalidad de la decisión, tan relevante cuando se trata de procesos penales. La necesidad del informador de no reiterar términos no puede imponerse al rigor conceptual.

Para sustituir a “Tribunal” puede emplearse “Sala” (con mayúscula), “Sección (sólo si se trata de Audiencias Provinciales o de los tribunales que integran las Salas de los TSJ) o “los magistrados”. Para sustituir a “juez” puede emplearse “el Juzgado”, el “instructor” (sólo si se trata de un asunto penal), el “juzgador” (si es quien dicta sentencia) o “el magistrado” (salvo que se trate de un miembro de la carrera judicial recién ingresado).

1.4. Presuntos autores, presuntos delitos. La confusión entre imputados, detenidos, acusados, sospechosos...

Hay conceptos jurídicos que tienen una dimensión especialmente relevante. Es el caso de todos los relacionados con la presunción de inocencia. El grupo de trabajo ha considerado imprescindible dedicar un apartado específico al tratamiento de esta cuestión porque, más allá de la mera corrección o incorrección en el uso de los conceptos, la terminología periodística incide aquí en un derecho angular del proceso penal.

La presunción de inocencia no sólo rige en el seno del procedimiento sino que presenta una dimensión extraprocesal que obliga a todos los ciudadanos -incluidos, naturalmente, los periodistas- a considerar a un encausado inocente y a tratarle como tal hasta que recaiga un fallo condenatorio firme. Ésta es una regla básica en un Estado de Derecho que deben tener presente los encargados de canalizar el derecho de los ciudadanos a la información. El lenguaje de los medios es, en este sentido, uno de los indicadores del respeto a la presunción de inocencia.

En el caso de la muestra aleatoria que hemos examinado, la mayoría de las noticias acuden a la fórmula “presunto autor [del tal o cual delito]” en la creencia de que con ese recurso satisfacen la exigencia de respetar la presunción de inocencia y, al mismo tiempo, se cubren ante eventuales demandas o querellas promovidas por los aludidos. La aceptación del término “presunto” ha sido tal que su uso no es sólo común en los medios de comunicación sino que lo encontramos incluso en resoluciones judiciales.

Sin embargo, debe llamarse la atención sobre el hecho de que, desde el punto de vista de su significado jurídico, es del todo inadecuado calificar de “presunta” la autoría de un delito no enjuiciado. Ello es así porque, en el Derecho, lo que se presume es la inocencia y no la culpabilidad. Se produce, de este modo, la paradoja de que un término jurídico que debería afianzar el derecho del encausado a que se le considere inocente conduce al significado contrario: la expresión “presunto autor del delito” lo que presume es la culpabilidad. Desde una perspectiva jurídica, es incorrecto aplicar el término “presunto” a cualquier otra realidad que no sea la inocencia del encausado.

Es cierto, no obstante, que, en su significado común, el término “presunto” equivale a “supuesto” e incluso la Real Academia de la Lengua ha autorizado su aplicación a “aquel a quien se considera posible autor de un delito antes de ser juzgado”. Pero, dada la contradicción entre su significado jurídico y su significado vulgar, este grupo de trabajo recomienda la utilización de otros términos que consideramos más apropiados y también más respetuosos con el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

El primero de los términos recomendados es “supuesto [autor del delito]”. No cabe duda de que el significado de “supuesto” (suposición, hipótesis) remite a un verdadero juicio de provisionalidad sobre la autoría de un delito aún sometido a investigación. Lo “supuesto” es lo que aún no se ha demostrado como cierto, por lo que es un término particularmente idóneo cuando se trata de procesos penales en los que no se ha dictado sentencia firme.

La otra opción es escoger el término que resulte adecuado a la concreta fase procesal en la que se encuentra el asunto. Podrá hablarse, así, de sospechoso, investigado, detenido, imputado, procesado o acusado dependiendo de la evolución del procedimiento. Es evidente que el rigor en el empleo de cada uno de estos términos y la capacidad de distinguir entre las secuencias procesales exige que el periodista que informa sobre lo que sucede en los tribunales tenga conocimientos jurídicos. Los periodistas no tienen que convertirse en juristas, pero sí es obligado que sepan de lo que hablan o escriben. Primero, porque tienen un compromiso de veracidad con la ciudadanía a la que sirven. Pero también porque, en estos casos, está en juego nada menos que el respeto a los derechos fundamentales de las personas y no es aceptable que los medios de comunicación acudan al empleo de términos que, además de incorrectos, anticipan juicios incriminatorios e incluso de culpabilidad.

Así sucede en un gran número de las muestras aleatorias analizadas (M-3, M-9, M-18, M-19, M-27, M-28, M-38, M-54, M-59, M-64, M-65, M-70, M-90). Se produce una utilización indistinta de los términos “imputado” y “acusado”, que tienen significados dispares y corresponden a diferentes fases del procedimiento. Se atribuye la condición de “imputado” e incluso la de “acusado” a quien simplemente ha sido objeto de una denuncia. Se habla de “procesado” en el marco de un procedimiento abreviado (en el que no hay procesamiento). Y, sobre todo, se plantea el problema de denominar “imputado” a quien está sometido a una instrucción penal, incluso incipiente, sin que aún el juez de instrucción haya determinado que el hecho investigado constituye un delito y haya identificado a su posible autor.

A este respecto, es paradigmática la muestra M-4, en la que se menciona la “imputación” del presidente de una Diputación Provincial que acaba de ser llamado a declarar por el juez de instrucción por primera vez. La noticia enumera los delitos que se le “imputan” y hasta realiza un cálculo de las penas de prisión a las que podría ser condenado (“*El presidente de la Diputación Provincial de Alicante se expone a una pena de hasta 10 años de cárcel*”, arranca

la noticia). Estos conceptos -delitos, penas- se manejan cuando no se sabe siquiera si algún día habrá acusación y por cuáles delitos. El único concepto claro es que el político en cuestión está siendo investigado por unos determinados hechos.

Debemos señalar que, en muy buena medida, los problemas terminológicos expuestos se deben a la confusión apreciable en el propio ordenamiento jurídico. La vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal presenta una mezcolanza apenas discernible entre conceptos que deberían emplearse de forma rigurosa, para empezar, en la propia norma. Como muestra, véase el artículo 118, cuya trascendencia es de tal magnitud que su contenido se anuda al derecho de defensa. Pese a ello, presenta un cóctel terminológico que va desde la “detención” al “procesamiento” pasando por la “imputación” y hasta utiliza como equivalentes los conceptos “personas presuntamente inculpadas” y “personas interesadas”⁴.

También es la ley la que establece que, en la primera comparecencia ante el juez, éste “informará al imputado de los hechos que se le imputan” (artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Es difícilmente exigible a los periodistas que prescindan del concepto “imputado” si en las propias citaciones de los investigados para que presten declaración consta que se les llama en calidad de “imputados”. Cierto es que se trata de una imputación formal cuya finalidad es que los citados puedan comparecer asistidos de abogados y con todos los derechos inherentes a la condición de imputados. También es cierto que esa imputación formal no equivale a una imputación judicial (que está prevista para una fase posterior del procedimiento cuando, acabada la investigación, el instructor concluye que hay motivos para que el investigado vaya a juicio). Pero esa sutil distinción entre *imputación formal* e *imputación judicial* no atenúa el contenido incriminatorio del término.

En alguna de las muestras seleccionadas encontramos referencias a esta cuestión. Así, en la M-3: “Las comparecencias de ayer tuvieron lugar después de que el presidente fuera imputado formalmente en la investigación”. El empleo del término “imputado” es aquí correcto si se trata de una investigación judicial, pero no si aún se está en la fase de investigación policial y el asunto no se ha judicializado. Es un error frecuente atribuir a la Policía la facultad de “imputar”, facultad que sólo tienen los jueces. La Policía sospecha de fulano o atribuye a fulano un hecho supuestamente delictivo.

Otras noticias ponen de manifiesto un erróneo entendimiento de la presunción de inocencia. En la M-21 aparece el siguiente texto en relación a una sentencia condenatoria por tráfico de drogas: “Francisco Javier S. C., hermano del principal condenado, se beneficia de las dudas de los magistrados...”. La presunción de inocencia no es un beneficio, es un derecho fundamental que obliga al tribunal a absolver si no alcanza una certeza absoluta sobre la culpabilidad. En la M-30 se destaca en un sumario, a propósito de un fallo absolutorio, que “Cuatro años de cárcel era la pena que pedía el denunciante para Chinchilla y su entonces socio, mientras que el fiscal los vio inocentes”. El fiscal no los vio inocentes, eran inocentes: el fiscal no los vio culpables.

Hay otras muestras (M-1, M-25, M-47, M-71) en las que, junto al empleo de afirmaciones categóricas (“tapó la muerte”, “jefe de la red”, “con el asesino de sus hijos en la calle”, etc.) se produce una total ausencia de términos como “supuesto” o “presunto”, todo ello antes de que los asuntos hayan sido juzgados. La M-71 se refiere al caso de un menor de edad detenido porque “apenas una hora antes había robado el móvil a una joven”; en el titular se le califica de “ladronzuelo”, sin que se haya dictado condena alguna.

4 El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece lo siguiente: “Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de **detención** o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su **procesamiento**, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho. La admisión de denuncia o querrela y cualquier actuación procesal de la que resulte la **imputación** de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los **presuntamente inculpad**os. Para ejercitar el derecho concedido en el párrafo primero, las **personas interesadas** deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Letrado (...)”.

Al igual que siempre sucede con la autoría, en muchos casos los delitos también son “presuntos” o “supuestos”, bien porque aún no se ha probado la infracción (por ejemplo, el cohecho o la falsedad documental), bien porque no se conoce todavía la correcta tipificación penal (homicidio o asesinato, agresión sexual o abuso sexual, etc.). En las muestras analizadas se produce, salvo alguna excepción (el texto de la M-59), una correcta utilización del término “presunto” en relación a los delitos. Destacamos a este respecto la M-65 -que en un caso de violencia de género habla de “*presunto delito de homicidio*”- y la M-81, que se refiere a “*la presunta financiación ilegal del partido*”.

1.5. El lenguaje de las imágenes

Las noticias periodísticas transmiten los mensajes a través del texto (escrito o hablado) y por medio de las imágenes. El rigor terminológico no es sólo exigible a las palabras: las imágenes también pueden y deben difundir mensajes -en nuestro caso, mensajes jurídicos- apropiados. Consideramos que esto no sucede cuando el medio de comunicación refleja a través de la imagen un mensaje que no se ajusta a la realidad del procedimiento judicial o cuando anticipa un prejuicio de culpabilidad incompatible con el respeto a los derechos fundamentales (presunción de inocencia, derecho a la propia imagen, honor). Dicho de otra manera: las imágenes sobre asuntos judiciales deberían transmitir la misma corrección en su significado que el lenguaje escrito, y ello presenta exigencias adicionales porque la carga incriminatoria de las imágenes es habitualmente muy superior a la del texto escrito o hablado.

En las noticias de la muestra aleatoria seleccionada se reproducen fotografías que en términos generales transmiten un mensaje jurídico coherente y apropiado al momento de los procesos. En varias muestras (M-2, M-31, M-21, M-43, M-44, M-54) aparecen en planos cercanos de conocidos empresarios y políticos implicados en casos de supuesta corrupción. Algunas fotos están tomadas en la calle y nadie aparece esposado. En otros casos, se les fotografía en el banquillo, pero o bien se trata de cargos públicos electos (M-31) o bien ya han sido condenados (M-43, M-44). En la M-21 y la M-54 se reflejan también imágenes del juicio, pero los acusados -aquí, personas sin relevancia pública- aparecen de espaldas (en un caso se trata, además, de miembros de las Fuerzas de Seguridad).

Otro grupo de muestras es más cuestionable. En la M-47 aparece en la calle un acusado -al que el titular se refiere como “*asesino confeso*”- pendiente de juicio y, por tanto, plenamente amparado por el derecho a ser considerado inocente. En las muestras M-87, M-88 y M-89 aparecen personas esposadas y conducidas por la fuerza pública. La imagen de ciudadanos engrillatados es especialmente peyorativa para su dignidad. Tiene por sí misma, sin necesidad de texto alguno, tal potencial incriminatorio que se corre el riesgo de instalar en la opinión pública un mensaje anticipado de culpabilidad no ajustado al momento del procedimiento judicial y, sobre todo, incompatible con los derechos fundamentales del afectado. Los legisladores y los poderes públicos son conscientes de esta situación y han tomado prevenciones específicas (el artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 5.3 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, la Instrucción 3/2009 de la Fiscalía General del Estado) para tratar de evitar que los derechos fundamentales de los detenidos o encausados se vean perjudicados indebidamente⁵.

5 La Instrucción 3/2009 de la Fiscalía General subraya que “*El detenido ha de ser tratado como inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad y, como consecuencia de ello, debe ser protegido de la curiosidad del público y de una excesiva publicidad. Especialmente debe evitarse que aparezca esposado frente a los fotógrafos y las cámaras de televisión, ya que los derechos del inculpado han de ser tenidos en cuenta por los medios de comunicación*”. El asunto se ha debatido recientemente en el Parlamento. El diputado Jordi Jané, portavoz del grupo parlamentario de Convergencia y Unión en materia de Justicia, planteó la cuestión al fiscal general durante la comparecencia que tuvo lugar en el Congreso el 21-10-2010: “*No podemos más que lamentar cómo se producen determinadas detenciones, cómo se producen determinadas entradas a los juzgados en procesos de gran relevancia mediática. Si en ocasiones lo que se busca es la llamada ‘pena del telediarlo’, de verdad que se consigue; se consigue porque hay un linchamiento mediático de las personas que deberíamos poder regular. Aplaudo la instrucción 3/2009 sobre el control de la forma en que ha de practicarse la detención, pero me gustaría que se cumpliera más esta instrucción, que le hicieran más caso. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 520, dispone que la detención y la prisión provisional deben efectuarse de la manera y en la forma que perjudiquen lo menos posible a la persona y a la reputación del inculpado. No siempre es así. Estamos incumpliendo este*”

1.6. Terminología de género

En las noticias periodísticas analizadas aparece tanto “la juez” como “la jueza”, con preferencia de este último término, admitido por la Real Academia de la Lengua (ver M-29, M-53, M-70, M-78, M-89).

Se emplea “la magistrada” y nunca “la magistrado” (que se utiliza, de forma tan llamativa como incorrecta, en la rúbrica de algunas plantillas judiciales).

En cambio, las noticias suelen soslayar la identificación del género de la representación del Ministerio Público. En la muestra analizada nunca aparece “la fiscal” (también aceptado por la Academia), sino siempre “el fiscal” o “la Fiscalía”. El motivo puede ser la falta de eufonía de la primera de las formas por el exceso rítmico de la misma vocal (a).

Los medios deberían hacer el esfuerzo de asignar la denominación al sexo de la persona que corresponda.

2. MUESTRAS TEMÁTICAS

2.1. El caso de Diego P.

El 25 de noviembre de 2009, el joven Diego P. fue detenido como supuesto responsable de la muerte de una niña de tres años, hija de su pareja. En virtud de un inicial parte médico elaborado en un centro de salud y del atestado policial, también se le atribuyeron delitos de lesiones y de agresión sexual.

Las noticias aparecidas en los momentos que siguieron a la detención (se han analizado muestras de periódicos nacionales y locales, agencias, informativos radiofónicos y telediaris) utilizaron sistemáticamente el término “presunto autor” de los delitos mencionados⁶, cuando no directamente “asesino”.

En la portada de un diario nacional se reprodujo un primer plano del joven, captado cuando iba a ser puesto a disposición judicial, junto al título “*La mirada de un asesino de una niña de tres años*”. En el subtítulo, “*Tenerife llora la muerte de Aitana, que no superó las quemaduras y los golpes propinados por el novio de su madre*”. En páginas interiores se tituló: “*Novio, canguro y asesino*”.

En otro medio nacional, con esa misma fotografía pero ampliada, de manera que Diego P. aparece de cuerpo entero y esposado junto a dos agentes, se tituló “*Los monstruos sí existen y están entre nosotros*”. El texto indicaba: “*Parece imposible creer que una persona sea capaz de acabar a golpes con la vida de una niña de tres años tras someterla a torturas (...). El hombre, en ocasiones, es peor que un animal (...) La llevó a un centro de salud, probablemente para ocultar su responsabilidad (...)*”. En las páginas interiores se leía: “*La niña, de tres años, luchó todo lo que pudo por sobrevivir a las palizas y quemaduras del novio de su madre*”.

De manera más o menos categórica, la atribución de hechos delictivos a Diego P. se produjo en prácticamente todos los medios de comunicación. La imagen del detenido esposado fue

mandato legal, no estamos siguiendo la instrucción del fiscal general del Estado. Por ello aprovecho esta comparecencia para decir que deberíamos acrecentar los esfuerzos, las instrucciones, prever los casos en que sabemos que eso va a producirse y quizá desde la Fiscalía, hablando con el juez, ver de qué manera se pueden organizar mejor las entradas y las salidas. Porque la justicia no es espectáculo ni es linchamiento mediático. La justicia en un Estado democrático es presunción de inocencia, aportación de pruebas, llevar las cosas por el cauce adecuado, el que todos queremos, por el que se deben conducir, y en su día ya habrá las sentencias absolutorias o condenatorias”.

6 Es preciso insistir aquí en lo subrayado en el apartado 3.1.4. sobre la incorrección jurídica de aplicar el término “presunto” a cualquier otra realidad que no sea la inocencia de la persona implicada en un proceso judicial.

reproducida de forma generalizada. Es innegable que textos e imágenes transmitieron mensajes absolutamente contrarios a la presunción de inocencia. El 28 de noviembre, Diego P. fue puesto en libertad sin cargos tras constatarse que la muerte de la pequeña se debió a las lesiones causadas por una caída accidental desde un columpio.

Las noticias, particularmente las de la prensa escrita, incurren en otras incorrecciones del lenguaje jurídico. Se escribe que Diego P. está “*acusado de homicidio*” o “*imputado por un delito de asesinato*” cuando su situación procesal no pasó de ser la de detenido o sospechoso.

Los datos procedentes del Juzgado sobre lo que en realidad estaba sucediendo en el proceso hubieran aconsejado una mayor cautela expresiva. Se supo que desde el primer informe forense quedó descartada la existencia de lesiones sexuales (los alarmantes “*desgarros vaginal y anal*” referidos por los medios). Ello “*llevó a la Guardia Civil a cambiar las imputaciones con las que presentó al detenido ante el juez, acusándolo de asesinato y no de asesinato y agresión sexual, como inicialmente planteó*”, señalaba la edición digital de un periódico canario.

Trascendió, sobre todo, que el juez de instrucción había decidido agotar “*el tiempo legal de retención sin que se produzcan cargos*”. Al margen de la impropiedad del concepto “*retención*” y de la expresión “*producir cargos*”, lo relevante es que el instructor no había atribuido al detenido hecho criminal alguno tras tomarle declaración y realizar las primeras diligencias, lo que contrasta a todas luces con la precipitada tipificación penal realizada por los medios. Debe subrayarse, como ya hicimos al analizar las muestras aleatorias, que las Fuerzas de Seguridad no acusan ni imputan. Tampoco pueden, por tanto, “*cambiar las imputaciones*”.

En algunas noticias se insiste erróneamente en el concepto de “*acusado*” incluso cuando Diego ya ha sido puesto en libertad sin cargos. Un teletipo de agencia difundido a las 18.05 horas del 28 de noviembre señala que “*El auto judicial que pone en libertad al acusado afirma que...*”.

El lenguaje jurídico de los informativos radiofónicos resulta más correcto. Aparte de la aconsejable utilización del subjuntivo (“*la niña pudiera haber fallecido a consecuencia de...*”), sólo se caracteriza a Diego P. de “*presunto autor de malos tratos*”.

En los telediarios se habla del detenido como “*presunto maltratador*” y “*supuesto agresor*”. También sucumben a la atribución a las fuerzas de seguridad de facultades de las que carecen (“*Lo que sí sabemos es que la Guardia Civil le acusa de asesinato*” en lugar de “*la Guardia Civil le considera sospechoso de asesinato*”). La imagen de Diego P. esposado es profusamente difundida junto a los gritos de fondo de los vecinos: “*¡Sinvergüenza! ¡Bandido!*”.

2.2. Violencia de género

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial contra la Violencia de Género difundieron en abril de 2008 y junio de 2007, respectivamente, sendas notas de prensa con ocasión de la muerte de dos mujeres en Alovera (Guadalajara) y Vitoria. La primera falleció por disparos de su ex pareja, que acto seguido se suicidó; la segunda mujer recibió varias puñaladas a manos de su marido.

Es exigible a los comunicados de prensa procedentes de las instituciones un empleo riguroso de los términos jurídicos, ya que en muchas ocasiones constituyen la base de las noticias que transmiten los medios y, a veces, son la única fuente oficial de información.

Es reseñable que las dos notas incurran en una utilización impropia del término “*presunto*” para aludir a los autores de los hechos y a los delitos perpetrados. Los redactores de los comunicados optaron por ese vocablo en lugar de “*supuesto*”, más adecuado, como se explicó en el apartado 3.1.4.

En el comunicado sobre el crimen de Alovera aparecen, indistintamente, “*presunto asesino*” y “*presunto homicida*”. Con el primer término se atribuye un delito de asesinato; con el segundo, de homicidio. Pero, dada la dificultad de precisar si concurrieron las circunstancias que cualifican el homicidio para convertirlo en un asesinato (alevosía, ensañamiento...) y teniendo en cuenta además que ese extremo nunca se podrá determinar a falta de juicio oral, habría sido preferible referirse simplemente al autor de la muerte de S. J. B., sin tildarle de asesino o de homicida. El titular de la nota oficial (“*El presunto asesino de Guadalajara tenía varias medidas cautelares en vigor*”) habría sido más correcto con la siguiente construcción: “El autor de la muerte de su ex mujer en Guadalajara tenía...”.

La nota de prensa sobre el apuñalamiento de la mujer de Vitoria incurre en un defecto similar: califica el hecho de “*presunto homicidio*” y lo hace erróneamente, como se puso de manifiesto cuando la Audiencia de Álava juzgó al marido de la víctima. El tribunal provincial le condenó por un delito de asesinato al apreciar la forma alevosa del ataque (sentencia 117/09 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava). Es claro que, en el momento en que difundió su comunicado, el Observatorio desconocía qué tipo delictivo iba a determinar el tribunal. Pero precisamente por ello, y a falta de datos objetivos del todo seguros en los que apoyarse, no debió anticipar una u otra calificación jurídica.

El documento del Observatorio contiene otras aseveraciones que pudieron inducir a error o confusión.

La primera es la afirmación de que la denuncia interpuesta por la víctima contra su marido cinco meses antes de morir apuñalada -denuncia en la que solicitaba del Juzgado una orden de protección que no fue acordada- tuvo que archivar porque “*la infracción penal denunciada únicamente se objetivaba (...) en injurias y vejaciones, perseguibles sólo a instancia de parte en el derecho español*” y la denunciante había manifestado su voluntad de renunciar a acciones penales o civiles contra su cónyuge.

Sin embargo, consta en el propio comunicado que la denuncia de la mujer lo fue “*por un presunto delito de maltrato psicológico, fundamentalmente injurias y vejaciones continuadas*”. El delito de maltrato psicológico (delito contra la integridad moral del artículo 173.2 del Código Penal) es perseguible de oficio. De hecho, su existencia quedó verificada en el fallo de la Audiencia de Álava, que condenó al marido no sólo por asesinato sino también, justamente, por la infracción penal denunciada por la mujer: maltrato físico y psíquico continuado. La errónea tipificación del delito en que incurrió el comunicado oficial llevó a los medios a entender que no había otro remedio que archivar la denuncia de quien luego sería asesinada, cuando no era así.

La segunda afirmación inexacta se refería a que el Juzgado contaba sólo con la declaración de la víctima “*pues no constaba dato alguno que permitiera inferir la existencia de otros hechos delictivos*”. En realidad, la mujer había formalizado en los mismos Juzgados de Vitoria una denuncia anterior contra su marido por amenazas y lesiones, aportando un informe de asistencia sanitaria en el servicio de urgencias que reseñaba la existencia de hematomas y eritemas en su cuerpo. Las diligencias previas iniciadas también se archivaron.

La dualidad presunto asesino/presunto homicida que aparece en los comunicados de prensa se reflejó igualmente en las noticias periodísticas. La edición digital de un diario vasco subtítulo: “*El presunto homicida se entregó dos horas después de asesinar a su esposa*”. Los telediarios y los informativos radiofónicos optaron por “*presunto asesino*”.

En una de las muestras de radio analizadas, el locutor se refirió al derecho fundamental a la presunción de inocencia como un “*formalismo*”: “*El autor -siempre ‘presunto’ por aquello de los formalismos- de la muerte de su ex mujer (...)*”. Tras su introducción, el director del informativo dio paso a un redactor local, según el cual el ex marido de la víctima “*tenía dos denuncias anteriores y un quebranto de condena*”. El informador se refería a la vulneración

por el ex marido de una orden de alejamiento que le había impuesto el Juzgado como medida cautelar, por lo que no podía hablarse de quebrantamiento de condena (que implicaba haber sido juzgado ya).

2.3. El caso A.

El proceso se refiere a la desaparición de una menor de edad, hecho por el que fueron detenidos tres de sus amigos, uno de ellos también menor.

El lenguaje jurídico utilizado presenta en todos los soportes (prensa, radio y televisión) patologías ya observadas en las anteriores muestras. Pero el intenso tratamiento mediático que se produjo y los formatos escogidos acentuaron los problemas relacionados con un incorrecto entendimiento del significado del derecho a la presunción de inocencia, del derecho a la propia imagen y del derecho a la intimidad, fundamentalmente⁷. Las incorrecciones detectadas se pueden sintetizar de la siguiente forma:

Confusión de delitos: Desde el primer momento tras la detención de los supuestos implicados, los medios de comunicación calificaron jurídicamente los hechos. Se utilizan como equivalentes “asesinato” y “homicidio” y se incluye o se descarta el delito de agresión sexual según las pistas informativas que se van obteniendo (los propios informadores reconocen que “*han trascendido escasos datos*” debido al secreto sumarial y admiten que “*los investigadores manejan la información con muchas reservas*” dado que las declaraciones de los detenidos no casaban con las pesquisas policiales, nada de lo cual llevó a los medios a adoptar mayores cautelas en los términos utilizados).

Así, hay noticias en las que el titular indicaba que “*El ex novio de A. confiesa su asesinato ante la Policía*” mientras que el texto señalaba: “*X confesó el homicidio...*”. En el informativo de un canal de televisión regional, la periodista que retransmitía desde el exterior de la comisaría comenzó su crónica diciendo: “*Aquí está detenido el presunto homicida del asesinato de A.*”.

Algunas informaciones añaden calificaciones jurídicas “*alternativas*” referidas al delito de detención ilegal con desaparición forzada, que no se define de forma correcta. En el informativo emitido por una cadena de radio, la locutora señala que “*X y Z han sido enviados a prisión imputados de los supuestos delitos de asesinato, alternativamente de homicidio y también de detención ilegal, es decir, ocultar el paradero de una persona que pudiera estar viva, porque pudiera ser que cuando arrojaron el cuerpo de A. al río todavía estuviera con vida*”.

La explicación que aparece en un periódico nacional ilustra bien la confusión conceptual que se produce, de forma generalizada, sobre los delitos: “*Nadie sabe con certeza si A. falleció en el piso de X o si la arrojaron viva al río. De ello depende que los jóvenes sean acusados de asesinato u homicidio, incógnita que despejará el cadáver si aparece*”. El lugar del fallecimiento nada tiene que ver con la calificación jurídica del delito, y los supuestos implicados fueron procesados por asesinato sin que el cadáver haya aparecido.

En noticias de prensa y en espacios de televisión tanto informativos como de entretenimiento se especula con pronósticos de condena. En un programa de sucesos de una cadena nacional se pregunta a alguien presentado como experto qué “pena” podría recaer sobre el menor Y. La respuesta -“*con hasta ocho años*”, se supone que de internamiento- es incorrecta de

7 La Fiscalía emprendió acciones civiles contra medios de comunicación que utilizaron profusamente y a cara descubierta a menores de edad relacionados con las diligencias judiciales -en algunos casos, tenían la condición procesal de testigos- y solicitó a las redes sociales la eliminación de los perfiles de la menor desaparecida, cuyos contenidos de carácter íntimo estaban siendo difundidos. El Consejo Audiovisual autonómico elaboró el 27 de febrero de 2009 un informe sobre el tratamiento informativo del asunto en el que concluía que se había producido “*un predominio del tratamiento espectacularizado y morboso (...), sustituyendo la labor informativa por el espectáculo de la tragedia humana, un tratamiento que antepone el detalle morboso o la mostración de la indignación popular y de las escenas de duelo por encima del dato puramente informativo y del tratamiento periodístico digno*”.

acuerdo con lo que prevé la ley aplicable a los menores en los casos en que se produce una pluralidad de infracciones. La medida (que no pena) de ocho años de internamiento se establece para el supuesto de menores que tienen 16 o 17 años de edad y cometen un solo delito muy grave. Pero Y tenía 15 años en el momento de los hechos y se le atribuyó la autoría de dos delitos muy graves (asesinato y agresión sexual). Los participantes en el programa podían ignorar tales extremos en los momentos iniciales del proceso judicial, pero precisamente por ello adelantar hipótesis de condenas es sumamente arriesgado desde el punto de vista del rigor jurídico.

Confusión en las supuestas responsabilidades concretas de los detenidos: Las informaciones de prensa, radio y televisión se refieren sistemáticamente a X como “asesino confeso”. El término traslada a la opinión pública un prejuicio sobre la culpabilidad del detenido más allá de toda duda: ya ha confesado, con eso es suficiente. “Asesino confeso” es, sin embargo, un término sumamente matizable. En el Derecho español, la autoinculpación no necesariamente equivale a culpabilidad ya que depende de su fiabilidad y de la existencia o no de otras pruebas.

Hay espacios en los que se tacha a X, sin paliativos, de asesino. Es el caso del programa televisivo de sucesos antes citado, en el que se entrevistó a cara descubierta a una menor de edad que fue la última novia del sospechoso. “¿Sabes que has estado enamorada de un asesino?”, le espetó el conductor del programa. También es el caso del telediario nocturno de una cadena nacional el mismo día de los arrestos (“La familia ha dicho que va a luchar para que el asesino y su cómplice no salgan a los dos días de la cárcel”).

Respecto a Z, en las informaciones aparecidas un día después de las primeras detenciones se afirma que su participación “se limita a la ocultación del cadáver” y también que se trata de un “cómplice”. Esto es jurídicamente contradictorio, ya que la complicidad exige haber cooperado en la ejecución del crimen con actos anteriores o simultáneos, pero no posteriores.

En uno de los informativos de una cadena de televisión autonómica se afirma, respecto a X y Z, que “sobre los dos pesan los delitos de encubrimiento y de homicidio”, acusación conjunta incompatible.

Resta subrayar que tanto en la prensa como en la televisión aparecieron profusamente las imágenes de los detenidos esposados. Insistimos, por ello, en la idea expuesta en el apartado 3.1.5, en el sentido de que las imágenes relacionadas con los procesos judiciales transmiten mensajes jurídicos incorrectos cuando su significado equivale a una condena pública previa, antes de que se hayan pronunciado los Tribunales.

2.4. La sentencia 3/99 de la Sala Penal del Tribunal Supremo

El 9 de diciembre de 1999, la Sala Penal del Supremo dictó su primera sentencia sobre el delito consistente en negarse a realizar la prueba de alcoholemia. El Alto Tribunal nunca se había pronunciado sobre este delito al no ser de su competencia (esa infracción penal es juzgada en primera instancia por los Juzgados de lo Penal y en fase de apelación por las Audiencias Provinciales). El asunto había llegado esta vez al Supremo al estar encausado un miembro del Congreso de los Diputados, con fuero ante la Sala Penal.

Tras resaltar que se trataba de una “polémica figura penal” en la que existe una “dualidad de preceptos sancionadores, penales y administrativos, que parece obligado deslindar”, la sentencia se explicaba de la siguiente manera: “La dependencia del art. 380 respecto del 379 CP permite establecer, en orden a fijar los límites entre la sanción penal y la administrativa, los siguientes criterios orientativos: a) la negativa a someterse al control de alcoholemia, en cualquiera de los supuestos previstos en los núms. 1 y 2 del art. 21 del Reglamento General de Circulación, debe incardinarse dentro del tipo penal del art. 380 CP, y b) dicha negativa, en

los supuestos de los núms. 3 y 4 del mismo precepto del Reglamento de Circulación, precisa la siguiente distinción: b.1) si los agentes que pretendan llevar a cabo la prueba advierten en el requerido síntomas de estar conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, y se lo hacen saber así al requerido, la negativa de éste debe incardinarse también en el delito de desobediencia del citado art. 380 CP, y b.2) cuando no se adviertan tales síntomas, la negativa del requerido no rebasa los límites de la sanción administrativa (arts. 65.5.2 b y 67.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Añadía que “en el presente caso -de acuerdo con los anteriores principios- procede destacar: a) que la detención del vehículo conducido por el acusado para la práctica de la prueba de alcoholemia tuvo lugar en el curso de un control preventivo, de modo que la elección del mismo fue puramente aleatoria, y b) que, tras la reiterada negativa del interesado a someterse a dicha prueba, el jefe de la patrulla de la Guardia Civil que se hallaba prestando dicho servicio, tras consultar el caso con el Juez de Instrucción de Guardia, advirtió a Jaime Javier B. L. que se le instruirían diligencias por presunto delito de desobediencia y le dejó continuar viaje, al no haber observado en él síntomas de embriaguez. Por tanto, de acuerdo con aquellos principios, debe considerarse que la conducta enjuiciada no ha rebasado el ámbito del Derecho administrativo sancionador”.

La sentencia fue objeto de una enorme atención mediática dado el interés social en el asunto. Los titulares de prensa escrita ofrecían una variada gama de interpretaciones: “Negarse al control de alcoholemia no es delito si no hay síntomas de embriaguez”, “Conducir bebido no es delito, salvo que cause una indudable pérdida de facultades”, “Ni conducir ebrio ni negarse al control de alcoholemia es delito, según el Supremo”, “Negarse a la prueba de alcoholemia no es delito si no hay síntomas de borrachera”, “Conducir ebrio es delito sólo si hay peligro grave”, “Conductor: si bebes, que no lo parezca”.

La confusión fue tal que la propia Sala Penal del Supremo difundió de inmediato una nota aclaratoria que, redactada en términos mucho más asequibles que la sentencia, precisó que “todos los conductores de vehículos están obligados a someterse a la prueba de alcoholemia” y que la negativa a hacerlo es sancionable, al menos administrativamente, pero no siempre es delito. Nada hubiera costado difundir esta nota al tiempo que la sentencia para ayudar a los informadores cuando se trata de asuntos novedosos o complejos. Ésta es ahora una práctica habitual en algunas Salas del Tribunal Supremo, que bien podría generalizarse.

2.5. Los aforismos latinos

Las resoluciones judiciales y, en general, los escritos jurídicos siguen incluyendo con mucha frecuencia aforismos latinos cuyo correcto entendimiento no es siempre fácil para los informadores. Los autores de esos textos tampoco facilitan su comprensión: al presuponer que el documento va sólo destinado a otros juristas, no suelen traducirlos.

Siendo un objetivo deseable la actualización del lenguaje jurídico de manera que pueda ser comprendido por los ciudadanos, la inclusión entre paréntesis del significado de las expresiones redactadas en latín podría ser un mecanismo eficaz y ayudaría, sin duda, a los medios de comunicación en el empeño de una mejor transmisión de las decisiones judiciales.

Mientras tanto, hemos incluido como anexo un glosario de términos en latín que puede contribuir a que no vuelvan a producirse inexactitudes como las que refleja la última de las muestras que hemos analizado. Se trata de un reportaje incluido en un periódico digital que relata la condena impuesta a un hombre por delitos de robo con intimidación que -se sostiene- él no habría cometido. “La única prueba en su contra”, se afirma, “fue que dos víctimas le habían señalado como culpable (sic)”. Ambas se retractaron en el momento del juicio “y el fiscal pidió que se actuara contra ellas porque creía que mentían”. “A pesar de todo, el juez lo condenó

a siete años de cárcel, en contra del principio in dubio pro reo, y Ana Yolanda fue procesada (sic) por falso testimonio. La otra se salvó porque sólo había expuesto sus dudas”.

Con independencia de la incorrección de algunos términos (“culpable”, “procesada por falso testimonio”), el principio “*in dubio pro reo*” es aquí claramente inaplicable. El aforismo significa que, en la duda, se ha de estar a favor el reo. En este caso, el juez no dudó de la culpabilidad del acusado. Otra cosa es que el reportaje no explique qué pruebas de cargo valoró para dictar la condena.

justicia
justicia
dad; los tratoron
dencia justa y e
existe justeza ent
justicia f. V
e le pertenece
in, equidad:



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y RELACIONES CON LAS CORTES



PRESIDENCIA ESPAÑOLA
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA